

PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS
DE LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA
DESDE 1976 HASTA LA ACTUALIDAD

Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea : desde 1976 hasta la actualidad / Mariana Luzzi ... [et al.]. - 1a ed . 1a reimp. - Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento, 2019.

500 p. ; 23 x 16 cm. - (Textos básicos ; 29)

ISBN 978-987-630-408-5

1. Historia Contemporánea. 2. Argentina. 3. Análisis Socioeconómico. I. Luzzi, Mariana.
CDD 339

© Universidad Nacional de General Sarmiento, 2019

J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines (B1613GSX)

Prov. de Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54 11) 4469-7507

ediciones@campus.ungs.edu.ar

<http://ediciones.ungs.edu.ar/>

Diseño gráfico de interior y tapas: Daniel Vidable

Diagramación: Eleonora Silva

Corrección: Edit Marinozzi

Hecho el depósito que marca la ley 11.723.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Derechos reservados.

Impreso en Oportunidades S.A.

Ascasubi 3398, CABA, Argentina

en el mes de diciembre de 2019.

Tirada: 2000 ejemplares



Libro
Universitario
Argentino

TEXTOS BÁSICOS

CIENCIAS SOCIALES

Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea Desde 1976 hasta la actualidad

MARIANA LUZZI (COORDINADORA)

EDICIONES **UNGS**



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

ÍNDICE

Introducción	
<i>Mariana Luzzi</i>	11

PARTE I LA DICTADURA: ANTES Y DESPUÉS

Es solo un rocanrol del país. Una introducción a los modelos de desarrollo en la Argentina	
<i>Gonzalo Vázquez y Ana Luz Abramovich</i>	43
La Argentina del <i>Proceso</i> . Un texto introductorio a la etapa 1975-1983	
<i>César Mónaco y Diego Benítez</i>	87
Somos compañeros, amigos, hermanos	
<i>Pilar Calveiro</i>	121
Carta abierta a la Junta Militar	
<i>Rodolfo Walsh</i>	139

PARTE II LAS TRANSFORMACIONES DEL MUNDO DEL TRABAJO

Buenos Aires, neoliberalismo y después.	
Cambios socioeconómicos y respuestas populares	
<i>Marcela Cerrutti y Alejandro Grimson</i>	149
El mercado de trabajo en la posconvertibilidad (2002-2010.)	
Avances y desafíos pendientes	
<i>Mariana Álvarez, Ana Laura Fernández y Francisca Pereyra</i>	205

PARTE III ESTRUCTURA SOCIAL Y DESIGUALDADES

La estructura social en perspectiva. Transformaciones sociales en la Argentina, 1983-2013	
<i>Carla del Cueto y Mariana Luzzi</i>	243

Las camadas geológicas de los sectores populares. Estructuras, experiencias, conflictos <i>Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto</i>	269
---	-----

PARTE IV
EL MUNDO DE LA POLÍTICA

Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria <i>Juan Carlos Torre</i>	301
Experiencias de movilización social e interpretaciones sobre la crisis de 2001 <i>Carolina Schillagi</i>	325
Las metamorfosis del sindicalismo argentino <i>Sebastián Pereyra</i>	353
Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas <i>Paula Abal Medina</i>	367
Acción colectiva y ampliación de demandas luego de la crisis de 2001. Las particularidades de los movimientos socioambientales <i>Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez</i>	381

PARTE V
MATERIALES PARA EL TRABAJO EN CLASE

Conceptos fundamentales <i>Selección de textos a cargo de Marina García y Mariana Luzzi</i>	405
Guías de lectura	419
Actividades.....	431
ACTIVIDAD N° 1 Los modelos de desarrollo en palabras de sus actores	433
ACTIVIDAD N° 2 Los modelos de desarrollo a través de las fuentes históricas	436
ACTIVIDAD N° 3 Dictadura cívico-militar y vida cotidiana.....	443
ACTIVIDAD N° 4 Política económica y terrorismo de Estado en la propaganda oficial de la dictadura militar	449

ACTIVIDAD N° 5	
La evolución del mercado de trabajo durante los años de la convertibilidad	454
ACTIVIDAD N° 6	
Las transformaciones de la estructura social argentina: hacia un análisis multidimensional	459
ACTIVIDAD N° 7	
Los cambios en la estructura social argentina en el período 2003-2010	467
ACTIVIDAD N° 8	
Los cambios en la estructura social argentina en el período 2003-2010: distintas formas de medir la desigualdad.....	470
ACTIVIDAD N° 9	
Los sectores populares en la Argentina contemporánea: territorialización, estatalización, sindicalización.....	475
ACTIVIDAD N° 10	
Discursos en democracia.....	479
ACTIVIDAD N° 11	
Expresiones políticas a través del tiempo... y las paredes	481
ACTIVIDAD N° 12	
Transformaciones recientes de la representación política.....	485
ACTIVIDAD N° 13	
Transformaciones en el movimiento sindical.....	491
ACTIVIDAD N° 14	
Las características de los movimientos socioambientales: la resistencia popular contra Monsanto en Córdoba.....	496

INTRODUCCIÓN

Mariana Luzzi

¿Es importante pensar la sociedad en la que vivimos? ¿Debería la universidad brindarnos herramientas conceptuales y metodológicas para hacerlo? El libro que el lector tiene en sus manos es un modo de responder afirmativamente a ambas preguntas. Como la materia que le dio origen, este volumen nace de una profunda convicción: no importa cuál sea la inserción profesional que imaginamos para nuestro futuro (como docentes en la escuela media, como técnicos o ingenieros en la industria, como consultores para múltiples clientes, como responsables del diseño y la implementación de políticas públicas, como encargados de la gestión de organizaciones grandes o pequeñas, como trabajadores de los medios de comunicación, etcétera), ella va a estar indefectiblemente condicionada por las tramas políticas, económicas y sociales en que se inserta toda institución. Al mismo tiempo, nuestro ejercicio profesional va a suponer siempre una forma de intervención sobre la sociedad, aun en la escala más pequeña.

Es por estos motivos que resulta fundamental que quienes ingresan a la vida universitaria puedan iniciarse, más allá de su formación disciplinar, en el análisis sistemático de la sociedad argentina, a partir de la apropiación de algunos conceptos y herramientas metodológicas de las ciencias sociales, y de las investigaciones que ellas han desarrollado en áreas claves del conocimiento social.

El presente volumen viene así a proponer un conjunto de recursos para comenzar a recorrer ese camino. Pensada fundamentalmente para lectores que no tienen un amplio conocimiento previo de la producción de las ciencias sociales y que no están por lo tanto familiarizados con su lenguaje ni, en general, con la escritura académica, la compilación reúne un conjunto de textos inéditos con otros que se reeditan aquí, acompañados por una serie de propuestas didácticas destinadas a facilitar su comprensión y el trabajo por parte de docentes y estudiantes. Al mismo tiempo, el libro busca ser también un estímulo para una reflexión que vaya mucho más allá de sus páginas; una invitación a desarrollar la curiosidad que está en la base de toda vocación científica, para interrogar, en este caso, la sociedad y sus problemas.

PENSAR LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE SUS PROBLEMAS

Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “problemas sociales”? ¿En qué estamos pensando cuando afirmamos que una determinada situación o fenómeno social es “problemático”?

En primer lugar, podemos decir que un problema es la expresión de una dificultad, de una situación socialmente considerada como inaceptable; a la vez, caracterizar de este modo una determinada situación social implica asumir que tiene solución, y que esta depende de la acción de las personas (y de las organizaciones e instituciones creadas por ellos).

En segundo lugar, es preciso subrayar que lo que las sociedades definen como problema suele variar a lo largo del tiempo, de una sociedad a otra y a menudo también dentro de ellas, entre grupos sociales distintos. Esa definición está vinculada con los valores que cada sociedad (en cada momento) define como primordiales, pero también con otros factores: el rol de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación se destacan entre ellos.

Algunas situaciones suelen ser consideradas universalmente como problemas sociales; es el caso, por ejemplo, de la pobreza o del delito. Ello puede llevarnos a pensar que determinados fenómenos son por definición problemáticos, y que su caracterización como tales no es el resultado de un proceso de construcción social del que participan muchos actores y que se transforma con el tiempo. Sin embargo, si nos detenemos a pensar en los tipos de intervención que distintos grupos sociales conciben para resolver aquellas cuestiones veremos que, en realidad, no existe una única definición sobre ellas y sus causas. Más aún, que la historia de esos problemas es también la historia de las distintas explicaciones que se dieron sobre aquellos fenómenos, de las formas de intervención institucional formuladas para contribuir a su solución y de los actores sociales que participaron de ellas (el caso del delito es particularmente ilustrativo de este proceso, si pensamos en cómo fueron cambiando en los últimos dos siglos en las visiones acerca de la figura del delincuente, de las causas que llevan a la realización de actos ilegales y de las modalidades y propósitos de los castigos penales).

En este sentido, es preciso recordar que muchas situaciones persistentes en el tiempo, que hoy son objeto indiscutido de preocupación y que movilizan de manera activa a distintos grupos en busca de soluciones, no siempre fueron condenadas con la misma intensidad. En la Argentina, por ejemplo, solo recientemente la violencia hacia las mujeres se convirtió en un tema importante del debate público, con presencia en los medios de comunicación y una movilización social masiva exigiendo la acción firme del Estado para prevenir la violencia, procesar judicialmente a quienes la ejercen y proteger a las víctimas. Algo similar ocurre con los llamados problemas ambientales, que hasta hace algunos años no recibían la atención pública de la que son objeto hoy. La contaminación del aire, el agua y el suelo como resultado

de ciertos procesos productivos (tanto en el agro como en la pesca, la minería y la industria) y el uso indiscriminado de recursos no renovables, entre otros, no eran fenómenos desconocidos en la Argentina. Sin embargo, recién en las últimas décadas –y sobre todo después de la crisis de 2001– comenzaron a ser tematizados públicamente como verdaderos problemas.¹

En sentido inverso, algunas situaciones que en el pasado eran concebidas de manera mayoritaria como problemáticas hoy ya no lo son, y esto no se debe a la extinción de los hechos antes tratados como problemas, sino a la transformación de las visiones sobre ellos –transformaciones debidas, en buena medida, a la acción colectiva de los grupos involucrados–. Un ejemplo paradigmático de este cambio es el caso de la homosexualidad, que progresivamente fue dejando de ser considerada un problema social para convertirse en una cuestión pensada, en su mayoría, en términos de identidades y del reconocimiento de prácticas y orientaciones sexuales diversas.²

El estudio de los problemas sociales puede ser entonces una interesante vía de entrada para el análisis de las sociedades contemporáneas, considerando que ellos ponen de algún modo en escena las visiones que las sociedades tienen sobre sí mismas (y los conflictos que se producen entre visiones contrapuestas), las herramientas que consideran legítimas (e ilegítimas) para resolver las situaciones que juzgan como inaceptables y las relaciones entre los grupos sociales que las sufren y denuncian, y entre estos y las instituciones del Estado.

Por esta razón, y en consonancia con el nombre de la materia que le dio origen, este libro se titula *Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea, Desde 1976 hasta la actualidad*.³ Su objetivo no es, sin embargo, ofrecer una revisión

¹ Cabe señalar que algunos de los fenómenos que fueron objeto de discusión pública en las dos últimas décadas sí se corresponden con procesos relativamente novedosos, como la expansión de la soja y otros monocultivos o la megaminería. El trabajo de Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez incluido en este volumen analiza en parte este proceso, referido al caso de la minería a cielo abierto. Cfr. pp. 381-402.

² Lo cual dio lugar, a su vez, a la concepción de otras situaciones, que antes se consideraban “normales”, como problemáticas. La sanción en 2010 de la Ley 26618, que permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es el resultado de un proceso de este tipo. La restricción legal para que personas homosexuales puedan contraer matrimonio es vista como un problema expresado en términos de derechos: siendo la homosexualidad una orientación sexual posible, impedir el matrimonio entre algunas personas en función de esa condición constituye una violación de sus derechos fundamentales. La ley es entonces una forma de intervención pública destinada a poner fin a esa desigualdad, considerada como problemática. Por supuesto, la aprobación del que se conoció como “matrimonio igualitario” no supuso la desaparición de las visiones que continúan considerando a la homosexualidad como un “problema social”. Pero sí significa que esas visiones no están legitimadas por el sistema jurídico argentino.

³ La primera edición de esta compilación fue publicada en 2012. Esta nueva edición corregida y aumentada es el fruto de un largo trabajo de revisión y discusión bibliográfica a cargo del equipo docente de Problemas Socioeconómicos Contemporáneos (PSEC).

exhaustiva de los problemas de la sociedad argentina a lo largo del período considerado, sino a través del análisis de algunos de ellos proponer una serie de herramientas (conceptos, metodologías y, sobre todo, investigaciones empíricas) para el estudio de la sociedad argentina actual, teniendo en cuenta particularmente las transformaciones operadas en las últimas décadas en una serie de dimensiones que estimamos fundamentales: la organización económica, el mundo del trabajo, la estructura social y las formas de organización, representación y participación política.

LA DICTADURA: ANTES Y DESPUÉS

Proponer el estudio de los problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea supone ante todo definir un recorte temporal para esa indagación. En otras palabras, precisar cuál es el período específico que nos ocupará, dentro de ese horizonte abierto al que nos referimos de modo genérico como época “contemporánea”, y justificar esa decisión. El punto es importante porque nos recuerda, en primer lugar, que la periodización sobre la que trabajan los investigadores en ciencias sociales no está nunca predeterminada, inscripta “naturalmente” en los fenómenos que buscan comprender, sino que es el resultado de una construcción que ellos mismos realizan y fundan teórica y empíricamente. Pero también porque subraya, en segundo término, que esa construcción, en la que se identifican ciertos momentos históricos como marcas o hitos que permiten organizar la reflexión sobre determinados procesos sociales, no es nunca por completo arbitraria, sino que está siempre sometida al examen y la validación del resto de la comunidad académica.

El recorrido que esta compilación propone comienza con la última dictadura militar (1976-1983) y llega, con distintos niveles de exhaustividad según los temas, hasta el presente. Ello no supone, desde luego, ignorar el peso que ciertos procesos anteriores a la década de 1970 tuvieron en los desarrollos posteriores, ni subestimar los cambios que se produjeron después de la dictadura. Lo que pretende es iluminar la profundidad de las transformaciones que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional produjo en la sociedad argentina, y que la investigación social ha documentado abundantemente.⁴

⁴ Son muchos los trabajos que exploran, en distintas dimensiones, el alcance de esas transformaciones. Baste mencionar aquí solo algunos que han contribuido particularmente a la construcción del conocimiento científico acerca del período. Respecto de los cambios en la estructura productiva y la política económica de la dictadura: Schvarzer, 1986; Basualdo, 1987, 2017; Fridman, 2008. Acerca del Terrorismo de Estado, sus consecuencias directas y su impacto en la cultura política argentina: Calveiro, 2004; O'Donnell, 1997; Vezzetti, 2009; Da Silva Catela, 2001; Merenson, 2014; D'Antonio, 2016; Franco, 2008; Yankelevich, 2010. Sobre las transformaciones en la estructura social y los cambios en las relaciones entre las clases sociales: Torrado, 1994; Villarreal, 1985; Minujin y Kessler, 1995. Acerca de los cambios en la

En efecto, las políticas implementadas por las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos –que analizan en este volumen César Mónaco y Diego Benítez⁵ supusieron acciones y promovieron cambios que afectaron de manera duradera la vida de los argentinos. En primer lugar, la política de apertura económica y liberalización financiera impulsada por el ministro Martínez de Hoz provocó un proceso general de desindustrialización con profundas consecuencias para la estructura productiva del país. Solo algunas ramas de la industria (en particular, aquellas asociadas con la producción de bienes intermedios) y algunas fracciones del capital lograron sobrevivir a esas reformas.

En segundo, como resultado de las políticas implementadas, entre mediados de la década del setenta y comienzos de la década siguiente los trabajadores experimentaron una fuerte caída del salario real y el deterioro de sus condiciones de trabajo.⁶ La suspensión de las actividades gremiales impuesta por el gobierno militar en el marco de una fuerte política de represión y desmovilización de los sectores populares contribuyó a profundizar estos efectos. Los cambios impulsados por el gobierno militar redundaron en una fuerte redistribución del ingreso en detrimento de los asalariados, cuya contracara fue un proceso inédito de concentración del capital. Mientras en 1974 la parte del PBI correspondiente a los asalariados era del 45%, en 1976, luego de las primeras medidas implementadas por la dictadura, pasó a ser del 25%. Tal como lo observan Álvarez, Fernández y Pereyra en el artículo incluido en este volumen, pese a sus altibajos, los ingresos de los trabajadores nunca recuperaron los niveles previos a la dictadura.⁷

En tercer término, y en lo que se refiere a los sectores empresarios, la política económica implementada por el régimen militar provocó la quiebra de pequeños y medianos empresarios del sector industrial. Al mismo tiempo, favoreció la concentración del capital en manos de un conjunto de grupos económicos locales y empresas trasnacionales, que aumentaron su control sobre los mercados, en buena medida beneficiados por la transferencia de recursos públicos.

representación corporativa: Pucciarelli, 2004. Sobre la dinámica política y las internas al interior del régimen militar: Canelo, 2009, 2016. A propósito de los cambios en las formas de organización, participación y movilización política: Calderón y Jelin, 1987; González Bombal, 1988; Jelin, 2005; Palomino, 2005.

⁵ Cfr. “La Argentina del Proceso. Un texto introductorio a la etapa 1975-1983”, en pp. 87-120.

⁶ Si, pese al achicamiento de la industria, el desempleo se mantuvo en niveles relativamente bajos durante el período, esto se debió a la absorción por parte del sector servicios (en gran medida a través del autoempleo) de buena parte de la mano de obra expulsada por el sector secundario. Muchas veces, ese cambio en el sector de actividad estuvo acompañado de un deterioro en las remuneraciones y de la pérdida de los beneficios a los que se accedía a través del empleo.

⁷ Cfr. Álvarez, Mariana; Fernández, Ana Laura y Pereyra, Francisca, “El mercado de trabajo en la post-convertibilidad (2002-2010): Avances y desafíos pendientes”, en pp. 205-240.

En cuarto, el crecimiento de la deuda externa, que pasó de 8200 millones de dólares en 1976 a 43.600 millones de dólares en 1982,⁸ fue otra de las consecuencias fundamentales de la dictadura. Las condiciones creadas por las reformas de Martínez de Hoz llevaron al inicio de una etapa signada por la valorización financiera como forma predominante de acumulación de capital. En esa dinámica, el endeudamiento externo constituyó un elemento clave, al que el Estado contribuyó tempranamente, operando como garante del proceso y luego con la estatización de la deuda externa privada.⁹ A partir de entonces, el endeudamiento externo fue una variable fundamental en la acumulación del capital de los sectores más concentrados de la economía. Asimismo, la deuda externa pública se convirtió en uno de los principales condicionantes para la política económica de los sucesivos gobiernos del país.

En quinto lugar, no debe olvidarse que estas reformas fueron llevadas a cabo simultáneamente con una política de brutal represión, destinada al aniquilamiento de todos los sectores movilizados desde finales de la década de 1960. Trabajadores, estudiantes, militantes de organizaciones políticas armadas, dirigentes políticos y sindicales, intelectuales y artistas fueron víctimas de un aparato represivo clandestino organizado por el Estado, cuya lógica y funcionamiento han sido brillantemente analizados por Pilar Calveiro en el libro *Poder y desaparición*, del cual incluimos aquí algunos fragmentos.¹⁰ Como lo señala la abundante literatura sobre el tema, los efectos de ese terrorismo de Estado sobre la sociedad argentina han sido múltiples. A las consecuencias directas del plan sistemático de represión llevado adelante por las Fuerzas Armadas –miles de desaparecidos, asesinados, exiliados, presos políticos y centenares de niños apropiados–, se suma la impronta con que el miedo, el control y la censura marcaron la vida cotidiana de aquellos años. Pero además, el terrorismo de Estado fue una importante arma de desmovilización y disciplinamiento social, cuyos efectos se hicieron visibles mucho más allá del final de la dictadura.

Es en virtud de estos cambios que resulta posible afirmar que la dictadura marca un antes y un después en la historia de nuestro país. Desde luego, este énfasis en la *ruptura* que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional representa en muchos sentidos no significa que sea imposible trazar líneas de continuidad entre este período y los anteriores.¹¹ Sin embargo, la fuerza de las transformaciones

⁸ Cfr. Basualdo, 1987: 66.

⁹ Para un análisis de la evolución de la deuda externa argentina durante la dictadura, y específicamente del rol asumido por el Estado desde comienzos de la década de 1980 como garante del proceso de endeudamiento, cfr. Basualdo, 1987. Para el examen del papel del endeudamiento externo en la economía argentina de los noventa, cfr. Schwarzer, 2002; Schorr y Kulfas, 2003.

¹⁰ Calveiro, Pilar, 2004. Cfr. selección en pp. 121-138.

¹¹ Distintos autores han reflexionado con agudeza sobre las líneas de continuidad que pueden establecerse, por ejemplo, entre el golpe de 1976 y las intervenciones militares que lo precedieron. Al respecto, puede consultarse, entre otros, el trabajo de Sidicaro, 2004.

producidas justifica pensar que la sociedad que se abrió al proceso de democratización en 1983 no era la misma de 1976. Es sobre esa sociedad, y sobre algunos de los procesos que la atravesaron hasta hoy, de la que trata esencialmente este libro.

La Argentina antes de 1976

Ahora bien, resulta imposible comprender el peso de aquellas transformaciones en la economía, la política, el funcionamiento del Estado y las relaciones entre las clases y grupos sociales sin contrastarlas con el modo en que cada uno de estos aspectos de la vida social se configuraba antes de 1976.

Durante mucho tiempo fue habitual la referencia a la singularidad de la sociedad argentina en el contexto latinoamericano. Tal como lo destacaban diversos estudios, nuestro país se distinguía del resto de los países de la región por sus altos niveles de integración social y bajos niveles de desigualdad. Esta situación era el producto de la confluencia de distintos factores, entre los que se encontraban las condiciones creadas por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (iniciado en la década de 1930 y profundizado a partir de la llegada del peronismo al poder en 1946), la situación del empleo, el impacto de las políticas impulsadas desde el Estado y el rol de los sindicatos.

Tal como describen Ana Luz Abramovich y Gonzalo Vázquez en el texto incluido en este volumen,¹² la paulatina consolidación de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento de la industria nacional destinada al mercado interno significó una multiplicación de los puestos de trabajo asalariados, bajos índices de desempleo y el mantenimiento del poder de compra de los salarios en niveles relativamente altos, comparados tanto con los de períodos anteriores como con los de otros países de la región.¹³ Estos rasgos, sumados a una escasa segmentación entre

¹² Cfr. Abramovich, Ana Luz y Vázquez, Gonzalo, “Es solo un rocanrol del país. Una introducción a los modelos de desarrollo en la Argentina”, en pp. 43-86.

¹³ Durante los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1952 y 1952-1955) el mantenimiento de salarios reales relativamente altos constituyó uno elemento central de la política económica, al que se tendía a través de distintos instrumentos. Entre otras medidas, la fijación de precios máximos para algunos productos de primera necesidad (como ciertos alimentos) y el congelamiento de los alquileres (un rubro fundamental en el presupuesto de los hogares obreros, en un momento en que el acceso a la propiedad de la vivienda estaba reservado a los sectores altos) apuntaban a posibilitar el acceso de las clases trabajadoras al consumo de masas, proceso que ha sido brillantemente analizado por Natalia Milanesio, 2014. Era de ese consumo que dependía la industria nacional en expansión. En la segunda fase de la industrialización sustitutiva, el desarrollo de la industria nacional siguió distintas variantes a lo largo del tiempo, articuladas con esquemas de distribución del ingreso diferentes. En la variante que Aspiazu, Basualdo y Khavisse denominan concentradora, predominante entre 1958 y 1962 y entre 1966 y 1972, fue el consumo de los sectores de más altos ingresos, y no el de los sectores populares, el que operó como motor del desarrollo industrial (1987: 40-42).

los trabajadores de distintos sectores y calificaciones, contribuyeron durante varias décadas a dar homogeneidad a las clases trabajadoras de la Argentina.

Contribuyó además en este sentido la realización por parte del Estado de fuertes inversiones en educación y en salud, tendientes a la creación de sistemas públicos de amplia cobertura, así como también de un sistema de seguridad social ligado al empleo formal, que comprendía prestaciones jubilatorias y asignaciones familiares.

La acción de los sindicatos fue otro factor que incidió en la homogeneidad y fortaleza de las clases trabajadoras. Como es sabido, la historia de la organización sindical en la Argentina no comienza con el peronismo, pero es inseparable de la historia de este. No solo por el gran aumento de la sindicalización que se observó durante las presidencias de Perón (el número de trabajadores afiliados a sindicatos pasó de 520.000 en 1946 a 2.334.000 en 1951),¹⁴ sino fundamentalmente por el modo en que el peronismo contribuyó –tanto a través de las reformas impulsadas desde el gobierno, como por medio del particular vínculo establecido entre Perón y los trabajadores– a configurar el sindicalismo argentino. En los años que siguieron al derrocamiento de Perón, la gran capacidad de movilización de los sindicatos permitió que, aun en un contexto de fuertes restricciones políticas y transformación económica, los trabajadores siguieran constituyendo un actor fuerte y relativamente homogéneo respecto de sus condiciones de vida.¹⁵

Otro de los signos de aquella excepcionalidad de la Argentina en el contexto latinoamericano fue la conformación de una extensa clase media, producto de un importante proceso de movilidad social ascendente. La combinación de las características del mercado de trabajo que acabamos de mencionar con una inversión pública sostenida en educación, salud y seguridad social, fue la clave de un proceso que permitió que muchos hijos de padres obreros pasaran, al cabo de una generación, a desempeñarse en ocupaciones típicas de la clase media, con su correspondiente correlato en términos de los niveles de bienestar a los que pudieron acceder. Ahora bien, la importancia de este fenómeno de movilidad social ascendente radicó tanto en sus resultados específicos como en su impacto cultural y político.¹⁶ El progreso individual –articulado sobre todo en torno del trabajo y la educación– operó como

¹⁴ En 1954 la tasa de sindicalización general era del 42,5%; en la industria manufacturera, la tasa oscilaba entre el 50% y el 70% de los trabajadores. Cfr. James, 2006: 22.

¹⁵ Para un análisis del rol de los sindicatos después del derrocamiento de Perón, cfr. James, 2006; Cavarozzi, 1997; Gordillo, 2003. Respecto del impacto de la segunda fase de la industrialización substitutiva en las características de la clase obrera urbana, cfr. Aspiazú, Basualdo y Khavisse, 1987.

¹⁶ La idea, durante años indiscutida, de la Argentina como “país de clase media”, forma parte –entre otros ejemplos– del impacto al que hacemos referencia aquí. Para un análisis exhaustivo y reciente de la historia de la clase media argentina y los sentidos asociados a ella, cfr. Adamovsky, 2009.

una promesa capaz de articular identidades, definir prácticas y orientar acciones. Sería precisamente esa promesa la que se rompería a partir de los años ochenta, cuando los efectos de las transformaciones económicas impulsadas por la dictadura y de una persistente y elevada inflación, provocaran el empobrecimiento de una parte importante de la clase media. Este proceso de movilidad social descendente, que Gabriel Kessler ha analizado en profundidad, planteó nuevos interrogantes y desafíos, tanto para quienes lo sufrían en carne propia como para el resto de los sectores sociales y también para el Estado; pero sobre todo, expresó crudamente los límites de aquella confianza en el progreso que durante décadas había dejado su marca en el imaginario de la Argentina.¹⁷

Aquellas grandes tendencias de la sociedad argentina, sin embargo, no deben ser pensadas en términos estáticos. Si bien a grandes rasgos puede afirmarse que ellas son el resultado de procesos de transformación económica y política que se inician entre las décadas de 1930 y 1940 y son clausurados por la dictadura, es indispensable reconocer las inflexiones propias de ese largo período, durante el cual se registran importantes variaciones.

Pese a su continuidad en términos generales, entre las décadas de 1950 y 1970 el esquema basado en el desarrollo de una industria nacional orientada al mercado interno atravesó transformaciones sustantivas vinculadas, sobre todo, con las relaciones entre el Estado y los actores económicos y con el rol de la inversión extranjera, y sus efectos fueron notables, tanto en la dinámica del mercado de trabajo como en las relaciones entre las distintas clases y grupos sociales.¹⁸

Al mismo tiempo, el sistema político y sus actores también registraron cambios importantes. La llegada del peronismo al poder en la década del cuarenta había significado la incorporación plena de los sectores populares a la política, después de largas décadas en las que el ejercicio de los derechos políticos había estado limitado por la práctica recurrente del fraude por parte de las fuerzas conservadoras.¹⁹

¹⁷ Una síntesis de ese proceso puede encontrarse en el texto de Carla del Cueto y Mariana Luzzi, incluido en esta compilación (pp. 243-267). Sobre la temática, también pueden consultarse los siguientes trabajos: Kessler, 2000; Minujin y Kessler, 1995; Di Virgilio y Kessler, 2008; Feijó, 2001.

¹⁸ Una presentación general de estos cambios, que suelen pensarse en términos de dos fases diferentes del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y de las distintas variantes que la industrialización siguió durante las décadas del cincuenta y del sesenta, puede encontrarse en el texto ya citado de Ana Luz Abramovich y Gonzalo Vázquez.

¹⁹ Después de treinta años de dominación oligárquica, la sanción en 1912 de la Ley Sáenz Peña (que establecía el voto universal, secreto y obligatorio para todos los argentinos varones mayores de 18 años) significó un primer paso en el proceso de ampliación de la participación política en la Argentina. Sin embargo, los efectos de esa ampliación no alcanzaron a todos los sectores sociales por igual; en esta etapa fueron sobre todo los sectores medios urbanos los que experimentaron un cambio sustantivo respecto del período anterior, lo que se vio reflejado en el triunfo del radicalismo en las elecciones presidenciales de 1916. Si bien constituyó una

Tal como ha señalado Daniel James, ese proceso de ampliación de la participación política debe ser pensado no solo en términos de una ampliación de la ciudadanía, sino también de su transformación. Como sostiene el autor, la clave del arraigo de Perón en la clase trabajadora se basó en “su capacidad para refundir el problema total de la ciudadanía en un molde nuevo, de carácter social” (James, 2006: 29). Esa redefinición de la ciudadanía suponía no considerarla únicamente en términos de derechos individuales y participación en el sistema político, sino como expresión de la inserción en la esfera económica y social. De este modo, en el caso de los sectores populares, su incorporación a la participación no pasó solo por la garantía de sus derechos políticos, sino de manera esencial por el reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social fundamental para el desarrollo económico y político de la Nación. En esta visión de la integración política y social, la intermediación de los sindicatos resultó central para garantizar la representación de la clase trabajadora en el Estado (James, 2006: 32).

Tras el derrocamiento de Perón, y en un contexto político radicalmente diferente, los sindicatos no solo continuaron siendo un actor político de peso, sino que en cierto modo se vieron fortalecidos. La proscripción del peronismo²⁰ a partir de 1955, los convirtió en el único canal de participación abierto para los sectores peronistas y en la clave de su resistencia, a la vez que en un factor de presión al que debieron enfrentarse los sucesivos gobiernos no peronistas.

Así, el período inaugurado por golpe de septiembre de 1955 estuvo marcado por dos rasgos mayores. Por un lado, la exclusión del peronismo de las vías institucionales de la política; por otro, la intervención creciente de las Fuerzas Armadas, las cuales oscilaron entre el ejercicio de un rol tutelar sobre los gobiernos constitucionales y el control directo del Estado, alternativa que se volvió dominante entre 1966 y 1973²¹ y que reaparecería –no sin transformaciones– en 1976.

El tercer elemento central en esta etapa dominada por la inestabilidad política fue la progresiva movilización y radicalización política de la juventud –tanto en el ámbito de los partidos, como en los sindicatos y el movimiento estudiantil–,

reforma fundamental, la nueva legislación no solo continuó excluyendo a las mujeres de los derechos políticos, sino que tampoco eliminó por completo la práctica del fraude –recurso habitual de los partidos conservadores–, la cual recrudesció tras el golpe de 1930, cuando la élite conservadora intentó recuperar el control del Estado.

²⁰ Una de las primeras medidas de la autodenominada “Revolución libertadora” fue la disolución del Partido Peronista. A ella siguió, meses después, la prohibición de la utilización pública y la reproducción de imágenes, símbolos, signos, obras de arte, doctrinas u otros textos asociados con el peronismo. Tal prohibición alcanzaba a la mención del nombre propio del presidente depuesto y sus familiares, así como también los términos “peronismo”, “peronista”, “justicialismo” y “justicialista”. Cfr. decretos 3855/55 y 4161/56.

²¹ Para un análisis de este período, pueden consultarse los textos ya clásicos de O’Donnell, 1982, 1997; Portantiero, 1977 y Cavarozzi, 1997, así como también el volumen dirigido por James, 2003.

profundizada a partir de 1966 en el contexto de un nuevo gobierno militar.²² La influencia de las experiencias de lucha revolucionaria en el Tercer Mundo, encabezadas por la Revolución cubana, resultan claves para comprender ese proceso, en el cual la lucha contra la dictadura se articularía con la voluntad de una transformación profunda de la sociedad. Es en ese pasaje que surgirán las organizaciones políticas armadas, las cuales conformarán un actor político clave en la década de 1970.²³

Así, el regreso del peronismo al poder en 1973 se produjo en un contexto radicalmente distinto del de 1945. La Argentina no era la misma de los años cuarenta, ni tampoco la de 1955. En las dos décadas transcurridas, las relaciones sociales, la estructura económica y el sistema político habían cambiado; cada uno de los actores que de manera histórica habían disputado el control y la influencia sobre el Estado (los partidos, los sindicatos, las corporaciones empresarias, las Fuerzas Armadas) había atravesado profundas transformaciones y otros nuevos habían surgido (entre los más importantes de ellos, las organizaciones político-militares). El peronismo era un actor más complejo y heterogéneo que aquel que había sido desplazado del poder en 1955, y uno de los principales desafíos a los que se enfrentó fue la difícil resolución de sus propias tensiones internas.²⁴ El estallido de esas tensiones alimentó la profundización de un conflicto social en el que la lógica de la política fue crecientemente arrasada por la lógica de la violencia. Las Fuerzas Armadas fueron protagonistas de ese proceso, que iniciaría su etapa más sangrienta con el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

EL MUNDO DEL TRABAJO

Decíamos al comienzo que el recorte que proponemos en este libro parte de la dictadura militar y sus consecuencias para proyectarse sobre el presente. En esa línea, una de las dimensiones que nos interesa explorar especialmente es la del mundo del

²² El de la autodenominada “Revolución argentina”, comandada por el general Onganía.

²³ Ese proceso de radicalización política ha sido analizado en numerosos estudios. Una primera introducción al tema puede encontrarse en Gordillo, 2003. Respecto de las organizaciones político-militares, su discurso político y en particular de la experiencia de sus militantes, cfr. Calveiro, 2005; Oberti y Pittaluga, 2006; Slipak, 2015. Análisis específicos sobre el PRT-ERP y Montoneros pueden encontrarse en: Anguita y Caparrós, 1997-1998; Carnovale, 2011. El lugar de las mujeres en ese proceso de movilización se examina especialmente en Andújar, D’Antonio, Gil Lozano, Grammatico y Rosa, 2009; Oberti, 2015.

²⁴ Maristella Svampa ha analizado esas tensiones como constitutivas de la dinámica del tercer gobierno peronista (2003). Al respecto, también puede consultarse el ya clásico trabajo de Liliana de Riz, 2000. Respecto de la articulación entre el proceso de radicalización política, los conflictos internos al peronismo y los reclamos de orden, cfr. Franco, 2012. El artículo de César Mónaco y Diego Benítez incluido en este volumen también provee un balance general sobre el período y los conflictos que lo atravesaron.

trabajo, en cuanto este constituye un terreno particularmente fecundo para observar las transformaciones recientes de nuestra sociedad.

En primer lugar, en la Argentina, como en toda sociedad capitalista, el trabajo es la principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares. En función de ello, las condiciones de vida de una parte importante de la población estarán definidas –o al menos fuertemente influenciadas– por sus condiciones de trabajo (incluidas las remuneraciones).

Pero la importancia del trabajo no se limita a su rol como proveedor de recursos económicos. El trabajo es también un gran organizador del tiempo de los individuos y las familias, y esto al menos en dos sentidos. Por un lado, como elemento central que interviene en la definición de las etapas de la vida (distinguiendo la niñez y la adolescencia, como etapas consagradas a la formación, de la adultez como “período activo” y la vejez como momento de “retiro”). Por otro, como elemento que marca el ritmo de la vida cotidiana de los hogares, condicionando no solo la rutina de quienes trabajan para el mercado, sino también la del resto de los miembros del hogar.

En tercer término, el trabajo constituye un importante espacio de formación y socialización. Se trata de una experiencia a lo largo de la cual no solo se adquieren destrezas y competencias específicas, sino donde también se construye, en diálogo y confrontación con otros, la propia biografía.

En cuarto lugar, como se ha señalado largamente, en la Argentina el trabajo es la vía principal de acceso a la cobertura de salud (a través del sistema de obras sociales) y a otros beneficios sociales fundamentales para la reproducción de las familias (las asignaciones familiares, etcétera).

Por último, el trabajo es quizás el principal terreno de experiencia de los derechos sociales y laborales. Es en el ámbito laboral, fundamentalmente a través de la intervención sindical –aunque no solo con ella–, que se conocen esos derechos y se aprende a apelar a ellos.

Por estos motivos, fenómenos como el desempleo o la inestabilidad laboral significan mucho más que la pérdida de una fuente de ingresos. Cuando un trabajador pierde su empleo –al igual que cuando no está registrado–, pierde con él sus aportes jubilatorios y la cobertura que le garantiza atención médica a él y su familia. En el largo plazo, esto significa que probablemente (si el desempleo y/o el trabajo “en negro” son duraderos) ese trabajador llegará a la vejez sin haber completado sus aportes, por lo que es posible que no podrá obtener el beneficio jubilatorio. En el caso de los trabajadores jóvenes, la extensión de la inestabilidad y la precariedad laboral supone además una gran dificultad para proyectarse en un horizonte estable (como aquel que presupone el modelo de la formación, la actividad y el retiro como etapas sucesivas) y la necesidad de adaptarse a un futuro más accidentado y con altos niveles de incertidumbre. Por otro lado, la falta de trabajo –o su intermitencia– también inducen a reorganizaciones dentro de las familias: a menudo, eso significa

que quienes antes no trabajaban fuera del hogar, o lo hacían a tiempo parcial (por lo general las mujeres, cuando no son jefas de hogar, o los hijos jóvenes), salgan a buscar más trabajo para compensar los ingresos faltantes, sin que esto tenga necesariamente que ver con un objetivo de desarrollo personal.

Todas estas situaciones fueron observadas en la historia reciente de la Argentina. Tal como se describe en el texto de Marcela Cerrutti y Alejandro Grimson incluido aquí,²⁵ los años noventa estuvieron signados por la implementación de una serie de reformas de inspiración neoliberal cuyos efectos más salientes en la dinámica del mercado de trabajo fueron un notable aumento del desempleo, que pasó del 6% a comienzos de la década a 14,4% en el año 2000 (y a más del 20% tras la crisis de 2001), de la inestabilidad y de la precarización laboral. Los trabajadores asalariados sin beneficios sociales, que representaban el 29% de los asalariados en 1991, pasaron al 35,8% en 2001.²⁶ Las consecuencias de estos cambios en el mundo del trabajo se registran simultáneamente en distintos niveles. El primero de ellos, como señalan Cerrutti y Grimson, fue el crecimiento de la pobreza y el aumento de la desigualdad social (evaluada en términos de la distribución del ingreso). También se observa una mayor (y más acelerada) incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, en buena medida como respuesta al desempleo de sus cónyuges. Otros fenómenos, como la evolución del delito –y en particular del delito contra la propiedad–, también se mostraron asociados con el deterioro del mercado de trabajo. Esa asociación se registra tanto en el aumento de las prácticas delictivas, como en ciertos cambios en las modalidades y en la percepción social que de ellas se tienen.²⁷

La dinámica de organización y movilización de los sectores populares también da cuenta de los efectos de las transformaciones en el mercado de trabajo. Tal como lo muestran Cerrutti y Grimson en el artículo mencionado, fue en los años noventa que se desarrolló una de las experiencias de movilización más importantes de los últimos tiempos: la de los trabajadores desocupados, o “piqueteros”. En efecto, en la segunda mitad de la década, la consolidación del desempleo en niveles desconocidos hasta entonces en la Argentina tuvo como correlato la conformación de organizaciones que, a través de una forma particular de movilización –el piquete–, lograron hacer visible el reclamo de cientos de miles de desocupados.²⁸ La experiencia de las

²⁵ Cfr. “Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares”, pp. 149-203.

²⁶ Para un análisis de los rasgos centrales del modelo de desarrollo neoliberal en el que están comprendidas las reformas mencionadas, cfr. el texto citado de Ana Luz Abramovich y Gonzalo Vázquez.

²⁷ El sociólogo Gabriel Kessler ha dedicado dos importantes trabajos a esta temática (2004, 2009).

²⁸ Para un análisis de la experiencia de esas organizaciones y su impacto en la política argentina, cfr. Svampa y Pereyra, 2003. Para un examen de la trayectoria de esos grupos después de la crisis de 2001, cfr. Pereyra, Pérez y Schuster, 2008.

organizaciones de desocupados resulta fundamental para comprender las transformaciones que atravesaron a la sociedad argentina durante los años noventa en más de un sentido. En primer lugar, por el modo en que aquellas revelan la centralidad que asumió en el período el problema del desempleo. En segundo, porque expresan la potencialidad de organización y movilización de los sectores populares en un contexto dominado por la desarticulación de muchos vínculos sociales y políticos. En tercero, porque esa movilización permite entrever tanto los cambios que vivieron los sectores populares como las mutaciones del Estado –en particular, a través de la redefinición de las políticas sociales impulsada en aquellos años–.

La experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores señala otro hito importante en la dinámica de la organización obrera durante la segunda mitad de los noventa.²⁹ En un contexto dominado por el alto desempleo y la recesión económica, algunos colectivos emprendieron el camino de la acción colectiva y la autogestión laboral como estrategia para evitar la desocupación y defender su identidad como trabajadores. Si bien esta experiencia comprendió solo a un número limitado de empresas,³⁰ su impacto en términos sociales y políticos fue mucho más allá de quienes estaban efectivamente involucrados en ella. Por un lado, el movimiento de empresas recuperadas mostró que las respuestas frente al desempleo podían ser múltiples y que la producción podía constituir un eje para la organización autónoma de los trabajadores. Por otro, su experiencia no puede ser comprendida al margen del ciclo de movilización que inauguró la crisis de 2001, en el cual las empresas recuperadas confluyeron con otros grupos movilizadas –entre ellos, las organizaciones piqueteras y las asambleas barriales–.³¹

En comparación con la década de 1990, el período que se inicia en 2003 muestra una serie de avances importantes en lo que refiere al mercado de trabajo. Sensible aumento del empleo y disminución del desempleo –que a partir de 2006 vuelve a ubicarse por debajo del 10% de la población económicamente activa–, retroceso del empleo no registrado y mejora de los salarios son algunos de los rasgos salientes del período, que en este volumen analizan cuidadosamente Álvarez, Fernández y Pereyra. Esos avances, asociados sin dudas a la reactivación económica registrada en el período, favorecida a su vez por el contexto internacional, no habrían sido

²⁹ Gabriela Wyczykier (2009) ha analizado ese proceso. También da cuenta de él el trabajo de Julián Rebón, 2004.

³⁰ Según un informe del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a fines de 2010 eran 205 las empresas recuperadas en todo el país. La mayoría de ellas había sido recuperada después de la crisis de 2001, cuando las dificultades económicas se exacerbaban. Solo el 26,8% había sido recuperada antes de 2001 o durante ese año. Cfr. Programa Facultad Abierta, *Informe del Tercer relevamiento de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores*, Buenos Aires, FFyL-UBA, 2010, p. 12.

³¹ Para un análisis de ese ciclo de movilización, cfr. Svampa, 2005, especialmente el cap. 9, “El retorno de la política a las calles (2002-2005)”.

logrados sin la intervención creciente del Estado, que entre 2003 y 2015 desplegó políticas activas tendientes a una re-regulación de las relaciones laborales (re-establecimiento del salario mínimo, vital y móvil; promoción de las negociaciones colectivas; reactivación de las inspecciones del trabajo, entre las más salientes).

Sin embargo, tal como señalan las autoras, si bien los progresos en el período fueron contundentes, en la mayoría de los casos las mejoras observadas en cada uno de estos indicadores no resultaron suficientes para compensar el deterioro experimentado desde la última dictadura militar y profundizado a lo largo de las décadas siguientes. En la misma línea, el sociólogo Gabriel Kessler ha llamado la atención sobre las profundas huellas que los procesos de flexibilización y precarización laboral observados durante los años noventa dejaron en la percepción del trabajo, fundamentalmente por parte de los jóvenes. Según el autor, para muchos de ellos el trabajo continúa siendo una “zona de vulnerabilidades y ausencia de ciudadanía”, de la cual no está ausente la amenaza de la precariedad y la exclusión. Esto se vincula con el hecho de que, pese a los grandes avances registrados durante el período mencionado en la dinámica del mercado de trabajo, aún subsiste en la Argentina un importante núcleo de exclusión.³²

Estas observaciones se vuelven aún más relevantes en la actualidad, en un contexto de marcada disminución del crecimiento económico, caída de los salarios reales y aumento de la pobreza. Si hace unos años las ciencias sociales se preguntaban hasta qué punto la recuperación observada entre 2003 y 2015 había permitido volver a consolidar el trabajo como un espacio de integración social, revirtiendo los procesos de deterioro del pasado, hoy vuelven a interrogarse sobre los riesgos de un aumento de vulnerabilidad social, derivada de la declinación del salario y de las crecientes dificultades del empleo.

UNA SOCIEDAD FRAGMENTADA

Se ha insistido en muchas oportunidades en que desde mediados de los setenta, y sobre todo con la implementación de grandes reformas neoliberales en los noventa, la Argentina se convirtió en una sociedad profundamente desigual. La evolución de algunos indicadores claves así lo confirman: los niveles de pobreza aumentaron progresivamente –con picos en las dos grandes crisis del período, en 1989 y 2001– y la distribución del ingreso evidenció un deterioro importante.

El impacto de esas tendencias tiene importancia en cuanto marca un fuerte contraste con la imagen, consolidada durante décadas, de una sociedad argentina con altos niveles de integración, en la cual el ascenso social –sobre todo en términos educativos y ocupacionales– constituyó una posibilidad cierta para amplios sectores de la sociedad. Esa sociedad estaba signada por lo que Juan Carlos Torre llamó una

³² Cfr. Kessler, 2011.

“mística igualitaria”, cuya función primordial había sido “desafiar los privilegios allí adonde estos se manifestaren, llevando a una mayoría de los argentinos a la convicción de que no hay ni bien ni posición que estén completamente fuera de su alcance” (Pastoriza y Torre, 1999: 74). Pero ello no la convertía necesariamente en una sociedad igualitaria; para el autor, en la Argentina convivían en tensión elementos como los que mencionamos con otros más propios de estructuras jerárquicas.³³ Poniendo el foco en las transformaciones de las últimas décadas, Gabriel Kessler también apunta en ese sentido, al señalar que “[la] posibilidad de ascenso [social] se inscribió a fuego como una fuente de expectativas de movilidad en todas las clases sociales. Sin embargo, no dio lugar a instituciones políticas o a prácticas democráticas que garantizaran en el largo plazo los grados de igualdad logrados” (Kessler, 2011: 104).

Dicho de otro modo, es preciso ser cautelosos a la hora de evaluar la relación entre los niveles de desigualdad de finales del siglo xx y las características previas de la estructura social argentina. Si el contraste entre ambas configuraciones es notable, ello no debe llevarnos a asumir un pasado dominado por la igualdad, sin limitaciones. Por un lado, porque significaría ignorar la complejidad de la estructura social y sus transformaciones. Por otro, porque tal como lo exige el análisis del mundo del trabajo, el examen de las desigualdades sociales también reclama una mirada multidimensional. En otras palabras, si bien los ingresos, las ocupaciones y la educación constituyen variables fundamentales en la consideración de los procesos de producción y reproducción de las desigualdades sociales, no son las únicas. Y un análisis comprehensivo deberá tener en cuenta también otras, como los modos de habitar, los consumos, las prácticas culturales y religiosas y las formas de la sociabilidad.

En ese sentido, puede resultar productivo pensar las transformaciones de la estructura social argentina en las últimas décadas en una nueva clave de lectura. No ya en términos de un aumento de la desigualdad expresado exclusivamente como el empeoramiento de la distribución del ingreso, sino de una mayor fragmentación social. Esta perspectiva pone el acento en las relaciones entre las clases y grupos sociales, señalando el aumento de la distancia entre ellos, así como también la mayor heterogeneidad de situaciones que se observa en su interior.³⁴ Ella constituye a la vez un prisma interesante para analizar las continuidades y rupturas entre el

³³ Como señalan Pastoriza y Torre: “La extendida experiencia de movilidad que conoció el país hasta mediados del siglo [xx] se produjo con el telón de fondo de la gravitación de una élite aristocratizante, cuyo difuso y abarcador poder moral y cultural fue simultáneamente objeto de admiración y resentimiento. [...] Al final, la coexistencia de una estructura jerárquica con una viva aspiración por la igualdad social se resolvió, no en la subversión del orden existente, sino más bien [...] en su aceptación tal como era, para luego modificarlo solo lo necesario a fin de que se abriera y permitiera la incorporación de nuevos grupos y sectores a él” (1999: 74-75).

³⁴ Una presentación general de las tendencias más importantes en el período 1983-2008, se

período de ajuste estructural de finales del siglo XX, ampliamente examinado por las ciencias sociales, y las transformaciones operadas entre 2003 y 2015, que en muchos sentidos contribuyeron a morigerar los efectos de las reformas previas.

Siguiendo esta línea, es posible subrayar algunos cambios mayores. En el caso de los sectores populares, las transformaciones en el mercado de trabajo operadas en los años noventa, combinadas con los efectos de las reformas de las políticas sociales y las consecuencias de las sucesivas crisis económicas, dieron como resultado la consolidación de un proceso de repliegue sobre el barrio, el cual fue convirtiéndose paulatinamente en el eje organizador la vida de los individuos, en detrimento de la fábrica o en líneas generales del espacio laboral. Este proceso de *territorialización de los sectores populares*, sobre el cual alertaba Denis Merklen hace ya veinte años (2000),³⁵ señala uno de los cambios más importantes registrados en las últimas cuatro décadas respecto de las relaciones de los sectores menos favorecidos con el resto de la sociedad. Su impacto es de una magnitud tal que no fue revertido por las mejoras observadas en el período 2003-2015, aunque esto no signifique que la situación de los sectores populares haya por ello permanecido inalterada. Al contrario, tal como señalan Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto en el estudio incluido aquí,³⁶ importantes cambios ocurridos en aquellos años en el rol desempeñado por el Estado respecto de los grupos más vulnerables, por un lado, y en el papel de los sindicatos, por otro, condujeron a una sensible modificación en las condiciones de vida de los sectores populares, e impactaron en la capacidad de estos para incidir en su transformación. Así, la territorialización, la estatalización y la sindicalización se combinaron en ese período produciendo nuevas mutaciones en el universo de los sectores populares. La continuidad de esas tendencias en el presente, en un escenario en el que se advierte una nueva reconfiguración del papel del Estado y de los sindicatos, constituye uno de los interrogantes que las ciencias sociales deberán explorar en los años por venir.

En lo que respecta a la transformación de las clases medias, dos fenómenos se destacan particularmente en las últimas décadas del siglo XX. Por un lado, el ya mencionado empobrecimiento de una parte importante de estos sectores, que distintos investigadores han analizado.³⁷ Por otro, como expresión de procesos de movilidad social de sentido opuesto, la profundización del proceso de segregación espacial a través de la proliferación de *countrys* y barrios cerrados en las periferias de las principales ciudades del país, que también ha sido objeto de importantes tra-

desarrolla en el texto de Carla del Cueto y Mariana Luzzi, “La estructura social en perspectiva. Transformaciones sociales en Argentina, 1983-2013”, en pp. 243-267.

³⁵ Otros textos del autor profundizan el análisis de las transformaciones vividas por los sectores populares, cfr. Merklen, 2005.

³⁶ Cfr. “Las capas geológicas de los sectores populares: estructuras, experiencias, conflictos”, pp. 269-298.

³⁷ Cfr. *supra*, nota 21.

bajos (Svampa, 2001). Esta tendencia, protagonizada por los sectores medios-altos y altos señala la profunda heterogeneización de las clases medias, las cuales registran tanto procesos de movilidad social descendente como trayectorias de ascenso social. Al mismo tiempo, ella indica un cambio de modalidad en la socialización y la sociabilidad de esos sectores, que antes se desplegaban en espacios caracterizados por la integración entre grupos sociales diversos, mientras que desde hace varias décadas parecen reforzar la conformación de círculos sociales homogéneos.³⁸ Ahora bien, ¿qué pasó con estos procesos en los últimos quince años? Cuando se miran esas tendencias desde el presente, considerando series temporales más largas que las originalmente planteadas por los investigadores, es posible iluminar en algunos casos nuevas inflexiones. Respecto de las trayectorias de movilidad, se observa un predominio no ya de procesos unidireccionales de empobrecimiento, sino largas trayectorias de inestabilidad, con momentos de ascenso y de caída en los que inciden tanto el contexto económico como las políticas públicas.³⁹ En otros casos, en cambio, ese ejercicio permite subrayar la continuidad de ciertos rasgos, como el de la segregación urbana, que lejos de interrumpirse, ha continuado profundizándose hasta hoy.

Las huellas del proceso de fragmentación social también se observan en los sectores altos. En este caso, uno de sus rasgos salientes se deriva del aumento de la concentración de la riqueza observado desde mediados de la década de 1970. Esa característica, cuyas consecuencias en la dinámica de las relaciones económicas ha sido analizada por distintas investigaciones,⁴⁰ tuvo como correlato el aumento de la brecha que separa a las clases altas del resto de la sociedad. La profundización de esa distancia, expresada tanto en términos de ingresos como de consumos y estilos de vida, constituye uno de los fenómenos más importantes de las últimas décadas. Sin embargo, los cambios en los grupos privilegiados, fundamentalmente en lo que respecta a sus pautas de sociabilidad y socialización, constituyen todavía un área poco explorada por las ciencias sociales, y uno de sus mayores desafíos para los próximos años.⁴¹

LAS MUTACIONES DE LA POLÍTICA

Las formas de la política, comprendiendo dentro de ella tanto sus marcos institucionales como los modos más autónomos de participación en los asuntos públicos,

³⁸ Estos cambios se observan particularmente en las decisiones y prácticas referidas a la educación de los hijos. Al respecto, cfr. Del Cueto, 2007.

³⁹ Cfr. al respecto Kessler, 2014.

⁴⁰ Cfr., entre otros, Basualdo y Arceo, 2006.

⁴¹ Una excepción a esta tendencia son los recientes trabajos de Heredia, 2016 y de Ghessaghi, 2016. En el mismo sentido pueden mencionarse las investigaciones sobre las grandes empresas de Szlechter (2015) y Luci (2016).

también experimentaron grandes transformaciones a lo largo de las últimas décadas. Desde la clausura vivida durante del período dictatorial hasta la actualidad, muchos cambios marcaron las formas de organización, representación y participación política en la Argentina.⁴²

La vuelta a la democracia en 1983 estuvo acompañada por una gran efervescencia de los partidos políticos que, sin embargo, no fue duradera.⁴³ Tal como señala Juan Carlos Torre en el artículo incluido en esta compilación,⁴⁴ el entusiasmo inicial –observado, por ejemplo, en la cantidad de afiliaciones registradas en el final de la dictadura– fue cediendo paso, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de 1990, a un creciente descontento con la política institucional, que alcanzaría su máxima expresión en la crisis de 2001. Ese descontento –que, como subraya Torre, no afectó a todos los partidos de igual manera– fue interpretado por las ciencias sociales en términos de una crisis de representación: lo que estaba en cuestión no era la democracia como régimen político –como lo había sido décadas atrás–⁴⁵ sino el comportamiento de los partidos y sus dirigentes.

En el distanciamiento entre representantes y representados pesaron particularmente, a juicio de Torre, los cambios acaecidos en la cultura política argentina desde el restablecimiento de la democracia. Entre ellos se cuenta, en primer lugar, el surgimiento de movimientos que, en la tradición iniciada por las organizaciones de derechos humanos, formularon sus demandas en términos de derechos y apelaron al sistema judicial como vía para la resolución de conflictos.⁴⁶ En segundo, la creación de asociaciones civiles dedicadas a la promoción de la participación ciudadana

⁴² Una serie de estudios referidos a esas transformaciones, con especial hincapié a las acontecidas a partir de los años noventa puede encontrarse en Rinesi, Nardacchione y Vommaro, 2007.

⁴³ La vitalidad política observada en los primeros años de la democracia no comprendía únicamente a los partidos, sino que era la expresión de una voluntad generalizada por volver a ocupar, de diversos modos, el espacio público clausurado durante la dictadura. Partidos, organizaciones de derechos humanos, colectivos e iniciativas culturales, entre otros, formaban parte de esa aludida “efervescencia”. Ese ciclo inicial se cerraría, en buena medida, a partir de los episodios de Semana Santa de 1987, que marcarían también el desencuentro entre el gobierno de Alfonsín y una parte importante del electorado que lo había llevado a la presidencia.

⁴⁴ Cfr. Torre, Juan Carlos, “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria”, en pp. 301-323.

⁴⁵ La ausencia de un cuestionamiento de la democracia como régimen político, aun en un momento de fuerte disgregación política, económica y social como la crisis de 2001, ha hecho que algunos autores ubiquen en esta última el fin de la transición a la democracia en la Argentina. Para una interpretación en este sentido, cfr. Pérez, 2008.

⁴⁶ Las protestas contra la violencia policial primero, los reclamos de consumidores y usuarios después, como así también las demandas vinculadas con la protección del medioambiente son los ejemplos más salientes de esta tendencia, observada a partir de finales de los años ochenta. Las protestas surgidas durante la crisis de 2001, en particular las de ahorristas y deudores hipotecarios, también son una expresión de estos cambios en la definición y el procesamiento de los reclamos ciudadanos. Para una interpretación sobre la herencia del movimiento de derechos humanos en las movilizaciones de los noventa, cfr. Pereyra, 2005.

y el control de las acciones gubernamentales. Ambas transformaciones influyeron en una nueva visión de la representación partidaria, en la cual la fiscalización de las acciones de partidos y dirigentes por parte de los ciudadanos fue la clave de la relación entre representantes y representados –a diferencia del pasado, en que esta se fundaba esencialmente en los vínculos derivados de una identidad común.⁴⁷

Si la crisis de representación constituye un fenómeno que se observa progresivamente a lo largo del período democrático, los años noventa serán el escenario de otro cambio, que confluye con ella pero a la vez la excede. Maristella Svampa ha caracterizado la década como aquella de la subordinación de la política a la economía, de la pérdida de autonomía de la primera frente a una economía –pensada en clave neoliberal– cuyas exigencias dominan las decisiones de gobierno. Ese fenómeno se alimenta, además, de una transformación de la gestión estatal en la que se combinan procesos de privatización, descentralización administrativa, profesionalización y focalización (Svampa, 2005: 53 y ss.).⁴⁸ Como consecuencia de estos cambios, tanto los modos de hacer como de pensar la política se ven profundamente alterados.

Por supuesto, eso no significa que no se hayan registrado en aquel período otras formas de entender la política. El movimiento de desocupados, que mencionábamos antes, y una nueva generación de organizaciones de derechos humanos –entre las que se destaca HIJOS–⁴⁹ son experiencias de organización y movilización que dan cuenta de una vitalidad de la política lejana de la sumisión que se observa en el espacio institucional. Lo mismo puede afirmarse respecto del sindicalismo opositor que nace en aquellos años, encarnado sobre todo por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), cuya trayectoria repasa aquí Sebastián Pereyra.⁵⁰ Pero cierto es que todos ellos fueron, ante todo, expresiones de la resistencia frente al modelo neoliberal, cuya acción no logró revertir la tendencia dominante hacia la subordinación de la política a la economía y la administración.

Fue la crisis de 2001 la que marcó un punto de inflexión en este proceso. Las manifestaciones que se iniciaron con la declaración del estado de sitio por parte del entonces presidente Fernando de la Rúa, el 19 de diciembre de 2001, dieron paso a un ciclo de movilización que analiza aquí Carolina Schillagi⁵¹ y del que participaron

⁴⁷ Cfr. Torre, Juan Carlos, pp. 312-314.

⁴⁸ Sobre ese punto, cfr. Morresi y Vommaro, 2012.

⁴⁹ Se trata de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, fundada en 1995, que reúne a hijos de desaparecidos, asesinados, presos políticos y exiliados por la última dictadura militar. Para un análisis exhaustivo de la historia de la organización y las experiencias de sus integrantes, cfr. Bonaldi, 2006.

⁵⁰ Cfr. “Las metamorfosis del sindicalismo argentino”, en pp. 353-366. Para un análisis específico de la experiencia de la CTA, cfr. Armelino, 2005.

⁵¹ Cfr. “Experiencias de movilización social e interpretaciones sobre la crisis de 2001”, pp. 325-351.

—de manera articulada en algunos casos y sin confluencias en otros—: desocupados, trabajadores de empresas recuperadas, ahorristas afectados por el *corralito*, deudores hipotecarios y vecinos reunidos en asambleas barriales, entre otros. Ese ciclo, que comenzaría a cerrarse con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en mayo de 2003, marcó una revitalización de la participación política, que se produjo inicialmente desbordando y ampliando sus marcos institucionales.

Las particularidades y los efectos políticos de ese proceso fueron múltiples y han sido analizadas por numerosas investigaciones.⁵² Entre las primeras se destacan, como recuerda Schillagi, las asambleas barriales organizadas en distintas ciudades del país, cuya breve existencia dejó sin embargo huellas profundas en la política argentina. Parte de esa herencia se observa, por ejemplo, en los diversos movimientos surgidos en la poscrisis, entre los que se cuentan aquellos organizados en torno de cuestiones socioambientales, que en este volumen examinan Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez.⁵³ Como señalan las autoras, los cambios operados tras la crisis de 2001 y las condiciones creadas por la movilización social inaugurada con ella, dieron lugar a la proliferación de demandas fundadas en la defensa de derechos económicos, sociales y culturales. A su vez, estas se insertaban en un proceso de formulación de reclamos en términos de derechos que ya se registraba en la década de 1990, y de la cual la reforma constitucional de 1994 había sido a la vez expresión y condición de posibilidad, a través de la creación de nuevas figuras e instrumentos legales.⁵⁴ Así, con rasgos que evidencian el legado de los movimientos surgidos en los años noventa y otros que les son propios, los movimientos socioambientales constituyen una expresión entre otras de los modos que asumieron la participación y el conflicto en la Argentina tras la recuperación posterior a la crisis de 2001.

No solo los movimientos sociales, sino también los canales más institucionales de la acción política (como los sindicatos y los partidos) vivieron un proceso de recomposición a partir de 2003. En primer lugar, los años del kirchnerismo estuvieron marcados por una fuerte revitalización sindical que incluyó tanto la reactivación de las grandes organizaciones del pasado, como el surgimiento de un nuevo sindicalismo de base, nacido de la organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo.⁵⁵ Este proceso, cuyo examen emprende aquí Paula Abal Medina, no puede ser entendido sin considerar a la vez la recuperación de la actividad

⁵² Cfr. entre otros: Pereyra, Vommaro y Pérez, 2013; Svampa, 2011; Bonnet y Piva, 2009; Giarracca, Norma *et al.*, 2007.

⁵³ Cfr. Bottaro y Sola Álvarez, pp. 381-402.

⁵⁴ Para un análisis de la reforma constitucional en este sentido, así como de sus consecuencias, cfr. Smulovitz, 1997.

⁵⁵ Distintos trabajos han analizado este proceso de revitalización sindical, con especial énfasis en el sindicalismo de base. Al respecto, pueden consultarse: Barattini, 2013; Anigstein, 2013; Varela, 2013; Marticorena, 2015.

económica y el rol asumido durante ese período por el Estado en la re-regulación de las relaciones laborales. Al mismo tiempo, como recuerda la autora, su comprensión resulta incompleta si no se consideran las tensiones derivadas de la consolidación de un amplio sector de la clase trabajadora que permanece por fuera de la economía formal, y por lo tanto al margen no solo del empleo registrado, sino también de las estructuras formales del sindicalismo argentino.

En segundo lugar, el período que va de 2003 a 2015 estuvo también signado por una cierta recuperación de la vitalidad de la política partidaria, visible tanto en una relativa recomposición de la imagen de los políticos profesionales (que habían sido cuestionados con fuerza en 2001) como sobre todo en el restablecimiento de los partidos como espacios de participación política juvenil –algo observado en especial en el espectro de las organizaciones kirchneristas y en el ámbito de la izquierda tradicional–. Finalmente, la política de partidos ha sido también el terreno de una de las principales novedades de la política argentina en los últimos años: el triunfo en 2015 de un candidato a presidente que no pertenece a ninguno de los dos partidos tradicionales de la Argentina (peronismo y radicalismo) y que llega al gobierno como líder del primer partido de centro-derecha que conquista por la vía electoral el poder después de más de 70 años.⁵⁶

Asambleas, grupos movilizadores, colectivos, redes, y también partidos y sindicatos, constituyen en cierto modo la contracara de aquello que señalábamos al comienzo de esta introducción respecto de los problemas sociales. Cuando una situación es entendida como problemática es porque se entiende que puede y debe ser modificada mediante la intervención de las personas, y en particular del Estado. Ahora bien, si tales problemas pueden ser enunciados es, en buena medida, porque esas organizaciones levantan su voz. La transformación en las formas de participación, representación y movilización política es entonces clave para comprender cómo fueron tematizadas y procesadas a lo largo de estos años aquellas cuestiones consideradas injustas. El examen de estas será, no ya la única, pero sí una puerta de entrada interesante para pensar a la sociedad argentina. Esa es la tarea a la que invitamos con este libro.

EL LIBRO

Este libro es el producto de un largo trabajo colectivo desarrollado por quienes integramos el equipo docente de la materia Problemas Socioeconómicos Contemporáneos en la Universidad Nacional de General Sarmiento. La compilación se nutre no solo de las lecturas e investigaciones que cada uno de nosotros ha desarrollado

⁵⁶ El sociólogo argentino Gabriel Vommaro (2017) se ha ocupado de analizar ese proceso. Al respecto, también puede consultarse: Vommaro y Morresi, 2015.

a lo largo del tiempo, sino también de muchos años de labor y reflexión docente, de diálogo con estudiantes y entre colegas.

Se trata así de un libro pensado *para el aula*, para su utilización y discusión en el marco de procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, pero que también ha sido elaborado *desde el aula*, volcando en él lo que aprendimos sobre cómo enseñar a pensar ese objeto por momentos escurridizo que es la sociedad en que vivimos.

En línea con ese objetivo, parte de los artículos que integran el volumen fueron escritos especialmente por investigadores que forman o formaron parte del equipo; en ellos, los autores aceptaron el desafío de producir materiales que, sin abandonar la lógica y las exigencias de los textos académicos, se ajustaran a las necesidades de estudiantes que recién ingresan a la universidad y comienzan a tomar contacto con la temática y el lenguaje de las ciencias sociales. Criterios similares se utilizaron en la búsqueda del resto de los textos reunidos aquí. La producción de las ciencias sociales acerca de las transformaciones de la sociedad argentina en el último medio siglo es muy vasta y toda selección suponía dejar de lado contribuciones valiosas. La nuestra tendió a privilegiar aquellos trabajos que presentaran resultados de investigaciones empíricas, que no se estructuraran en torno de discusiones conceptuales sino del análisis de datos (primarios o secundarios) y que no supusieran el conocimiento por parte del lector de discusiones o debates disciplinarios específicos.

Las propuestas para el trabajo en clase que se incluyen en el libro, en la forma de guías de lectura o de actividades, así como también la selección de conceptos fundamentales que sirven de apoyo a la lectura de la bibliografía, recogen nuestra experiencia en los cursos y nuestra continua búsqueda de fuentes y materiales complementarios a los textos académicos, que resulten útiles para pensar y discutir sobre los problemas trabajados en la materia. Algunas de ellas, queremos subrayarlo, han sido elaboradas por estudiantes avanzados o graduados recientes de la Universidad en el marco de becas de Formación en Docencia financiadas por la UNGS, una experiencia que ha enriquecido por igual su formación como docentes y el trabajo de quienes los orientaron.

Por último, la edición de este volumen, destinado a quienes están iniciando su trayectoria en la universidad, pero también a quienes se encuentran en el último año de la escuela media y a sus profesores, debe ser entendida también como una expresión del compromiso de la Universidad Nacional de General Sarmiento con la construcción de una universidad pública, de calidad y abierta a todos los sectores de la sociedad. Por ese proyecto trabajamos quienes pensamos este libro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adamovsky, Ezequiel (2009). *Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003*. Buenos Aires: Planeta.

- Andújar, Andrea; D'Antonio, Débora; Gil Lozano, Fernanda; Grammatico, Karin y Rosa, María Laura (comps.) (2009). *De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los '70 en la Argentina*. Buenos Aires: Luxemburg.
- Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín (1997-1998). *La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina*, vols. I, II y III. Buenos Aires: Norma.
- Anigstein, Cecilia (2013). “¿Combatividad encauzada o recomposición del trabajo organizado? La dinámica de la negociación colectiva en los gobiernos kirchneristas?”. *Cahiers (Les) ALHIM*, n° 26: Realidades y retos del sindicalismo en América Latina.
- Armellino, Martín (2005). “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA”. En Schuster, Federico; Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- Aspiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel (1987). *El nuevo poder económico en la Argentina de los años '80*. Buenos Aires: Legasa.
- Barattini, Mariana (2013). “La vitalización sindical en el período de la convertibilidad en Argentina”. *Revista Trabajo y Sociedad*, n° 20, verano.
- Basualdo, Eduardo (1987). *Deuda externa y poder económico*. Buenos Aires: Nueva América.
- (2017). *Endeudar y fugar* (ed.) (2017). *Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Basualdo, Eduardo y Arceo, Enrique (comps.) (2006). *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. Buenos Aires: CLACSO.
- Bonaldi, Pablo (2006). “Hijos de desaparecidos. Entre la construcción de la política y la construcción de la memoria”. En Jelin, Elizabeth y Sempol, Diego (comps.), *El pasado en el futuro: los movimientos juveniles*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bonnet, Alberto y Piva, Adrián (comps.) (2009). *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*. Buenos Aires: Continente.
- Calderón, Fernando y Jelin, Elizabeth (1987). *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades*. Buenos Aires: CEDES.
- Calveiro, Pilar (2004) [1998]. *Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue.
- (2005). *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años '70*. Buenos Aires: Norma.

- Canelo, Paula (2016). *La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)*. Buenos Aires: Edhasa.
- (2009). *El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo.
- Carnovale, Vera (2011). *Los combatientes. Historia del PRT-ERP*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Cavarozzi, Marcelo (1997). *Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en la Argentina*. Buenos Aires: Ariel.
- D'Antonio, Débora (2016). *La prisión en los años 70. Historia, género y política*. Buenos Aires: Biblos.
- Da Silva Catela, Ludmila (2001). *No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos*. La Plata: Al Margen.
- Del Cueto, Carla (2007). *Los únicos privilegiados. Estrategias educativas de las familias residentes en countries y barrios cerrados*. Buenos Aires: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- De Riz, Liliana (2000). *La política en suspenso, 1966-1976*. Buenos Aires: Paidós.
- Di Virgilio, Mercedes y Kessler, Gabriel (2008). "La nueva pobreza urbana: dinámica global, regional y argentina en las últimas dos décadas". *Revista de la CEPAL*, n° 95, agosto.
- Feijóo, María del Carmen (2001). *Nuevo país, nueva pobreza*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Franco, Marina (2008). *El exilio. Argentinos en Francia durante la dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Fridman, Daniel (2008). "La creación de los consumidores en la última dictadura argentina". *Apuntes de Investigación del CECYP*, n° 14, pp. 71-92.
- Ghessaghi, Victoria (2016). *La educación de la clase alta argentina. Entre la herencia y el mérito*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Giarracca, Norma (comp.) (2007). *Tiempos de rebelión: que se vayan todos. Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002*. Buenos Aires: Antropofagia.
- González Bombal, Inés (1988). *Los vecinazos. Las protestas en el Gran Buenos Aires, 1982-1983*. Buenos Aires. IDES.

- Gordillo, Mónica (2003). "Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada 1955-1973". En James, Daniel (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Heredia, Mariana (2016). "Las clases altas y la experiencia del mercado". En Kessler, Gabriel (dir.), *La sociedad argentina hoy. La estructura social del siglo XXI*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- James, Daniel (2006) [1988]. *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Jelin, Elizabeth (2005). "Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad". En Suriano, Juan (dir.), *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Kessler, Gabriel (2000). "Redefinición del mundo social en tiempos de cambio. Una tipología para la experiencia del empobrecimiento". En Svampa, Maristella (dir.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, Buenos Aires: Biblos.
- (2004). *Sociología del delito amateur*. Buenos Aires: Paidós.
- (2009). *El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (2011). "Clairs-obscur de la structure sociale. Tendances en contrepoint dans l'Argentine du xxie siècle [Claroscuros de la estructura social. Tendencias contrapuestas en la Argentina del siglo XXI]". *Problèmes de l'Amérique Latine*, n° 82, otoño, pp. 93-108.
- (2014). *Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003-2013*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Luci, Florencia (2016). *La era de los mángers. Hacer carrera en las grandes empresas*. Buenos Aires: Paidós.
- Marticorena, Clara (2015). "Avances en el estudio de la relación entre sindicalismo y kirchnerismo". *Sociohistórica*, n° 36, diciembre.
- Merenson, Silvina (2014). *Y hasta el silencio en tus labios. Memorias de las ex presas políticas del Penal de Villa Devoto en el transcurso de la última dictadura militar en la Argentina*. La Plata: Al Margen.
- Merklen, Denis (2000). "Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre sociabilidad y cultura en los asentamientos del Gran Buenos Aires hacia fines de los '90". En Svampa, Maristella (dir.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, pp. 81-119. Buenos Aires: Biblos.
- (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.

- Milanesio, Natalia (2014). *Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Minujin, Alberto y Kessler, Gabriel (1995). *La nueva pobreza en la Argentina*. Buenos Aires: Planeta.
- Morresi, Sergio y Vommaro, Gabriel (comps.) (2012). *Saber lo que se hace. Expertos y política en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Oberti, Alejandra (2015). *Las revolucionarias. Militancia, vida cotidiana y afectividad en los 70*. Buenos Aires: Edhasa.
- O'Donnell, Guillermo (1982). *El Estado burocrático autoritario. 1966-1973*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- (1997). “Democracia en la Argentina: micro y macro”. En *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós.
- (1997) [1977]. “Estado y alianzas en la Argentina, 1955-1976”. *Desarrollo Económico*, vol. 16, n° 64, enero-marzo.
- Palomino, Héctor (2005). “Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales”. En Suriano, Juan (dir.), *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Pastoriza, Elisa y Torre, Juan Carlos (1999). “Mar del Plata, un sueño de los argentinos”. En Devoto, Fernando y Madero, Marta (dirs.), *Historia de la vida privada en la Argentina*, tomo III. Buenos Aires: Taurus.
- Pereyra, Sebastián (2005). “¿Cuál es el legado del movimiento de derechos humanos? El problema de la impunidad y los reclamos de justicia en los ‘90”. En Schuster, Federico; Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- Pereyra, Sebastián; Pérez, Germán y Schuster, Federico (eds.) (2008). *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. Buenos Aires: Al Margen.
- Pereyra, Sebastián; Vommaro, Gabriel y Pérez, Germán (comps.) (2013). *La grieta. Política, economía y cultura después de 2001*. Buenos Aires: Biblos.
- Pérez, Germán (2008). “Genealogía del ‘quilombo’: una exploración profana sobre algunos significados de 2001”. En Pereyra, Sebastián; Pérez, Germán y Schuster, Federico (eds.), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*, pp. 29-33. Buenos Aires: Al Margen.

- Portantiero, Juan Carlos (1977). "Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973". *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 38, n° 2, abril-junio.
- Pucciarelli, Alfredo (comp.) (2004). *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Rebón, Julián (2004). *Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas*. Buenos Aires: PICASO-La Rosa Blindada.
- Rinesi, Eduardo; Nardacchione, Gabriel y Vommaro, Gabriel (eds.) (2007). *Los lentos de Victor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*. Buenos Aires: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Schorr, Martín y Kulfas, Matías (2003). *La deuda externa argentina. Diagnóstico y lineamientos propositivos para su reestructuración*. Buenos Aires: CIEPP-Fundación OSDE.
- Schvarzer, Jorge (1986). *La política económica de Martínez de Hoz*. Buenos Aires: Hyspamérica.
- (2002). *Convertibilidad y deuda externa*. Buenos Aires: Eudeba.
- Sidicaro Ricardo (2004). "Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el 'Proceso' en perspectiva comparada". En Pucciarelli, Alfredo (coord.), *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Slipak, Daniela (2015). *Las revistas montoneras. Cómo la organización construyó su identidad a través de sus publicaciones*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Smulovitz, Catalina (1997). "Ciudadanos, derechos y política". *Agora*, vol. 3, n° 7.
- Svampa, Maristella (2001). *Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados*. Buenos Aires: Biblos.
- (2003). "El populismo imposible y sus actores, 1973-1976". En James, Daniel (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- (2005). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.
- (2011). "Argentina, una década después. Del que se vayan todos a la exacerbación de lo nacional-popular". *Nueva Sociedad*, n° 35, setiembre-octubre, pp. 19-35.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Szlechter, Diego (2015). *Consentir y resistir. Las contradicciones del mundo del management de empresas transnacionales en la Argentina*, Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

- Torrado, Susana (1994). *Estructura social de la Argentina: 1945-1983*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Varela, Paula (2013). “El sindicalismo de base en la Argentina posconvertibilidad. Hipótesis sobre sus alcances y potencialidades”. En Grigera, Juan (comp.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Vezzetti, Hugo (2009). *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- Villarreal, Juan (1985). “Los hilos sociales del poder”. En Jozami, Eduardo; Paz, Pedro y Villarreal, Juan (comps.), *Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Vommaro, Gabriel (2017). *La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Vommaro, Gabriel y Morresi, Sergio (orgs.) (2015). *Hagamos equipo. PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Wyczykier, Gabriela (2009). *De la dependencia a la autogestión laboral. Sobre la reconstrucción de experiencias colectivas de trabajo en la Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.

PARTE I

LA DICTADURA: ANTES Y DESPUÉS

ES SOLO UN ROCANROL DEL PAÍS

UNA INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE DESARROLLO EN LA ARGENTINA

Gonzalo Vázquez y Ana Luz Abramovich

INTRODUCCIÓN

Este texto ha sido escrito para estudiantes universitarios¹ con el propósito de aportar a su comprensión de los principales problemas económicos que afectan a la sociedad argentina. Para entender dichos problemas, poder discutir sobre ellos y tener la capacidad de pensar posibles acciones y estrategias para hacerles frente, es necesario comprender la totalidad del contexto en el que se desarrollan, así como su evolución a lo largo de los diferentes períodos que marcaron la historia de nuestro país. Para facilitar esta comprensión, adoptamos el esquema analítico que divide a la historia contemporánea de la Argentina en tres grandes períodos, relacionados con tres modelos de desarrollo diferentes: el modelo agroexportador (cuyo inicio suele marcarse en 1880 pero abarca también el período previo de consolidación nacional), el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (que podemos enmarcar entre 1930 y 1976), y el modelo neoliberal (que se inicia con la dictadura de 1976 y se despliega con fuerza hasta la crisis de 2001, y cuya continuidad o no después de 2001 es motivo de discusión académica, así como de disputa política).

En primer lugar presentaremos las principales características del modelo agroexportador (MAE), para luego describir aquellas del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), que fueron modificadas profundamente a partir de 1976. Esto nos permite delinear los rasgos fundamentales del modelo neoliberal que se configura a partir de ese momento y que marca el contexto general en el

¹ Una primera versión de este texto fue escrita en el año 2011 para ser utilizada como bibliografía en la materia Problemas Socioeconómicos Contemporáneos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El presente texto conserva buena parte de dicho artículo original, revisa y corrige algunos aspectos y desarrolla una parte final actualizando la situación y el análisis al año 2016.

que se fueron desarrollando los principales problemas socioeconómicos actuales. Se sintetizan también las principales políticas económicas implementadas por los distintos gobiernos desde 1976 hasta la actualidad, aportando elementos para el análisis y la discusión de los proyectos alternativos en disputa, así como de sus posibilidades de transformación.

El presente texto está escrito desde una perspectiva de economía política, y eso se expresa tanto en su manera de analizar la realidad, como en el recorte de la realidad que analiza. El texto tiene un carácter introductorio, y por ello no profundiza demasiado en las explicaciones teóricas más complejas de los fenómenos que se describen.

Partiremos de una definición de *modelo de desarrollo*, señalando los diversos componentes que lo conforman y la manera en que estos interactúan, y con base en este esquema analítico iremos describiendo sintéticamente los rasgos más sobresalientes de los distintos modelos desarrollados en nuestro país desde 1880 hasta la actualidad.

¿A QUÉ LLAMAMOS “MODELO DE DESARROLLO”?

En principio, en este texto hablamos de modelo de desarrollo para referirnos a un determinado momento histórico del país, en el que se configuran de manera relacionada:

- a. un patrón de acumulación dominante, que marca el funcionamiento de las actividades y los actores económicos;²
- b. un conjunto de relaciones políticas y de poder (dominación y subordinación) entre diversos grupos y sus bloques, alianzas, etcétera;
- c. una forma de concebir el papel del Estado y de intervenir mediante las políticas públicas;
- d. una cierta conformación de la estructura social; y
- e. un determinado modelo cultural y comunicacional,
- f. en el marco de un particular contexto mundial en el que nuestro país está inserto.

Siguiendo a las teorías del desarrollo latinoamericano podemos decir brevemente que el sistema mundial capitalista está conformado por un Centro y una Periferia. Los países centrales son aquellos que han logrado desarrollar una estructura productiva diversificada e integrada con altos niveles de bienestar para

² El patrón de acumulación indica qué tipo de actividad/es (agropecuaria, industrial, de servicios, financiera) es la más relevante en un período. La relevancia viene dada por el peso que toma dentro de la estructura económica (qué porcentaje del PBI representa); pero especialmente, por la cantidad y calidad de empleos que demanda y –por ende– por la distribución del ingreso que a partir de esto se genera.

la mayor parte de su población. Los países periféricos, entre los cuales se encuentra la Argentina, han sido insertados al sistema capitalista mundial (a través de procesos de dominación colonial) en función de las necesidades de los países centrales, y debido a ello sus estructuras productivas están especializadas en la producción y exportación de materias primas, tienen bajo grado de integración sectorial y territorial, y sus poblaciones sufren elevados niveles de pobreza, exclusión y desigualdad. En otras palabras, son economías subdesarrolladas y dependientes de los países centrales. Esto implica que las posibilidades de los países periféricos de incidir en la economía y la política global son relativamente pequeñas, y que los márgenes de acción y de toma de decisiones independientes son limitados, por las presiones ejercidas por los gobiernos y las empresas de los países dominantes. Romper con estos lazos de dominación y dependencia, y avanzar en un camino de desarrollo nacional implica lograr un cambio estructural en la economía, lo que representa un desafío complejo y difícil (pero no imposible) para un país como el nuestro.

Un modelo de desarrollo no se “implementa”. No es una decisión de un gobierno, ni de un grupo de poder, sino un resultado de la particular forma de respuesta de los diversos actores (que son todos ellos económicos, políticos y sociales) a las condiciones de funcionamiento internas y externas (mundiales) de la economía en ese período particular. Las políticas, que si son implementadas por los gobiernos (en respuesta a los resultados de luchas de poder entre sectores con diferentes intereses), pueden estar orientadas en el sentido de profundizar los rasgos característicos de un modelo, o en el sentido contrario, tratando de suavizarlos o modificarlos, como veremos en el estudio de la Argentina.

Los diversos modelos de desarrollo en cierta forma son una manifestación de los distintos “proyectos de país” en disputa. Y por ello no nos interesa estudiarlos solo como “algo que pasó en la historia” de nuestro país, sino como herramientas conceptuales para la comprensión, la discusión y la construcción política de la Argentina presente y futura.

EL MODELO AGROEXPORTADOR (MAE)

Suele señalarse a 1880 como la fecha aproximada de inicio del desenvolvimiento de este modelo, coincidente con la asignada al comienzo del Estado moderno en la Argentina; y a la crisis mundial de 1930 como el momento de su finalización. El patrón de acumulación dominante estuvo centrado en la producción primaria (agricultura y ganadería), dirigida principalmente a la exportación hacia los mercados europeos. La inserción de la Argentina en el comercio mundial mostró las características típicas de una economía periférica, proveyendo a los países centrales de materias primas, alimentos y otros productos sin valor agregado, e importando de ellos los bienes industriales necesarios para el consumo interno. El rol de aquel Estado argentino moderno fue decisivo para el despliegue y la consolidación de este esquema econó-

mico. Si bien diferenciamos con claridad dos subperíodos políticos dentro de este modelo (hasta 1912, y desde entonces hasta 1930), puede mostrarse cómo a lo largo de todo este lapso el Estado argentino funcionó generando las condiciones necesarias para que esa inserción primaria exportadora fuera viable.

El proceso se dio en el marco de un contexto internacional que lo propiciaba. El mundo se estaba reorganizando sobre la base de una División Internacional del Trabajo (DIT), en la cual la economía mundial se componía, por un lado, de países productores y exportadores de productos primarios y compradores de bienes industriales manufacturados, y por el otro, países importadores de productos primarios y exportadores de manufacturas (Ferrer, 1995). La expansión de la industrialización en Europa generaba una creciente demanda de alimentos y materias primas, junto con una enorme disponibilidad de bienes industriales y de capitales, y al mismo tiempo una gran cantidad de mano de obra excedente, disponible para la migración en busca de mejores condiciones de vida. Nuestro país, por su parte, contaba con una enorme disponibilidad de tierras fértiles y un clima apropiado para la producción primaria, y resultó una excelente receptora de capitales externos que generaron las condiciones de infraestructura necesarias para transportar esa producción al puerto, y desde allí a los países centrales. Inglaterra (la gran potencia de la época) fue el principal destino de las exportaciones argentinas y al mismo tiempo el país que realizó las mayores inversiones de capital en los sectores de infraestructura y servicios (ferrocarriles, puertos, transporte marítimo, frigoríficos, comunicación, servicios financieros, etcétera). Nuestro país también se convirtió en receptora de grandes masas de inmigrantes europeos provenientes en mayor medida de Italia y España. Resultó, por último, un mercado posible donde los países europeos pudieron colocar parte de su producción de bienes industriales. Los procesos de inmigración y de llegada de capitales estuvieron fuertemente estimulados por el Estado argentino, aunque el acceso a la tierra, al trabajo y a la vivienda no fue garantizado para los inmigrantes, mientras que la rentabilidad de las inversiones inglesas en los ferrocarriles sí estaba garantizada por parte del Estado.

El Estado argentino se consolidaba hacia 1880, mediante la organización de la nación bajo un régimen federal, superados ya los conflictos internos entre los actores políticos del interior del país y los de Buenos Aires. Esta consolidación, en el marco de un fuerte proceso inmigratorio, implicaba una redefinición de la identidad nacional, en cuya construcción resultaron fundamentales las políticas educativas (educación pública, laica y gratuita, generalizada para toda la población) y el ejército (a través del servicio militar obligatorio). La inmigración tenía al mismo tiempo el objetivo de incrementar la población y de “importar” la cultura del desarrollo de la civilización europea. Por cierto, este proceso no estuvo exento de conflictos, ya que muchas veces los inmigrantes eran los líderes de nuevos sindicatos y de organizaciones sociales y políticas de inspiración socialista y anarquista. El ejército tuvo fundamental participación en el control efectivo de las tierras de

la nación por parte del Estado, alcanzado a partir de un proceso sistemático de aniquilamiento de las poblaciones indígenas originarias, erróneamente recordado como “la Conquista del Desierto”. El Estado entregó la mayor parte de estas tierras “ganadas” a sus ocupantes originarios a las élites, que concentran desde entonces porciones aún mayores de tierras bajo su propiedad, consolidando así al “latifundio” como la forma de tenencia de la tierra y el régimen de producción agropecuaria predominante en nuestro país.³

Sobre la base de la producción agrícola y ganadera latifundista, Argentina se posicionó internacionalmente como “el granero del mundo”, llegando a proveer hacia la década de 1920 el 66% de la exportación mundial de maíz, el 72% del lino, el 32% de la avena, y el 20% del trigo y harina de trigo; además del 50% de la carne (Moreno, 1989). El valor de las exportaciones pasó de 50 millones a 500 millones de pesos oro entre 1880 y 1914. Las exportaciones representaron en toda la etapa entre el 25% y el 30% del producto bruto, y entre el 50% y el 70% de la producción agropecuaria pampeana (CEPAL, citado por Ferrer, 1995). Los datos de la inmigración también son impresionantes: entre 1857 y 1914 ingresaron al país 3.300.000 inmigrantes, que provocaron que la población total del país en el censo de 1914 alcanzara los 7.885.000 habitantes (más de la mitad nacidos en el extranjero), cuando en el censo de 1869 había un registro de solo 1.743.000 habitantes censados.

En resumen, el grado de intervención del Estado para garantizar este proceso fue claro y decidido (entrega de grandes extensiones de tierras, fomento de la inmigración, garantía de las inversiones, medidas aduaneras, financieras y monetarias necesarias, etcétera), y su papel en la economía agroexportadora fue central. Esto nos lleva a cuestionar la idea de que se trataba de un Estado “liberal”, si por ello se entiende que tuvo un papel limitado o solo de apoyo a las actividades del sector privado. Al mismo tiempo, la élite gobernante, que suele ser caracterizada como una “oligarquía terrateniente” por su capacidad de concentrar los recursos y el poder, resultó fuertemente conservadora en el plano de lo político. Hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, la mayor parte de la población estaba excluida (de derecho o de hecho) de la participación electoral y, por lo tanto, de las decisiones acerca de las políticas de la nación. Las élites políticas y económicas concentraban el poder político y económico, y mostraban patrones de consumo y culturales que imitaban a los europeos. Esta “alta cultura” convivía con la cultura de los sectores populares, muy marcada por los trabajadores inmigrantes, y en menor medida por algunos elementos de las culturas indígenas originarias.

³ Según datos ofrecidos por Ferrer (1995), en 1914 el 80% de la superficie agropecuaria estaba cubierta por el 8% de los campos (todos de más de 1000 hectáreas), así como el 50% de la tierra lo ocupaban el 1,7% de las explotaciones más extensas (de más de 5000 hectáreas). Este régimen de tenencia de la tierra latifundista (grandes extensiones de tierra en pocas manos) provocó que la forma de producción dominante fuera de menor productividad y uso de capital por hectárea que si hubiera sido ocupada por una mayor cantidad de propietarios pequeños y medianos.

En la última década del siglo XIX aparecen con fuerza las reivindicaciones de los sectores populares, en reclamo por una participación política ampliada y por mejores condiciones de vida y de trabajo. La Unión Cívica Radical (UCR) fue el principal partido político que derivó de dicho movimiento y contó también con el apoyo de los sectores agrarios perjudicados por la estructura de tenencia de la tierra y de producción (ganaderos, medianos y pequeños productores, peones rurales, arrendatarios), así como de obreros y sectores medios de las ciudades.

La Ley Sáenz Peña, que implementó el voto secreto, obligatorio y universal,⁴ significó la posibilidad de que en 1916 el radicalismo ganara las elecciones, llegando Hipólito Yrigoyen al cargo de presidente de la Nación por voluntad de las mayorías populares. Su programa de gobierno apuntaba a lograr un mayor equilibrio entre los distintos sectores socioeconómicos, y en esta dirección fueron varias de las políticas promovidas, como ciertas reformas sociales, de las condiciones de trabajo urbano y de legislación agraria.⁵ Sin embargo, puede señalarse que los lineamientos generales de la política económica no se modificaron sustancialmente, por lo que el MAE continuó siendo el modelo de desarrollo de la Argentina durante los primeros gobiernos radicales, entre 1916 y 1930. En síntesis, “los elementos distintivos del período radical debemos buscarlos en el plano social y político, no en el económico” (Moreno, 1989).

La crisis económica mundial –que se manifestó más claramente luego del derrumbe de la Bolsa de Wall Street en 1929–, marcó el inicio del cambio de modelo de desarrollo, y tuvo un impacto inmediato y directo en la economía argentina. La situación política, en consecuencia, empeoró y se generaron las condiciones para el primer golpe militar del siglo XX, que en 1930 derrocó al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen.

Si bien en el MAE la inserción económica internacional de la Argentina pareció adecuarse en forma virtuosa a sus “ventajas comparativas naturales” (por la tierra fértil y el clima templado de la Pampa húmeda), la opción por la *especialización primaria exportadora dependiente* tuvo graves consecuencias para el proceso de desarrollo de nuestro país. La demora en el inicio de un proceso nacional de industrialización profundizó la dependencia (comercial, financiera y tecnológica) con los países centrales y provocó que amplios sectores de trabajadores no pudieran acceder a mejores condiciones de vida.⁶ Por otra parte, 50 años de MAE consolidaron una con-

⁴ Aunque en realidad no se trataba de un verdadero voto *universal*, ya que solo votaron los varones hasta la sanción de la reforma que autorizó el voto femenino, impulsada por Eva Perón en 1947.

⁵ Debe mencionarse también que durante el gobierno de Yrigoyen se reprimió con gran violencia a varias manifestaciones obreras, como los recordados sucesos de la Semana Trágica en 1919 y los fusilamientos de los anarquistas de la “Patagonia Rebelde”, rescatados del olvido por las obras del escritor Osvaldo Bayer.

⁶ En palabras del gran economista Aldo Ferrer: “Las causas de la correspondencia entre la

centración enorme de la riqueza y del poder en la fracción del capital terrateniente, que siguió conservando a lo largo de la historia, y obstaculizó así todos los proyectos de transformación de la estructura económica y social que tuvieran una orientación progresista y distributiva, siempre planteando a la etapa agroexportadora como la época dorada de la economía argentina a la que habría que volver.

Una síntesis del modelo de desarrollo agroexportador, en función del esquema analítico presentado al inicio del texto, podría ser la siguiente:

- a. Patrón de acumulación: producción de bienes primarios (materias primas y alimentos) destinada a la exportación, principalmente hacia Europa. Importación de la mayor parte de los bienes manufacturados necesarios para el consumo y la producción nacional.
- b. Relaciones políticas y de poder: se da un primer período (1880-1916) de participación restringida, en un régimen oligárquico y conservador. Con la Ley Sáenz Peña y el ascenso al gobierno de los radicales (1916-1930) se amplía la participación política y las relaciones de poder entre los sectores terratenientes y los sectores medios se vuelven (un poco) más equilibradas, quedando los sectores populares todavía poco representados.
- c. Papel del Estado: durante todo el período el Estado actúa como promotor y garante del proceso de inserción internacional de la Argentina a través de la exportación de bienes primarios. Tanto la consolidación y unificación nacional, como las políticas de reparto de la tierra, la promoción de la inmigración y el estímulo a la inversión extranjera apuntan en este sentido. Si bien hay una fuerte apuesta por la educación pública, no puede decirse lo mismo acerca de otras políticas sociales, ya que no se garantizaban los derechos a la salud, la vivienda o la protección social de los sectores más desfavorecidos de la población.
- d. Estructura social: se configura una estructura social en la que pueden distinguirse claramente los grupos dominantes (la élite terrateniente) de los sectores subordinados, conformados por los trabajadores del campo, los pequeños arrendatarios y ciertos trabajadores urbanos. Comienzan a surgir sectores medios urbanos, de pequeños comerciantes, empleados públicos, etcétera. La masiva inmigración europea compone los sectores populares, y en algunos casos las incipientes clases medias.
- e. Aspectos culturales: la identidad nacional está en plena construcción, con un gran aporte unificador de la educación pública. Los sectores dominantes

especialización en la producción primaria y subdesarrollo han sido suficientemente bien exploradas en la literatura contemporánea sobre desarrollo económico. En la medida en que el cauce fijado para la integración mundial propició la especialización en la producción primaria y obstaculizó la diversificación de las estructuras económicas y la industrialización de los países 'periféricos', se convirtió en uno de los factores fundamentales que, después de un primer impulso inicial, frenó el desarrollo de sus economías" (Ferrer, 1995).

tratan de sostener patrones culturales y de consumo europeos, mientras que se desarrolla una cultura popular que combina elementos de las comunidades inmigrantes y en menor medida de las culturas de los pueblos originarios.

- f. Contexto mundial: el capitalismo industrial se encuentra en pleno desarrollo en Europa, generando un proceso de enorme crecimiento del comercio internacional. En esos países hay abundancia de mano de obra y de capitales, que se dirigen hacia los países periféricos. El mundo se organiza sobre la base de la división internacional del trabajo, en la cual los países “periféricos” son productores y exportadores de productos primarios y compradores de bienes industriales manufacturados, y los países “centrales” funcionan como importadores de productos primarios y exportadores de manufacturas.

EL MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA DE IMPORTACIONES (ISI)

Este modelo de desarrollo tuvo su despliegue en la Argentina entre 1930 y 1976. El patrón de acumulación dominante se basó en este período en el aumento de la producción de bienes industriales destinados al mercado interno. En este modelo se buscó modificar el lugar en la división internacional del trabajo que venía teniendo nuestro país en el modelo anterior (agroexportador), típico de una economía periférica, como proveedor de materias primas, alimentos y otros productos primarios sin valor agregado orientados hacia los países centrales, importando los bienes industrializados necesarios para el consumo en el mercado interno. Se habla entonces de una “industrialización sustitutiva de importaciones” porque a lo largo de este período la actividad industrial creció continuamente (desplazando a las actividades agropecuarias del primer lugar en importancia en cuanto a producción y generación de ingresos), y lo hizo sustituyendo a las importaciones de productos extranjeros en las demandas de consumidores y empresas nacionales. Para ello era necesario proteger a la incipiente industria nacional de la más consolidada competencia extranjera (aumentando los aranceles y trabas aduaneras), fomentarla a través de medidas específicas (créditos, subsidios, inversiones estatales) y a través del incremento en la demanda interna (aumentando los ingresos reales de los trabajadores, es decir, su capacidad de compra).

Si bien este modelo prevaleció bajo diversos gobiernos y circunstancias históricas, podemos distinguir varias etapas hacia adentro de la ISI:

- Hasta 1945 se desarrolló una industrialización sustitutiva de importaciones relativamente espontánea, impulsada por diversos grupos de empresas capitalistas pero sin un claro impulso estatal. En esta etapa el desarrollo de la industria se basó en el aprovechamiento de las oportunidades generadas

por los cambios en el comercio internacional durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y luego de la crisis de los años 30, cuando buena parte de los países centrales adoptaron medidas proteccionistas y descendió en forma sensible el intercambio comercial entre países. Este proceso de industrialización fue liderado por una fracción de la oligarquía terrateniente que encontró conveniente *diversificar* sus capitales volcando a la producción industrial una porción de las ganancias extraordinarias que generaban sus actividades agroexportadoras. También fueron actores importantes en esta primera etapa las inversiones de grandes empresas de capital extranjero (fundamentalmente de origen estadounidense, aunque también alemán, italiano, holandés e inglés), que abrieron filiales en nuestro país y comenzaron a producir aquí teniendo como principal destino el creciente mercado interno de consumidores locales. Un mercado “cautivo”, cerrado a las importaciones, representaba una oportunidad de negocio rentable para grandes empresas que podían ejercer un poder monopólico u oligopólico, fijando precios más altos y con mejores ganancias que en otros sectores.⁷ Recién hacia fines de la década del treinta, sectores oligárquicos propusieron impulsar políticas industrialistas (el “Plan Pinedo”, que no llegó a implementarse), pero solo como estrategia transitoria hasta que se “normalizara” la situación mundial y se pudiera retomar el régimen agroexportador.

- A partir de 1946 (desde los gobiernos de Juan Domingo Perón) se impulsó con fuerza la ISI desde las políticas estatales, promoviendo las inversiones industriales con financiamiento accesible y protegiendo dicha producción con aranceles aduaneros y un manejo del tipo de cambio que desestimulaba las importaciones. En esta primera etapa se privilegió el desarrollo de la *industria liviana* (alimentos, textiles y metalurgia para maquinaria agrícola básica y electrodomésticos). Para sostener estas políticas pro-industria el gobierno peronista intervino los mercados agropecuarios, captando una parte de la renta generada por la exportación de esos bienes y redistribuyendo dicha masa de dinero hacia la producción y el consumo industrial.

⁷ “El cierre del mercado local y su ocupación prematura por grandes grupos industriales tendió a conferir al crecimiento industrial un carácter particular. Los precios de los bienes se fijaban casi independientemente de las estrictas reglas del juego que impone la competencia; los empresarios industriales tenían la oportunidad de elevar sus precios hasta captar parte de los excedentes generados por el agro. Más aún, dicha estrategia resultaba mucho más redituable que la derivada de un posible incremento de la productividad, como lo hubiera exigido la competencia internacional para conquistar nuevos mercados fuera del país. Se fue generando así una situación en la cual los precios relativos y, por lo tanto, los ingresos reales de los agentes económicos, se formaban en un mercado distorsionado y separado de influencias externas. La ‘astucia’ y el control del mercado ofrecían una base más sólida para la riqueza que el proceso de inversión productiva y de innovación tecnológica” (Sabato y Schvarzer, 1988: 264-265).

Este proceso generó el fortalecimiento de un sector de pequeños y medianos empresarios de origen nacional y absorbió mano de obra urbana procedente de migraciones internas. El consumo nacional fue fundamentalmente impulsado por el fortalecimiento de la capacidad de compra de los trabajadores, a partir de una significativa mejora de sus salarios y condiciones laborales, así como de los beneficios adicionales que el Estado garantizaba a los trabajadores formales (obra social, jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas, etcétera).⁸ En este período se alcanzó una situación de “pleno empleo” (no había desempleo), lo cual reforzó las posibilidades de los trabajadores para negociar mejores condiciones laborales y salariales, sumado al fuerte proceso de sindicalización y a la estrecha alianza entre el gobierno peronista y los sindicatos. Sin embargo, esta intervención estatal favorable a los trabajadores reforzó la disputa de los diferentes sectores sociales por el acceso al poder, característica del período histórico de la ISI. “La experiencia demostraba que el aparato del Estado podía ser utilizado a favor de grupos diferentes a los tradicionales y agravó los frentes del conflicto en el sistema” (Sabato y Schvarzer, 1988: 266).

- Ya promediando la década de 1950 se pasó a una etapa diferente dentro de la misma ISI, lo que se suele denominar como segunda fase o ISI “pesada”. A diferencia de la primera fase, se intentó completar y complejizar la ISI, buscando promover la producción nacional de los bienes intermedios e insumos estratégicos que la industria productora de bienes de consumo final venía requiriendo. Este permanente requerimiento de insumos que debían importarse implicaba que no se pudiera solucionar el problema de la “restricción externa”, es decir, de la necesidad de divisas (moneda extranjera) para importaciones y de la dependencia del sector agroexportador, único capaz de proveer esos dólares. Desde principios de los años cincuenta hasta mediados de los sesenta se sucedieron una serie de períodos de crecimiento económico⁹ seguidos de crisis y recesiones, denominados usualmente como

⁸ “El Estado fue implementando en forma programada una política económica de marcado intervencionismo en el mercado de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Para esto, utilizó diversas herramientas (por ejemplo, los créditos subsidiados a la industria) que evidenciaban de parte de quienes propiciaban el proceso de sustitución de importaciones, la vocación de garantizar la plena ocupación y la capacidad de compra de los habitantes para dar impulso a la producción industrial” (Rofman y otros, 2000: 141).

⁹ El crecimiento económico implica un aumento de la producción de bienes y servicios (finales) con respecto a un período anterior. Por lo general, el crecimiento suele estar asociado a mayor demanda de insumos y de mano de obra, aunque veremos que no en todos los períodos se verifica esto. El indicador que se usa para medir el crecimiento es el Producto Bruto Interno (PBI, que mide la producción total de bienes y servicios de una economía a lo largo de un período –por ejemplo, un año–, sumando todo lo producido a través de su valor monetario de mercado (por eso arroja un valor en pesos, o en dólares para comparaciones internacionales).

ciclos de “*stop and go*” porque refieren a una dinámica económica que no podía avanzar de forma continua, sino que debía ser frenada para ordenar los desequilibrios que el propio crecimiento generaba. Un aumento del consumo y de las importaciones llevaba hacia la escasez de dólares, lo cual provocaba una devaluación de la moneda nacional (aumento del precio del dólar), y esto a su vez producía un aumento en los precios de los alimentos (exportables a precio dólar) y un encarecimiento general de los bienes de consumo (muchos de ellos importados o con insumos importados), llevando a la economía hacia una caída de la demanda y de la producción (recesión). Luego de este proceso recrudecía el conflicto distributivo, ya que los trabajadores y empresarios orientados al mercado interno exigían mejoras en los salarios reales (la capacidad de compra de los trabajadores), lo que permitía un nuevo aumento del consumo, la producción y el empleo; aunque al tiempo esta expansión volvía a generar que las importaciones fueran mayores que las exportaciones, y todo el ciclo volvía a repetirse.

No cabe duda de que el “*stop and go*” era la expresión de las limitaciones productivas, tecnológicas, organizativas y políticas internas. Reflejaba las dificultades inherentes a un proceso de industrialización en un país con una base agraria de alta productividad en términos internacionales, con escasa tradición empresaria moderna y con un Estado insuficientemente preparado para impulsar el cambio estructural de la economía (Aronskind, 2003: 85).

A lo largo de este período (usualmente referido como “desarrollista”), se pretendió crear en el país un nuevo perfil industrial (consolidando las industrias de fabricación nacional de automotores, artefactos para el hogar, industria plástica y farmacéutica, insumos químicos y petroquímicos, hierro, acero, maquinaria y equipos para el agro y la industria, etcétera) para lo cual se realizaron una serie de inversiones de gran magnitud y complejidad tecnológica. También se buscó tener autonomía energética con la construcción de centrales hidroeléctricas y atómicas para la provisión de electricidad, y se desarrollaron grandes obras de infraestructura necesarias para la profundización y consolidación de la ISI. En el marco de esa estrategia, el único actor con posibilidad de planificar y llevar adelante semejantes inversiones era el Estado, aunque la fuerte inestabilidad política imperante entre 1955 y 1976 (4 golpes militares, 12 presidentes, ninguno concluyó su mandato) determinó que no hubiera una política económica coherente, estable y eficaz a lo largo del período. En determinados gobiernos –como el de Frondizi (1958-1962) y la dictadura de Onganía (1966-1969)– se buscó hacer alianzas estratégicas con grandes empresas multinacionales, un actor de mucha importancia en este período. Estos gobiernos planteaban la necesidad de reducir los salarios de los trabajadores para ofrecer mayores ganancias a las empresas que producían en el país, y de esa manera estimular que realizaran inversiones.

Sin embargo, la resistencia de los trabajadores organizados –aun en el marco de la proscripción del peronismo entre 1955 y 1973–¹⁰ impidió que se consolidara una redistribución de ingresos desde el trabajo hacia el capital. Es más, dado que se alcanzaron en esta etapa grandes incrementos en la productividad del trabajo y en la eficiencia del aparato productivo industrial (sobre todo por la incorporación de maquinarias más modernas y la utilización de tecnologías complejas y crecientemente automatizadas), se logró “negociar” una distribución más equitativa del mayor excedente generado, que permitió tanto aumentos en las ganancias empresariales como en los salarios de los trabajadores. Diferente fue el caso del gobierno de Illia (1963-1966) y de los gobiernos peronistas de 1973-1975, en cuyas políticas se volvía a sostener la importancia de la redistribución del ingreso a favor de los trabajadores, como motor de la demanda de los bienes industriales.

Según el economista e historiador Eduardo Basualdo (2006), hacia 1975 se había logrado reducir el problema de la restricción externa y el “*stop and go*”, gracias a la “maduración” de estas inversiones de largo plazo y la consiguiente menor demanda de importaciones, en simultáneo con un crecimiento de las exportaciones industriales. Esto indicaría que el modelo de la ISI no estaba “agotado” a mediados de la década del setenta, como argumentaron los impulsores del cambio de modelo desde los inicios de la dictadura del 76. Todo lo contrario, estaba entrando en un período de consolidación, que permitiría la autonomización (independencia respecto de los sectores terratenientes) del sistema productivo que beneficiaba a sectores industriales y trabajadores. Esta sería una de las razones que permiten explicar la violenta irrupción de un proyecto político neoconservador que desplegaría una estrategia sistemática de represión de los sectores populares para garantizar el pasaje hacia un modelo neoliberal.

En síntesis, y analizando el modelo de desarrollo de la ISI en la Argentina entre 1930 y 1976 siguiendo otra vez el esquema analítico presentado:

- a. Patrón de acumulación dominante: *producción de bienes industrializados destinados al mercado interno*. Consecuentemente, pierde peso relativo la producción agropecuaria como actividad organizadora de la vida económica del país (sin dejar de ser relevante, en particular para la exportación y provisión de divisas).

¹⁰ Luego del golpe de Estado que interrumpió el gobierno constitucional de Juan D. Perón en septiembre de 1955, el peronismo fue *proscripto* como alternativa electoral durante 18 años, es decir, que no se permitía que ningún partido político de raíz peronista postulara listas ni candidatos en las elecciones para desempeñar cargos legislativos o ejecutivos, además de que se impedía que el ex presidente regresara al país. Estas restricciones fueron levantadas hacia fines de 1972 y en marzo de 1973 se realizaron nuevamente elecciones presidenciales con candidatos peronistas, en las que triunfó Héctor J. Cámpora, elegido por Perón como representante del movimiento peronista.

- b. Relaciones políticas y de poder: Durante este período pugnan por estar en el poder dos bloques de intereses, ninguno de los cuales puede mantenerse en el gobierno por mucho tiempo. El primer bloque incluía a los trabajadores, el empresariado industrial nacional y los partidos políticos populares (fundamentalmente el peronismo); mientras que el segundo abarcaba a los sectores terratenientes, sectores del capital transnacional y corporaciones conservadoras (fracciones dominantes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia católica). El resultado de esta disputa por el poder es un período de alta inestabilidad y fuertes conflictos políticos.

Los grupos privilegiados tenían capacidad económica, pero no lograban la fuerza política y social para mantenerse en el poder. Los sectores mayoritarios necesitan de su organización y del control del aparato del Estado para imponerse, pero una y otra vez fueron desalojados de éste a poco de iniciadas sus experiencias (Sabato y Schvarzer, 1988: 267).

- c. Papel del Estado: a lo largo de este período se observa un *Estado* con fuerte papel *planificador, interventor y regulador* de la economía, promotor activo de la industrialización, redistribuyendo ingresos desde sectores terratenientes agroexportadores hacia industriales y trabajadores.

Es evidente que en la dinámica del modelo de ISI, que persiste más allá de las distintas variantes y etapas que atraviesa, los cambios políticos inciden en la determinación de quiénes son los favorecidos por el impacto del modelo de desarrollo. En períodos donde el juego democrático de las instituciones permite a los actores sociales más débiles reclamar una mayor participación en la distribución del ingreso y la riqueza, se verifican cambios que favorecen a esos sectores (Rofman y otros, 2000: 147).

Esto se hace evidente en los gobiernos de Juan D. Perón (1946-1955) y Arturo Illia (1963-1966), mientras que en los períodos de Frondizi (1958-1962) y Onganía (1966-1969) se da una situación diferente y son los sectores dominantes los que mejoran su situación relativa.

- d. Estructura social: se verifican mejoras significativas en la *calidad de vida de los trabajadores*, y mayoritariamente logran integrarse al esquema económico como empleados asalariados y como consumidores. Crece también un sector del empresariado nacional, promovido por el Estado y en concordancia de intereses con los sectores trabajadores.

El modelo ISI, con sus variantes y alternativas, según las cambiantes condiciones económicas y sociopolíticas, demostró su capacidad de mejorar en profundidad la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables. Durante la vigencia de este modelo, se advierte el acelerado

crecimiento del salario real y una distribución de la riqueza producida que favorece al sector laboral, con porcentuales cercanos a la mitad del ingreso nacional (Rofman y otros, 2000: 144).

- e. Aspectos culturales: en el marco de la ISI se produce la incorporación de grandes masas de sectores populares (los trabajadores y sus familias) a ciertos ámbitos de la cultura (cines, teatro), recreación (vacaciones), deportes, etcétera, de los que anteriormente se hallaban excluidos. Asimismo, aparece con fuerza la idea del *ascenso social* por parte de los sectores trabajadores, quienes ven concretada en su experiencia de vida una mejora en el bienestar con respecto a sus padres y abuelos, y esperan –a su vez– que sus hijos y nietos puedan acceder a aún mayores niveles de bienestar a través de la educación y el trabajo.
- f. Contexto mundial: luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se desarrolla el período conocido como los “30 años dorados” del capitalismo a nivel mundial, en el cual se logra un crecimiento de las economías en simultáneo con una mejora de las condiciones de vida de los sectores trabajadores, en el marco de la conformación de Estados de Bienestar y políticas económicas activas de orientación keynesiana que potencian y dan estabilidad a todo el proceso.

EL MODELO NEOLIBERAL

El modelo neoliberal en la Argentina se despliega a partir de 1976, profundizándose luego en la “década larga” de los noventa (1989-2001). El patrón de acumulación dominante es la valorización financiera, en concordancia con los cambios que se suceden en la economía mundial, y el papel de las economías periféricas en ella. Se verifica una pérdida de peso de la actividad industrial y un crecimiento de la relevancia del sector de servicios –dentro del cual se destacan las actividades financieras–, mientras que el sector primario (particularmente agropecuario) continúa manteniendo su relevancia. Para esto era necesario “desregular” (por parte del Estado) el funcionamiento de los mercados (financiero, laboral, comercial, etcétera), de modo de permitir la libre movilidad de capitales y la “libertad” en la toma de decisiones de los agentes económicos. En términos generales, estas liberalizaciones trajeron como consecuencia el empobrecimiento de gran parte de la población, una redistribución regresiva del ingreso (desde los sectores populares hacia los sectores altos) y una mayor concentración y extranjerización del aparato productivo nacional. Entre 1976 y 2001, con excepción de algunos momentos del gobierno de Alfonsín, desde el Estado se implementaron políticas que tendieron a instalar y consolidar el modelo neoliberal.

Sobre los cambios en el contexto internacional

A mediados de la década del setenta comenzó a hacerse evidente el final de los años dorados y el comienzo de una importante crisis en el capitalismo mundial. Ante la dificultad de seguir alcanzando altas tasas de ganancia mediante inversiones productivas, amplios sectores del capital internacional adoptan un cambio de estrategia, que siguiendo a Forcinito y Tolón Estarellas (2008) podríamos sintetizar en tres procesos:

1. el reestablecimiento de mayores tasas de ganancias en las actividades productivas a través del empeoramiento de los salarios y las condiciones de empleo de los trabajadores;
2. la reorganización de la producción a nivel global por parte de las empresas transnacionales, trasladando las actividades que insumen mayores costos de mano de obra hacia países con salarios más bajos y menores regulaciones en defensa de los derechos laborales;
3. el creciente predominio de estrategias de valorización del capital a partir de colocaciones financieras en detrimento de la valorización a través de inversiones productivas.

Estos procesos de nivel global fueron presionando para que en cada país se adoptara o impusiera un nuevo pensamiento y programa de reformas *neoliberales* que abarcara:

- la apertura comercial y financiera de las economías nacionales, para consolidar el nuevo esquema de división internacional del trabajo basado en los menores costos laborales de los países periféricos, así como garantizar una libre entrada y salida de capitales financieros especulativos a nivel global;
- la “desregulación” por parte de los Estados del conjunto de los mercados nacionales, incluido el mercado de trabajo a partir de las políticas de “flexibilización laboral”;
- las privatizaciones de las empresas estatales, que tras aumentos de tarifas y reducción de la planta de empleados serían fuentes de negocios rentables para grandes empresas transnacionales;
- todo esto, en el marco de políticas económicas que impulsaran el ajuste fiscal y monetario.

Este programa de reformas neoliberales fue experimentado inicialmente en la dictadura de Pinochet en Chile a partir de 1973, desde 1976 en la Argentina, y en los comienzos de los ochenta se extendió a partir de los gobiernos de Margaret Thatcher (Gran Bretaña) y Ronald Reagan (Estados Unidos). Años después se plasmó en un conjunto de “recetas de política económica” –impulsado por los principales organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)– conocido como “Consenso de Washington”. Estos organismos fueron los encargados de imponer estas políticas a los países periféricos como condición para la renegociación de sus deudas externas, que presentaron sucesivas crisis.

Las políticas económicas de la dictadura (1976-1983)

Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 llegó al gobierno un bloque de poder que llevó adelante una sangrienta dictadura cívico-militar. Esta impulsó la transformación estructural del modelo de desarrollo, acabando con la ISI e imponiendo un modelo neoliberal, que luego será profundizado en la década de los noventa y desembocará en la crisis del 2001, configurando el período más regresivo de la historia argentina. Como señala Rodolfo Walsh con admirable lucidez en su Carta a la Junta Militar de marzo de 1977, luego de describir el criminal programa de represión hacia los sectores populares:

Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

En términos generales, las políticas económicas aplicadas durante este período fueron las siguientes:

- Apertura comercial externa: eliminación de los impuestos a la exportación y una fuerte reducción de los aranceles aduaneros a las importaciones, lo que implicó la desprotección de las industrias nacionales ante la entrada de productos importados baratos.
- Desregulación financiera: se impulsó una fuerte suba de la tasa de interés¹¹ y se fomentó la entrada y salida de capitales especulativos sin control por parte del Estado. A esto se suma una serie de medidas orientadas a concentrar y extranjerizar el sistema bancario.
- Cambios en el uso del tipo de cambio: se eliminaron los tipos de cambios diferenciados que protegían a la industria nacional. Luego, con el objetivo de controlar la inflación, se puso en funcionamiento la “tablita” de Martínez de Hoz, que establecía una tabla de devaluaciones mensuales y decrecientes, fijando y abaratando el valor del dólar en términos reales (dado que la inflación era más alta que estos ajustes del precio del dólar).
- Control salarial, a través de políticas como el congelamiento de los salarios, concretados junto con la abolición del derecho a huelga y la supresión de los

¹¹ La tasa de interés es el rendimiento que obtiene alguien por prestar dinero, y el costo que tiene que pagar aquel que necesita pedir dinero prestado. Una tasa de interés alta lleva a que aquellos que disponen de dinero prefieran colocarlo en el sistema financiero (prestarlo, obteniendo un alto rendimiento) antes que realizar inversiones productivas, cuyo rendimiento es más incierto y puede ser más bajo.

convenios colectivos de trabajo. Estas medidas fueron posibles en el marco de una violenta represión de los sectores trabajadores.

Las *principales consecuencias* de las políticas económicas llevadas adelante por la dictadura fueron las siguientes:

- Inédita disminución de los salarios reales y redistribución regresiva de los ingresos desde los sectores trabajadores hacia los sectores del capital más concentrado. Implantación de un mecanismo sistemático de valorización financiera en favor de los principales grupos económicos nacionales (Bunge & Born, Pérez Companc, Macri, Fortabat, Bulgheroni, entre otros) y extranjeros con intereses en el país. El aumento de la tasa de interés muy por encima de la tasa internacional, junto con el acceso a créditos blandos, favoreció una masiva entrada de capitales especulativos en el sistema financiero local (la “bicicleta financiera”). El mantenimiento de valor de dólar a un precio previsible y barato (gracias a la “tablita” de Martínez de Hoz) permitió luego la fuga en dólares de la ganancia especulativa, a la espera de la posterior maxi-devaluación del peso, que multiplicó en dinero local la riqueza obtenida y fugada anteriormente. Este esquema de valorización financiera influyó en la disminución de créditos disponibles para la inversión en actividades productivas.
- Se inicia un proceso de desindustrialización de la estructura productiva argentina, con la consiguiente pérdida de empleos e ingresos para los trabajadores, también posible por la brutal represión ejercida sobre los representantes gremiales y los trabajadores en general. La apertura comercial (reducción de los aranceles aduaneros a las importaciones) sumada al dólar barato que garantizaba la “tablita”, provocó una enorme dificultad a miles de pequeñas y medianas empresas nacionales (sin poder monopolístico y sin base en ventajas competitivas relacionadas con recursos naturales, como la producción agropecuaria) para competir con los productos importados. Esta situación generó la desarticulación de la relativamente exitosa estrategia industrializadora de las décadas previas. Cabe aclarar que la apertura comercial no fue homogénea y los efectos de la competencia externa no fueron similares en todos los sectores de la industria, ya que ciertas ramas intensivas en recursos naturales y empresas oligopólicas (como la siderúrgica y la automotriz) fueron protegidas.
- El exponencial aumento de una deuda externa (de 8 mil millones en 1976 a 45 mil millones de dólares en 1983), que a diferencia de la contraída en la ISI no era aplicada a la inversión productiva en sectores estratégicos, sino utilizada por los grupos económicos para la valorización financiera de su capital. Esta deuda privada, bajo la presidencia de Domingo Cavallo en el Banco Central, fue licuada y luego estatizada con la excusa de los perjuicios que habría causado la maxi-devaluación, cuando en realidad los deudores privados habían fugado al exterior mayores cantidades de dólares de las que adeudaban. Esta

enorme masa de deuda externa pública resultó en las siguientes décadas el principal factor condicionante para la exigencia de políticas de ajuste por parte del FMI (representante de los acreedores externos).

Principales políticas económicas del gobierno de Alfonsín (1983-1989)

Los años del gobierno de Alfonsín estuvieron marcados en lo económico por el intento conjunto de contener la inflación y estimular la economía, buscando al mismo tiempo cumplir con las exigencias de los organismos financieros internacionales. Las políticas económicas estuvieron estructuradas en torno a una serie de planes sucesivos, ninguno de los cuales logró finalmente cumplir con sus objetivos.

En el primer año del gobierno democrático de Raúl Alfonsín estuvo al frente del Ministerio de Economía Bernardo Grinspun, quien impulsó una política de expansión del mercado interno a partir de un acuerdo social de aumentos controlados de precios y salarios, buscando contener la inflación, pero al mismo tiempo aumentar el nivel de producción y empleo. Este intento no tuvo buenos resultados: empresas grandes con poder monopólico en ciertos mercados de consumo masivo no respetaron los acuerdos, los sindicatos comenzaron a reclamar aumentos salariales, el gobierno tuvo que acceder a las demandas, lo que volvió a generar más inflación y desfinanciamiento estatal. Todo esto en un contexto de crisis de la deuda externa, ante el aumento de los intereses y obligaciones de pagos que el gobierno no podía afrontar. El gobierno de Alfonsín al principio confrontó con los acreedores y el FMI, impulsando la conformación de un “club de deudores” con otros países latinoamericanos para renegociar la deuda en conjunto, pero esta iniciativa fracasó por eficaces presiones de Estados Unidos a México y Brasil.

Desde 1985 en adelante, el gobierno alfonsinista y su ministro Juan V. Sourrouille, buscaron resolver los principales problemas económicos (inflación, recesión, deuda), siempre pretendiendo acuerdos y apoyos con el FMI y los principales grupos económicos nacionales. Al principio, con el Plan Austral, realizando acuerdos de precios, ajustes selectivos y propuestas pro-industria exportadora, para sanear las finanzas públicas y mejorar la capacidad de pago de la deuda. Luego, intentaron con estrategias más cercanas a la ortodoxia liberal de ajuste recesivo, sacrificando la posibilidad de crecimiento del nivel de actividad en pos de frenar la inflación y pagar la deuda. Lo cierto es que ninguno de estos planes económicos tuvo los resultados pretendidos: los grupos económicos apostaban a la valorización financiera y no al aumento de la producción y el empleo, aunque seguían recibiendo subsidios estatales supuestamente con ese fin; los trabajadores reclamaban cada vez con mayor fuerza por los perjuicios que la situación económica y las sucesivas políticas fallidas les generaba (caída en salarios reales, aumento del desempleo y la pobreza); los acreedores externos exigían más ajuste y cumplimiento de las obligaciones, ya que en reiteradas ocasiones el gobierno debió entrar en cesación de pagos.

En síntesis, los cambios dramáticos en el patrón de funcionamiento de la economía argentina se profundizaron durante el gobierno de Alfonsín. Básicamente se consolidó la subordinación creciente de las políticas públicas en general, y de la política económica en particular, a la lógica de acumulación del nuevo poder económico gestado en la dictadura. El gobierno radical, heredero de un endeudamiento cinco veces superior al valor de las exportaciones anuales y de 20.000 millones de dólares de atrasos en los pagos, no pudo neutralizar la puja distributiva desatada a partir de la crisis de la deuda entre las fracciones del poder económico, aún allanándose a los intereses del gran capital interno, lo que se expresó en un inédita espiral hiperinflacionaria y en el agravamiento de la situación económica general (Forcinito y Tolón Estarellles, 2008: 44).

Aunque los resultados económicos del período fueron globalmente negativos para el país (caída del PBI por habitante, aumento de la deuda, hiperinflación y aumento de la pobreza y la indigencia),¹² eso no significa que todos los sectores de la economía perdieron, sino que de hecho se transfirieron ingresos y riquezas de unos sectores hacia otros. Los principales ganadores de estos años resultaron los grandes grupos económicos locales, que con fuerte influencia en las políticas gubernamentales y acceso a recursos y subsidios estatales, se apropiaron de un 10% adicional del ingreso total nacional, capital acumulado en dólares fugados al exterior mientras se derrumbaba la inversión de capital productivo en el país. En segundo lugar, si bien los acreedores externos tuvieron una relación conflictiva con el gobierno, sus presiones rindieron frutos y captaron un 4% adicional del PBI. Los grandes perdedores del período resultaron los pequeños empresarios y fundamentalmente los trabajadores, quienes perdieron un 13% de su participación en el ingreso nacional. Pasaron de obtener la mitad (50%) de la “torta” de riqueza generada en el país en 1975, a obtener una porción menor al 30% en los tiempos de Alfonsín, llegando a solo el 22% en 1989, el año de la hiperinflación y del final del gobierno radical (Forcinito y Tolón Estarellles, 2008).¹³

El balance del período [del gobierno de Alfonsín] arroja resultados negativos en materia de desarrollo económico, crecimiento y mejoramiento de las

¹² “La caída del PBI fue notable entre 1980 y 1989: casi un 10%. El poder de compra del salario promedio de 1989 era un 56,5% del de 1980, y las tasas de desocupación y subocupación de la fuerza de trabajo se incrementaron respectivamente un 184% y 48% para el mismo lapso. Para octubre de 1989, un 32,8% de los hogares del país se encontraban bajo la línea de pobreza y un 11,6% bajo la de indigencia, en lo que constituían cifras inéditas hasta entonces. El endeudamiento externo se incrementó de 35,7 en 1981 a 63,3 miles de millones de dólares en 1989” (Forcinito y Tolón Estarellles, 2008: 45).

¹³ Una interpretación bastante extendida señala que los sindicatos fueron responsables del debilitamiento y fracaso del gobierno de Alfonsín, por haber convocado a lo largo del período a 13 paros nacionales. Considerando los resultados concretos de las políticas económicas de estos años, no parece tener asidero semejante acusación.

condiciones de vida de la población. Se acentuaron los problemas heredados de la dictadura militar, esto es, el estancamiento del Producto Bruto, el achicamiento del sector industrial, la caída de los ingresos de los trabajadores y de su participación en el ingreso nacional, el aumento del desempleo y el subempleo, la caída de la inversión, el aumento de la inflación y el incremento de la deuda externa. Paralelamente, unos pocos grupos económicos pudieron seguir creciendo y obteniendo beneficios. En este marco estructural, y tras la traumática experiencia hiperinflacionaria, quedarían sentadas las bases para la implantación de un modelo económico neoliberal (Rofman y otros, 2000: 177).

En otras palabras, más allá de que el gobierno de Alfonsín no tuviera la intención de profundizar a través de sus políticas el cambio de modelo de desarrollo (desde la ISI hacia el neoliberal), los resultados de sus acciones, condicionadas por la estructura económica heredada y por los intereses de los actores con los que tuvo que lidiar, lo condujeron en esa dirección.

1989: un año de aquellos...

El año 1989 fue especialmente problemático para la economía argentina. El gobierno de Raúl Alfonsín pretendía mantener controlada la inflación y el dólar hasta las elecciones de mayo. Pero en enero, actores económicos poderosos protagonizaron una "corrida cambiaria", al comprar una enorme cantidad de dólares especulando con una devaluación del austral, que ellos mismos generaron al dejar al Banco Central casi sin reservas. La cotización del dólar se disparó, las corridas se multiplicaron y los precios internos se ajustaron de acuerdo con los movimientos del dólar. La hiperinflación estaba en marcha.

A fines de marzo renunció el ministro de Economía Sourrouille (por pedido del candidato radical Eduardo Angeloz) y fue reemplazado Juan Carlos Pugliese, quien liberó la cotización del dólar esperando una caída... sucedió lo contrario: en pocos días el dólar pasa de 50 a 500 australes. "Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo..." lamentó Pugliese en su renuncia.

En esos meses los precios subieron diariamente en porcentajes altísimos: mientras que en enero la inflación mensual había sido del 9,5%, en mayo ya era del 80%. Los salarios mínimos cayeron a un piso histórico (20 dólares mensuales). Muchas de las operaciones comerciales se realizaban en dólares, por la virtual desaparición del poder de compra de la moneda nacional.

El 14 de mayo la fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde se impuso cómodamente en las elecciones presidenciales, prometiendo “salariazos y revolución productiva”; pero luego de ganar anunció un plan económico de orientación neoliberal. La inflación en junio y julio superó el 200% mensual y los servicios públicos aumentaron un 700%. En la periferia de Rosario y Buenos Aires, en donde la pobreza era enorme, se produjeron saqueos a supermercados y otros comercios. La situación estaba fuera de control: Alfonsín acordó con Menem una entrega anticipada del mando, en medio de un estado de sitio y con 14 muertos y 80 heridos por la represión.

Desde un inicio el nuevo gobierno intentó ganar la confianza de los actores económicos más poderosos: los grupos económicos locales y los acreedores externos. Para ello planteó una política económica en total alineamiento con los postulados del Consenso de Washington, y su equipo económico quedó a cargo de técnicos del grupo empresarial Bunge & Born. Su primer ministro de Economía, Miguel Roig, asumió el 9 de julio y falleció cinco días después, a causa de un infarto. Lo sucedió como ministro Néstor Rapanelli, quien era su segundo en Bunge & Born.

Apenas asumido, el nuevo gobierno remitió al Congreso dos proyectos que fueron aprobados rápidamente: las leyes de “Emergencia Económica y Social” y de “Reforma del Estado”. Dichas leyes daban amplios márgenes de acción (superpoderes) al Poder Ejecutivo y ordenaban la privatización acelerada de las empresas estatales y una brusca apertura de la economía reduciendo aranceles y trabas aduaneras.

A pesar de que se reanudó el financiamiento del FMI y el Banco Mundial, el plan Bunge & Born fracasó: la inflación no se detuvo y la recesión siguió en aumento. Rapanelli renunció en diciembre y asumió como ministro Antonio Erman González, quien en la última semana del año lanzó el plan Bonex, que implicaba el “canje compulsivo” de depósitos a plazo fijo por bonos del Estado a pagar a diez años; lo que ocasionó pérdidas irreparables al sector de pequeños y medianos ahorristas.

Se cerró así un año inolvidable para los argentinos: el PBI cayó más del 4%, la inflación fue del 5000%, los salarios reales tocaron fondo y la participación de los asalariados en el ingreso también.

La política económica del gobierno de Menem (1989-1999)

En este contexto se puso en marcha el Plan de Convertibilidad, con el objetivo declarado de frenar de raíz el problema inflacionario, que en ese momento estaba “descontrolado”, dificultando el funcionamiento de todo el sistema económico. La Convertibilidad requirió de toda otra serie de medidas de política económica (y sociales) complementarias, las cuales se constituyeron en algo así como un “programa de estabilización” de la economía argentina. El plan, en particular la Ley de Convertibilidad, tuvo vigencia desde abril de 1991, mientras que el resto de las medidas se fueron aplicando y amplian-

do a lo largo de la década. La orientación general de estas políticas era la reducción del tamaño del Estado y minimización de sus intervenciones, tanto en la producción de bienes y prestación de servicios, como en su funcionamiento administrativo.

- La Convertibilidad: la Ley 23928 estableció la convertibilidad de un peso (nueva moneda, establecida a partir de la equivalencia 1 peso = 10.000 australes) por cada dólar. Esto implicaba que, por ley, los dólares solo podían comprarse y venderse al valor de un peso, frenando de esta manera las expectativas inflacionarias vinculadas al aumento del precio del dólar. La Ley de Convertibilidad también fijaba la obligación de que el Banco Central tuviera acumuladas reservas en oro y divisas extranjeras por un valor equivalente al 100% de la base monetaria (el dinero que tienen las personas más el que está en los bancos). Esto implicaba que el Estado debía encontrar la forma de hacerse de muchas divisas, y la forma de conseguir esas divisas estuvo dada por las privatizaciones y el endeudamiento externo. Al mismo tiempo, involucraba la obligación de disminuir el déficit fiscal (achicando el gasto del Estado), que ya no podía ser financiado por el Banco Central. Por último, fijaba la prohibición de realizar contratos con indexación (es decir, ajustados por inflación).
- Apertura comercial y financiera externa: se profundizó aún más, con fuertes reducciones de los aranceles a las importaciones. Esta era una parte fundamental de la política anti-inflacionaria, al someter a los productores nacionales a la competencia externa, obligándoles a bajar los precios. En paralelo, se flexibilizaron aún más los controles sobre las entradas y salidas de capitales especulativos desde y hacia el exterior.
- Privatizaciones de empresas públicas: se dieron tanto en el ámbito del Estado nacional como en el de los provinciales, la mayor parte entre 1991 y 1994. El esquema de privatizaciones incluyó a grandes empresas que involucraban un patrimonio público de enorme valor y en áreas estratégicas. Se destacan las privatizaciones de las empresas nacionales de petróleo (YPF), teléfonos (Entel), agua (Obras Sanitarias), gas (Gas del Estado), energía eléctrica (Segba y otras), los trenes (Ferrocarriles Argentinos), los puertos, el correo, canales de televisión y radios, entre otros. Hacia finales de la década del noventa prácticamente no quedaban activos productivos o servicios públicos de infraestructura en manos del Estado. Además, buena parte de las leyes y procesos de privatización fueron realizadas con mecanismos de corrupción y connivencia entre el gobierno y los grupos económicos locales, para los cuales significó el negocio más rentable de la década.
- Reforma tributaria: se implementó una reforma *regresiva* (que impactó en mayor medida sobre los sectores de menores ingresos), en la que se aumentaron los impuestos al consumo que afectan con más fuerza a los más pobres (específicamente, se elevó la alícuota del IVA desde un 13% hasta el actual 21% del gasto realizado por el consumidor final).

- Flexibilización laboral: se implementó a partir de diversas leyes y normativas que tendieron a la precarización del trabajo (contratos por tiempo determinado, pasantías, baja de las indemnizaciones por despido) y la reducción de las contribuciones patronales para obra social y jubilaciones. A la flexibilización del trabajo se sumó la descentralización y casi anulación de las negociaciones colectivas, y la ley que solo autorizaba aumentos del salario en caso de aumentos de productividad, lo que en conjunto significaba un congelamiento o disminución de los salarios reales.
- Descentralización, desfinanciamiento y focalización de las políticas sociales: en el campo de las intervenciones sociales del Estado (en salud, educación, jubilaciones, protección social, etcétera) se realizaron reformas que reemplazaron tradicionales políticas universales por nuevas políticas sociales focalizadas solo en los sectores de mayor pobreza, con menores presupuestos y calidad de las prestaciones. Un caso emblemático de desfinanciamiento del Estado fue la privatización de las jubilaciones en 1994, cuando se pasó de un sistema solidario “de reparto” a uno de capitalización privada individual: las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Estas empresas –generalmente departamentos especializados dentro de los propios bancos– cobraban a cada trabajador una parte de su sueldo, que se acumulaba en su cuenta de capitalización. Al llegar el momento, cada trabajador cobraría una jubilación cuyo monto estaría determinado por la magnitud de sus aportes y el rendimiento de su fondo de capitalización administrado por su AFJP. Esta reforma implicó un instantáneo desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que el Estado dejaba de recibir los aportes de los trabajadores, pero tenía que continuar pagando todos los meses una enorme cantidad de jubilaciones y pensiones del sistema anterior. Esto implicó la necesidad de endeudarse, lo que hizo crecer fuertemente la deuda externa pública.¹⁴

Las consecuencias de estas políticas se fueron dando de manera acumulativa. Todas las medidas implementadas fueron generando ciertas consecuencias, que habilitaban la aplicación de nuevas y más profundas medidas en el mismo sentido.

Podría decirse que el Plan de Convertibilidad resultó exitoso en su objetivo de controlar la inflación. Efectivamente, la inflación de estos años se redujo a cifras poco significativas, y durante los años que van entre 1991 y 1997 la economía logró crecer, con excepción del año 1995 (año del “efecto tequila” por la fuerte devaluación del peso

¹⁴ Se considera deuda externa a toda aquella que debe pagarse en divisas internacionales, incluso si los acreedores están dentro del país. En este caso en particular, las AFJP le prestaron al gobierno argentino, que pagaba una tasa de interés muy alta en dólares, obteniendo un “alto rendimiento” para los aportes que recibían de los trabajadores. Sin embargo, a estos les cobraban altísimos costos de “comisiones”. De esta manera, finalmente las AFJP ganaban muchísimo dinero ¡por prestarle al Estado la plata que dejaba de recibir porque ahora la tenían las AFJP!

mexicano). Sin embargo, no puede afirmarse que el plan haya resultado exitoso en términos de crecimiento del PBI, por dos razones: en primer lugar, tal como mostró la crisis del tequila y sucesivas crisis posteriores, la economía resultaba muy vulnerable a contextos internacionales adversos; en segundo lugar, el propio régimen convertible resultaba inviable a largo plazo, y la postergación de la salida de la convertibilidad lo que hizo fue acumular efectos negativos (una depresión económica –caída del PBI– que duró 5 años, entre 1998 y 2002) y empeorar las consecuencias de la salida. Pero además, estas políticas implementadas tuvieron otra serie de efectos negativos:

- Profundización de la desindustrialización: la competencia con los productos importados, que resultaban baratos por el bajo precio del dólar y porque pagaban aranceles cada vez menores, destruyó gran parte de la (ya golpeada) industria nacional. Nuevamente, este proceso fue selectivo, desapareciendo miles de pequeñas y mediana empresas y fortaleciéndose las empresas grandes, que además absorbieron muchas de aquellas más pequeñas en quiebra. A este proceso de concentración económica, se sumó un proceso de extranjerización (ganan mucho peso las empresas de origen extranjero), que no se dio solo en el sector industrial, sino también en el primario y en especial en el sector de servicios (que incluye las privatizadas, los bancos, los *shoppings*, cines, etcétera).
- Notable aumento del desempleo, la subocupación y la precarización laboral: los despidos en las empresas privatizadas, en los empleos públicos (tanto del gobierno nacional, como provincial y municipal) y el quiebre de miles de empresas, produjeron un enorme e inédito incremento del desempleo y la subocupación. La existencia de esta enorme masa de desempleados, junto a las reformas en la normativa laboral, marcaron una fuerte disminución del poder de negociación de los trabajadores, lo que implicó a su vez un empeoramiento de las condiciones de trabajo. Suele decirse que el trabajo primero se flexibilizó “de hecho” y luego las normativas “volvieron legal” esa situación. En síntesis, se generó una serie de condiciones en el mercado de trabajo y en su legislación que en conjunto tendieron a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores.
- El achicamiento del papel del Estado redundó en una pérdida de garantía de derechos y no implicó una reducción del déficit fiscal. La carga de los intereses de la deuda externa heredada, que a su vez se fue agrandando por la necesidad de acumular reservas para sostener la convertibilidad, implicó un alto y creciente costo en pagos de intereses que el gobierno debió asumir.
- Incremento de la deuda externa: se generó un círculo vicioso de endeudamiento externo, en el que para afrontar los intereses de la deuda contraída, el Estado debía volver a endeudarse, y así sucesivamente. El endeudamiento también creció en el sector privado, ya que resultaba conveniente (para aquellos que podían acceder a crédito) endeudarse con un dólar tan barato. Los grupos económicos, por su parte, no volcaban estos capitales a inversiones

productivas, sino que –otra vez– realizaban inversiones financieras, fugando luego al exterior los dólares de las ganancias obtenidas.

- Empobrecimiento de gran parte de la población y empeoramiento de las condiciones de vida. La pérdida o precarización del empleo y la disminución del salario real de los trabajadores, hicieron que para muchas familias resultara difícil sostener sus condiciones de vida. A esto debe sumarse la “mercantilización” de los servicios que antes el Estado garantizaba de forma universal (salud, educación, etcétera) y el incremento en el costo de los servicios públicos (agua, luz, gas, teléfono, transporte), ahora en manos de empresas privadas.

El 2001: otro año para recordar

El gobierno de Menem, reelecto en 1995, fue perdiendo popularidad a medida que pasaban los años y las consecuencias sociales de sus políticas se percibían más claramente. En las elecciones de 1999 triunfó la fórmula opositora Fernando de la Rúa-Chacho Álvarez, de la Alianza entre la UCR y el Frepaso. Esta propuesta política –que proponía eliminar la corrupción y mejorar el bienestar social– fracasó de manera estrepitosa, y luego de dos intensos años –en los que no hubo alejamiento, sino más bien continuidad con las políticas y prácticas menemistas–, tuvo que dejar el gobierno en medio de una de las mayores crisis sociales, políticas y económicas de la historia argentina.

El año 2001 fue otro año memorable para los argentinos. En un contexto de creciente fuga de divisas, el año se inició con un promocionado “blindaje financiero”, que en realidad era un préstamo de 40 mil millones de dólares por parte del FMI y otros organismos internacionales. Este préstamo se anunciaba como la base que iba a “blindar” la confianza en el gobierno para garantizar la convertibilidad; pero en la práctica sirvió para aportar los dólares que los sectores de altos ingresos y las grandes empresas necesitaban para cambiar sus pesos convertibles y continuar fugando dólares hacia el exterior, proceso que terminaría acabando con la convertibilidad en poco tiempo más.

En marzo, José Luis Machinea renunció como ministro de Economía y en su lugar fue designado Ricardo López Murphy, quien diseñó un plan de fuerte ajuste fiscal (que incluía el arancelamiento de las universidades públicas, entre otras medidas marcadamente antipopulares). Las masivas protestas lo obligaron a renunciar a solo dos semanas de haber asumido.

El gobierno de De la Rúa, golpeado y desorientado, convocó a Domingo Cavallo (muy poco tiempo antes, uno de sus mayores opositores políticos) y le ofreció el manejo de la economía. El ex funcionario de Menem y la dictadura profundizó el ajuste a través de una política de “déficit cero”, que implicaba reducir el gasto estatal para equipararlo con la pobre recaudación impositiva de esos meses de profunda crisis económica. Así, en julio de 2001, en medio de una gran crisis económica y social, el gobierno redujo un 13% los salarios de todos los empleados estatales y de los jubilados, ignorando el efecto multiplicador de semejante ajuste. En medio de un incendio, pretendió apagar el fuego arrojando nafta.

La actividad económica seguía cayendo, el desempleo seguía subiendo (ya superaba el 20%) y ante la falta de empleos e ingresos millones de personas se incorporaron al “Trueque”: mercados locales en los que se intercambiaban sus productos utilizando una “moneda comunitaria” creada por los propios nodos y redes que integraban esta experiencia alternativa. También los gobiernos provinciales, ante la escasez de pesos, para pagar salarios y otras deudas, emitieron sus propias monedas: comenzaron a circular los “patacones”, los “lecop”, y otros bonos provinciales.

En las elecciones legislativas de octubre de 2001, la Alianza perdió 5 millones de votos en relación con los obtenidos dos años antes, el peronismo volvió a ser mayoría en el Congreso, y los votos nulos o en blanco (que representaban un “voto bronca”) superaron el 20% a nivel nacional, con picos en Santa Fe, Buenos Aires y Capital.

A principios de diciembre, De la Rúa y Cavallo decretaron un “corralito” que impedía disponer con libertad del dinero depositado en las cuentas bancarias. Esto se hizo para impedir un retiro masivo y generalizado, ante los rumores de que los bancos podían quebrar y no reconocer sus deudas con los depositantes. Sin embargo, a esa altura del año los actores más poderosos de la economía ya habían retirado 10 mil millones de dólares de los bancos y habían fugado 30 mil millones de dólares al exterior, por lo que el corralito afectó fundamentalmente a los pequeños y medianos ahorristas y al conjunto de los trabajadores que tenían sus sueldos depositados en los bancos.

El 19 de diciembre, de manera principal en el conurbano bonaerense, se desencadenaron saqueos a supermercados y reclamos por comida ante empresas y gobiernos locales. En respuesta, De la Rúa decretó el estado de sitio y ante una respuesta popular espontánea y masiva (“cacerolazos” y ocupación de las calles y plazas) en rechazo a las políticas del gobierno, ordenó una brutal represión (que provocó 39 muertos en todo el país).

El 20 de diciembre el presidente renunció, y en los siguientes 15 días fue sucedido por 4 presidentes peronistas designados por el Congreso, siendo finalmente Eduardo Duhalde quien decretó el fin de la convertibilidad e impulsó una mega-devaluación del peso y una “pesificación” de las deudas en dólares, no solo de los pequeños, sino también de los grandes deudores que en su mayor parte ya habían retirado dólares y aumentaban de esa forma aún más sus riquezas.

25 años de modelo neoliberal

Retomando los ejes de caracterización de los modelos de desarrollo, podemos sintetizar este período 1976-2001 de la siguiente manera:

- a. Patrón de acumulación predominante: *valorización financiera del capital*. La posibilidad de acceder a endeudamiento barato en dólares en el mercado financiero internacional (por parte de los grupos económicos locales) y la apertura a la entrada de capitales extranjeros sin mayores regulaciones, se articula con una tasa de interés doméstica (la del mercado financiero local) sistemáticamente más elevada que la tasa de interés internacional, lo que permite y alienta la especulación financiera a corto o mediano plazo en el mercado local (y al mismo tiempo desalienta la inversión productiva de esos capitales). Esta especulación se concretó de maneras diversas a lo largo del período: a través de colocaciones financieras en los bancos o en la bolsa, participando en la privatización de empresas públicas, pagando con bonos de la deuda devaluados para luego vender sus acciones a valores mucho más altos, prestando dinero al Estado y cobrando un interés muy alto, etcétera. Esas ganancias financieras luego fueron retiradas del mercado financiero local y fugadas al exterior, nuevamente en dólares (provistos por el siempre creciente endeudamiento público), también baratos (gracias a manejos del tipo de cambio apropiados a esta estrategia, como la tablita de Martínez de Hoz en los setenta y la convertibilidad en los noventa). Las mega-devaluaciones fueron también momentos de valorización para estos capitales, que se encontraban posicionados en dólares o en otros activos (tierras productivas, por ejemplo) o negocios rentabilizados por el cambio de precios relativos.
- b. Relaciones políticas: por un lado, siguiendo los análisis de Basualdo (2006), podemos afirmar que se trató de un período de “revancha clasista” del capital por sobre los trabajadores, iniciado con el terrorismo de Estado genocida en la dictadura y continuado con el gran empeoramiento de las condiciones de vida causado por la pobreza, la desigualdad y la exclusión social de los sectores populares durante los gobiernos democráticos posteriores. Por otro lado, fue un período de intensas pujas inter-capitalistas, entre diversas

- fracciones del poder económico que se disputaban las mayores ganancias o la apropiación de una porción mayor de los beneficios que el modelo neoliberal garantizaba a estos sectores.
- c. Papel del Estado: se plantea un Estado con *menor intervención* en la economía, tanto en sus funciones de planificación (esta práctica se abandona de manera directa, ya que se considera que es “el mercado” quien debe organizar qué, quiénes y para quiénes producir) y de regulación (se eliminan en forma gradual todas las intervenciones que controlen precios o pongan restricciones al capital en la economía), como de producción directa de bienes y servicios (se privatizan o cierran prácticamente la totalidad de las empresas públicas que se habían construido durante las décadas previas). Pero esta retórica liberal no debe ocultar que las políticas económicas estatales siempre favorecieron a determinados sectores (en este período con claro predominio por parte de los grandes grupos económicos nacionales aliados con fracciones del capital financiero internacional) y permitieron la implementación exitosa de sus estrategias de valorización financiera a lo largo de todos estos años.
- d. Estructura social: durante estos años (1976-2001/2002) se produjo una *reestructuración regresiva*, con notables pérdidas de ingresos y empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los sectores trabajadores, los grandes perdedores del modelo neoliberal. Simultáneamente, aumenta la concentración de la riqueza en el sector más rico, dando lugar a una estructura social cada vez más dualizada y fragmentada, siendo la desigualdad y la exclusión social las principales características de la sociedad neoliberal argentina de finales de siglo XX.
- e. Aspectos culturales: es necesario comprender que desde el punto de vista cultural, el proyecto neoliberal fue claramente “exitoso”. A través del manejo consciente y concentrado de los medios de comunicación masivos, se logró un significativo apoyo popular para llevar adelante las reformas neoliberales,¹⁵ así como una suerte de consenso “anti-estatal” y “pro-privado”, que fue mucho más allá del apoyo a las privatizaciones y se reflejó también, por ejemplo, en el extendido proceso de movimiento hacia las urbanizaciones privadas (*countries*, barrios cerrados, etcétera), protagonizado por ciertos sectores sociales medios y altos. Además, en el sentido común de la población calaron profundamente los “algo habrán hecho”, “por algo

¹⁵ Buena parte de “la gente” (simplificado en la “doña Rosa” de Bernardo Neustadt, el principal comunicador del neoliberalismo) fue convencida de la “urgente necesidad de privatizar las ineficientes y corruptas empresas públicas y dar lugar a las eficientes y competitivas empresas privadas”. Cabe recordar que las primeras privatizaciones de Menem fueron los canales 11 y 13 de televisión.

será”, “no te metás”, “hacé la tuya”, “la plata no se hace trabajando”, así como las fuertes tendencias hacia comportamientos y valores individualistas, frívolos, admiradores del éxito fácil, desconfiados de los proyectos colectivos, y con fuerte rechazo hacia la cultura popular de épocas anteriores.

- f. Contexto mundial: como ya fue dicho, el modelo neoliberal en la Argentina no se da en un vacío, sino que responde en buena medida a determinaciones del sistema capitalista mundial, que atraviesa una etapa de crisis y reestructuración desde inicios de los setenta, tendiente hacia la mayor apertura de los mercados nacionales y a la intensa interconexión de los procesos económicos y culturales a nivel internacional (la famosa “globalización”). Estas transformaciones tuvieron efectos negativos en casi todos los países, con graves pérdidas en la calidad de vida por parte de los sectores trabajadores y acentuados procesos de concentración económica en fracciones “ganadoras” del capital transnacional, aunque sin poder revertir –luego de tantos años– los problemas de valorización que llevaron a la crisis capitalista de los años setenta, lo cual se manifiesta aún en las periódicas crisis internacionales tras el estallido de sucesivas “burbujas especulativas”, cuyos impactos alcanzan prácticamente a todos los países del mundo.

ENTRE EL CAMBIO Y LA CONTINUIDAD: LOS PROYECTOS EN DISPUTA EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI

El período que se inicia luego de la profunda crisis de 2001-2002, presenta algunas continuidades con el modelo neoliberal, pero también cambios significativos. Si bien se trata de procesos complejos y dinámicos, sobre los que hay fuertes diferencias y disputas acerca de cómo interpretarlos y valorarlos, consideramos que es posible señalar con claridad algunas transformaciones en las políticas y sus consecuencias reales, que hacen a la continuidad o no del modelo neoliberal en la Argentina desde 2003 en adelante.

En esta última parte del texto, presentamos una síntesis de las principales políticas económicas impulsadas por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), analizándolas en clave de rupturas y continuidades con el modelo neoliberal, al que el proyecto político kirchnerista buscó explícitamente superar y constituir una alternativa. Para finalizar, señalamos los “cambios” en la política económica a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente (a fines de 2015), y en el proyecto de país que estas conllevan.

Sobre el contexto internacional en este período

En el comienzo del siglo XXI en el mundo se continuó profundizando el proceso de globalización, tanto en su aspecto económico (incremento de los intercambios

financieros y comerciales), como en su aspecto ideológico (que promueve la búsqueda del bienestar individual por sobre una mirada más colectiva, y que posiciona a las personas como consumidores más que como sujetos políticos o sociales).

En los primeros años de esta década, el mundo se encontraba en un proceso de fuerte incremento de la demanda de bienes, impulsado por un período de crecimiento económico mundial, traccionado en gran medida por el enorme crecimiento de la economía china. China, país con casi un tercio de la población mundial, se encuentra en pleno proceso de inserción en el funcionamiento de la economía capitalista, como proveedora de gran cantidad de bienes industriales (de distintos contenidos tecnológicos, pero producidos todos a muy bajo costo). De la misma manera, funciona como una fuerte demandante de insumos primarios, energía y alimentos –algunos de los cuales son provistos por nuestro país– lo que generó un período de alza del precio internacional de los insumos primarios.

En el año 2008 se desató una fuerte crisis internacional, provocada por la explosión de una burbuja de especulación financiera en Estados Unidos, que tiene desde entonces grandes impactos en la economía real: desaceleración del crecimiento económico mundial y caída del comercio internacional, con el consecuente descenso de los precios de los bienes que Argentina exporta.

Tanto el acelerado crecimiento de China, como las sucesivas crisis financieras, vienen cuestionando en alguna medida la supremacía económica de Estados Unidos, lo que se traduce en un mayor peso de otros bloques económicos, como la Unión Europea, los países asiáticos, o el bloque conformado por los nuevos países emergentes con fuerte influencia mundial: el BRIC (por Brasil, Rusia, India y China).

En América Latina se dio en este período un proceso particular en el que varios países sostuvieron, en conjunto, un cambio en la orientación de sus relaciones internacionales. Se planteó un alejamiento de los lineamientos de los organismos multilaterales (FMI, BM) impulsores del Consenso de Washington y del neoliberalismo a nivel mundial. En nuestro país, los gobiernos kirchneristas, en alianza con Brasil (Lula), Venezuela (Chávez) y Bolivia (Evo Morales) apostaron al fortalecimiento de la integración regional sudamericana (Mercosur y Unasur) y latinoamericana (CELAC). Desde esa plataforma regional, buscaron luego acercarse a las otras potencias emergentes (Rusia y China).

La política económica del kirchnerismo (2003-2015)

Luego de 5 años de una profunda depresión económica (1998-2002), los gobiernos kirchneristas tuvieron la clara voluntad de reorientar la política económica en función de lograr objetivos concretos en términos de recuperación del crecimiento de la producción, del consumo y del empleo.

Los resultados globales del período en términos de *crecimiento* fueron contundentes en ese sentido:

A partir del primer gobierno kirchnerista, en 2003, se inició una década de crecimiento que se constituyó en la expansión ininterrumpida más pronunciada de la historia argentina, en tanto el PBI aumentó a una tasa anual del 6,5% entre 2003-2013; superior incluso a la que se registró durante la segunda etapa de sustitución de importaciones que alcanzó entre 1964 y 1974 el 5,2% anual acumulativo. [...] El elevado crecimiento de la década analizada no solo fue el más alto históricamente de la Argentina, sino que también superó al que registraron las mayores economías latinoamericanas (Brasil y México) y solo se vio superada en el ámbito internacional por la que exhibió la República Popular China (CIFRA, 2015: 11-12).

Pero además de lo cuantitativo del crecimiento también hubo cambios en lo cualitativo, ya que fue diferente el tipo de estrategia y los sectores productivos que lo protagonizaron. El patrón de crecimiento fue diferente al de la década del noventa: en lugar de estar basado en los servicios, se apoyó en la producción de bienes, en especial industriales. En realidad, hubo notables aumentos del producto en todos los sectores productores de bienes, tanto los industrializados, como las materias primas, en particular las agrícolas. Sin embargo, el crecimiento a partir de 2003 no se explica por el aumento de las exportaciones de soja –como sugieren algunos relatos–, sino fundamentalmente por el aumento de la demanda interna; es decir, por la inversión y el consumo nacional que en este período representaron el 90% del total de la demanda agregada (Basualdo y otros, 2010). Entonces, si bien hubo un significativo aumento de la producción de bienes agrícolas en los primeros años del kirchnerismo, el patrón de crecimiento en estos años se apoyó básicamente en la producción de bienes industriales destinados al mercado interno, fortalecido por el aumento de la capacidad de consumo de la población trabajadora gracias a la recuperación del empleo y sostenido también por políticas públicas redistributivas.¹⁶

Este importante aumento de la producción industrial estuvo dado principalmente por el aumento del consumo y la inversión y fue acompañado por *políticas de protección* por parte del Estado. En los primeros años, mediante una protección cambiaria (un dólar alto que encarecía la producción importada) y desde 2011 a través de mayores restricciones administrativas a la entrada de productos importados que pudieran competir con la producción industrial nacional. Hubo también una mirada acerca de la necesidad de fortalecer y apoyar al sector industrial con políticas específicas, aunque –como veremos– sin avanzar en las medidas necesarias para buscar un cambio estructural. Se le otorgó creciente importancia al *desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas*, por considerarlas centrales para el desarrollo productivo del país. Se aumentó significativamente el presupuesto destinado al

¹⁶ Una descripción más amplia sobre la trayectoria del empleo y la distribución del ingreso en este período puede encontrarse en el texto de Álvarez, Fernández y Pereyra (2011), también publicado en este libro.

sistema científico nacional, lo cual permitió, por ejemplo, un notable incremento del plantel de investigadores financiados por el Conicet y la “repatriación” de más de 1300 científicos argentinos que estaban desarrollando investigaciones en el exterior. En esta misma línea, se pueden destacar también el crecimiento de la industria satelital nacional (fabricación y operación de los satélites Arsat 1 y 2).¹⁷

Como era previsible, una política de promoción y protección de la producción nacional, que benefició en especial al sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes), redundó en un significativo *aumento de los puestos de trabajo* (alrededor de 5 millones de nuevos empleos entre 2003 y 2015) y una notable *caída de la tasa de desempleo*. “Tras la crisis del neoliberalismo, cuando la tasa de desocupación trepó al 24,8% en 2002, se inició un sistemático proceso de descenso, ubicándose en 14,2% en 2005, 7,7% en 2010 y, a pesar de la desaceleración en su ritmo de reducción, alcanzó 7,3% en 2014” (RedLat, 2015). De manera simultánea, se produjo una *reducción del empleo no registrado*, que en 2004 superaba el 45% y descendió a valores en torno al 33% en 2015.¹⁸ Esta reducción del “trabajo en negro” resulta escasa y claramente insuficiente, pero rompe una tendencia de varias décadas de aumento en la precarización del empleo asalariado, tal como lo señalan Álvarez, Fernández y Pereyra (2011).

Estas mejoras en el empleo sirvieron para una *recuperación progresiva del salario y de las condiciones laborales de los sectores trabajadores*. En cuanto al salario real, en 2003 estaba en un nivel muy bajo, debido a los años de alto desempleo y la mega-devaluación sin ajuste salarial de 2002. A medida que se iba recuperando el empleo, se fue recuperando el poder adquisitivo de los salarios: entre 2004 y 2014 el incremento del salario real para los asalariados registrados fue del 37,5% (RedLat, 2015). En buena medida, ello ocurrió porque se reinstalaron las negociaciones paritarias entre sindicatos y empresarios (que casi habían desaparecido en la década del noventa), y porque desde 2004 se conformó el Consejo del Salario que determinó anualmente el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, que sirve de referencia para el conjunto de la economía. Junto con estas mejoras, también

¹⁷ “El gobierno pareció tomar creciente conciencia de la importancia del desarrollo científico y técnico, inyectando recursos en el sistema científico y universitario y apoyando, entre otros, a emprendimientos como INVAP (empresa con altas capacidades tecnológicas) y el desarrollo satelital y aeroespacial. Sin embargo, este positivo impulso careció de vínculos estrechos con el sector productivo. Esto se debe tanto a que el Estado no integró en su interior el esfuerzo industrializador con los recursos científico-tecnológicos, como a la tradicional desidia del sector privado en cuanto a la inversión y apuesta por el conocimiento local” (Aronskind, 2015: 26).

¹⁸ “El cambio que verdaderamente se observa refiere a la tasa de no registro del vínculo laboral. Así, mientras que en 2005 el 70% de asalariados privados se dividían entre un 38,5% registrado y 30,8% no registrado, hacia 2010 esos niveles fueron de 44,5% y 24,5%, que se mantienen relativamente sin cambios hasta 2014. De modo complementario, puede observarse que, considerando como universo el total de asalariados, la tasa de no registro presentaba un nivel de 43% en 2005, descendiendo a 34,7% en 2010 y 33,2% en 2014” (RedLat, 2015: 24).

fueron aumentando la estabilidad y otras condiciones de los contratos de trabajo y se firmaron una gran cantidad de nuevos convenios colectivos que aumentaron la protección de los trabajadores frente a sus empleadores, recuperando uno de los principios del peronismo clásico.

Un elemento central de la política económica kirchnerista (y otro aspecto en común con la política económica del peronismo clásico) fue su búsqueda explícita de *aumentar y sostener el consumo* en todos los sectores sociales. Inicialmente, a partir del aumento del empleo y de los salarios reales, los aumentos del poder adquisitivo se reflejaron en altas tasas de crecimiento del consumo, que se convirtió en el “motor del crecimiento” en este esquema económico. Luego, y sobre todo cuando se sintieron con fuerza los efectos de la gran crisis económica mundial de 2008, fue reforzada la capacidad de consumo popular mediante políticas de estímulo al consumo y al empleo¹⁹ y de redistribución y protección social.

En este sentido, además de la intervención estatal en la promoción de las negociaciones paritarias recién mencionadas, fueron importantes las políticas públicas que apuntaron a *aumentar los ingresos de los sectores sociales más vulnerables*. Por un lado, las moratorias previsionales permitieron acceder a la jubilación a casi la totalidad de los adultos mayores de 65 años, más allá de que no hayan podido completar sus aportes por no haber tenido empleo o haber trabajado en negro durante su vida laboral (de hecho, sirvieron también para la jubilación y el reconocimiento estatal del trabajo de las amas de casa). Por otro lado, la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) significó una ampliación significativa (entre un 30 y un 50%) de los ingresos de las familias con hijos de madres/padres desocupados o con empleos informales. Según Dávalos (2013), la AUH mejoró las condiciones de vida de estas familias al permitirles acceder a una mejor alimentación, y a otros bienes de consumo y mejoras en el hogar por el hecho de contar con un ingreso adicional, seguro y estable que les permite planificar y comprar en cuotas, lo que impulsa adicionalmente la demanda de consumo en general. Para financiar ambas políticas fue central la reestatización en el 2008 del sistema previsional y de las AFP, que desde 1994 cobraban los aportes de los trabajadores, y en lugar de orientarlos hacia el bienestar social, los derivaban hacia la especulación financiera.

En conjunto, las distintas medidas que se implementaron colaboraron para lograr una *reducción en los niveles de desigualdad* históricamente elevados que había

¹⁹ Ejemplos de estas políticas de estímulo al consumo y al empleo son los programas Ahora 12, orientado a favorecer el consumo de productos de fabricación nacional, a través de su financiación en 12 cuotas sin interés, y el Pro.Cre.Ar (Programa Crédito Argentino), para el financiamiento de vivienda para sectores medios, que buscaba la reactivación del sector de la construcción, fuerte demandante de empleo. Hubo durante 2009 programas específicos de financiamiento a la compra de electrodomésticos y automóviles, para sostener la demanda de esos sectores. Se fortaleció el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), a través del cual el Estado subsidiaba parte del salario de los trabajadores en empresas con situaciones de crisis.

dejado la experiencia neoliberal y su crisis. Por un lado, mejoró la distribución funcional del ingreso (es decir, cómo se distribuye el ingreso nacional entre el conjunto de los trabajadores y las empresas), ya que aumentó en forma significativa la “porción de la torta” de los trabajadores (se amplió desde poco más de una cuarta parte a casi la mitad).²⁰ Por otra parte, la distribución personal del ingreso (entre todas las personas y hogares del país) también muestra una reducción de la desigualdad al ampliarse el ingreso de los más pobres en mayor proporción que el ingreso de los más ricos (en 2004, el 10% más rico ganaba 32 veces más que el 10% más pobre; en 2014 esa brecha se redujo a 17 veces).²¹ A pesar de estas mejoras, lejos se está todavía de los mayores niveles de equidad que se lograron en nuestro país en las décadas del modelo de industrialización sustitutiva.

Pueden mencionarse otras políticas de inclusión que, más allá de las mejoras en los ingresos, permitieron a los sectores populares acceder a bienes (materiales y culturales) a los que antes no tenían acceso. En el plano de la educación y la cultura, también se aumentaron los presupuestos y se puso énfasis en el acceso masivo y gratuito. El sistema de universidades públicas creció fuertemente en cantidad de instituciones (24 nuevas entre 2003 y 2015) y de estudiantes que accedieron a la educación superior. El desarrollo de la feria “Tecnópolis” (con más de 5 millones de visitantes) fue una forma de acercar la ciencia y la tecnología al gran público. El programa Conectar Igualdad (que incluyó la entrega de 5 millones *netbooks* a estudiantes de escuelas públicas secundarias), fortaleció con acceso a bienes tecnológicos la política de aumentar la cantidad de niños y adolescentes que van a la escuela; lo que se logró especialmente a partir de la AUH. Por otra parte, las propuestas audiovisuales de Canal Encuentro, Paka-Paka e INCAA TV en el marco del programa de Televisión Digital Abierta (TDA), así como la apertura del Centro Cultural Kirchner, fueron parte de *políticas educativas y culturales* que elevaron el piso de calidad de la oferta pública y gratuita en estas áreas.

Un problema que reapareció en este contexto fue el de la *inflación*, que si bien durante los gobiernos kirchneristas se mantuvo en niveles históricamente

²⁰ Son varias las estimaciones que evidencian esta tendencia (entre ellas las del CEPED, las de CIFRA y las del propio INDEC). El peso de la masa salarial sobre el producto total (a precios básicos) pasó del 32% en 2005 al 41,5% en 2010 y el 51,4% en 2013. Una medición alternativa considera que la participación de los salarios respecto del PBI (a precios de mercado) evoluciona desde 28% en 2005 a 36% en 2010 y a 43,7% en 2013 (RedLat, 2015).

²¹ “En el periodo de análisis se evidenció un importante proceso de mejora en la distribución del ingreso, independientemente de la medida que se tome (Gini o brecha) y del ingreso que se considere”. El coeficiente de Gini correspondiente al ingreso per cápita familiar, que en 2002 se ubicaba en torno a 0,5, en 2005 mostraba un nivel de 0,48, el cual se redujo a 0,44 en 2010 y a 0,41 en 2014. En lo que corresponde a la brecha de ingresos entre el decil más rico y más pobre, la correspondiente al ingreso per cápita del hogar, en los años finales de la convertibilidad superaba las 30 veces, llegando a 40 veces en momentos de su salida, en 2004 era de 31,7 para retroceder a 21 veces en 2010 y 17,1 en 2014 (RedLat, 2015: 14).

moderados (el promedio de inflación anual entre 2008 y 2015 rondó el 25%, con un pico de 38% en el 2014), lo cierto es que se trató de una dificultad que no logró resolverse. Con respecto a sus causas y posibles soluciones, en estos años en nuestro país ha existido una fuerte disputa conceptual y política entre dos perspectivas. Por un lado, desde los medios de comunicación se ha logrado instalar la idea de que la inflación era “el principal problema de la economía argentina”, y por lo tanto, que la política económica debería estar orientada en primer término a atacar ese problema. Esta perspectiva, basada en la teoría económica ortodoxa, plantea que los aumentos de precios se deben a un “recalentamiento” (incremento excesivo) de la demanda, agravado por aumentos salariales demasiado altos, y un desmedido gasto estatal y emisión monetaria. Ante este diagnóstico, la receta ortodoxa indica “enfriar” la demanda (reducirla), contener los aumentos de sueldos, recortar el gasto estatal y aumentar las tasas de interés, clásicas medidas de ajuste que conducen a frenar la inflación, pero a costa de una caída en la producción y en el empleo. En cambio, la perspectiva en la que se basaron los gobiernos kirchneristas plantea que la inflación es generada y reproducida por la puja distributiva en la que dominan grandes empresas productoras o distribuidoras. Estas empresas operan en mercados oligopólicos, en los que son pocas empresas las que ofrecen un tipo de producto, por lo que en lugar de competir entre ellas bajando los precios suelen llegar a “acuerdos” para aumentarlos. De esta manera, pueden subir los precios en mayor medida de lo que suben sus costos, de modo de incrementar sus ganancias. Por ello, la política kirchnerista buscó reducir la inflación controlando y regulando el proceso de formación de precios y a las grandes empresas.²² A eso apuntaron políticas como “Precios Cuidados” (que fijó precios de referencia en 500 productos de la canasta de consumo familiar, a través de acuerdos con empresas), o el programa de subsidios a los servicios públicos y al transporte en grandes áreas urbanas. Ahora bien, estas políticas no fueron suficientes para resolver el problema, y adicionalmente la devaluación del peso por la escasez de dólares fue realimentando la subida de precios (en enero de 2014 se dio una fuerte devaluación, que se sumó a pequeñas pérdidas del valor del peso acumuladas hasta ese momento).

Otro cambio notable de los gobiernos kirchneristas en comparación con los gobiernos de las décadas anteriores fue la búsqueda de *recuperar el papel central del Estado en la economía*. Desde 2003 en adelante se generaron numerosas acciones (y fuertes disputas) en relación con el aumento de la capacidad del Estado para regular el proceso económico y a sus actores, con un grado creciente de autonomía relativa frente a los poderes económicos nacionales e internacionales.

²² No se considera una política antiinflacionaria la intervención del INDEC y la manipulación del índice de medición de precios por parte del gobierno kirchnerista desde 2007. De hecho, esta acción atentó contra la credibilidad de las estadísticas oficiales y resultó por ello un obstáculo para la aplicación de políticas efectivas contra la inflación.

El Estado nacional ganó autonomía relativa en relación con el período previo sobre la base de la política económica desplegada: recuperó márgenes de acción en la política monetaria, la cambiaria, la gestión de la deuda pública y de las reservas de divisas y la regulación de los sectores de infraestructura, que le permitieron enfrentar la crisis [internacional] con mayor fortaleza (Forcinito y Tolón Estarellés, 2008: 104).

Otras políticas que pueden ejemplificar esta tendencia pueden ser la reestatización –si bien desordenada o tardía– de una buena parte de las empresas públicas privatizadas en los años noventa: Aerolíneas Argentinas (2008), YPF (2012), los Ferrocarriles (2015), entre varias otras.

En sintonía con los intentos de mayor intervención y regulación de los mercados, los gobiernos kirchneristas asumieron en general un discurso “anti-liberal” y “pro-estado”, en el marco de una “batalla cultural” más amplia, en la que también se incluyó su disputa contra los grupos económicos que detentan los medios de comunicación dominantes.

El discurso impugnador de las verdades neoliberales que adoptó el gobierno, tanto en el frente interno como en las relaciones internacionales, fue un notable aporte al debate colectivo, aunque de ninguna manera se haya logrado una modificación plena del sentido común neoliberal acuñado en las décadas previas (Aronskind, 2015: 31).

La estrategia de alejamiento y de ampliación de la autonomía del gobierno nacional frente a de los organismos internacionales fue una base fundamental para el desarrollo de la política económica kirchnerista. En particular, es preciso señalar las modificaciones en la política de endeudamiento externo, que permitieron posicionarse con autonomía para definir la política monetaria y fiscal.

Luego del default (cesación de pagos) de la deuda externa pública al que se llegó en el marco de la crisis de fines de 2001, los gobiernos kirchneristas avanzaron en un sentido diferente. En primer lugar, cancelaron la deuda con el FMI en 2005, para no seguir sometiendo a su aprobación o control las decisiones de política económica. En segundo lugar, se renegoció la deuda en default con el resto de los acreedores, a los que se les canjeó (en 2005 y 2010) la deuda vieja por nueva deuda con un monto significativo de “quita”; es decir que se logró reducir el monto de deuda externa y se retomaron los pagos para la enorme mayoría (el 93%) de los acreedores. En tercer lugar, se fueron pagando los vencimientos de la deuda sin asumir nuevos créditos, lo que significó un fuerte *desendeudamiento* de la economía argentina. Como resultado global de estas políticas se redujo notablemente “el peso de la deuda pública” sobre la economía argentina, que pasó de representar el 146% del PBI en 2002 a representar el 40% en 2013 (CIFRA, 2015).

Con base en el conjunto de políticas y resultados económicos que han sido aquí presentados, varios autores (Narodowski y Panigo, 2010; Fiorito, 2011, entre otros) consideran que durante estos gobiernos se configuró un nuevo modelo de desarrollo superador del modelo neoliberal, al que usualmente se ha denominado “modelo de crecimiento con inclusión”. Desde una perspectiva opuesta, algunos autores denominan a este proyecto como “neodesarrollista”, señalando las limitaciones en las transformaciones llevadas a cabo por los gobiernos kirchneristas, y enfatizando en la continuidad con los rasgos centrales del modelo neoliberal:

... el nuevo proyecto se apoyó en las bases estructurales construidas a través del neoliberalismo y resultantes del éxito del proceso de reestructuración regresiva. Estas bases estructurales tienen dos pilares fundamentales. Primero, la precarización extensiva de la fuerza de trabajo y la consecuente superexplotación de la misma. Segundo, el extractivismo (saqueo de las riquezas naturales) como fuente de renta extraordinaria y proveedor de moneda mundial (divisas) (Féliz, 2015).

Desde nuestra perspectiva, son evidentes los cambios producidos en la orientación de numerosas políticas económicas y sus logros, recién descriptos. Sin embargo, consideramos que en este período no fue posible consolidar un modelo de desarrollo alternativo al neoliberal, sobre todo por las dificultades en avanzar en un cambio estructural de la economía.

Tal vez el problema más profundo y estructural (y el menos visible para el común de la gente) que el kirchnerismo no logró resolver es el de la “*restricción externa*”: se trata de la *escasez de dólares* necesarios para hacer frente al pago de las importaciones y de la deuda externa, y a la demanda de esta moneda por parte de las empresas y de sectores de la población con capacidad de ahorro. Estos dólares pueden ser provistos por las exportaciones, por las inversiones extranjeras o por nuevo endeudamiento. Esta restricción externa (que afecta a la economía argentina cada vez que se avanza en el proceso de industrialización y que en el período de la ISI provocaba la dinámica del “*stop and go*” antes explicada) se agravó en los últimos años del gobierno kirchnerista por un conjunto de factores: la caída de los precios de las exportaciones (de bienes primarios) por disminución de la demanda ante la crisis de la economía mundial que se inició en 2008; la dependencia estructural que tiene la industria argentina respecto de la importación de maquinaria e insumos; el déficit energético (la necesidad de importar energía de otros países); los pagos de deuda externa de otros períodos (a pesar del desendeudamiento de los últimos años); y el aumento de la demanda especulativa de dólares por parte de empresas y de personas para “fugarlos” al exterior. El gobierno intentó enfrenar esta restricción externa a través de un conjunto de medidas²³ que buscaban frenar el drenaje de

²³ El gobierno cerró conflictos relacionados con la deuda externa que aún estaban pendientes

dólares (restricciones a las importaciones y a la compra de dólares, el denominado “cepo cambiario”), pero que no resolvieron sus causas más estructurales.

La restricción externa es la manifestación de un conjunto de *problemas de carácter estructural y acumulativo* de la economía argentina: una industria dependiente de los insumos y tecnologías importadas, que en estos años de crecimiento no sumó capacidades de sustituir esos insumos con producción nacional; un empresariado nacional cortoplacista y rentista, que no reinvierte la mayor parte de sus ganancias, sino que las fuga al exterior y especula con la valorización financiera que le generan las devaluaciones; una cúpula empresarial en su mayoría extranjera, cuyas estrategias de acumulación no están orientadas en una dirección compatible con el desarrollo nacional (no investiga ni invierte en el país, remite sus ganancias a los países centrales, se opone a las políticas de regulación y control por parte del gobierno, etcétera). Esta situación estructural le da un poder enorme a los únicos actores capaces de proveer los dólares que escasean: el complejo agroexportador (terratenientes y grandes multinacionales del comercio de granos) y las grandes empresas del sector de la minería. Los gobiernos kirchneristas tuvieron en principio una política de “dejar hacer” a estos dos sectores, y aprovecharon los recursos que generaban.²⁴

A lo largo de estos 12 años no se impulsó de manera consistente un cambio estructural del sector productivo: una diversificación industrial que ampliara la producción en sectores de mayor valor agregado y la capacidad de tener (un poco más de) autonomía tecnológica. Esto hubiera iniciado un camino hacia una

(con el Club de París y con la empresa española Repsol por la expropiación de YPF), con el objetivo de volver a acceder a nuevos créditos externos en dólares, lo cual resultaría un alivio en el corto plazo. Esa posibilidad fue frenada por un fallo del juez Griesa de Nueva York (Estados Unidos) a favor de los Fondos Buitres: un grupo de especuladores financieros que compraron títulos de deuda argentina en default (que habían dejado de pagarse en diciembre de 2001), y que buscaron obtener por vía judicial ganancias de hasta un 1600% (por ejemplo, el Fondo de Paul Singer compró bonos en default por casi 50 millones de dólares y el fallo del juez Griesa exigía pagarle casi 800 millones, 16 veces más). El gobierno kirchnerista mantuvo un firme rechazo frente a esta demanda e incluso extendió esta postura a las Naciones Unidas, en donde obtuvo el apoyo de la gran mayoría de los países del mundo. En los primeros meses del gobierno de Macri se concretó el pago a los Fondos Buitres, para lo cual el nuevo gobierno tomó nueva deuda externa a pagarse en los próximos años.

²⁴ En 2008 se planteó un muy fuerte conflicto con el sector agrícola (“el campo”), cuando el gobierno quiso incrementar los recursos que podría obtener por el cobro de impuestos a las exportaciones (“retenciones”) de granos que se vendían en el mercado internacional a precios excepcionalmente altos. “El campo” respondió con toda la fuerza de su clase y sumó además el apoyo de algunas de las organizaciones de los productores y trabajadores agrícolas, así como el respaldo mayoritario de la sociedad, impulsada por los medios de comunicación. Este conflicto fue un revés muy fuerte en el primer gobierno de Cristina Fernández, que implicó que su frente político se fragmentara y perdiera las elecciones legislativas en 2009.

competitividad industrial endógena basada en el aumento de productividad de los factores internos.

Una de las características estructurales de la industria argentina es la de ser un sector principalmente volcado al mercado interno, deficitario en términos de divisas. Los experimentos neoliberales agudizaron este problema al eliminar sectores y eslabones industriales, generando mayor necesidad de divisas para sostener la actividad. El kirchnerismo recibió esta industria desintegrada y sin grandes dotes competitivas, y básicamente impulsó su crecimiento, pero sin contar con una clara estrategia de reconstrucción que generara una sustitución de importaciones competitiva o emprendimientos exportadores netos. Por lo tanto, se expandió una industria con un fuerte desequilibrio externo estructural (Aronskind, 2015: 25).

Este cambio estructural de ninguna manera es sencillo ni se podría lograr un corto plazo, pero lo cierto es que no llegó a impulsarse claramente desde las políticas públicas entre el 2003 y el 2015. También requiere de un conjunto de actores sociales y económicos dispuestos a asumir este desafío de transformación a largo plazo. Y la “burguesía nacional” (a la que el kirchnerismo apostó durante un buen tiempo de su gobierno) no parece ser un actor dispuesto a ello. El Estado debería liderar ese proceso, lo cual implica desarrollar una capacidad de planificar, implementar y controlar un conjunto de acciones y actores en una perspectiva de largo plazo. Y el Estado y los distintos gobiernos hasta el momento no han mostrado tener esa capacidad.

Probablemente, la debilidad kirchnerista haya consistido en que: sin terminar de construir un modelo alternativo ha debido enfrentar el embate del capital concentrado local y externo; sin profundizar el cambio estructural ni arrebatarle a las corporaciones el control sobre herramientas claves de la economía debió conducir un proceso económico con sentido inclusivo; quiso promover una economía productiva conviviendo con las reformas neoliberales que promovían las peores prácticas rentistas; sin producir una transformación fiscal progresiva debió solventar un creciente gasto público orientado fuertemente a potenciar el mercado interno y a mejorar la distribución del ingreso; sin contar con una mayoría social activa debió impulsar acciones de fuerte contenido democratizante (Aronskind, 2015: 31)

El gobierno de Macri (desde 2016) y la vigencia del modelo neoliberal

En diciembre de 2015 asumió el gobierno el empresario Mauricio Macri, quien ganó las elecciones en alianza con el radicalismo. El gobierno de Macri llevó a cabo un nuevo giro en la orientación predominante de las políticas económicas argentinas. Teniendo en cuenta que se trata de un proceso en desarrollo, presentaremos bre-

vemente las principales ideas que orientan la nueva política económica y algunos hechos del primer año de gestión macrista.

Adoptando un discurso liberal (similar al de las gestiones de la última dictadura y de la década de los noventa), el nuevo gobierno levantó las regulaciones (“se liberaron los cepos”) de los mercados cambiario y comercial, lo que generó una fuerte devaluación del peso (el dólar pasó de 10 a 16 pesos) y un aumento significativo de las importaciones.

A pesar de que fue declarado como el principal problema económico a resolver, la inflación aumentó fuertemente en 2016, superando el 40% interanual, la inflación anual más alta desde la salida de la convertibilidad. Los precios se aceleraron como resultado de la devaluación y de un fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos y los insumos para la producción (luz, gas, agua, transportes, combustibles, etcétera), debido a la disminución de los subsidios que el Estado destinaba a estos sectores, y a la desregulación del funcionamiento de estos mercados.

El nuevo gobierno, cuyo posicionamiento discursivo caracterizó de forma dramática el estado de la economía, señaló como problema central la inflación, y situó al déficit fiscal como el aspecto esencial a intervenir, sosteniendo que un colapso era inminente. Sin embargo, optó inicialmente por tomar medidas distributivas que contradecían tanto el objetivo de contener la inflación como el de lograr el equilibrio fiscal. Se liberó el mercado de cambios y se produjo una devaluación del orden de 60 por ciento, que tuvo repercusión inmediata en los precios. Ello, conjuntamente con la supresión de tributos al comercio exterior, contribuyó tanto a acelerar el proceso inflacionario como al desfinanciamiento fiscal (Plan Fénix, 2016).

El gobierno de Macri cuestionó la estrategia de crecimiento basada en el aumento del consumo de los trabajadores que llevó adelante el kirchnerismo, tildándola de “ilusoria e insostenible”. En su reemplazo, sostuvo que el motor del crecimiento económico serían las inversiones de las empresas privadas (en particular las extranjeras), para lo cual se impulsaron medidas favorables a los sectores capitalistas. Sin embargo, la anunciada “lluvia de inversiones” no se produjo en 2016.

La mera transferencia de recursos hacia sectores más concentrados no es en sí misma garantía de inversión, por lo menos en nuestro país. Puede sí llevar a la fuga de capitales. Así lo atestigua la abundante salida que ya se ha registrado este año, viabilizada por la liberalización del mercado de cambios (Plan Fénix, 2016).

El conjunto de medidas adoptadas generó fuertes caídas en el consumo, la producción, y el empleo: se redujo notablemente el consumo, con caídas del orden del 8% en comercios, 15% en supermercados y 21% en *shoppings*; se produjo una fuerte retracción de la producción, siendo la industria y la construcción los sectores con

mayores caídas, lo que explica que haya habido más de 100.000 despidos en empresas privadas y gran cantidad de suspensiones o reducciones horarias y salariales. Las negociaciones paritarias se realizaron, pero en todos los gremios se acordaron aumentos menores a la inflación, por lo cual se estima que la caída del salario real promedio para el 2016 está en torno al 12% (CIFRA, 2016).

La política económica de la Alianza Cambiemos ha impulsado el regreso de las altas tasas de interés, la especulación financiera, la fuga de capitales y el acelerado endeudamiento externo. En los primeros meses del gobierno, la tasa de interés subió fuertemente, con la supuesta intención de contener la suba del dólar y de los precios, pero ello provocó un gran aumento de las colocaciones financieras especulativas. A su vez, con la idea de “volver al mundo” y consolidar la confianza de los sectores capitalistas, se realizaron notables gestos de acercamiento con los países centrales (Estados Unidos, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia) y de alejamiento de los países del Mercosur. En ese marco, se acordó con rapidez el pago de la demanda de los fondos buitres, a partir del cual se inició un nuevo ciclo de fuerte endeudamiento externo, que en el primer año se acerca a 50 mil millones de dólares de nueva deuda.

Advertimos el riesgo adicional que supone la elevada velocidad de endeudamiento público [...] que no está compensada hasta el presente por ninguna estrategia productiva o exportadora consistente. Estamos, entonces, frente a una suerte de explosión del endeudamiento externo, que apunta simultáneamente a solventar un quebranto fiscal en términos corrientes y un saldo negativo de las cuentas externas, que no creemos que se revierta en los próximos años (Plan Fénix, 2016).

Una particularidad que tuvo el armado de la estructura del Estado para esta gestión, es lo que se ha llamado “ceocracia”: los cargos de funcionarios públicos son ocupados por ex gerentes/ejecutivos (CEO, por la sigla en inglés de Chief Executive Officer) de grandes empresas, que pasan a ocupar un cargo estatal y, en muchos casos, a regular a las propias empresas para las que trabajaban anteriormente.²⁵ Si bien no es la primera vez que ex gerentes ocupan cargos públicos, en el marco de un gobierno liderado por un empresario existe un riesgo mayor de trasladar la lógica gerencial-privada y anti-estatal dentro de la administración pública, así como de mantener

²⁵ Un ejemplo notable es el ex CEO de la multinacional Shell, Juan José Aranguren, que pasó ser ministro de Energía. Otras empresas de las que provienen funcionarios son: Techint, Socma (Macri), LAN, JP Morgan, HSBC, Axion, La Nación, Newsan, Pan American Energy, Deutsche Bank, Farmacity, ICBC y Consultatio. Según un estudio de la Universidad de San Martín coordinado por Ana Castellani, Paula Canelo y Mariana Heredia, citado por Lukin (2016): ... “tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el Gobierno de Mauricio Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Son 114 ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados del país que desembarcaron en algunos de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyen la nueva estructura del Estado nacional”.

lealtades con las empresas a las que pertenecieron, en lugar de controlarlas en función del bienestar de la sociedad.

Para cerrar este análisis, decíamos antes que los gobiernos kirchneristas no habían logrado consolidar un cambio de modelo al no resolver ciertos problemas estructurales de la economía argentina. El gobierno asumido en diciembre de 2015 lejos de “mantener lo que se hizo bien” y avanzar en la resolución de los problemas pendientes, está llevando adelante una política de retorno a los lineamientos del neoliberalismo, un nuevo cambio de paso en este rocanrol argentino.

Vivimos tiempos de fuerte disputa política y alianzas intersectoriales que determinarán el futuro del desarrollo argentino, que se juega tanto en las elecciones, como en la opinión pública y en la acción colectiva. Por esto, quisimos ofrecer herramientas y dejar abierta la puerta para que sean nuestros lectores (estudiantes universitarios) quienes sigan realizando sus propios análisis sobre la economía argentina. Esperamos haber contribuido a esa tarea aportando un esquema analítico sobre los modelos de desarrollo que pueda ser apropiado críticamente por ellos y los ayude a formular argumentos propios.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, Mariana; Fernández, Ana Laura y Pereyra, Francisca (2012). *El mercado de trabajo en la post-convertibilidad (2002-2010): avances y desafíos pendientes*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Aronskind, Ricardo (2003). “El desarrollo del país posible”. En James, Daniel (ed.), *Nueva Historia argentina*, pp. 63-116, t. IX. Buenos Aires: Sudamericana.
- (2008). *Controversias y debates en el pensamiento económico argentino*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Biblioteca Nacional.
- (2015). “Intuiciones y confrontaciones. Para pensar la política económica kirchnerista”. *Márgenes. Revista de Economía Política*, n° 1.
- Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel (1998). *El nuevo poder económico*. Buenos Aires; Hyspamérica.
- Azpiazu, Daniel y Nochteff, Hugo (1991). *El desarrollo ausente: Subdesarrollo y hegemonía neoconservadora. ¿Veinte años no es nada?* Buenos Aires: FLACSO-Tesis-Norma.
- Basualdo, Eduardo (2006). “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas. De la sustitución de importaciones a la valorización financiera”. En Basualdo, Eduardo y Arceo, Enrique (comps.), *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. Buenos Aires: CLACSO.

- Basualdo, Eduardo; Arceo, Nicolás; González, Mariana y Mendizábal, Nuria (2010). *La economía argentina de la posconvertibilidad en tiempos de crisis mundial*. Buenos Aires: CIFRA-Cara o Ceca.
- CENDA (2010). *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La economía argentina en el período 2002-2010*. Buenos Aires: Cara o Ceca.
- CIFRA (2015). “La naturaleza política y la trayectoria económica de los gobiernos kirchneristas”. Documento de trabajo n° 14. Disponible en www.centrocifra.org.ar
- (2016). “Informe de coyuntura n° 21”, noviembre. Disponible en www.centrocifra.org.ar
- Feliz, Mariano (2015). “¿Neodesarrollismo a la deriva en la Argentina? Hegemonía, proyecto de desarrollo y crisis transicional”. *Márgenes. Revista de Economía Política*, n° 1.
- Ferrer, Aldo (1995). *La economía argentina*. Buenos Aires Fondo de Cultura Económica, 19° edición.
- Fiorito, Alejandro (2011). “Convertibilidad y después: un cambio de modelo y de teoría económica”. En Robba, Alejandro y Frascina, Santiago, *Los dos modelos económicos en disputa*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Moreno-Prometeo.
- Forcinito, Karina y Tolón Estarelles, Gaspar (2008). *Reestructuración neoliberal y después... 1983-2008: 25 años de economía argentina*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Biblioteca Nacional.
- Lukin, Tomás (2016). “Nada queda al margen del poder de los CEO”. Disponible en www.rambltamble.blogspot.com.ar/2016/10/gps-sobre-los-funcionarios-de-cambiamos.html. Fecha de consulta: 20/12/2016.
- Narodowski, Patricio y Panigo, Demian (2010). “El nuevo modelo de desarrollo nacional y su impacto en la Provincia de Buenos Aires”. *Cuadernos de Economía*, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
- Neffa, Julio César (1998). *Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en la Argentina*. Buenos Aires: Eudeba-CEIL-PIETTE.
- Plan Fénix (2016). “Voz de alerta”, *Página 12*, domingo 13 de noviembre de 2016.
- RedLat (2015). “Medición de indicadores de trabajo decente”. Proyecto RedLat-DGBBW. Informe Argentina 2015. Buenos Aires: CIFRA - CEFS.
- Rofman, Alejandro; Aronskind, Ricardo; Kulfas, Matías y Wainer, Valeria (2000). *Economía. Las ideas y los grandes procesos económicos en el tiempo: la economía argentina contemporánea*. Buenos Aires: Santillana.
- Sabato, Jorge y Schvarzer, Jorge (1988). “Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia”, en Sabato, Jorge, *La clase*

dominante en la Argentina moderna. Formación y características, pp. 245-280. Buenos Aires: CISEA.

Schorr, Martín (2011). "Más allá del dólar alto". *Le Monde Diplomatique*, edición Cono Sur, septiembre.

Schvarzer, Jorge (1998). *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000*. Buenos Aires: A-Z Editora.

LA ARGENTINA DEL PROCESO

UN TEXTO INTRODUCTORIO A LA ETAPA 1975-1983*

César Mónaco y Diego Benítez

*El Cono Sur es, hoy, el ámbito de las monarquías fundadoras. Nuestro ámbito.
Carta Política, n° 31, mayo de 1976*

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón –*Isabel*– fue depuesto por un golpe de Estado. Luego de un período democrático de casi tres años, los militares avanzaron, nuevamente, contra un régimen constitucional, tomaron el poder por la fuerza e implementaron una feroz y sangrienta dictadura que provocó efectos profundos y permanentes en el país.

Durante sus últimos meses, avasallado por la dinámica misma de una crisis múltiple, el gobierno peronista estuvo inmerso en un proceso precipitado de desgaste y deslegitimación, que se manifestó en un profundo descontento social y en la constante amenaza conspirativa de los militares. A medida que los rumores avanzaban, el apoyo de la sociedad hacia el gobierno disminuía y las chances a una salida institucional se agotaban. El país se encontraba sumergido en una crisis económica de suma gravedad, expresada a través de una inflación galopante. En consonancia, se profundizaba una significativa crisis social, ocasionada por el alto grado de descontento de amplios sectores de la sociedad que se manifestaban a través de protestas y movilizaciones. A esto se sumaba un factor general: una crisis aguda del sistema político que afectaba directamente a los partidos. Estos eran vistos como actores incapaces de brindar una solución al caos, lo cual provocaba, de forma proporcional, un importante descrédito en el sistema democrático. Existía, también, un superlativo grado de violencia política, vinculada tanto a las luchas intestinas dentro del mismo peronismo, cuanto a la acción de organizaciones armadas de izquierda que se enfrentaban a las fuerzas de represión estatal y paraestatal. El proceso de radicalización de grupos políticos, iniciado a finales de

* Versión modificada, corregida y ampliada del texto publicado originalmente bajo el título, “La dictadura militar, 1976-1983”, en Luzzi, Mariana (coord.) (2012). *Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea, 1976-2010*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

los años sesenta, continuaba expresando su lado más extremo en la acción armada, considerada como el estadio superior de la acción política tradicional. Y aunque en el último año del gobierno peronista estos se encontraban en franca declinación, mantenían cierto protagonismo en la escena pública que los militares resaltaban con interés. Las organizaciones más notorias fueron: Montoneros, proveniente de un sector del peronismo de izquierda; y el guevarista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fracción armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

A su vez, el contexto internacional no era precisamente una expresión de buenos augurios. El primer lustro de los años setenta venía marcado por la clausura de un excepcional período expansivo de la economía mundial –en especial en el mundo capitalista desarrollado– que, iniciado durante la posguerra de los años cincuenta, evidenciaba su final por medio de una considerable desaceleración de los índices de crecimiento. Finalizada la etapa de auge, el sistema capitalista comenzaba a transitar su reestructuración, y la mejor punta de lanza sería el neoliberalismo. En el plano político, el subcontinente latinoamericano evidenciaba un claro desplazamiento de gobiernos democráticos por regímenes de facto. El mapa político de América Latina y el Caribe, hacia 1976, se encontraba signado en gran parte de su territorio por dictaduras militares.¹ Pero antes de continuar, vale la pena remarcar algunos aspectos de la etapa previa al golpe del 24 de marzo.

SOBRE EL DEPUESTO GOBIERNO PERONISTA (1973-1976)²

En mayo de 1973, luego de casi dos décadas de proscripciones, resistencias y fórmulas inconducentes de normalización del sistema político partidario, el peronismo había retornado al poder.³ Resulta dificultoso resumir en pocas líneas los aspectos centrales de lo que terminó siendo esta experiencia, que finalizó en marzo de 1976. Algunos puntos han sido introducidos antes. No obstante, una serie de consideraciones puede colaborar en ordenar algo mejor aquellos años.⁴

La primera de ellas consiste en entender que la etapa abierta con el retorno de la democracia no puede desligarse del proceso de radicalización política presente

¹ Las había en: Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador, Haití, Guatemala, y Granada. En buena medida en República Dominicana y Honduras, y con una fachada civil en Colombia.

² Agradecemos los comentarios de Jorge Cernadas y Mariana Luzzi sobre este apartado.

³ La vuelta a la conducción del gobierno nacional fue a través de Héctor Cámpora, ya que el propio Juan D. Perón había quedado fuera del juego electoral por decisión del gobierno saliente, aunque meses más tarde y ante una nueva convocatoria a elecciones pudo Perón retomar poder formal.

⁴ Un auspicioso punto de partida sería dejar de lado dos lugares comunes y contrapuestos que no hacen más que obstruir la comprensión: por un lado, asumir la etapa 1973-1976 como un paréntesis en medio de dos procesos dictatoriales; por otro, asimilarla como una etapa *linealmente* imbricada con la política devastadora de la última dictadura.

en los años previos y, sobre todo, desatado con un impulso inusitado a partir de 1969. A mediados de ese año, la rebelión popular –inmediatamente bautizada como “Cordobazo”–⁵ ofició como un punto de inflexión en la política argentina y tuvo consecuencias vastas. Fue el inicio de un ciclo de protesta generador de múltiples y variados movimientos sociales y políticos. A partir de entonces, y luego de tres años en el poder, la dictadura militar gobernante (autotitulada “Revolución Argentina”) comenzó a desfallecer ante la reacción ininterrumpida de sectores de la sociedad que entendieron *necesaria y posible* la transformación de la realidad del país. Cuánto y cómo debía ser ese cambio, por supuesto, podía mutar de actor en actor. Fue amplio el espectro de objetivos, estrategias y expectativas. El recurso de las armas fue solo uno, el más radical, dentro de un conjunto de opciones mucho más vasto y mayoritario.

El segundo aspecto remite al propio peronismo. La rehabilitación del sistema de partidos políticos, la vuelta del régimen democrático y con él la del peronismo al gobierno, no alcanzaron para disolver la ola de tensiones políticas que atravesaba a la sociedad. Y en gran parte, el partido gobernante asumió y reflejó en su interior esa conflictividad. Este es un factor clave para comprender el derrotero de esta etapa (y más aún, de reparar al momento de abordar de forma específica la última presidencia de Juan D. Perón). El peronismo se había vuelto más heterogéneo que nunca: peronismo ortodoxo, peronismo de izquierda, peronismo de extrema derecha (o lopezrreguismo), podría enunciarse con apuro. Pero más que en esta disparidad, el problema residía en que cada uno entendía como *verdadero* su peronismo, y en cómo se accionaba para la exclusión del otro. El universo partidario se fue plagando, según de dónde se lo mirase, de *fachos, traidores e infiltrados*. Posicionamientos y disputas entre líneas hacen a la vida de la mayoría de los partidos; la guerra intrapartidaria, en cambio, ya es una instancia muy diferente. Y en este entramado, Perón nunca fue una figura equidistante.

El tercer factor implica considerar, a grandes rasgos, el plan político de estos casi tres años. En términos globales, hasta mediados de 1975, el gobierno aplicó una política económica industrializadora, sustentada en la asociación entre el capital extranjero y la fracción dinámica de la burguesía nacional.⁶ De forma concreta, y

⁵ El 29 y 30 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba se desató una rebelión popular de importantes consecuencias para la vida argentina. En su núcleo se articularon activamente una serie de actores locales de abierta oposición a la dictadura de Juan Carlos Onganía: sectores sindicales y obreros, estudiantes (sobre todo universitarios) y pobladores pertenecientes a las clases populares y medias.

⁶ Este fue –según Eduardo Basualdo– uno de los cambios sustanciales respecto a los dos primeros gobiernos de Perón (1946-1955), junto con un reposicionamiento del papel del Estado como productor de bienes y servicios. Afirma el autor: “A partir de 1973, la propuesta de fondo del nuevo gobierno peronista ya no pareció concebir al Estado como mascarón de proa garante de la expansión industrial y de la consolidación económica, social y política de un frente so-

en función de la estabilización de la economía y el control inflacionario, el gobierno dispuso un acuerdo socioeconómico tripartito entre la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación General Económica (CGE) y el propio Estado. En esencia, el Pacto Social –como se lo conoció– implicaba la suspensión por dos años de la puja distributiva entre obreros y empresarios.⁷ Fue una pieza clave en la propuesta económica y política diagramada por Perón, que buscó articularla además con una apertura hacia la oposición política (en especial, la Unión Cívica Radical). Dado que para el diagnóstico de Perón el problema era ante todo político, el propósito –como sostiene Marcelo Cavarozzi– fue “convertir al Parlamento en un ámbito real de negociación entre los partidos” (2006: 50). En rigor, esta “doble articulación” (49-51) era el contenido de la *democracia integrada* de Perón, que buscaba combinar la representación partidaria con la corporativa.

Sobre esta estrategia económica y política se articuló un elemento más, vinculado íntimamente a los primeros dos puntos que hemos recién mencionado. La contestación social, por un lado, no había concluido con el retorno del peronismo al poder. Fueran mayores o menores las expectativas por el gobierno, fuesen mayores o menores las decepciones a partir de las políticas implementadas, lo cierto es que amplios sectores estudiantiles, obreros, profesionales y otros colectivos, se encontraban bajo una fuerte activación. A su vez, el gobierno debía lidiar con la ya citada conflictividad intrapartidaria. Desde mediados de 1973, con los sucesos de Ezeiza⁸ y el posterior desplazamiento de Héctor Cámpora de la presidencia apenas meses después de haberla asumido, la línea de acción al respecto estuvo conformada por al menos dos grandes pretensiones: la depuración partidaria, y la desmovilización y el disciplinamiento de los actores sociales radicalizados.⁹ En tal sentido, abarcó –para citar algunos ámbitos– al partido/movimiento, a las administraciones esta-

cial conformado por los sectores populares y la *burguesía nacional*, desplazando para eso –o al menos reduciendo– el neto predominio que ejercían las fracciones del capital dominantes en el nivel económico” (2006: 109).

⁷ Se otorgó un aumento salarial y de precios de bienes y servicios en torno al 20%, para luego congelarlos por dos años (hasta junio de 1975). “El plan tuvo efectivo impacto durante la segunda mitad de 1973. Las expectativas inflacionarias se redujeron de forma sustancial; la inflación minorista –que había alcanzado el 58% en 1972– comenzó a desacelerarse en el segundo semestre de 1973; el nivel de actividad superó el registrado previamente y la tasa de desocupación cayó hasta llegar al 5% de la PEA” (Belini y Korol, 2012: 209).

⁸ El 20 de junio de 1973, Perón regresó al país de forma definitiva. El vuelo estaba proyectado para que aterrizara en el aeropuerto de Ezeiza. Hasta allí se dirigieron cientos de miles de militantes y seguidores de los variados colores del peronismo (dos millones de personas, según algunos cálculos). Las facciones de ultraderecha en conjunción con lo más reactivo del sindicalismo peronista, planificaron una emboscada sobre los sectores de izquierda. El resultado fue algo más de una docena de muertos y cientos de heridos, e implicó el final del gobierno de Héctor Cámpora y un cambio explícito de alianzas en la estrategia del Perón. Ver: Verbitsky, 2006.

⁹ Ver Servetto, 2010, capítulo 7.

tales (nacionales, provinciales y municipales), a las universidades nacionales, a los sindicatos, y a otras instancias o grupos sociales. La represión estatal fue tomando forma. Se fue constituyendo “un estado de excepción creciente” que se articuló luego con el proceso militar iniciado en 1976.¹⁰

El cuarto y último punto de este recorrido es una periodización capaz de remarcar los principales hitos y señalar ciertos rasgos particulares que colaboran en el sentido explicativo. Si se lo mira bajo la clave política gubernamental (aunque no solo, por supuesto), tres claras etapas se delimitan.¹¹

El tramo inicial de estas es el más breve y diferenciado, se extiende de mayo a julio de 1973. Corresponde a los casi dos meses de presidencia de Cámpora. Implicó un “momento de la movilización generalizada y triunfalista” de aquellos que ligaron el retorno del viejo líder “con la posibilidad de introducir cambios mayores” (Svampa, 2003: 384). Fueron días protagónicos de la Juventud Peronista y la Tendencia Revolucionaria,¹² que habían sido impulsados con fuerza por Perón durante la campaña electoral. La etapa se clausuró violentamente el 20 de junio, con la ya mencionada masacre de Ezeiza.

La segunda va de julio de 1973 a julio de 1974, del interinato de Raúl Lastiri a la muerte de Perón. Desde el comienzo, esta subetapa implicó un contraste agudo a la llamada “primavera camporista”. En el plano económico, el Pacto Social no lograba desarrollarse según lo estimado. En la dimensión política e intrapartidaria, comenzó a aplicarse el desplazamiento de simpatizantes y seguidores de la Tendencia de sus cargos en las administraciones estatales. En el partido ocurría algo similar. De forma abrumadora, la fórmula Perón-Perón ganó las elecciones el 23 de septiembre, y dos días más tarde era asesinado por Montoneros el principal líder sindical y ladero de Perón, Juan Ignacio Rucci. De ahí en adelante, el proceso de endurecimiento frente a las organizaciones de izquierda y sus simpatizantes pasó a ser una marca gubernamental. Se intervinieron o desplazaron las gobernaciones provinciales que tenían vínculos con la Tendencia;¹³ se modificaron, en clave disciplinaria y coacti-

¹⁰ Implicó un avance de medidas de excepción estatal que al menos puede rastrearse hasta la dictadura precedente (1966-1973). Franco, 2012: 16 y 18.

¹¹ La siguiente es una periodización aceptada con amplitud entre los estudiosos de este tercer ciclo del peronismo. En este resumen agregaremos elementos descriptivos aportados por el siguiente texto: Svampa, 2003.

¹² Tendencia Revolucionaria fue el nombre que se le dio a una vasta articulación de organizaciones peronistas de izquierda que apoyaban la acción político-armada. Entre ellas: Montoneros, la Juventud Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, el Movimiento Villero Peronista, y varias más.

¹³ En noviembre de 1973 se intervino la provincia de Formosa; en enero del siguiente año se removió al gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain; en marzo se convalidó el golpe policial contra Obregón Cano, en Córdoba; en junio, en Mendoza, se intervino la gobernación de Martínez Baca; en octubre la de Santa Cruz, a cargo de Jorge Cepernic; y en noviembre a Miguel Ragone, gobernador de Salta. Un cuadro general puede encontrarse en: Servetto, Alicia, 2010.

va, una serie de leyes;¹⁴ y se avanzó, sobre todo a partir de la “orden reservada” del Consejo Superior Peronista, con la represión ilegal sobre los sectores “insurgentes”.

La tercera y última, de julio de 1974 hasta marzo de 1976, corresponde a la etapa de gobierno de María Estela de Perón. Con la muerte de Juan D. Perón, en julio de 1974, los maltrechos lazos comunicantes del gobierno con sectores de la Tendencia terminaron de esfumarse. 1975 fue, de lejos, el año más conflictivo de la etapa. Al incremento de la violencia de las organizaciones armadas, el gobierno contragolpeó sin escatimar métodos ni recursos. Fue el año de los “decretos de aniquilamiento”. A principios de este, se organizó la ofensiva del Ejército en Tucumán, a partir de un foco guerrillero asentado en esa provincia desde hacía unos meses. La acción estatal represiva e ilegal afloraba por sobre las prácticas legales.¹⁵ En marzo, el gobierno desató una violencia inusitada contra el sindicalismo combativo en Villa Constitución (Santa Fe). Tres meses más tarde, en un devenir desbordado, aplicó la primera política económica enteramente antipopular, que se conoció en lo inmediato como “Rodrigazo” por el nombre del entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo. La reacción sindical, en su mayoría peronista, no se contuvo ante el gobierno, se movilizó y llevó adelante primer paro general a un gobierno justicialista; el empuje terminó al desplazar del gobierno al ala vinculada a López Rega. Bajo este contexto, el segundo semestre estuvo marcado por dos avanzadas armadas que terminaron diezmando tanto a Montoneros como al ERP. La primera de ellas en octubre, con el ataque a un cuartel del Ejército en Formosa (la “Operación Primicia”). La segunda en diciembre, con el ataque del ERP a uno en Monte Chingolo (Buenos Aires). Fueron los meses de la recomposición militar, y de la planificación última de la avanzada de lo que sería el terrorismo de Estado.¹⁶ El final del gobierno constitucional se avecinaba.

ASALTO AL PODER Y CONSENSO INICIAL

El golpe de Estado, la intervención de las Fuerzas Armadas sobre la vida institucional del país, contó en lo inmediato con la aceptación de amplios sectores e instituciones de la sociedad. Tuvo la adhesión de la cúpula de la Iglesia católica, de un sector destacado de los partidos políticos (especialmente los partidos conservadores provinciales), de las asociaciones empresarias, y de los medios de comunicación. Pero, por

¹⁴ Se modificó la ley de Asociaciones Profesionales, en virtud de verticalizar más la estructura sindical y otorgar mayor poder a las conducciones nacionales (por sobre las seccionales). Se promulgó la Ley de Prescindibilidad, que propiciaba el despido. Se reformó también el Código Penal, a los fines de tipificar nuevas figuras delictivas relacionadas a las acciones político-armadas: terrorismo, secuestro extorsivo, cobro de rescate.

¹⁵ Para mayor información al respecto, ver el apartado “Terrorismo de Estado”.

¹⁶ No referimos, sobre todo, a la “Directiva del Comandante General del Ejército n° 404/75. Lucha contra la subversión”, que especifica el *modus operandi* que luego sería la regla durante la dictadura.

sobre todo, obtuvo el consentimiento de buena parte de la sociedad. Este fue el arco importante de consenso inicial con que contó el régimen. Para entender sus causas es necesario tener presente, en principio, dos elementos centrales. Por un lado, cierta “legitimidad” de origen a la intervención de los militares en la vida política del país. Esta es una característica estructural propia del sistema político argentino gestada a partir de las mismas intervenciones militares. Como sostiene Hugo Quiroga, a partir de 1930 se fue conformando un sistema político “pretoriano”,¹⁷ que incorporó en su interior a las Fuerzas Armadas como un componente esencial y permanente. Se constituyó, de esta forma, una cultura política que aceptaba la politización de las fuerzas castrenses; las cuales se desplegaban en el escenario político como un actor singular que, debido a su fuerza militar, definía el juego institucional. Por lo tanto, la injerencia de estas en la vida democrática del país se fue tornando, para la sociedad, como una alternativa siempre posible. Esto denotaba y alimentaba, a la vez, una escasa convicción en los valores de la democracia, y sus tiempos, reflejada en la pérdida de legitimidad del orden constitucional (Quiroga, 2005).

El segundo factor explicativo, ligado de forma estrecha al primero, se encuentra en el contexto inmediato al golpe. Legitimada históricamente su intervención, la opción militar se hacía cada vez más fuerte en una situación que se tornaba cada vez más crítica. Ya desde varios meses antes del golpe eran explícitos y públicos los planteos y reuniones de los jefes militares con el Poder Ejecutivo nacional. El protagonismo de las fuerzas armadas se incrementaba a medida que aumentaba el desconcierto general que, en particular, era estimulado y usufructuado por los mismos sectores castrenses por medio de la exaltación de su lucha contra las organizaciones guerrilleras que, por otra parte, se encontraban ya en un evidente proceso de declinación. De esta forma, los conflictos ya mencionados entre los diversos actores políticos, dentro y fuera del gobierno, fueron provocando una importante deslegitimación, no solo del gobierno mismo, sino también del sistema democrático en su conjunto. Se manifestaba evidente un “vacío de poder” a llenar, que permitió gestar, cada vez más, un mayor consentimiento sobre un “orden” militar.

EL COMIENZO DE LA DICTADURA

Una vez en el poder, el nuevo gobierno de facto dio inicio al denominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) que tenía como meta central realizar una intensa reestructuración del cuerpo social y del Estado. Se constituyó como una dictadura institucional –de todo el cuerpo de las Fuerzas Armadas– superadora del carác-

¹⁷ El *pretorianismo* implica la aceptación de la participación de los militares en la esfera política del país. Así, el sistema político argentino, entre 1930 y 1983, funcionó en la realidad histórica a través de una articulación que combinó en su estructura los gobiernos militares con los gobiernos civiles. Ver Quiroga, 2004: 35-39.

ter “ordenador” de la vida institucional del país de las anteriores intervenciones castrenses (salvo la Revolución Argentina de 1966).¹⁸ A fines de realizar un reparto equitativo de poder, y evitar cualquier personalización, se conformó un cuerpo colegiado integrado por los comandantes en jefe de las tres armas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea): la Junta Militar. Por medio del artículo 1° del Estatuto del PRN, se la designó como suprapoder de la nación y órgano supremo del Estado, por encima de la Constitución Nacional. La Junta, a su vez, debía ser la encargada de designar al presidente de la Nación, ejecutor de las grandes políticas trazadas por el poder supremo, que tendría un mandato de tres años. El Poder Judicial fue intervenido, y las cámaras legislativas fueron suprimidas, instituyéndose en su lugar una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL).

De la misma forma fueron intervenidas las demás instituciones de gobierno. La finalidad determinada desde el inicio fue realizar una profunda militarización del Estado, que abarcó no solo la administración central, sino también los organismos descentralizados, las provincias, los municipios, y las empresas estatales. Y si bien se buscó desde el inicio una pretendida equidad en la distribución de cargos para los diferentes niveles de poder, la histórica relación de fuerzas que remarcaba el predominio del Ejército hizo que este finalmente prevaleciera en el reparto. No obstante, las Fuerzas Armadas se erigían como la autoridad unívoca que ostentaba el monopolio de toda decisión política. Se dispuso la disolución de todos los partidos políticos y se estableció el cese inmediato de toda acción política. Se determinó, también, la disolución de cualquier tipo actividad gremial de trabajadores, empresarios y profesionales. En fin, se suprimieron las libertades públicas de los ciudadanos, permaneció activo el estado de sitio, instituido por el gobierno anterior, y se promulgó la pena de muerte para las acciones contra la patria –que nunca llegó a aplicarse–.

Para el gobierno militar la finalidad última era cerrar un “ciclo histórico” abierto con el peronismo en 1946. Reorganizar una “nueva Argentina” por medio de una intervención radical que modificara profundamente un sistema político corrompido, que eliminara al Estado demagógico, y que disciplinara a una sociedad descarriada. Un “Nuevo Orden” era necesario, y esto solo lo podría efectuar un

¹⁸ El carácter ordenador de determinadas dictaduras implicaba, una vez diagnosticado el supuesto desorden institucional, restablecer el funcionamiento normal del sistema. Como indica Quiroga: “... las fuerzas armadas se piensan garantes de la continuidad de lo que entienden son los principios, valores y normas constitutivas de la Nación, esto es, se reclaman tutores tanto de la decisión colectiva que selecciona al gobernante como de la integridad del Estado justifican así su acción golpista en aras de la defensa de la ruptura del orden constitucional. Se visualizan a sí mismas como los vectores que indican el rumbo del Estado nacional. De esta forma, en 1930 echan por tierra un régimen democrático; en 1943 se vislumbran “nacionalistas” y derrocan a un gobierno conservador; en 1946 dan su apoyo al gobierno de Perón; años más tarde lo derrocan; en 1962 se oponen la participación electoral del peronismo; en 1966 y 1976 procuran –desde un nuevo tipo de golpe de Estado– reestructurar la sociedad y el Estado argentino” (2004: 42). Ver también Cavarozzi, 2006.

agente de cambio, que aunque parte institucional de la Argentina, se veía a sí mismo, y era visto por gran parte de la sociedad, como un organismo inmaculado del germen populista. Esta retórica del ordenamiento institucional encubría objetivos siniestros. Las Fuerzas Armadas, en fin, debían reencauzar a la Argentina por la senda “occidental y cristiana”, y el costo para tal cometido se aseguraba elevado. En este sentido, se articulaban el objetivo de disciplinamiento social, que incluía la reestructuración del sistema político, con la voluntad de producir una transformación económica que permitiera reforzar –según sus términos– el liderazgo de los sectores económicos más competitivos (que en realidad resultaron ser los que poseían un mayor poder de vinculación con el Estado, y por lo tanto, los más concentrados de la economía).

Pero, aunque lo pareciera, esto no era la expresión de un plan homogéneo, aceptado de manera unánime por las tres fuerzas, sino más bien las líneas básicas de un acuerdo. El mismo devenir del proceso manifestará la carencia de un proyecto orgánico de acción, en especial, por medio de los múltiples conflictos entre, y dentro, de las armas, que expresaban los diversos posicionamientos respecto a la política a seguir. El gran elemento aglutinador, que unía frentes ante un enemigo común, era la lucha contra la subversión. Por esta razón, los primeros años del *Proceso* estuvieron marcados por el avance de políticas radicales de transformación que, como muestra el caso de la economía, no debieron enfrentar demasiados conflictos internos. En cambio, cuando hacia finales de 1977 comenzó a disminuir la represión, las divisiones hacia el interior de las propias armas comenzaron a manifestarse públicamente.

Al margen de las diferencias, durante los primeros años de gobierno las Fuerzas Armadas se propusieron gestar y garantizar, según afirmaban, una nueva república cuyo desarrollo institucional se realizaría en el futuro a través de una verdadera democracia. El proyecto de fondo implicaba, en el largo plazo, la construcción y consolidación de un orden estable sobre cuya base el poder militar ejerciera una permanente tutoría política sobre la nación. De esta forma, y en especial desde el sector más afín a Videla, se pretendió generar, en colaboración con sectores civiles, al actor político encargado de mantener en el futuro la continuidad original del proyecto. Así, el Movimiento de Opinión Nacional (MON), una convergencia cívico-militar, sería la descendencia del régimen. Este garantizaría la renovación necesaria de la clase política, y officaría de heredero legítimo y continuador de un sistema de dominio a largo plazo donde las Fuerzas Armadas contarán con la centralidad.

EL TERRORISMO DE ESTADO

Como hemos mencionado, en febrero de 1975, un año antes del golpe militar, el gobierno constitucional realizó de forma oficial el ingreso de una de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la insurgencia. A través del decreto presidencial N° 261/75,

que propugnaba la “aniquilación de la subversión”, se encomendó al Comando General del Ejército la función de reprimir el foco guerrillero del ERP instalado en la selva tucumana un año antes. Comenzó así, al mando del general Antonio Bussi, el denominado “Operativo Independencia”, que inauguraría las tácticas de la llamada “guerra sucia” contra la insurgencia guerrillera. Se inició de esta manera, previo al golpe militar, una intensa acción represiva por medio de las fuerzas del Estado —especialmente el Ejército y la policía— y comandos paramilitares de extrema derecha nucleados en la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Estos últimos eran “escuadrones de la muerte” organizados de modo clandestino desde un sector del Estado, la Secretaría de Bienestar Social a cargo de José López Rega. Como introducción a lo que vendría después, esta ofensiva, oficial y paraoficial, propiciaría, ya como método garantizado, el asesinato y la desaparición de una importantísima cantidad de personas (800 es el número aproximado).

El asalto al poder por parte de los militares implicó inmediatamente una profunda radicalización de sus acciones violentas. La represión, convertida en un objetivo central del gobierno, mutó hacia una acción sistemática desde el Estado. Por su parte, el ERP y Montoneros, que estaban diezmados desde el inicio mismo de la dictadura, durante los dos primeros años conservaron cierta capacidad para desarrollar acciones armadas contra el gobierno. Pero violentamente se desplegó una ofensiva que abarcó no solo a las organizaciones armadas, sino también, y sobre todo, a cualquier individuo o grupo sospechado de insurgente. En palabras de un general: “... primero mataremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, a los indiferentes y, por último, a los tímidos”.¹⁹ La violencia desplegada se tornó implacable y avanzó hacia la sociedad en su conjunto por medio de prácticas ilegales que tenían la finalidad inmediata de procurar, según las metáforas utilizadas por los propios militares, la “extirpación” del “cáncer” alojado en lo más profundo del tejido social. Y en este sentido, “los campos de concentración fueron el quirófano donde se llevó a cabo dicha cirugía” (Calveiro, 2006: 11). La violencia por parte del Estado no era una novedad en la historia argentina, y esto puede ser rastreado fácilmente, pero lo inédito fue la fuerza descomunal que desplegó a partir de marzo del 76, que, como sostiene Pilar Calveiro, se constituyó en un *poder desparecedor* que avanzó sobre lo material y lo simbólico, sobre los cuerpos y las ideas.

Más allá de los objetivos particulares o colectivos, la verdadera destinataria del terror fue la sociedad. Desde el primer momento esta fue el blanco donde pretendió calar el miedo extremo que —como afirma Juan Corradi— no solo tuvo el objetivo de controlar, sino también de cambiar a los actores sociales. De este modo, el terror se vuelve:

¹⁹ Declaraciones del gobernador de facto de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean, el 28 de mayo de 1977.

... esencialmente una técnica de desorientación, que apunta a privar a los sujetos de la oportunidad de calcular y prever las consecuencias de sus acciones. Es una forma de poder en la cual la conformidad no garantiza la seguridad. Su efecto principal es la generación de una atmósfera de ansiedad – una “cultura de miedo” (Corradi, 1996: 89).

Esta cultura se desplegaba más allá de los espacios comunes y lograba insertarse en lo más profundo de la intimidad, para permitir así, que cualquier comportamiento “no normal” sea señalado de inmediato como sospechoso; en definitiva, al espacio público clausurado se adicionaba el control microsociedad. Y esto solo pudo ocurrir, en gran parte, gracias a la pasividad o inmovilidad producida por el mismo terror, cuanto a la adhesión de algunos sectores sociales que se encontraban atraídos por los postulados básicos del régimen. En este marco, el control dictatorial pudo ser desarrollado –según O’Donnell– por la existencia de “una sociedad que se patrulló a sí misma”, refiriéndose a un grupo amplio de personas que de manera voluntaria “se ocuparon activa y celosamente de ejercer su propio *pathos* autoritario. Fueron *kapos*²⁰ a los que, asumiendo los valores de su (negado) agresor, muchas veces los vemos yendo más allá de los que el régimen les demandaba” (1984: 17).

El terrorismo de Estado implicó una planificación precisa de las acciones. Una sistematización de la represión por parte del poder, que posibilitó el reparto –literalmente hablando– del territorio argentino. La división espacial del poder de acción, realizada por los militares durante el último año del gobierno de Isabel y que comprendía la cuadriculación del país en 5 zonas, 19 subzonas y 117 áreas, se profundizó de manera estratégica a partir del golpe. De esta forma, se produjo una *feudalización del poder*: cada fuerza tuvo su propio espacio independiente de operación, que se conformó en parte esencial para una *matanza administrada*. Así, la competencia entre las propias fuerzas, que disputaban grados de efectividad y de acción, tuvo un rol determinante en la masacre.

El sistema represivo era llevado adelante por “grupos de tareas” constituidos por lo general por oficiales y suboficiales, policías y también civiles. Luego de la selección del sospechoso, el *modus operandi* consistía de un operativo para conseguir su detención, generalmente de noche, sobre el domicilio, lugar de trabajo o en la misma calle. Así, en el mejor lugar y momento se producía el secuestro, y el inmediato traslado de la víctima hacia algún centro clandestino de detención. Una vez allí, se confeccionaba una ficha o expediente donde se consignaba y evaluaba la información obtenida del preso. A continuación comenzaban los interrogatorios, que implicaban un largo período de torturas físicas y psicológicas a las que se sumaban como parte constantes vejaciones y violaciones. El objetivo era quebrar la

²⁰ *Kapos*: prisioneros de los campos de concentración nazi que colaboraban con la “disciplina” en esos campos.

integridad de la persona, demostrarle que sus lazos con el exterior se encontraban absolutamente cortados, que estaba completamente sola inmersa en las fauces de un poder omnipresente que tenía la capacidad de realizar, sin reparos, lo que deseaba sobre su persona. Finalmente el suplicio, que podía durar semanas, meses o años, cesaba y el prisionero era, la gran parte de las veces, ejecutado –“transferido”, en la jerga–. El paso posterior era la desaparición del cuerpo, decisión que correspondía a los más altos rangos entre los oficiales que se encontraban al frente de la represión. En el menos habitual de los casos, determinado por diversas presiones o alguna circunstancia excepcional, el detenido era “blanqueado”, o sea, su situación dejaba de ser clandestina e ilegal, y se oficializaba. Pasaba a estar a “disposición del Poder Ejecutivo nacional”, que consistía en una medida de excepción prevista por la Constitución en casos de guerra externa o conmoción interior, y que preveía la supresión de los derechos y garantías individuales. Ser colocado a disposición equivalió, en muchas ocasiones, salvar la vida, ya que de esta manera se hacía explícito el registro de la detención.

Otro de los finales posibles, que se dio en un porcentaje sumamente exiguo de los casos, consistió en la liberación del detenido, que en ocasiones emprendía el camino del exilio. Se registraron también casos de detenidos que pasaron a colaborar con las fuerzas represivas a través de operaciones de inteligencia u otras actividades. Pero más allá de estas posibilidades, una vez detenido se volvían muy escasas las chances de sobrevivir. Así, la desaparición de personas se registró como una práctica inaudita y masiva, que alcanzó a todos los sectores de la sociedad, incluyendo durante el operativo o la detención la sustracción de menores o recién nacidos de las detenidas parturientas. A la acción criminal de ocultar toda información sobre el paradero del “supuesto” detenido, y una vez sentenciado su destino, le continuaba la dimensión negacionista del final: la desaparición del cuerpo, y con él, del crimen. Los modos fueron múltiples y variados: desde el entierro en fosas comunes hasta los tristemente célebres “vuelos de la muerte”. Estos últimos eran una de las prácticas macabras de desaparición utilizada por la Marina, que consistía en el traslado en aviones de prisioneros sedados con “pentonaval” (como denominaban al barbitúrico Pentothal) para ser arrojados al mar.

Los datos proporcionados por los organismos de derechos humanos dan cuenta de la existencia durante la dictadura de más de 500 centros clandestinos de detención. Los más relevantes, de acuerdo con la cantidad de detenidos que alojaban, fueron los siguientes: la Escuela de Mecánica de la Armada –ESMA– (Capital Federal), Campo de Mayo –El campito– (Gran Buenos Aires), que poseía en su interior 4 establecimientos clandestinos; La Perla (Córdoba), El Vesubio (La Matanza) y Club Atlético (Capital Federal). Según estimaciones provistas por los organismos de derechos humanos –en relación con las denuncias recibidas– el monto fue de 30.000 personas detenidas-desaparecidas durante el Proceso.

La composición de las víctimas fue diversa: militantes políticos y sociales, estudiantes, delegados gremiales, sacerdotes, intelectuales, activistas de organizaciones de derechos humanos, y otros. De acuerdo con las estimaciones realizadas en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la distribución del total de desaparecidos por sectores fue la siguiente: 30,2% de obreros, 21% de estudiantes, 17,9% de empleados, 10,7% de profesionales, 5,7% de docentes y 1,3% de actores y artistas. Esta distribución coincide en sus más altos índices con el desarrollo, durante los años previos a 1976, de los sectores más altamente movilizados.

Como se observa en los porcentajes referidos, los trabajadores fueron el principal grupo social reprimido. Inmediatamente ocurrido el golpe, y debido a cierto temor a una reacción obrera, una de las tempranas acciones de los militares fue sitiar las principales plantas fabriles del área metropolitana de Buenos Aires y de otros grandes cinturones industriales del interior. Se intervinieron los sindicatos y obras sociales, se suspendió de forma indefinida toda actividad sindical y quedó suprimido el derecho a huelga. A estas medidas las acompañó una notoria persecución sobre los trabajadores, que implicó la desaparición física de un importante número de ellos, en especial de los militantes gremiales –gran parte delegados fabriles– provenientes del peronismo combativo o de la izquierda. Por sobre toda esta violencia directa desplegada sobre la clase trabajadora se adicionaron los cambios radicales implementados por el equipo económico, que tenía como uno de sus objetivos centrales, como ya se dijo, el debilitamiento del sector laboral por medio del congelamiento de los salarios en articulación con un notable régimen inflacionario. Se aspiraba, en el mediano y largo plazo, a la eliminación de la plena ocupación del mercado laboral a través de un proceso de desindustrialización. La finalidad era provocar la desestructuración del poder político y el control de instancias estatales que el movimiento obrero, a través de la dirigencia sindical, había logrado alcanzar durante el último tramo del gobierno peronista de Isabel. Vale aclarar que nos referimos acá a la dirigencia sindical peronista ortodoxa, que durante décadas había sido un protagonista del escenario público. Aunque la represión de la dictadura les llegó a muchos de sus integrantes, no tuvo el mismo alcance ni grado que a los sectores gremiales radicalizados.

Posar la mirada sobre la coacción sistemática hacia la clase trabajadora, y en especial en sus manifestaciones más combativas y clasistas, nos remite, de modo indefectible, a los meses previos al asalto al poder por parte de las fuerzas castrenses. La represión aquí no fue una novedad, sí –por supuesto– el grado de masividad y sistematización alcanzado. De aquí que puedan hallarse varias coyunturas durante el gobierno peronista que podrían officiar de preludio a la agudización represiva sobre fracciones de la clase obrera. Un momento clave –antes señalado– fue marzo de 1975. Fue en los primeros meses de ese año que tomó impulso la profundización

y ampliación de la acción “antisubversiva” del poder estatal.²¹ El ya citado caso de Villa Constitución, y su centro neurálgico, la acería Acindar, es el paradigma. No obstante, muchos otros casos tendrán su génesis en esta etapa preliminar y su agudización luego de marzo de 1976; entre ellos: Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, astilleros Astarsa, Ingenio Ledesma...

Esto nos conduce a la ineludible complicidad empresarial. Esta fue fundamental en el dispositivo represivo desplegado en parte de las grandes empresas, y su articulación se gestó bastante antes del golpe.²² Un esbozo de este vínculo puede rastrearse ya en la aplicación sostenida de la ley antisubversiva 20.840, de octubre de 1974, que permitió perseguir y encarcelar a cientos de obreros y militantes sindicales de base combativos. En no pocas ocasiones, ya se vería allí la comunión activa entre empresas y fuerzas represivas, con la anuencia en no pocos casos de conducciones sindicales, bajo el amparo legal propiciado por el gobierno electo.²³ De allí saldría parte de las posteriores víctimas del terrorismo de Estado.

Un último punto sobre este apartado debe ser mencionado: la represión estatal del *Proceso* traspasó las fronteras nacionales y extendió su accionar sobre varios países de América Latina. El denominado “Plan Cóndor”, del cual participaban las dictaduras de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, y de la propia Argentina, fue un claro ejemplo de mutua colaboración represiva. Este consistió en una coordinación contrainsurgente que posibilitó una acción represiva extra fronteras; la conformación de un espacio común de represión. Además, las fuerzas militares argentinas tuvieron un cardinal protagonismo en Centroamérica, al oficial como asesores e instructores de contrainsurgencia en Nicaragua, o participando en operaciones clandestinas contrarrevolucionarias en Honduras y El Salvador.

LA POLÍTICA ECONÓMICA²⁴

Desde mediados de la década del cincuenta, tras el derrocamiento del primer proyecto nacional y popular del país, la Argentina se vio sumida en una notable agudización de su crisis institucional, producto entre otras razones, del incremento de los desequilibrios económicos. Debido a un proceso inflacionario constante se

²¹ Ver Basualdo y Jasinski, 2016.

²² *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, noviembre de 2015. Disponible en: <http://www.saij.gob.ar/responsabilidad-empresarial-delitos-lesa-humanidad-tomo-represion-trabajadores-durante-terrorismo-estado-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-lb000183-2015-11/123456789-0abc-defg-g38-1000blsorbil>. Ver también: <http://www.cels.org.ar/especiales/empresas-y-dictadura>

²³ *Ibíd.* Ver también Verbitsky y Bohoslavsky, 2013.

²⁴ A los fines de una mayor organización y claridad del apartado, fueron claves las sugerencias hechas por Mariana Luzzi. Le agradecemos su trabajo.

profundizó la puja distributiva entre el Estado, sectores sindicales y empresariales, que crearon un clima de gran inestabilidad incapaz de asegurar las premisas mínimas de viabilidad política y de funcionamiento económico requerido por los sectores dominantes del capital.

En los meses previos al golpe, la persistente inflación y el muy elevado déficit fiscal, cubierto en gran medida con emisión monetaria, anticipaba medidas urgentes. El ministro de Economía de entonces, Celestino Rodrigo, intentó poner en marcha, a principios de junio de 1975, el último plan de mejora económica en democracia. Este consistió en producir una fuerte devaluación para corregir el desequilibrio en la balanza de pagos y un incremento en las tarifas públicas para mejorar la situación fiscal. Estas medidas, que principalmente causaron una fuerte caída del salario real, se conocerían como el “Rodrigazo”, y tuvieron un enérgico rechazo del sector sindical que terminó con las ambiciones del ministro y su principal asesor, el banquero Ricardo Zinn, que buscaba por medio de este proceso licuar la deuda del sector privado. A partir de aquí comenzó una aceleración inflacionaria que dio lugar a un sistema económico lleno de incertidumbres y alto desequilibrio, debido al uso permanente de prácticas de reajuste.

Como ya se ha mencionado, las Fuerzas Armadas que tomaron el gobierno coincidían en que era necesario terminar definitivamente con una Argentina sumida en el caos, producto de la creciente irrupción de conflictos sociales provenientes de sectores radicalizados y de un sindicalismo “indisciplinado”. Para ellas, la causa de fondo de los problemas que aquejaban al país era clara: la existencia de un gobierno populista que produjo prácticas sectoriales que entorpecían el desarrollo de las potencialidades nacionales, dando poder a una clase obrera, que por sus crecientes conflictos e intervenciones, propició un Estado débil incapaz de impedir la propagación de ideologías de izquierda.

El diagnóstico era claro y se encontraba extensamente aceptado en los sectores oligárquicos y empresariales de orientación librecambista, sobre los que confluían las nuevas ideas tecnocráticas y tecnocientíficas del ámbito económico mundial.²⁵ Cabe volver a señalar, que durante la década del setenta el sistema económico internacional se encontraba atravesando una crisis que dio lugar a un cambio a nivel mundial del modelo de acumulación, que desde la segunda posguerra se había caracterizado por su alta tasa de ocupación, una importante cantidad de reformas

²⁵ Al respecto, Mariana Heredia observa que la circulación de estas nuevas ideas dentro del campo liberal comienzan a surgir a partir de la Revolución Libertadora, en 1955. Desde esos momentos la renovación del campo del conocimiento económico cobra fuerza mediante la imagen del erudito o experto en economía, y a través de una creciente profesionalización del rol del economista como resultado de las nuevas ideas provenientes básicamente de los Estados Unidos, que circulaban a nivel local por medio de fundaciones y asesorías vinculadas al mundo empresario y estatal, que tomaron impulso, especialmente, por un retroceso en la región de escuelas o corrientes económicas propias (2004).

sociales y ampliación del Estado, que conformaba sistema de integración y desarrollo conocido como Estado Benefactor (o Welfare State). Esta fracción del poder económico va a persuadir al sector militar sobre la necesidad de imponer un nuevo modelo de orientación liberal. Así, una nueva alianza de poder, compuesta por el sector rural tradicional, el capital financiero y el sector industrial concentrado de bienes de exportación, junto a algunos mercadointernistas con capacidad de diversificación, dejará atrás a la vieja alianza de industrialistas concentrados que había primado durante el gobierno de Onganía. Ahora tendrá su oportunidad de cambiar el sistema de acumulación consolidado hasta entonces y someterlo así al tratamiento neoconservador y a la lógica ordenadora del mercado.

El gobierno militar implementó entonces su acción en dos frentes. Por un lado, el *militar*, tendiente, como vimos, a barrer con los actores que dentro de la población, potencialmente o de hecho, se comportaban, en sus palabras, “subversivamente”. Por otro, el *económico*, que implicaba terminar con el modelo de sustitución de importaciones y así desterrar de manera definitiva el sistema obrero industrial consolidado bajo el peronismo. El cambio fundamental consistió en la erradicación y modificación absoluta de los sustentos estructurales e institucionales de los sectores populares, de tal modo que la experiencia de activación social, pasada y presente, no volviera a repetirse. Por lo tanto, junto al aniquilamiento, desaparición y tortura de personas, se reubicó a la clase trabajadora en una posición subordinada, tanto en lo político como en lo institucional. No solo se coartó a las organizaciones políticas y corporativas mediante la limitación jurídica, como veremos más adelante, sino que principalmente, se llevó a cabo una reforma económica que suprimió las posibilidades funcionales de su posible desarrollo a futuro. En definitiva, y siguiendo a Adolfo Canitrot, la economía sirvió a un plan político de disciplinamiento social (1980).

José Alfredo Martínez de Hoz, miembro de la burguesía rural e industrial y presidente del Consejo Empresario Argentino, asumió como jefe del equipo económico, con la firme convicción de que los sectores militares configuraban el aliado esencial para reorganizar políticamente al país e implementar un proyecto económico de magnitud. Para ello, se propuso terminar por completo con el modelo redistribucionista que propiciaba una fuerte presencia estatal, que sustentaba a una organizada clase trabajadora y a un sector empresario de orientación mercado internista. En el primer año de gestión, Martínez de Hoz solo esbozó algunas medidas de devaluación y control del gasto público. Esto logró que la situación económica mejorara levemente todavía bajo el viejo esquema, el cual parecía estar lejos de agotarse, ya que a pesar de la inflación presentaba aún un ritmo de crecimiento constante sostenido por el ahorro interno y una intacta capacidad industrial. Pero a pesar de estos indicios de bonanza, en 1977 las reglas del juego económico cambiarían para siempre. Para el equipo económico, la prioridad no era el crecimiento, ni la estabilidad de la economía, sino la transformación radical del

sistema anterior, aun en perjuicio, en el corto plazo, de los intereses de extensos sectores que apoyaban al gobierno.

En junio de ese mismo año se llevó a cabo la primera transformación esencial: la reforma financiera. Como parte de ella se liberaron las tasas de interés y se puso en manos de los bancos la decisión en la asignación de crédito, condiciones anteriormente reguladas por el Banco Central, estableciendo de este modo las primeras reglas de mercado para el sector financiero interno. Al mismo tiempo, se aplicaron medidas monetarias restrictivas que trajeron como resultado un rápido aumento de las tasas de interés, ahora en manos de las entidades bancarias. Este aumento en las tasas trajo una consecuencia devastadora para la inversión productiva, ya que resultaba más beneficioso volcar el capital en la especulación y la ganancia financiera que en el sector industrial.

El contexto internacional también era propicio para esa dinámica especulativa. En los países centrales, la disponibilidad de “crédito fácil” como resultado de un largo período de crecimiento mundial, sumado al fenómeno de los “petrodólares” (que implicó un excedente de liquidez en las oligarquías árabes debido a la gran suba del petróleo), hicieron que el endeudamiento externo fuera uno de los rasgos salientes del modelo de economía abierta de Martínez de Hoz. Por un lado, las grandes firmas del sector privado incrementaron de forma notable su deuda en el extranjero, financiando así no solo el abastecimiento de su cadena productiva, sino sobre todo la especulación financiera, que les permitió obtener millonarias ganancias. Por otro, el endeudamiento con el exterior permitió al Estado subsanar los desfases en la balanza de pagos y engordar las reservas del Banco Central. De este modo, la economía se expandió con fondos externos a través de una política de gran gasto público. El dinero del Estado estuvo también dirigido, entre otros destinos, a la expansión del sector privado contratista vinculado al gobierno y a la modernización del armamento militar. Estas acciones tendieron a ahuyentar los fantasmas del desempleo en la sociedad, como también a menguar las críticas internas al modelo implementado.

Gran parte del compromiso argentino con el exterior se generó entre 1979 y 1980, durante el gobierno de Videla, debido a que en virtud de la política de liberalización el Estado fue sufriendo una escasez de divisas que tuvo que saldar mediante un empréstito creciente. Junto a Martínez de Hoz se encontraba el secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica, Guillermo Klein, que fue un gran entusiasta de la política de endeudamiento, mientras que al mismo tiempo dirigía una oficina privada que representaba en Buenos Aires los intereses de los acreedores extranjeros. Este ejemplo marca el carácter de lucro individual y especulativo que desde el sector privado y estatal adquirió la economía por entonces. Por otra parte, el pedido compulsivo de crédito extranjero también fue promovido por la banca internacional, siendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) los principales representantes de este sector privado extranjero.

En 1978, la dificultad del equipo económico para controlar una inflación persistente llevó a la implementación de otras medidas, en la que se conoce como la segunda etapa del plan económico, que duró hasta la crisis de 1981. Entre aquellas medidas se destaca la denominada “pauta cambiaria”, conocida comúnmente como “la tablita”, que consistía en una tabla que preveía la variación futura del tipo de cambio a tasas decrecientes, y que benefició aún más la especulación financiera. El rasgo más importante de la nueva etapa será la aceleración de la apertura económica, que conducirá a otra transformación esencial en el modelo económico vigente hasta entonces. Ella consistió sobre todo en una rebaja de los aranceles para las importaciones y una acentuación en la quita de trabas a los movimientos de capitales. Estas medidas cruciales produjeron una competencia de productos externos con el sector industrial interno, hasta entonces protegido; se logró, de este modo, someter a los formadores de precios internos y al sector asalariado al rol subordinante del mercado e iniciar así un proceso de desindustrialización del sector industrial medio.

A pesar de las medidas tomadas, el proceso inflacionario, lejos de apaciguarse, continuó y produjo una sobrevaloración cambiaria; es decir, un dólar barato, que trajo consigo la consolidación de la especulación y ganancia financiera. El atraso cambiario provocó un mayor estímulo a la invasión de artículos externos, perjudicando así a las ya golpeadas industrias de sustitución de importaciones, que despojadas de la protección estatal y sus beneficios crediticios e impositivos, debieron en un alto porcentaje cerrar sus puertas. Se produjo además el fenómeno conocido como “plata dulce”, una corta bonanza de consumo para sectores de clase media y alta debido al fácil acceso de artículos importados y viajes al exterior. Pero por sobre todo, el dólar barato y la facilidad de movimientos de capitales, tras la eliminación de los controles a su ingreso y egreso del país, indujo una gran especulación conocida como “bicicleta financiera”. Esta consistía en la obtención de dólares mediante el pedido de créditos en el extranjero, que una vez cambiados por pesos eran colocados en un plazo fijo a un interés que oscilaba entre el 9 y el 25% (cuando en el exterior solo se pagaba entre el 3 y el 7%). Al cabo de un período entre seis meses y un año se retiraba el plazo fijo, se lo transformaba en dólares, se reintegraba el crédito pedido y se obtenía una suculenta ganancia que luego se fugaba al exterior. Este mecanismo era facilitado por “la tablita”, que aseguraba previsibilidad a la especulación, como también por medidas de seguro ante posibles quiebres bancarios. Así, se fugaron del país miles de millones de dólares, producto de la gigantesca especulación realizada por capitales extranjeros y sectores nacionales pertenecientes a grupos empresariales ligados en gran parte a funcionarios del gobierno.

En un contexto en el que el Estado cedía su acción redistribucionista a favor de los empleadores y la represión lograba amordazar al sector obrero, una de las principales consecuencias de estas reformas fue el deterioro del salario real de los trabajadores. En efecto, durante la dictadura se consumó una disminución en la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno (PBI) sin antecedentes

desde la irrupción del peronismo en adelante. Los trabajadores perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI en circunstancias en que permaneció prácticamente constante. Esto trajo una caída del poder de compra de los asalariados, y por consiguiente, una contracción del mercado interno. Al mismo tiempo, aunque el gobierno militar se preocupó por mantener cierta legitimidad mediante el sustento del pleno empleo, la tasa de desocupación tendió a aumentar progresivamente en el período.

La transformación del rol del Estado y de sus vínculos con el sector empresario fue otra de las grandes consecuencias del proceso de reforma económica. Si el lema liberal era “achicar el Estado para agrandar la Nación”, la práctica económica de Martínez de Hoz no escatimó en gastos para embarcarse en grandes obras públicas. Este proceso fue el eje central del crecimiento de un empresariado nacional parasitario que terminó de imponerse por sobre sus pares tras un largo período de luchas, alianzas y crecimiento inestable. La denominada “patria contratista” consistió en un mecanismo de redirección selectiva de contratos para obras públicas y desarrollo bélico hacia empresas privadas con estrecha vinculación al gobierno. Este mecanismo dio cuantiosos beneficios a grandes grupos locales mediante diversas prácticas prebendarias. Estos grandes grupos formaron parte de la fracción concentrada de la burguesía industrial de carácter transnacional diversificado e integrado, que junto con el capital extranjero, “sintetizaron sus proyectos históricos en un nuevo proyecto dominante que constituyó la base social fundamental de la dictadura militar” (Aspiazu, Basualdo y Khavisse, 1986: 4). De tal modo, se procedió a una “desindustrialización selectiva”, donde solo se beneficiaron estas grandes industrias de bienes intermedios y de capital concentrado pertenecientes a rubros como celulosa, siderurgia, aluminio o petroquímica.²⁶

El tipo de funcionamiento económico constituido sobre una base crediticia externa con sobrevaluación cambiaria no duró mucho. Hacia el final de la dictadura, se inició una crisis del modelo que provocó paulatinos intentos de reajuste

²⁶ Según las apreciaciones realizadas por Aspiazu, Basualdo y Khavisse: “El origen de muchos de estos grupos se remonta a la época del modelo agroexportador y a la primera etapa de la industrialización sustitutiva, aunque algunos (los menos) se integraron en la segunda etapa de sustitución de importaciones. De esta manera, estos capitales se conformaron sobre la base de la fracción de la oligarquía que se diversificó y expandió hacia la producción industrial (Bunge y Born, Braun, Menéndez y Garobaglio y Zorroaquín) a los que se agregaron después durante la década de 1930 y de 1940 otros grupos económicos formados en la actividad industrial o en la explotación petrolera (Celulosa Argentina, Astra y Pérez Companc) a los cuales se le agregaron otros de reciente formación (SOCMA, Bridas y Arcor). Por otro lado, hay empresas transnacionales (ET) que en su proceso de acumulación mundial se expandieron en el país mediante la instalación de múltiples firmas controladas, cuyas actividades estaban integradas y/o diversificadas. Este tipo de ET proviene mayoritariamente de la primera o segunda sustitución de importaciones (Ford, Pirelli, Bayer o Renault), y en menor medida de la etapa agroexportadora (Brow Boveri y Dreyfus)” (1986: 5).

entre 1981 y 1983, etapa conocida como de “ajuste caótico”. Durante este proceso, la consolidación de la deuda externa fue el efecto más significativo que el proyecto militar produjo en el campo económico, ya sea por la magnitud de tal hecho, como por sus consecuencias a largo plazo. Como ya se ha comentado, dentro del sistema financiero internacional existía un exceso de liquidez de fácil disponibilidad para los países en desarrollo; esto llevó a un endeudamiento masivo de los estados latinoamericanos en general. Pero el caso argentino presentó sus propias características, distinguiéndose de los demás países de la región. Por un lado, fue el país que más tardíamente concretó su internacionalización financiera, y el que con más rapidez se endeudó. Por otro lado, fue además el país que menos inversiones productivas tuvo dentro de ese período de endeudamiento. De tal manera, el endeudamiento externo se constituyó como una inédita apropiación de excedentes por parte de una minoría que posibilitó el saqueo del Estado a gran escala.

La crisis económica iniciada ya a fines de 1980 comenzó con la inestabilidad del sistema, que ante la primera duda de desajuste provocó la fuga de grandes cantidades de divisas. Según Daniel Aspiazu, aunque esta fuga de capitales se originó por la inestabilidad y el miedo a una devaluación, su causa principal se debió a que los acreedores internacionales solicitaron la garantía de sus préstamos a los deudores privados nacionales mediante la creación de activos financieros en el exterior. Mientras tanto, en el país la deuda contraída por los grupos privados pasó a manos del Estado. Este punto esencial dio el inicio a otro proceso de gran endeudamiento público, ya que si bien era creciente y estaba dirigido a sostener las cuentas del Estado, a partir de 1979 la deuda externa argentina comenzó a crecer escandalosamente. Hacia febrero de 1981, el plan económico había caído ya en un proceso de profunda crisis que terminaría con el mandato de Videla y el alejamiento definitivo de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía.

El sucesor de Videla, Roberto Viola, llegó al poder debilitado por el desarrollo de varios frentes internos, a lo que se sumaba la ausencia de una figura preponderante en su gabinete. Esto se notó especialmente en el área económica; Lorenzo Sigaut no compartía el estilo centralizado de la conducción económica de su antecesor, por lo que dio autonomía a varios ministerios que antes dependían de Economía, acción que fragmentó y debilitó más aún el poder de su gestión. En abril de 1981 eliminó la “tablita” y estableció un tipo de cambio fijo, a la vez que produjo fuertes devaluaciones junto con otras medidas que tendieron a desacelerar el proceso de apertura económica. Con estas disposiciones, Sigaut intentaba recomponer el panorama financiero que emergía descontrolado y que reafirmaba a su mentor, Martínez de Hoz, como el único capaz de dirigirlo. Ya a los tres meses de la gestión de Sigaut, se había producido una agudización de la crisis económica, con tres grandes devaluaciones, una fuerte oposición interna y la renuncia de las cúpulas de los bancos Nación y Central.

Un golpe interno, perpetrado en diciembre de 1981 por el sector militar disforme con la política dialoguista hacia sectores civiles y con el cambio económico producto de esta estrategia de acercamiento, alejó a Viola del gobierno y a Sigaut del Ministerio de Economía, para dar lugar a la fracción dura conducida por Galtieri. El tercer gobierno del Proceso adoptó recetas económicas netamente ortodoxas; la presencia del nuevo ministro, Roberto Alemann, significó el retorno al enfoque liberal de Martínez de Hoz. A la adversidad económica, que continuaba, se le sumó entonces la crisis política iniciada tras la derrota en Malvinas. En medio de este escenario, se produjo otro hecho importante dentro de las transformaciones económicas llevadas a cabo durante la dictadura militar. Como amigo del general Horacio Liendo, y con José María Dagnino Pastore ahora al frente del Ministerio de Economía, asumió la dirección del Banco Central Domingo Cavallo. En medio de un descalabro económico y político, Cavallo puso en marcha una medida conocida como la estatización de la deuda privada, la cual consistió en beneficiar a las empresas privadas endeudadas en el exterior mediante un “seguro de cambio”, que en la práctica permitía la licuación de sus obligaciones. El gobierno pagó, de esta manera, una parte importante de la deuda contraída por varias empresas privadas que poseían sus capitales en el exterior, tras haberlos fugado en el momento álgido de la crisis. Entre las empresas beneficiadas se encontraban las filiales argentinas de sociedades multinacionales como Renault Argentina, Mercedes-Benz Argentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, el First National Bank of Boston, el Chase Manhattan Bank, el Bank of America, el Deutsche Bank. Por consiguiente, la deuda privada que rondaba los 15.000 millones de dólares se estatizó en un 90%; por lo que la deuda externa pasó de 8500 millones de dólares en 1976, a 25.000 millones en 1981, para terminar a principios de 1984 en 45.000 millones de dólares.

En definitiva, la política económica de la dictadura puede sintetizarse entonces en un decidido cambio de rumbo tendiente a eliminar las bases estructurales que posibilitaron una sociedad con un importante grado de integración social, debido especialmente al alto grado de equidad en la distribución del ingreso y la riqueza. Los rasgos más sobresalientes de esta transformación fueron: una *desindustrialización* selectiva que condujo a un aumento de la desocupación y a un incremento de la precariedad laboral; una importante *concentración de capital* en pocos actores económicos, entre los que se destacan aquellos vinculados a la “patria contratista”; la *hegemonía del capital financiero* por sobre las actividades productivas; y un sustancial *endeudamiento* externo, vinculado estrechamente al nuevo sistema de dominación. Desde el punto de vista de los objetivos planteados por la dictadura, el éxito radicó en la creación de un nuevo modelo de acumulación en manos del capital concentrado transnacional, que en conjunción con los nuevos acreedores externos conformó un bloque de poder disciplinante y distributivo que pervivirá hasta la actualidad. Estos cambios se expresaron, en términos sociales, en un vasto proceso de reestructuración que fortaleció las bases de dominación, fragmentando a los

sectores subalternos. Fundamentalmente, se tendió a la destrucción de las bases económicas de sustentación social mediante modificaciones que posibilitaron la descomposición y el surgimiento de nuevos grupos de trabajadores asalariados no obreros, de mayor precariedad y escaso poder organizativo, y por lo tanto, de mayor vulnerabilidad a las imposiciones del mercado.

PROPAGANDA INTERNA Y DESCRÉDITO EXTERNO

De una manera u otra, la dictadura militar buscó a lo largo del tiempo generar un alto grado de apoyo de la sociedad hacia sus planes y acciones. A pocos meses de instalado el gobierno de facto, el presidente Videla, como también algunos funcionarios y gobernadores, instaban al acompañamiento y la participación en el Proceso. La intención era, en lo posible, no quedar aislados de la sociedad. En parte, la convergencia cívico-militar que pretendía ser el Movimiento de Opinión Nacional (MON), impulsado por Ibérico Saint-Jean y Jorge Aguado, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), implicaba el desarrollo de canales de diálogo para fomentar la continuidad del Proceso. A partir del segundo año de gobierno, el MON quedó desestimado, pero el intento de propiciar el diálogo y la búsqueda de consenso permaneció, aunque tuviera poca significación para la sociedad.

La propaganda permanente del régimen estuvo ligada, la mayor parte de las veces, a la construcción, en sentido público, de *enemigos* a la causa nacional. Esto no debe ser pensado como una acción homogénea y coherente del conjunto de las Fuerzas Armadas, sino la mayor parte de las veces, como el producto desplegado desde algún sector interno. La única acción unívoca, sobre la que no había disensos, fue la lucha contra la subversión. En las demás cuestiones la uniformidad se perdía y las diferencias se ahondaban. La competencia entre las armas, especialmente entre el Ejército y la Marina, fue una constante del período, como también lo fue, dentro del Ejército, la puja entre “duros” y “moderados”.

A pesar de estas diferencias, la dictadura siempre contó con algún enemigo de turno. Esto le servía, sin duda, para homogeneizarse tanto hacia el interior de las Fuerzas Armadas, cuanto a mancomunar objetivos con la sociedad. El agente de conflicto podía ser del exterior o, como las bandas insurgentes, provenir “maliciosamente” del propio país. Sin embargo, es necesario remarcar que la misma guerrilla estaba considerada en términos foráneos, era la “subversión apátrida”, una agresión externa mimetizada, algo que no pertenecía a la “argentinidad”. En igual sentido, en 1978, el conflicto limítrofe con Chile por las islas del Canal del Beagle, que fue impulsado por la Marina y llevó a la Argentina al borde de la guerra con el país vecino, fue explotado con fines chauvinistas.

En cuanto a la imagen externa, 1977 representó un momento amargo para los conductores del Proceso. Principalmente, debido a la asunción como presidente en

los Estados Unidos del demócrata James Carter, que una vez en el poder alentó una política exterior vinculada al respeto y control de los derechos humanos. Por su parte, grupos de argentinos exiliados, desde el momento mismo del golpe, comenzaban a hacer acusaciones públicas que enfatizaban las acciones de una dictadura sangrienta. También eran realizadas denuncias por organismos internacionales como *Amnesty International*. Ante las múltiples imputaciones, el gobierno estadounidense optó en 1977 por reducir los créditos hacia la Argentina, y por efectuar un embargo de armas en 1978. En este contexto se fueron incrementando las presiones internacionales sobre el gobierno argentino, que puso en marcha una poderosa propaganda con el fin de deslegitimar tanto las denuncias realizadas desde el exterior, como las que ya comenzaban a surgir dentro del propio país. Así, el Campeonato Mundial de Fútbol realizado en 1978 en el país pretendió ser el trasmisor de una imagen de gobierno equilibrado y de una sociedad comprometida con la causa. Pero inversamente a lo planeado, la imagen “errónea” no pudo ser refutada. La publicidad internacional, que propiciaba el mismo evento, permitió la visualización de las denuncias que realizaban los argentinos que se encontraban fuera del país.

Septiembre de 1979 representó otro importante golpe a la omnipotencia de la dictadura. Entre los días 6 y 20 de ese mes se realizó en el país la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La CIDH inspeccionó y recopiló información sobre los múltiples casos denunciados de desaparición de personas y otras violaciones a los derechos humanos. Por su parte, la propaganda oficial exclamaba: “Los argentinos somos derechos y humanos”. El gobierno procuraba ocultar cualquier indicio sospechoso y demostrar que los argentinos vivían libres y en paz, conforme a la civilidad occidental. Una imagen sumamente ilustrativa del momento quedó reflejada cuando un grupo de hinchas, que festejaban en las calles el triunfo del seleccionado argentino en el Mundial Juvenil de Japón, incitados por un periodista radial, fueron a demostrar su alegría y libertad de expresión frente a la sede de la OEA, donde se hallaban los inspectores de la CIDH. Sorprendentemente, allí se encontraron con una larga fila de centenares de personas, que esperaban para presentar sus denuncias por la desaparición de uno o varios de sus familiares, así, “dos rostros del país se miraron a los ojos y a partir de allí ya nada volvería a ser igual. Los desaparecidos aparecían finalmente con un peso en la política argentina que no cesaría de crecer en los siguientes años” (Verbitsky, 2002: 112). El 18 de abril de 1980 se dio a conocer –no en el país, ya que no apareció en los medios– el informe elaborado por la Comisión, en el que se condenaba al gobierno argentino por las graves y numerosas violaciones a los derechos humanos entre 1975 y 1979. El gobierno rechazó las acusaciones de plano.

LA RESISTENCIA

La segunda parte de la década del setenta representó el anclaje temporal donde el discurso internacional por los derechos humanos, propagado desde algunos países centrales y organismos internacionales, comienza a tener vigencia efectiva. Esta cada vez mayor centralidad externa, conjugada sustancialmente con el enrarecido clima político vivido en el país, donde la represión estatal comenzaba a evidenciar sus efectos, propició el surgimiento de organizaciones que conformarían, durante el Proceso, uno de los principales sujetos de resistencia.

Algunas se habían constituido durante el último gobierno peronista, meses antes del golpe: el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) –en el que participaban varias confesiones religiosas–, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Posteriormente, con el ascenso de la dictadura y la radicalización de la represión, comenzaron a surgir organismos que reunían a afectados directos del terrorismo de Estado. En abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo iniciaron el reclamo público por la aparición de sus hijos. Luego surgieron Abuelas de plaza de Mayo, y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. También fueron creados organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, a los que debemos sumar la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (originariamente fundada en 1937 y vinculada al Partido Comunista).

Este conjunto de organismos conformó el denominado movimiento por los derechos humanos y se ubicó paulatina y públicamente como la principal resistencia hacia el gobierno militar y, años más tarde, como un sujeto político fundamental en la transición hacia la democracia. Las rondas semanales realizadas en Plaza de Mayo por las Madres eran su más clara manifestación. Dentro de un espacio público clausurado y una sociedad silenciada, las organizaciones por los derechos humanos comenzaron a alzar una voz denunciante del comportamiento criminal y terrorista del Estado. Como afirma Elizabeth Jelin:

La definición de la violencia en términos de “violaciones a los derechos humanos” fue el paso que permitió introducir la dimensión jurídica en el conflicto político. En un momento en que no existía un marco de referencia interno que permitiera establecer una noción de estado de derecho, la noción internacional de derechos humanos se tornó especialmente significativa (2005: 527).

Lejos de ser homogéneo, el movimiento expresaba en su interior la tensión propia de enfrentarse al poder. Divididos entre los que proponían oposición y lo que pregonaban cautela. Pero más allá de estas diferencias, las actividades se unificaban en dos direcciones: como ya se dijo, propiciaban la difusión y denuncia pública de las violaciones realizadas por el Estado, que incluía una importante propagación de ellas en el plano internacional, donde se buscaba conseguir solidaridad y apoyo en la lucha

contra el régimen dictatorial. Por otro lado, ofrecían solidaridad y contención a las víctimas y sus familiares. Construían bases de datos recopilando información sobre las personas detenidas, colaboraban activamente en la búsqueda de los desaparecidos y también asesoraban legalmente a los familiares, por ejemplo, en la interposición de *habeas corpus*²⁷ en la Justicia.

Es necesario destacar que la Iglesia católica se encontró, oficialmente, por fuera de este movimiento. Por el contrario, hasta entrados varios años brindó, de alguna manera u otra, apoyo al gobierno, y en numerosas ocasiones defendió la situación establecida. Esta fue una evidente ausencia –por su legitimidad y poder– que pesó sobre el movimiento y su desarrollo, más significativa aún si se la compara con el caso chileno. Allí, la Iglesia católica logró instituir una *Vicaría de la Solidaridad* que colaboró activamente en la exigencia de respeto a los derechos humanos por parte del gobierno del dictador Augusto Pinochet. En Argentina, la colaboración de grupos católicos solo se produjo a partir de acciones individuales o colectivas, por fuera de la decisión tomada por la jerarquía eclesiástica. A través de esta forma lateral participaron de manera loable algunos obispos y numerosos sacerdotes, religiosos y laicos, que llegaron a tener un papel destacado en la lucha contra el terror estatal. Por último, cabe destacar las diversas manifestaciones desarrolladas en barrios periféricos del Gran Buenos Aires, como de muchos pueblos y ciudades del interior del país, que menos evidentes y conocidos que el movimiento de derechos humanos, participaron activamente del reclamo de personas detenidas o desaparecidas.

En el plano sindical, la reacción inmediata de las cúpulas fue un repentino repliegue que se expresó durante los primeros años en un sustancial inmovilismo. El inconformismo de la situación económica y represiva, y la ausencia de iniciativas de centralización de luchas a nivel nacional, en gran parte, produjeron en numerosas ocasiones una multiplicidad de acciones de protestas dentro de los mismos lugares de trabajo. Las bases obreras desarrollaron huelgas y otros tipos de luchas novedosas –repertorios no tradicionales– que crecieron paulatinamente hasta alcanzar su pico máximo en 1981. Se fue conformando asimismo, lentamente, un movimiento molecular de resistencia que evidenciaba un descontento hacia el gobierno y sus políticas. Y fueron surgiendo mecanismos inéditos que revelaban una gran capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, ante la imposibilidad de elección de representantes, que era una de las prohibiciones realizadas por el gobierno, cumplida celosamente por los empleadores, surgió el fenómeno del “delegado provisorio” (delegado elegido al margen de los procedimientos legales, que

²⁷ El *habeas corpus* consiste en una garantía constitucional que permite proteger la libertad de las personas frente a un acto u omisión de autoridad pública que implique ilegítimamente: limitación de la libertad personal, amenaza actual de la libertad, agravación de las formas o condiciones en que se cumple la privación de la libertad. Establece, ante la detención ilegal de una persona, que un tribunal de justicia determine su situación: si debe continuar el arresto –ya legal– o si se procede a la liberación.

no era reconocido por la empresa) que tenía la función de articular los reclamos de sus compañeros. En suma, desde los inicios mismos del proceso se fue desplegando dentro de los ámbitos de trabajo una variedad de luchas de que tenían como finalidad, en la mayoría de los casos, demandas de orden salarial, reivindicación de las condiciones de trabajo, y defensa y restauración de la organización sindical fabril.

Los sindicatos se agruparon, de manera cambiante, en dos tendencias: dialoguistas y combativos. En abril de 1979, luego de tres años de altísima violencia estatal, el sector combativo de los sindicatos –la “Comisión de los 25”– convocó a la primera huelga general registrada durante la dictadura. Inmediatamente el gobierno intentó impedirla, encarcelando a los organizadores, pero esta pudo ser realizada igual e implicó el retorno de la protesta social masiva dentro de un espacio público clausurado. A medida que el “deshielo” avanzaba, que el miedo lentamente retrocedía, el movimiento obrero comenzó a tener mayor protagonismo.

Por último, se debe resaltar que los militares no dejaron de lado, dentro de su plan sistemático de represión, el aspecto cultural y educativo. Se practicó una estricta censura en los medios de comunicación, así como también en manifestaciones artísticas de todo tipo, lo que incluyó la prohibición de películas, la intervención de editoriales, el secuestro de revistas y la persecución y censura de variados artistas populares. También se realizaron grandes quemas de libros y publicaciones, como la realizada en Sarandí el 30 de agosto de 1980, donde se incineraron más de un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina (CEAL). A pesar de esto, a fines de los setenta comenzaron a observarse indicios de oposición y resistencia a la dictadura. El rock nacional y el circuito *under* fueron claros exponentes de esto. Como también lo fue un cine que se animaba, cada vez más, a presentar producciones de tono político, y un movimiento teatral –Teatro Abierto– que lograba paulatinamente enfrentar el miedo. Así, el campo cultural empezó, a partir de los ochenta, a señalar una herida cada vez más profunda e insoldable entre el régimen y la sociedad.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Como ya se ha afirmado, desde fines de los setenta y durante los primeros meses de la nueva década, se inició un proceso de desgaste del gobierno militar que se que manifestaba en la apertura paulatina de los espacios públicos, y en el surgimiento de voces disonantes desde la sociedad. Las causas de esta lenta transformación se hallaban en el fracaso manifiesto de la política económica y de los proyectos políticos de sucesión, pero especialmente, en la disgregación interna del régimen. La lucha contra la subversión era un importante factor de cohesión hacia el interior de las Fuerzas Armadas, como también fue sustancial el grado de legitimidad que propiciaba hacia la sociedad. Una vez agotada la tarea militar comenzaron a surgir disidencias ante la incapacidad de establecer bases mínimas de acuerdo alrededor de los objetivos del régimen.

Los ejes de oposición se centraron en distintos grupos, conformados, en primer lugar, por Videla y Viola, que desde el ejército constituían una fracción sumamente fuerte pero no del todo dominante. Un segundo grupo se encontraba encabezado por los generales Carlos Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, a los que se sumaba, entre otros, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, coronel Ramón J. Camps. Este sector clave en las tareas más sucias de la represión aseveraba que esta debía continuar hasta sus últimas consecuencias. Practicaron su propia experiencia estatista frustrada en el Ministerio de Planeamiento y conformaron el sector burócrata del Ejército que al frente de las principales empresas del Estado defendían intereses propios ante al avance liberal de la economía de Martínez de Hoz. Un tercer grupo estuvo dirigido por Emilio Massera, que desde la Armada se propuso conformar un frente político propio que obstaculizó primero a Videla y luego a Viola, criticando las medidas económicas y oponiéndose a toda estrategia política del sector dialoguista. Los demás oficiales de la Armada tampoco simpatizaban con la figura de Viola, principalmente por el carácter “populista” del nuevo presidente. Sin embargo, este encontrará un apoyo esporádico en el almirante Armando Lambruschini –nuevo comandante en jefe de la Armada a partir de septiembre del 78–, quien no compartía el perfil político que Massera había otorgado a la Armada.

El 29 de marzo de 1981, en medio de una crisis económica y de un desgaste significativo del gobierno, se alejó de la presidencia Videla. Lo sucedió, luego de una compleja negociación interna iniciada seis meses antes, el hasta entonces comandante en jefe del Ejército, general Roberto Viola. Una vez asumido el poder, el mando del ejército pasó a manos de Leopoldo Fortunato Galtieri, un férreo opositor del novel presidente y exponente del sector “duro” de los militares. El corto período de gobierno de Viola, de poco más de ocho meses, representó la clara situación de crisis interna del Estado autoritario y de reconstitución y demanda de la sociedad civil que, “atropellada culturalmente comenzaba a recomponer un espacio democrático y a reconquistar el respeto de sí misma, luego de varios años de autoritarismo militar” (Quiroga, 2005: 67).

Es así cómo, de hecho, la prohibición política terminó en 1981. En especial, con la constitución de la Multipartidaria que, impulsada por el radicalismo, tenía la intención de convocar a los partidos políticos, las entidades empresariales y los sindicatos. Ante el pretendido ensayo político del gobierno, estos coincidieron en no acordar una salida condicionada por los militares. El paso de los meses los fueron convirtiendo en los únicos depositarios de la legitimidad política, principalmente al incorporar en su repertorio demandas vinculadas con los derechos humanos. Y si bien representó un factor dinámico en el universo político, que criticó con dureza al gobierno y configuró una oposición estructurada, no logró conformar una alianza antidictatorial que precipitara la caída del régimen.

Este despertar político, que ligaba, aunque sutilmente, gobierno y sociedad, encontraba un obstáculo en la dimensión económica. Consciente del problema, la

introducción de cambios económicos se tornó para Viola una estrategia de acercamiento político. Así pretendió realizar algunos cambios sustanciales, designó como ministro del área a Lorenzo Sigaut y se convocó a sectores empresariales a participar de la gestión. La intención era aliviar la situación de los empresarios locales golpeados por la crisis financiera y la devaluación; pero su designio fracasó. No pudo conquistar el apoyo necesario de buena parte del empresariado argentino. Además, los grupos económicos y financieros argentinos, plenamente identificados con la política económica de Martínez de Hoz, percibieron con inquietud los cambios efectuados por el ministro Lorenzo Sigaut, especialmente en materia de política financiera

Las pretendidas reformas en la economía en conjunción con el fomentado “dialoguismo” incrementó exponencialmente la difícil relación entre el gobierno y la cúpula militar. Viola contó solo con el respaldo de los sectores moderados del Ejército y de la Fuerza Aérea. Y a medida que pasaban los días su poder se iba debilitando, tanto como aumentaba el de la Junta Militar, donde el autoritarismo reaccionario, cuya principal figura era la del jefe del Ejército, Galtieri, buscaba impedir cualquier tipo de apertura democrática. En esta interna de poder el indudable perdedor era el presidente. Entre rumores de golpe interno y una supuesta enfermedad que lo depositó en el Hospital Militar, Viola fue alejado de la presidencia. En los días siguientes el gobierno quedó interinamente en las manos de Horacio Liendo, ministro del Interior. Mientras tanto, el sector de los “duros” impulsaba a la presidencia a Galtieri, que poseía el apoyo de la Armada y de los Estados Unidos. Finalmente, la Junta emplazó a Viola a presentar su renuncia y nombró al jefe del Ejército como su sucesor. La caída de Viola cerró toda negociación y dio paso a los sectores que pretendían restituir de algún modo la coherencia que el proceso tuvo durante sus primeros años.

LA GUERRA

Desplazado Roberto Viola, el 22 de diciembre de 1981 asumió la presidencia Leopoldo F. Galtieri, fiel representante del ala dura del régimen que pretendía continuar con el Proceso en sus términos originales. Su objetivo central era recomponer el dominio autoritario sobre la sociedad. Por lo que necesitaba eliminar los enfrentamientos internos y revertir el proceso de desgaste que sufría el gobierno frente a la sociedad. De la mano de Roberto Alemann, como vimos, la economía volvió a ser reencauzada en los términos de la ortodoxia liberal. A las acciones del nuevo gobierno se contraponía una sociedad y sus instituciones, que continuaban con su paulatino despertar. Se incrementaban las presiones de los partidos políticos para una apertura democrática, de igual forma que lo hacían las demandas del movimiento de derechos humanos, que reclamaba cada vez con mayor fuerza por la suerte de los miles de desaparecidos. Otro destacable actor que ya había comenzado a tener un notable protagonismo era

el sindical. La acción gremial tendió a normalizarse desde fines de 1980, cuando fue unificada la CGT y designado como secretario general Saúl Ubaldini. A partir de ese momento, las tensiones entre la confederación y el gobierno fueron en aumento. Se produjo un paro en el 81, y una masiva movilización a San Cayetano durante ese mismo año; y el 30 de marzo del 82 un paro nacional con movilización hacia Plaza de Mayo, que sufriría una dura represión por parte del gobierno.

Por el contrario, el plano internacional mostraba sugestivos cambios para el régimen. Durante este mismo año, 1981, asume como flamante presidente de los Estados Unidos el republicano Ronald Reagan. El cambio de administración proyectó una política exterior inversamente opuesta a la del gobierno de Carter. Apoyó los gobiernos “duros” de la región, y en el caso particular de la Argentina levantó las sanciones provistas por el gobierno anterior a causa de las violaciones a los derechos humanos. Este gesto, en conjunción con la “ayuda” argentina en Centroamérica, que perpetraba el trabajo sucio que el Congreso estadounidense impedía a sus propias tropas, fortalecieron en Galtieri la idea de una Argentina estratégicamente aliada al país del norte.

En esta coyuntura fue ideado el plan de recuperación de las islas Malvinas, que como el del Beagle, fue impulsado desde la Marina. Este, en un marco externo que se leía como altamente favorable, propiciaba ante los conflictos internos una “fuga hacia delante” de la dictadura, que esperaba a través de esta acción recuperar la legitimidad perdida. La recuperación materializaba los reclamos históricos realizados por la Argentina desde 1833, momento en que las islas fueron ocupadas por los ingleses. En 1965, la Organización de Naciones Unidas (ONU) había dispuesto la negociación entre las partes, pero esta había sido desoída por Gran Bretaña. De acuerdo con los cálculos estratégicos del gobierno militar, la recuperación tendría la adhesión inmediata de los Estados Unidos, con los cuales el país se encontraba alineado. Ante este apoyo, Gran Bretaña cedería la soberanía, y sin necesidad de acciones bélicas, se habría recuperado el archipiélago.

Como sostiene Luis Alberto Romero, desde la perspectiva de los militares la recuperación de las islas permitiría: unificar las Fuerzas Armadas, ganar el apoyo de la sociedad y dar por cerrado el conflicto creado con Chile por el Canal del Beagle, ya que no se había aceptado ni rechazado la propuesta ofrecida por el Vaticano, que oficiaba de mediador en el litigio con el país lindante. Uno de los supuestos fue confirmado de inmediato, ya que iniciada la operación fue sumamente extenso el apoyo brindado por la sociedad en su conjunto, incluyendo el amplio arco de los partidos políticos, y los sindicatos, que poco después de haber efectuado una huelga se movilizaron en apoyo a la decisión tomada por la cúpula militar.

El 2 de abril se efectivizó la ocupación de las islas, y al día siguiente se declaró la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. En lo sucesivo fue nombrado gobernador del recuperado territorio Mario Benjamín Menéndez. En Gran Bretaña, la reacción del gobierno conservador de Margareth Thatcher, que

utilizó el inesperado conflicto para consolidarse internamente, no se hizo esperar. Se alistó de inmediato a parte de la Fuerza Naval y se dispuso una zona de exclusión marítima alrededor de las islas. La Comunidad Europea brindó su solidaridad a la potencia insular, y el Consejo de Seguridad de la ONU declaró a Argentina como país agresor y exigió el inmediato retiro de las islas. El país comenzaba de repente a estar aislado, la pretendida aprobación de Estados Unidos se hacía esperar. A través de su secretario de Estado, Alexander Haig, el gobierno de Reagan propuso a las partes una salida negociada que, considerada como inaceptable por los militares argentinos, fue inmediatamente desestimada. La reacción de los Estados Unidos implicó una sanción económica para la Argentina y la asistencia logística para su aliada en la OTAN, Gran Bretaña. Entonces el gobierno militar fue en busca de la solidaridad de países del tercer mundo que desearan condenar el “imperialismo” británico. El respaldo explícito lo obtuvo de varios países latinoamericanos –incluida la socialista Cuba– pero no el compromiso militar; como también consiguió un tibio apoyo de la Unión Soviética. Mientras tanto, los combates aéreos navales avanzaban en las islas, y el poderío británico pronto mostró su diferencia. La rendición argentina se produjo el 14 de junio, un poco más de dos meses de comenzada la ofensiva. El saldo fue de 650 argentinos muertos, en su mayoría soldados, y más de un millar de heridos.

LA RETIRADA

El desastre de Malvinas catapultó el régimen militar hacia su final e inició el proceso de transición democrática sin necesidad de pactar un traspaso de poder. La derrota desató una crisis interna profunda, y la sociedad aumentó su presión sobre un gobierno desgastado por los años y acusado, ahora de manera masiva, de múltiples violaciones a los derechos humanos. Al fracaso militar se sumaban el fracaso económico, que comenzó a exteriorizarse iniciada la nueva década, y el incumplimiento de los objetivos políticos que imposibilitaron gestar la tan ansiada “descendencia” al régimen. En este contexto es investido como presidente Reinaldo Bignone, el 1 de julio de 1982, sucesor de Galtieri y encargado de hacer transitar al país hacia la democracia. Impuesto su nombramiento por el Ejército, provocó la salida de la Marina y la Fuerza Aérea de la Junta y su inmediata disolución. Por primera vez desde marzo del 76 el Ejército quedó solo con el poder político.

La sociedad, por su parte, comenzaba a ocupar el espacio público y vivía una visible repolitización. La ilusión de la democracia, y su próxima realidad, empezaba a enclavarse sobre amplios sectores. Hubo una intensa participación en política, declarada en el aumento de afiliación a los partidos, o a través de movilizaciones que expresaban demandas o descontentos. Algunas de las más manifiestas fueron los denominados “vecinazos” surgidos en el Gran Buenos Aires a fines de 1982. Estos eran la acción directa de vecinos que, por medio de movilizaciones, demandaban

soluciones a determinados problemas o expresaban su descontento por el aumento de las tasas municipales.

Por otro lado, el horror producido durante esos años se hacía cada vez más público. El movimiento por los derechos humanos colocó el problema de los desaparecidos y la demanda de verdad en el centro del debate. Un eje esencial para la política renacida que impregnaba de sentido y valoración ética al debate público. Además, esta situación impulsó las primeras críticas claras y evidentes de los partidos políticos hacia el régimen autoritario. La Iglesia, cómplice y ajena por mucho tiempo a los reclamos, comenzó a alejarse del gobierno y emitió sus primeras tibias críticas. Los sindicatos continuaban con las presiones y convocaron, entre 1982 y 1983, una serie de paros generales.

Restituida la Junta Militar tres meses después de su disolución, el soberano militar logró rearticular parte de sus fuerzas para encarar la concertación. El objetivo era acordar el manejo del futuro gobierno constitucional para garantizar no ser juzgados. Abierto el proceso de desintegración del orden autoritario, solo queda el camino de la negociación para evitar una salida humillante. De esta forma presentaron su primera propuesta de negociación en noviembre del 82, que fue ampliamente rechazada por los partidos políticos y por la sociedad en general. La respuesta manifiesta fue una masiva marcha civil en defensa de la democracia; presionado, el gobierno fijó la fecha para las elecciones. Pero los militares no cedían a una entrega del gobierno sin un convenio previo, y en abril del 83 emitieron el *Documento final de la Junta Militar*, donde fijaban los puntos básicos de negociación para la transición (lucha contra el terrorismo, desaparecidos, plan económico, deuda externa, conflicto Malvinas, diferendo Beagle, y otros). Nuevamente, la clase política remarcó su negativa. En especial, sobre la exigencia de los militares sobre dos puntos: la responsabilidad por los excesos de la “guerra sucia”, y su inserción en el futuro gobierno civil. Las Fuerzas armadas harán su último intento en septiembre por medio de una ley de autoamnistía que establecía: *extinguidas las acciones penales emergentes de delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982*. Pero fue impugnada por inconstitucional por la Multipartidaria. La intensa movilización de la sociedad –como asegura Romero–, en consonancia con la propia debilidad de las Fuerzas Armadas, sumidas en un proceso veloz de deslegitimación y conflictos internos, constituyen la más firme explicación para el fracaso de un pacto entre la dirigencia política y los militares, que implicaba correr el telón sobre el pasado y asegurar una transformación no traumática del régimen de facto en otro civil.

En definitiva, no hubo una transferencia exitosa del poder. Para los militares, esta se realizó dentro del más absoluto fracaso. Como asegura Quiroga:

... la transición democrática en Argentina no se abre paso mediante un pacto.
No hay transición pactada; no hay un pacto fundante para la constitución de un

nuevo régimen, pero tampoco hay una ruptura total con el régimen anterior. Algunos de los elementos del antiguo régimen prevalecerán como saldo en el nuevo orden político. Y es aquí donde revela interés la hipótesis de “*pacto postergado*”, de un pacto diferido en el tiempo, que crea una situación no clausurada, sino más bien suspendida. Los sacudones militares en tiempo de la democracia que derivan en las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, como en el indulto presidencial, pueden explicarse en clave de pacto postergado (2004: 331, destacado en el original).

En este contexto político se aprestaban los principales candidatos partidarios para encarar la reconstitución de un gobierno democrático. La recomposición del peronismo y su aparato político estuvo, en buena medida, guiada por los líderes sindicales de mayor protagonismo durante esta etapa de transición, y propugnaban como candidato al constitucionalista Ítalo Luder. Por el lado de la Unión Cívica Radical se encontraba Raúl Alfonsín, distinguido del resto de los políticos por sus fuertes críticas a los militares, su notable reclamo por los desaparecidos, y su compromiso de justicia para los responsables del horror. Estos puntos fueron sustanciales para su futuro triunfo electoral, especialmente en contraposición a las intenciones de negociación manifestadas por el peronismo, y denunciadas por el candidato radical como un pacto cívico-militar.

Las elecciones se llevaron a cabo el 30 de octubre de 1983. La UCR logró computar el 52% de los votos, y el nuevo presidente asumió el 10 de diciembre de 1983. Finalizaba así la etapa más sangrienta nunca vivida por la Argentina, donde el recurso permanente a la muerte estuvo asociado a la imposición de transformaciones estructurales sobre la economía, la política, la cultura y la sociedad en su conjunto.

BIBLIOGRAFÍA

- Aspiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel (1986). “¿Capitanes de la industria o generales de la economía?”. *El Periodista*, n° 85.
- Basualdo, Eduardo (2006). *Estudios de historia económica argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Basualdo, Victoria y Jasinski, Alejandro (2016). “La represión a los trabajadores y el movimiento sindical, 1974-1983”. En Águila, Gabriela; Garaño, Santiago y Scatizza, Pablo, *Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina: nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado*. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Universidad Nacional de la Plata. Disponible en <http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/63>
- Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012). *Historia económica de la Argentina en el siglo xx*. Buenos Aires: Siglo XXI.

- Calveiro, Pilar (2006). *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*, Buenos Aires: Colihue.
- Canelo, Paula (2004). “La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1981)”. En Pucciarelli, Alfredo (coord.), *Empresarios, tecnócratas y liberales. La trama corporativa de la última dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Canitrot, Adolfo (1980). “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”. *Desarrollo Económico*, vol. 19, n° 76, enero-marzo.
- (1982). “Teoría y práctica del liberalismo. Política anti-inflacionaria y apertura económica en la Argentina, 1976-1981”. *Desarrollo Económico*, vol. 21, n° 82, julio-septiembre.
- Cavarozzi, Marcelo (2006). *Autoritarismo y democracia (1955-2006)*. Buenos Aires: Ariel.
- CONADEP (1984). *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. Buenos Aires: Eudeba.
- Corradi, Juan (1996). “El método de destrucción. El terror en la Argentina”. En Quiroga, Hugo y Tcach, César (comps.), *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*. Rosario: Homo Sapiens.
- Falcón, Ricardo (1996). “La resistencia obrera a la dictadura militar”. En Quiroga, Hugo y Tcach, César (comps.), *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*. Rosario: Homo Sapiens.
- Franco, Marina (2012). *Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Halperín Donghi, Tulio (1994). *La larga agonía de la Argentina peronista*. Buenos Aires: Ariel.
- Heredia, Mariana (2004). “El Proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM, CEMA”. En Pucciarelli, Alfredo (coord.), *Empresarios, tecnócratas y liberales. La trama corporativa de la última dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Jelin, Elizabeth (2005). “Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad”. En Suriano, Juan (dir.), *Dictadura y democracia (1976-1983)*. *Nueva Historia Argentina*, t. X. Buenos Aires: Sudamericana.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (noviembre de 2015). *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*. Disponible en <http://www.saij.gov.ar/responsabilidad-empresarial-delitos-lesa-humanidad-tomo-represion-trabajadores>

- dores-durante-terrorismo-estado-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-lb000183-2015-11/123456789-0abc-defg-g38-1000blsorbil
- Muleiro, Vicente y Seoane, María (2001). *El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (2003). *La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática*. Buenos Aires: Paidós.
- O'Donnell, Guillermo. *El Estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis. 1966-1973*. Buenos Aires; Editorial de Belgrano.
- (1984). “Democracia en la Argentina. Micro y macro”. En Oszlak, Oscar (comp.), *“Proceso”, crisis y transición democrática /1*, Buenos Aires: CEAL.
- Palomino, Héctor (2005). “Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales”. En Suriano, Juan (dir.), *Dictadura y democracia (1976-1983). Nueva historia argentina*, t. x. Buenos Aires: Sudamericana.
- Quiroga, Hugo (2004), *El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983*. Rosario: Homo Sapiens-Fundación Ross.
- (2005). “El tiempo del ‘Proceso’”. En Suriano, Juan (dir.), *Dictadura y democracia (1976-1983). Nueva historia argentina*, t. x. Buenos Aires: Sudamericana.
- Romero, José Luis (2001). *Breve historia contemporánea de la Argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Servetto, Alicia, (2010). *73/76. El gobierno peronista contra las provincias “montoneras”*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Sirlin, Ezequiel (2006). “La última dictadura: genocidio, desindustrialización y el recurso a la guerra (1976-1983)”. En AA.VV., *Pasados presentes. Política, economía y conflicto social en la historia argentina contemporánea*, Buenos Aires: Dialektik.
- Svampa, Maristella (2003). “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”. En James, Daniel (comp.), *Violencia, proscripción y autoritarismo, 1955-1976*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Verbitsky, Horacio (2002). *Malvinas. La última batalla de la Tercera Guerra Mundial*. Buenos Aires: Sudamericana.
- (2006). *Ezeiza*. Buenos Aires: La Página.
- (2006). *El Vuelo. “Una forma cristiana de muerte”. Confesiones de un oficial de la Armada*. Buenos Aires: Página/12-Sudamericana.
- Verbitsky, Horacio y Boholasvsky, Juan Pablo (2013). *Cuentas pendientes: los cómplices económicos de la dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.

SOMOS COMPAÑEROS, AMIGOS, HERMANOS*

Pilar Calveiro

Entre 1976 y 1982 funcionaron en Argentina 340 campos de concentración-extermio, distribuidos en todo el territorio nacional. Se registró su existencia en 11 de las 23 provincias argentinas, que concentraron personas secuestradas en todo el país. Su magnitud fue variable, tanto por el número de prisioneros como por el tamaño de las instalaciones.

Se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20 mil personas, de las cuales aproximadamente el 90 por ciento fueron asesinadas. No es posible precisar el número exacto de *desapariciones* porque, si bien la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas recibió 8960 denuncias, se sabe que muchos de los casos no fueron registrados por los familiares. Lo mismo ocurre con un cierto número de sobrevivientes que, por temor u otras razones, nunca efectuaron la denuncia de su secuestro.

Según los testimonios de algunos sobrevivientes, Juan Carlos Scarpatti afirma que por Campo de Mayo habrían pasado 3500 personas entre 1976 y 1977; Graciela Geuna dice que en La Perla hubo entre 2 mil y 1500 secuestrados; Martín Gras estima que la Escuela de Mecánica de la Armada alojó entre 3 mil y 4500 prisioneros de 1976 a 1979; el informe de Conadep indicaba que El Atlético habría alojado más de 1500 personas. Solo en estos cuatro lugares, ciertamente de los más grandes, los testigos directos hacen un cálculo que, aunque parcial por el tiempo de detención, en el más optimista de los casos, asciende a 9500 prisioneros. No parece descabellado, por lo tanto, hablar de 15 o 20 mil víctimas a nivel nacional y durante todo el período. Algunas entidades de defensa de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, se refieren a una cifra total de 30 mil desaparecidos.

Diez, veinte, treinta mil torturados, muertos, desaparecidos... En estos rangos las cifras dejan de tener una significación humana. En medio de los grandes volúmenes los hombres se transforman en números constitutivos de una cantidad, es entonces cuando se pierde la noción de que se está hablando de individuos. La

* Publicado en Calveiro, P., "Somos compañeros, amigos, hermanos", en *Podery desaparición. Los campos de concentración en la Argentina*, Buenos Aires, Colihue, 1998, pp. 29-53 y 169-174 (notas).

misma *masificación* del fenómeno actúa deshumanizándolo, convirtiéndolo en una cuestión estadística, en un *problema de registro*. Como lo señala Todorov, “un muerto es una tristeza, un millón de muertos es una información” (1993: 189). Las larguísimas listas de desaparecidos, financiadas por los organismos de derechos humanos, que se publicaban en los periódicos argentinos a partir de 1980, eran un recordatorio de que cada línea impresa, con un nombre y un apellido representaba a un hombre de carne y hueso que había sido asesinado. Por eso eran tan impactantes para la sociedad. Por eso eran tan irritativas para el poder militar.

También por eso, en este texto intentaré centrarme en las descripciones que hacen los protagonistas, en los testimonios de las víctimas específicas que, con un nombre y un apellido, con una historia política concreta hablan de estos campos desde *su* lugar en ellos. Cada testimonio es un universo completo, un hombre completo hablando de sí y de los otros. Sería suficiente tomar uno solo de ellos para dar cuenta de los fenómenos a los que me quiero referir. Sin embargo, para mostrar la vivencia desde distintos sexos, sensibilidades, militancias, lugares geográficos y captos, aunque haré referencia a otros testimonios, tomaré básicamente los siguientes: Graciela Geuna (secuestrada en el campo de concentración de La Perla, Córdoba, correspondiente al III Cuerpo de Ejército), Martín Gras (secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada, Capital Federal, correspondiente a la Armada de la República Argentina), Juan Carlos Scarpatti (secuestrado y fugado de Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires, campo de concentración correspondiente al I Cuerpo de Ejército), Claudio Tamburrini (secuestrado y fugado de la Mansión Seré, provincia de Buenos Aires, correspondiente a la Fuerza Aérea), Ana María Careaga (secuestrada en El Atlético, Capital Federal, correspondiente a la Policía Federal). Todos ellos *fugaron* en más de un sentido.

La selección también pretende ser una muestra de otras dos circunstancias: la *participación colectiva de las tres Fuerzas Armadas* y de la policía, es decir de las llamadas Fuerzas de Seguridad, y su involucramiento institucional, desde el momento en que la mayoría de los campos de concentración-exterminio se ubicó en dependencias de dichos organismos de seguridad, controlados y operados por su personal.

No abundaré en estas afirmaciones, ampliamente demostradas en el juicio que se siguió a las juntas militares en 1985. Solo me interesa resaltar que en ese proceso quedó demostrada la *actuación institucional* de las Fuerzas de Seguridad, bajo comando conjunto de las Fuerzas Armadas y siguiendo la cadena de mandos. Es decir, que el accionar “antisubversivo” se realizó *desde y dentro de la estructura y la cadena jerárquica de las Fuerzas Armadas*. “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores”, afirmó en Washington el general Santiago Omar Riveros, por si hubiera alguna duda.¹ En suma, fue

¹ Declaraciones del general de división Santiago Ornar Riveros, en Washington, el 24 de enero de 1980.

la modalidad represiva del Estado, no un hecho aislado, no un exceso de grupos fuera de control, sino una *tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente*.

Los sobrevivientes, e incluso testimonios de miembros del aparato represivo que declararon contra sus pares, dan cuenta de numerosos enfrentamientos entre las distintas armas y entre sectores internos de cada una de ellas. Geuna habla del desprecio de la oficialidad de La Perla hacia el personal policial y sus críticas al II Cuerpo de Ejército, al que consideraban demasiado “liberal”. Gras menciona las diferencias de la Armada con el Ejército y de la Escuela de Mecánica con el propio Servicio de Inteligencia Naval. Ejército y Armada despreciaban a los “panqueques”, la Fuerza Aérea, que como panqueques se daban vuelta en el aire; es decir, eran incapaces de tener posturas consistentes. Sin embargo, aunque tuvieran diferencias circunstanciales, *todos coincidieron en lo fundamental: mantener y alimentar el aparato desaparecedor, la máquina de concentración-extermínio*. Porque la característica de estos campos fue que todos ellos, independientemente de qué fuerza los controlara, llevaban como destino final a la muerte, salvo en casos verdaderamente excepcionales.

Durante el juicio de 1985, la defensa del brigadier Agosti, titular de la Fuerza Aérea, argumentó:

¿Cómo puede salvarse la contradicción que surge del alegato acusatorio del señor fiscal, donde palmariamente se demuestra que fue la Fuerza Aérea comandada por el brigadier Agosti la menos señalada en las declaraciones testimoniales y restante prueba colectada en el juicio, sea su comandante el acusado a quien se le imputen mayor número de supuestos hechos delictuosos?²

Efectivamente, había menos pruebas en contra de la Fuerza Aérea, pero este hecho que la defensa intentó capitalizar se debía precisamente a que casi no quedaban sobrevivientes. El índice de exterminio de sus prisioneros había sido altísimo. Por cierto Tamburrini, un testigo de cargo fundamental, sobrevivió gracias a una fuga de prisioneros torturados, rapados, desnudos y esposados que reveló la desesperación de los prisioneros y la torpeza militar del personal aeronáutico. Otro testigo clave, Miriam Lewin, había logrado sobrevivir como prisionera en otros campos a los que fue trasladada con posterioridad a su secuestro por parte de la Aeronáutica.

En síntesis, la *máquina de torturar, extraer información, aterrorizar y matar*, con más o menos eficiencia, funcionó y cumplió inexorablemente su ciclo en el Ejército, la Marina, la Aeronáutica, los policías. No hubo diferencias sustanciales en los procedimientos de unos y otros, aunque cada uno, a su vez, se creyera más listo y se jactara de mayor eficacia que los demás.

² Garona, José Ignacio. Abogado defensor del brigadier Agosti. *El Diario del Juicio*, n° 21, Buenos Aires, 1985.

Dentro de los campos de concentración se mantenía la organización jerárquica, basada en las líneas de mando, pero era una estructura que se superponía con la preexistente. En consecuencia, solía suceder que alguien con un rango inferior, por estar asignado a un grupo de tareas, tuviera más información y poder que un superior jerárquico dentro de la cadena de mando convencional. No obstante, se buscó intencionalmente una extensa participación de los cuadros en los trabajos represivos para ensuciar las manos de todos de alguna manera y *comprometer personalmente al conjunto* con la política institucional. En la Armada, por ejemplo, si bien hubo un grupo central de oficiales y suboficiales encargados de hacer funcionar sus campos de concentración, entre ellos la Escuela de Mecánica de la Armada, todos los oficiales participaron por lo menos seis meses en los llamados grupos de tareas. Asimismo, en el caso de la Aeronáutica se hace mención del personal rotativo. También hay constancia de algo semejante en La Perla, donde se disminuyó el número de personas que se fusilaban y se aumentó la frecuencia de las ejecuciones para hacer participar a más oficiales en dichas “ceremonias”.

Pero aquí surge de inmediato una serie de preguntas: ¿cómo es posible que unas Fuerzas Armadas, ciertamente reaccionarias y represivas, pero dentro de los límites de muchas instituciones armadas, se hayan convertido en una máquina asesina?, ¿cómo puede ocurrir que hombres que ingresaron a la profesión militar con la expectativa de defender a su Patria o, en todo caso, de acceder a los círculos privilegiados del poder como profesionales de las armas, se hayan transformado en simples ladrones muchas veces de poca monta, en secuestradores y torturadores especializados en producir las mayores dosis de dolor posibles?, ¿cómo un aviador formado para defender la soberanía nacional, y convencido de que esa era su misión en la vida, se podía dedicar a arrojar hombres vivos al mar?

No creo que los seres humanos sean potencialmente asesinos, controlados por las leyes de un Estado que neutraliza a su “lobo” interior. No creo que la simple inmunidad de la que gozaron los militares entonces los haya transformado abruptamente en monstruos, y mucho menos que todos ellos, por el hecho de haber ingresado a una institución armada, sean delincuentes en potencia. Creo más bien que fueron parte de una maquinaria, construida por ellos mismos, cuyo mecanismo los llevó a una dinámica de burocratización, rutinización y naturalización de la muerte, que aparecía como un dato dentro de una planilla de oficina. La sentencia de muerte de un hombre era solo la leyenda “QTH fijo”, sobre el legajo de un desconocido.

¿Cómo se llegó a esta rutinización, a este “vaciamiento” de la muerte? Casi todos los testimonios coinciden en que la dinámica de los campos reconocía, desde la perspectiva del prisionero, diferentes grupos y funciones especializadas entre los captores. Veamos cómo se distribuían.

LAS PATOTAS

La *patota* era el grupo operativo que “chupaba”, es decir, que realizaba la operación de secuestro de los prisioneros, ya fuera en la calle, en su domicilio o en su lugar de trabajo.

Por lo regular, el “blanco” llegaba definido, de manera que el grupo operativo solo recibía una orden que indicaba a quién debía secuestrar y dónde. Se limitaba entonces a planificar y ejecutar una acción militar corriendo el menor riesgo posible. Como podía ser que el “blanco” estuviera armado y se defendiera, ante cualquier situación dudosa, la patota disparaba “en defensa propia”.

Si en cambio se planteaba un combate abierto podía pedir ayuda y entonces se producían los operativos espectaculares con camiones del Ejército, helicópteros y decenas de soldados saltando y apostándose en las azoteas. En este caso se ponía en juego la llamada “superioridad táctica” de las fuerzas conjuntas. Pero por lo general realizaba tristes secuestros en los que entre cuatro, seis u ocho hombres armados “reducían” a uno, rodeándolo sin posibilidad de defensa y apaleándolo de inmediato para evitar todo riesgo, al más puro estilo de una auténtica patota.

Si ocupaban una casa, en recompensa por el riesgo que habían corrido, cobraban su “botín de guerra”, es decir, saqueaban y rapiñaban cuanto encontraban.

En general, desconocían la razón del operativo, la supuesta importancia del “blanco” y su nivel de compromiso, real o hipotético con la subversión. Sin embargo, solían exagerar la “peligrosidad” de la víctima porque de esa manera su trabajo resultaba más importante y justificable. Según el esquema, de acuerdo con su propia representación, ellos se limitaban a detener delincuentes peligrosos y cometían “pequeñas infracciones” como quedarse con algunas pertenencias ajenas. “(Nosotros) entrábamos, pateábamos las mesas, agarrábamos de las mechas a alguno, lo metíamos en el auto y se acabó. Lo que ustedes no entienden es que la policía hace normalmente eso y no lo ven mal”.³ El señalamiento del cabo Vilariño, miembro de una de estas patotas, es exacto; la policía realizaba habitualmente esas prácticas contra los delincuentes y prácticamente nadie lo veía mal... porque eran delincuentes, otros. Era “normal”.

LOS GRUPOS DE INTELIGENCIA

Por otra parte, estaba *el grupo de inteligencia*, es decir, los que manejaban la información existente y de acuerdo con ella orientaban el “interrogatorio” (tortura) para que fuera productivo, o sea, arrojara información de utilidad.

³ Vilariño, Raúl David. *La Semana*, “Yo secuestré, maté y vi torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada”, n° 370, 5/1/1984.

Este grupo recibía al prisionero, al “paquete”, ya reducido, golpeado y sin posibilidad de defensa, y procedía a extraerle los datos necesarios para capturar a otras personas, armamento o cualquier tipo de bien útil en las tareas de contra-insurgencia. Justificaba su trabajo con el argumento de que el funcionamiento armado, clandestino y compartimentado de la guerrilla hacía imposible combatirla con eficiencia por medio de los métodos de represión convencionales; era necesario “arrancarle” la información que permitiría “salvar otras vidas”.

Como ya se señaló, la práctica de la tortura, primero sobre los delincuentes comunes y luego sobre los prisioneros políticos, ya estaba para entonces profundamente arraigada. No constituía una novedad, puesto que se había realizado a partir de los años treinta y de manera sistemática y uniforme desde la década del sesenta. La policía, que tenía larga experiencia en la práctica de la picana, enseñó las técnicas; a su vez, los cursos de contra-insurgencia en Panamá instruyeron a algunos oficiales en los métodos eficientes y novedosos de “interrogatorio”.

Señala Aldo Rico, perpetuo defensor de la “guerra sucia”:

Yo capturo a un guerrillero, sé que pertenece a una organización [se podría agregar, o presumo y quiero confirmarlo, o pertenece a la periferia de esa organización, o es familiar de un guerrillero, o...] que está operando y preparando un atentado terrorista en, por ejemplo, un colegio [jamás los guerrilleros argentinos hicieron atentados en colegios]... Mi obligación es obtener rápidamente la información para impedirlo... Hay que hacer hablar al prisionero de alguna forma. Ese es el tema y eso es lo que se debe enfrentar. La guerra subversiva es una guerra especial. No hay ética. El tema es si yo permito que el guerrillero se ampare en los derechos constitucionales u obtengo rápida información para evitar un daño mayor (Rico, Aldo. En Grecco, Jorge y González, Gustavo. Argentina: El Ejército que tenemos, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, p. 138 (Los textos entre corchetes son míos).

Por su parte, los mandos dicen: “Nadie dijo que aquí había que torturar. Lo efectivo era que se consiguiera la información. Era lo que a mí me importaba”.⁴

Como resultado, después de *hacer hablar al prisionero*, los oficiales de inteligencia producían un informe que señalaba los datos obtenidos, la información que podía conducir a la “patota” a nuevos “blancos” y su estimación sobre el grado de peligrosidad y “colaboración” del “chupado”. También ellos eran un eslabón, si no aséptico, profesional, de especialistas eficientemente entrenados.

⁴ General Suárez Mason, Comandante de I Cuerpo de Ejército. *Siete-Días*, “Toda la verdad sobre Suárez Mason”, n° 876, 4/4/1984.

LOS GUARDIAS

Entonces, ya desposeído de su nombre y con un número de identificación, el detenido pasaba a ser uno más de los cuerpos que el *aparato de vigilancia y mantenimiento* del campo debía controlar. Las guardias internos no tenían conocimiento de quiénes eran los secuestrados ni por qué estaban allí. Tampoco tenían capacidad alguna de decisión sobre su suerte. Las guardias, generalmente constituidas por gente muy joven y de bajo nivel jerárquico, solo eran responsables de hacer cumplir unas normas que tampoco ellos habían establecido, “obedecían órdenes”.

La rigidez de la disciplina y la crueldad del trato se “justificaba” por la alta peligrosidad de los prisioneros, de quienes muchas veces no llegaban a conocer ni siquiera sus rostros, eternamente encapuchados. Es interesante observar que todos ellos *necesitaban* creer que los “chupados” eran *subversivos*, es decir menos que hombres (según palabras del general Camps, “no desaparecieron personas sino subversivos”),⁵ verdadera amenaza pública que era preciso *exterminar* en aras de un bien común incuestionable; solo así podían convalidar su trabajo y desplegar en él la ferocidad de que dan cuenta los testimonios. También hay que señalar que esta lógica se repetía, punto por punto, en amplios sectores de la sociedad; la prensa de la época da cuenta de la “imperiosa necesidad” de erradicar la “amenaza subversiva” con métodos “excepcionales” de los que esos guardias eran parte. Un día, llegaba la orden de traslado con una lista, a veces elaborada incluso fuera del campo de concentración como en el caso de La Perla, y el guardia se limitaba a organizar una fila y entregar los “paquetes”.

LOS DESAPARECEDORES DE CADÁVERES

Aquí los testimonios tienen lagunas. El secreto que rodeaba a los procedimientos de traslado hace que sea una de las partes del proceso que más se desconocen. Se sabe que estaban rodeados de una enorme tensión y violencia. En unos casos, se transportaba a los prisioneros lejos del campo, se los fusilaba, atados y amordazados, y se procedía al entierro y cremación de los cadáveres, o bien a tirar los cuerpos en lugares públicos simulando enfrentamientos.

Pero el método que aparentemente se adoptó de manera masiva consistía en que el personal del campo inyectaba a los prisioneros con somníferos y los cargaba en camiones, presumiblemente manejados por personal ajeno al funcionamiento interno. La aplicación del somnífero arrebató al prisionero su última posibilidad de resistencia pero también sus rasgos más elementales de humanidad: la conciencia, el movimiento. Los “bultos” amordazados, adormecidos, maniatados, encapuchados, los “paquetes” se arrojaban vivos al mar. En suma, el dispositivo de los campos se

⁵ Camps, Ramón. *La Semana*, “En Punta del Este...”, n° 368, 22/12/1983.

encargaba de *fraccionar, segmentarizar* su funcionamiento para que nadie se sintiera finalmente responsable. “Mientras mayor sea la cantidad de personas involucradas en una acción, menor será la *probabilidad* de que cualquiera de ellas se considere un agente causal con responsabilidad moral” (Kelman y Hamilton, 1990: 183). La fragmentación del trabajo “suspende” la responsabilidad moral, aunque en los hechos siempre existen posibilidades de elección, aunque sean mínimas.

La autorización por parte de los superiores jerárquicos “legalizaba” los procedimientos, parecía justificarlos de manera automática, dejando al subordinado sin otra alternativa *aparente* que la obediencia. El hecho de formar parte de un dispositivo del cual se es solo un engranaje creaba una *sensación de impotencia* que además de desalentar una resistencia virtualmente inexistente fortalecía la *sensación de falta de responsabilidad*. Los mecanismos para despojar a las víctimas de sus atributos humanos facilitaban la *ejecución mecánica y rutinaria* de las órdenes. En suma, un dispositivo montado para acallar conciencias, previamente entrenadas para el silencio, la obediencia y la muerte.

Todo adoptaba la *aparición de un procedimiento burocrático*: información que se recibe, se procesa, se recicla; formularios que indican lo realizado; legajos que registran nombres y números; órdenes que se reciben y se cumplen; acciones autorizadas por el comando superior; turnos de guardia “24 por 48”; vuelos nocturnos ordenados por una superioridad vaga, sin nombre ni apellido. Todo era impersonal, la víctima y el victimario, órdenes verbales, “paquetes” que se reciben y se entregan, “bultos” que se arrojan o se entierran. Cada hombre como la simple pieza de un mecanismo mucho más vasto que no puede controlar ni detener, que disemina el terror y acalla las conciencias.

La fragmentación de la maquinaria asesina no fue un invento de los campos de concentración argentinos. En realidad, es asombroso ver qué poco inventó la Junta Militar y hasta qué punto sus procedimientos se asemejan a las demás experiencias concentracionarias de este siglo. No creo que ello se deba a que “copiaron” o se “inspiraron” en los campos de concentración nazis o estalinistas, sino más bien en la similitud de los poderes totalizantes y, por lo mismo, en la semejanza que existe en sus formas de castigo, represión y normalización.

Aunque los asesinos de guerra nazis, como Eichman o Hoess, participaron en la ejecución de millones de personas, lo hicieron ocupándose también de un pequeño eslabón de la cadena. Por eso no se sentían responsables de sus actos. Eichman se defendió durante el juicio que se le siguió afirmando: “Yo no tenía nada que ver con la ejecución de judíos, no he matado ni a uno solo” (Todorov, 1993: 180).

De manera semejante, en Argentina existieron 172 niños desaparecidos y consta, por denuncias realizadas a la Conadep, la tortura de algunos de ellos así como el asesinato de otros. Un caso demostrado, por la aparición de los cadáveres, es el de la familia de Matilde Lanuscou, cuyos hijos de seis y cuatro años fueron asesinados con sus padres, militantes Montoneros, en un operativo realizado por el Ejército y

la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 1976. No obstante, el general Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en esa fecha, respondió durante una entrevista: “Personalmente no eliminé a ningún niño”,⁶ como si ese hecho lo eximiera de la responsabilidad.

Para ver cómo opera la fragmentación desde adentro, es ilustrativa una entrevista realizada por *La Semana* a Raúl David Vilariño, cabo de la Marina que prestó servicios en los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada. En ella se desarrolló el siguiente diálogo:

—Una vez que ustedes entregaban a las personas secuestradas a la Jefatura del Grupo de Tareas, ¿qué sucedía?

—Bueno, eso era parte de *otro grupo*.

—¿Qué otro grupo?

—El Grupo de Tareas estaba dividido en dos subgrupos: los que salían a la calle y los que hacían el denominado “trabajo sucio”.

—¿Usted a qué grupo pertenecía?

—¿Yo? Al que salía a la calle... Nosotros *sólo llevábamos al individuo* a la Escuela de Mecánica de la Armada... Siempre esperé que me tiraran antes de tirar yo... Yo, por mi parte, entiendo por asesino a aquel que mata a sangre fría. Yo, gracias a Dios, eso no lo hice nunca... los chupadores deteníamos al tipo y *lo entregábamos*. Y *perdíamos el contacto con el tipo*... lo dejabas allí. *Lo más peligroso para el detenido comenzaba allí*... nunca me iba a tocar torturar. Porque a eso se dedicaban otras personas... No está dentro de mí el torturar. *No lo siento*...

[Sigue Vilariño]... Allá por el ‘78 [se van las patotas y] se quedan los torturadores, los que habían matado, los que habían quemado... Veo cómo se había perdido sensibilidad... Noté que faltaba sensibilidad, delicadeza... O que ya estaban tan, tan, tan *rutinados* con eso que ya era normal que... No sé cómo explicarle: se les había hecho carne.

—¿Qué era lo que se había hecho rutina?

—El torturar, el no sentir sensibilidad, el no importar los gritos, el *no tener delicadeza cuando uno comía*: contaban herejías.⁷

⁶ Camps, Ramón. *La Semana*, “En Punta del Este...”, n° 368, 22/12/1983.

⁷ Vilariño, Raúl David. *La Semana*, “Yo secuestré, maté y vi torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada”, n°370, 5/1/1984.

Aunque parezca extraño, también los oficiales de inteligencia, los torturadores, el alma de todo el dispositivo, descargaban su responsabilidad de alguna manera. Cuenta Graciela Geuna, sobreviviente de La Perla:

Barreiro es un buen representante de los torturadores, porque tenía lucidez y conciencia de su participación en las tareas represivas. Su pensamiento era circular en ese sentido: su propia responsabilidad personal la transfería a los militantes populares y, fundamentalmente, a las direcciones partidarias, porque no cedían. Es decir, la tortura era necesaria ante la resistencia de la gente. Si la gente no resistía él no tenía que torturar.⁸

Por el secreto que los envuelve, no hay testimonios directos de los desaparecidos de cuerpos, pero se puede suponer que tendrían justificaciones similares y la misma sensación de carecer de responsabilidad. En última instancia ellos solo ponían el punto final de un proceso irreversible; arrojaban “paquetes” al mar.

Es significativo el uso del lenguaje, que evitaba ciertas palabras reemplazándolas por otras: en los campos no se tortura, se “interroga”, luego los torturadores son simples “interrogadores”. No se mata, se “manda para arriba” o “se hace la boleta”. No se secuestra, se “chupa”. No hay picanas, hay “máquinas”; no hay asfixia, hay “submarino”. No hay masacres colectivas, hay “traslados”, “cochecitos”, “ventiladores”. También se evita toda mención a la humanidad del prisionero. Por lo general no se habla de personas, gente, hombres, sino de bultos, paquetes, a lo sumo subversivos, que se arrojan, se van para arriba, se quiebran. El uso de palabras sustitutas resulta significativo porque denota intenciones bastante obvias, como la deshumanización de las víctimas, pero cumple también un objetivo “tranquilizador” que inocentiza las acciones más penadas por el código moral de la sociedad, como matar y torturar. Ayuda, en este sentido a “aliviar” la responsabilidad del personal militar. Por eso, la furia del personal de La Perla cuando Geuna los llamó asesinos: “... se reiniciaron los golpes, deteniéndose en el castigo solo para decirme ‘Decí asesino...’ y cuando yo lo hacía ellos volvían a castigarme”.⁹

En suma, el dispositivo desaparecedor de personas y cuerpos incluye, por medio de la fragmentación y la burocratización, mecanismos para diluir la responsabilidad, igualarla y, en última instancia, desaparecerla. Es muy significativo que las Fuerzas Armadas hayan negado la existencia de los campos como una tecnología gubernamental de represión, como una instancia en la que el Estado se convirtió en el perseguidor y exterminador institucional. Al soslayar este hecho se ignora la responsabilidad fundamental que le cabe al aparato del Estado en la metodología

⁸ Geuna, Graciela. Testimonio presentado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU).

⁹ *Ibíd.*, segunda parte, p. 8.

concentracionaria, en cuanto que los campos de concentración-extermio solo son posibles desde y a partir de él.

Dentro de las Fuerzas Armadas, la política de involucramiento general también tendía a un compartir responsabilidades, cuyo objetivo era disolverlas. Dentro del trabajo que fuera, se trataba de que todos los niveles y un buen número de efectivos tuviera una participación directa, aunque fuera circunstancial. Sus funciones podían ser distintas pero todos debían estar implicados. Dar consistencia y cohesión a las Fuerzas Armadas en torno a la necesidad de exterminar a una parte de la población por medio de la metodología de la desaparición era un objetivo prioritario, que se cumplió en forma cabal. Es un hecho que, si hubo un punto en que las Fuerzas Armadas fueron monolíticas después de 1976, fue la defensa de la “guerra sucia”, la reivindicación de su necesidad y lo inevitable de la metodología empleada. Desde los carapintadas hasta los sectores más legalistas lo declararon públicamente. Esto es efecto de una auténtica cohesión política interna que no reside tanto en la adscripción a determinada doctrina, sino más bien en la certeza del rol político dirigente que le cabe a las Fuerzas Armadas y en su autoadjudicado derecho de “salvar” la sociedad cada vez que lo consideren necesario y con la metodología *ad hoc* tan noble empresa.

Sin embargo, así como en la cerrada defensa que la institución hace de su actuación se puede detectar un alto grado de cohesión interna, también se adivina el compromiso de la complicidad. La convicción ideológica se entrelaza con la culpa, la recubre, atenuándola y encubriéndola. Al mismo tiempo, impide el deslinde de responsabilidades que el dispositivo desaparecedor se encargó de enmarañar, igualar y esfumar.

LA VIDA ENTRE LA MUERTE

Intentaré describir aquí cómo eran los campos de concentración y cómo era la vida del prisionero dentro de ellos, para mirar el rimbombante poder militar desde ese lugar oculto y negado.

En general, funcionaban disimulados dentro de una *dependencia militar o policial*. A pesar de que se sabía de su existencia, los movimientos de las patotas se trataban de disimular como parte de la dinámica ordinaria de dichas instituciones. No obstante, se trataba de un secreto en el que no se ponía demasiado empeño. Los vecinos de la Mansión Seré cuentan que oían los gritos y veían “movimientos extraños”. La Aeronáutica hizo funcionar un centro clandestino de detención en el policlínico Alejandro Posadas. Los movimientos ocurrían a la vista tanto de los empleados como de las personas que se atendían en el establecimiento, “ocasionando un generalizado terror que provocó el silencio de todos”.¹⁰ En efecto, es preciso

¹⁰ Conadep, *Nunca más*, p. 148.

mostrar una fracción de lo que permanece oculto para diseminar el terror, cuyo efecto inmediato es el silencio y la inmovilidad.

Para el funcionamiento del campo de concentración no se requerían grandes instalaciones. Se habilitaba alguna oficina para desarrollar las actividades de inteligencia, uno o varios cuartos para torturar a los que solían llamar “quirófanos”, a veces un cuarto que funcionaba como enfermería y una cuadra o galerón donde se hacinaba a los prisioneros.

La *población* masiva de los campos estaba conformada por militantes de las organizaciones armadas, por sus periferias, por activistas políticos de la izquierda en general, por activistas sindicales y por miembros de los grupos de derechos humanos. Pero cabe señalar que, si en la búsqueda de estas personas las fuerzas de seguridad se cruzaban con un vecino, un hijo o el padre de alguno de los implicados que les pudiera servir, que les pudiera perjudicar o que simplemente fuera un testigo incómodo, esta era razón suficiente para que dicha persona, cualquiera que fuera su edad, pasara a ser un “chupado” más, con el mismo destino final que el resto. Existieron incluso casos de personas secuestradas simplemente por presenciar un operativo que se pretendía mantener en secreto, y que luego fueron asesinados con sus compañeros casuales de cautiverio.

Si bien el grupo mayoritario entre los prisioneros estaba formado por militantes políticos y sindicales, muchos de ellos ligados a las organizaciones armadas, y si bien las *víctimas casuales* constituían la excepción (aunque llegaron a alcanzar un número absoluto considerable), también se registraron casos en los que el dispositivo concentracionario sirvió para canalizar intereses estrictamente delictivos de algunos sectores militares, que “desaparecían” personas para cobrar un rescate o consumir una venganza personal.

Aunque el grupo de víctimas casuales fuera minoritario en términos numéricos, desempeñaba un papel importante en la *diseminación del terror* tanto dentro del campo como fuera de él. Eran la prueba irrefutable de la *arbitrariedad* del sistema y de su verdadera *omnipotencia*. Es que además del objetivo político de exterminio de una fuerza de oposición, los militares buscaban la demostración de un *poder absoluto*, capaz de decidir sobre la vida y la muerte, de arraigar la certeza de que esta decisión es una función legítima del poder. Recuerda Gras que los militares:

... sostenían que el exterminio y la desaparición definitiva tenían una finalidad mayor: sus efectos “expansivos”, es decir el terror generalizado. Puesto que, si bien el aniquilamiento físico tenía como objetivo central la destrucción de las organizaciones políticas calificadas como “subversivas”, la represión alcanzaba al mismo tiempo a una periferia muy amplia de personas directa o indirectamente vinculadas a los reprimidos (familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.), haciendo sentir especialmente sus efectos al conjunto de estructuras

sociales consideradas en sí como “subversivas por el nivel de infiltración del enemigo” (sindicatos, universidades, algunos estamentos profesionales).¹¹

Si los campos solo hubieran encerrado a militantes, aunque igualmente monstruosos en términos éticos, hubieran respondido a otra lógica de poder. Su capacidad para diseminar el terror consistía justamente en esta arbitrariedad que se erigía sobre la sociedad como amenaza constante, incierta y generalizada. Una vez que se ponía en funcionamiento el dispositivo desaparecedor, aunque se dirigiera inicialmente a un objetivo preciso, podía arrastrar en su mecanismo virtualmente a cualquiera. Desde ese momento, el dispositivo echaba a andar y ya no se podía detener.

Cuando el “chupado” llegaba al campo de concentración, casi invariablemente era sometido a tormento. Una vez que concluía el período de interrogatorio-tortura, que analizaré más adelante, el secuestrado, generalmente herido, muy dañado física, psíquica y espiritualmente, pasaba a incorporarse a la vida cotidiana del campo.

De los testimonios se desprende un modelo de *organización física del espacio*, con dos variables fundamentales para el alojamiento de los presos: el sistema de celdas y el de cuchetas, generalmente llamadas cuchas. Las cuchetas eran compartimentos de madera aglomerada, sin techo, de unos 80 centímetros de ancho por 200 centímetros de largo, en las que cabía una persona acostada sobre un colchón de goma espuma. Los tabiques laterales tenían alrededor de 80 centímetros de alto, de manera que impedían la visibilidad de la persona que se alojaba en su interior, pero permitían que el guardia, estando parado o sentado, pudiera verlas a todas simultáneamente, símil de un pequeño panóptico. Dejaban una pequeña abertura al frente por la que se podía sacar al prisionero.

Por su parte, las celdas podían ser para una o dos personas, aunque solían alojar a más. Sus dimensiones eran aproximadamente de 2,50 x 1,50 metros y también estaban provistas de un colchón semejante, una puerta y, en la misma, una mirilla por la que se podía ver en cualquier momento el interior. En otros lugares, como la Mansión Seré, los prisioneros permanecían sencillamente tirados en el piso de una habitación, con su correspondiente trozo de goma espuma. En suma, un sistema de *compartimentos o contenedores*, ya fueran de material o madera, para guardar y controlar cuerpos, no hombres, cuerpos.

Desde la llegada a la cuadra en La Perla, a los pabellones en Campo de Mayo, a la capucha en la Escuela de Mecánica, a las celdas en El Atlético o como se llamara al depósito correspondiente, el prisionero perdía su nombre, su más elemental pertenencia, y se le asignaba un número al que debía responder. Comenzaba el proceso de *desaparición* de la identidad, cuyo punto final serían los NN (Lila Pastoriza: 348; Pilar Calveiro: 362; Oscar Alfredo González: X 51). Los números reemplazaban a nombres

¹¹ Gras, Martín. Testimonio ante la CADHU, Ginebra, diciembre de 1980, Archivo Nacional de la Memoria, p. 6.

y apellidos, personas vivientes que ya habían *desaparecido* del mundo de los vivos y ahora *desaparecerían* desde dentro de sí mismos, en un proceso de “vaciamiento” que pretendía no dejar la menor huella. Cuerpos sin identidad, muertos sin cadáver ni nombre: desaparecidos. Como en el sueño nazi, supresión de la identidad, hombres que se desvanecen en la noche y la niebla.

Los detenidos estaban permanentemente *encapuchados* o “tabicados”, es decir, con los ojos vendados, *para impedir toda visibilidad*. Cualquier transgresión a esa norma era severamente castigada. También estaban esposados, o con grilletes, como en la Escuela de Mecánica de la Armada y La Perla, o atados por los pies a una cadena que sujetaba a todos los presos, como en Campo de Mayo. Esto variaba de acuerdo con el campo, pero la idea era que existiera *algún dispositivo que limitara su movilidad*. En la Mansión Seré, además de esposar y atar a los prisioneros, los mantenían desnudos, para evitar las fugas. Al respecto relata Tamburrini: “... nos hacían dormir con las esposas puestas, pero desnudos; nos habían sacado la ropa hacía un mes o un mes y medio y nos ataban los pies con unas ‘correas’ de cuero para que durmiéramos casi en una posición de cuclillas”.¹²

Los prisioneros permanecían *acostados y en silencio*; estaba absolutamente prohibido hablar entre ellos. Solo podían moverse para ir al baño, cosa que sucedía una, dos o tres veces por día, según el campo y la época. Los guardias formaban a los presos y los llevaban colectivamente al *baño* o también podían hacer circular un balde en donde todos hacían sus necesidades.

Los testimonios de cualquier campo coinciden en *la oscuridad, el silencio y la inmovilidad*. En El Atlético: “No nos imaginábamos cómo íbamos a poder contar hasta qué punto vivíamos constantemente encerrados en una celda, *a oscuras, sin poder ver, sin poder hablar, sin poder caminar*”.¹³

En Campo de Mayo:

Este tipo de tratamiento consistía en mantener al prisionero todo el tiempo de su permanencia en el campo encapuchado, sentado y sin hablar ni moverse. Tal vez esta frase no sirva para granear lo que significaba en realidad, porque se puede llegar a imaginar que cuando digo *todo el tiempo sentado y encapuchado* esto es una forma de decir, pero no es así, a los prisioneros se los obligaba a permanecer *sentados sin respaldo y en el suelo*, es decir sin apoyarse a la pared, desde que se levantaban a las 6 horas, hasta que se acostaban, a las 20 horas, en esa posición, es decir 14 horas. Y cuando digo *sin hablar y sin moverse* significa exactamente eso, sin hablar, es decir sin pronunciar palabra durante todo el día, y sin moverse, quiere decir sin siquiera girar la cabeza... Un compañero dejó de figurar en la lista de los interrogadores por alguna causa y de esta

¹² Tamburrini, Claudio. Testimonio en el Juicio a los Comandantes. *Diario del Juicio*, N° 7.

¹³ Careaga, Ana María. En Gabetta, 1984: 166.

forma “quedó olvidado”... Este compañero estuvo sentado, encapuchado, sin hablar, y sin moverse durante seis meses, esperando la muerte.¹⁴

En La Perla:

Para nosotros fue la oscuridad total... No encuentro en mi memoria ninguna imagen de luz. No sabía dónde estaba. Todo era noche y silencio. Silencio solo interrumpido por los gritos de los prisioneros torturados y los llantos de dolor... También tenía alterado el sentido de la distancia... Vivíamos 70 personas en un recinto de 60 metros de largo, siempre acostados...¹⁵

En la Escuela de Mecánica de la Armada: “En el tercer piso se encontraba el sector destinado a alojar a los prisioneros... también en el tercer piso estaba ubicado el pañol grande, lugar destinado al almacenamiento del botín de guerra (ropas, zapatos, heladeras, cocinas, estufas, muebles, etc.)”.¹⁶ Hombres, objetos, almacenamientos semejantes.

Depósito de cuerpos ordenados, acostados, inmóviles, sin posibilidad de ver, sin emitir sonido, como anticipo de la muerte. Como si ese poder, que se pretendía casi divino precisamente por su derecho de vida y de muerte, pudiera matar antes de matar; anular selectivamente a su antojo prácticamente todos los vestigios de humanidad de un individuo, preservando sus funciones vitales para una eventual necesidad de uso posterior (alguna información no arrancada, alguna utilidad imprevisible, la mayor rentabilidad de un traslado colectivo).

La *comida* era solo la imprescindible para mantener la vida hasta el momento en que el dispositivo lo considerara necesario; en consecuencia, era escasa y muy mala. Se repartía dos veces al día y constituía uno de los pocos momentos de cierto relajamiento. Sin embargo, en algunos casos, podía faltar durante días enteros; por cierto, muchos testimonios dan cuenta del hambre como uno de los tormentos que se agregaban a la vida dentro de los campos.

La comida era desastrosa, o muy cruda o hecha un masacote de tan cocinada, sin gusto... Estábamos tan hambrientos, habíamos aprendido tan bien a agudizar el oído, que apenas empezaban los preparativos, allá lejos, en la entrada, nos desesperábamos por el ruido de las cucharas y los platos de metal y del carrito que traía la comida. Se puede decir, casi, que vivíamos esperando la comida... la hora del almuerzo era la mejor, por eso apenas terminábamos y cerraban la puerta, comenzábamos a esperar la cena.¹⁷

¹⁴ Scarpati, Juan Carlos. Testimonio presentado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Los destacados están en el original.

¹⁵ Geuna, Graciela. Testimonio presentado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU).

¹⁶ Gras, Martín. Testimonio ante la CADHU, Ginebra, diciembre de 1980.

¹⁷ Careaga, Ana María. Testimonio. En Gabetta, 1984: 168.

Por la escasez de alimento, por la posibilidad de realizar algunos movimientos para comer, por el nexo obvio que existe entre la comida y la vida, el momento de comer es uno de los pocos que se registra como agradable: "... poco a poco, comencé a esperar la hora de la comida con ansiedad, porque con la comida volvía la vida a través del ruido de las ollas, con el ruido de la gente. Parecía que la cuadra donde estábamos los prisioneros despertaba entonces a la existencia".¹⁸

Si la comida era uno de los pocos momentos deseados, el más temido, el más oscuro era el *traslado*, la experiencia final. Se realizaba con una frecuencia variable. Casi siempre, los *desaparecidos* ocultaban cuidadosamente que los traslados llevaban a la muerte para evitar así toda posible oposición de los condenados al ordenado cumplimiento del destino que les imponía la institución. La certeza de la propia muerte podía provocar una reacción de mayor "endurecimiento" en los prisioneros durante la tortura, durante su permanencia en el campo o en la misma circunstancia de traslado. Ante todo, la maquinaria debía funcionar según las previsiones; es decir, sin resistencia.

Prácticamente en todos los campos se ocultaba, al tiempo que se sugería, que el destino final era la muerte. Los testimonios de los sobrevivientes demuestran la existencia de muchos secuestrados que prefirieron "desconocer" la suerte que les aguardaba; la negación de una realidad difícil de asumir se sumaba a los mensajes contradictorios del campo, provocando un aferramiento de ciertos prisioneros a las versiones más optimistas e increíbles que circulaban dentro de los campos como la existencia de centros secretos de reeducación, la legalización de los desaparecidos y otros finales felices. Muchos desaparecidos se fueron al traslado con cepillos de dientes y objetos personales, con una sensación de alivio que no intuía la muerte inmediata. Otros no; salieron de los campos despidiéndose de sus compañeros y conscientes de su final, como Graciela Doldán, quien pidió morir sin que le vendaran los ojos y se dedicó a pensar un rato antes de que la trasladaran "para no desperdiciar" los últimos minutos de su vida. Aunque no supieran exactamente cómo, sin embargo, los prisioneros *sabían*. También ellos sabían y negaban, pero las conjeturas, lo que se veía por debajo de las vendas y las capuchas, las amenazas proferidas durante la tortura ("Vas a dormir en el fondo del mar", "Acá al que se haga el loco, le ponemos un Pentonaval y se va para arriba"), las infidencias de guardias que no soportaban la presión a la que ellos mismos estaban sometidos, el clima que rodeaba a los traslados les permitía *saber*.

Estos son relatos de lo que *se sabía*. En la Escuela de Mecánica de la Armada:

... los días de traslado se adoptaban medidas severas de seguridad y se aislaba el sótano. Los prisioneros debían permanecer en sus celdas en silencio. Aproximadamente a las 17 horas de cada miércoles se procedía a designar a quienes

¹⁸ Geuna, Graciela. Testimonio. En Gabetta, 1984: 20.

serían trasladados, que eran conducidos uno por uno a la enfermería, en la situación en que estuviesen, vestidos o semidesnudos, con frío o con calor.¹⁹

El día del traslado reinaba un clima muy tenso. No sabíamos si ese día nos iba a tocar o no... se comenzaba a llamar a los detenidos por número... Eran llevados a la enfermería del sótano, donde los esperaba el enfermero que les aplicaba una inyección para adormecerlos, pero que no los mataba. Así, vivos, eran sacados por la puerta lateral del sótano e introducidos en un camión. Bastante adormecidos eran llevados al Aeroparque, introducidos en un avión que volaba hacia el sur, mar adentro, donde eran tirados vivos... El capitán Acosta prohibió al principio toda referencia al tema “traslados”.²⁰

En La Perla:

... cada traslado era precedido por una serie de procedimientos que nos ponían en tensión. Se controlaba que la gente estuviera bien vendada, en su respectiva colchoneta y se procedía a seleccionar a los trasladados mencionando en voz alta su nombre (cuando éramos pocos) o su número (cuando la cantidad de prisioneros era mayor). A veces, simplemente se tocaba al seleccionado para que se incorporara sin hablar... Los prisioneros que iban a ser trasladados eran amordazados... Luego se procedía a llevar a los prisioneros seleccionados hasta un camión marca Mercedes Benz, que irónicamente llamábamos Menéndez Benz, por alusión al apellido del general que comandaba el III Cuerpo... Antes de descender del vehículo los prisioneros eran maniatados. Luego se los bajaba y se los obligaba a arrodillarse delante del pozo y se los fusilaba... Luego, los cuerpos acribillados a balazos, ya en los pozos, eran cubiertos con alquitrán e incinerados...²¹

Los traslados eran el recuerdo permanente de la muerte inminente. Pero no cualquier muerte “sino esa muerte que era como morir sin desaparecer, o desaparecer sin morir. Una muerte en la que el que iba a morir no tenía ninguna participación; era como morir sin luchar, como morir estando muerto o como no morir nunca”.²² Por su parte, la permanencia en la mayoría de los campos representaba el peligro constante de retornar a la tortura. Esta posibilidad nunca quedaba excluida. Muerte y tortura: los disparadores del terror, omnipresente en la experiencia concentracionaria.

Los campos, concebidos como depósitos de cuerpos dóciles que esperaban la muerte, fueron posibles por la *diseminación del terror*... “un espacio de terror que

¹⁹ Ciras, Martín. Testimonio presentado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, p. 42.

²⁰ Martí, Ana María; Solara de Osatinsky, Sara; Milia de Pifies, Alicia. Testimonio ante la Asamblea Nacional Francesa.

²¹ Geuna, Graciela. Testimonio. En Gabetta, 1984: 17-18.

²² Testimonio de un sobreviviente de Campo de Mayo. En Conadep. *Nunca más*, p. 184.

no era ni de aquí, ni de allá, ni de parte alguna conocida... donde no estaban vivos ni tampoco muertos... Y también allí quedaban atrapados los espíritus apenados de los parientes, los vecinos, los amigos” (Buda, 1988: 18). Un terror que se ejercía *sobre toda la sociedad*, un terror que se había adueñado de los hombres desde antes de su captura y que se había inscrito en sus cuerpos por medio de la tortura y el arrasamiento de su individualidad. El hermano gemelo del terror es *la parálisis, el “anonadamiento”* del que habla Schreer. Esa parálisis, efecto del mismo dispositivo asesino del campo, es la que invade tanto a la sociedad frente al fenómeno de la desaparición de personas como al prisionero dentro del campo. Las largas filas de judíos entrando sin resistencia a los crematorios de Auschwitz, las filas de “trasladados” en los campos argentinos, aceptando dócilmente la inyección y la muerte, solo se explican después del arrasamiento que produjo en ellos el terror. El campo es efecto y foco de diseminación del terror generalizado de los Estados totalizantes.

BIBLIOGRAFÍA

- Buda, Blanca (1988). *Cuerpo I, Zona IV*. Buenos Aires: Contrapunto.
- Gabetta, Carlos (1984). *Todos somos subversivos*, Buenos Aires: Bruguera.
- Grecco, Jorge y González, Gustavo (1990). *Argentina: El Ejército que tenemos*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Kelman, Herbert y Hamilton, Lee (1990). *Crímenes de obediencia*, Buenos Aires: Planeta.
- Todorov, Tzvetan (1993). *Frente al límite*, México: Siglo XXI.

CARTA ABIERTA A LA JUNTA MILITAR

Rodolfo Walsh

Buenos Aires, 24 de marzo de 1977

1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese “ser nacional” que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guar-niciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedi-mientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.¹

Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamen-te este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuen-tra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.

La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el “submarino”, el soplete de las actualizaciones contemporáneas.²

Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura abso-luta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.

3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas

¹ Desde enero de 1977 la Junta empezó a publicar nóminas incompletas de nuevos detenidos y de “liberados” que en su mayoría no son tales sino procesados que dejan de estar a su dispo-sición pero siguen presos. Los nombres de millares de prisioneros son aún secreto militar y las condiciones para su tortura y posterior fusilamiento permanecen intactas.

² El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despellejado en vida, el ex diputado radical Mario Amaya muerto a palos, el ex diputado Muñiz Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de una sobreviviente: “Picana en los brazos, las manos, los muslos, cerca de la boca cada vez que lloraba o rezaba... Cada veinte minutos abrían la puerta y me decían que me iban hacer fiambre con la máquina de sierra que se escuchaba”.

de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.

Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras.

Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.

Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de “cuenta-cadáveres” que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.

El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos.³

Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento.

Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor.⁴

³ “Cadena Informativa”, mensaje Nro. 4, febrero de 1977.

⁴ Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta: “El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Angel Mosse, José

El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas.⁵

Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, “con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles” según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron.⁶

Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora.

En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea,⁷ sin que se enteren

Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este último había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga”.

⁵ En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una proyección anual da la cifra de 1500. La presunción de que puede ascender al doble se funda en que desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el aumento global de la represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta es la siguiente. Muertos en combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en secreto: 2.000. Varios. 100. Total: 4.000.

⁶ Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias.

⁷ “Programa” dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-27.

el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre “violencias de distintos signos” ni el árbitro justo entre “dos terrorismos”, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte.⁸

La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay.⁹

La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas.

Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de “Prensa Libre” Horacio Novillo, apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales.

A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: “La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal”.¹⁰

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

⁸ El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje publicado por “La Opinión” el 3-10-76 admitió que “el terrorismo de derecha no es tal” sino “un anticuerpo”.

⁹ El general Prats, último ministro de Ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en setiembre de 1974. Los ex parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruíz aparecieron acribillados el 2-5-76. El cadáver del general Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2-6-76, después que el ministro del Interior y ex jefe de Policía de Isabel Martínez, general Harguindegy, lo acusó de “simular” su secuestro.

¹⁰ Teniente Coronel Hugo Ildebrando Pascarelli según “La Razón” del 12-6-76. Jefe del Grupo I de Artillería de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1977.

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar,¹¹ resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%,¹² prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.¹³

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la “racionalización”.

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.

Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar “el país”, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre

¹¹ Unión de Bancos Suizos, dato correspondiente a junio de 1976. Después la situación se agravó aún más.

¹² Diario “Clarín”.

¹³ Entre los dirigentes nacionales secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE, Jorge Di Pasquale de Farmacia, Oscar Smith de Luz y Fuerza. Los secuestros y asesinatos de delegados han sido particularmente graves en metalúrgicos y navales.

llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepticia.

Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.

6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.

Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos".¹⁴

El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".

Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional.

¹⁴ "Prensa Libre", 16-12-76.

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.

PARTE II
LAS TRANSFORMACIONES
DEL MUNDO DEL TRABAJO

BUENOS AIRES, NEOLIBERALISMO Y DESPUÉS CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS Y RESPUESTAS POPULARES*

*Marcela Cerrutti y Alejandro Grimson***

INTRODUCCIÓN

En el panorama de América Latina, el caso de Buenos Aires y de la Argentina se destaca por su carácter extremo en varios aspectos. Fue uno de los países donde las reformas neoliberales se aplicaron de manera más radical y, justamente por ello, fue donde hubo transformaciones más relevantes en las características de su estructura social y en la estructura de oportunidades laborales. De manera análoga, han cambiado los paisajes de las organizaciones populares, de sus formas de acción y sus agendas de reclamos, generando durante un período también una alta intensidad de las protestas.

Durante la mayor parte del siglo xx, la sociedad argentina se distinguió de la de otros países periféricos por sus amplias capas medias y su estructura social relativamente más igualitaria. Pero desde el último golpe de Estado, en 1976, la Argentina ha experimentado una significativa transformación vinculada al abandono del modelo sustitutivo de importaciones y a la adopción de un nuevo modelo basado en la apertura y desregulación económica. Los cambios radicales en la economía fueron promovidos y acompañados por una serie de transformaciones institucionales, entre las cuales se destaca la modificación en el rol del Estado. La liberalización

* Publicado en Cerrutti, Marcela y Grimson, Alejandro, “Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares”, en Portes, A.; Roberts, B. y Grimson, A. (eds.), *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*, Buenos Aires, Prometeo, 2005.

** Agradecemos los comentarios de Alejandro Portes, Bryan Roberts y los integrantes de este proyecto en los diferentes países. También agradecemos las sugerencias de Elizabeth Jelin.

de los mercados, incluyendo el mercado de trabajo, fue un pilar central de las políticas implementadas, en particular desde comienzos de la década de 1990. Si bien numerosos países de América Latina han adoptado políticas de corte neoliberal en las últimas dos décadas, la Argentina constituye tal vez un caso paradigmático por la radicalidad en la aplicación de dichas políticas y por la celeridad del proceso.

En los últimos años la Argentina ha ocupado un lugar especial tanto por la dimensión de su caída económica y el significativo deterioro en los niveles de vida de la población como por las diversas respuestas surgidas desde la sociedad civil.

El propósito de este artículo es describir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las drásticas transformaciones experimentadas por la sociedad y las diversas respuestas que la sociedad civil ha ido delineando a lo largo de dicho proceso. Se propone examinar los efectos de las políticas neoliberales en la capacidad de la estructura productiva de generar trabajo y consecuentemente ingresos para sus pobladores, en la expresión espacial de los cambios en la estructura de oportunidades y en las diferentes formas de reacción de la población.

En primer lugar, se abordan los cambios en el modelo económico e institucional y sus efectos sociales. En este sentido, se examinan las principales tendencias del mercado de trabajo, principalmente aquellas referidas al desempleo, la precarización del empleo y la evolución del sector informal. Asimismo, se analizan los impactos de dichas transformaciones en la distribución del ingreso y la extensión de la pobreza e indigencia y en la segmentación espacial de la población. En segundo lugar, se describen las diferentes respuestas de la sociedad civil a estas grandes transformaciones. Específicamente, se abordan los cambios en la agenda de los sectores populares, sus distintos tipos de organizaciones, formas de identificación y modos de acción.

PARTE 1

CAMBIO EN LOS MODELOS ECONÓMICOS Y SUS IMPACTOS SOCIALES

1.1. De la crisis del modelo sustitutivo al modelo neoliberal

Desde mediados de la década de 1970, las instituciones y políticas que dominaron la etapa de sustitución de importaciones fueron transformadas o abiertamente desmanteladas. La crisis del modelo sustitutivo y la adopción de políticas de ajuste estructural y de desregulación económica constituye un proceso complejo desarrollado a lo largo de dos décadas.

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, los instrumentos utilizados durante la etapa sustitutiva fueron la protección tarifaria, los subsidios a la actividad industrial y una amplia intervención estatal en la economía (Thorp, 1994).

Hasta la década de 1950, el proceso de industrialización fue fundamentalmente trabajo intensivo basado en la sustitución de importaciones de bienes no durables por producción local. En este período el desarrollo de la industria estuvo vinculado a satisfacer un creciente consumo interno estimulado por una clase trabajadora en expansión (Dorfman, 1983).

Durante esos años la centralidad económica, social y política de Buenos Aires fue reforzada. Economías de escala y un mercado de consumo en expansión estimularon la radicación y concentración de la industria manufacturera y de un conjunto de servicios en el AMBA.¹

A pesar de su relativo éxito, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de sustitución de importaciones comenzó a evidenciar sus flaquezas en la Argentina, fundamentalmente debido a la falta endémica de dinamismo de sus exportaciones (Mallon y Sourrouille, 1975). Las recurrentes crisis en la balanza comercial, a las que se sumaron agudos conflictos distributivos, reiteradas crisis políticas y cambios en las condiciones internacionales condujeron a un largo período (1975-1990) de crisis y estancamiento económico, el cual incluyó un intento catastrófico de liberalización económica entre 1976-1982² y luego la administración de una gigantesca deuda externa (el cuadro 1 resume los principales ciclos económicos desde 1975 en adelante).

Con el advenimiento de la democracia en 1984, la economía se vio estrangulada por los requerimientos de pagos de la deuda externa. El gobierno intentó repetidamente y sin mucho éxito estabilizar la economía y cumplir con sus obligaciones externas (Schvartzer, 1989).

Si bien los años ochenta fueron caracterizados por la Comisión Económica para América Latina como la “década perdida” para América Latina en su conjunto, la Argentina fue uno de los países que peor la padeció. Solo a modo de ejemplo, entre 1981 y 1989 su producto bruto interno se redujo un 23,5% (CEPAL, 1990).

Al inicio de la década de 1990, y con un nuevo gobierno del Partido Justicialista, se comenzó a implementar una agresiva combinación de políticas de estabilización, desregulación y reformas estructurales (Bustos, 1995; Centro de Estudios Bonaerenses, 1995). Las principales políticas adoptadas fueron: un sistema de convertibilidad,³ la privatización de empresas y servicios públicos, la desregulación del mercado

¹ Ya en 1939 el AMBA concentraba el 60% de la producción industrial argentina (Meichtry, 1993).

² En 1976 se produjo el último golpe militar en la Argentina, durante el cual se procedió a abrir la economía a la competencia externa, a liberalizar el mercado financiero, a desregular actividades económicas y a desarticular y exterminar demandas populares (Canitrot, 1981).

³ Con el objeto de controlar expectativas inflacionarias, el gobierno puso su oferta de dinero bajo un régimen de patrón dólar. La Ley de Convertibilidad adoptó un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar estadounidense y restringió rigurosamente la emisión de dinero por parte del Banco Central de la República Argentina, convirtiéndolo en una caja de conversión. La coexistencia de este tipo de cambio con una, si bien declinante, positiva tasa de inflación

externo, de capitales y el laboral, la reforma fiscal y la integración regional (Mercosur). Estas políticas, como se expondrá a lo largo del capítulo, tuvieron una serie de impactos negativos tanto en la estructura económica como en los mercados de trabajo.

Cuadro 1. Argentina: los períodos económicos

Períodos macroeconómicos	Observaciones distributivas	Ingreso real per cápita de los hogares, Gran Buenos Aires	Nivel PBI (1980 = 100)		Empleo urbano (1980=100)	Desempleo urbano (%)	Inflación mensual (%)	Salario real	Tipo de cambio real
			Total	No-agrícola					
(1980=100)									
1973-1975 Estabilización populista	1974	110,1	90,0	89,2	92,8	3,4	3,0	118,5	125,3
1976-1980 Estabilización ortodoxa con liberalización	1980	100,0	101,8	101,4	100,0	2,5	4,2	100,0	100,0
1981-1984 Ajuste caótico y regreso al populismo									
1985-1986 Estabilización transitoria	1986	91,7	99,7	98,7	108,5	5,2	7,6	92,6	268,2
1987-1990 Deslizamiento hacia la hiperinflación	1990	62,8	91,2	97,4	114,8	6,2	13,9	62,9	168,7
1991-2000 Estabilización y nuevo régimen de la economía	1991	72,7	100,5	99,4	118,8	6,0	1,9	70,0	124,5
	1994	82,4	126,9	126,8	120,4	12,2	0,6	81,0	101,9
	1997	81,0	141,5	142,1	129,1	13,7	0,3	75,4	105,1
	2000	81,2	139,9	140,2		14,7	0,1	78,4	113,3

Fuente: Altimir, Beccaria y González Rosada (2002).

produjo a lo largo de los años una significativa sobrevaluación del peso. Dicha sobrevaluación afectó muy negativamente las posibilidades competitivas de la industria local.

Utilizando poderes especiales,⁴ el gobierno privatizó las principales empresas públicas –producción de gas y de petróleo, teléfonos, electricidad, provisión de agua y ferrocarriles, entre otras–, redujo o eliminó regímenes de promoción minera e industrial y desreguló el sistema financiero. Asimismo, redujo los aportes patronales al sistema de seguridad social, privatizó dicho sistema e introdujo una reforma de la legislación laboral tendiente a disminuir los costos de contratación y despido.

Estas políticas incrementaron de forma significativa el comercio exterior argentino.⁵ Sin embargo, la combinación de medidas de apertura económica con una moneda local crecientemente sobrevaluada tuvieron como consecuencia un significativo desbalance entre importaciones y exportaciones. El impacto más evidente fue la crisis de la industria local y los crecientes problemas en la balanza comercial.

Luego de 1991 y por unos pocos años, la economía no solo tuvo tasas de inflación despreciables sino un alto crecimiento,⁶ sostenido en gran medida por el influjo de capitales extranjeros dirigidos a las empresas privatizadas y de inversiones de corto plazo. A pesar del crecimiento económico, el desempleo abierto comenzó a crecer (del 5,2% en 1991 al 12,2% en 1994). En 1995, el nuevo modelo sufre una masiva fuga de capitales externos a consecuencia de la suba de intereses en los Estados Unidos y de la crisis de 1994 en México.⁷ La inflexibilidad del sistema de convertibilidad, incapaz de atenuar los impactos del *shock*, y la carencia de políticas sociales activas provocaron un salto histórico en la ya alta tasa de desempleo abierto (del 12% en 1994 a más del 18% en 1995) y en los niveles de pobreza.

No fue hasta finales de 1996 cuando la economía comenzó a dar algunos signos de recuperación. Sin embargo, dicha recuperación no duró mucho: en 1998 la economía entró nuevamente en recesión y siguió deteriorándose.

A finales de 2001 la aguda situación económica y social, sumada a una evidente inacción gubernamental, disparó una dramática crisis institucional que culminó con el derrocamiento del nuevo gobierno que había surgido en oposición al del anterior presidente Carlos Menem (1989-1999). El gobierno de transición surgido a partir de dicha crisis, terminó con el plan de convertibilidad. De manera consecuente, tuvo lugar una fuerte devaluación cambiaria, la cual, en el plano económico, comenzó a tener rápidamente efectos positivos en la balanza comercial y en la producción de bienes locales. En 2003 asume un nuevo gobierno elegido por el voto. Este nuevo gobierno, aunque es también de corte justicialista, ha proclamado un cambio de modelo. El proceso recién comienza.

⁴ Ley de Emergencia Económica y Ley de Reforma del Estado.

⁵ El comercio externo total creció de 12.164 millones de dólares en 1987 a 37.283 millones en 1994.

⁶ Las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno fueron entre 1991 y 1994 del 9,9%, 8,9%, 5,2% y 7,2%, respectivamente (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaría de Programación Económica. Economic Report, 1998).

⁷ En 1995 el Producto Bruto Interno decreció un 5,1%. *Ibíd.*

1.2. Los impactos en el mercado de trabajo (1980-2000)

Los cambios radicales en las políticas económicas e institucionales implementados durante la década de 1990 tuvieron impactos significativos en las características y dinámica de los mercados de trabajo. A partir de la crisis del modelo sustitutivo, y a lo largo de la década de 1990, cuando se adoptaron políticas agresivas de corte neoliberal, la estructura de oportunidades laborales se transformó de manera significativa, impactando de un modo negativo tanto en la distribución del ingreso (que se tornó más inequitativa) como en los niveles de pobreza e indigencia.

Para comprender las tendencias en el mercado de trabajo habría que tomar en consideración lo ocurrido en tres ámbitos. Uno es el de las diferencias entre las estructuras de oportunidades laborales generadas por el modelo de sustitución de importaciones frente al modelo de apertura y desregulación económica. El segundo se vincula, por un lado, con el rol y la capacidad del Estado para regular actividades y dirimir entre intereses contrapuestos de diferentes grupos sociales frente a la capacidad de dichos grupos de interés (corporaciones, sindicatos, etcétera) de negociar/imponer sus propios intereses. El tercero tiene que ver con la naturaleza de la estructura social argentina y con los cambios sociodemográficos muy asociados a dicha estructura. Más precisamente, se hace referencia a la evolución y características de la mano de obra en cuanto a sus perfiles de capital humano, género, etcétera.

A pesar de la serie de ciclos económicos transitados, una característica general de las últimas dos décadas es la creciente dificultad de la estructura productiva argentina para generar puestos de trabajo (más aún de buena calidad). Tanto los niveles de desempleo abierto como los de subempleo han crecido dramáticamente.

Asimismo, los marcos institucionales que regularon las relaciones y condiciones laborales sufrieron modificaciones, todas ellas tendientes a lograr una mayor “flexibilización” en las normas de contratación y despido de trabajadores. Estos cambios, junto con el significativo deterioro en la demanda de empleo, han producido no solo un número creciente de puestos de trabajo precarios, sino que también afectaron en forma notoria la capacidad de los trabajadores para resistirlos.

Por otra parte, como se verá más adelante, la estructura de la oferta laboral ha variado. Hoy son muchas más mujeres las que están dispuestas a trabajar y han tenido lugar mejoramientos muy importantes en los logros educativos de la población trabajadora.⁸

⁸ Entre 1991 y 1999, dentro de la fuerza de trabajo, el porcentaje de personas con al menos estudios secundarios completos se incrementó del 28,7% al 47,4%. Este mejoramiento del capital humano en un contexto de alto desempleo condujo a un proceso de devaluación de credenciales.

El aumento en el desempleo. La cara visible de la exclusión social

Durante los años noventa una porción importante de la fuerza de trabajo fue literalmente excluida del empleo. Entre 1991 y 2001, la tasa de desempleo abierto creció en un 267%. Sin embargo, es posible distinguir diversas fases a lo largo de la década. De 1991 a 1993 la economía argentina creció en forma acumulada un 25%. En ese breve período tanto el número de empleos como el de personas dispuestas a ocuparlos también crecieron. A poco de andar, el nuevo modelo comenzó a evidenciar un rasgo preocupante, al menos desde el punto de vista social. Aun en su época de auge, la economía crecía, pero con enormes dificultades para generar un número adecuado de puestos de trabajo. Entre 1993 y 1994 la oferta de trabajo continuó creciendo, mientras que la demanda comenzó a estancarse. Consecuentemente, la tasa de desempleo abierto continuó en alza. Para 1995, la situación empeoró en forma significativa y el desempleo abierto alcanzó un nivel histórico: en el área alcanzó el 20,2%.⁹

A pesar de la recuperación económica posterior, la baja en el nivel de desempleo no fue muy relevante (decreció alrededor de un 20% entre 1995 y 1998). De 1998 a 2001 la economía entró en su última faz recesiva y la tasa de desempleo volvió a crecer de manera considerable (Beccaria, 2002).

Las razones que explican este incremento tan significativo del desempleo abierto son múltiples. Una se relaciona con los procesos de privatización de empresas estatales. A pesar de que la falta de datos rigurosos no permite establecer la pérdida exacta de puestos de trabajo debido a este factor, existe evidencia fragmentaria que indica que dicha pérdida fue significativa.¹⁰ Por ejemplo, en Buenos Aires la tasa de desempleo en la administración pública se duplicó entre 1991 y 1992, y luego de decrecer en 1993, volvió a incrementarse en 1994. Asimismo, el porcentaje de empleados estatales sobre el empleo urbano total cayó del 19% en 1990 al 14% en 1995 (Marshall, 1998).

Una segunda razón de la disminución de puestos de trabajo se relaciona con el proceso de reorganización productiva llevado a cabo en grandes firmas. Este proceso fue favorecido por el tipo de cambio y la consecuente facilidad para efectuar inversiones en bienes de capital en un contexto de mayor competitividad externa. En otras palabras, durante el período las firmas que se mantuvieron en el mercado incrementaron su productividad y ajustaron su fuerza de trabajo. Así, por ejemplo entre 1990 y 1995, mientras el valor bruto agregado en las firmas manufactureras creció un 14,5% (Ministerio de Economía, 1996) el número de trabajadores en dichas firmas disminuyó en un 10%.

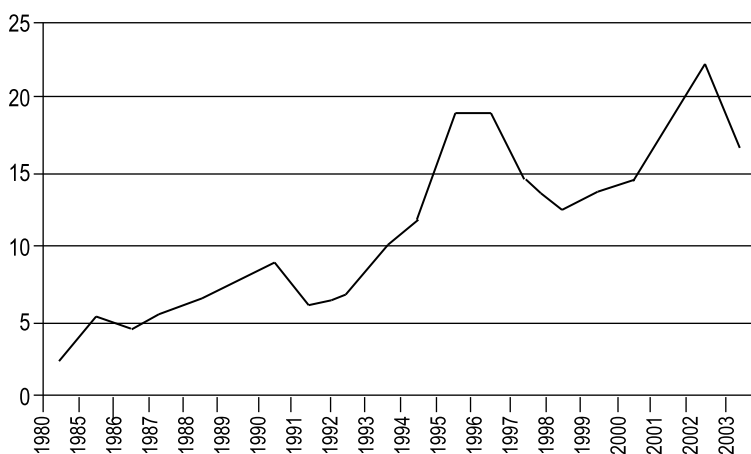
⁹ Entre 1991 y 1995 el subempleo se incrementó del 7,9 al 11,3% (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995).

¹⁰ Marshall (1998), usando datos oficiales, estimó que entre 1989 y 1993, el empleo en empresas públicas decreció de 350.000 a 67.000 puestos.

Una tercera razón del achicamiento de la demanda laboral se relaciona con las dificultades de las empresas medianas y pequeñas para operar en un mercado de bienes y productos mucho más competitivo. Entre mediados de la década de 1980 y mediados de la de 1990 el número de establecimientos pequeños y medianos decreció alrededor de un 24%, lo que representó una pérdida neta de 140.000 puestos de trabajo (CEPAL, 1997). En ese mismo período, el sector comercio, que tradicionalmente ocupa una importante porción de la mano de obra, también sufrió una importante reestructuración, sobre todo una mayor concentración de la actividad en establecimientos de gran escala.

El gráfico 1 muestra el notable incremento en los niveles de desempleo abierto desde 1980 hasta 2003, el cual afectó con mayor intensidad a los hogares bajo la línea de pobreza.¹¹

Gráfico 1. Tasas de desempleo abierto. Área Metropolitana de Buenos Aires, 1980-2003



Fuente: Encuestas Permanentes de Hogares.

A partir del año 2003, con la incipiente mejora de la economía, el altísimo nivel de desempleo evidenciado en el año 2002 comienza a decrecer de forma significativa. La tasa de desempleo abierto para el total del AMBA, que alcanzó el 22% en mayo de 2002, se reduce al 16,4% en tan solo un año.

¹¹ En los aglomerados urbanos más importantes del país, en el año 2000, mientras que la tasa de desempleo de los hogares en los dos deciles de ingresos per cápita más bajos era del 44,6% y 27,1%, la de los hogares en el noveno y décimo era tan solo del 7,5% y del 2,7% (Altimir, Beccaria y González Rozada, 2002).

La oferta laboral también sufrió transformaciones

Uno de los cambios más salientes que tuvo lugar durante el período fue la aceleración en el ritmo de incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo. Así, por ejemplo, durante los primeros años de la década de 1990 el aumento en la tasa de participación femenina fue superior al incremento experimentado durante toda la década de 1980. En la actualidad, en el AMBA, 6 de cada 10 mujeres de entre 20 y 49 años forman parte de la fuerza de trabajo.¹²

Si bien las explicaciones tradicionales sobre el incremento de la participación económica femenina enfatizan los efectos positivos del mejoramiento en los niveles educativos, los cambios en los valores culturales sobre los roles de género y la expansión y diversificación de ciertas actividades económicas, como es el sector terciario, estas razones aparentan ser insuficientes para explicar la celeridad del cambio ocurrido. En particular, si se toma en cuenta que la mayor propensión a trabajar de las mujeres coincidió con un aumento significativo en la tasa de desempleo abierto.

La incorporación de mujeres a la fuerza de trabajo, tanto como empleadas o desocupadas, se ha vinculado al creciente desempleo e inestabilidad laboral de los varones jefes de hogar. Cerrutti (2000) encontró que en aquellos hogares cuyos jefes habían pasado de ser ocupados a ser desocupados o inactivos, la probabilidad de que las mujeres se incorporaran al mercado de trabajo era mucho más elevada que en los hogares donde los jefes permanecían inactivos. También durante la década de 1990 cobró mayor importancia la codependencia de los comportamientos laborales de los miembros de las parejas.¹³ Wainerman y Cerrutti (2001) mostraron cómo tanto la condición de actividad de los maridos como el tipo de ocupación (más o menos inestable o precaria) fueron cobrando mayor relevancia –en comparación con variables familiares como el número y edad de los hijos– en los modelos explicativos de la decisión de las mujeres de participar en el mercado de trabajo.

La creciente importancia del trabajo asalariado desprotegido

Otro de los fenómenos más significativos que caracterizan a los cambios experimentados en el mercado de trabajo urbano argentino ha sido el aumento sistemático del empleo desprotegido o “precario”.¹⁴ Una clara indicación de este fenómeno se manifiesta en el incremento significativo de trabajadores sin beneficios laborales

¹² Salvo otra indicación, los datos que se presentan sobre la evolución de los mercados de trabajo provienen de diferentes relevamientos de la Encuesta Permanente de Hogares, relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

¹³ En Buenos Aires, las familias con doble proveedor aumentaron del 25,5% en 1980 al 45,3% en 2000 (Wainerman y Cerrutti, 2001).

¹⁴ Cabe señalar que desde 1980 al año 2000, la composición sectorial de la mano de obra varió en forma considerable. La proporción de trabajadores en la industria manufacturera en el AMBA descendió del 31,7% al 17,4%.

(contribución a la seguridad social, seguro médico, etcétera) entre los asalariados. La incidencia de este tipo de empleo creció en forma sistemática desde la década de 1980 en adelante. El porcentaje de asalariados protegidos (con todos los beneficios laborales) pasó del 67% en 1980 al 55,7% en 2001. Fue aún más dramática la evolución de quienes no cuentan con dichos beneficios: del 12,8% al 35,8%.

Tradicionalmente, han sido los pequeños establecimientos (los que ocupan hasta 5 empleados) en donde se concentra la mayoría del trabajo asalariado precario. En ellos durante las últimas dos décadas el porcentaje de asalariados desprotegidos más que se duplicó (del 34,3% al 71,4%). Cabría, sin embargo, señalar que el proceso de precarización también alcanzó a los asalariados que trabajan en establecimientos de mayor tamaño (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Área Metropolitana de Buenos Aires. Evolución del trabajo asalariado desprotegido por tamaño de establecimiento

Beneficios laborales	1980	1991	2001
Total de trabajadores asalariados	100	100	100
Con algunos beneficios	20,2	11,8	8,5
Con todos los beneficios	67,0	59,1	55,7
Sin beneficios	12,8	29,1	35,8
Asalariados en establecimientos de hasta 5 ocupados	100	100	100
Con algunos beneficios	32,3	14,9	9,0
Con todos los beneficios	33,3	26,4	19,6
Sin beneficios	34,3	58,6	71,4
Asalariados en establecimientos de entre 6 y 99 ocupados	100	100	100
Con algunos beneficios	18,8	10,6	8,0
Con todos los beneficios	73,5	70,4	65,2
Sin beneficios	7,7	19,0	26,8
Asalariados en establecimientos de más de 100 ocupados	100	100	100
Con algunos beneficios	12,0	9,3	8,9
Con todos los beneficios	85,7	87,2	83,7
Sin beneficios	2,3	3,5	7,4

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre 1980, 1991, 2001.

En el AMBA, la probabilidad de ser un asalariado desprotegido se ha duplicado entre 1980 y 1991 y algo similar ocurrió entre 1991 y 2001.¹⁵ Tanto en el pasado como en el presente el ser un asalariado desprotegido se encuentra negativamente asociado tanto con la edad como con el nivel educativo. Es decir, son los asalariados más jóvenes y los que tienen niveles educativos más bajos quienes con mayor frecuencia se encuentran en esa situación. Asimismo, los sectores en los que más se concentra el empleo desprotegido son la construcción y los servicios personales.

Cambios en el sector informal

En la Argentina, durante la etapa de sustitución de importaciones, el sector informal –entendido como aquel que concentra actividades de tamaño reducido y baja productividad, generadas por un excedente en la oferta de trabajo– fue, en comparación con otros países de América Latina, relativamente pequeño. Esto no significa que la relevancia de actividades desarrolladas en pequeña escala (empresas pequeñas y medianas) fuera insignificante. Por el contrario, estas empresas, aun las comandadas por trabajadores por cuenta propia, han tradicionalmente concentrado una porción considerable de la fuerza de trabajo urbana.

Sin embargo, debido a varias razones, estas actividades en conjunto no podían ser consideradas como típicamente “informales”. Por un lado, la Argentina se ha caracterizado de modo histórico por tener tasas de crecimiento poblacional relativamente bajas, y en consecuencia, una menor presión de la oferta de trabajo en comparación con otros países de la región. Por el otro, debido a la estructura social del país. La Argentina fue por muchas décadas un país próspero, con una estructura social caracterizada por una extensa clase media. En gran medida, estas actividades de pequeña escala se desarrollaban por y para atender las necesidades de la clase media. La fuerza de trabajo integrada a dichas actividades tenía, en general, niveles de calificación medios y una porción relevante contaba con beneficios laborales.

Con la crisis del modelo sustitutivo y el deterioro general en las condiciones del mercado de trabajo, las características del empleo en pequeña escala, así como el trabajo independiente, comenzaron a cambiar. Desde 1980 hasta 1991, cuando comenzaron a aplicarse las políticas de ajuste estructural y de desregulación y liberalización de la economía, estas actividades comenzaron en forma creciente a cumplir un rol de “refugio” de trabajadores despedidos del sector formal o de aquellos que no podrían encontrar un empleo favorable. Así, por ejemplo, para el AMBA, la proporción de trabajadores en actividades en empresas con menos de 6 empleados, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, se incrementaron del

¹⁵ Estos datos fueron estimados a partir de una regresión logística que integra datos correspondientes a 1980, 1991 y 2001, y que predice la probabilidad de ser un trabajador desprotegido, manteniendo constante una serie de variables sociodemográficas (ver columna 4 de la tabla 1, Anexo).

44,9% al 54,5%. Este aumento coincidió con un cambio sectorial de la mano de obra, es decir, con una disminución de trabajadores en la industria manufacturera y un incremento de trabajadores en actividades de tipo terciarias. En 1991 la probabilidad de trabajar en pequeños establecimientos fue un 25% más alta que en 1980, evidenciando así el rol relevante que cumplieron estas actividades.¹⁶

A partir de 1991 el sector de actividades independientes y pequeñas empresas perdió en gran medida su capacidad para absorber trabajadores desocupados o desplazados del sector formal. Este proceso se relaciona con el hecho de que las actividades informales tanto en la industria como en el comercio comenzaron a tener grandes dificultades para competir en un mercado crecientemente inundado por productos importados y por una caída en la capacidad de compra de los sectores bajos debido al desempleo. Extensos sectores económicos se vieron afectados por la apertura unilateral de la economía, como la industria del vestido y del calzado, y los servicios de reparación, entre otros. El pequeño comercio también se vio negativamente afectado por la radicación de supermercados y *shoppings centers*. El desplazamiento masivo de trabajadores, junto con la presión de la fuerza de trabajo en búsqueda de empleo para compensar la pérdida en los niveles de vida familiar comenzaron a poner en evidencia la creciente dificultad del sector informal para actuar como refugio de la mano de obra.

Durante la década de 1990 se da entonces una situación algo paradójica: el sector informal no solo no aumenta, sino que parece disminuir al mismo tiempo que el desempleo llega a un récord histórico, y que persiste el incremento del trabajo asalariado desprotegido, aun en los establecimientos formales.¹⁷

Datos sobre los factores sociodemográficos asociados al trabajo en estas actividades indicarían que ha tenido lugar una modificación en su composición, y que actualmente en su conjunto estarían ganando mayor relevancia aquellas de carácter más marginal.¹⁸

¹⁶ Se refiere a actividades en pequeña escala no profesionales. Dicha probabilidad fue estimada a partir de un modelo de regresión logística con datos de 1980, 1991 y 2001. Predice la probabilidad de trabajar en establecimientos de hasta 5 ocupados, manteniendo constante el efecto de una serie de factores tales como el sexo, la edad, el nivel educativo y la rama de actividad (ver columna 4, tabla 2, Anexo).

¹⁷ El análisis multivariado que controla por el efecto de los cambios en la composición de la mano de obra muestra que, durante los noventa, la probabilidad de trabajar en actividades no profesionales en pequeña escala o como trabajador por cuenta propia no aumentaron respecto de la década de 1980 (columna 4, tabla 2, Anexo).

¹⁸ Si bien tradicionalmente son las mujeres y las personas de mayor edad quienes tienen las probabilidades más elevadas de ser trabajadores en actividades no profesionales de pequeña escala, el rol del capital humano ha venido tornándose más significativo. Quienes terminaron la escolaridad secundaria tienen hoy una probabilidad menor con relación a los menos educados de trabajar en el sector informal. Estos resultados podrían sugerir un cambio en la

Un mercado de trabajo mucho más vulnerable

Al establecer una tipología de situaciones laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y examinar su evolución a lo largo del tiempo surge un resultado dramático (ver cuadro 3). Tomando a la fuerza de trabajo en su conjunto, se observa que dentro de la población económicamente activa, el conjunto de personas en situación laboral vulnerable (es decir, los desempleados, los trabajadores por cuenta propia de baja calificación y los trabajadores asalariados desprotegidos) han pasado de ser de menos de un tercio en 1980 a la mitad del total en 2001.

Cuadro 3. Área Metropolitana de Buenos Aires. Evolución de la población económicamente activa y población ocupada por tipo de trabajo

Tipo de trabajo	1980		1M1		2001	
Patrón calificado	2,3	2,4	2,8	3,0	2,7	3,4
Patrón no calificado	3,2	3,3	2,7	2,8	1,3	1,6
Trabajador por cuenta propia calificado	5,8	5,9	8,6	9,2	7,5	9,4
Trabajador por cuenta propia no calificado	17,4	17,9	17,2	18,3	11,2	14,0
Trabajador familiar no remunerado	1,1	1,1	0,8	0,9	0,6	0,7
Trabajador asalariado, pequeña escala, sin beneficios	5,9	6,0	12,2	13,0	12,5	15,6
Trabajador asalariado, pequeña escala, con beneficios	11,2	11,5	8,6	9,2	5,0	6,2
Trabajador asalariado, escala media y grande, sin beneficios	2,8	2,9	5,8	6,2	7,8	9,8
Trabajador asalariado, escala media y grande, con beneficios	47,6	49,0	35,2	37,5	31,4	39,3
Total empleados	97,2	100,0	93,9	100,0	79,9	100,0
Desempleados	2,8		6,1		20,1	
Total PEA	100,0		100,0		100,0	

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, 1980, 1991 y 2001.

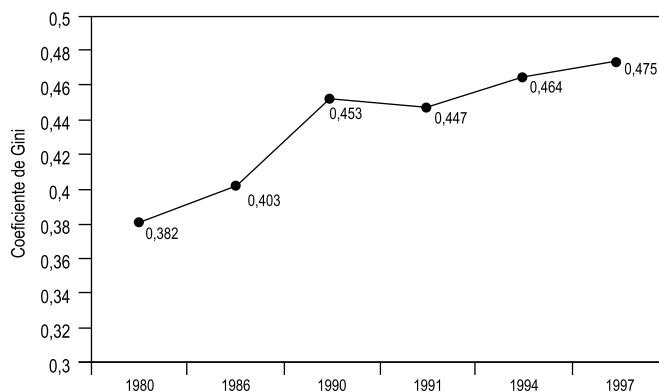
naturaleza de las actividades informales. Pareciera que con el tiempo en el conjunto de estas actividades han ido ganando relevancia aquellas más marginales (ver tabla 2, Anexo).

Dentro de estas situaciones laborales vulnerables la más relevante es el crecimiento de la desocupación (del 2,8% al 20,1%). En términos de incrementos relativos no es nada despreciable el aumento de trabajadores asalariados en establecimientos medianos y grandes desprotegidos (del 2,8% al 7,8%) y de los trabajadores asalariados en establecimientos pequeños sin protección laboral (del 5,9% al 12,5%).

1.3. Evolución de la pobreza y de la distribución del ingreso

El deterioro en las condiciones del mercado de trabajo trajo como consecuencia un incremento en la segmentación social y un crecimiento sostenido en la desigualdad social y en los niveles de pobreza. En el amba, la creciente inequidad de ingresos queda claramente evidenciada en la evolución del coeficiente de Gini (gráfico 2). Para los ingresos per cápita totales dicho coeficiente pasó de 0,411 en 1980, al 0,437 en 1990, alcanzando un 0,446 en 1997 (Altimir y Becaria, 2001). Si dicho coeficiente se estima para los ingresos per cápita del hogar, el incremento de la desigualdad es aún más pronunciado (del 0,343 en 1980 al 0,475 en 1997).

Gráfico 2. Desigualdad del ingreso per cápita en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires



Fuente: Altimir y Beccaria, 2001.

Los motivos por los cuales tuvo lugar un incremento en la desigualdad fueron variando a lo largo de la década de 1990 de acuerdo con la evolución económica y del mercado de trabajo.

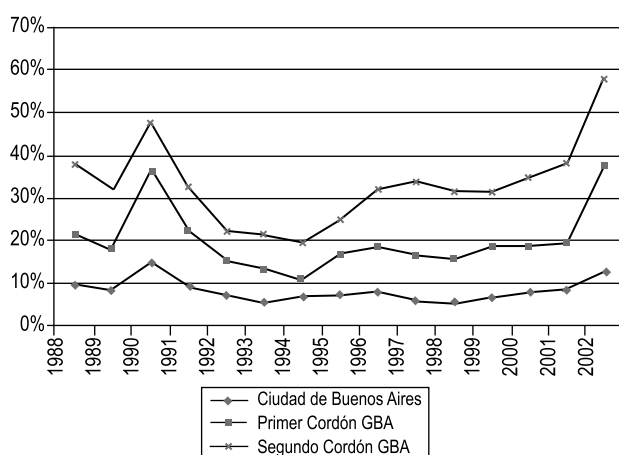
Tres serían los factores que darían cuenta de dicha evolución: la variación en los ingresos mensuales de los ocupados, el nivel de actividad de los miembros del hogar y el nivel de empleo de los miembros activos del hogar. Dos estudios recientes¹⁹

¹⁹ Ver Altimir y Beccaria (2001) y Altimir, Beccaria y González Rozada (2002).

concluyen que durante los primeros años de la década de 1990, la rápida estabilización de la economía y sus impactos macroeconómicos trajeron como consecuencia una recuperación en los niveles reales de las remuneraciones, en particular para aquellos trabajadores con bajos ingresos y bajos niveles educativos. Sin embargo, la reestructuración de sectores económicos (particularmente la manufactura) que se llevó a cabo durante los primeros años de la década tuvo consecuencias negativas en la evolución del desempleo abierto. Gran parte del incremento en la desigualdad durante dichos años se debió entonces a la expansión del desempleo. En los años subsiguientes el factor que más contribuirá al incremento de la inequidad será una creciente diferenciación en los niveles de remuneraciones, fundamentalmente debido a los altos ingresos relativos de trabajadores con alta calificación.

La evolución en los niveles de pobreza, medidos a partir de la línea de pobreza, fue un tanto diferente. La crisis hiperinflacionaria ocurrida en 1989 había dejado a un número muy significativo de los hogares bajo la línea de pobreza. En este sentido, el proceso de estabilización económica condujo a una baja muy significativa en la tasa de inflación. Consecuentemente, la leve recuperación de los salarios evidenciada en los primeros años de la década impactó en una reducción significativa en los niveles de pobreza (gráfico 3).

Gráfico 3. Porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza. Área Metropolitana de Buenos Aires



Fuente: datos del INDEC: www.indec.mecon.gov.ar. Se refiere a datos de mayo de cada año.

^{GBA 1}: Avellaneda, General San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Morón (dividido en Morón, Hurlingham e Ituzaingó), Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López. ^{GBA 2}: Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría (dividido en Esteban Echeverría y Ezeiza), Gral. Sarmiento (dividido en José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel), Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y Tigre.

A partir de 1994, y como resultado del creciente desempleo abierto, el número relativo de hogares bajo la línea de pobreza comenzó a crecer. Si bien el aumento de la pobreza se dio en toda el AMBA, fue aún más intenso en los cordones económicamente más desfavorecidos. Desde 1995 hasta el año 2000 los niveles de pobreza siguieron de cerca a los ciclos económicos. En el año 2001, unos meses antes de la crisis político-institucional, los niveles de pobreza alcanzaron niveles cercanos a los detectados durante la crisis de hiperinflación en 1989. En octubre de 2002, el 42,3% del total de hogares del AMBA (incluyendo la Ciudad de Buenos Aires) se encontraba bajo la línea de pobreza. A partir de dicha fecha, con la incipiente mejora en la situación económica, el porcentaje de hogares pobres comienza a reducirse. Así, en mayo de 2003, dicho porcentaje decrece al 39,4%.

1.4. Las políticas remediales de combate a la pobreza

Con anterioridad a la década de 1990, Argentina se caracterizaba, en términos de sus políticas sociales, por contar con un sistema universalista de provisión pública de educación y salud, un sistema de seguridad social ligado al empleo con grandes dificultades de financiamiento a largo plazo y con una legislación laboral protectora en discusión.

Este esquema fue modificado a partir del nuevo paradigma ideológico para el cual:

... la prioridad del Estado en los años noventa en el área de políticas sociales no fue atender necesidades sociales de la población carenciada, sino más bien atender requerimientos institucionales y corporativos de distintos actores (gobiernos locales, provinciales, organismos multilaterales), la necesidad de mantener una serie de equilibrios y compromisos, de no perder apoyo político de sindicatos y gobernadores del mismo partido (Acuña, Kessler y Repetto, 2002: 52).

Una característica de la década fue entonces la fragmentación y dispersión de programas sociales. Tanto la pobreza como el desempleo inicialmente no formaban parte de la agenda social del gobierno. Sin embargo con el correr del tiempo y el deterioro en los indicadores sociales, fueron constituyéndose en aspectos a ser atendidos desde el ámbito de la política social.²⁰

En un marco de creciente desempleo y protestas sociales comenzaron a ponerse en práctica una serie de planes de fomento al empleo, todos ellos de baja cobertura y corta duración (Goldbert, 1998). Estos planes de empleo transitorio con

²⁰ En el año 1998 se contabilizan alrededor de 60 programas sociales de combate a la pobreza, dependientes de diferentes áreas de gobierno, muchos de ellos con objetivos similares (Acuña, Kessler y Repetto, 2002).

una remuneración mínima, entre los cuales se destaca el Plan Trabajar en sus diversas fases, llegaron a contar con una población promedio mensual beneficiaria de 125.000 personas en el año 1997. Dicha cifra de beneficiarios, sumada a la de la prestación promedio mensual del Seguro de Desempleo (en alrededor de 95.000), resultaba insignificante cuando se la comparaba al número total de trabajadores desocupados en situación de pobreza.²¹ En 1997 solo el 13,7% del total de desocupados era beneficiario de un plan de empleo o contaba con seguro de desempleo.

Aunque no es nuestro objetivo brindar una visión comprensiva de las políticas sociales a lo largo de la década de 1990,²² queremos resaltar un hecho relevante que tendrá consecuencias de gran envergadura en las formas de protesta y organización popular en la Argentina de hoy. En el año 2002, como respuesta a la movilización social y política que conmovió al país, se creó por decreto el “Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados”. Este programa nacional fue diseñado por el gobierno de transición luego de la crisis de diciembre de 2001. El Plan tiene una amplísima cobertura y brinda un ingreso mínimo mensual a sus beneficiarios, quienes como contrapartida deben realizar actividades que pueden ser productivas, comunitarias o de formación.

El programa establece una gestión descentralizada, otorgando a los gobiernos locales –municipios y comunas– un rol relevante en la administración de proyectos y beneficiarios. Desde sus propios diseñadores, el nuevo plan se inscribe en una nueva lógica de la política social, “diferente a la que caracterizó buena parte de los planes y programas implementados a partir de la década de 1990, asociados al desarrollo de acciones focalizadas dirigidas a grupos más vulnerables del mercado de trabajo” (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2003: 21). El programa, a diferencia de las políticas focalizadas, postula un alcance al universo de desocupados.²³

En comparación con el alcance de los programas que se habían venido implementando, este tiene una cobertura muy significativa. Así, por ejemplo, si durante los últimos años de 1990 y hasta 2002 el número promedio de beneficiarios mensuales de los programas de empleo de características similares al Plan Jefas y Jefes era de alrededor de 100.000 personas, con la puesta en práctica del plan dicho número aumentó a 1.400.000 personas en 2002 y a 2.300.000 en marzo de 2003.

Como se verá a lo largo de la segunda parte del artículo, la instauración del programa y sus formas particulares de distribución de beneficios ha tenido una serie de consecuencias en la dinámica de las organizaciones populares.

²¹ En 1997 el número de trabajadores desocupados superaba el 1.700.000.

²² Para mayores detalles sobre la política social en la Argentina de la década de 1990, ver Acuña, Kessler y Repetto, 2002; Cortes y Marshall, 1999.

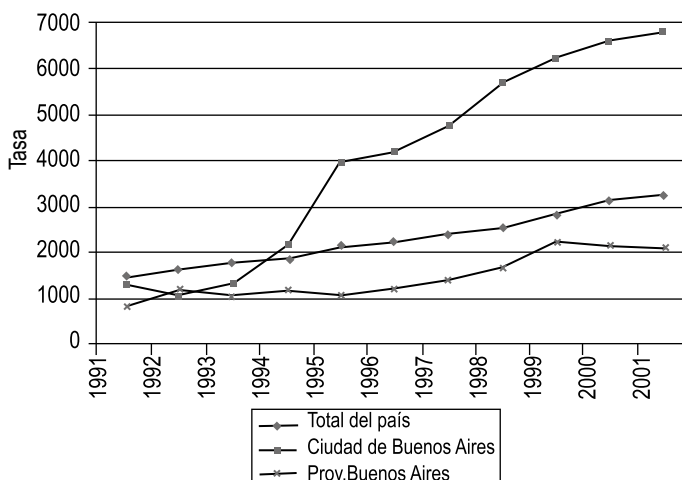
²³ Los requisitos para acceder a un plan son: condición de jefe/a de hogar desocupado; tener hijos menores a cargo o hijos discapacitados a cargo o hallarse en estado de gravidez o ser mayor de 60 años y no contar con beneficios jubilatorios; acreditar la condición de escolaridad regular de los hijos menores y el cumplimiento de controles sanitarios correspondientes.

1.5. Las transformaciones en el delito

Las transformaciones socioeconómicas analizadas tienen incidencias múltiples en las creencias y las prácticas socioculturales. Este incremento del desempleo y la exclusión conlleva una verdadera transformación de la cotidianidad y de los horizontes de sentido. El fin de la sociedad salarial implica el fin de un tipo de lazo social, del disciplinamiento industrial y de las formas de organización obrera que la caracterizaba. Esto implica que si los modos de exclusión son diferentes, también lo son las prácticas sociales relacionadas. En relación con el delito esto tiene una doble incidencia: por una parte, un aumento y cambio de las prácticas delictivas; por otra, una nueva percepción y significación social del delito.

Históricamente, Buenos Aires se ha caracterizado por sus bajas tasas de delito, en especial cuando se la compara con otras áreas metropolitanas de la región. Esta situación cambió radicalmente durante la década de 1990, cuando, acompañando el proceso de deterioro social y político, dichas tasas aumentaron muy significativamente. Si bien son múltiples los factores que fundamentan dicho incremento, no es sorprendente la alta asociación entre la evolución de las tasas de delito y el deterioro en el mercado de trabajo, en particular el aumento del desempleo abierto y el subempleo. Datos oficiales muestran esta evolución del delito: entre 1991 y 2001 para el país en su conjunto la tasa de delito más que se duplicó (gráfico 4). El incremento fue aún muy superior en la ciudad de Buenos Aires, la región más rica del país, para la cual la tasa de delito creció para el mismo período cuatro veces.

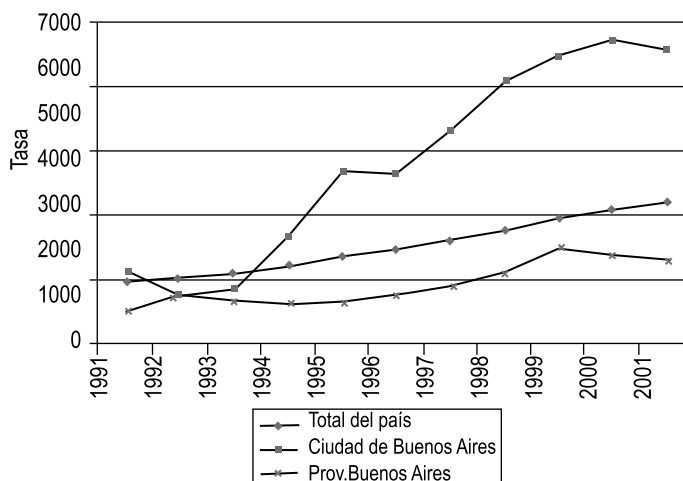
Gráfico 4. Tasa de delito (por 100.000 habitantes)



Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadísticas Policiales, 2001.

El delito contra la propiedad que representa aproximadamente dos tercios del total de delitos, subió un 113% para el país en su conjunto, un 340% para la ciudad de Buenos Aires y un 160% para el resto de la provincia de Buenos Aires. Dentro de las localidades bonaerenses del Área Metropolitana, el delito se incrementó con mayor intensidad en aquellas más afluentes (gráfico 5).

Gráfico 5. Tasa de delito contra la propiedad (por 100.000 habitantes)



Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadísticas Policiales, 2001.

Los datos sobre victimización –provistos por el Ministerio Nacional de Justicia y Derechos Humanos– muestran una evolución un tanto diferente a la observada mediante las tasas de delito oficiales. Por un lado, dan cuenta de que un alto porcentaje de la población ha declarado ser víctima de delito. Así, por ejemplo para el año 2001 el 39,6% de los residentes en la Ciudad Capital y el 39,3% de los residentes en el conurbano bonaerense declararon haber sido víctima de algún delito.²⁴ Esta incidencia superior del delito que arrojan las cifras sobre victimización se debe en gran medida a la falta de denuncia policial por parte de las víctimas.²⁵ Al igual que lo observado con relación a las cifras oficiales sobre delitos, la vasta mayoría de las

²⁴ Para las localidades del conurbano bonaerense los datos corresponden al año 2000. Delito incluye: todo tipo de crimen contra la propiedad, vandalismo, ofensas sexuales, corrupción, ataques y amenazas personales (datos provenientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2001 y 2002).

²⁵ Así, por ejemplo, en el año 2000 solo el 7,4% de las personas que declararon haber sido víctimas de delito efectuaron la denuncia policial.

víctimas declaran que se trató de delitos contra la propiedad.²⁶ Asimismo, los datos sobre victimización muestran que son las personas con mayores niveles socioeconómicos las que han tenido más chances de ser víctimas de delitos.

Di Tella, Galiani y Schargrotsky (2002), por su parte, analizaron la relación existente entre victimización y distribución de los ingresos. Utilizando una encuesta retrospectiva sobre victimización examinaron la evolución del crimen de acuerdo con el nivel socioeconómico de las víctimas. Encontraron que en el caso de robo a la vivienda, fueron los pobres quienes sufrieron el mayor incremento. En el caso de robo callejero ambos grupos sufrieron una evolución similar. Según los autores, este hallazgo es consistente con el hecho de que son los sectores económicamente más afluentes los que pueden proteger sus hogares con sistemas costosos de seguridad. También encontraron que no existen diferencias en la probabilidad de denunciar los hechos delictivos por parte de ambos grupos ni en su acceso a la Justicia.

Otros estudios muestran transformaciones en la forma que adquiere el delito en sí, en particular el uso de la violencia. En el siglo xx se había producido una dosificación de la violencia criminal. El delito tendía a profesionalizarse, se incrementaban los crímenes dolosos frente a los pasionales y la violencia era regulada en función de la necesidad ante el objetivo. “Sólo maté cuando era necesario” explicaba un delincuente (Isla, 2002). En contraste, en la Argentina durante la década de 1990 se revierte la tendencia a la disminución de violencia en el dolo, aumentando la tasa de homicidios en el momento de cometer el delito (Gayol y Kessler, 2002: 30-31).

Por su parte, Kessler encontró que jóvenes de sectores populares testimonian el cambio de una lógica del trabajador a la lógica del proveedor, donde la legitimidad del ingreso no se establece por su origen sino con relación a que satisfaga algún tipo de necesidad. Eso implica que delito y trabajo no se contraponen, sino que se articulan en diversas formas intermedias entre legalidad e ilegalidad (Kessler, 2002).

Por último, hay un cambio importante en las representaciones sociales acerca de la delincuencia y la inseguridad.

Las clases subalternas –o fracciones de ellas– vuelven a ser peligrosas, pero ahora no por ser trabajadores, sino justamente, por haber dejado de serlo. No es ya la masa como un cuerpo gigantesco al que se teme, sino a individuos anémicos y desocializados; el riesgo es más de implosión que de explosión social (Gayol y Kessler, 2002: 18).

En la mayor parte de las encuestas de opinión pública desde fines de los años noventa hasta 2003 el tema número 1 de la agenda es el desempleo y el número 2 la inseguridad. En contraste con estas percepciones muy relacionadas a los discursos de los

²⁶ Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el 73,5% de las víctimas de delito corresponden a delitos contra la propiedad, en las localidades bonaerenses dicho porcentaje es del 86,8%.

medios de comunicación, puede señalarse que en el estudio etnográfico que hemos realizado en cuatro barrios populares de Buenos Aires (ver infra) la distancia entre la preocupación por el desempleo y por la inseguridad es mucho mayor. La inseguridad es un problema ubicado después de la alimentación, la salud, la vivienda o el nivel de ingresos. Considerando los ocho barrios visitados por nuestro equipo, solo en uno había problemas abiertos y muy serios con la seguridad.

En ninguno de estos barrios ha habido acciones colectivas respecto de la inseguridad, aunque sí hubo protestas muy acotadas en dos barrios populares del conurbano durante 2003. En los sectores populares la “inseguridad” no se asocia necesariamente al delito realizado por pobres, sino también al miedo que genera la policía. Son comunes las denuncias por maltrato policial, las protestas por casos de asesinatos realizados por policías (práctica conocida popularmente como “gatillo fácil”), así como por la inacción o complicidad policial ante situaciones delictivas.

1.6. La expresión espacial de los cambios sociales

Los cambios macroeconómicos y sus efectos en la creciente segmentación y polarización social tuvieron su expresión en el espacio, tanto en términos sociodemográficos como socioculturales. Los cambios en el modelo económico reforzaron las tendencias en el proceso de urbanización puestas de manifiesto algunas décadas atrás. La Argentina históricamente se caracterizó por su altísima y temprana urbanización²⁷ y por una significativa primacía de Buenos Aires.²⁸ Sin embargo, desde hace varias décadas, la tendencia es a la disminución de la importancia relativa de Buenos Aires en el concierto urbano.

Tanto factores demográficos como económicos y sociales contribuyen a explicar la baja en el peso relativo y la pérdida de atracción del AMBA.²⁹ La situación del mercado de trabajo generó que la principal metrópolis no atrajera migrantes internos con la misma intensidad con que lo había hecho en las décadas de 1950 y 1960. Además, para un vasto sector de la sociedad, la calidad de vida en la principal metrópolis disminuyó no solo a consecuencia de la falta de empleos adecuados, sino también debido a un deterioro significativo en los servicios y la infraestructura

²⁷ Así, por ejemplo, en 1970 el porcentaje de población que residía en áreas urbanas en la Argentina ascendía al 79,2%.

²⁸ En 2001 el 36,1% de la población total del país y el 45,5% de la población urbana residen en el AMBA. En 1970 dicha concentración era aún superior. En 1970 el índice Ginsburg, que indica el porcentaje de población residiendo en el Área Metropolitana más importante dentro del total de las cuatro mayores, ascendía al 80,2%.

²⁹ El peso relativo de Buenos Aires dentro del conjunto de áreas urbanas decreció sistemáticamente (45,5% en 1970, 42,9% en 1980, 39,7% en 1991 y 37,2% en 2001). Consecuentemente, crecieron en importancia relativa las ciudades de tamaño intermedio (datos provenientes del INDEC, Censos Nacionales de Población 1970, 1980, 1991 y 2001).

pública.³⁰ También hubo cambios pronunciados en la organización socioespacial del AMBA. Buenos Aires es una ciudad cuya organización espacial se encuentra estrechamente relacionada con los sectores socioeconómicos. Un empleado o profesional de clase media puede pasar meses o años sin ver las villas miseria ubicadas fuera de sus circuitos cotidianos. Las áreas en las que viven y trabajan los sectores medios y altos se encuentran relativamente cercanas al Río de la Plata y hacia el norte de la ciudad. A medida que aumenta la distancia respecto del río y del norte tiende a descender en forma paulatina el nivel socioeconómico de la población. Así, Buenos Aires produce entonces un sentido territorial en *degradé* con algunas fronteras imperceptibles –aunque significativas– y otras más evidentes. La frontera más relevante es la que separa la Capital Federal (donde viven menos de 3 millones de personas) del Conurbano (donde viven más de 8 millones) y, por lo dicho antes, especialmente el límite al sur de la Capital.

Buenos Aires contrasta con ciudades como Río de Janeiro –u otras ciudades brasileñas– en las que desde los edificios más lujosos pueden verse las *favelas*. Por otra parte, en las “villas miseria” de Buenos Aires la convivencia entre personas y grupos de diferentes países y provincias contrasta con los guetos étnico-raciales de los Estados Unidos. Tradicionalmente, la relación entre territorialidad y etnicidad estuvo marcada por el modelo del *conventillo*, espacio donde los migrantes de los países más diversos compartían su vida conflictivamente. De esta manera, el nivel socioeconómico se asoció con la territorialidad mucho más que cualquier otro elemento.³¹

En la última década se intensificó la apropiación diferencial de los espacios por parte de los distintos sectores sociales, generando una creciente segmentación socioespacial.

Para contextualizar las tendencias recientes, habría que remarcar que la expansión poblacional en las áreas periféricas del Área Metropolitana fue estimulada durante la etapa sustitutiva por políticas redistributivas que promovían el acceso a la vivienda por parte de la clase media y la clase trabajadora (Torres, 1993). Esta expansión urbana se dio de una manera muy heterogénea. La carencia de planificación urbana generó un uso de espacio incompatible, una deficiente articulación de vías de circulación y un insuficiente equipamiento e infraestructura urbanas. Como era de esperar, este proceso originó una apropiación diferencial del espacio urbano: las clases medias y altas residiendo en áreas con mejores localizaciones ecológicas y la clase trabajadora en áreas problemáticas desde el punto de vista ecológico.

³⁰ Históricamente ha habido grandes disparidades en los niveles de vida, servicios e infraestructura entre la ciudad de Buenos Aires y las localidades del conurbano bonaerense. Así, por ejemplo, en 1980 mientras en la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) era del 7,4% en el conurbano ascendía al 21,9%.

³¹ Esto se ha desarrollado más extensamente en Grimson, 2003b.

Con el tiempo este proceso se fue intensificando.³² Durante la década de 1980 las demandas populares por la tierra fueron crecientemente planificadas (Merklen, 1991). Se multiplicaron las organizaciones populares para la toma de tierras y para la demanda de su regularización. El deterioro socioeconómico y los cambios políticos implicaron un cambio en las acciones de los movimientos populares. Los actores políticos comenzaron a enfatizar lo “local” y lo “gestionario” (Torres, 1993). Durante la década de 1990, debido a las condiciones económicas adversas sufridas por gran parte de la población, la expansión urbana se desaceleró. La venta de parcelas y los asentamientos ilegales disminuyeron (Clichevsky, 2001).

La principal tendencia urbana fue la polarización residencial, tanto dentro de la Capital Federal como en las localidades suburbanas.

Podría sostenerse que así como a partir de mediados de la década de 1980 los actores sociales más relevantes en la definición de espacios sociales fueron los pobres, en la de 1990 serán los ricos. En la ciudad de Buenos Aires, entre 1991 y 1999 el número de viviendas de lujo se incrementó más de cuatro veces (datos provenientes de Torres, 2001), y el número de viviendas simples o regulares decreció más del 10%. Asimismo, y contrastando con lo anterior, el número de personas viviendo en villas miseria dentro de la ciudad capital aumentó de 11.157 en 1983, a 39.897 en 1987-1990 y a 59.977 en 1993-1995.

El proceso de suburbanización de las élites se intensificó. En búsqueda de ambientes más naturales, seguros, homogéneos desde el punto de vista social, y con mejor equipamiento que el provisto por el Estado, las élites se mudaron a comunidades cerradas (barrios cerrados o *countries clubs*). El crecimiento de estas comunidades fue abrumador,³³ y concentrado mayormente en unas pocas localidades. En dichas localidades cohabitan entonces grupos de muy altos y muy bajos ingresos. Estos últimos son los que proveen de los servicios personales necesarios a los primeros.

Durante el período 1990-1998, 2000 millones de dólares fueron invertidos por capitales privados en la construcción de autopistas (Cicolella, 1999). Mediante ellas, los sectores de altos recursos llegan cómodamente a sus comunidades cerradas sin tener siquiera un contacto más directo con los pobres suburbanos. La gran mayoría de la inversión privada durante esos años fue entonces dirigida a la construcción de centros comerciales, comunidades cerradas, hipermercados y hoteles. Como sostiene

³² Así por ejemplo, durante el último gobierno militar (1976-1983), se implementaron políticas por las cuales, bajo el principio de “la Ciudad para quien la merece”, la población residente en villas miseria o de emergencia fue desplazada al conurbano bonaerense (Oszlak, 1991). También se introdujeron cambios en la política urbana de las localidades bonaerenses que previnieron la ocupación de parcelas que no contaran con infraestructura y equipamiento. El efecto de ambas políticas fue un desplazamiento de los pobres urbanos hacia la periferia y la densificación de barrios pobres y marginales tradicionales y un incipiente proceso de toma de tierras.

³³ En 1994 solo 1450 familias residían en este tipo de barrios, mientras que al finalizar la década dicho número fue estimado en alrededor de 35.000 (Torres, 2001).

Cicolella (1999), la profunda polarización y fragmentación social en el AMBA ha sido en gran medida originada por este tipo de inversiones.

La otra cara de la moneda ha sido el deterioro generalizado en los barrios tradicionales de los sectores populares de clase baja y media. Las políticas neoliberales también implicaron un nuevo tipo de exclusión espacial de los pobres urbanos. Los tradicionales barrios obreros, distantes de los barrios de clase media, se convirtieron en barrios de desocupados. En los momentos más agudos de la crisis, la suma de desempleo y subempleo en algunos barrios casi abarcaba a la totalidad de sus habitantes. Eso generaba una crisis en el transporte público, y se reducían las conexiones entre esos barrios y la ciudad.

Así, Buenos Aires parecía desplazarse del modelo del conventillo al modelo del “gueto”. Es decir, un desplazamiento de un modelo de espacios compartidos con fronteras simbólicas relativamente blandas a otro en el que las fronteras territoriales duras se convierten en hegemónicas. Se trataría más bien de un gueto social, antes que de uno étnico o racial. Esta caracterización resulta relevante ya que, como a continuación se verá, las organizaciones de desocupados son agrupamientos de vecinos desempleados de un barrio.

Un argumento de nuestro estudio es que la segregación espacial es una condición necesaria –aunque no suficiente– para el surgimiento de nuevos movimientos de desocupados. No hemos encontrado movimientos fuertes de desocupados en barrios socialmente heterogéneos.³⁴ El gueto social, paradójicamente, coadyuva al surgimiento de esas organizaciones. Es el viejo “dormitorio obrero” devenido espacio comunitario de la desocupación. Además, es muy frecuente la relación entre los nuevos asentamientos de la década de 1980 y las organizaciones “piqueteras” de fines de la de 1990.³⁵ Podría entonces establecerse una fuerte conexión entre el salto cualitativo de segregación espacial –producto del neoliberalismo– y las nuevas formas populares de organización popular, con sus características organizacionales e identitarias.

³⁴ Se ha analizado la relevancia de la segregación espacial en la ciudad de Mosconi en el noroeste argentino, una *company town* petrolera con fuerte cultura laboral y sindical, para la emergencia allí de uno de los primeros y más poderosos movimientos de trabajadores desocupados (Svampa y Pereyra, 2003).

³⁵ Como se verá en mayor detalle en la segunda parte del trabajo en el caso de las áreas estudiadas etnográficamente.

PARTE 2

LA VIDA ORGANIZACIONAL EN ZONAS POPULARES DE BUENOS AIRES³⁶

Ante este panorama social ha habido múltiples respuestas de la sociedad civil. En distintas fases históricas existen distintos tipos de organizaciones, con diferentes reclamos, identidades y modos de acción. La Argentina se ha caracterizado por una fuerte tradición sindical, así como por una densa trama organizacional en los barrios. El terrorismo de Estado de la dictadura militar implicó la muerte y desaparición de casi una generación de líderes populares y estudiantiles. A pesar de ello, durante la dictadura hubo diversos modos de resistencia y durante la década de 1980, ya en contexto constitucional, hubo intensas protestas que abarcaron cuestiones de derechos humanos, sindicales, de vivienda y educativas.

El contraste entre el “clima” ideológico y cultural de los años setenta y de los noventa es obviamente notorio. Si nos limitamos a considerar a las organizaciones populares, sus modos de acción y sus reclamos, el contraste con la década de 1970 se vincula a que los sindicatos fueron antes un actor central de la vida política argentina. Incluso, durante los cinco años y medio del gobierno de Alfonsín (1983-1989) la Confederación General del Trabajo realizó 13 huelgas generales. En cambio, la década de 1990 se caracteriza por la pérdida del protagonismo sindical y el surgimiento de nuevos fenómenos. Con la llegada del peronismo al gobierno en 1989 y la aplicación extrema de las recetas neoliberales por parte del presidente Carlos Menem, los grandes sindicatos fueron oficialistas. Integrados a la gestión gubernamental, las negociaciones se centraron en cuestiones como el manejo de los fondos de las obras sociales sindicales y límites a la inmigración, a la vez que el desempleo se multiplicaba tres y hasta cuatro veces.

Durante el auge del neoliberalismo, en Argentina se generaron las condiciones para un amplio consenso social para establecer un sistema de convertibilidad del peso y el dólar que persistió hasta enero de 2002. Después de una oleada de huelgas y protestas resistiendo en la medida de lo posible a la oleada privatizadora, los grandes sindicatos (además de perder afiliados) fueron cooptados por el gobierno de corte justicialista. Por su parte, amplios sectores medios seducidos por el acceso a bienes de consumo mediante el crédito, y percibiendo salarios en valor dólar prestaron consenso a las nuevas políticas que prometían el rápido ingreso del país al Primer Mundo.³⁷

³⁶ Esta sección se basa en el Informe Etnográfico dirigido por Alejandro Grimson. En el trabajo de campo en los barrios populares participaron también Pablo Lapegna, Nahuel Levaggi, Gabriela Polischer, Paula Varela y Rodolfo Weelc.

³⁷ Para comprender los motivos de este amplio consenso de la convertibilidad y el neoliberalismo extremo en Argentina es necesario entender las consecuencias culturales de la hiperinflación de 1989 en la sociedad argentina (ver Grimson, 2003a).

Durante los primeros años de la década de 1990 se consolidaron ciertas características de las protestas sociales que ya estaban presentes desde la década anterior. Había:

... [una] abundante movilización de recursos colectivos, [...] un grado alto de fragmentación y escasa durabilidad en las protestas [...], la concentración del reclamo sindicalizado en los gremios de servicios y estatales [...], un crecimiento de la protesta de matriz cívica, con un carácter marcadamente diversificado y con rasgos claros de localización y singularidad. Por ende, con alta fragmentación y escasas probabilidades de construir sujetos unificados de acción de cierta permanencia en el tiempo y extensión en el espacio (Schuster y Pereyra, 2001: 59-60).

Sin embargo, a fines de la década esta situación ha cambiado. Se han constituido sujetos con identidades nuevas, como los piqueteros³⁸ o las fábricas recuperadas, lejanos a la protesta sindicalizada tradicional, pero también a los rasgos de fuerte singularidad que dificultaban la permanencia en el tiempo y la extensión en el espacio.³⁹

Resulta entonces necesario distinguir al menos dos momentos en la década de 1990: la primera fase de auge neoliberal (expresado en la reelección del presidente Menem en 1995) y una fase de crisis. Creciente estancamiento económico y una franca recesión desde la segunda mitad de 1998 se combinaron con una legitimidad política socavada lentamente por el aumento de la pobreza, el desempleo y la corrupción. Mientras tanto, comenzaron a emerger con diversa intensidad nuevas organizaciones populares y nuevos modos de protesta.

Después de intensas huelgas, en los años 1989 y 1990 se produjo una notoria caída de estas, hasta que comenzaron a incrementarse levemente, junto al aumento de los cortes de ruta en 1997.

La crisis de legitimidad del modelo y la dramática crisis económica avanzaron hasta su estallido en diciembre de 2001. En un contexto recesivo, con muy alto desempleo y crisis bancaria, el gobierno estaba inmóvil, excepto para decidir una drástica restricción del acceso al dinero depositado en los bancos (el "Corralito"). En ese contexto se produjo el "Cacerolazo" del 19 de diciembre y las movilizaciones del 20

³⁸ En la lucha sindical el "piquete" es el dispositivo para impedir, durante una huelga, el ingreso de personal a la empresa. Como las organizaciones de desocupados han desarrollado sus principales luchas a través de cortes de ruta, impidiendo el tránsito de automotores, se las conoce como organizaciones "piqueteras". El término fue utilizado en un inicio con connotaciones estigmatizantes en algunos medios de comunicación, pero las propias organizaciones se lo han apropiado con sentido positivo, de aquellos que luchan y suelen cantar en sus movilizaciones frase como "¡piqueteros, carajo!".

³⁹ Podría alegarse que, a pesar de identidades como "piqueteros", continúa habiendo una alta fragmentación. Esto es cierto, pero en rigor no se explica cómo en la fase analizada por Schuster y Pereyra por las características de la protesta social en sí, sino por las escisiones específicas del arco político de la izquierda y la centroizquierda en la Argentina (ver Svampa y Pereyra, 2003).

de diciembre que culminaron en la renuncia del presidente. Entre enero y marzo de 2002 hubo intensas movilizaciones en todo el país. En diciembre de 2001 se contabilizaron 859 cacerolazos, 706 en enero de 2002, 310 en febrero y solo 139 en marzo. De hecho, es probable que 2002 haya sido el año con mayor cantidad de movilizaciones callejeras de los últimos quince años. Si se compara con el grado de conflictividad social de 2004, comparativamente bajo, resulta claro que la fase abierta a fines de la década de 1990 se ha cerrado, aunque aún resulte difícil precisar las características de la etapa actual.

Entre fines de los años noventa y 2003 se desarrollaron al menos cinco procesos de organización popular que merecen ser destacados. Han surgido nodos de redes de trueque, donde se busca resolver o paliar la carencia de dinero necesaria para el mercado a través del intercambio de bienes o saberes con otras personas en un circuito informal que en su auge involucró a dos millones de personas (Hintze, 2003). Han crecido y se han expandido los comedores populares que, obteniendo insumos por parte de gobiernos municipales y eventualmente de donaciones, garantizan un plato de comida o una copa de leche para niños y adultos que están al borde de la indigencia. Han surgido y se han expandido grupos de desempleados que se organizan para exigirle al Estado trabajo, planes de empleo y para garantizar su subsistencia cotidiana. Han aparecido asambleas barriales, generalmente en barrios de clases medias, cuya movilización y “compromiso” no responde solo a una necesidad económica de los propios asambleístas (no son necesariamente ahorristas, ni indigentes, ni desempleados), sino básicamente a la crisis político-institucional de representación. Han surgido fábricas y otras empresas recuperadas por sus trabajadores después de su quiebra, cierre o abandono por parte de sus anteriores propietarios.

Estas respuestas surgieron en distintos momentos y frente a diferentes conflictos. Las asambleas vecinales se conforman a partir de la crisis de diciembre de 2001. Las organizaciones de desocupados se remontan a la segunda mitad de la década de 1990 –en el Gran Buenos Aires comienzan a aparecer en 1997–. Los comedores populares surgieron a fines de la década de 1980, durante la crisis hiperinflacionaria a partir de la cual se restringieron planes alimentarios del Estado. Los nodos de trueque aparecieron a mediados de la década de 1990. La mayoría de las fábricas fueron tomadas y recuperadas por sus trabajadores desde fines de 2001, como respuesta colectiva ante el cierre de fuentes de trabajo en un contexto desolador.

Cada uno de estos procesos ha tenido una dinámica diferente. El trueque ha sufrido una explosión desde fines de 2001 hasta mediados de 2002, y una fuerte crisis y desorganización posterior que lo ha llevado a desaparecer como fenómeno social. Las asambleas populares tuvieron auge en la primera mitad de 2002 y comenzaron a decaer con rapidez. Aunque se mantienen unas pocas asambleas en barrios específicos, los modos en los cuales los sectores medios (bajos, medios y altos) participaron social y políticamente en los últimos años hoy no tienen peso. Esto sucede porque

esos sectores se alejaron de manera paulatina de esa participación. En contraste, los fenómenos ligados a los sectores pobres han tenido otra dinámica.

Los comedores, las organizaciones de desocupados y las fábricas recuperadas tienen plena vigencia aún. Vigencia que no implica que no hayan cambiado. De hecho, puede percibirse cierta institucionalización de los comedores, cierta fragmentación y crisis del fenómeno piquetero y una dinámica política aún abierta en las empresas recuperadas.

Ahora bien, ¿cómo abordar el estudio de estas respuestas? Inmediatamente después de la crisis de 2001 se multiplicaron análisis simplistas acerca de un “cambio radical” en la cultura política de sectores populares, así como acerca de la capacidad de reconstruir legitimidad y hegemonía por parte de los partidos políticos tradicionales. Con la estabilización posterior, el crecimiento del PBI y los fuertes indicios de fragmentación de los sectores populares predomina la idea de que esta habría sido una crisis como tantas otras y todo ha seguido igual. Entre quienes afirman la ruptura total y quienes aseguran una continuidad completa, nos encontramos con el desafío de analizar y comprender las transformaciones empíricamente.

2.1. Los cuatro barrios estudiados

Esta segunda parte del artículo analiza las formas de organización y acción de sectores populares a partir de estudios etnográficos desarrollados en cuatro barrios populares de Buenos Aires entre noviembre de 2002 y julio de 2003. Estos estudios han sido complementados con estudios de reconocimiento de campo en otros cuatro barrios, así como con el seguimiento atento de procesos políticos en los medios de comunicación y de otros estudios de caso contemporáneos. En esta sección describiremos brevemente los cuatro barrios o zonas estudiadas etnográficamente, señalando unos pocos elementos de cada barrio, tomando en cuenta su población, tipo de urbanización, sus organizaciones y sus vínculos con el Estado. Las secciones subsiguientes presentarán una síntesis de tendencias generales de los procesos organizacionales en Buenos Aires, considerando nuestro trabajo de campo junto con otros estudios previos y contemporáneos.

Para comprender los procesos de organización y acción colectiva en Buenos Aires desarrollamos un abordaje territorial, analizando un conjunto diverso de actores con un parámetro territorial (Portes y Walton, 1976: 73). Estudiamos entonces la vida organizacional y política de zonas populares.⁴⁰ Las cuatro zonas han sido

⁴⁰ En noviembre de 2002 iniciamos el trabajo de campo que continuó hasta agosto de 2003. En cada barrio han trabajado dos miembros del equipo y hemos reconstruido el mapa organizacional, analizando cómo se han formado esas organizaciones, cómo funcionan, quiénes son sus miembros, qué reclaman, cómo protestan –si es que lo hacen–, cómo se vinculan con la población del barrio, con otras organizaciones, con distintos niveles del Estado. También se realizó trabajo de reconocimiento en los barrios de Villa Paraíso (estudiado antes por Auyero,

seleccionadas por su diversidad de historias, tradiciones y problemas, buscando que expresaran procesos estructurales de cuatro áreas diferentes de la región metropolitana. En la ciudad de Buenos Aires, una villa miseria. En el conurbano bonaerense, un asentamiento de la zona sur, un área con asentamientos y barrios obreros en el oeste, y un barrio obrero-popular en el noroeste.⁴¹

La Villa 7 de Soldati es una población espontánea que comenzó a formarse en la década de 1960. Se desarrolló sin planificación alguna y, por ello, es la villa *miseria* clásica repleta de pequeños pasillos internos. Cuando a fines de la década de 1970 la dictadura militar intentó erradicar las villas de la Capital Federal surgió aquí una organización de vecinos que, en su desarrollo posterior, se instituyó como Junta Vecinal. Actualmente, la Junta representa formalmente a la villa ante las autoridades municipales, y sus autoridades son elegidas por el voto de todos los pobladores, sean argentinos o extranjeros. Esto es relevante, ya que una proporción alta de los habitantes, alrededor de un tercio, proviene de Bolivia y Paraguay. La Junta se encarga de las cuestiones de vivienda y urbanización, actuando como intermediaria para obtener y distribuir materiales de construcción. Desde inicios de 2002 distribuye también cajas de alimentos a cada familia, que son entregados por el gobierno de la ciudad. Por último, administra algunas decenas de planes de empleo. En la villa hay un gran número de organizaciones de base: entre otras, 14 comedores populares, 3 organizaciones de desocupados, una cooperativa de vivienda.

El segundo barrio se llama La Fe. Está al sur del Gran Buenos Aires, en Monte Chingolo, partido de Lanús, una región de muy temprana urbanización y que se caracteriza por ser parte de la industrialización que se produjo desde mediados de 1930, así como por tradicionales barrios obreros. La Fe, a diferencia de la *villa* es un *asentamiento*, es decir fue ocupado ya en la década de 1980 sin autorización, pero con una planificación colectiva que respeta la traza urbana y la dimensión de los lotes. La desindustrialización de fines de 1970 y principios de 1980 golpeó duramente allí, dejando cementerios de fábricas.

El partido de Lanús es gobernado desde 1983 por un viejo caudillo del Partido Justicialista, Manuel Quindimil. Su estilo asistencialista deviene en La Fe en la presencia de comedores municipales que son dirigidos por punteros políticos peronistas. La superposición Estado/Partido/caudillo se traduce en el barrio en comedor municipal/unidad básica/puntero. Esto contrasta con los comedores de la villa de Soldati, que tienen diferentes posicionamientos políticos y son autónomos del gobierno local. A fines de los años noventa los vecinos se organizaron por fuera y en contra del municipio

2001a), Ciudad Oculta (estudiado antes por Sirvent, 1999), Villa Aguada (estudiada por Hermitte *et al.*, 1983) e Isla Maciel. En ellos colaboraron también Matías Bruno y Santiago Canevaro.

⁴¹ Los nombres de algunos lugares y personas han sido cambiados. En cambio, otros nombres y lugares no. Se ha utilizado criterios éticos y criterios prácticos, ya que hay lugares que no pueden "ocultarse" fácilmente.

por cuestiones de tierra y vivienda. Otras demandas se fueron incorporando al nuevo agrupamiento que finalmente se constituyó como Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), integrado a una red de otros movimientos ubicados en diferentes barrios que conforman el MTD Aníbal Verón, una de los principales movimientos de desocupados en el sur del Gran Buenos Aires.

Un tercer barrio, Billinghamurst, situado en el noroeste del conurbano, resulta de un tipo de expansión de la ciudad sin asentamientos, por loteo estatal, con fuerte contexto industrial y obrero que entró en crisis en los últimos años. En la zona norte del AMBA se concentraron muchas de las inversiones más importantes desde 1960 y 1970, y continúa siendo epicentro de la producción industrial. Las fábricas cerradas del norte son generalmente producto de la crisis específica de la segunda mitad de la década de 1990.

En San Martín, donde se encuentra el barrio del noroeste que estudiamos, funcionaban a mediados de los años noventa el 10% de las industrias de la provincia de Buenos Aires.

En esta zona las acciones colectivas frente a la crisis son muy diferentes que en otras zonas de la ciudad. La crisis de empleo es más reciente y afecta a una población con mayor calificación. En vez de canalizarse a través de una organización de desocupados, se abordó impulsando la ocupación y la lucha por reabrir una fuente de trabajo: una fábrica metalúrgica llamada Forja. En un ámbito sin fuerte tradición territorial (no hay luchas vecinales importantes en su historia reciente) y sin organizaciones vecinales importantes, la demanda de empleo se canaliza a través de otra tradición: la sindical. Por ello, de los cuatro barrios y procesos analizados, el de Forja es, en términos de género, el único protagonizado exclusivamente por varones.

Por último, la zona estudiada en el oeste se encuentra en el partido de La Matanza, el de mayor población del conurbano, con altos niveles de pobreza e indigencia. La Matanza es una combinación de diferentes procesos urbanos. El Tambo es un asentamiento como La Fe, pero con un grado de urbanización mejor. Los barrios del área de Crovara y Cristanía, como Villa Marconi y San Alberto, tienen más similitudes con Billinghamurst por su carácter de loteo y por su relación hasta poco tiempo atrás con la producción industrial.

El Tambo presenta la peculiaridad de constituir en la década de 1980 una organización por la cuestión de la tierra y la vivienda (Merklen, 1991), que continúa interviniendo sobre esa misma cuestión también en barrios aledaños y que, a la vez, es de las más dinámicas en los últimos años en relación a la cuestión del empleo. Esa organización barrial fue el eje desde el que se constituyó una Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de alcance nacional que forma parte de una de las tres centrales sindicales del país. La expansión de la FTV se vincula a generalizar, desde espacios territoriales, demanda de empleo y gestión y administración de planes sociales.

La Matanza tiene un fuerte peso electoral y, por lo tanto, es relevante en el conjunto de los procesos políticos del conurbano bonaerense. A la vez, es epicentro de

dos grandes organizaciones de desocupados, la FTV y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), muy diferentes de las que se han consolidado en la zona sur. Si bien en El Tambo la organización fundante del barrio, que incorporó como central la cuestión del empleo, es completamente hegemónica en su intermediación con el Estado, en los barrios cercanos la red de punteros del Partido Justicialista es muy activa.

En varias zonas de La Matanza, en La Fe, en la villa de Capital, al igual que en muchos barrios de la ciudad, *hace veinte años el gran problema se vinculaba con el acceso a la tierra y la vivienda*. La principal organización de La Fe es el MTD que, surgido a fines de la década de 1990, no tiene ninguna continuidad con las tomas de tierra de la década de 1980, aunque sus primeras tareas en el barrio sí estuvieron relacionadas con nuevas tomas y con el enfrentamiento con una cooperativa de vivienda ligada al municipio. En la villa de capital la principal organización es la Junta Vecinal que surgió hace dos décadas por la cuestión de la vivienda, la tierra y la urbanización. El Tambo es el epicentro del grupo “piquetero” más numeroso a nivel nacional, que justamente se denomina Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y administra miles de planes de empleo. Es una “federación” de organizaciones territoriales, barriales. Las tierras de El Tambo fueron ocupadas de manera planificada bajo el liderazgo de quienes hoy dirigen esta Federación. Ese desplazamiento, de la tierra al trabajo, que representa la FTV, se encuentra también en La Fe como demanda de sus habitantes, pero sin continuidad organizacional. En la villa, en cambio, la Junta administra planes de empleo del gobierno, pero no asume ese reclamo como parte de su agenda, con lo cual se genera el espacio para el surgimiento de otras organizaciones de desocupados. Esta disociación, que no se plantea en El Tambo ni en La Fe, se vincula a la vez con el alto grado de fragmentación de las organizaciones de la villa.

La *tradición sindical* que caracteriza el proceso de Forja, en Billinghamurst, también se hace presente en organizaciones como la FTV y los MTD, pero con otras características. Por una parte, en estas organizaciones resulta evidente la presencia de *lo vecinal*. Pero también por la presencia explícita de *lo político*, expresado a través de una candidatura electoral en la FTV y en un proyecto de cambio social del MTD. La política, en cambio, es mirada con desconfianza en su conjunto desde la Cooperativa Forja, que tampoco simpatiza con cortes de ruta u otras acciones directas.

En la zona de Billinghamurst, al igual que en toda la zona norte de la ciudad, no hay *organizaciones de desocupados* y sí hay muchas *fábricas recuperadas* por los trabajadores, mientras en la zona sur y oeste de la ciudad predominan las organizaciones de desocupados sobre otros fenómenos, así como en las villas de la Capital los “piqueteros” son muy minoritarios respecto de la hegemonía de la Junta Vecinal. Estas diferencias pueden explicarse por la historia de la ocupación de la tierra y las características de la población, pero también por modelos de gestión pública muy distintos en los gobiernos locales.

Ahora bien, la relación entre la principal organización barrial y la población es muy variable en los cuatros casos. En un extremo se ubica La Cooperativa en El

Tambo, única organización y único intermediario entre el Estado y la población. En La Fe, en cambio, hay una bipolaridad representada por el MTD y los punteros peronistas. Las identificaciones se encuentran polarizadas y, si se piensa únicamente en términos instrumentales, se trata de modos de acceso muy diferentes a los mismos recursos (planes, comida, etcétera). En la Villa 7 se presenta una combinación de hegemonía sobre fragmentación. Muy alejada de la hegemonía absoluta en El Tambo, la relevancia de la Junta Vecinal, en un barrio mucho mayor en dimensión espacial y poblacional, se produce por la multiplicidad atomizada de organizaciones. Si se consideran otros barrios visitados y estudiados, la fragmentación organizacional es más frecuente que la existencia de una organización hegemónica.

2.2. La agenda de los sectores populares: de la vivienda al trabajo

Durante el modelo sustitutivo de importaciones (y sus estertores), la cuestión central a la que el proceso de urbanización no podía dar respuesta era la cuestión de la vivienda y de las condiciones de vida del espacio barrial (iluminación pública, servicios, agua, etcétera). Esta problemática era señalada para el conjunto de las áreas metropolitanas de la región. Portes y Walton sostenían al respecto: "... más que necesidades de trabajo o de ingresos, son las demandas de vivienda las que han politizado más efectivamente a los pobres" (1976: 74). Ciertamente que por las características de Argentina, como hemos dicho, los sindicatos cumplieron en décadas anteriores un papel excepcionalmente importante si se compara con otros países latinoamericanos. Pero si nos limitamos a considerar los barrios populares, los relatos de las villas y asentamientos narran el esforzado y paulatino mejoramiento de sus condiciones de vida en términos de vivienda. Aunque esta es una cuestión urbana permanente, la multiplicación del desempleo y subempleo durante la década de 1990 desplazó la cuestión de la vivienda como aspecto principal en la movilización de los sectores populares. Así, mientras la vivienda ha sido un eje clave de la organización popular durante el modelo sustitutivo de importaciones, el trabajo se convirtió en el eje clave en Buenos Aires después del auge neoliberal.

Los barrios en los que se llevó a cabo el estudio expresan con claridad estas transformaciones. En Buenos Aires, el proceso de urbanización estuvo acompañado por la escasez de terrenos habitables legalmente. Como respuesta a los problemas del espacio urbano y acceso a servicios nacieron entonces organizaciones barriales. Estas organizaciones, junto con las sindicales, eran las principales formas de organización de los sectores populares hasta finales de la década de 1980.

Las organizaciones barriales se originaron con diversas finalidades: ocupar nuevas tierras, distribuir colectivamente los lotes, defender ocupaciones espontáneas contra acciones de "erradicación" del gobierno (esto fue muy común durante la dictadura militar a fines de los años setenta) o, buscar una mejor inserción del barrio en la ciudad y una mejor calidad de vida. También tuvieron motivaciones deportivas

y culturales y eventualmente, relacionadas con impuestos y tasas municipales (González Bombal, 1989).

En muchos barrios populares hacia mediados de la década de 1990 los problemas de “vivienda” parecían haber encontrado posibles soluciones (asfalto, servicios, y en menos casos, tenencia de la tierra), pero sus habitantes sentían cada vez más la cuestión del desempleo. Mientras que para cuestiones de vivienda y urbanización se encontraban a veces paliativos, a veces mejorías reales, el desempleo afectaba cada vez más a los hogares y a las redes sociales en las cuales esos hogares estaban insertos. Esto se tradujo en una transformación de la agenda política de los pobres urbanos.

En el Gran Buenos Aires, algunas organizaciones que habían surgido en la década de 1980 para reclamar tierra y vivienda se transforman en la segunda mitad de los años noventa en organizaciones de desocupados que van a reclamar empleo y políticas de empleo al Estado. En otros casos no hay una continuidad tan directa, pero sí una gran coincidencia entre barrios con historia de lucha colectiva por la tierra y barrios cuyas organizaciones de desocupados son fuertes.

Ese desplazamiento, de una agenda de tierra/vivienda a una de trabajo, se enmarca en un desplazamiento más general. Antes de 1997 o 1998, los análisis de barrios populares indicaban una combinación de fuerte red clientelar peronista, escasez de otras organizaciones sociopolíticas y desarrollo de nuevos agrupamientos religiosos (Semán, 2000). Cuando se comparaba esa situación con la primera mitad de la década de 1970 o la de 1980, se detectaba un cambio histórico producido en el pasaje desde un lugar con “alta densidad organizativa y niveles de movilización política [...] a ser un espacio caracterizado por la desertificación organizativa y bajos niveles de movilización política” (Auyero, 2001a: 62).

Por ello, el diagnóstico sociopolítico de “desertificación organizativa” estaba situado en un contexto de transición en el que (además del impacto desorganizador de la dictadura) los impulsos de urbanización de la villa habían cedido ante ciertas mejorías. Mientras, la cuestión del desempleo ya se ha instalado como problema central, pero sin tener aún una respuesta organizativa. En esta etapa, en Argentina, en contraste con países europeos donde hay fuertes políticas del Estado respecto del desempleo, para los desocupados, “en lugar de la centralidad de los derechos y las políticas públicas, aparecerá el mercado como único escenario posible donde intentar sobrellevar la situación” (Kessler, 1996: 112).

2.3. La emergencia de las organizaciones de desocupados

Durante la primera fase de la década de 1990 los procesos organizacionales en el Gran Buenos Aires estuvieron marcados por la crisis y la desorientación. A medida que desaparecían o se vaciaban organizaciones populares de base, crecía la relevancia de las relaciones clientelares. Los barrios que habían sido dormitorios obreros de cadenas de fábricas dejaban de tener solo un porcentaje pequeño de desempleados

para convertirse en “barrios de desempleados”. A veces a través de redes clientelares, otras veces por parte de organizaciones autónomas, crecían las ollas populares, los comedores y los merenderos. Básicamente, reclamaban al Estado más alimentos, un boleto de ómnibus para los desocupados, medicamentos o cuestiones similares.

Una de esas organizaciones en Florencio Varela decidió imitar los cortes de ruta que se habían realizado en zonas del interior del país. Se instalaron varios días en una ruta y obtuvieron por parte del gobierno varios centenares de planes sociales para desocupados. Ese logro de los desocupados de Varela modificó la agenda de muchas pequeñas organizaciones populares. El reclamo de planes sociales comenzó a generalizarse. Dichos planes –ideados durante el gobierno de Menem para apaciguar los reclamos del interior antes de las elecciones– no solo debieron extenderse después de las elecciones en 1997, sino que más organizaciones comenzaron a reclamarlos.⁴²

Los planes se obtenían por lo general en un número menor al de las personas necesitadas. Pero aunque no cubriera a todos, el éxito acercaba a nuevos desocupados a la organización, con lo cual la demanda se ampliaba. Por otra parte, el gobierno constantemente intentaba dar de baja o reducir los planes, a veces alegando cuestiones formales acerca de requisitos o planillas. Así, conservar los planes requirió movilizarse y completar papeles, destinar personas a la gestión burocrática en ministerios y dependencias estatales, a la vez que organizarse para obtener nuevos planes.

Los beneficiarios debían realizar una “contraprestación” a cambio del plan y eso implicaba generalmente que iban a desarrollar tareas supervisadas por la municipalidad. Así, cada vez que una organización de desocupados obtenía planes, perdía miembros: quienes lograban el beneficio cortando rutas realizaban después actividades controladas por gobiernos locales y hasta punteros políticos a los que se habían enfrentado. Por ello mismo comenzaron a reclamar que las tareas de contraprestación pudieran desarrollarse en la propia organización. Esto permitía desarrollar diversos emprendimientos productivos y comunitarios (panaderías, bloquera, ropero, construcciones, entre otros) y mantener a los miembros organizados. De ese modo, los desocupados trabajaban en emprendimientos de sus organizaciones y se movilizaban para reclamar más planes sociales para otros vecinos desocupados. Para cuando esto se hubo asentado, cada organización de base de desocupados se había convertido en una suerte de sindicato de desempleados.

En este proceso se combinan de manera peculiar dos claves del espacio urbano: el barrio y el tránsito. A los barrios inscriptos en la segregación clásica de Buenos Aires se le agregaba ahora la capa geológica de la segregación neoliberal que los convirtió en una suerte de institución total de la miseria. Sin trabajo ni siquiera era posible pagar el transporte para salir de los barrios. El encierro no era legal, sino económico. Desde ese parámetro barrial se agrupan quienes no tienen empleo.

⁴² El plan (en sus diferentes denominaciones) implica que el beneficiario cobra un monto fijo mensual que actualmente es de 150 pesos (50 dólares aproximadamente).

¿Cómo protestan quienes viven cada vez más inmóviles y encerrados en esos barrios? Primero, cortan rutas y avenidas, cortan justamente el tránsito, el movimiento general de la ciudad para impedir –hasta donde les permiten sus fuerzas– que la vida urbana continúe como si ellos no existieran.

En la medida en que las organizaciones acumularon fuerzas, agruparon a más vecinos y se coordinaron con otros barrios, ya no se trataba de cortar el tránsito en cualquier avenida o ruta. Se planteaba la posibilidad de realizar la protesta en la frontera urbana por excelencia: los puentes que unen la Capital con el Gran Buenos Aires. En la zona sur de la ciudad esos puentes atraviesan el Riachuelo. La zona sur fue la primera zona industrial y, por lo tanto, la zona obrera más antigua. Actualmente, repleta de fábricas abandonadas, tiene una alta proporción de pobres y desocupados estructurales y contrasta con la dinámica del norte.

En una ciudad con más fronteras, estas fronteras devienen escenarios de la protesta social. Los puentes que atraviesan metafóricamente esos límites se han convertido en escenarios compartidos y privilegiados de la disputa política. En ese marco los piqueteros llegaron a imaginar la posibilidad de “sitiar” la Capital Federal como modo de protesta, cortando los diferentes puentes de acceso.

El Puente Pueyrredón, principal viaducto de la zona sur, se convirtió en un lugar clave de las acciones piqueteras. Fue justamente en ese puente que se desató la violenta represión del 26 de junio de 2002, que culminó con el asesinato de dos piqueteros por parte de la policía. De hecho, el repudio generalizado de esos asesinatos obligó al presidente interino Duhalde a adelantar seis meses la entrega del mando.

2.4. El “Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados” y las organizaciones populares

En Buenos Aires cualquier intento por caracterizar actualmente una organización popular implica al menos tres preguntas inevitables. La primera es “¿cuántos planes tiene?”. Es decir, cuántas personas realizan en esa organización la contraprestación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Las otras dos preguntas se refieren a cómo consigue esos planes y a cómo los distribuye. En otras palabras, todas las organizaciones populares han sido transformadas por el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJHD) o han logrado constituirse en intermediarias entre el Estado y la población gracias a este plan. Las pocas que han decidido no administrar y gestionar dichos planes agrupan hoy a un reducido número de personas.⁴³

Como ya se dijera, el PJHD fue fuertemente propagandizado por el gobierno como un derecho que, a diferencia de anteriores planes para el desempleo, se tramitaba

⁴³ Un ejemplo elocuente y muy citado es el del MTD de La Matanza, que después de cumplir un papel importante en las primeras movilizaciones a fines de la década de 1990 decidió no aceptar planes y se convirtió en una organización de pocos integrantes.

sin intermediarios. Para ello, la persona debía dirigirse directamente a los centros de distribución municipal, cumplimentar los requisitos y acceder al beneficio. Los planes son distribuidos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de los Consejos Consultivos, en los que el municipio adquiere un peso relevante y es la unidad ejecutora. Hay coordinaciones por localidad hasta llegar a las organizaciones específicas donde se realizan las contraprestaciones. La creación de los Consejos con la propuesta de que las organizaciones de desocupados se integraran a ellos abrió un debate acerca de la cooptación a través de los planes de estas organizaciones (hasta entonces independientes) por parte del Estado. Así, mientras los grupos masivos de La Matanza (FTV y CCC) se integraron, las organizaciones autónomas del sur y las ligadas a partidos de izquierda se negaron a hacerlo. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a distinguir entre “piqueteros duros” y “piqueteros blandos”.

En el Gran Buenos Aires, alrededor del 5% de los habitantes tiene un plan de este tipo. A nivel nacional hay alrededor de dos millones de planes, de los cuales solo el 5% son administrados por organizaciones de desocupados (aproximadamente, 100.000 planes). El resto son administrados por los gobiernos locales.

Esta cantidad implicó que las tareas iniciales que el municipio asignaba –como el barrido y zanjeo de las calles en cuadrillas e incluso trabajo administrativo– resultaban insuficientes. Había que encontrar otras tareas y destinos. Los gobiernos locales abrieron registros de organizaciones o instituciones donde pudiera realizarse la contraprestación. Por ejemplo, con mayor o menor discrecionalidad política, enviaban una decena de beneficiarios a un comedor barrial que antes se mantenía básicamente con trabajo voluntario. Cualquier organización social se convirtió entonces en potencial ámbito de contraprestación. Así, aunque en teoría no se requieren intermediarios para solicitar el plan, la cuestión de la contraprestación implica, en los hechos, que las organizaciones donde es posible realizarlas puedan solicitar planes o que el municipio se los ofrezca. O sea, en un barrio popular de Buenos Aires lo más frecuente es que cualquier organización barrial administre alguna cantidad de planes. Comedores, microemprendimientos, guarderías, sociedades de fomento, cooperativas de vivienda administran planes, así como también lo hacen las organizaciones de trabajadores que recuperaron fábricas y las organizaciones de desocupados. Obviamente, en muchas organizaciones hay una enorme cantidad de grupos de trabajo creados para cumplir la contraprestación. Es decir, esas personas dependen de estas organizaciones para realizar allí la “contraprestación” de cuatro horas por día exigida por el Estado.

Ahora bien, los planes implican algo común para organizaciones muy heterogéneas en su origen, su funcionamiento y su proyecto. Según la cantidad de planes, el modo de conseguirlos y de administrarlos comienza a trazar diferencias “gruesas” entre las organizaciones.

Como la cantidad de planes que una organización “maneja” da cuenta de su poder en el espacio barrial, las organizaciones que tienen 100 o 200 planes suelen presentar las siguientes características: o se encuentran alineadas o aliadas al poder

municipal o tienen una capacidad relativamente autónoma de presión social y política. En este último caso, esa capacidad puede no estar ligada a lo municipal, como demuestran las organizaciones de desempleados.

Todas las organizaciones de desocupados obtuvieron la primera tanda de planes (llamados entonces Planes Trabajar) cortando rutas, puentes o avenidas. Todas, también, en los años posteriores obtuvieron planes en alguna medida a través de la negociación. La proporción de ellos entre las organizaciones piqueteras es variable. Algunas organizaciones tendieron a negociar sin cortes (como la FTV) y otras a combinar ambas cosas. Pero en todos los casos se constituyeron aceitadas negociaciones con el Estado. El líder de una organización de desocupados radicalizada nos explicó que “hasta la revolución todo es negociación; cuando ya no es necesario negociar es porque tenés más fuerza que ellos”. Esta fórmula, aunque fue expresada como forma general de la estrategia organizacional, es el efecto de la política gubernamental de otorgar planes en función de medir las fuerzas de las organizaciones. En otras palabras, la organización radicalizada se adviene, para fortalecerse, al juego de “tira y afloje” que se instituye como consecuencia de la dinámica cortar ruta/obtener planes/perder planes/amenazar con cortes/negociar y así sucesivamente. Si la política gubernamental cambia por una más inflexible, como parece estar ocurriendo, difícilmente los sectores más radicalizados piensen en negociar mientras acumulan fuerzas.

Como los planes han sido obtenidos a través de la acción directa real o potencial, las organizaciones piqueteras estipulan, además, que participar de manera activa de las luchas es condición para ser miembro de la organización. Esa coacción simbólica de la organización sobre el individuo es fuertemente debatida, sobre todo en términos morales. Desde sectores del Estado se ha afirmado y denunciado como un modo de clientelismo político. Desde las organizaciones se ha planteado que ellos solo agrupan a aquellos que luchan y en ese sentido, la obligación de participar se concibe como parte de una tarea de concientización. Todo esto implica diferencias gruesas entre todas estas organizaciones piqueteras (que obtienen los planes por sí mismas) y aquellas sociedades de fomento o comedores que reciben planes por figurar directamente en la base municipal.

La novedad de los piquetes y de los diversos tipos de planes sociales los convierte en un laboratorio fascinante en el que diversas preguntas de las ciencias sociales están siendo puestas a prueba. Ha quedado claro, sin embargo, que hablar de la retirada del Estado no resulta adecuado. Un Estado que después de más de una década de neoliberalismo extremo es capaz de distribuir dos millones de planes no parece adecuadamente descripto si se lo adjetiva como “ausente”. Es necesario ser precisos respecto de cuáles son los aspectos y los sentidos en los que el Estado se ha retraído y en cuáles se ha transformado. Y analizar qué consecuencias asociativas y relacionales tuvo ese proceso.

Los planes también han planteado en los actores diferentes preguntas políticas. Desde el movimiento piquetero hubo pequeños grupos que criticaban la aceptación

de los planes sociales, entendiendo que era una forma de ceder, capitular o ser cooptado. Desde la perspectiva del Estado, a veces los planes parecen un gran “error”, ya que es sobre la base de esos planes que los grupos de desocupados se consolidaron y crecieron políticamente.

Tanto unos como otros, a nuestro entender, le otorgan al actor desde el que miran (los piqueteros o el Estado) más poder que el que tienen y que el que tuvieron en contextos políticos específicos. Creer eso sería olvidar que la situación que se alcanzó hacia fines de 2002 de relativa estabilización de los planes y de los piqueteros es el resultado de un complejo proceso histórico, en el cual se reclamaron muchas más cosas que planes de un lado, y se intentó dar mucho menos que planes del otro.

2.5. Entre la producción y la reproducción

Si durante el auge neoliberal hubo en los barrios populares procesos de desertificación de organizaciones sociopolíticas (con alcances muy disímiles), una combinación de elementos hizo que comedores populares y organizaciones de desocupados se formaran en enormes cantidades, hasta el punto de que en algunos barrios el nuevo paisaje configuraba verdaderas selvas organizacionales.

Las condiciones que se plantearon, en el contexto de la gran crisis económica y política, para el tránsito del “desierto” a la “selva” fueron:

- a) Crisis de la economía de las redes: vaciamiento de recursos de las redes sociales por la generalización del desempleo, déficit crónico de resolución por parte del Estado e incapacidad de respuesta por parte de la red clientelar peronista por el crecimiento de la demanda y las dificultades de la oferta.
- b) Crisis política de la red: procesos de desafiliación político-partidaria, coyuntura de desarticulación de vínculos punteriles del aparato peronista entre los punteros y la población, así como entre los punteros y la estructura municipal.
- c) Surgimiento de grupos espontáneos de madres y vecinos por temas de alimentación y empleo, disponibles para ser cooptados por diferentes estructuras.
- d) Potenciación y ampliación de una militancia social que logró articularse exitosamente con estos procesos.

Bajo estas condiciones emergieron una gran cantidad de grupos de diferentes dimensiones y características en barrios populares de Buenos Aires entre fines de la década de 1990 y 2002. Posteriormente algunos fueron institucionalizados a través de los municipios, otros incluidos en la red peronista y otros se incluyeron en las organizaciones de desocupados que agrupaban diferentes barrios para potenciar sus reclamos frente al Estado.

Una parte minoritaria de esos grupos se convirtieron en organizaciones de desocupados con capacidad de disputar la hegemonía barrial. Los casos donde el Partido Justicialista u otras organizaciones perdieron el dominio político de un barrio frente a organizaciones piqueteras implicaron, además, otras condiciones. Se trata de barrios

con fuerte segregación residencial donde hay un pasado compartido, ya sea barrial/vecinal o laboral/sindical.

Históricamente, las organizaciones barriales desarrollaban reclamos vinculados a la “reproducción” (como es claramente el caso de la vivienda), mientras que las organizaciones laborales eran las encargadas de desarrollar reclamos vinculados a la “producción”. El desempleo quiebra esta lógica en la medida en que “trabajo” pasa a ser un tema propio de la reproducción y que su demanda, por otra parte, no es encarnada por los actores sindicales tradicionales. Esto explica no solo por qué –además de la segregación espacial– son organizaciones territoriales las que reclaman trabajo, sino también por qué se quebró la división tradicional de la actividad política por género. Mientras los varones tendían a participar del espacio público que desarrollaba en los ámbitos laborales, las mujeres desarrollaban actividad “social” como una extensión de la lógica doméstica en los espacios barriales. Así, se estructuró una relación entre reproducción, territorio y lo femenino, y por otra parte entre producción, trabajo, lo público, lo masculino.

Cuando el trabajo deviene una cuestión del ámbito de la reproducción y se forman organizaciones de desocupados en los barrios, las mujeres se convierten en protagonistas de organizaciones que irán desde el barrio al centro mismo del ámbito público y político: las grandes rutas y avenidas, y la Plaza de Mayo. Pero esa participación decisiva de las mujeres en la emergencia y la consolidación de esos espacios barriales no se expresa aún en la toma de la palabra en el espacio político. Los “referentes nacionales” de los grupos piqueteros son varones.

Sería un error creer que la inmovilidad de esa cuestión de género es un indicador suficiente de la reproducción de una desigualdad idéntica en cada una de las instancias. Muy por el contrario, las mujeres tienen mucho mayor peso en las deliberaciones y decisiones que en hablar por los medios de comunicación o desde un escenario.

2.6. Protesta y clientelismo

Para comprender los modos actuales de organización social y movilización política de los pobres resulta imprescindible considerar articuladamente clientelismo y protesta que, de hecho, conviven en cualquier espacio barrial popular. Es decir, la persistencia del clientelismo en una faceta que trasciende la propia institución del partido político para inscribirse como modelo de vínculo de reciprocidad.⁴⁴ En ese sentido, cabe interrogarse acerca de los modos en que las relaciones sociales instituidas por el peronismo clientelar se hacen presentes en organizaciones piqueteras. Para decirlo de otro modo, hasta qué punto el peronismo es, mucho más que un modo de identi-

⁴⁴ Cabe señalar que las relaciones de tipo clientelar no se restringen a los sectores populares. Esa cultura relacional que implica el intercambio de favores por lealtades también se observa muchas veces en sectores medios y en medios profesionales.

ficación, una cultura relacional popular que opera como polo de atracción de otros procesos organizacionales que no solo se le escapan, sino que incluso se le oponen.

Las organizaciones de desocupados están muy lejos de limitarse a reclamar. Administran miles de planes de empleo otorgados por el Estado nacional, reciben bolsones de comida que distribuyen, organizan comedores populares y, en algunas organizaciones, emprendimientos productivos que incluyen panadería, costura, bloqueras, construcciones, entre otros. Los miembros de los grupos piqueteros están en una situación muy precaria, no tienen buena alimentación ni acceso adecuado a la salud y a la educación. No obstante, a diferencia de muchos otros, tienen acceso a alimentos, a veces a apoyo escolar para sus hijos, a veces a medicamentos y, en cualquier caso, tienen acceso a una red social compleja.

Los dirigentes o referentes de esos grupos presentan un contraste claro con los punteros peronistas con quienes compiten cotidianamente en el barrio: obtuvieron los recursos que administran no a través de un vínculo de lealtad con un gobierno, sino a través de la lucha social, la confrontación y la negociación. La imposición extrema de un individuo de un tipo de intercambio de beneficios personales por votos no es comparable a la decisión colectiva de distribuir equitativamente los logros entre aquellos que participaron en la lucha por obtenerlos.

Sin embargo, este contraste tan claro podría resultar engañoso. Por una parte, porque los estudios sobre clientelismo político han mostrado que no se trata básicamente de un chantaje del puntero hacia su cliente, sino de una cultura relacional a partir de la cual el “cliente” entiende que se trata de redes personalizadas de ayuda mutua (Auyero, 2001a). Por otra parte, porque nada garantiza que los miembros de los grupos piqueteros decodifiquen las lecciones de la lucha colectiva en los términos en los cuales los líderes querrían que lo hicieran.

Una hipótesis plausible es que una parte importante de las bases piqueteras leen el vínculo con la organización a partir de sus experiencias con el municipio y la Unidad Básica. En ese sentido, resulta ineludible preguntarse si la transformación de las demandas (el eje en el trabajo) y si la transformación de los repertorios (de la huelga al corte de ruta) implica una transformación de los modelos relacionales de “la política de los pobres”. Es claro, como dicen Svampa y Pereyra, que el movimiento piquetero se ha construido “por fuera –y en oposición– de las estructuras sindicales tradicionales, mayoritariamente vinculadas al Partido Justicialista” (2003: 13), en una lucha “cuerpo a cuerpo” en los barrios en contra de las estructuras clientelares de ese mismo partido (ibíd.: 14).

Pero el peronismo, además de estructuras clientelares, construyó una profunda cultura clientelar. Por “cultura clientelar” entendemos la institución de un sentido común que supone que algunas necesidades cruciales pueden resolverse a través de vínculos de reciprocidad asimétrica con intermediarios políticos, a través de una gestión personalizada sobre alguien que tiene acceso a recursos públicos. Ese vínculo implica, necesariamente, un compromiso personal de colaborar con el donante

cuando lo necesite, ya sea en actos o a través del voto, contribuciones que además el puntero considera clave para la obtención de otros recursos redistribuibles. Es cierto que, como mostró Auyero, no se trata de un simple comercio de favores por votos. Se trata de vínculos personalizados insertos en redes sociales y se trata, estrictamente hablando, no de “comercio”, sino de intercambio recíproco de tipo asimétrico. A diferencia del comercio, en el intercambio recíproco hay un lapso de tiempo entre el acto de dar y el acto de recibir (el don y el contradon). Más allá de otros elementos que podrían considerarse, desde el punto de vista del vecino pobre que nosotros consideramos inserto en una cultura clientelar resulta evidente que una vía elemental para resolver sus problemas de alimentación o de salud u otros es recurrir a un intermediario que tiene acceso a recursos públicos.

A simple vista nada podría contrastar más con esa cultura clientelar que una organización colectiva de esos vecinos para exigir directamente al Estado la distribución de recursos. A simple vista eso mismo son las organizaciones de desocupados. Exigen sin intermediarios. Excepto que, en el proceso de exigir y obtener, de ampliar y distribuir, ellos mismos se conviertan en nuevos intermediarios.

La población nunca puede relacionarse con el Estado en general, sino con una dependencia en particular. El gobierno anterior ha hecho mucha publicidad acerca de que cada jefe o jefa desocupado tiene derecho a un plan sin intermediarios. Pero, de todos modos, eso implicaba que el control de la contraprestación quedaba en manos de los municipios o de consejos consultivos cuya legitimidad fue en parte cuestionada. En cualquier caso, las descripciones de contraprestaciones en Unidades Básicas o en comedores municipales que reclutan gente para actos son elocuentes para mostrar que, hasta ahora, los intermediarios continúan existiendo. No siempre en la obtención del beneficio, es bien cierto, pero sí en su mantenimiento.

Esto muestra que el propio éxito de las organizaciones de desocupados implicaba que su destino era convertirse, más allá de sus concepciones ideológicas, en intermediarios entre el Estado y la población. Al menos, si eran exitosos, como lo fueron al lograr convertirse en lugares donde podía realizarse la contraprestación del plan. Ahora bien, es evidente que existen modos muy diferentes de ser intermediario y que no todos los modos son necesariamente de tipo clientelar.

Para los beneficiarios de los planes, el sentido de la contraprestación se fue modificando hasta instalarse en buena parte de ellos como un “trabajo”. Es decir, quienes acceden al Plan entienden muchas veces su tarea como un trabajo en el sentido clásico del término. Por una parte, para un joven que nunca ha trabajado una tarea de cuatro horas diarias por 150 pesos es fácilmente comprendida como un empleo de medio tiempo. Hay jóvenes integrados a grupos productivos de organizaciones piqueteros que afirman que “este es el laburo que conseguí por ahora”. Para muchos que sí han tenido una extensa trayectoria laboral, la contraprestación no ha sido una obligación que les resultaría mejor evitar, sino en la posibilidad de continuar desempeñando tareas útiles a cambio de dinero. Hay un sector de trabajadores con 20 o más años de

trabajo y varios años de desocupación que perciben el plan obtenido a través de la lucha como una recuperación de dignidad perdida, dignidad asociada al trabajo y a una cultura del trabajo. Para otros beneficiarios, en cambio, se trata de un subsidio que es interpretado directamente como un recurso más (fundamental) en la diversificación de estrategias de subsistencia.

La significación del plan como trabajo confluye con la lógica gubernamental. Evidentemente, el gobierno refuerza la idea de que los beneficiarios no están desocupados. Así lo considera el INDEC y ese criterio empuja hacia abajo el índice de desocupación en el país. Esta compleja combinación entre la propia percepción de los beneficiarios y las necesidades del gobierno convierten en muchos casos un programa que se imaginó como una política social de contención a la desocupación en una política resignificada como de empleo.⁴⁵

En el caso de la relación entre la organización y los desocupados, los planes no pudieron sino constituirse en un fin en sí mismo para la gran mayoría de desocupados que integraron las distintas organizaciones. Esto los llevaba a pertenecer a una organización más allá de un compromiso político y/o una identificación con los objetivos o principios específicos de la organización. En muchos casos, pertenecer a una organización facilitaba la obtención de un plan que, de otro modo, implicaba largas colas en los centros de reparto, maltrato por parte de los agentes municipales, gastos de viáticos y toda una situación de desprotección que se sumaba a la ya sentida por efectos de la desocupación y exclusión.

La pregunta es si los movimientos piqueteros se han propuesto y han logrado transformar no solo la referencia identitaria del agrupamiento popular (anteriormente peronista), sino también el modelo relacional. En otras palabras, ¿los piqueteros transformaron la identificación en ciertos sectores populares o son el resultado de una transformación cultural más amplia?

La respuesta tiene matices. Puede haber organizaciones que no sean identitariamente peronistas, pero que construyan su movimiento sobre el modelo cultural y relacional del peronismo. Es decir, organizaciones que se identifiquen con otras tradiciones políticas (en este caso, a la izquierda del espectro político), pero que instituyan modalidades de vínculos políticos que se insertan en tradiciones y culturas políticas que discursivamente dicen rechazar.⁴⁶

Cuando la demanda social aumenta (porque disminuyen los recursos propios) o cuando escasea la oferta pública de recursos (por crisis presupuestarias o de

⁴⁵ Estas consideraciones buscan comprender la perspectiva de los actores en relación con los planes y las organizaciones. No pueden ser entendidas como un análisis de los efectos complejos del PJHD que aún no ha sido realizado.

⁴⁶ La pregunta acerca de la relación entre identidad y modelo relacional adquiere un matiz específico en la FTV. Su máximo referente y muchos de sus miembros se consideran a sí mismos “peronistas”, lo cual reenvía la cuestión de la referencia identitaria a toda una tradición en la historia política argentina, la tradición de lucha por los significados del peronismo.

abastecimiento) se genera una crisis en el lazo social y político que, como sucedió en algunas zonas durante el año 2001 e inicios de 2002, puede colocar en entredicho la subsistencia. Eso implica generalmente una crisis de la propia red clientelar en la medida en que el lazo de reciprocidad se quiebra y la gente precisa comida y medicamentos, no explicaciones. Al escasear los recursos, crecen las protestas.

Sin embargo, es excepcional que los vecinos decidan, en esa situación, organizarse autónoma y democráticamente. Cuando eso sucede, en general, es porque se produce un encuentro entre esos vecinos y un grupo de militantes sociales que actúan sin intereses particulares. Pero en general lo que sucede es que ya sea contactando otras organizaciones clientelares, ya sea generando nuevos mediadores que reemplacen a los anteriores, se reorganice una red clientelar que reemplace la anterior. Si en algunos casos esa red permanecerá en la órbita peronista, en muchos casos se produce un quiebre con el peronismo en términos de institución y de referencia identitaria. Lo que resulta equivocado es leer ese quiebre como absoluto y general. No es general porque involucra a una porción minoritaria de los sectores populares. No es absoluto porque busca nuevas referencias identitarias, mucho más que nuevos modelos relacionales.

Hay un conjunto de organizaciones de desocupados que asumen como un objetivo de su propia práctica política desarmar vínculos clientelares en particular y vínculos jerárquicos en general. Intentan diferenciarse, por ejemplo, evitando “anotar gente en los planes” como mecanismo de ampliación del movimiento. Más bien, la pauta es ofrecer un “puesto de lucha” o una “organización para luchar” o una “herramienta para pelear por trabajo genuino” y aceptar “planes que se ganan en la lucha” como forma de subsistencia mientras el proceso se desarrolla. El diagnóstico de estas organizaciones indica que la población sobre la que trabajan tiende a establecer ese tipo de relaciones con las que ellos se proponen terminar. Nuevas nociones de autonomía y acción colectiva son consideradas objetivos pedagógicos de un proyecto político y, debe decirse, con limitaciones se logran cambios que apuntan en la dirección por ellos planteada.

Sin embargo, puede notarse que las relaciones sociales instituidas por el peronismo clientelar se hacen presentes incluso en esas organizaciones. Para decirlo de otro modo, la cultura relacional del peronismo opera como polo de atracción de procesos organizacionales que se le oponen. En organizaciones piqueteras que rechazan abiertamente cualquier forma de clientelismo hemos presenciado exposiciones didácticas de referentes que expresan frustración porque una persona que lleva años en una organización continúa yendo a pedir comida como si la organización fuera una municipalidad peronista (asistencialista y clientelar). También es cierto que otros integrantes incorporan y valorizan la distinción entre un tipo de vínculo y otro. Por último, cabe distinguir entre encontrar fuertes obstáculos para un proyecto de cambio y un proyecto sustentado sobre la base de la reproducción de esa cultura relacional.

Hemos explicado este análisis a miembros del MTD. Ellos argumentan que quienes integran el MTD no lo hacen solo por los planes, ya que sería más sencillo obtenerlos a través de los punteros, con contraprestaciones más flexibles y sin tener que participar frecuentemente en protestas. Es decir, reponen la cuestión de que los vecinos también eligen una organización en la que nadie les da órdenes, en las que pueden expresarse y decidir. Es decir, enfatizan que hubo un cambio de otro orden, una ruptura identitaria y cultural. En el plano del análisis macro eso se expresaría en la “crisis de representación” que explotó en 2001 y en las diferentes respuestas que hemos mencionado al inicio. Siguiendo esa línea de análisis, cabe señalar que los procesos sociales tienden o bien a institucionalizarse o bien a disolverse. Si la crisis y los nuevos fenómenos son leídos de esa manera, se hace necesario dimensionar a los movimientos que hoy se proponen llevar a cabo ese cambio como una minoría del “movimiento piquetero” que, a su vez, es muy visible pero de conjunto minoritario entre los pobres urbanos.

CONCLUSIONES

A lo largo de este capítulo nos propusimos dar respuesta a la pregunta ¿Cómo ha cambiado Buenos Aires desde la crisis del modelo de sustitución de importaciones hasta la actualidad? Al menos hay cuatro transformaciones que resultan a nuestro modo de ver significativas. Estas son: los cambios en el rol del Estado; las transformaciones en la estructura de oportunidades laborales, la creciente exclusión social y la aparición de los nuevos pobres urbanos; la acentuación de los procesos de segregación espacial y los modos de protesta popular.

Resulta necesario precisar el significado del “fin del Estado de bienestar”. El Estado, si bien cambió sustancialmente su presencia, lejos está hoy de haber desaparecido y nos atrevemos a decir que luego de una década de reformas de corte neoliberal tiene en la actualidad una enorme importancia en la vida cotidiana y en la subsistencia de una importante porción de la población. No es ya el Estado que desarrollaba y comandaba empresas públicas (con mayor o menor grado de eficiencia), muchas de ellas de carácter estratégico para el desarrollo, como es el caso del petróleo, energía, comunicaciones, transporte aéreo, carreteras, entre otras. Esas empresas se han privatizado y su cantidad de empleados se ha reducido. No es tampoco el Estado que mantenía un marco legal de protección laboral y social. Las leyes laborales han sido modificadas fundamentalmente por presión de los empleadores y el sistema de seguridad social, hoy privatizado, atraviesa una crisis tanto o más grave que cuando dependía del Estado.

Los efectos de las políticas macroeconómicas implementadas que venían a suplantar aquellas dominantes durante la etapa sustitutiva no hicieron más que incrementar la vulnerabilidad en el mercado de trabajo. El proceso de apertura de desregulación económica ha afectado el rol de los diversos sectores económicos y su

capacidad de generar empleos adecuados a la población. La prueba más notable de ello es la creciente vulnerabilidad del mercado de trabajo traducida en altísimos niveles de desocupación abierta y una proporción significativa de empleo asalariado precario. La desocupación y la miseria han aumentado dramáticamente ante esa transformación estructural. Pero, aunque parezca paradójico, como consecuencia de ello el propio sector público ha tenido que hacerse cargo en parte de las numerosas víctimas del proceso a partir de la grave crisis sufrida en el país. *El Estado es ahora más importante que antes en la economía doméstica de los hogares pobres*, brindando un masivo subsidio al desempleo y proveyendo de alimentos a la población indigente. Por otra parte, el Estado continúa muy presente en su actividad represiva, potencial y efectiva.

El trabajo fabril ha continuado reduciéndose drásticamente y los “rebusques”, cada vez más escasos y sujetos a los vaivenes económicos, no alcanzan para proveer al menos de un ingreso mínimo a millares de argentinos. ¿Cómo ingresan entonces recursos a los barrios populares? Históricamente, la fuente principal de ingresos era el trabajo asalariado, formal o informal. Hoy, con un mercado de trabajo muy deteriorado, por una parte, crece la importancia relativa y en algunos casos absoluta de la delincuencia, y por la otra, crece la importancia relativa, aunque decrezca la importancia absoluta, de la asistencia pública. Por lo tanto, de conjunto hay menos recursos para distribuir pero, paradójicamente, el Estado cobra mayor importancia.

El deterioro en las condiciones de vida no ha sido igual para todos. Sectores minoritarios de la población se han visto beneficiados con los frutos de la apertura y desregulación económica. La consecuencia directa de ello ha sido el incremento en la desigualdad social. A lo largo del siglo XX, la Argentina fue un país que ofrecía cierta expectativa de movilidad social ascendente. Eso cambió en la década de 1990 porque una porción importante de los sectores populares que podían aspirar a un mejoramiento en sus condiciones de vida (propia o de sus hijos) han quedado literalmente excluidos. La dicotomía, como en otros modelos neoliberales, dejó de ser “arriba/abajo” para pasar a ser “adentro/afuera”.

Los sectores más pobres, ahora despojados del trabajo, han quedado más marginados que nunca. A la par de la proliferación de complejos habitacionales lujosos, *countries* clubs y barrios cerrados, se ha reducido el tránsito entre sectores sociales. Los dormitorios obreros se han convertido en espacios de desempleados, de aquellos que han sido expulsados del sistema social. A nuestro parecer, el neoliberalismo ha profundizado cualitativamente las antiguas fronteras urbanas de Buenos Aires, transformando a muchos barrios populares en guetos sociales, en instituciones totales de la miseria.

Podría entonces establecerse una diferencia entre Buenos Aires y otras áreas metropolitanas de la región. Todos los barrios que hemos analizado han formado parte de la ciudad y sus pobladores han trabajado para insertarse en ella en forma creciente. Si hoy no han sido excluidos por completo es porque sus organizaciones han obtenido recursos ciertamente escasos que permiten un modo parcial de inclusión.

Los planes y asistencia pública no son solo recursos de sobrevivencia, sino que de manera precaria constituyen y simbolizan un lazo con el Estado, un reconocimiento (insuficiente) de un derecho de asistencia.

En este contexto, también los modos en que se organizan y protestan los sectores populares urbanos han sufrido transformaciones. Si se compara con las décadas de 1960 y 1970, caracterizadas por una amplia movilización política en las principales ciudades de la Argentina y por una fuerte presencia de los partidos políticos, los cambios son inmensos. Si bien nuestro trabajo de campo no nos permite efectuar comparaciones, sí nos permite reflexionar acerca de cómo el espacio de la fábrica y de la producción, y sus organizaciones respectivas, tendieron a perder peso respecto del espacio del barrio y de la reproducción. No es casual, por lo tanto, que el único factor común a todos los barrios sea la amplia presencia de comedores comunitarios y el hecho común entre las nuevas organizaciones sea su carácter territorial.

Estas características comunes a los barrios y a las organizaciones se vinculan a los principales problemas de los pobres urbanos. Tomando en cuenta las demandas de las organizaciones populares, las encuestas de opinión pública y las investigaciones sociales realizadas en el área, estos problemas son: el desempleo, la alimentación, la inseguridad, el acceso a la tierra y la vivienda, la salud, la educación y los bajos ingresos. El peso relativo de estos problemas ha variado de hecho en la última década, el desempleo, la alimentación y la inseguridad no eran problemas cruciales hace dos décadas atrás.

Si nos preguntamos cómo sobreviven los marginados es difícil no retomar una respuesta clave de Lomnitz (1998 [1975]): usando y potenciando sus redes. Las características de las redes sociales son justamente una dimensión relevante para el análisis comparativo de las últimas décadas. Si, como ya se ha hecho, podría diagnosticarse un “encogimiento de las redes sociales” (Auyero, 2001b), surge entonces el interrogante de si a partir de ello ¿no habrán debido surgir nuevas formas de asociatividad u organización? Históricamente, una persona inserta en una red social amplia era asistida por los miembros que, teniendo trabajo u otro tipo de recursos, podía prestarle ayuda en caso de necesidad. En el contexto de crisis producto de la era neoliberal dicha suposición se torna imprecisa, ya que los recursos generales de la red se han reducido en forma significativa. Una importante porción de los sectores populares ya no cuenta con un trabajo estable, lo cual, en contextos de restricción de planes sociales genera drenaje de potenciales recursos a la red. Encontramos así una relación entre redes, asociatividad y Estado, que se ha ido transformando en el tiempo.

Svampa y Pereyra (2003) plantean la pregunta sociológica acerca de por qué es en la Argentina donde surge un nuevo movimiento social de desempleados, siendo el desempleo un problema común a muchos otros países. Para responderlo, los autores han señalado un conjunto de factores relevantes. Mientras en otros países el Estado tuvo redes políticas fuertes de contención, en la Argentina no las hubo. Mientras en otros países la demanda de empleo se canalizó a través de los sindicatos tradicionales,

dichas instituciones, en Argentina, avalaron la política de reconversión. Mientras en otros países, las personas apelaron al tejido comunitario, a las redes de supervivencia y –agregamos nosotros– a un sector informal extendido, en la Argentina estas resultaban insuficientes para amortiguar tan importante caída. Esto se combina entonces, con el impacto del desempleo en una sociedad bastante integrada y fuertemente salarial, en contraste con otras de América Latina (Svampa y Pereyra, 2003: 11-13).

Estas tres insuficiencias (del Estado, de los sindicatos y de las redes comunitarias) pueden considerarse complementariamente como presencias destacables en la historia argentina que permiten explicar el fenómeno piquetero. La relevancia del Estado en la historia argentina tiene mucha vinculación con que la falta de empleo se convierta en una demanda reivindicativa y política. Algo similar sucede con la larga tradición sindical y asociativa que se hace presente en las nuevas organizaciones ante la desertión de los dirigentes sindicales y la insuficiencia de las redes existentes. Es decir, son la propia cultura; política de los sectores populares, la particular presencia del Estado, la tradición sindical y la crisis de recursos de las redes sociales los factores que explican el fenómeno.

Si después de los piquetes se obtuvieron planes sociales, nuevamente estamos en presencia del Estado, “sindicato” y redes: hay un decreto que establece un derecho, un conjunto de organizaciones que lo reclaman y administran planes, y una trama social que se hace relevante en la búsqueda del plan, en el crecimiento de las organizaciones y en los grupos en que se estructura la contraprestación. En otras palabras, con las políticas neoliberales el Estado se retiró de la protección social de vastos sectores populares. Se genera un vacío, un “desierto”, cuando los viejos sindicatos, partidos e instituciones que en otros contextos habían sido canales de resistencia dejan de cumplir ese papel. En ese marco, surge una nueva demanda que, en algún momento variable del proceso, se institucionaliza como “sindicato barrial de desocupados”. Eso solo se consolida a partir de que el Estado reaparece (se lo hace reaparecer a través de la acción) tanto en su variante represiva como en su dimensión social. “Los manifestantes en la ruta se dirigen al Estado nacional solicitando su reinserción al mismo” (Delamata, 2002: 130).

Casi tres décadas atrás, Portes y Walton señalaban algunas tendencias sociales de “las políticas de la pobreza urbana” en América Latina, que tal vez valga la pena contrastar con la situación encontrada en Buenos Aires al comenzar el nuevo milenio. La primera señalaba que la conducta política de los pobres está definida por la racionalidad ante circunstancias estructurales. Las preguntas actuales de investigación tratan más acerca de las características específicas que adquiere en diferentes contextos esa racionalidad, que a demostrar la existencia de la racionalidad en sí. Si en ciertas situaciones puede canalizarse a través de la participación barrial o electoral, en otros momentos puede derivar en reclamar en las calles al Estado.

La segunda tendencia se refería a que el eje del agolpamiento político de los grupos marginados se vinculaba a su problema más urgente, insoluble por vía individual:

el acceso a la tierra y la vivienda. El caso argentino muestra un cambio significativo en relación a la definición del problema acuciante, el cual ha pasado a ser el empleo y no ya el acceso a la tierra y la vivienda. La tercera tendencia se vinculaba al mayor peso relativo de las organizaciones comunales centradas en cuestiones locales como vehículos preferidos de la acción política. Esta tendencia no podría ser sostenida tan taxativamente en el contexto actual argentino, aunque no porque los partidos políticos hayan cobrado una mayor relevancia –en verdad han sufrido un masivo proceso de desafiliación–. Lo que ocurre es que dado que la agenda de reivindicación es básicamente no local, la lucha por el empleo, se han generado nuevos tipos de interrelaciones entre lo local y lo nacional. Estas interrelaciones tienen una mayor semejanza con tradiciones sindicales que con tradiciones estrictamente políticas. La dinámica de alta fragmentación política de organizaciones piqueteras y fábricas recuperadas (así como en 2002 y 2003 de las asambleas populares) no podría ser adjudicada a la relevancia de lo local. Más bien, una investigación debería buscar reconstruir las matrices de cultura política que coaccionan hacia la constante fisión.

La cuarta tendencia enfatizaba la historicidad de las organizaciones y sus transformaciones en función del cambiante valor instrumental. A nuestro parecer, esta tendencia tiene una relevancia particular, tanto para comprender la evolución reciente de las organizaciones populares como para dar cuenta de la nueva fase que se está iniciando en la Argentina, pasado ya el momento más agudo de la crisis económica y política. Hemos mencionado cómo organizaciones, redes y prácticas como el trueque y las asambleas que surgieron durante la crisis perdieron por diversos motivos vitalidad y relevancia. Por otra parte, se analizó cómo el problema social acuciante del desempleo comenzó en un momento a ser colectivamente abordado y, a partir del éxito relativo de esas acciones colectivas y sus líderes, emergieron y se consolidaron centenares de organizaciones de base que luchan, obtienen y administran planes sociales. Claro está que para entender la evolución de las organizaciones no debería perderse de vista el rol clave del gobierno, el cual desarrolla estrategias para debilitar a las organizaciones más opositoras.

La quinta tendencia se refería a que la ausencia relativa de radicalización política no se debía a que no había importantes frustraciones, sino a la percepción de inviabilidad de desafiar el orden existente. Constatar esta tendencia en el caso argentino demandaría una más amplia investigación empírica. De todas formas, podemos señalar que hacia fines de 2001 e inicios de 2002 amplios sectores sociales manifestaron su percepción de la inviabilidad del orden existente que generalizaba el rechazo a lo hegemónico mucho más que afirmaba la viabilidad de un cambio en una dirección determinada. A nuestro modo de ver, el radicalismo político había alcanzado sus propios límites en la movilización a Plaza de Mayo de la izquierda y piqueteros del 20 de diciembre de 2002 (Grimson, 2003b). Un año después, un acto análogo mostró a organizaciones piqueteras consolidadas, pero sin capacidad de interpelación a sectores medios, cuya ausencia fue completa en esta oportunidad.

La sexta tendencia se refería al papel clave de la intervención externa en la acción política y la dependencia que esa acción tiene de las circunstancias generales. ¿Cuándo podemos estar seguros de considerar “externa” a una intervención? Este es un punto complejo. Así, por ejemplo, varias ocupaciones de fábricas fueron iniciativa de los propios trabajadores, pero para subsistir y avanzar tuvieron que establecer vínculos con brókers de diferente tipo (sindicales, políticos, legales). Algo similar sucedió con comedores populares o merenderos que surgieron por iniciativa de los vecinos. Por último, la existencia de un grupo de militantes sociales y políticos con cierta trayectoria ha sido una condición necesaria para la emergencia de un grupo piquetero. La intervención externa puede no ser imprescindible para el surgimiento de algunos procesos organizacionales, pero su mediación con las condiciones generales es condición *sine qua non* de su institucionalización.

Para terminar, si comparamos la situación de las organizaciones populares de la actualidad con la dominante en la década de 1970, deben necesariamente contrastarse las características de la militancia. Si en aquella época había grandes organizaciones que promovían la “proletarización” y canalizaban los vínculos con los barrios populares de los sectores medios, actualmente organizaciones políticas de ese tipo son menos relevantes. Lo llamativo es que, desde la segunda mitad de la década de 1990, una camada entera de sectores medios ha decidido realizar actividad social y política en barrios populares sin mediación institucional alguna. La crisis de los partidos políticos no ha implicado en Buenos Aires el fin de la militancia, sino el surgimiento de una militancia de nuevo tipo que muchas veces es “externa” en términos de origen social, aunque no lo es siempre –por ahora– en términos de la formación de una corporación política.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuña, Carlos; Kessler, Gabriel y Repetto, Fabián (2002). “Evolución de la política social argentina en la década de los noventa: cambios en su lógica, intencionalidad y en el proceso de hacer política social”. *Reporte del proyecto Self Sustaining Community Development in Comparative Perspective*, coordinado por el Center for Latin American Social Policy, Universidad de Texas, Austin.
- Altimir, Oscar y Beccaria, Luis (2001). “El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina”. *Desarrollo Económico*, vol. 40, n° 160.
- Altimir, Oscar; Beccaria, Luis y González Rozada, Martín (2002). “La Distribución del Ingreso en la Argentina, 1974-2000”. *Revista de la CEPAL*, n° 78, pp. 55-85.
- Auyero, Javier (2001a). *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*. Buenos Aires: Manantial.

- (2001b). “Introducción”. En Wacquant, Loic (2001), *Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Buenos Aires: Manantial.
- Beccaria, Luis (2002). “Reformas, ciclos y deterioro distributivo en la Argentina de los noventa”, mimeo. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Bustos, Pablo (1995). “Argentina: ¿un capitalismo emergente?”. En Bustos, Pablo (comp.), *Más allá de la estabilidad. Argentina en la época de la regionalización y la globalización*. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert.
- Canitrot, Adolfo (1981). “Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina. 1976-1981”. *Desarrollo Económico*, vol. 21, n° 82.
- Centro de Estudios Bonaerenses (1995). “La industria: un desempeño heterogéneo”. *Informe Coyuntura*, año 5, n° 43, abril.
- CEPAL (1990). *Transformación productiva con equidad*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- (1997). *Panorama Social para América Latina, Edición 1997*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Cerrutti, Marcela (2000). “Economic Reform, Structural Adjustment and Female Participation in the Labour Force in Buenos Aires, Argentina”. *World Development*, vol. 31, n° 4, pp. 19-43.
- Cicolella, Pablo (1999). “Globalización y dualización en la región metropolitana de Buenos Aires. Grandes inversiones y reestructuración socioterritorial en los años noventa”. *EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, vol. 25, n° 76.
- Clichevsky, Nora (2001). “Mercado de tierras y sector inmobiliario en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Transformaciones e impactos territoriales”. VI Seminario de la Red de Investigadores en Globalización y Territorio, Rosario, 2-4 de mayo.
- Cortes, Rosalía y Marshall, Adriana (1999). “Estrategia económica, instituciones y negociación política en la reforma social de los noventa”. *Desarrollo Económico*, vol. 39, n° 154, pp. 195-212.
- Delamata, Gabriela (2002). “De los ‘estallidos’ provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las nuevas protestas”. *Nueva Sociedad*, n° 182, noviembre-diciembre.
- Di Tella, Rafael; Galiani, Sebastián y Scharngrotsky, Ernesto (2002). “Crime Victimization and Income Distribution”. *Interamerican Development Bank, Regional Policy Dialogue, Poverty Reduction and Social Protection Network, Studies on Poverty and Social Protection*, mayo.
- Dorfman, Adolfo (1983). *Cincuenta años de industrialización en la Argentina (1930-1980): Desarrollo y perspectivas*. Buenos Aires: Solar.

- Gayol, Sandra y Kessler Gabriel, (2002). *Violencias, delitos y justicias en la Argentina*. Buenos Aires: Manantial.
- Golbert, Laura (1998). “Los problemas del empleo y las políticas sociales”. *Boletín Informativo Techint*, n° 296.
- González Bombal, Inés (1989). *Los vecinazos. Las protestas barriales en el Gran Buenos Aires, 1982-83*. Buenos Aires: IDES.
- Grimson, Alejandro (2003a). “La nación después del deconstructivismo. La experiencia argentina y sus fantasmas”. *Nueva Sociedad*, n° 20-21, mayo, pp. 147-162.
- (2003b). “La vida organizacional de zonas populares de Buenos Aires”. Informe final del proyecto “Urbanización latinoamericana a finales del siglo xx”, presentado en la conferencia final del proyecto, Montevideo, Uruguay, agosto. Working Paper, Center for the Study of Urbanization and Internal Migration, Population Research Center, University of Texas at Austin.
- Hermitte, Esther; Boivin, Mauricio; Casabona, Victoria; Guber Rosana y Tiscornia Sofía (1983), *Análisis Sociocultural de dos comunidades del Gran Buenos Aires: Impactos externos y autogestión*. Buenos Aires: FLACSO.
- Hintze, Susana (ed.) (2003). *Trueque y economía solidaria*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Isla, Alejandro (2002). “Los malvivientes”. En Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel, *Violencias, delitos y justicias en la Argentina*, pp. 297-312. Buenos Aires: Manantial.
- Kessler, Gabriel (1996). “Algunas implicancias de la experiencia de desocupación para el individuo y su familia”. En Beccaria, Luis y López, Néstor, *Empleo e integración social*. México: Fondo de Cultura Económica.
- (2002). “Entre fronteras desvanecidas. Lógicas de articulación de actividades legales e ilegales en los jóvenes”. En Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel, *Violencias, delitos y justicias en la Argentina*. Buenos Aires: Manantial.
- Lomnitz, Larissa (1998 [1975]). *Cómo sobreviven los marginados*. México: Siglo XXI.
- Mallon, Richard y Sorrouille, Juan V. (1975). *Economic Policymaking in a Conflict Society: The Argentine Case*. Cambridge: Harvard University Press.
- Marshall, Adriana (1996). “Weakening Employment Protection in Latin America: Incentive to Employment Creation or to Increasing Instability”. *International Contributions to Labour Studies*, 6.
- (1998). “State Intervention, the Labour Market and Inequality in Argentina”. En Berry, Albert (ed.), *Poverty, Economic Reform, and Income Distribution in Latin America*. Boulder: Lynne Rienner Publishers Inc.

- Meichtry, Nora (1993). "Urban High Primacy as a Social Construction: The Case of Argentina", Doctoral Dissertation. Austin: The University of Texas.
- Merklen, Denis (1991). *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro*. Buenos Aires: Catálogos.
- Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (1996). *Economic Report, 1996*. Buenos Aires: Ministerio de Economía, Secretaría de Programación Económica.
- (1998). *Economic Report, 1998*. Buenos Aires: Ministerio de Economía, Secretaría de Programación Económica.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Dirección Nacional de Política Criminal, Departamento de Investigaciones (2001). *Estudio de Victimización. Gran Buenos Aires 2000*, Síntesis de Resultados.
- . (2002). *Estudio de Victimización*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2001.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Dirección Nacional de Política Criminal, Sistema Nacional de Estadística Criminal (2001). *Informe Anual de Estadísticas Policiales*.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1995). *Boletín de Estadísticas Laborales*, n° 30: 3.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2003). *Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Un año de gestión 2002-2003*. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2005). *Boletín de Estadísticas Laborales*, n° 303, Dirección Nacional de Empleo.
- Oszlak, Oscar (1991). *Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano*. Buenos Aires: Humanitas-CEDES.
- Portes, Alejandro y Walton, John (1976). "The Politics of Urban Poverty". *Urban Latin America*, University of Texas Press.
- Schuster, Federico y Pereyra, Sebastián (2001). "La protesta social en la Argentina Democrática. Balance y perspectivas de una forma de acción política". En Giarraca, Norma (comp.), *La protesta social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza.
- Schvarzer, Jorge (1989). *Del auge del Plan Austral al caos hiperinflacionario: un balance a realizar*. Buenos Aires: CISEA.
- Semán, Pablo (2000). "El pentecostalismo y la religiosidad de los sectores populares". En Svampa, Maristella (ed.), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*. Buenos Aires: Biblos.
- Sirvent, María Teresa (1999). *Cultura popular y participación: una investigación en el barrio de Mataderos (Buenos Aires)*. Madrid: Miño y Dávila.

- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Thorp, Rosemary (1994). "The Latin American Economies, 1939-1950". En Bethell, Leslie (ed.), *The Cambridge History of Latin America*, vol. 6, parte 1. Cambridge: Cambridge University Press.
- Torres, Horacio A. (1993). *El Mapa Social de Buenos Aires (1940-1990)*. Buenos Aires: Dirección de Investigaciones, Secretaría de Investigación y posgrado, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.
- (2001). "Cambios socioterritoriales en Buenos Aires durante la década de 1990". *EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales*, vol. 27, n° 80, pp. 33-57.
- Wainerman, Catalina y Cerrutti, Marcela (2001). "Dual-Earner Couples in Buenos Aires. Structural Adjustment and the Female and Male Labour Force". Paper presentado en el XXIV IUSSP General Conference, Salvador, Brasil.

ANEXO

Tabla 1. Área Metropolitana de Buenos Aires. Trabajadores asalariados. Modelos de regresión logística que predicen la probabilidad de no recibir beneficios laborales (razón de probabilidades)

Variables Independientes	1980	1991	2001	Datos agregados 1980-2001
Año				
1991				
1980				0,34 a)
2001				2,33 a)
Sexo				
Mujeres				
Varones	1.01	0,74 b)	0,68 c)	
Edad				
15 a 24				
25 a 34	0,74 C)	0,52	0,43 a)	
35-44	0,62a)	0,36 b)	0,34 a)	
45 a 59	0,59 a)	0,26 a)	0,35a)	
60 y más	0,64	0,78 a)	0,36 a)	
Nivel Educativo				
Sin inst. o Primario me.				
Primario comp. o Secundario inc.	0,68 a)	0,75	0,74	
Secundario comp. o Sup. Inc.	0,46 a)	0,38 b)	0,31 a)	
Superior Completo	0,50	0,21	0,28 a)	

Rama de Actividad				
<i>Comercio</i>				
Manufactura	1,26	0,99 a)	0,88	
Construcción	3,04 a)	3,54 b)	3,88 a)	
Transporte	1,57c)	1,08a)	1,78a)	
Finanzas	0,60	0,64 a)	0,41 a)	
Servicios Sociales	,055 b)	0,39 a)	0,61 a)	
Servicios Personales	1,46CJ	2,14 a)	2,35 a)	
Tamaño del Establecimiento				
<i>Hasta 5 ocupados</i>				
Entre 6 y 99 ocupados	0,20 a)	0,38	0,29 a)	
Más de 100 ocupados	0,06 a)	0,08	0,09 a)	

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Octubre 1980,1991 y 2001.

a) $p < 0.001$; b) $p < 0.05$; c) $p < 0.1$.

Nota: 1) El modelo con datos agregados 1980-2001 controla por todas las variables independientes.

Tabla 2. Área Metropolitana de Buenos Aires. Modelos de regresión logística que predicen la probabilidad de trabajar en establecimientos de hasta cinco ocupados (razón de probabilidades)

VARIABLES INDEPENDIENTES	1980	1991	2001	Datos agregados 1980-2001
Año				
<i>1991</i>				
1980				0,80 a)
2001				1,06
Sexo				
<i>Mujeres</i>				
Varones	0,61 a)	0,64 c)	0,73 b)	
Edad				
<i>15 a 24</i>				
25 a 34	1,24c)	1,03	0,88	
35 a 44	1,45a)	1,14 b)	1,37c)	
45 a 59	1,79a)	1,32a)	1,53a)	
60 y más	4,33 a)	2,50 a)	4,00 a)	
Nivel Educativo				
<i>Sin inst. o Primario inc.</i>				

Primario comp. o Secundario inc.	0,87	0,95	1,03	
Secundario comp. o Sup. inc.	0,84	0,76 b)	0,72 a)	
Rama de Actividad				
<i>Comercio</i>				
Manufactura	0,15a)	0,19a)	0,29 a)	
Construcción	0,69 a)	1,33b)	2,52 a)	
Transporte	0,23 a)	0,25 a)	0,36 a)	
Finanzas	0,17a)	0,24 a)	0,28 a)	
Servicios Sociales	0,06 a)	0,11 a)	0,13a)	
Servicios Personales	4,32 a)	5,54 a)	8,00 a)	

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Octubre 1980,1991 y 2001.

a) $p < 0.001$; b) $p < 0.05$; c) $p < 0.1$.

Notas: 1) Fueron excluidos los trabajadores con educación superior completa.

2) El modelo con datos agregados 1980-2001 controla por todas las variables independientes.

EL MERCADO DE TRABAJO EN LA POS CONVERTIBILIDAD (2002-2010) AVANCES Y DESAFÍOS PENDIENTES*

Mariana Álvarez, Ana Laura Fernández y Francisca Pereyra

INTRODUCCIÓN

Este artículo se propone analizar la evolución del mercado de trabajo en la Argentina durante la etapa de la posconvertibilidad, prestando especial atención al rol que han tenido el Estado y otras instituciones en su dinámica, así como a los importantes desafíos que aún quedan por resolver. También se buscará detectar de qué manera han sido afectados diferentes sectores y grupos por los cambios experimentados en el mercado de trabajo. Asimismo, el texto busca brindar un panorama sobre cómo las transformaciones en el mundo del trabajo impactaron sobre el bienestar de la población, en particular en lo que hace a la desigualdad y la pobreza.

La primera sección del trabajo presenta una muy breve descripción del período de transición que siguió a la salida de la convertibilidad –y la profunda crisis que la acompañó– hasta llegar al inicio del período que analizamos, donde comienza a perfilarse un escenario de recuperación económica. La segunda sección se enfoca en las principales tendencias observadas en el mercado de trabajo en el período considerado. La primera parte de esta sección se aboca a analizar la evolución en materia de crecimiento económico y su correlato en términos de los principales indicadores laborales. La segunda parte se centra específicamente en la caracterización de la evolución de la calidad del empleo en el período. El tercer apartado estudia los efectos que tuvo en esta etapa la evolución del mercado de trabajo aquí analizada –así como otras políticas llevadas adelante por el Estado– en la distribución del ingreso y la pobreza. Para concluir, la cuarta y última sección recapitula sobre el comportamiento de los indicadores estudiados y los pone en perspectiva

* Las autoras agradecen los comentarios y recomendaciones para este texto realizados por Valeria Esquivel, Mariana Luzzi y el equipo docente de PSEC.

respecto a su evolución en las últimas décadas, intentando ayudar así a dimensionar la magnitud de los avances y de los desafíos pendientes en materia laboral.

DE LA SALIDA DE LA CONVERTIBILIDAD HACIA LA SENDA DEL CRECIMIENTO

El Plan de Convertibilidad supuso la continuidad y profundización de la transformación estructural de la economía argentina iniciada durante la última dictadura militar. Junto con el retraso cambiario se desplegó un amplio conjunto de políticas de reforma caracterizadas principalmente por la privatización de empresas estatales, desregulación, liberalización comercial y financiera y flexibilización laboral. Todo esto provocó una sustantiva transformación en la estructura productiva y del mercado de trabajo, impactando significativamente en la generación y distribución de los ingresos, redundando en un profundo deterioro de las condiciones de vida de la población.

El régimen de convertibilidad implicaba entre otras cosas la apertura al mercado externo en un contexto de tipo de cambio¹ apreciado. Cuando nos referimos a un tipo de cambio apreciado hacemos alusión al bajo precio del dólar (medido en pesos) durante esta etapa, situación que implicó que los productos exportables fueran relativamente caros a nivel internacional, a la vez que los productos importados resultarían relativamente baratos a nivel interno. Esta combinación resultó en un déficit crónico de la balanza comercial² durante esta etapa, que debió ser contrarrestado con un continuo ingreso de flujos de capital externo. No obstante, hacia la segunda mitad de los años noventa, como resultado de las crisis financieras sufridas por otros países en desarrollo (principalmente en Rusia y el sudeste asiático) la afluencia de capitales externos experimentó una significativa contracción, lo cual se tradujo en una fuerte desaceleración de la fase de crecimiento e implicó

¹ El tipo de cambio expresa la relación entre dos divisas, es decir, entre las monedas de dos países. Por ejemplo, que el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso argentino sea 4,2 significa que cada dólar estadounidense equivale a 4,2 pesos argentinos. Inversamente, un peso argentino equivale a 23 centavos de dólar, es decir que el tipo de cambio entre el peso y el dólar es 0,23.

² El *balance de pagos* es un instrumento estadístico en el que se registran las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Está compuesto por dos grandes cuentas: la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. En la *cuenta corriente* se registran las compras y ventas de bienes (que se registran en la *balanza comercial*), las compras y ventas de servicios, las rentas (por ejemplo, por inversiones realizadas por residentes en otros países) y las transferencias corrientes (por ejemplo, donaciones o remesas). En la *cuenta de capital y financiera* se registran las compras y ventas de activos, tales como tierras y las transacciones de activos y pasivos financieros (por ejemplo, acciones de empresas o bonos). A partir de la suma del resultado de ambas cuentas se obtiene el déficit o superávit del balance de pagos, que es equivalente a la variación de las reservas internacionales.

un fuerte golpe a la economía argentina. A esto se sumó la crisis brasileña en el año 1999, de manera que, luego de atravesar una etapa de recesión a partir de 1998, como resultado de las limitaciones propias del modelo en conjunción con el contexto internacional, el régimen de convertibilidad colapsó y fue abandonado en 2002 (Esquivel y Maurizio, 2005; Damill *et al.*, 2007).

En ese año, la Argentina experimenta una crisis económica y social de magnitud inusual. En esta etapa se profundizó el declive de la actividad económica, que determinó un rápido deterioro de todos los indicadores laborales, de ingresos y distributivos: el producto se desplomó, marcando una caída de más del 11%, mientras que el desempleo llegó a afectar al 21,5% de la población y el 57% de las personas llegó a situarse bajo la línea de pobreza (Esquivel y Maurizio, 2005; Maurizio, 2009). Durante esta etapa tuvo lugar una conjunción de insolvencia fiscal, cesación de pagos de la deuda pública, fuga de capitales y colapso del sistema financiero. La fuerte devaluación del peso que implicó la salida de la convertibilidad redundó en un incremento de los precios que, sin embargo, no desató una espiral inflacionaria. La ausencia de mecanismos de indexación,³ junto con el elevado desempleo –que implicaba una escasa fuerza de negociación para los trabajadores– limitó a su vez la posibilidad de ajuste de los salarios y de otros ingresos,⁴ de manera que el aumento de precios determinó una fuerte caída del poder adquisitivo.

Sin embargo, la nueva configuración de precios relativos –es decir, los precios de los productos importados pasaron a ser más altos, mientras que los precios de los productos de exportación se abarataron– comenzó a estimular las exportaciones, que ganaron competitividad al reducirse su precio en dólares. Esta misma situación favoreció también cierto grado de sustitución de importaciones, es decir, comenzó a ser más rentable producir ciertos bienes a nivel local antes que importarlos a precios que ahora resultaban menos accesibles.

De esta manera, la economía volvió a crecer y a mediados de 2005 el producto alcanzó el nivel máximo al que había llegado en 1998, antes de la recesión. La recuperación estuvo en un principio, y como vimos, sustentada por la expansión de las exportaciones y la disminución de las importaciones. Luego comenzó a ganar protagonismo el crecimiento del consumo interno, que se sostuvo a través del aprovechamiento de los factores productivos –en particular, el capital productivo– que se estaban subutilizando (capacidad ociosa) durante la última etapa de la

³ Los mecanismos de indexación son instrumentos que permiten el ajuste automático de algunos contratos a los cambios en los precios. Por ejemplo, podría asociarse la evolución del precio pagado por un alquiler o los intereses que se perciben por los depósitos bancarios a la evolución general de precios de la economía. Lo mismo podría suceder con los salarios o los haberes jubilatorios. En nuestro país estos mecanismos se implementaron, por ejemplo, durante la década del ochenta, y existe cierto consenso en afirmar que podrían haber retroalimentado la inflación.

⁴ Por ejemplo, los ingresos provenientes de jubilaciones.

convertibilidad, como resultado de la recesión. Además, la reducción de las tasas de interés internacionales, que implicó menores tasas en el mercado local, resultó un estímulo para la inversión que a partir de 2003 comenzó a recuperar su participación en el producto. El contexto externo siguió acompañando el crecimiento, gracias a la favorable evolución de los precios internacionales de los productos primarios que exporta nuestro país,⁵ cuya demanda fue en ascenso gracias al *boom* de las economías asiáticas (Damill *et al.*, en prensa).

El Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) consistió en una transferencia de \$150 otorgada a jefes de hogar desocupados con al menos un hijo menor de 18 años o con alguna discapacidad (o estar embarazada en el caso de las mujeres que no tuvieran hijos). Para percibir la transferencia los hijos debían asistir a la escuela y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio mientras que los beneficiarios tenían la obligación de realizar una contraprestación laboral de entre 4 y 6 horas diarias. Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (www.trabajo.gov.ar).

Este proceso de intensa recuperación económica se caracterizó por una significativa reversión de las tendencias en los indicadores laborales y sociales. Ya entre mayo y octubre de 2002 se detuvo el aumento del desempleo, a lo cual contribuyó la implementación masiva del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD). Este programa implicaba una contraprestación laboral por parte de los beneficiarios, que en consecuencia pasaron a considerarse ocupados, aunque estos puestos de trabajo se encontraban asociados a bajas remuneraciones. Hacia finales de ese año, se consolidaron el crecimiento del empleo y la consecuente reducción del desempleo. A su vez, la pobreza comenzó a reducirse y mejoró la distribución del ingreso como consecuencia de la recuperación del mercado de trabajo, pero también como resultado de las políticas de ingresos llevadas a cabo en este período.⁶

Se abre a partir de ese momento una etapa que muestra importantes diferencias con la anterior, tanto en relación a los sectores que motorizan la actividad económica como en cuanto al impacto que tiene el crecimiento sobre el empleo. Después del choque negativo causado por el colapso del régimen anterior, los indicadores de empleo han sido capaces de romper la tendencia hacia el empeoramiento sistemático, aunque con diferente intensidad. En comparación con la década anterior, no solo se destaca el alto crecimiento del producto y la mayor creación de puestos de trabajo; también se diferencia en el patrón de crecimiento sectorial de la economía, ya que crecieron con mayor intensidad aquellas actividades económicas que resultan más dinámicas en la creación de empleo, como por ejemplo la industria manufacturera.

⁵ Por ejemplo, productos agrícolas tales como oleaginosas, cereales o aceites.

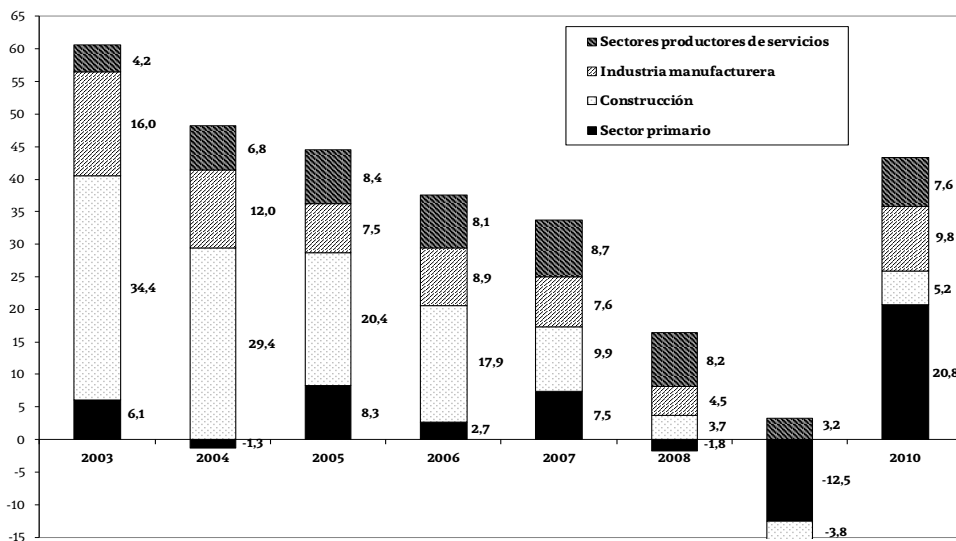
⁶ Al PJJHD se agregan en esta etapa aumentos salariales por decreto, que alcanzaron a todos los trabajadores asalariados registrados.

EL COMPORTAMIENTO DE MERCADO LABORAL EN EL PERÍODO 2003-2010. PRINCIPALES TENDENCIAS

Crecimiento y ocupación: Patrones, perfiles y ritmos en la recuperación del empleo

Como vimos, un rasgo saliente de esta nueva configuración macroeconómica, que la diferencia claramente de la anterior, es que el crecimiento estuvo liderado por los sectores productores de bienes –en particular la industria manufacturera y la construcción–. Tal como se observa en el gráfico 1, hasta 2006 estos sectores crecieron a una tasa interanual mayor que los sectores productores de servicios. Esta dinámica se encuentra asociada a que el régimen macroeconómico estuvo fundamentalmente basado en un tipo de cambio alto,⁷ lo cual implicó una protección para estos sectores –especialmente las pymes– frente a la competencia externa. A su vez, esto redundó en una utilización más intensiva de la fuerza de trabajo, de manera que la recuperación económica tuvo un impacto fuertemente positivo en la creación de empleo (Damill *et al.*, 2007).

Gráfico 1. Variación interanual del producto interno bruto (PIB) por sector de actividad. 2003-2010



Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales-INDEC.

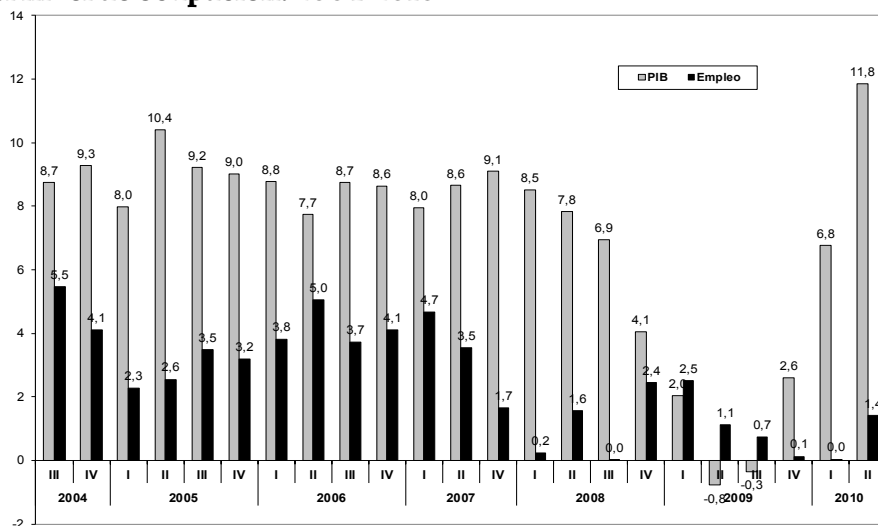
⁷ El tipo de cambio alto significa que el precio del dólar medido en pesos es alto. Esto implica que los productos importados sean relativamente más caros, a la vez que se abaratan los productos exportables (en la sección anterior se hizo referencia a la situación inversa, preva- leciente durante la convertibilidad).

¿Qué muestra el gráfico? El Producto es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año. Se usa como indicador del tamaño de una economía y su variación interanual es un indicador del crecimiento o la contracción económica entre dos años.

Esto se puede observar en el gráfico 2, que muestra las variaciones interanuales del producto y del empleo en cada período. La fuerte caída del costo laboral medido en dólares como resultado de la devaluación, la recuperación de los sectores intensivos en trabajo y la capacidad ociosa existente en el momento (es decir, el capital productivo subutilizado) redundaron en que, al menos hasta 2007, el crecimiento económico fuera acompañado por un ritmo elevado de creación de empleos (Beccaria *et al.*, 2005).

Acerca del INDEC: El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) –que citamos como fuente los gráficos de este texto– es un organismo público responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas oficiales, que asegura la comparabilidad de la información producida por los diferentes organismos integrantes del Sistema Estadístico Nacional (compuesto por las áreas estadísticas de los organismos nacionales, provinciales y municipales). La información estadística se produce partir del relevamiento de datos a través de censos y encuestas, así como a partir de datos contenidos en registros administrativos.

Gráfico 2. Variaciones interanuales del producto interno bruto y el nivel de ocupación. 2004-2010



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y la Encuesta Permanente de Hogares – INDEC.

Como se mencionó, la implementación del PJJHD tuvo un impacto positivo sobre algunos indicadores del mercado de trabajo, dado que la participación en el programa implicaba una contraprestación laboral, de manera que las personas que se incorporaban pasaban de estar desocupadas –o inactivas– a encontrarse ocupadas. Sin embargo, la favorable evolución de la economía también determinó la creación de empleo genuino, tal como puede observarse a partir de la tasa de empleo calculada excluyendo a los ocupados a través de programas de empleo (gráfico 3). Como resultado, el peso de los ocupados a través de planes en el empleo total fue en franca disminución a partir de 2005, para prácticamente desaparecer en los años más recientes.

Principales indicadores del mercado de trabajo

En nuestro país, la principal fuente de información sobre el mercado de trabajo es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las siguientes definiciones surgen del marco conceptual de la encuesta y se adecuan a las recomendaciones internacionales en la materia.

Población económicamente activa (PEA): incluye a las personas que están ocupadas o que no lo están pero buscan activamente una ocupación. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.

Población ocupada*: incluye a las personas que en la semana de referencia de la encuesta trabajaron al menos una hora en una actividad económica.

Población desocupada: incluye a personas que no están ocupadas y buscan activamente trabajo.

Población subocupada horaria: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas.

Población inactiva: personas que no están ocupadas ni buscan trabajo (algunos ejemplos podrían ser jubilados, amas de casa o estudiantes que no se encuentran ocupados ni buscando trabajo).

Tasa de actividad: porcentaje de la pea sobre la población total.

Tasa de empleo: porcentaje de la población ocupada sobre la población total.

Tasa de desocupación: porcentaje de la población desocupada sobre la PEA.

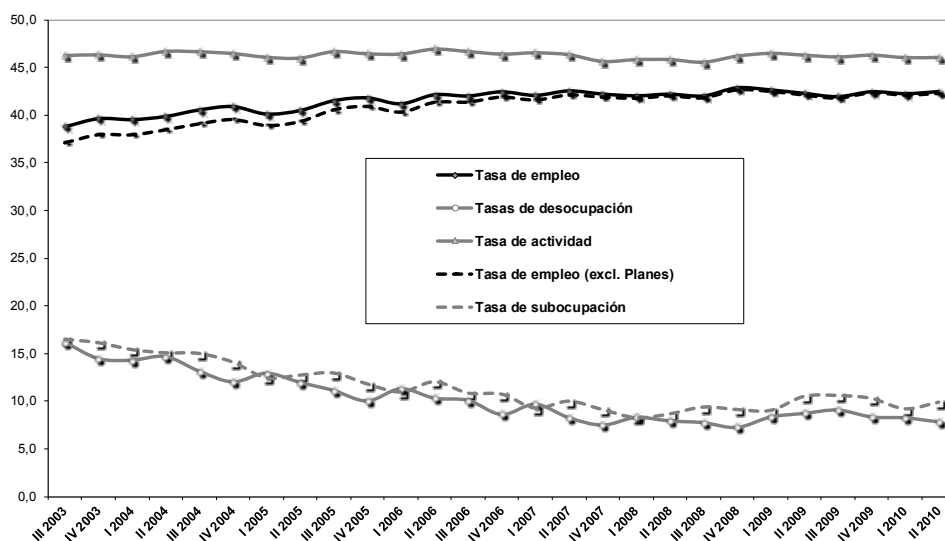
Tasa de subocupación: porcentaje de la población subocupada sobre la PEA.

Fuente: Comunicados de prensa. Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.

* En algunos programas sociales los participantes deben realizar algún tipo de contraprestación laboral (por ejemplo, en el pjjhd), de manera que quedan clasificados como ocupados. Para el análisis, en algunos casos se excluyó a los ocupados a través de planes de empleo del grupo de ocupados con el objetivo de dar cuenta de la creación de empleos genuinos, a través del mercado de trabajo.

En efecto, los principales indicadores del mercado de trabajo mostraron durante esta etapa una tendencia claramente favorable: crecieron tanto la tasa de actividad como la de empleo, mientras que se redujeron las tasas de subocupación y de desocupación. Esta última llegó a perforar el piso de los dos dígitos hacia fines de 2006, después de encontrarse durante 13 años consecutivos por encima del 10% (gráfico 3).

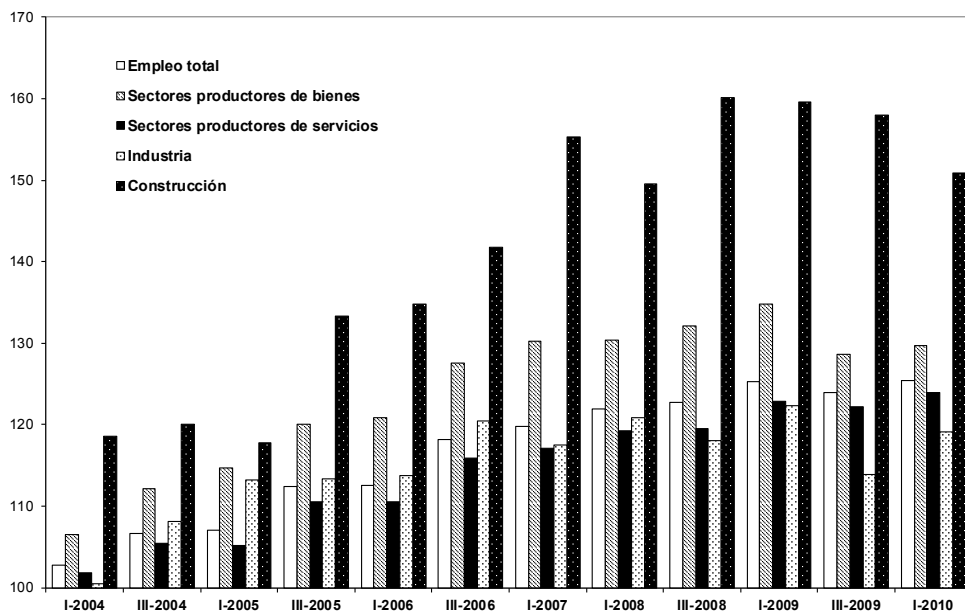
Gráfico 3. Tasas de actividad, desocupación y subocupación. Total de aglomerados urbanos. 2003-2010



Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH- INDEC.

Tal como se mencionó, las ramas de actividad productoras de bienes ganaron protagonismo en el crecimiento en esta etapa y lideraron, a su vez, la creación de empleo. Entre ellas se destaca particularmente la construcción, aunque también es importante resaltar la recuperación de la industria manufacturera como generadora de empleo, en contraste con la destrucción de puestos de trabajo que se produjo en esa rama durante la convertibilidad (gráfico 4). Este hecho es particularmente relevante si se considera que este sector se caracterizó históricamente por generar puestos de trabajos estables y de calidad.

Gráfico 4. Evolución del empleo según rama de actividad (excluye planes de empleo). Total de algerados urbanos. 2004-2010. Índice base III trimestre 2003 = 100



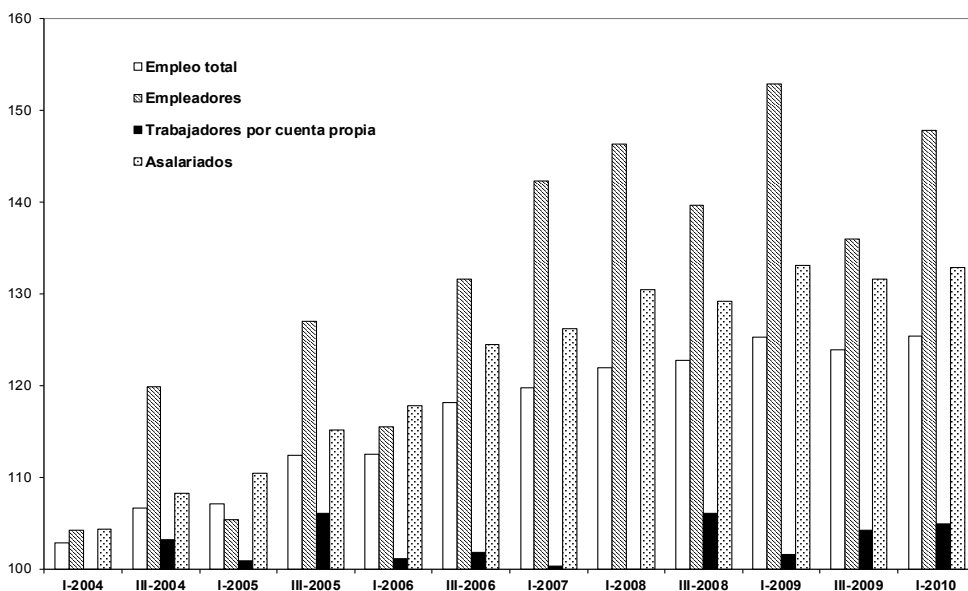
Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH- INDEC.

¿Qué muestra el gráfico? En este gráfico se usaron números índices para mostrar la evolución del empleo de los distintos sectores. Un número índice muestra la evolución de una variable con relación a una base. En este caso, las barras muestran la variación porcentual del empleo en relación al tercer trimestre de 2003, que se tomó como base para la comparación tanto en este gráfico 4, como en el que le sigue, el gráfico 5.

Otra diferencia saliente en comparación con lo sucedido en la década pasada, que también tuvo su correlato con la evolución de la desigualdad (tema que se ampliará más adelante), está relacionada con el hecho de que el empleo aumentó para las personas de todos los niveles educativos. En este sentido, se destaca la dinámica que siguió la tasa de empleo de las personas con nivel educativo medio (secundaria completa y terciaria/universitaria incompleta), que creció durante todo el período a una tasa mayor que la del promedio. Es decir, aun cuando las posibilidades de inserción laboral siguen siendo menos ventajosas para personas con bajo nivel educativo (hasta secundaria incompleta) y la intensidad de la recuperación del empleo para

este grupo fue menor, la creación de empleo en esta etapa no estuvo tan orientada hacia trabajadores con nivel educativo alto (terciaria/universitaria completa) como en la década anterior. Esto se encuentra relacionado, al menos en parte, con el tipo de trabajo que demandan los sectores que fueron más dinámicos en este período (por ejemplo, la construcción). En cuanto a las características de las ocupaciones que se generaron, cerca del 90% de los nuevos puestos fueron asalariados, mientras que las ocupaciones por cuenta propia representaron una proporción mucho menor.

Gráfico 5. Evolución del empleo según categoría ocupacional (excluye planes de empleo). Total de aglomerados urbanos. 2004 - 2010. Índice base III Trimestre 2003=100



Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH- INDEC.

Los **asalariados** son los ocupados que trabajan en relación de dependencia, que aportan su trabajo personal al proceso productivo, pero que no son propietarios de los medios de producción que utilizan ni deciden la organización de la producción.

Los **trabajadores por cuenta propia** utilizan su trabajo personal y sus propias maquinarias e instalaciones. No contratan mano de obra adicional.

Los **empleadores** son los propietarios o socios de una empresa, que contratan personal asalariado y establecen las formas organizativas que toma la producción, a la vez que aportan las maquinarias e instalaciones necesarias para la producción.

Fuente: La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina, INDEC (www.indec.gov.ar).

Además del nivel educativo, también encontramos diferencias en la participación en el mercado de trabajo –y su evolución– para diferentes grupos poblacionales definidos en función de otras variables, tales como el sexo y su edad. En particular, las mujeres y los jóvenes suelen tener una tasa de participación (tasa de actividad) menor que los varones adultos, sobre todo debido a que estos grupos alternan su participación en el mercado de trabajo con otras actividades, tales como el cuidado del hogar o el estudio. En este sentido, se observa que en este período la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se mantuvo relativamente estable, mientras que los jóvenes fueron reduciendo su participación. La situación contrasta agudamente con la significativa entrada de jóvenes y cónyuges mujeres antes inactivas al mercado de trabajo durante la década del noventa, situación que se conoce como “la estrategia del trabajador adicional”, a fin de compensar la caída generalizada de los ingresos del hogar (Cerrutti, 2000).

La recuperación del mercado de trabajo se reflejó también en estos grupos, cuya tasa de desocupación se redujo en esta etapa, siguiendo la evolución del promedio. Sin embargo, es importante destacar que la desocupación sigue afectando a las mujeres y a los jóvenes más que al resto de la población: mientras que la tasa de desocupación promedio era –según datos oficiales– menor al 8% en el segundo trimestre de 2010, era cercana al 10% para las mujeres y trepaba al 18% para los menores de 25 años.

El escenario positivo que se acaba de presentar se mantuvo hasta el año 2007. A partir de ese momento se produjo una aceleración de la inflación que –asociada a un tipo de cambio nominal relativamente estable– implicó en cierta medida una gradual apreciación real del peso.⁸ Esto significa que, nuevamente, los precios de los bienes producidos en nuestro país se encarecieron en relación con los del resto del mundo, lo cual implicó un abaratamiento relativo de los bienes importados y un encarecimiento relativo de los bienes producidos en el país. A su vez, los sucesivos aumentos salariales determinaron que los costos laborales (y por lo tanto, los costos de la producción local) se encarecieran en el contexto internacional. Dado que gran parte de la industria de nuestro país encuentra dificultades para competir en el contexto internacional debido a su baja productividad, hacia fines de 2007, en parte como resultado de la menor protección cambiaria que implicó un encarecimiento de los productos argentinos en el mercado internacional, el sector industrial comenzó a mostrar algunos signos de desaceleración. Estos cambios tuvieron su correlato en el mercado de trabajo: la tasa de empleo no siguió creciendo, sino que se estabilizó como resultado del menor ritmo de la creación de empleo. Cabe destacar, además, que los sectores productores de bienes –es decir, aquellos que mostraron un mayor

⁸ Al aumentar los precios internos, aun cuando el tipo de cambio nominal (es decir, la cantidad de pesos que hay que pagar para obtener, por ejemplo, un dólar) no se modifica, sí cambia la cantidad de productos que se pueden adquirir en nuestro país con un dólar.

dinamismo en la creación de empleo durante la recuperación— son los que sufrieron de manera más marcada esta desaceleración (Campos *et al.*, 2010).

A este escenario menos optimista se agrega, además, la crisis internacional que tuvo su epicentro en los Estados Unidos en septiembre de 2008. La crisis impactó en la economía local a través de la disminución de la demanda de exportaciones y la consecuente reducción de los precios de los bienes de exportación, la reducción de los flujos de capitales extranjeros y la dificultad de acceso al crédito, así como los ajustes que realizaron las compañías transnacionales en todo el mundo. Por estas vías, la crisis afectó negativamente el nivel de actividad en algunas ramas, tales como la construcción y la industria (que ya había comenzado a mostrar signos de desaceleración antes de la crisis). El mercado de trabajo no fue ajeno a estos sucesos, de manera que la desaceleración en la generación de empleos se profundizó, y en algunos sectores se llegó, incluso, a destruir puestos de trabajo (Campos *et al.*, 2010).

En el marco de la crisis internacional, el gobierno implementó una serie de medidas para hacerle frente, tales como una leve depreciación del peso, el estímulo a las exportaciones y el establecimiento de ciertos límites a las importaciones, así como algunas medidas de promoción destinadas a sectores específicos y estímulo del crédito. A su vez, se motorizó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) con el objetivo de proteger el empleo ante la crisis, a través de subsidios temporarios destinados al pago de salarios.

La recuperación del comercio exterior y de los componentes de la demanda interna permitieron que la economía de nuestro país comenzara a recuperarse ya hacia fines de 2009, tendencia que se consolidó en el año 2010. Sin embargo, esta recuperación de los efectos de la crisis internacional del 2008 —que implicó también la reversión de la tendencia a la caída en el nivel de actividad de los sectores productores de bienes— no se ha visto reflejada con la misma intensidad en el mercado de trabajo. En efecto, si se observa la evolución del producto y del empleo durante la crisis, surge que el empleo asalariado registrado⁹ se redujo aún más que el producto, mientras que la recuperación posterior está resultando más lenta y menos intensa. En consecuencia, a pesar de que el producto se encuentra en niveles superiores a los anteriores a la crisis internacional, el nivel de empleo no siguió creciendo y se encuentra prácticamente estancado en los mismos niveles de 2007, aun antes de que la crisis afectara la economía argentina. Esto estaría mostrando, en cierta medida, una menor capacidad de la economía de generar empleo incluso en un contexto de crecimiento del producto, en comparación con la primera etapa de la posconvertibilidad. Esta situación resulta preocupante, dado que una cantidad importante de personas sigue estando desocupada y requiere de una decidida acción del Estado para hacer frente a los desafíos que aún quedan pendientes en materia

⁹ En la próxima sección se explica este concepto y se detalla su evolución en el período.

de sustentabilidad del crecimiento económico acompañado por el crecimiento del empleo (gráfico 2).

La evolución de la calidad del empleo: ingresos, estabilidad y protección social

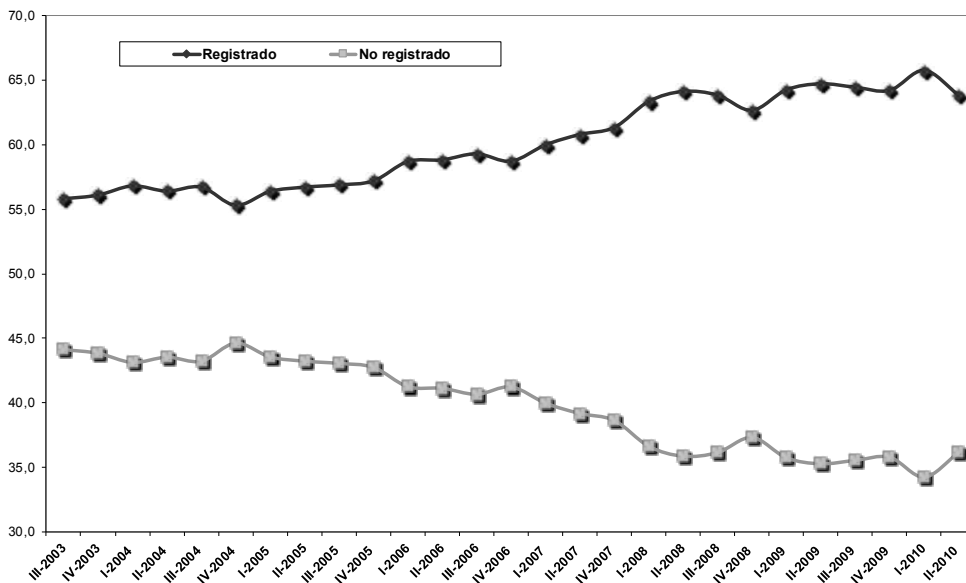
Este apartado se propone brindar un panorama respecto a la evolución del empleo en estos años en relación a su calidad. ¿Qué entendemos por la calidad de un empleo? En general, lo que se hace es tomar como referencia un empleo con protección social y legal, estable, de jornada completa y con una remuneración adecuada¹⁰ (González y Bonofiglio, 2002).¹¹

Comenzaremos entonces por una dimensión sustancial en lo que hace a la calidad del empleo y que tiene que ver con la *protección social y legal* que este puede (o no) brindar al trabajador. Tal como señalan Lindenboim *et al.* (2000), la mejor manera de aproximarse a esta característica del empleo, con base en los datos estadísticos disponibles en nuestro país, es considerando si los trabajadores están registrados o no en el sistema de seguridad social. En el caso particular de los asalariados, universo del que partimos para realizar este análisis, la forma de identificar los puestos no cubiertos por el sistema de seguridad social es a través de la realización de aportes al sistema jubilatorio por parte del empleador. La realización de aportes jubilatorios constituye un indicador central, ampliamente utilizado en nuestro país como aproximación para estimar la magnitud del empleo asalariado precario o no precario en términos estadísticos. En este sentido, la inserción en un puesto de trabajo no registrado –sin aportes jubilatorios– constituye una problemática central para los asalariados, ya que está asociada a carencias más generales en relación con los derechos y beneficios que prevé la normativa que regula la relación entre empleador y empleado (Schleser, 2007).

¹⁰ Desde ya, la definición de lo que constituye una remuneración adecuada es, casi siempre, objeto de discusión. Pero, en términos operativos, consideraremos aquí una remuneración adecuada aquella acorde a la normativa vigente para la categoría ocupacional y la rama de actividad correspondiente en un determinado momento histórico.

¹¹ Desde luego, existen definiciones más amplias y sofisticadas de lo que se entiende por “calidad del empleo”, que incluyen una variedad mucho más amplia de dimensiones (como pueden ser, por ejemplo, las condiciones de seguridad e higiene, la satisfacción con el trabajo, las posibilidades de desarrollo personal y laboral, etcétera). Lo que se presenta aquí constituye una definición básica y operacional, es decir, que nos permite medirla de manera relativamente accesible mediante las fuentes de datos cuantitativos con las que contamos.

Gráfico 6. Evolución del empleo registrado y no registrado (como porcentaje de los asalariados totales). Total de aglomerados urbanos. 2003-2010



Fuente: elaboración propia sobre la base de la EPH-INDEC.

Como puede observarse en el gráfico 6, es a partir del 2004 que comienza a observarse una tendencia, si bien lenta y moderada, hacia la reducción del peso del empleo no registrado, que pasó de representar cerca de un 45% de los asalariados en el año 2004 hasta llegar a un porcentaje en torno al 35% a principios del 2010. Tal como se verá más adelante, si bien moderada, esta disminución relativa del empleo no registrado es significativa, puesto que se trata de la reversión, por primera vez en décadas, de una tendencia de suba sostenida de este tipo de relaciones laborales precarias. De hecho, el 80% de los nuevos puestos de trabajo que se crearon entre el 2004 y el 2010 fueron puestos asalariados registrados, mientras que los puestos asalariados no registrados representaron solamente el 11% de los nuevos empleos (Damill *et al.*, en prensa).

Sin duda, el proceso de crecimiento económico opera en forma favorable sobre las condiciones de trabajo. Por un lado, en un contexto de menor desempleo y mejoras generales en las condiciones de vida de la población, los trabajadores no se ven obligados a aceptar empleos en cualquier condición. A su vez, las mayores ganancias que obtienen las empresas en un período de prosperidad les facilitan a los empleadores solventar los costos del registro de sus trabajadores. También es

importante señalar que el contexto macroeconómico favorable estuvo acompañado por diferentes líneas de acción por parte del gobierno que en pos de fomentar el trabajo registrado, tales como la intensificación de las inspecciones laborales (Plan Nacional de Regularización del Trabajo), mecanismos de simplificación en el registro de los trabajadores (Programa de Simplificación Registral), campañas de concientización en medios masivos y reducción de los costos de contratación para nuevos empleados de pequeñas y medianas empresas mediante un descuento en las contribuciones patronales durante doce meses (Novick *et al.*, 2008).

Ahora bien, ¿cómo se distribuye esta reducción del empleo asalariado no registrado según las características de los trabajadores y los establecimientos en que se insertan? Un aspecto importante tiene que ver con que este fenómeno ha ocurrido en casi todas las ramas de actividad y en establecimientos de todos los tamaños (Novick *et al.*, 2008; Schleser, 2007).

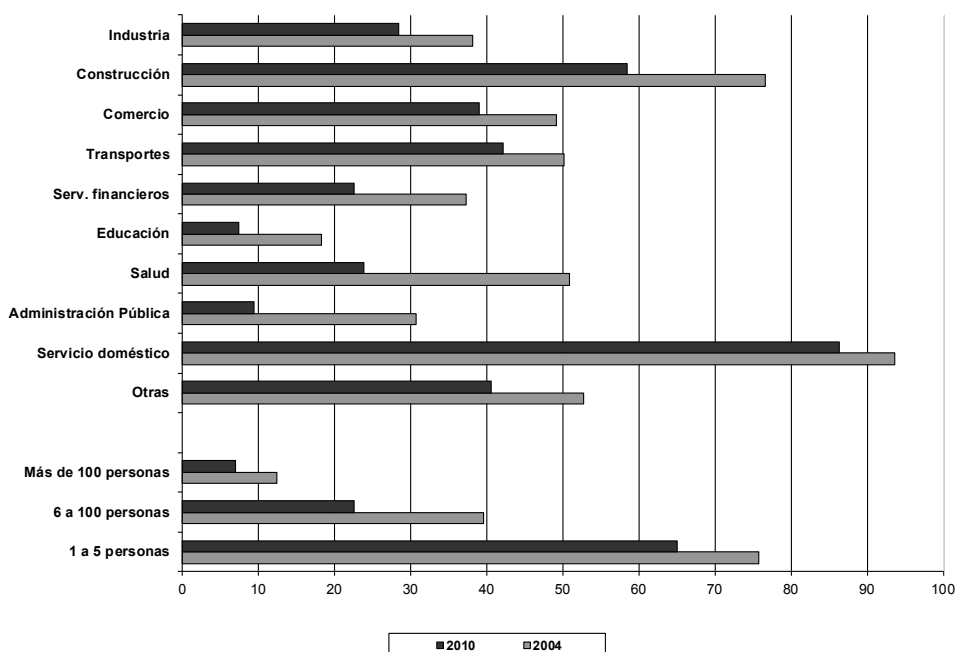
Si bien las reducciones fueron importantes en todos los casos, se produjeron con mayor intensidad en ramas como la construcción, la salud, los servicios financieros, inmobiliarios y empresariales y la propia administración pública (gráfico 7).

Es importante destacar que algunos avances resultan particularmente destacables en función de la dinámica y la historia del sector de actividad. Por ejemplo, la tendencia a la recuperación de la protección social en el sector de la construcción resulta significativa, puesto que se trata de una rama de actividad tradicionalmente asociada con elevados niveles de no registro. También resulta paradigmática en este sentido la tendencia a la recuperación en el sector salud, que sufrió un importante embate durante la década de los noventa a raíz de las reformas flexibilizadoras implementadas. Existen otras ramas con altos niveles de no registro, como el caso del servicio doméstico –sin duda uno de los más severos y que afecta con intensidad a las mujeres–¹² en las que la reducción del empleo no registrado, que fue muy modesta, se logró a expensas de una amplia batería de políticas públicas¹³ que, sin duda, dejan importantísimos desafíos pendientes y requieren redoblar los esfuerzos.

¹² Este es un sector de sumo peso entre las ocupadas mujeres. De acuerdo a los datos más recientes con los que contamos, a principios del año 2010, el 16% de las mujeres ocupadas trabajaban en el servicio doméstico.

¹³ A modo de ejemplo, en el año 2006, como incentivo a la registración de estas trabajadoras, se promulgó una ley (N° 26063), que permitía a los empleadores que pagaban impuestos a las ganancias, deducir las contribuciones sociales y el salario de sus empleadas domésticas. Esta medida fue también acompañada de sucesivas campañas publicitarias en la vía pública y medios audiovisuales relativa a los derechos y obligaciones relativos al trabajo doméstico (Estévez y Esper, 2009).

Gráfico 7. Evolución del empleo no registrado (como porcentaje de los asalariados totales) según rama de actividad y tamaño del establecimiento. Total de aglomerados urbanos. II Trimestre 2004 y II Trimestre 2010



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

En cuanto al tamaño del establecimiento, las mayores reducciones se produjeron en empresas medianas, que conforman el grupo que en conjunto emplea la mayor proporción del empleo asalariado (gráfico 7).

Si consideramos la reducción del empleo no registrado en función de las características de los trabajadores, encontramos que las mejoras más relevantes se produjeron entre aquellos que se veían más afectados por ese fenómeno: las mujeres, los jóvenes y las personas con menor nivel educativo. Si bien las reducciones del empleo asalariado no registrado no alcanzan a cerrar las brechas existentes –entre, por ejemplo, varones y mujeres; entre trabajadores adultos y jóvenes y entre trabajadores con mayor y menor nivel educativo– sí es necesario destacar que dichas brechas no solo se redujeron en gran medida, sino que también esta reducción se produjo en forma sostenida a lo largo de todo el período considerado.

Una mención aparte merecen los *trabajadores por cuenta propia*. En este caso, el criterio generalmente utilizado para identificar, de manera aproximada, con los datos disponibles para nuestro país, si los mismos se encuentran en situación de trabajo

precario, tiene que ver con la baja calificación de las tareas desempeñadas y un pequeño número de empleados (generalmente intermitentes), en caso de haberlos.¹⁴ Con base en esta clasificación, la proporción de trabajadores independientes informales representa a la gran mayoría de estos trabajadores –cerca del 80%– a lo largo de todo el período considerado. No obstante, es importante recordar, como se señaló en la sección anterior, que la proporción que representan los no asalariados (trabajadores por cuenta propia y empleadores) respecto a los ocupados totales se redujo a favor de una mayor proporción de empleo asalariado. Puesto que, en sociedades como la nuestra, el trabajo por cuenta propia está fuertemente asociado a actividades de “refugio”, este retroceso del cuentapropismo a favor del empleo asalariado puede leerse como un componente más en lo que hace a la mejora en la calidad del empleo.

Otro factor que hace a la calidad del empleo es su *estabilidad* a lo largo del tiempo. Los datos con los que contamos permiten indicar que la estabilidad del empleo también mejoró sustancialmente en este período. La EPH indaga entre los asalariados si el trabajo es de tiempo indeterminado o si, por el contrario, se estipuló un momento de finalización. A fines del 2003 un 17% de los trabajadores manifestó que su empleo era temporal –es decir, que existía de antemano una fecha de finalización del contrato–. Ya a principios del 2010, el porcentaje de asalariados que brindó esta respuesta se redujo a un 9%.

Algo similar ocurre cuando observamos la antigüedad que tienen los ocupados en su puesto actual, otro indicador acerca de la estabilidad del empleo. A fines del 2003 la proporción de trabajadores con menos de un año de antigüedad en el puesto –que son los más vulnerables a perder esa ocupación– era superior al 25% de los trabajadores, mientras que, a comienzos del 2010 –en un corto período– esta proporción había descendido a menos del 20%. Como consecuencia lógica, se incrementó la proporción de trabajadores entre las categorías de mayor antigüedad. Es decir, en términos globales se produjo una acumulación de antigüedad entre los trabajadores, esto es, un aumento en su estabilidad laboral.

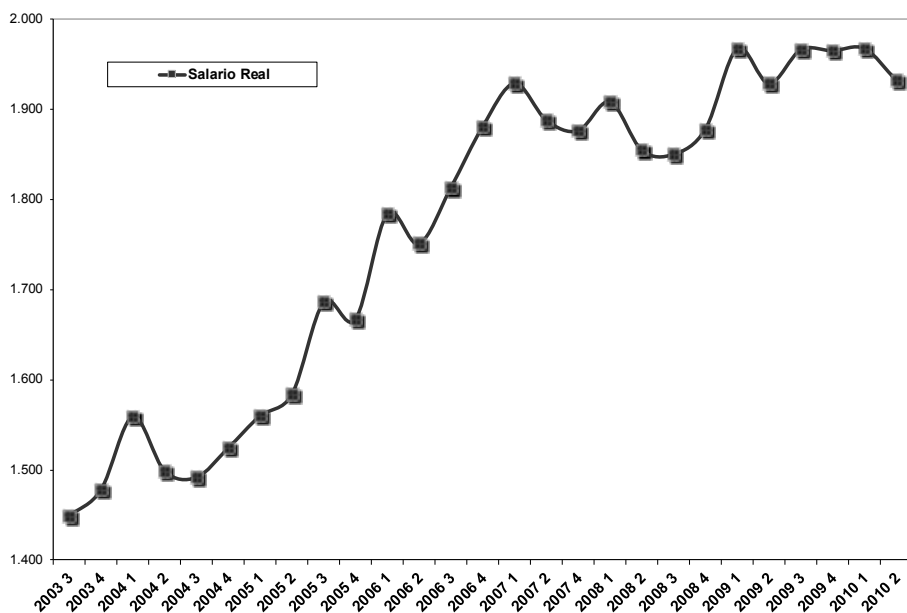
¿Qué es el salario real? A diferencia de lo que se conoce como el *salario nominal* –que se expresa en la suma de dinero que recibe el trabajador por su labor–, el salario real mide el poder de compra de esos ingresos, es decir la capacidad de adquirir bienes y servicios con el salario en función del nivel de los precios. De esta forma, el cálculo del salario real se hace ajustando los ingresos nominales en función de la evolución del nivel general de precios.

¹⁴ De esta manera, son considerados informales los trabajadores por cuenta propia que desarrollan tareas que no tienen calificación profesional y, en el caso de los empleadores, que el número de empleados no llegue a las 5 personas (Fraguglia y Persia, 2003). Estudios como el de Lepore y Schleser (2006) han mostrado cómo el perfil social, laboral y de ingresos de los cuentapropistas en estas condiciones es muy similar (y, para ciertos grupos, incluso más vulnerable) que el de los asalariados no registrados.

Por último, un factor central en lo que hace a la calidad del empleo tiene que ver con los *ingresos* que este reporta. Tal como puede apreciarse en el gráfico 8, el salario real de los trabajadores parte de un piso muy bajo en el año 2003: la crisis del 2001 y la devaluación que le siguió implicaron una formidable caída –de más del 30%– los ingresos reales de los trabajadores (CENDA, 2007). El año 2002 fue sin duda el más crítico, cuando las remuneraciones de los trabajadores experimentaron uno de sus pisos históricos en nuestro país. Es entonces desde el año 2003 que, partiendo de niveles muy deprimidos y en paralelo a la recuperación económica, el nivel de los salarios comienza a experimentar una tendencia creciente que, no obstante, tendió a estabilizarse en los últimos años del período. Asimismo, tal como señalamos en el caso del empleo registrado, en comparación con la intensidad del crecimiento económico y de la generación de empleo, el crecimiento de las remuneraciones tuvo un tinte mucho más moderado.

Es importante señalar que esta recuperación de los ingresos en los primeros años del período se dio en un contexto en el que no hubo cambios importantes en la cantidad de horas promedio trabajadas en la ocupación principal (que se mantuvo en torno a las 40 horas semanales promedio a lo largo del período). Es decir, el incremento salarial tuvo que ver con una mejora real de la retribución al trabajo, independientemente de cuántas horas se le dediquen.

Gráfico 8. Evolución del salario real promedio de la ocupación principal. Total de aglomerados urbanos. 2003-2010



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la EPH – INDEC y CENDA.

Nota: Desde la intervención del INDEC en el año 2007 existen evidencias que muestran que la información del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no resulta confiable. El IPC es un índice que da cuenta de la evolución de los precios en nuestra sociedad y por ende, es necesario para calcular el valor del salario real. Por este motivo, para reflejar la evolución de los precios a partir de enero de 2007, utilizamos aquí una estimación de precios alternativa, denominada IPC-7 provincias, que elabora el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA). Hasta el IV trimestre de 2006, el salario real fue calculado con base en IPC-GBA del INDEC.

En términos generales, los ingresos de los ocupados crecieron para el conjunto de los trabajadores, independientemente de sus características personales (edad, sexo, nivel educativo) y del lugar que ocupan en el mercado de trabajo. Sin embargo, el ritmo de la recuperación experimentó variaciones según la posición y el perfil de los trabajadores.

En el caso del universo de los asalariados, se observa un marcado contraste entre los ingresos de los registrados y los no registrados. Si bien la brecha en términos de ingresos entre ambos grupos de trabajadores se mantuvo en valores muy elevados, experimentó una reducción: los asalariados no registrados pasaron de ganar en promedio un 40% de lo que obtenían sus pares registrados en el año 2003 a casi un 50% a principios del 2010. La reducción de la brecha tiene que ver con el *ritmo* de la recuperación del ingreso, que en el caso de los asalariados no registrados fue superior al de sus pares registrados.¹⁵ En este sentido, es importante recordar que los ingresos de estos trabajadores desprotegidos partieron de un piso muy bajo en el año 2003, cuando no llegaban a ganar la mitad de lo que obtenían los asalariados registrados de características similares. De todas maneras, la suba más veloz de los ingresos reales de los asalariados no registrados, si bien importante, no ha sido suficiente: no llega a los valores estipulados del salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) e implica aún una muy significativa brecha en relación a sus pares registrados.

En lo que hace a las diferencias de género, las mujeres tienden a ganar menos que sus pares varones (cerca de un 80% del salario promedio real de los varones) sin alteraciones significativas en el período. La situación tiene que ver, por un lado, con el hecho de que las mujeres –aun cuando los niveles de formación y preparación sean iguales a los de sus pares varones– tienden a acceder en menor medida a puestos calificados y, por ende, perciben ingresos por hora más bajos (Esquivel, 2007). Asimismo, otro factor que incide fuertemente en la diferencia de ingresos entre varones y mujeres tiene que ver con el hecho de que las jornadas de las mujeres son más reducidas que las de los varones. La evidencia existente sugiere que, por un lado, las mujeres tienden a tener oportunidades laborales en ocupaciones con

¹⁵ Una situación similar se observa en el caso de los trabajadores no asalariados informales en términos de la intensidad en la recuperación de sus ingresos.

restricciones al incremento de la jornada salarial (el servicio doméstico, de importante peso en el empleo femenino en nuestro país, es un ejemplo paradigmático en términos de las jornadas reducidas). Y, estrechamente relacionado con lo anterior, las dificultades para compatibilizar responsabilidades domésticas y de cuidado culturalmente atribuidas a las mujeres con las exigencias de un trabajo remunerado, podrían estar también reforzando esta oferta de jornadas laborales reducidas así como la necesidad de optar por esta modalidad (Faur y Zamberlín, 2008). En todo caso, la persistencia de esta desigualdad de género en los ingresos mensuales es un campo que sin duda requerirá de políticas para revertir las inequidades observadas.

En relación con el nivel educativo de los trabajadores, como ya señalaran Beccaria *et al.* (2005) a mediados de la década, y a diferencia de procesos de crecimiento en otros períodos históricos, las remuneraciones crecieron más entre los trabajadores con nivel educativo bajo. Como se verá en detalle más adelante, esta tendencia, que se mantuvo a lo largo de todo el período, contribuyó fuertemente a disminuir el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso entre los trabajadores. Dos factores –no excluyentes entre sí– han sido expuestos para explicar este fenómeno de aumento de ingresos entre los sectores con menor nivel educativo. El primero tiene que ver con el tipo de mano de obra que demanda la recuperación industrial y de la construcción, que implicó una mayor demanda relativa de obreros calificados –sin educación superior– que habría empujado sus salarios al alza. El segundo factor, de suma importancia, tiene que ver con la política estatal a favor de los trabajadores que percibían las remuneraciones más bajas (Marshall, 2010).

El impulso del Estado al alza de las remuneraciones se manifestó en una primera etapa (2002-2003) a través de decretos de necesidad y urgencia que dictaminaron el aumento de las remuneraciones en forma de sumas fijas para el conjunto de los asalariados (aumento que benefició a los trabajadores de más bajos ingresos, ya que la suma fija estipulada representa un incremento porcentual superior en relación con sus pares de mayores ingresos). Esta estrategia pudo llevarse adelante en gran medida por la existencia de niveles salariales muy deprimidos y por la magnitud del incremento de la producción y las ganancias empresariales en los primeros años de la posconvertibilidad. Otra medida estatal central en materia de incremento de ingresos –particularmente los más bajos– ha tenido que ver con el aumento sostenido del SMVM a partir de 2004, que, después de estar diez años congelado, pasó de \$200 en el año 2003 a \$1840 en 2011. En este sentido, ha resultado importante la iniciativa del Estado para la reactivación del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario. Este Consejo, conformado por entidades empresarias, sindicales y el Ministerio de Trabajo, se reúne periódicamente a discutir el nivel del SMVM. La situación contrasta con lo sucedido durante la década del noventa, período en el que este organismo estuvo ausente del escenario laboral.

Hasta el año 2006, el gobierno ocupó un rol central en el establecimiento de un piso para la negociación salarial colectiva al impulsar el establecimiento del

SMVM antes de las rondas de negociaciones. En una segunda etapa, a partir del 2006, esta dinámica se modificó, y el gobierno fomentó en mayor medida la negociación colectiva entre representantes gremiales y patronales antes del establecimiento del SMVM. El gobierno siguió incidiendo, sin duda, al sugerir una pauta de aumento salarial cada año para guiar las negociaciones. Cabe destacar que en los últimos años el acatamiento de la pauta sugerida por el gobierno y las negociaciones entre sindicatos y representantes patronales ha sido más dispar y conflictiva en función de las tensiones que impone el incremento de los precios (CENDA, 2007).

Sin duda, el proceso por el que atravesó la evolución salarial ha sido uno de signo positivo que ha ayudado a revertir en buena medida el deterioro experimentado a raíz de la crisis del 2001. No obstante, la capacidad de recuperación salarial parece haberse detenido a mediados del período analizado, manteniéndose en valores estables desde entonces. En este sentido, la aceleración inflacionaria es uno de los factores importantes que podría estar planteando serios desafíos a la continuidad de la recuperación salarial en particular y, por ende, a la continuidad de proceso de recuperación de la calidad del empleo en general (CENDA, 2009).

EL IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL ROL DEL ESTADO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA POBREZA

La evolución de la economía y en particular del mercado de trabajo en la última década tuvo previsiblemente un impacto positivo sobre la distribución del ingreso y sobre la pobreza. También contribuyeron a los movimientos redistributivos ciertas políticas llevadas a adelante por el gobierno, que comentaremos más adelante. Antes de concentrarnos en el estudio de la evolución de estas dimensiones en el período, vamos a hacer algunas aclaraciones para explicar de qué estamos hablando cuando nos referimos a la distribución del ingreso y mediante qué canales el funcionamiento del mercado de trabajo y las políticas públicas pueden impactar sobre dicha distribución.

Como mencionamos en un apartado anterior, las estadísticas sobre el producto brindan información acerca de cuál es el valor de los bienes y servicios disponibles en una economía, que a su vez equivale a los ingresos totales generados por los factores productivos de esa economía. Sin embargo, el nivel del producto o el ingreso (es decir, cuánto hay disponible para todos) no es suficiente para analizar el bienestar de las personas de un país. Es importante conocer, también, cómo se distribuye el ingreso entre diferentes grupos o personas.

Una forma de abordar el problema de la distribución del ingreso es la de identificar las diferencias en los ingresos percibidos por los distintos hogares o por las personas que los componen. Para ello, se utilizan diversos indicadores de mayor o menor complejidad. Uno de estos, el que presentaremos en esta sección, es la relación entre los ingresos que perciben los hogares o personas que se encuentran en diferentes quintiles de ingresos (ver recuadro). Los ingresos de los hogares pueden provenir de

distintas fuentes: laborales o no laborales. Los primeros se refieren a aquellos que las personas perciben como contrapartida de su actividad laboral, mientras que entre los segundos se encuentran, por ejemplo, los ingresos provenientes de jubilaciones o pensiones, los percibidos a través de programas sociales o en la forma de rentas (por ejemplo, por alquileres). Los ingresos laborales representan una porción muy importante de los ingresos totales de los hogares, motivo por el cual el funcionamiento del mercado de trabajo es un determinante importante de la distribución del ingreso tanto entre trabajadores como entre familias.

¿Qué son los cuantiles y para qué tipo de análisis pueden usarse?

Los **cuantiles** son porciones en las que puede dividirse una población. Cada una representa la misma proporción de la población total. Para analizar la distribución del ingreso, la población (personas, trabajadores u hogares) se ordena según su nivel de ingreso (total, laboral o familiar) de menor a mayor. Luego la población se divide en partes iguales, conformando los cuantiles. Por ejemplo, la población ordenada se puede dividir en cien **percentiles**, cada uno de los cuales contendrá al 1% del total, o en veinte **ventiles**, que contengan al 5% de la población cada uno, diez **deciles** conformados por el 10% cada uno o cinco **quintiles**, cada uno de los cuales contendrá al 20% de la población.

Para analizar la distribución del ingreso, pueden usarse estos grupos que permiten comparar el porcentaje del ingreso que recibe un determinado porcentaje de la población, ordenada según su nivel de ingreso. A la vez, se pueden establecer relaciones entre el ingreso total de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, se puede establecer qué porcentaje del ingreso total reciben el 20% más rico y el 20% más pobre de la población respectivamente, o cuántas veces mayor es el ingreso del grupo que se encuentra en el extremo superior de la distribución con relación al que se encuentra en el extremo inferior.

Como se observó en la sección anterior, las personas acceden a puestos de trabajo de diferente calidad y con distintos niveles de remuneraciones, como resultado en parte de sus características personales, pero también de la configuración del mercado de trabajo. El nivel y la distribución de los ingresos laborales se ven afectados por la dinámica del mercado de trabajo, la legislación laboral y otras instituciones laborales, tales como las características que asume la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores (sindicatos) y los empresarios. A su vez, la distribución de los ingresos de los hogares se encuentra asociada a las características de sus miembros y su participación en el mercado de trabajo. También se ve afectada por las características que asume la distribución de los ingresos no laborales y por la redistribución de ingresos que realiza el Estado a través de impuestos y transferencias.

Durante el período posconvertibilidad, el crecimiento económico se vio acompañado no solo por un sustantivo aumento en el nivel de empleo, sino también por mejoras en la calidad de los puestos de trabajo. Eso implicó una reversión de la tendencia al deterioro en la participación de los trabajadores en el ingreso total, aunque sin recuperar los niveles anteriores a la crisis del fin de la convertibilidad (Graña, 2007). A su vez, y sumada a algunas de las políticas implementadas en la última década, la dinámica del mercado de trabajo tuvo un impacto positivo sobre la distribución del ingreso tanto entre trabajadores como entre hogares. En este aspecto nos centraremos en los párrafos siguientes.

En la primera etapa posterior a la caída de la convertibilidad la desigualdad en los niveles de ingresos de los hogares empeoró principalmente como consecuencia del aumento del desempleo. Luego, la implementación del PJJHD implicó una transferencia de ingresos hacia los hogares que se encontraban en el extremo inferior de la distribución, de manera que tuvo un efecto positivo, aunque modesto. A partir de 2003, la distribución comenzó a mejorar fruto de la reducción del desempleo y el comportamiento de los ingresos laborales. A esto se sumó el aumento de los haberes jubilatorios y la ampliación de su cobertura, así como la más reciente implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) (ver recuadro más adelante).

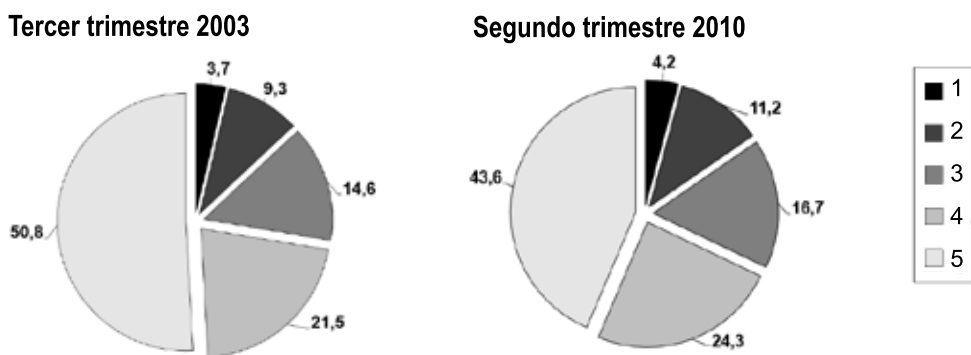
La devaluación implicó una reducción generalizada de los ingresos, que no tuvo un efecto desigualador importante entre los ocupados, debido, justamente, a que el poder adquisitivo se redujo para todos (Esquivel y Maurizio, 2005). Sin embargo, a partir de la recuperación la distribución de los ingresos laborales comenzó a mejorar, mostrando una reducción de la brecha de ingresos entre los extremos de la distribución. Esto fue resultado de la implementación de aumentos salariales a través de decretos presidenciales, de la vigorización de las negociaciones salariales colectivas y la recuperación del SMVM a través de sucesivos aumentos que lo reinstalaron como un piso para los asalariados registrados con menores ingresos, tal como se mencionó en el apartado anterior. De hecho, aun cuando la aceleración de la inflación a partir de 2007 le quitó cierta potencia, esta institución del mercado de trabajo actuó a su vez como límite a la reducción salarial en el contexto de la crisis internacional. La reducción del desempleo implicó, a la par, una mayor fuerza de negociación para los trabajadores, lo cual redundó en la posibilidad de recuperar en cierta medida el poder adquisitivo perdido en la crisis de principio de siglo. Estos factores tienen un impacto igualador al afectar en mayor medida a los trabajadores de menores ingresos.

El nivel de los ingresos laborales aumentó –aunque con distintas intensidades– para todas las categorías ocupacionales. El hecho de que los ingresos de los asalariados no registrados se recuperaran con mayor velocidad, contribuyó a la mejora en la distribución de los ingresos laborales. Esto se debe a que estos trabajadores se encuentran en el extremo inferior de la distribución de los ingresos laborales (Beccaria y Groisman, 2008). Otro factor que ayuda a explicar la reducción de la

desigualdad es el incremento en la proporción de trabajadores registrados, lo cual implica que estos pasen a estar cubiertos por la legislación en materia de ingresos y, en muchos casos, por la negociación colectiva.

En el siguiente gráfico se muestra la reducción de la desigualdad en la distribución de los ingresos laborales. Para ello, los ocupados se ordenaron según su nivel de ingreso laboral y se dividieron en quintiles, cada uno de ellos compuesto por el 20% del total de ocupados. De esta forma, el primer quintil está compuesto por el 20% de los ocupados con ingresos más bajos, el segundo quintil está formado por el 20% de los ocupados con ingresos algo más altos y así sucesivamente, de manera que en el quinto quintil se clasificaron los ocupados con los ingresos laborales más altos. Cada una de las tortas muestra qué porción de los ingresos laborales totales se llevan los trabajadores de cada quintil (recordemos que la cantidad de trabajadores es la misma en cada uno). Tal como se puede observar, el 20% de los trabajadores de ingresos más bajos se llevaba el 3,7% de los ingresos laborales totales en 2003, mientras que este porcentaje pasó a ser del 4,2% en 2010, es decir, que su participación aumentó. En el otro extremo, el 20% de los trabajadores de mayores ingresos recibía el 50,8% del ingreso total a principios del período, y el 43,6% al final. Esta menor participación de los trabajadores de mayores ingresos acompañada de una mayor participación de quienes se encuentran en peor situación relativa está indicando una mejora en la distribución del ingreso.

Gráfico 9. Porcentaje del ingreso laboral total según quintil de ingreso laboral. Total de aglomerados urbanos. III trimestre de 2003 y II trimestre de 2010



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

Esta reducción en la desigualdad de los ingresos laborales, sumada a la reducción del desempleo desembocó, a su vez, en una menor desigualdad en los ingresos fami-

liars. Esta distribución se vio además positivamente afectada por ciertas medidas de política que se tomaron en este período.

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)

Hasta la implementación de la AUH, solo los trabajadores asalariados registrados tenían acceso al sistema de asignaciones familiares contributivas. Estas consisten en una transferencia mensual que realiza la ANSES por cada hijo menor de 18 años que tienen a su cargo estos trabajadores, cuando su ingreso mensual es menor a un determinado monto (en el momento en que escribimos este artículo, el límite es de \$4800). A esta asignación mensual se suman asignaciones por matrimonio, por embarazo, nacimiento y adopción y una ayuda escolar anual.

La AUH consiste en la ampliación del sistema de asignaciones familiares para incluir a familias que anteriormente no se encontraban cubiertas por el sistema. Consiste en una transferencia mensual por cada niño menor de 18 años (y sin límite de edad para discapacitados) que se otorga a los trabajadores desocupados o trabajadores que no perciben asignaciones familiares a través del sistema contributivo (asalariados no registrados, trabajadores por cuenta propia, servicio doméstico) con ingresos menores al salario mínimo.

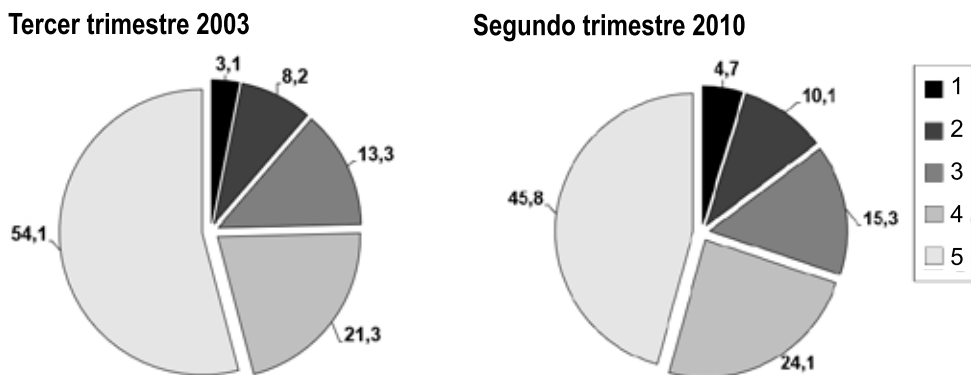
El cobro de la asignación está sujeto al cumplimiento por parte de los beneficiarios de determinadas condiciones: el cumplimiento del plan de vacunación obligatorio, la realización de controles de salud y la asistencia a un establecimiento escolar público. El 20% de la transferencia se retiene y se deposita una vez al año contra la presentación de los certificados que acrediten el cumplimiento de estas condiciones.

Fuente: ANSES (www.anses.gov.ar)

Por un lado, se implementó el Plan de Inclusión Previsional, que consistió en reducir los requisitos de acceso a la jubilación, con el objetivo de facilitar el acceso a personas que, teniendo edad para jubilarse, no hubieran cumplido con los aportes necesarios. Esta “moratoria” le dio la posibilidad a una importante porción de la población de adultos mayores de obtener una jubilación y realizar los aportes faltantes en la forma de descuentos sobre los haberes percibidos, lo que redundó en un significativo aumento en la cantidad de personas cubiertas por el sistema a partir del año 2005. En el 2008 se estableció también la Ley de Movilidad Previsional, que implicó la implementación de dos aumentos anuales en los haberes jubilatorios sujetos a los incrementos salariales y los incrementos en los recursos del sistema, lo cual eliminó la discrecionalidad con que se otorgaban estos aumentos hasta ese momento. La reforma previsional culminó hacia fines de 2008, con la estatización del sistema de Administradoras privadas de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFP) y la creación del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) (CIFRA, 2009).

Hacia fines de 2009 se implementó también otra medida de política social que implica un importante impacto positivo sobre la distribución de los ingresos familiares: la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). Dado que esta consiste en una transferencia monetaria que alcanzó en general a los hogares con menores ingresos, diversos estudios muestran que su impacto sobre la distribución es progresivo (por ejemplo, Bertranou, 2010).

Gráfico 10. Porcentaje del ingreso familiar total según quintil de ingreso per cápita del hogar. Total de aglomerados urbanos. 2003-2010



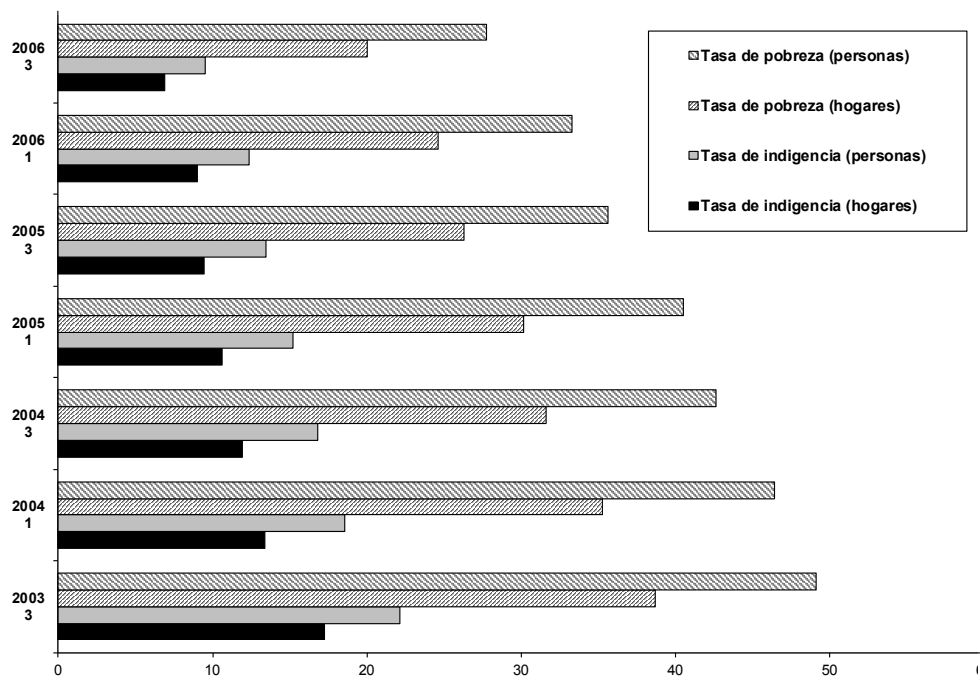
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

Tal como muestra el gráfico, la dinámica de los ingresos laborales y no laborales en el período fue tal que la participación de los hogares con menores ingresos en el ingreso total se incrementó, mientras que se redujo la participación de los hogares que se encuentran en el extremo superior de la distribución.

El aumento de los ingresos laborales, que sumado a la reducción de la desocupación implicó un incremento de los ingresos familiares, junto con los aumentos de los ingresos no laborales a través de la implementación de distintas medidas de política social, redundó a su vez en una reducción de la indigencia y la pobreza en esta etapa. En efecto, como se ve en el gráfico siguiente, la tasa de pobreza (en hogares) se redujo entre 2003 y 2006 prácticamente a la mitad. A la salida de la crisis de 2001/2002 cerca del 40% de los hogares se encontraba por debajo del umbral de la pobreza. Esta tasa se redujo notoriamente, hasta tomar un valor cercano a la mitad (20%) en 2006. Un comportamiento similar se observa en la evolución del porcentaje de personas pobres.¹⁶

¹⁶ Las tasas de pobreza e indigencia en hogares son el porcentaje de hogares pobres o indigentes sobre el total de hogares. Mientras que las tasas de pobreza e indigencia en personas corresponden al porcentaje de personas pobres o indigentes sobre la población total. Dado que los tamaños de los hogares pobres o indigentes y no pobres son distintos (en general, los hogares indigentes y pobres tienen más miembros que los no pobres) las tasas de hogares y personas difieren.

Gráfico 11. Tasas de pobreza e indigencia en hogares y personas (en porcentajes). Primeros y terceros trimestres. 2003-2006



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

Nota: Como mencionamos en la nota al pie del gráfico 8, existen evidencias respecto a que, desde el año 2007, la medición de la evolución de precios al consumidor (IPC) que realiza el INDEC no resulta confiable. Puesto que el IPC es un insumo necesario para el cálculo de las tasas de pobreza e indigencia, se muestran aquí los datos solo hasta el año 2006.

Por su parte, la tasa de indigencia, que hace referencia a las personas u hogares cuyos ingresos resultan insuficientes para adquirir los alimentos necesarios que cubran sus necesidades nutricionales, mostró una reducción aún mayor: se redujo en un 60% entre 2003 y 2006, pasando de afectar al 17% de los hogares al 7%.

La evolución de la economía, el mercado de trabajo y las políticas implementadas en la etapa de la posconvertibilidad implicaron una notable mejora en las condiciones de vida de la población. Esto se observa principalmente en la evolución de las tasas de pobreza e indigencia, pero también en los cambios que mostró la distribución de los ingresos laborales y familiares.

No obstante esta evolución positiva, la existencia de una significativa proporción de hogares pobres, así como de hogares indigentes, plantean la necesidad de profundizar este camino hacia la mejora en la redistribución del ingreso que, sin duda, todavía deja lugar a importantes mejorías.

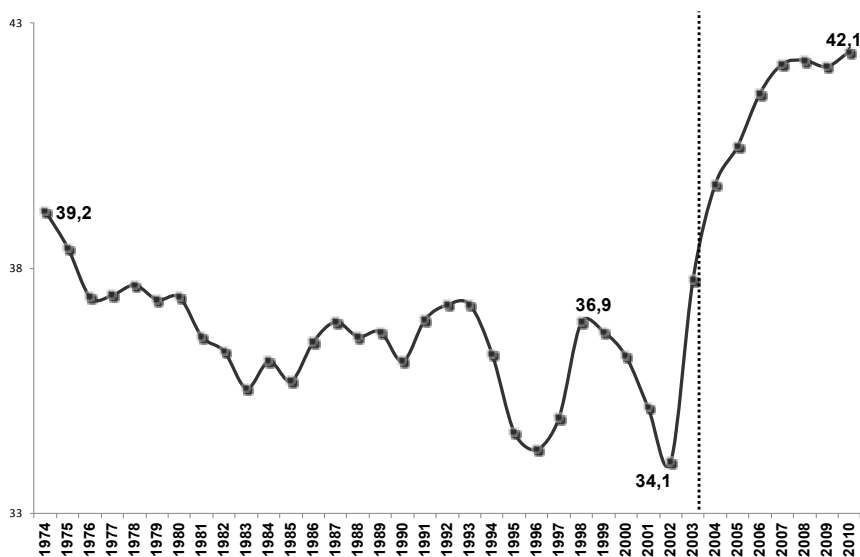
A MODO DE CONCLUSIÓN: LA POSCONVERTIBILIDAD EN PERSPECTIVA

Como hemos visto, el mercado de trabajo experimentó una serie de avances indiscutibles durante la posconvertibilidad. El crecimiento económico fue no solo pronunciado, sino también sostenido. A diferencia de otras etapas –notablemente la de los noventa– durante la mayor parte del período este crecimiento económico estuvo asociado a un marcado incremento del empleo y descenso paralelo del desempleo. Asimismo, se registró una recuperación –si bien más lenta que la propia recuperación del empleo– en lo que hace a la calidad de los puestos de trabajo y en lo que atañe a una redistribución más progresiva (igualitaria) del ingreso. No obstante, es necesario visualizar estos avances en perspectiva respecto a lo sucedido en las últimas décadas. Puesto que desde mediados de los setenta –a partir del último golpe militar– el mercado de trabajo experimentó un deterioro sostenido, es pertinente preguntarnos dónde nos dejan situados los avances de este período analizado en relación con el deterioro laboral de los últimos 36 años.

Uno de los aspectos en los cuales el período reciente planteó un avance contundente, que aplica no solo para el período considerado, sino también respecto a las últimas décadas, estuvo relacionado con el marcado crecimiento de la tasa de empleo desde 2003. El crecimiento del nivel de ocupación que tiene lugar a partir de ese año, lo ha llevado a sobrepasar el nivel de las últimas tres décadas –superando incluso el prevaleciente durante los años anteriores a la última dictadura militar, valor que rondaba en el 40% de la población– y logrando un ritmo de crecimiento prácticamente sostenido durante ocho años, hecho sin precedentes durante las últimas décadas (gráfico 12).

Tal como se mostró, en este contexto, la desocupación cayó por debajo del umbral de los dos dígitos hacia fines de 2006, después de encontrarse durante 13 años consecutivos por encima del 10%, aunque sin lograr acercarse a los valores registrados durante los años 70 y 80 cuando la tasa rondaba entre el 2,6% y el 6% (gráfico 13). El crecimiento del empleo también fue acompañado por una significativa disminución de la subocupación horaria como contrapartida del aumento de las ocupaciones plenas, que habían presentado una tendencia decreciente en los noventa. No obstante, la mejoría respecto a los noventa, al igual que en el caso del desempleo, la subocupación todavía presenta niveles muy superiores a aquellos registrados hacia fines de la década del setenta.

Gráfico 12. Evolución de la tasa de empleo. Total aglomerados urbanos (promedio anual) 1974-2010



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

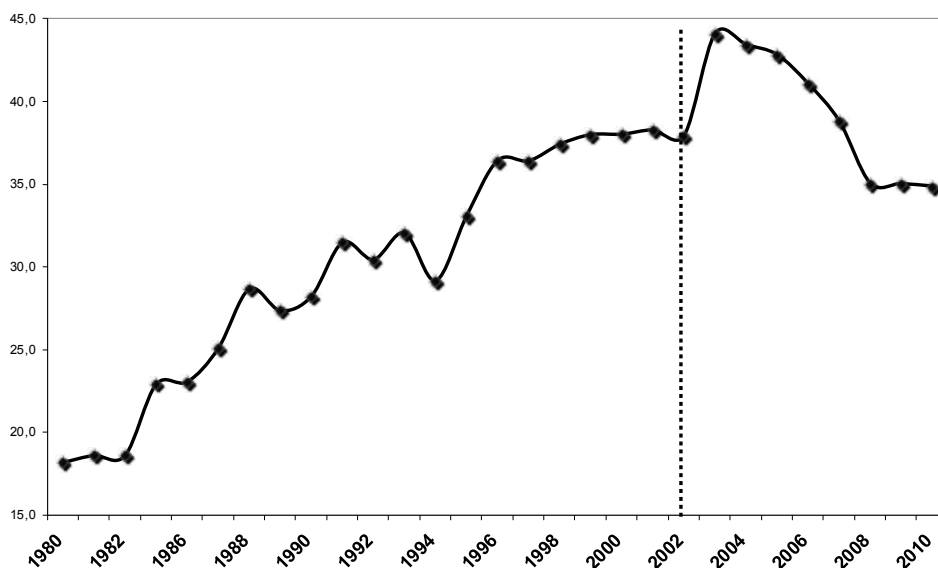
Gráfico 13. Evolución de las tasas de desempleo y subempleo. Total aglomerados urbanos (promedio anual) 1974-2010



Fuente: elaboración propia con base en la EPH-INDEC.

En lo que concierne a la tasa de asalariados no registrados –a una de las dimensiones centrales de la calidad del empleo analizadas anteriormente–, se observa que desde 1980 y hasta 2004, se ha incrementado prácticamente en todos los años, acumulando un crecimiento de 26 puntos porcentuales. Tal como señala Schleser (2007) una de las características llamativas de este comportamiento consiste en que dicha tendencia creciente se mantiene tanto en fases expansivas (de crecimiento) como recesivas (de contracción de la actividad).

Gráfico 14. Evolución de la tasa de empleo asalariado no registrado (como porcentaje del total de asalariados) Gran Buenos Aires. (Promedio anual) 1980-2010



Fuente: elaboración propia con base en la EPH-INDEC.

A partir del año 2004 –tal como se observa en el gráfico 14– la proporción de trabajadores no registrados comenzó a experimentar una lenta pero sostenida reducción, que rompe con la tendencia observada en décadas anteriores. Este proceso de recuperación del empleo registrado, no obstante, no fue tan acelerado como el propio crecimiento económico y la generación de empleo que observamos en párrafos anteriores.

Una explicación de este fenómeno se debe en parte, como sostiene Schleser (2007), a que la creación de empleos asalariados registrados –predominante en el período– no ha alcanzado para contrarrestar el *stock* de trabajadores no registrados acumulados en décadas anteriores. Por lo tanto, el índice de no registro continúa

siendo elevado, ya que alrededor del 35% de los asalariados se encuentran empleados en una ocupación por la cual no se les realiza aportes jubilatorios (en contraste con un 18% que se registraba a principios de los ochenta), ni tienen acceso a una obra social, entre algunos de los beneficios que implica estar contratado en un empleo registrado en la seguridad social.

En lo que respecta al nivel salarial, se observa que a partir del año 2003, en paralelo a la recuperación económica, el nivel de los salarios comienza a experimentar una tendencia creciente. Sin embargo, la recuperación apenas sirvió para volver a los niveles salariales previos a la crisis de 2002, que son muy bajos en términos históricos. Esto es así puesto que, luego de la hiperinflación registrada a fines de la década del ochenta, el nivel salarial había quedado muy rezagado, una situación que no pudo ser contrarrestada y tendió a mantenerse a lo largo de los noventa.

Gráfico 15. Evolución del salario real promedio. Total aglomerados urbanos. 1974-2006. Base año 1960=100



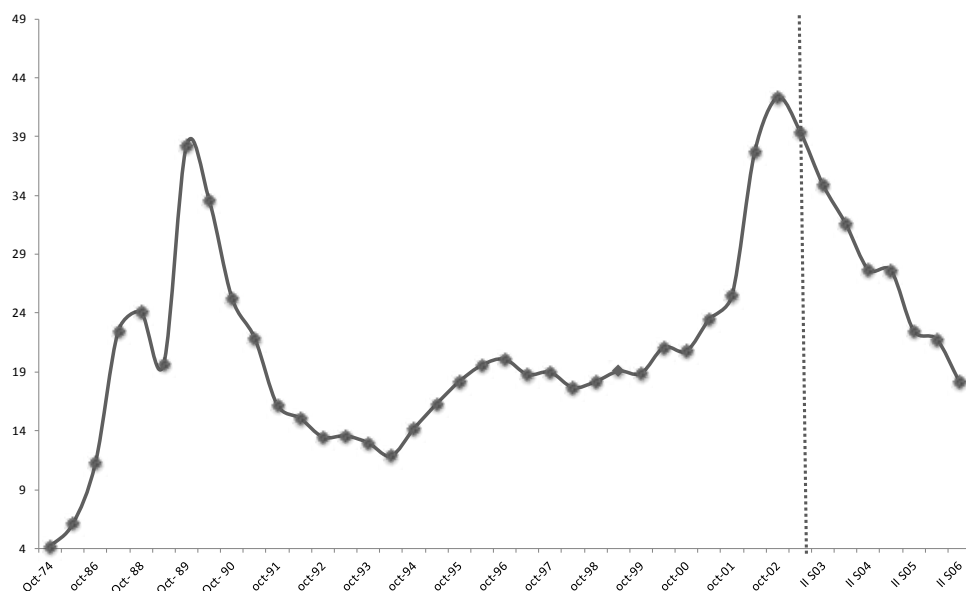
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la EPH-INDEC.

Como ya hemos visto, durante los últimos años se aplicó una serie de medidas que contribuyeron a lograr una recuperación en la distribución de los ingresos laborales. De todas maneras, es importante destacar que, en comparación con la intensidad del crecimiento económico y de la generación de empleo, el incremento de las remuneraciones tuvo un tinte más moderado. Tal como señalaban Esquivel y Maurizio (2005), a mediados de la década la evolución positiva del salario real registrada hasta ese

momento aún estaba muy lejos de recuperar el poder adquisitivo que habían alcanzado los trabajadores a mediados de los años setenta. A fines del período –como queda evidenciado en el gráfico 16– seguimos en una posición todavía rezagada respecto al comienzo del largo proceso de deterioro del mercado laboral que se iniciara con el último golpe militar en nuestro país. Esto es particularmente preocupante si se considera que a partir de 2007 la aceleración de la inflación y el comportamiento del mercado de trabajo implicaron un estancamiento de los salarios reales, cuando el espacio para las mejoras en este sentido es aún muy amplio.

En consonancia con lo observado a nivel de los ingresos laborales, la reducción de la pobreza, si bien fue significativa, sirvió puntualmente para revertir el profundo y abrupto deterioro de los ingresos que se registró durante la debacle económica de los años 2001-2002 (un deterioro intempestivo similar, por ejemplo, al observado en otros episodios críticos como la escalada hiperinflacionaria de 1989). Hacia el año 2006, los niveles de pobreza eran similares a los registrados a mediados de los noventa.

Gráfico 16. Evolución de la pobreza en hogares. GBA. 1974-2006



Fuente: elaboración propia en base a la EPH-INDEC.

Para concluir, resulta importante destacar una vez más, que se trata de una etapa de mejora sistemática de los indicadores laborales y distributivos. En este sentido, como hemos visto, el crecimiento económico no actuó en forma autónoma, sino que

el proceso contó con una significativa intervención del Estado en materia de políticas que apuntaron a mejorar la situación de los trabajadores. Entre estas se destacan con fuerza las políticas de ingresos y también ocupan un lugar importante los esfuerzos destinados a reducir los niveles de empleo no registrado.

No obstante, estos logros, vistos desde una perspectiva histórica, plantean aún importantísimos desafíos para lograr revertir décadas de deterioro laboral y económico. Si bien los principales indicadores analizados –el desempleo, el empleo no registrado, los niveles salariales y la pobreza– han experimentado mejorías, todos ellos se ubican en niveles muy superiores a los del comienzo del período de deterioro económico y laboral que comenzara con la última dictadura militar. Adicionalmente, algunas situaciones recientes como la desaceleración en la creación de empleo –aun en un contexto de crecimiento económico–, así como los aumentos inflacionarios que contrarrestan seriamente las mejoras logradas en materia de ingresos, imponen retos adicionales a superar en los años venideros (CENDA, 2009). La situación demanda entonces renovados esfuerzos por reafirmar el proceso de recuperación del empleo de calidad y dotarlo de mayor dinamismo a fin de revertir, y en lo posible avanzar, sobre la pesada herencia de las últimas décadas. Ello requiere una decidida acción del Estado para superar las limitaciones que aún parecen existir en nuestra economía a través de un programa de desarrollo que fomente una estructura productiva que permita la mejora sostenida en las condiciones de vida de la población, no solo a través de políticas de ingreso, sino fundamentalmente a partir de la creación de puestos de trabajo de calidad y salarios crecientes.

BIBLIOGRAFÍA

- Beccaria, Luis; Esquivel, Valeria y Maurizio, Roxana (2005). “Empleo, salarios y equidad durante la recuperación reciente en la Argentina”. *Desarrollo Económico*, vol. 45, n° 178, julio-septiembre, pp. 235-262.
- Beccaria, Luis y Groisman, Fernando (2008). *Argentina desigual*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Bertranou, Fabio (coord.) (2010). *Aportes para la construcción de un piso de protección social en Argentina: el caso de las asignaciones familiares*. Buenos Aires: OIT.
- Campos, Luis; González, Mariana y Sacavini, Marcela (2010). “El mercado de trabajo en los distintos patrones de crecimiento”. *Realidad Económica*, n° 253.
- CENDA (2007). *El trabajo en la Argentina. Condiciones y perspectivas. Informe Trimestral N° 13*, primavera. Buenos Aires: Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino.
- (2009). *El trabajo en la Argentina. Condiciones y perspectivas. Informe Trimestral N° 17*, otoño. Buenos Aires: Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino.

- (2011). *El trabajo en la Argentina. Condiciones y perspectivas. Informe Trimestral N° 20*, verano. Buenos Aires: Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino.
- CIFRA (2009). *La evolución del sistema previsional argentino* DT N° 2, noviembre. Buenos Aires: Centro de Información y Formación de la República Argentina.
- Damill, Mario; Frenkel, Roberto y Maurizio, Roxana (2007). “Cambios en la política macroeconómica argentina a la vuelta del siglo”. En Novick, Marta; Tomada, Carlos; Damill, Mario; Frenkel, Roberto y Maurizio, Roxana (comps.), *Tras la crisis: el nuevo rumbo de la política económica y laboral en Argentina y su impacto*, Serie de investigación N° 114, Ginebra, Instituto Internacional de Estudios Laborales, OIT.
- Damill, Mario; Frenkel, Roberto y Maurizio, Roxana (en prensa). *Macroeconomic policy for full and productive employment and decent work for all. The Argentine experience*, ILO.
- Esquivel, Valeria (2007), “Género y diferenciales de salarios en Argentina”. En Novick, Marta y Palomino, Héctor (coords.), *Estructuras productivas y empleo: un enfoque transversal*. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Esquivel, Valeria y Maurizio, Roxana (2005). *La desigualdad de los ingresos y otras inequidades en Argentina post-convertibilidad*, Policy Paper, n° 4, Observatorio Argentina. Nueva York: New School University.
- Esquivel, Valeria y Paz, Jorge (2005). “Diferenciales salarios horarios por género: Algunas hipótesis sobre un comportamiento atípico”. En Beccaria, Luis y Maurizio, Roxana (comps.), *Mercado de trabajo y equidad en la Argentina*. Buenos Aires: Prometeo/Universidad Nacional General Sarmiento.
- Estévez, Alejandro y Esper, Susana (2009). *La relación entre el sistema impositivo y la desigualdad: El papel de la Administración Tributaria en la cohesión social*, Observatory on Inequality in Latin America, Working Paper Series n° 19, Coral Gables, FL, Center for Latin American Studies, Maimi: Universidad de Miami.
- Faur, Eleonor y Zamberlín, Nina (2008). “Gramáticas de género en el mundo laboral. Perspectivas de trabajadoras y trabajadores en cuatro ramas del sector productivo del Área Metropolitana de Buenos Aires”. En Novick, Marta; Rojo, Sofía y Castillo, Victoria (comps.), *El trabajo femenino en la post-convertibilidad. Argentina 2003-2007*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Fraguglia, Luciana y Persia, Juliana (2003). “Patrones de movilidad laboral 1997-2002”. 6° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, 13 al 16 de agosto.
- Frenkel, Roberto y Rapetti, Martín (2004). *Políticas macroeconómicas para el crecimiento y el empleo*, documento base para la discusión de la Conferencia de Empleo MERCOSUR. Santiago de Chile: OIT.

- González, Mariana y Bonofiglio, Nicolás (2002). “Evidencias sobre el deterioro de la calidad del empleo en la Argentina”. V Simposio Internacional América Latina y el Caribe: El desafío de los procesos de desarrollo e integración en el nuevo Milenio, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos, octubre.
- Graña, Juan M. (2007). *Distribución funcional del ingreso en la Argentina. 1935-2005*. Documento de Trabajo n° 8, CEPED, FCE-UBA.
- Lepore, Eduardo y Schleser, Diego (2006). “La heterogeneidad del cuentapropismo en la Argentina actual. Una propuesta de clasificación”. *Serie Trabajo Ocupación y Empleo* n° 4, Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pp. 193-226.
- Lindemboim, Javier; Serino, Leandro y González, Mariana (2000). “La precariedad como forma de exclusión”. *Cuadernos del CEPED*, n° 4, IIE, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Marshall, Adriana (2010). “Desigualdad salarial en la industria argentina: discusión de las tendencias en 2003-2008”. *Serie Documentos para la Discusión*, n° 5, IDES, Programa de estudios socio-económicos internacionales, Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires.
- Maurizio, Roxana (2009). *Macroeconomic regime, trade openness, unemployment and inequality: the Argentine experience*, The IDEAs Working Paper Series, n° 03.
- MTEySS-Banco Mundial (2005). *La informalidad laboral en el Gran Buenos Aires. Una nueva mirada*. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social-Banco Mundial.
- Novick, Marta (2007). *Algunos datos sobre la evolución del mercado de trabajo en el largo plazo en la Argentina*, presentación para la División de Desarrollo Económico del CEPAL, Santiago de Chile, CEPAL.
- Novick, Marta; Mazorra, Ximena y Schleser, Diego (2008). “Un nuevo esquema de políticas públicas para la reducción de la informalidad”. En *Aportes a una nueva visión de la informalidad en la Argentina*. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social-Banco Mundial.
- Schleser, Diego (2007). “El trabajo no registrado en el largo plazo”. En *Trabajo, ocupación y empleo: Los retos laborales en el proceso de crecimiento sostenido*. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ANEXO

Principales tasas y estructura del empleo. Total de aglomerados urbanos. Promedio 2003-2010

Tasas	Promedio anual 2003-2010		
	Total	Jóvenes	Mujeres
Actividad	45,7	43,2	37,1
Empleo	40,8	33,3	32,4
Desempleo	10,6	22,7	12,9
Tasa de empleo no registrado	34,4	59,6	29,2
Categoría ocupacional			
Empleador	5,3	1,3	3,7
Cuenta propia	25,2	14,0	23,5
Asalariados	68,1	81,4	70,4
Asalariado registrado	44,7	33,0	49,9
Asalariado no registrado	23,4	48,4	20,5
Trabajador fliar. sin rem.	1,4	3,4	2,4
Tamaño del establecimiento			
1 persona	19,6	10,1	18,1
entre 1 y 5 personas	29,3	42,8	26,8
entre 6 y 40 personas	25,8	29,4	27,3
más de 40 personas	25,3	17,8	27,7
Duración de la jornada			
menos de 35 horas	31,2	37,5	44,4
entre 35 y 44 horas	29,3	28,0	29,2
más de 45 horas	39,4	34,5	26,5
Nivel educativo			
Hasta primaria completa	41,7	42,8	27,2
Hasta secundaria completa	37,0	51,3	40,1
Hasta terciaria completa	21,2	5,9	32,8

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares – INDEC.

PARTE III
ESTRUCTURA SOCIAL Y DESIGUALDADES

LA ESTRUCTURA SOCIAL EN PERSPECTIVA TRANSFORMACIONES SOCIALES EN LA ARGENTINA, 1983-2013*

Carla del Cueto y Mariana Luzzi

INTRODUCCIÓN

En este artículo examinaremos las principales transformaciones registradas en la estructura social de la Argentina durante las últimas tres décadas. Uno de los ejes que ha permitido a las ciencias sociales pensar esos cambios es la creciente fragmentación social producida durante el período. En efecto, a partir de los años noventa, diversas investigaciones coincidieron en interpretar los procesos sociales por los que atravesaba el país a partir de la idea de fragmentación social. Este término refería a la profundización de las distancias entre las clases sociales, así como también al aumento de la heterogeneidad observada en el interior de cada una de ellas. Diversos fenómenos daban cuenta de este proceso: el aumento de la pobreza, el deterioro general de las condiciones de trabajo y la ampliación de la brecha existente entre los sectores de mayores y menores ingresos. Pero la fragmentación se expresaba también en la segregación urbana o en la intensificación de la segmentación a través de los consumos, entre otros aspectos. La expresión más acabada de estos procesos fue la crisis del 2001 que representó, desde esta perspectiva, un momento de quiebre y de agudización de la fragmentación.

El contexto de recuperación económica y reorientación de la política pública posterior a la crisis nos invita a revisar las categorías que dieron cuenta de las transformaciones sociales en décadas anteriores. El desafío consiste en repensar aquellas categorías o esquemas conceptuales y generar otros nuevos que ayuden

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista electrónica *Observatorio Latinoamericano*, n° 12, noviembre de 2013. Agradecemos a los editores del Dossier “Argentina: 30 años de democracia” su autorización para la inclusión del texto en este volumen. En este trabajo retomamos en parte nuestro libro *Rompecabezas. Transformaciones de la estructura social argentina (1983-2008)*, Buenos Aires, Biblioteca Nacional-UNGS.

a pensar el modo en cómo se ha ido reconfigurando la sociedad argentina en los años recientes.

Para la descripción y el análisis de las transformaciones en la estructura social argentina en los últimos treinta años nos apoyaremos en los trabajos que, desde las ciencias sociales, han estudiado los cambios ocurridos en las diferentes dimensiones en torno de las cuales se producen y reproducen las desigualdades sociales. A los efectos de este análisis, retomaremos de los estudios clásicos sobre la estructura social argentina la diferenciación en tres clases -altas, medias y populares-.¹ Es nuestra intención, sin embargo, subrayar el carácter ante todo heurístico de esta división tripartita, que no debería ser asumido más allá de su valor analítico.²

El texto está organizado en tres partes. En la primera se presentan sintéticamente las principales transformaciones que a partir de la recuperación democrática en 1983 tuvieron lugar en la estructura económica y la formulación de las políticas públicas. En la segunda, se analizan los efectos de dichas transformaciones en la estructura social de la Argentina, examinando de modo particular la situación de las tres grandes clases consideradas. Por último, a partir de este recorrido, en las conclusiones se plantean algunos interrogantes centrados en los cambios de la última década, a la vez que se sugieren ejes de análisis para incluir en una agenda futura de investigaciones sobre la estructura social.

TREINTA AÑOS DE TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

La historia de los últimos treinta años estuvo signada por importantes transformaciones en la estructura productiva, las formas de regulación estatal, la dinámica del mercado de trabajo y las políticas sociales, que afectaron fuertemente las condiciones de vida de los argentinos. Este período estuvo jalonado por dos grandes crisis económicas –una en 1989, con la hiperinflación, y otra en diciembre de 2001, con el final de la convertibilidad– que, por su impacto en las relaciones sociales, en el sistema político y por la reorientación del rol del Estado que siguió a cada una de ellas, constituyen grandes inflexiones en la historia reciente de la Argentina.

Durante los años ochenta, la presencia de altos niveles de inflación constituyó uno de los principales desafíos para la política económica, cuyas consecuencias se advierten en diferentes planos. En un contexto de desempleo relativamente moderado –aunque creciente hacia el final de la década– el problema central para los trabajadores fue la desvalorización de sus ingresos, con una incidencia importante

¹ Cfr. Germani, 1987.

² En este sentido, conviene tener en cuenta que la clasificación canónica a la que se aludió, nacida como clasificación erudita, convive y se superpone con aquellas que construyen los actores en sus prácticas cotidianas, mediante las cuales estos expresan su manera particular de concebir el mundo social, su posición en él y su relación con los otros, elementos que ningún análisis de la estructura social debería soslayar.

en el aumento de la pobreza. Junto con el control de la inflación, el gobierno de la recuperación democrática debió enfrentar otros dos problemas que heredaba del período dictatorial: la resolución de la crisis fiscal, vinculada con el crecimiento de la deuda externa, y la recuperación del crecimiento económico. En ambos terrenos la gestión de Raúl Alfonsín encaró diversos intentos de solución, con magros resultados. Finalmente, en 1989, el deterioro de la situación económica y la agudización de los conflictos políticos terminaron desembocando en un proceso hiperinflacionario con graves efectos: disminución de los salarios reales, reducción del nivel de actividad, reemplazo parcial de la moneda nacional por el dólar y caída de la recaudación fiscal, lo cual no hizo más que agudizar las crecientes dificultades del Estado para financiar áreas claves del sistema de protección social como la salud, la educación y las jubilaciones y pensiones. Así, las condiciones de vida de la población al inicio de los años noventa mostraban un importante deterioro respecto de la década anterior.

Las dos presidencias de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) estuvieron signadas por la implementación de un vasto programa de reformas de inspiración neoliberal. Después de un nuevo episodio hiperinflacionario en 1990, un pilar fundamental de esas reformas fue la política de estabilización económica, expresada en el Plan de Convertibilidad. Junto con este se articulaban diferentes medidas tendientes a la desregulación de los mercados y un ambicioso plan de reforma del Estado, que incluía una reforma impositiva de carácter netamente regresivo, la privatización de empresas públicas y del sistema de jubilaciones y pensiones, la reducción del empleo en el sector y un amplio proceso descentralización administrativa, con especial impacto en las áreas de la educación y la salud.

Rápidamente exitosa como política de estabilización monetaria, la convertibilidad también significó un alto nivel de vulnerabilidad externa para la economía argentina, cuyos efectos no tardaron en ponerse en evidencia. Al mismo tiempo, las consecuencias del conjunto de estas reformas sobre el bienestar de la población fueron múltiples. En relación con el mercado de trabajo, el aumento del desempleo y el deterioro de la calidad del empleo constituyeron los rasgos más importantes del decenio. La tasa de desocupación pasó del 8,1% de la población activa al comienzo del período al 15,2% en 2001, llegando a 18,5% en 1995.³ Pese a que en 1992 había sido implementado un seguro de desempleo, su bajo nivel de cobertura en un contexto de desocupación creciente derivó en la implementación masiva de programas sociales destinados a aliviar la situación de los desocupados que, a poco de su creación, llegaron a superar los 200.000 beneficiarios en todo el país (Svampa y Pereyra, 2003: 99).⁴ El subempleo y el empleo no registrado también aumentaron, a la vez que se observó una creciente dispersión en las remuneraciones de los trabajadores con

³ Salvo indicación contraria, todos datos que se citan en este apartado corresponden a las estadísticas oficiales para los períodos considerados. Cfr. www.indec.gov.ar

⁴ Se trataba de programas designados como “de fomento del empleo”, creados en la órbita

distintos niveles de calificación. Como consecuencia de estos procesos, también se elevó considerablemente el grado de inestabilidad laboral, es decir, la alternancia frecuente de períodos de empleo y desempleo, lo que constituyó uno de los rasgos centrales de la década. En lo que respecta a los ingresos, el crecimiento de la pobreza y el empeoramiento de la distribución del ingreso son signos característicos de este período. El impacto de las reformas supuso un crecimiento de la brecha existente entre los más ricos y los más pobres, tal como lo muestran los datos disponibles para el principal distrito del país, el Gran Buenos Aires: mientras que en 1991 los ingresos familiares del 10% más rico de la población eran 21 veces mayores que los del 10% más pobre, en 1999 los primeros eran 31 veces superiores a los segundos (Beccaria, 2001). En cuanto a la pobreza, en 1990, tras los dos brotes hiperinflacionarios, esta había llegado a alcanzar al 25% de los hogares del Gran Buenos Aires, para ubicarse debajo del 15% en 1994 y llegar al 21% en el año 2000 (Altimir, Beccaria y González Rozada, 2002: 59).

Tras cinco años de recesión, la situación de la economía argentina al promediar el gobierno de Fernando de la Rúa –iniciado a fines de 1999– era acuciante. En 2001, con débiles niveles de inversión externa, serias dificultades fiscales y un endeudamiento creciente con el exterior, la crisis del régimen establecido con la convertibilidad resultaba imparable. Tanto sus efectos en el plano político como en las condiciones de vida de la población fueron profundos. El nivel de desempleo trepó al 21,5% en mayo de 2002 y, según datos oficiales referidos al conjunto de los centros urbanos más importantes del país, la pobreza aumentó del 38,3% en octubre de 2001 al 53% en mayo de 2002. En respuesta a estas tendencias, a comienzos de 2003 la cobertura del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, lanzado por el gobierno de Duhalde el año anterior con un esquema similar al de los planes de empleo formulados en los noventa, casi alcanzaba los dos millones de beneficiarios (CELS, 2003). Al mismo tiempo, la devaluación del peso decretada en enero de 2002 trajo aparejado un fuerte aumento de los precios, con el consiguiente impacto sobre el nivel de las remuneraciones. Así, en 2003, el salario real de los trabajadores había disminuido en más del 30% respecto del años anterior (CENDA, 2007).

A pesar de este panorama, la recuperación de la actividad económica después de la crisis de 2001 fue relativamente rápida. Ello se debió, por un lado, al impacto de los cambios en la estructura de precios relativos internos, que favoreció un proceso de resustitución de importaciones y, por otro, al efecto combinado de la devaluación y el aumento de los precios internacionales de ciertos productos de origen agropecuario, que históricamente constituyeron un componente importante de las exportaciones argentinas (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2005). El período posterior a la crisis de 2001 señala entonces importantes avances respecto de algunos de los

del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ellos consistían en el otorgamiento de un beneficio en dinero a cambio de una serie de contraprestaciones que incluyen horas de trabajo y formación.

problemas agudizados en las décadas precedentes. En virtud de la generación de puestos de trabajo a la que la recuperación económica dio lugar durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), hacia fines de 2006 la tasa de desempleo llegó a situarse por debajo del 10%, después de una década por encima de ese umbral (Álvarez, Fernández y Pereyra, 2012). En cuanto a la pobreza, entre 2003 y 2006 el porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza se redujo casi a la mitad (Álvarez, Fernández y Pereyra, 2012).

Sin embargo, persistentes niveles de desigualdad continúan marcando profundamente la estructura social argentina. En cuanto a la situación del mercado de trabajo, el más significativo de ellos es quizás el nivel de empleo no registrado, que a pesar de la tendencia descendente observada desde 2004 cuando representaba el 45% de los asalariados, en 2010 todavía se situaba en torno del 35% de ese grupo (Álvarez, Fernández y Pereyra, 2012). El impacto de este rasgo es aún más profundo si se considera que está acompañado de una persistente brecha entre los salarios de los trabajadores registrados y no registrados (Cortés, 2012). A la vez, también para 2010 las estadísticas oficiales señalaban que los ingresos familiares del 10% más rico de la población eran casi 30 veces más altos que los del 10% más pobre, indicando un elevado grado de polarización social (Gaggero y Rossignolo, 2011).

Por último, a la hora de analizar el modo en que se estructuraron las desigualdades sociales a lo largo del período estudiado, resulta importante considerar también cuál fue la respuesta de las políticas públicas frente a las transformaciones que hemos descripto. Tal como lo ha señalado la literatura al respecto, es posible hablar de un cierto desfase entre los cambios ocurridos a nivel de la estructura social y las representaciones y sentidos que continuaron siendo dominantes acerca de la sociedad argentina (Minujin y Kessler, 1995; Kessler y Di Virgilio, 2008). A mediados de los ochenta aún persistía con fuerza la imagen de la excepcionalidad argentina en el contexto latinoamericano, visión que llevaba a pensar a la pobreza como un fenómeno transitorio, que sería superado una vez que se resolvieran las dificultades económicas y políticas del momento. Si bien algunos cambios en este terreno comenzaron a observarse a lo largo de esa década, con la definición de nuevas formas de medir la pobreza y la implementación de políticas sociales específicas para los sectores más necesitados (que incluían por primera vez en la historia nacional la distribución de alimentos), la instalación de la pobreza como núcleo de la cuestión social se produjo recién en los años noventa, de la mano de la difusión de políticas sociales focalizadas, destinadas a atender las necesidades de la población considerada más vulnerable.

Fue recién en el último lustro que el modelo de la focalización comenzó a ser cuestionado desde la formulación de las políticas sociales. En 2009, la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) –que extiende los beneficios del sistema de asignaciones familiares a los trabajadores no registrados y los desocupados– constituyó el primer avance en este sentido dentro del universo de las políticas de

combate de la pobreza. Un movimiento similar puede observarse en la implementación, algunos años antes, del Plan de Inclusión Previsional, que permitió el acceso a la jubilación de aquellos grupos de trabajadores que no habían logrado reunir los aportes necesarios para jubilarse. Sin embargo, tal como señalan algunas investigaciones, en el caso de la AUH sus prestaciones no logran alcanzar todavía a una parte de los sectores vulnerables, lo cual constituye un límite a la universalidad buscada (Cortés, 2012). En este sentido, pese a las transformaciones observadas, la definición de políticas que contribuyan efectivamente, desde una perspectiva de satisfacción de derechos universales, a un mejoramiento en la distribución de los ingresos, continúa siendo un desafío mayor de la política social en la Argentina.

TRANSFORMACIONES RECIENTES DE LA ESTRUCTURA SOCIAL ARGENTINA

Las clases populares

Durante el siglo xx el trabajo fue un eje central para construir categorías que dieran cuenta del universo de los sujetos populares en la Argentina. Sin embargo, en las últimas décadas, este eje poco a poco fue desplazado por uno nuevo: el de la pobreza. Este desplazamiento se expresa en los cambios de las políticas sociales y las identidades políticas y en el interés de las ciencias sociales por estudiar un fenómeno poco explorado hasta entonces.

Entre las principales transformaciones de las clases populares en la Argentina durante el período, podemos mencionar tres ejes: las transformaciones en el mundo del trabajo, el proceso de territorialización de los sectores populares y la multiplicación de expresiones e identidades culturales.

En los años ochenta, el mercado de trabajo argentino se caracterizó por un crecimiento moderado de la desocupación, junto con un aumento de los empleados en el sector servicios y de los trabajadores por cuenta propia, el incremento del trabajo en negro y la disminución del poder de compra de los salarios como resultado de los procesos inflacionarios. En la década siguiente, junto con el desempleo crecieron las ocupaciones asalariadas, lo cual constituye un dato llamativo, ya que en contextos de alto desempleo suele ser el sector informal el que se expande, convirtiéndose en un refugio ante la desaparición de puestos de trabajo en el sector formal de la economía. Dos tercios de esos puestos asalariados creados correspondieron a empleos de jornada parcial. Por otra parte, se acentuó la tendencia del trabajo en negro, que representaba las tres cuartas partes del aumento de la ocupación, y se produjo un deterioro general de las condiciones de trabajo. Como consecuencia de todas estas transformaciones se produjo también un aumento de la inestabilidad

laboral. Por último, se profundizó la brecha entre las remuneraciones de los más y los menos calificados.⁵

Tras la crisis de 2001, llegó a superar el 20%, mientras que en 2003 la informalidad alcanzó al 49% de los asalariados. Estas tendencias contrastan con lo observado en la última década, en la cual el desempleo descendió a un rango que oscila entre el 7 y el 8%, la informalidad laboral se redujo 16 puntos hasta estabilizarse en alrededor del 33% desde 2011. Dentro de este fenómeno general de recuperación del empleo se destaca el intenso proceso de asalarización: el total de asalariados aumentó desde 2003 un 40%. En 2011 alcanzó a casi 12 millones de personas, lo que representa un 75,5% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje superior al registrado a mediados de los años setenta (Etchemendy, 2013; Palomino y Dalle, 2011). Los grupos de ocupaciones que experimentaron mayor crecimiento fueron los obreros calificados de la industria y de servicios básicos asociados, que incluyen actividades relacionadas con la industria manufacturera, la construcción, el transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, gas y agua. Le sigue en crecimiento el grupo de los empleados administrativos. Por ello, Palomino y Dalle (2011) afirman que el crecimiento económico que impulsó la expansión del empleo en este período se vinculó tanto con el núcleo de la clase obrera como actividades vinculadas con las clases medias. A su vez, durante la última década se registra una mejora del salario real promedio, aunque sin superar los promedios de los años noventa (Feldman, 2013).

Durante los años noventa, la pérdida de relevancia del trabajo como eje principal de la experiencia de parte de las clases populares llevó a lo que diversos análisis coincidieron en denominar la *territorialización de los sectores populares* (Merklen, 2005; Cerruti y Grimson, 2005; Svampa, 2005). Este proceso consiste en una mayor delimitación geográfica de gran parte de las actividades de los habitantes de los barrios populares. La vida social se circunscribe a los límites de los barrios, en los que proliferan organizaciones que dan respuesta a las distintas necesidades de sus habitantes. Ya no es el trabajo, sino más bien el territorio, el eje que organiza la vida de los individuos. Por otra parte, como resultado del aumento de los niveles de desocupación en los noventa, se evidencia una modificación en las demandas de estos actores, que pasaron de centrarse en la cuestión de la vivienda –eje de sus reclamos en los ochenta– a la del trabajo. Este repliegue sobre el barrio no puede ser entendido si no se incorpora al análisis el modo en que se implementaron las

⁵ Cabe señalar que estos cambios produjeron una pérdida de protagonismo de las organizaciones sindicales, al tiempo que surgieron nuevas formas de representación que buscaban generar canales alternativos a los tradicionales dentro del movimiento obrero. Al respecto puede consultarse sobre la experiencia de la CTA el trabajo de Martín Armelino (2005). Para la experiencia gremial de trabajadores precarizados durante la última década puede consultarse el trabajo de Barattini (2013).

políticas sociales desde el Estado, que a partir de los noventa pasaron a definirse como focalizadas.

Así, una de las primeras consecuencias del proceso de territorialización fue que el barrio surgió como un espacio natural de acción y organización, al mismo tiempo que como objeto de las políticas estatales, ahora focalizadas y descentralizadas. Este proceso, que ha sido uno de los fenómenos más novedosos del período, y como tal ha concitado el interés de las ciencias sociales, no se verifica en todos los barrios populares por igual. Sin embargo, son escasas las investigaciones dedicadas a estudiar los barrios obreros en los que continuó observándose un alto grado de actividad fabril, de modo que los cambios ocurridos en aquellos grupos que mantuvieron empleos formales quedan en cierto modo ocultos (Varela, 2009). Por otro lado, el cambio en la orientación de las políticas sociales de los últimos años, tendientes a la universalidad (como la AUH o el Plan de Inclusión Previsional) plantean interrogantes con respecto a la reconfiguración de la organización de las clases populares.

En el plano cultural, distintas investigaciones han dado cuenta de la creciente fragmentación y diversidad en las expresiones culturales e identificaciones que desplegaron las clases populares durante el período.

Dentro de las expresiones musicales, el rock barrial o “rock chabón” es una manifestación cultural surgida hacia fines de los ochenta. Esta música se identifica con la experiencia de quienes fueron víctimas de un proceso desmantelamiento del mundo del trabajo. Diversos trabajos (Semán y Vila, 1999; Semán, 2005) señalan que el “rock chabón” es una producción novedosa dentro del rock nacional. Más ligado a los sectores populares que a las clases medias, este subgénero no significó únicamente una ampliación de las bases sociales, demográficas y culturales del rock. También implicó escuchas diferentes de lo previo y produjo narrativas que consolidaron identidades a partir de diversas figuras como los ladrones, la cerveza, las barras, el barrio, entre otras. Otro fenómeno asociado al anterior fue la futbolización del rock. Mientras en los setenta fútbol y rock se encontraban en las antípodas, en los noventa los jugadores compartían gustos con los rockeros y estos últimos se identifican con el fútbol. El valor del “aguante”⁶ que está presente en diversas expresiones populares comunica éticamente a hinchadas de fútbol y grupos de fans musicales. A su vez se establece una nueva relación entre “productores” y “receptores”. Durante los años noventa, con la convertibilidad y la sobrevaloración del peso, la importación de equipos resultaba accesible; esto permitió un amplio acceso a instrumentos y la proliferación de bandas. Los grupos de “rock chabón” se inspiraron en el éxito de las producciones independientes que resistían a las

⁶ En la idea de *aguante* están relacionadas el cuerpo, la violencia y la masculinidad. Hay diversos estudios que han trabajado sobre esta noción algunos de los más actuales pueden consultarse en Alabarces y Rodríguez, 2008.

grandes empresas discográficas, como por ejemplo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Precios más accesibles permitieron el acceso a los espectáculos no solo de los sectores populares, sino también de hijos de familias de clase media empobrecida.

Otra expresión musical ligada a prácticas de escucha y baile dentro de la cultura popular es la cumbia. Malvina Silba (2011) señala en un estudio sobre la cumbia en la Argentina que si bien esta música se conecta con otros géneros populares también es necesario tener en cuenta que su difusión y expansión se produce gracias a la intervención de las industrias culturales. Durante los años ochenta se produjo una consolidación de la “movida bailantera” en circuitos de locales bailables en el área metropolitana de Buenos Aires. A principios de la década del noventa, la cumbia *bailantera* se pone de moda y sus principales exponentes se co-dean con el *establishment* argentino. Así, la *fiesta menemista* unía en una especie de ficción igualitaria a políticos, artistas del espectáculo y bailanteros, mientras que la realidad social mostraba que las jerarquías se mantenían intactas (Pujol, 1999).⁷ En el cambio de siglo surge la cumbia *villera*.⁸ Este subgénero planteaba una serie de rupturas con la forma que la cumbia había asumido en el pasado. Por un lado, incorporó nuevos ritmos musicales como el *rap* y el *hip-hop*. Por otro lado, las letras del sub-género *villero* introducían nuevos temas como el relato de delitos menores, consumo y tráfico de estupefacientes y relaciones conflictivas con la policía (Silba, 2011). En este sentido, el contenido de las letras también incluía la referencia sexual explícita con un fuerte componente sexista. Semán y Vila (2011) analizaron las tensiones de género, de fuerte contenido sexual, en la cumbia villera. Según su estudio, existen elementos que dan cuenta del temor de los varones en relación con la transformación del papel de la mujer en los sectores populares. Con esa expresión refieren a la aparición de personajes femeninos que adoptan definiciones de su rol que no encajan ni en las expectativas masculinas “tradicionales” ni en las formas típicas de liberación femenina. Silba señala que en paralelo con el cambio en la tematización de las letras, los nombres de las bandas que surgían aludían a escenarios de la delincuencia y el tráfico y/o consumo de drogas.⁹ Luego del auge de la cumbia villera y frente a la necesidad de captar nuevos públicos, Silba señala que, durante la última década, el campo musical de la cumbia experimentó nuevas transformaciones. Principalmente, se trató de un regreso a las fuentes con el surgimiento de una nueva oleada de cantantes *románticos* que mantenían sus *looks villeros*.

⁷ Entre los clásicos bailanteros se encuentran Ricky Maravilla, Pocho “La Pantera”, Alcides, Miguel, Daniel Lezica, Lía Crucet, Gladys “La Bomba Tucumana”, entre otros.

⁸ Silba destaca que un dato significativo del fenómeno de la cumbia villera es que la mayoría de sus ejecutantes así como parte del público tenían en común que eran varones jóvenes, pertenecían a los sectores populares urbanos y habitaban barrios populares o villas miserias.

⁹ Algunos de los nombres de esos grupos son Pibes Chorros, Flor de Piedra, Yerba Brava, Damas Gratis, Meta Guacha, Eh! Guachín, Flashito Tumbero, SupermerK2, La Base Musical y La Repandilla.

Finalmente, en cuanto a la religiosidad de las clases populares un dato significativo de los últimos 30 años ha sido la expansión del pentecostalismo, que marca una novedad con respecto a la tradicional hegemonía del catolicismo. Pablo Semán (2006) señala que el crecimiento de los grupos evangélicos entre los sectores populares, se debe en gran medida a su capacidad para movilizar y combinar supuestos culturales preexistentes de grupos sociales afectados por diversas formas de pobreza. El autor incorpora al análisis el nivel de las representaciones y experiencias religiosas que articulan solidaridades y prácticas que recorren las más diversas situaciones de precariedad. Los pastores y las iglesias pentecostales logran recoger y encarnar varios ejes de tradiciones religiosas, por ejemplo, al entrecruzar elementos del catolicismo con las prácticas de los curanderos. Los elementos provenientes de un universo religioso previo que no encontraban formas de institucionalización y legitimación adecuadas sí lo hacen en el marco del pentecostalismo. Así, la expansión de este se produce gracias a su capacidad para ofrecer una opción religiosa que da continuidad a los supuestos culturales de las clases populares en canales institucionales legítimos.

Los fenómenos antes señalados describen así un nuevo escenario en el cual las identidades se multiplican y se manifiestan de manera cambiante, centradas en la subjetividad de individuos.

Las clases medias

Tendencias de la movilidad social

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las ciencias sociales latinoamericanas encontraron en el desarrollo de las clases medias uno de los signos más claros de la excepcionalidad argentina en el contexto regional. En efecto, en ese período, al calor de la industrialización, del crecimiento y la complejización del aparato estatal y de las políticas activas del Estado en la provisión de servicios básicos –esencialmente educación y salud– una parte importante de las clases populares argentinas experimentó un proceso de movilidad social ascendente cuyo corolario fue la consolidación de una clase media relativamente robusta en relación con la de otros países de la región (Germani, 1963).

Pese a la fuerte heterogeneidad que históricamente signó a estos grupos, la tendencia a la movilidad social ascendente –o la confianza depositada en ella– operó como un poderoso elemento aglutinador de las clases medias, al tiempo que definía el horizonte de expectativas de quienes se situaban por debajo de ellas en la estructura social.

En este escenario, las transformaciones registradas en la estructura económica y las modalidades de intervención del Estado desde mediados de los años setenta, con la llegada al poder del gobierno militar (1976-1983), marcaron un viraje

importante. La bibliografía que analiza las transformaciones operadas en la estructura social argentina en este período coincide en señalar que hacia el fin de la dictadura, dos rasgos resultan característicos: por un lado, la consolidación de un proceso de polarización social, visible en un empeoramiento de la distribución de los ingresos; por otro, el aumento y la creciente heterogeneidad de la pobreza en la Argentina (Murmis y Feldman, 1993). Inciden en esto dos fenómenos: la caída generalizada de los salarios reales en diferentes grupos de ocupaciones y el aumento de la dispersión salarial entre categorías de trabajadores. Se hace visible entonces una “nueva pobreza”, la de aquellos sectores recientemente empobrecidos, dotados de recursos en términos de saberes, habilidades, disposiciones y de relaciones sociales notablemente más ricos que los de los grupos tradicionalmente considerados pobres.

La pauperización de las clases medias que se observa entre la década de 1980 y comienzos de la de 1990 puede explicarse por distintos procesos y situaciones que afectan las trayectorias familiares y personales. Pero más allá de la heterogeneidad de trayectorias, algunas características comunes sobresalen en la experiencia del empobrecimiento de los sectores medios en este período. En primer lugar, las respuestas defensivas de estos grupos frente a la pauperización tienen un carácter familiar, que raras veces se vuelve colectivo. En segundo lugar, se trata de una forma de la pobreza que se busca ocultar de la mirada de los otros y se mantiene dentro del ámbito de las relaciones más cercanas. En tercer término, esta relativa invisibilidad de la situación de los nuevos pobres se ve reforzada por el hecho de que la nueva pobreza está ausente de la agenda pública. De esta manera, los nuevos pobres se encuentran en una situación de desprotección social, que se ve reforzada por el hecho de que su empobrecimiento significa no solo el deterioro de sus condiciones de vida, sino también, en términos más generales, el derrumbe de la promesa de igualdad de oportunidades en que la clase media argentina había creído desde mediados del siglo XX (Minujin y Kessler, 1995; Kessler, 2000).

Desde el punto de vista del impacto de este proceso en la configuración de la estructura social, uno de los elementos más importantes es que, como señalan varios trabajos, los nuevos pobres conforman un “estrato híbrido”. Si bien se asemejan a la población pobre en cuanto a su nivel de ingresos, su inserción en el mercado de trabajo y su acceso a la protección social, comparten con los sectores medios otros rasgos, como el nivel educativo y la composición de la familia (Minujin y Kessler, 1995). Esto determina la definición de estrategias particulares frente a la situación de pobreza, en las cuales el capital cultural y social de que disponen las familias cumplen un rol central. Ahora bien, como ha demostrado Kessler (2000), la experiencia de la pauperización supone también la incertidumbre sobre la capacidad para valorizar los recursos acumulados en el pasado. Dicho en otros términos, el capital cultural y social producto de una determinada trayectoria familiar, educativa y laboral en cuyo horizonte no se encontraba la pobreza, no necesariamente es válido en el contexto definido por el empobrecimiento.

Ahora bien, a medida que la caída de la clase media se consolidaba como una tendencia persistente, las características de las experiencias de empobrecimiento fueron mutando. Así, mientras que las investigaciones que habían dado cuenta del fenómeno a comienzos de los noventa subrayaban que se trataba de un tipo de pauperización vivido “puertas adentro”, quienes estudiaron el fenómeno hacia el final de la década encontraron algunas transformaciones dignas de ser señaladas. En primer término, a lo largo de los años noventa se observó una creciente difusión de la categoría de “nuevos pobres” y de los relatos sobre la pauperización de la clase media, que paulatinamente fueron dejando el campo académico para permear los discursos cotidianos e instalarse en la discusión pública. En segundo lugar, esta mayor visibilidad del fenómeno también se registró en otros niveles. La experiencia de los clubes de trueque, círculos de intercambio de bienes y servicios que funcionan sin la mediación del dinero (primero bajo la forma del trueque en sentido estricto, y luego con la utilización de una moneda local), es un buen ejemplo de ello.¹⁰

Así, cuando el cimbronazo de la crisis de 2001 volvió a empujar hacia abajo a las fracciones más vulnerables de las clases medias, el impacto de la caída estuvo acompañado por una mayor conciencia de sus consecuencias. A diferencia de lo que sucedía dos décadas atrás, la movilidad social descendente ya no era un fenómeno sin precedentes en la Argentina; al contrario, era una experiencia que había dejado huellas profundas en muchos hogares. Esas marcas eran, en varios sentidos, un aprendizaje. Por un lado, hacían posible la formulación de nuevos modos –individuales y también colectivos– de enfrentar la pobreza; por otro, revelaban el carácter inestable de trayectorias vitales que, décadas atrás, habían sido pensadas como un movimiento lineal hacia el progreso.

Las tendencias observadas tras la recuperación económica iniciada en 2003 justifican que se preste particular atención a la inestabilidad como tendencia. Estudios recientes señalan que en la última década se observan elevados niveles de movilidad social, con predominio de los movimientos ascendentes sobre los descendentes (Dalle, 2009, 2011). Pero al mismo tiempo, esos trabajos indican que en ambos tipos de movimientos es la movilidad de corto alcance la que prima, confirmando así la desaparición del que había sido un rasgo distintivo de la estructura social argentina en el pasado (la movilidad social intergeneracional de larga distancia,

¹⁰ Creados a mediados de los noventa y postulados como la base de una economía alternativa, los clubes de trueque fueron poblados inicialmente por sectores medios empobrecidos que encontraban en ellos una manera de acceder a ciertos consumos de los que habían debido prescindir. Pero fundamentalmente, la participación en estos clubes significó la oportunidad de encontrarse con otras personas que atravesaban procesos de empobrecimiento similares, así como también con aquellos que, provenientes de los sectores populares, experimentaban un deterioro creciente de sus condiciones de vida. Así, poco a poco, la pobreza “puertas adentro” traspuso el umbral del espacio privado y comenzó a mostrarse públicamente (González Bombal, 2001; Leoni, 2003; Luzzi, 2005).

aquella que describía las trayectorias de los hijos de la clase obrera que llegaban a ocupar posiciones de clase media) (Dalle, 2011).

La movilidad social ascendente de corta distancia refiere a movimientos entre segmentos de clase adyacentes, cuyos efectos en términos del mejoramiento de las condiciones de vida deben ser examinados con cautela. Por un lado, porque la evolución general de los puestos de trabajo, sus retribuciones y su prestigio social puede hacer que se trate de una movilidad espuria, en la que el pasaje a ocupaciones de mayor calificación no supone necesariamente un mejoramiento del bienestar (Kessler y Espinoza, 2007; Palomino y Dalle, 2012). Por otro, porque el corto recorrido de esos movimientos podría volverlos también más fácilmente reversibles.

En este sentido, los cambios registrados en la última década permiten confirmar que, como señala Gabriel Kessler (2011) lo que en su momento pudo ser observado como trayectorias descendentes, en el largo plazo se configura más bien como trayectorias inestables, marcadas por fases de caída y recuperación, cuyas consecuencias en la configuración de las desigualdades sociales aún deben ser exploradas.

La segregación socioespacial como expresión de las transformaciones de las clases medias

La atención puesta sobre las trayectorias inestables no debería llevarnos a olvidar a las fracciones de las clases medias que, tanto en la década de 1990 como, más recientemente, en los últimos años, protagonizaron trayectorias de ascenso social. Sobre todo en los años noventa, esta fragmentación dentro de las clases medias tuvo su correlato en los modelos de socialización y en la difusión de nuevos estilos residenciales, como las urbanizaciones cerradas.

La difusión de *countries* y barrios privados comienza a fines de la década de 1970, pero el *boom* se produjo durante la década de 1990, decae en 2001 y luego, con el crecimiento económico del país a partir de 2003, recibe un nuevo impulso. Este proceso comenzó relativamente tarde en comparación con otras ciudades de la región, pero en poco tiempo tuvo un crecimiento importante. Según Fernández *et al.* (2010), en la actualidad existen 540 urbanizaciones cerradas en las que residen 50.000 familias. En total comprenden una superficie de aproximadamente 500 km² que es equivalente al doble de la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

Durante gran parte del siglo XX, las clases medias, si bien heterogéneas desde su inserción ocupacional, constituyeron un colectivo con una relativa homogeneidad cultural. Esta homogeneidad tiende a quebrarse a mediados de los noventa, por un lado, como resultado de los procesos de movilidad social descendente ya mencionados; y, por otro, por la existencia de trayectorias inversas experimentadas por otras franjas –más reducidas– de las clases medias. Como ha señalado Svampa, (2001), estas nuevas formas residenciales ponen en evidencia la desarticulación de

formas de sociabilidad y modelos de socialización en los que se basó una cultura relativamente más igualitaria que había caracterizado a la Argentina en el pasado.

Así, los *countries* y barrios cerrados pusieron al descubierto la consolidación de una estructura de relaciones más rígida y jerárquica, ya que estos tipos urbanos asumen una configuración que afirma la fragmentación social, acentuada por la lógica de la espacialización de las relaciones sociales. Los protagonistas de esta nueva forma de habitar son justamente las clases medias, caracterizadas históricamente por su “vocación” integradora. A su vez, el desarrollo de estos emprendimientos inmobiliarios se vio acompañado por la instalación de instituciones educativas, únicamente privadas, destinadas a residentes de urbanizaciones privadas, que reforzaron la segmentación ya existente. Entre las características principales de las nuevas formas de sociabilidad generadas en estas urbanizaciones, se destaca la creciente homogeneidad de los círculos sociales, propia de las clases altas, que constituyó una novedad en el caso de las clases medias en ascenso. Tal como han mostrado distintas investigaciones, en estos espacios se produce una integración social “hacia arriba” en el marco de la red socioespacial compuesta por urbanizaciones cerradas, centros comerciales y colegios privados (Del Cueto, 2007). Así, quienes eligen este nuevo estilo de vida circulan por espacios en donde rige la homogeneidad social y en donde las relaciones se establecen con los que se consideran semejantes. Esto se expresa en los diferentes ámbitos por los que circulan los protagonistas de la segregación espacial. La urbanización es uno de estos espacios, allí pueden participar de las distintas comisiones en las que se organiza la vida interna, pueden practicar algún deporte o desenvolverse en la vida social en las distintas actividades recreativas que se promueven. Los circuitos comerciales, *shoppings* y multicines ubicados en las grandes vías de circulación cercanas a las urbanizaciones cerradas son otros de estos ámbitos. Por último, los colegios privados radicados en las zonas de *countries*, que forman parte de una oferta educativa novedosa, constituyen también un espacio de integración de las familias, ya que la vida escolar de los hijos implica una serie de actividades y eventos en los que participan los padres. En suma, estos espacios tienden a configurar nuevos grupos de pertenencia en los que –a diferencia de lo que sucedía con las clases medias en el pasado, cuando el cruce social era posible– lo que rige es la vinculación con los semejantes, dando por resultado un modelo de socialización homogéneo.

Las clases altas

En nuestro país, el extenso desarrollo de las investigaciones de las ciencias sociales acerca de las clases populares y medias contrasta con la persistente escasez de trabajos sobre la composición y características de los sectores altos o dominantes. Así, muy poco es lo que sabemos, por ejemplo, acerca de los estilos de vida, los consumos culturales, la religiosidad o las prácticas políticas de estos grupos sociales. A lo largo

de las tres últimas décadas, la mayor parte de las investigaciones sobre las clases altas se han concentrado en el análisis de los comportamientos de los grupos empresarios o de la relación entre estos y el poder político, dejando de lado toda preocupación por un examen de las clases altas que excediera el mundo de las empresas y de las organizaciones que representan a los diferentes sectores económicos (como la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina o las asociaciones de bancos, entre otras). Más recientemente, algunos trabajos han comenzado a llenar esta ausencia, sobre todo en lo que se refiere al estudio de las trayectorias educativas de las élites (Ziegler y Gessaghi, 2012), de ciertas categorías ocupacionales –como los *mánagers* (Luci, 2011)– o de la caracterización sociodemográfica de los sectores de más altos ingresos (Benza y Heredia, 2012). Sin embargo, el estudio de estas fracciones de la estructura social continúa siendo una asignatura en buena medida pendiente para las ciencias sociales locales (Benza y Heredia, 2012; Heredia, 2011).

Una de las constataciones que recorre toda la literatura reciente sobre las clases altas en la Argentina es el progresivo aumento de la concentración de la riqueza observado a lo largo de los últimos treinta años. Esto se observa tanto en el nivel de la distribución del ingreso, que entre 1980 y 2001 mostró una fuerte tendencia regresiva (Altimir, Beccaria y González Rozada, 2002; Benza y Heredia, 2012), como en el de la concentración de la propiedad del capital, tal como lo muestran los datos disponibles para todos los sectores de la economía (Basualdo y Arceo, 2006).

De acuerdo con las conclusiones de varios trabajos, durante el primer gobierno de la era democrática se observan continuidades importantes con la política económica de la dictadura, las cuales contribuyen a un aumento de la concentración del capital en manos de grupos económicos nacionales y de algunas empresas transnacionales que se benefician de transferencias de recursos públicos por parte del Estado. Pese a las importantes rupturas existentes en otros aspectos respecto del período dictatorial, el gobierno radical continuó en la segunda mitad de los ochenta con diferentes políticas que, desde mediados de los setenta, venían contribuyendo a la consolidación de la fracción más concentrada del empresariado local. Los mecanismos básicos a través de los cuales el Estado transfirió recursos públicos a la cúpula empresaria privada fueron los programas de capitalización de deuda externa, los subsidios a la inserción en el mercado externo, el establecimiento de precios preferenciales para las empresas proveedoras o prestadoras de servicios al Estado y los subsidios propios de las políticas de promoción industrial (Castellani, 2006).

Este proceso de concentración continuó profundizándose a lo largo de la década siguiente. Durante el gobierno de Menem, las privatizaciones de las empresas de servicios públicos contribuyeron a la reconfiguración del sector empresario, haciendo desaparecer a las empresas estatales y creando las condiciones para la generación de beneficios extraordinarios para las empresas adjudicatarias, que operarían en condiciones casi monopólicas.

Al mismo tiempo, las políticas de desregulación económica aplicadas en el período acentuaron la desindustrialización que se venía observando desde la dictadura militar. Algunas ramas de la industria, como la producción textil, de juguetes y de bienes de capital, fueron especialmente afectadas por la política de apertura económica implementada desde comienzos de los noventa. En total, el proceso tuvo como saldo mayores niveles de concentración en el sector y la disminución del peso de las pequeñas y medianas empresas en el conjunto de la producción industrial (Aronskind, 2001).

En este contexto, y en continuidad con el proceso que había comenzado a gestarse a mediados de la década del setenta, fue el sector servicios el más favorecido por estas transformaciones. Dentro de él, el sector financiero constituye una de las expresiones más claras de la tendencia hacia la concentración, redoblada por el peso creciente que en él fue adquiriendo el capital extranjero a lo largo de la década de 1990 (Aronskind, 2001).

Tal como sucedió con los sectores secundario y terciario, también el sector primario estuvo atravesado por importantes mutaciones durante los años noventa, tendencia que se hizo aún más visible luego de la crisis de 2001. En efecto, desde mediados de la década pasada se advierte el desarrollo de lo que muchos autores han llamado “nuevas tramas productivas” en el agro, que modificaron profundamente el modelo tradicional de organización de la producción en el sector (Gras y Hernández, 2009; Bidaseca y Gras, 2010). El nuevo modelo se caracteriza por la articulación entre innovación tecnológica y producción agrícola, la cual define la utilización de nuevos cultivos (semillas transgénicas) y nuevas modalidades de siembra (la siembra directa), al tiempo que permite la expansión de los cultivos a regiones anteriormente consideradas marginales para este tipo de producción (como Santiago del Estero o Salta). El caso más emblemático de estas innovaciones, gracias a las cuales el sector agroalimentario recibe un fuerte impulso en el período, es el de la producción sojera.

En cuanto a las consecuencias de esta concentración de la riqueza en la redefinición de las pautas de consumo y los estilos de vida de las clases altas, se observa cómo se amplía todavía más la brecha que separa a estos grupos del resto de la sociedad, no solo en términos de ingresos, sino también de consumos y estilos de vida.

Tradicionalmente, el comportamiento de las clases altas argentinas se caracterizó por la constitución de círculos homogéneos, la búsqueda de una sociabilidad exclusiva y excluyente. Ya desde comienzos del siglo XX, los viajes al exterior constituyeron un elemento de distinción para las clases altas, en los cuales se afirmaba su cosmopolitismo, el contacto con la “alta cultura” y su participación en redes de sociabilidad con los miembros de las elites europeas. Estos rasgos contribuyeron a construir un estilo de vida de las clases altas que estuvo vigente durante gran parte del siglo XX, operando a la vez como el horizonte de prácticas culturales y de consumos al cual aspiraban las clases medias. Este comportamiento fue particularmente

evidente durante la década del noventa, cuando la estabilidad económica hizo posible el acceso de una parte de las clases medias a prácticas y consumos anteriormente reservados a los sectores socioeconómicos altos. Esta tendencia, observada durante la vigencia del plan de convertibilidad, se revirtió en buena medida durante la crisis de 2001 y en el período inmediatamente posterior, cuando la distancia en términos de ingresos entre ambos sectores volvió a ampliarse. Esto se expresa, entre otros fenómenos, en los viajes al exterior, que por efecto de la devaluación dejaron de ser accesibles para una parte importante de quienes antes viajaban y por un tiempo volvieron a ser patrimonio exclusivo de los sectores de más altos ingresos. Así puede observarse en los datos de la encuesta de turismo internacional realizada por la Secretaría de Turismo de la Nación, que registra que mientras que en 2001 fueron 850.000 las personas que viajaron al exterior por vacaciones, en 2004 esta cantidad había disminuido a la mitad y en 2006 llegaba a 480.000 personas. Al tiempo que la economía se recuperaba, el comportamiento de las franjas de alto nivel adquisitivo se fue consolidando. En 2004, fuentes periodísticas indicaban que la contratación de paquetes turísticos de alto nivel (Europa, Caribe, centros de ski) había crecido un 50% respecto del año anterior. El viaje al exterior como signo de estatus volvía entonces a tener la importancia que había tenido en el pasado. Datos más recientes muestran algunos cambios respecto de este tipo de consumos. Mientras en 2004 viajaron desde Ezeiza 180.000 personas a Estados Unidos y Canadá, de los cuales 60 mil declararon como motivo “vacaciones”, en 2012 viajaron 440 mil, de los cuales 315 mil lo hicieron por vacaciones. Al mismo tiempo, también aumentó la venta de automóviles de lujo. Para citar un ejemplo de una marca de alta gama como Audi: mientras en 2003 se vendieron 463, en 2011 se vendieron 5253 (Bustos, 2013).

La recuperación de la actividad económica posterior a la crisis fue, como vimos, promisorio, pero no por ello benefició a toda la población por igual. Según señalan diversos estudios, el repunte del consumo que se inicia a finales de 2003 y se consolida en los años subsiguientes, estuvo impulsado por los sectores de más altos ingresos. Así, mientras en febrero de 2005 las compras en supermercados eran todavía inferiores a las registradas en diciembre de 2001, las ventas en los *shoppings* habían aumentado un 30% en relación con el mismo año. Del mismo modo, el impulso que recibieron las actividades agropecuarias después de la crisis de 2001, como resultado de la confluencia de la devaluación del peso y del alza de los precios internacionales de ciertos productos, supuso importantes márgenes de ganancia para los productores y los propietarios de las tierras involucradas, prosperidad que en parte se volvió visible en las áreas rurales, pero sobre todo fuera de ellas (Manildo, 2012). Así, numerosas transformaciones se observan en el paisaje de algunas ciudades intermedias de la región pampeana, donde se desarrollan emprendimientos inmobiliarios y se registran niveles y modalidades de consumo que resultaban impensables años atrás. En cuanto a las grandes ciudades, Gorelik (2006) observa en Buenos Aires que luego de la crisis de 2001, un espectacular proceso de

valorización inmobiliaria liderado por la emergencia de las “torres-country”. Este tipo residencial forma parte –junto con los *countries* y barrios cerrados– de la lógica de consolidación de “bolsones de riqueza” propia de los años noventa, que no están integrados a la trama urbana. Ambos tipos residenciales constituyen un ejemplo más de la profundización de la fragmentación que se produce en la ciudad.¹¹

CONCLUSIONES

La fragmentación social, en el sentido de un aumento de las distancias entre los grupos sociales –y entre distintas fracciones dentro de ellos– y el progresivo deterioro de las condiciones de vida de grandes capas de la población ha sido la clave dominante en buena parte de los estudios que analizaron los cambios acaecidos en la estructura social argentina a lo largo de los veinte años que siguieron al fin de la dictadura militar.

Más recientemente, algunos trabajos han comenzado a revisar esas hipótesis, si no para refutarlas, al menos para complejizar la mirada sobre procesos que, examinados a la luz de distintas temporalidades, presentan más matices de los que aquellas visiones permitían advertir (Benza y Calvi, 2005; Benza y Heredia, 2012; Dalle, 2011; Kessler, 2011; Semán y Vila, 2011).

La perspectiva que inauguran estas investigaciones resulta particularmente fecunda en este momento en que, tras una década signada por la recuperación económica y la reformulación de una parte importante de las políticas que habían imperado en la década de 1990 –y cuyo origen se remonta a mediados de los setenta–, se vuelve imperioso preguntarse acerca de cuáles son las categorías más pertinentes para pensar los cambios más recientes de la estructura social.

En esta línea, uno de los interrogantes que se destaca es hasta qué punto los cambios operados en la última década han sido capaces de revertir aquellos efectos de fragmentación social y profundización de las desigualdades que las ciencias sociales tan bien subrayaron a finales de los años noventa. En efecto, así como en diferentes áreas es posible advertir un notable mejoramiento de ciertos indicadores claves, en otras el progreso es menor o directamente no existen indicios de verdaderos cambios en las tendencias que se habían forjado en un contexto de ajuste estructural.

Respecto de esto último, parece posible pensar que mientras algunas de las transformaciones operadas como consecuencia de las reformas neoliberales resultan relativamente reversibles –aunque no lo sean todos sus efectos– otras mutaciones han impactado de un modo más durable en la forma en que se configuran las

¹¹ A estas transformaciones urbanas pueden sumarse las viejas fábricas refuncionalizadas en complejos habitacionales de lujo. Para el análisis de un caso particular en el barrio de Saavedra ver Del Cueto y Neuburger (2011).

relaciones sociales, dando lugar a fenómenos más persistentes. De modo que no se trata únicamente de procesos que, a través de políticas públicas, puedan revertirse, sino que a través del tiempo, los distintos grupos sociales modificaron sus lógicas, sus intereses y su conformación. Esto vuelve más complejas las posibilidades de revertir procesos que fueron consecuencias de años de ajuste. Por ejemplo, los procesos de segregación socioespacial de los sectores altos y medios altos, que son relativamente recientes en nuestro país pero más antiguos en otros países de la región, constituyen una marca de los años noventa que difícilmente puedan revertirse por completo. “Los countries llegaron para quedarse” afirmaba Maristella Svampa en pleno proceso de expansión de urbanizaciones privadas. Del mismo modo, la lógica de movilización signada por la territorialización de los sectores populares es otro proceso significativo del período cuya complejidad es difícil que pueda revertirse con políticas públicas que apunten aisladamente a una única dimensión de la vida social.

En cuanto a los cambios observados a lo largo de la última década, sobresale sin dudas el mejoramiento del empleo, tanto en lo que se refiere a la disminución del desempleo como al avance de la asalarización y la recuperación de los salarios, aunque subsistan problemas importantes en este campo, sobre todo en lo referido a la dificultad para reducir el empleo en negro, que disminuyó de manera sostenida en los últimos años, y para acortar la brecha entre las remuneraciones de hombres y mujeres (Álvarez, Fernández y Pereyra, 2012; Etchemendy, 2013; Cortés, 2012; Palomino y Dalle, 2012). Estas transformaciones no han sido ajenas a un proceso de progresiva re-regulación de las relaciones laborales, en el que se destaca la derogación de algunos de los mecanismos de flexibilización laboral sancionados en los noventa, la extensión de las negociaciones colectivas de trabajo –que entre 2003 y 2007 crecieron casi un 70% respecto de los convenios establecidos entre 1991 y 2001 (Senén González *et al.*, 2010)– y una mayor regulación de los sectores más vulnerables del mercado de trabajo, como las trabajadoras domésticas y los trabajadores rurales. Tal como señalan distintas investigaciones, si bien estas políticas han producido una recuperación importante respecto de la situación del empleo en la crisis de 2001 y aun respecto de la década de 1990, resulta difícil concluir una completa reversión de los efectos producidos en este campo por las políticas implementadas desde la dictadura militar (Álvarez, Fernández y Pereyra, 2012; Marticorena, 2011). Sin embargo, justo es advertir que los cambios observados en la última década, en los que se combina una creciente vitalización de la actividad sindical con una mayor intervención en las relaciones laborales por parte del Estado, plantean condiciones más favorables para la capacidad de negociación de los trabajadores y, en términos más generales, para un impulso en el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares (Marticorena, 2011; Feldman, 2013).

Ahora bien, más allá de las continuidades y las rupturas señaladas, otro de los interrogantes que se plantea en el presente refiere a cuáles son las *novedades* que, en la última década, la reconfiguración de las relaciones económicas y las

orientaciones de la política pública introdujeron en la estructura social de la Argentina. Entre los múltiples registros que abarca esta pregunta, dos cuestiones merecen ser destacadas. Por un lado, cuáles son los efectos de la relevancia creciente que adquiere el consumo, en un contexto de reactivación económica basada en el impulso del mercado interno. A lo largo de la última década, y como consecuencia tanto de procesos locales como de transformaciones observadas a nivel mundial, se ha observado un importante aumento del consumo, aun por parte de los sectores más vulnerables. Esta tendencia encierra múltiples paradojas: entre ellas, que mientras que por un lado es indicativa del acceso a formas de bienestar antes ausentes, por otro expresa nuevas vías de producción y reproducción de las desigualdades; por ejemplo, por medio de los procesos de sobreendeudamiento a los que suele estar asociado el consumo de las familias más pobres (Kessler y Merklen, 2013). Cuánto y cómo impactan entonces estos cambios en la estructura social constituye un importante terreno de exploración hacia el futuro. Por otro lado, cabe preguntarse también por las consecuencias que las importantes transformaciones registradas en el agro –uno de los pilares de la recuperación económica posterior a la crisis de 2001– han tenido sobre el territorio y la población rural del país. ¿Cómo afectaron a las diferentes regiones del país y a los equilibrios existentes entre ellas? ¿De qué manera influyeron en la estratificación social de las regiones productoras de soja? ¿Cuánto y de qué manera incidieron en los procesos de movilidad social observados dentro y fuera de esas zonas? Estas preguntas, que se ubican hoy en el centro de interés de un gran número de investigaciones, constituyen sin duda un eje fundamental para pensar las nuevas tendencias que atravesaron a la estructura social argentina en la última década.

En esta misma línea, es posible interrogarse por las consecuencias de transformaciones en el plano jurídico, como por ejemplo el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, en las cuales el Estado reconoce por primera vez los derechos de grupos de diversidad sexual. Cuáles podrían ser las consecuencias de la conquista de estos derechos en las relaciones de desigualdad es otro de los desafíos que se presenta para análisis futuros.

A lo largo de estas páginas nos propusimos poner en perspectiva los procesos más importantes que contribuyeron a definir la forma y las dinámicas de la estructura social de nuestro país durante de los últimos treinta años. Para ello, identificamos los momentos que marcaron puntos de inflexión, lo cual nos permitió dar cuenta de las continuidades y las rupturas que cada uno de ellos habría respecto del pasado. Pero también nos interesó señalar los interrogantes que los cambios operados en la última década plantean hacia el futuro, y los desafíos que ellos suponen para comprender el modo en que se configuran hoy las desigualdades sociales en la Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

- Alabarces, Pablo (2002). *Patria y fútbol*. Buenos Aires: Prometeo.
- Alabarces, Pablo y Rodríguez, María Graciela (comps.) (2008). *Resistencias y mediaciones*. Buenos Aires: Paidós.
- Altimir, Oscar; Beccaria, Luis y González Rozada, Martín (2002). “La distribución del ingreso en la Argentina, 1974-2000”. *Revista de la CEPAL*, n° 78, diciembre.
- Álvarez, Mariana; Fernández, Ana Laura y Pereyra, Francisca (2012). “El mercado de trabajo en la postconvertibilidad (2002-2010): avances y desafíos pendientes”. En Luzzi, Mariana (coord.), *Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea, 1976-2010*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Armellino, Martín (2005). “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA”. En Schuster, Federico y otros (comps.), *Tomar la palabra: estudios sobre protesta social en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- Aronskind, Ricardo (2001). *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los 90*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Barattini, Mariana (2013). *La acción gremial en los márgenes. La organización en el marco de la precariedad*. Tesis de Doctorado, Programa de Posgrado, IDES-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Basualdo, Eduardo y Arceo, Enrique (comps.) (2006). *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. Buenos Aires: CLACSO.
- Beccaria, Luis (2001). *Empleo e integración social*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Beccaria, Luis; Esquivel, Valeria y Maurizio, Roxana (2005). “Empleo, salarios y equidad durante la recuperación reciente en la Argentina”. *Desarrollo económico*, vol. 45, n° 178.
- Benza, Gabriela y Calvi, Gabriel (2005). “Concentración del ingreso y desigualdad social en la Argentina (1974-2003)”. *Realidad Económica*, n° 214.
- Benza, Gabriela y Heredia, Mariana (2012). “La desigualdad desde arriba: Ejercicio de reconstrucción de las posiciones sociales más altas en Buenos Aires”. VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 5, 6 y 7 de diciembre.
- Bidaseca, Karina y Gras, Carla (ed.) (2010). *El mundo chacarero en tiempos de cambio. Herencia, territorio e identidad en los pueblos sojeros*. Buenos Aires: CICCUS.
- Bustos, Juan Martín (2013). “¿Qué dicen los números?”. *Le Monde Diplomatique*, n° 167, mayo.

- Castellani, Ana (2006). “Los ganadores de la ‘década perdida’. La consolidación de las grandes empresas privadas privilegiadas por el accionar estatal. Argentina 1984-1988”. En Pucciarelli, Alfredo (coord.), *Los años de Alfonsín*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- CELS (2003). *Plan Jefes y Jefas: ¿Derecho social o beneficio sin derechos?*. Centro de Estudios Legales y Sociales, mayo. Disponible en http://www.cels.org.ar/common/documentos/analisis_jefes_jefas_oct2003.pdf
- CENDA (2007). *El trabajo en la Argentina. Condiciones y perspectivas. Informe trimestral n° 13*, primavera. Buenos Aires: Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino.
- Cerrutti, Marcela y Grimson, Alejandro (2005). “Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares”. En Portes, Alejandro; Roberts, Brian y Grimson, Alejandro (coords.), *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*, pp. 75-147. Buenos Aires: Prometeo.
- Cortés, Rosalía (2012). “Políticas laborales y transferencias de ingresos, ¿políticas complementarias?”. Segundo ISA Forum de Sociología, Buenos Aires, 1-4 de agosto.
- Dalle, Pablo (2009). “Tendencias y oportunidades relativas de movilidad intergeneracional desde la clase trabajadora en un período de cambio estructural (1960-2005)”. 5ª Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.
- (2011). “Movilidad social intergeneracional desde y al interior de la clase trabajadora en una época de transformación estructural (AMBA: 1960-2005). *Laboratorio*, n° 24, verano, pp. 111-143.
- Del Cueto, Carla (2007). *Los únicos privilegiados*. Buenos Aires: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Del Cueto, Carla y Neuburguer, Sonia (2011). “Un country en la ciudad. Reconversión urbana y segregación socio espacial en Buenos Aires”. En Rinesi, Eduardo y Larroca, Mario (comps.), *Ensayos de urbanidad. Reconversión urbana, fragmentación social y ciudadanía en Buenos Aires*. Buenos Aires: CNBA/UBA.
- Etchemendy, Sebastián (2013). “Clases populares y kirchnerismo”. *Le Monde Diplomatique*, n° 169, julio.
- Feldman, Silvio (2013). “Pensar procesos de cambio en relación con la desigualdad-igualdad en los últimos 10 años en la Argentina”. *Laboratorio*, n° 25, otoño, pp. 107-120.
- Fernández, Leonardo; Herrero, Ana Carolina y Martín, Irene (2010). “La impronta del urbanismo privado. Ecología de las urbanizaciones cerradas en la Región Metropolitana de Buenos Aires”. *Scripta Nova*, vol. XIV, n° 331, agosto.

- Gaggero, Jorge y Rossignolo, Darío (2011). "Impacto del presupuesto sobre la equidad. Cuadro de situación (Argentina, 2010)". Documento de trabajo n° 40, Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR). Disponible en <http://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DT40.pdf>
- Germani, Gino (1963). "La movilidad social en Argentina". En Lipset, Seymour y Bendix, Reinhard, *Movilidad social en la sociedad industrial*. Buenos Aires: Eudeba.
- (1987). *Estructura social de la Argentina*. Buenos Aires: Solar.
- Gluz, Nora y Rodríguez Moyano, Inés (2011). *Análisis de los primeros impactos en el sector educación de la asignación universal por hijo (AUH) en la provincia de Buenos Aires*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- González Bombal, Inés (2002). "Sociabilidad en clases medias en descenso: experiencias en el trueque". En Feldman, Silvio *et al.*, *Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90*. Buenos Aires: Biblos-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Gorelik, Adrián (2006). "Buenos Aires, de la crisis al boom". *Punto de Vista*, n° 84.
- Gras, Carla (2009). "El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y dilemas de sus organizaciones". En Gras, Carla y Hernández, Valeria (comps.), *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos.
- Gras, Carla y Hernández, Valeria (comps.) (2009). *La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Buenos Aires: Biblos.
- Heredia, Mariana (2011). "Ricos estructurales y nuevos ricos en Buenos Aires: primeras pistas sobre la reproducción y la recomposición de las clases altas". *Estudios Sociológicos*, n° 85, enero-abril.
- Kessler, Gabriel (2000). "Redefinición del mundo social en tiempos de cambio. Una tipología para la experiencia de empobrecimiento". En Svampa, Maristella (ed.), *Desde abajo*, Buenos Aires, Biblos- Universidad Nacional de General Sarmiento.
- (2011). "Clairs-obscurs de la structure sociale. Tendances en contrepoint dans l'Argentine du XXI^e siècle". *Problèmes de l'Amérique Latine*, n° 82, otoño, pp. 93-108.
- Kessler, Gabriel y Espinoza, Vicente (2007). "Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Buenos Aires. Continuidades, rupturas y paradojas". En Franco, Rolando; León, Arturo y Atria, Raúl (comps.), *Estratificación y movilidad social en América Latina. Transformaciones estructurales de un cuarto de siglo*. Santiago de Chile: LOM.
- Kessler, Gabriel y Di Virgilio, María Mercedes (2008). "La nueva pobreza urbana: dinámica global, regional y argentina en las últimas dos décadas". *Revista de la CEPAL*, n° 95, agosto.

- Kessler, Gabriel y Merklen, Denis (2013). "Una introducción cruzando el Atlántico". En Castel, Robert; Kessler, Gabriel; Merklen, Denis y Murard, Numa, *Individualización, precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente?*. Buenos Aires: Paídos.
- Leoni, Fabiana (2003). *Ilusión para muchos, alternativa para pocos*. Tesis de Licenciatura en Política Social, Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Luci, Florencia (2011). "Managers de grandes empresas: ¿trabajadores o patrones?". *Apuntes de investigación del CECYP*, año XV, n° 20.
- Luzzi, Mariana (2005). *Réinventer le marché?*. París: L'Harmattan.
- Marticorena, Clara (2011). "Contrapuntos de la negociación colectiva en la industria manufacturera durante el período postconvertibilidad". X Congreso Nacional de Estudios del Trabajo organizado por ASET, Buenos Aires, 3, 4 y 5 de agosto.
- Merklen, Denis (2005). *Pobres ciudadanos*. Buenos Aires: Gorla.
- Minujin, Alberto y Kessler, Gabriel (1995). *La nueva pobreza en la Argentina*. Buenos Aires: Planeta.
- Murmis, Miguel y Feldman, Silvio (1993). "La heterogeneidad social de las pobreza". En Minujin, Alberto (comps.), *Cuesta abajo*. Buenos Aires: Losada-Unicef.
- Palomino, Héctor y Dalle, Pablo (2012). "El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de la Argentina: 2003-2011". *Revista de Trabajo*, n° 10, pp. 205-224.
- Pujol, Sergio (1999). *Historia del baile. De la milonga a la disco*. Buenos Aires: Emecé.
- Semán, Pablo (2005). "Vida, apogeo y tormentos del 'rock chabón'". *Pensamiento de los Confines*, n° 17, diciembre.
- (2006). *Bajo continuo*. Buenos Aires: Gorla.
- Semán, Pablo y Vila, Pablo (1999). "Rock chabón e identidad juvenil en la Argentina neo-liberal". En Filmus, Daniel (comp.), *Los noventa*. Buenos Aires: FLACSO-Eudeba.
- (2011). "Cumbia villera: una narrativa de mujeres activadas". En Semán, Pablo y Vila, Pablo (comps.), *Cumbia. Nación, etnia y género en Latinoamérica*, Buenos Aires: Gorla.
- Senén González, Cecilia; Trajtemberg, David y Medwid, Bárbara (2010). "Los determinantes de la negociación colectiva en la argentina. Debates teóricos y evidencias empíricas". *Trabajo, ocupación y empleo*, Serie Estudios/ 9. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Silba, Malvina (2011). "La cumbia en Argentina. Origen social, públicos populares y difusión masiva". En Semán, Pablo y Vila, Pablo (comps.), *Cumbia. Nación, etnia y género en Latinoamérica*. Buenos Aires: Gorla.

- Svampa, Maristella (2000). "Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal". En Svampa, Maristella (ed.), *Desde abajo*. Buenos Aires: Biblos-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- (2001). *Los que ganaron. La vida en los countries y barrios cerrados*. Buenos Aires: Biblos.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Torrado, Susana (1994). *Estructura social de la Argentina, 1945-1983*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Varela, Paula (2009). "Imágenes de un mundo obrero". En Grimson, Alejandro, Ferraudi Curto, María Cecilia y Segura, Ramiro (comps.), *La vida política en los barrios populares de Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.
- Ziegler, Sandra y Gessaghi, Victoria (comps.) (2012). *La formación de las elites en la Argentina. Nuevas investigaciones y desafíos contemporáneos*. Buenos Aires: Manantial-FLACSO.

LAS CAMADAS GEOLÓGICAS DE LOS SECTORES POPULARES ESTRUCTURAS, EXPERIENCIAS, CONFLICTOS*

Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto

En 2017, Claudia tiene 35 años y vive en Florencio Varela con su hija de 6. Trabaja como empleada administrativa en un horno de ladrillos de la zona desde 2012. Cobra cerca de \$20.000 en blanco (US\$1250). Al terminar la secundaria, entró en una estación de servicio a pocas cuadras de su casa. Cuando la despidieron en 2009, abrió un local de ropa junto con su madre en el centro del distrito. Pero esa situación duró poco: al fracasar su negocio, buscó trabajo en otra estación de servicio. Luego, el dueño de la anterior le pidió que volviera porque, a pesar de su carácter, era una persona “de confianza”. Aunque sus condiciones laborales habían empeorado, ella continuó allí hasta que un cliente le propuso un trabajo mejor. Desde entonces, está a cargo del papeleo en la empresa ladrillera. Hasta 2014, vivía con el padre de su hija, quien tenía un taller mecánico. Pero él murió en un accidente de tránsito. Tanto antes como entonces sus padres la ayudaron. Cuando ella y sus hermanos trabajan, los padres cuidan a sus nietos. Su mamá está jubilada (por la llamada jubilación para amas de casa),¹ después de cerca de diez años trabajando como auxiliar de limpieza en una escuela del barrio. Allí aprendió a leer y escribir gracias a unos cursos extracurriculares. Su papá, en cambio, es analfabeto. Nacido en Corrientes, Baltasar llegó a Buenos Aires para trabajar cuando tenía trece años. Después de otras experiencias breves, trabajó en un frigorífico de la zona

* Una versión previa de este artículo fue publicada en Kessler, G. (2016): *La sociedad argentina hoy*, Buenos Aires, Siglo XXI. Agradecemos las lecturas de Mariana Luzzi y Jerónimo Pinedo.

¹ En 2005, un 38% de las personas en edad jubilatoria no percibía ese beneficio. El Estado nacional (a través de la ANSES) dispuso una moratoria por la cual quienes cumplían con los requisitos etarios podían percibir una jubilación mínima y abonaban la deuda con el sistema previsional contributivo a través de deducciones realizadas a su ingreso durante varios años (Ley 25994, art. 6 y decreto 1454/05). El sistema se popularizó con el nombre de “jubilación para amas de casa”.

por alrededor de treinta años hasta que quedó desocupado en 1996. Unos años después, comenzó a participar en una organización de desocupados a cambio de un plan (\$150, US\$150 hasta la caída de la convertibilidad en 2002). Entonces, su mujer se convirtió en el principal sostén de la casa, lo que trajo algunas rispideces entre ambos. La situación mejoró cuando, en 2006, Baltasar consiguió una changa de seguridad en un country cercano. En 2009, tramitó una pensión por discapacidad, debido a un desgaste de su cadera que ha dificultado su movilidad (por el cual aún está esperando ser operado). En 2015, obtuvo la jubilación. Tienen tres hijos más: uno hace changas en la construcción; otro trabaja en una fábrica de plásticos y una tercera limpia por horas en casas de familia. Claudia es su orgullo.

Dilucidar cómo son los sectores populares en la Argentina contemporánea implica un desafío mayúsculo. Por un lado, pocos términos tienen un uso tan difundido, tan polisémico y tan discutido como el de “sectores populares”. Por otro, la situación actual de los sectores populares en Argentina es efecto acumulado de series combinadas de fenómenos que han diversificado las trayectorias sociales, laborales y políticas de las clases subalternas a lo largo de las últimas décadas... La biografía de Claudia y su familia muestra un cruce singular de varias líneas significativas que iremos caracterizando a lo largo de las siguientes páginas: empleo, ingreso, educación y salud, desigualdades territoriales y procesos diferenciados de politización hacen a la configuración de las diferentes camadas geológicas de lo popular en la Argentina contemporánea. En esta configuración de los sectores populares, juegan los efectos de las transformaciones estructurales de largo plazo, los modos en que los actores respondieron frente a esas condiciones que se les imponían y los equilibrios cambiantes en que, desde el Estado, se articularon diferentes maneras de “hacer sociedad”.

CUESTIONES TERMINOLÓGICAS

El término “sectores populares” puede aludir a las clases bajas o a la entidad metafísica que representa, destilado, el espíritu de la nación. También es utilizado analítica y políticamente para referir a un sujeto económicamente oprimido más amplio y complejo que el que propone el marxismo cuando distingue las clases por la posesión o no de los medios de producción (incluso desde versiones heterodoxas del propio marxismo). Esta última connotación puede extenderse al referir a los sectores populares como sectores subalternos, aludiendo a un conjunto heterogéneo de grupos en una posición subordinada que surge de una combinación de criterios políticos y económicos.

En este artículo, nos referiremos a los sectores populares en términos que operacionalizan esa definición, combinando análisis sociodemográficos con estudios

de caso de tipo histórico y etnográfico, para así captar la forma en que los grupos subalternos interiorizan los datos de su posición estructural en estrategias con las cuales actúan sobre los avatares de su situación.

LOS SECTORES POPULARES COMO AGREGADO SOCIODEMOGRÁFICO

En términos sociodemográficos, los sectores populares comprenden un agregado específico pero variable a lo largo de las últimas décadas. Con el paso del tiempo, las estadísticas han marcado el protagonismo de diferentes situaciones dentro de lo popular: el trabajo industrial, el trabajo informal, la ocupación en servicios y la desocupación, descritos según distintas mediciones y claves de interpretación como situaciones de ascenso, marginalidad o pobreza. En consonancia con estas elaboraciones, muchos análisis han tendido a tomar la parte por el todo e identificar a los sectores populares con determinados conjuntos de población a lo largo de los últimos cincuenta años: los trabajadores industriales, los pobladores de las villas, los desocupados, los trabajadores informales, los reclamantes o los asistidos. Aquí, a pesar del carácter relativamente breve de esta presentación, trataremos de integrar los diversos aspectos sin reducir los sectores populares a una de sus significaciones eventualmente privilegiadas. Más aún, intentaremos mostrar que los sectores populares están atravesados por dinámicas que crean heterogeneidades que se acumulan y deben ser integradas en una composición para caracterizar su configuración actual. Partiremos de una concepción de la estratificación social que subraya el papel definidor de las ocupaciones y describiremos su inscripción en la escala de ingresos, el sistema educativo, el sistema de salud y la geografía del país.

Al considerar el total de la población urbana, los sectores populares (el conjunto de los trabajadores manuales calificados y no calificados) forman el 53% de la población (Benza, 2016). En otras estimaciones, se destaca la magnitud y la heterogeneidad de este agregado en el que, entre otros fragmentos, se encuentran, para una población económicamente activa urbana de 15.000.000, 1.168.000 empleadas domésticas, poco más de 2.000.000 de empleados manufactureros, 1.500.000 empleados en la construcción y 3.000.000 de empleados de comercio² (Axt, Contartese, Mazorra y Schachtel, 2008). Esa heterogeneidad actual puede ser pensada como la

² Según los criterios operativos consolidados por Germani a mediados del siglo XX, los sectores populares remitían trabajo manual. Desde allí, el acceso a empleos en el sector servicios era visto como una forma de ascenso social. Hoy en día, estos criterios fueron cuestionados en relación con una transformación de la estructura productiva. En este contexto, el pasaje del empleo manual al de servicios es visto como “movilidad espuria”, ya que se trata de un cambio de tareas pero no implica necesariamente una mejora en las condiciones de vida ni reconocimiento social (Kessler y Espinoza, 2007). Para nosotros, estas transformaciones son relevantes, en cuanto complican la delimitación de los sectores populares. Por ello, proponemos diversificar los criterios de análisis y atender a las trayectorias.

combinación de distintas capas geológicas en la formación del mundo popular. Debemos retener esta complejidad como punto de partida.

EL EMPLEO

Cecilia tiene 25 años, tiene el secundario completo, está embarazada y se convirtió en cooperativista (del Plan Argentina Trabaja).³ Primero le pregunté si sus padres trabajaban y me dijo que su papá era obrero de fábrica y que ella trabajaba en fábrica desde los 18 años, que la última empresa en la que estuvo la despidió por falta de trabajo (hacían ropa interior y la enviaban a Brasil, pero últimamente [en 2015] no tenían pedidos). Cecilia me dijo que ella trabajaba 12 horas diarias y cobraba \$7000 [US\$700] por quincena, que con esa plata iba al supermercado y compraban de todo y que siempre llevaba a sus dos hermanitos al McDonald's, pero ahora estaba embarazada y no podía salir a buscar otro trabajo, entonces aceptó lo de la cooperativa que era una ayuda. Ella antes vivía a siete cuadras del asentamiento, el papá del bebé vive aquí y se mudaron juntos. Cecilia me dijo que su intención es volver a la fábrica porque la diferencia de plata es mucha. Su pareja trabaja con el carro [juntando cartones y otros productos descartados por otros] y consiguió ir al Easy con otro y ahí juntan bien, pero igual no alcanza (Merlo, 2017: 64).

Una de las bases de la heterogeneidad de lo popular ha sido la dinámica del mercado de empleo. La recuperación general del empleo, que lleva la tasa de desempleo del 21,5% en 2002 al 7,9% en 2010 (y al 6,9% el último trimestre de 2014, según el Ministerio de Trabajo) tiene expresiones específicas en la situación de los sectores populares. Entre 2003 y 2013, el empleo crece y se recompone positivamente: disminuyen los beneficiarios de planes sociales (5,6 al 0,5%), aumenta la proporción de trabajadores manuales calificados (27% en 2003 a 33,8% en 2013) y disminuye el peso del total de la categoría de los trabajadores no calificados y marginales que pasan del 26,1% en 2003 al 17,6% en 2013 (Benza, 2016). Pero el proceso se desacelera a partir de 2008.

Los análisis se dividen respecto a su interpretación. A partir de la tesis de la heterogeneidad estructural, algunos autores críticos de la calidad y envergadura de la recomposición arguyen que la continuidad del patrón de inversión que promueve la concentración económica determina una escisión entre segmentos acotados de puestos de trabajo bien remunerados y protegidos, un contexto general de empleos mal pagos y desprotegidos, y una masa "residual", cuyas potencialidades sistémicas

³ Este programa fue lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social. Destinado a poblaciones que carecían de empleo registrado, apuntaba a la realización de una contraprestación laboral y/o formativa a través de la conformación de cooperativas orientadas a proyectos específicos. En 2014, implicaba un ingreso de alrededor de \$2600 mensuales (US\$300).

de convulsión deben ser conjuradas a través de políticas sociales que garantizan mínimos de supervivencia (Salvia, Vera y Poy, 2015, entre otros). Una respuesta a esto es que se sobredimensiona el polo marginal al incluir a todos los trabajadores no registrados (como si fuesen comparables la situación de un cartonero, un empleado fabril en negro o un contratado de alto nivel en el Estado o en una empresa del sector privado) (Dalle, 2012). Otra respuesta relativizadora se puede encontrar en un señalamiento de Lindenboim (2007: 316): hacia 2006, cuando la recuperación del mercado de empleo no había alcanzado su plenitud, este se componía en un 70% de trabajo asalariado y solo en un 20% de trabajo autónomo (el 10% restante corresponde a categorías de patronos y familiares sin remuneración). Esta observación no niega la existencia del polo marginal, pero cuestiona la idea de un crecimiento lineal y sin fisuras a lo largo de las últimas décadas, en cuanto destaca la persistencia de las características históricas del mercado de empleo a pesar de las transformaciones del aparato productivo (Lindenboim, 2007: 316). El cuadro presentado por este autor muestra que el total de los asalariados, que constituye el 75% de los ocupados, se compone de un 15% de empleados públicos, un 28% de empleados protegidos, un 22% de empleados privados precarios, un 8% de empleados domésticos y un 3% de receptores de planes sociales vigentes en ese momento. Esos valores muestran que aun con un alto nivel de precariedad laboral (40% en ese entonces) se registra una dinámica de recomposición del trabajo asalariado industrial protegido a un nivel superior al de la década del noventa.

Justamente, son esas características del mercado laboral las que se ponen en juego en los últimos años, cuando un desempeño más pobre de la economía ha desalentado la creación de nuevos empleos y sobre todo ha generado un aumento de la subocupación, que alcanza en 2014 expresiones similares a las de la crisis de 2008-2009. Aún así, el impacto del retroceso económico sobre el mercado de empleo fue sosegado por las intervenciones estatales dirigidas a contener el momento recesivo: en 2009, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan Argentina Trabaja; más tarde, los Planes Procrear y Progresar.⁴ De este modo, se explican las bases objetivas de la discutida recomposición y sus potencialidades, su sensibilidad al crecimiento, a las políticas públicas y la persistencia de las estructuras que dan lugar a un empleo calificado.

⁴ Ambos programas se propusieron como políticas públicas orientadas a la inclusión social y a la redistribución del ingreso, aunque apuntaron a problemas y poblaciones diferentes. El Programa Procrear, lanzado por decreto en 2012, pretendía favorecer el acceso a la vivienda de las clases medias y trabajadoras así como la generación de empleo, a través de un sistema de crédito subsidiado para la construcción (entre sus requisitos, constaba una capacidad mínima de ahorro registrado). El programa Progresar, en cambio, fue creado en 2014 para que los jóvenes de entre 18 y 24 años cuyo ingreso familiar no superara el salario mínimo vital y móvil, pudieran continuar su escolarización a cambio de un ingreso mensual de \$600 (US\$75).

Atender a estas variaciones que tienen lugar a lo largo del tiempo, de acuerdo con equilibrios inestables en las relaciones de fuerza, no es banal. Según creemos, la tesis de la heterogeneidad estructural capta un aspecto clave del proceso en términos de las consecuencias excluyentes del régimen de acumulación dominante y la conformación de economías subordinadas en sus márgenes. Pero, al centrarse en la comparación intertemporal de datos agregados, descuida los modos en que los actores se mueven a través de estos espacios. En ese sentido, constituye como grupo estadístico más o menos estable a ciertas posiciones que varían a lo largo del tiempo. De allí que biografías como la de Claudia o Cecilia nos ayuden a dar cuenta de la inestabilidad de las posiciones relativas dentro de las clases populares, el peso diferencial de procesos de variada intensidad en la diversificación de las trayectorias vitales y las posibilidades de agencia dentro de las condiciones dadas.

LOS INGRESOS Y LA POBREZA

El conjunto de las remuneraciones de los sectores populares ha mejorado entre 2003 y 2013 (Benza, 2016). A ello contribuyó la estabilización de una coyuntura en que se dieron el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, junto con la búsqueda y consecución de mayores grados de libertad del Estado para definir sus políticas a distancia de los intereses económicos más concentrados (Beccaria y Maurizio, 2012). En ese contexto, las políticas de salario mínimo y el restablecimiento de un régimen de paritarias se tradujeron en un aumento del nivel de remuneraciones que fue reforzado por una serie de transferencias monetarias que van desde la auh hasta la universalización de las jubilaciones y las políticas de aumento de su monto mínimo. Incluso los observadores más críticos de las políticas sociales, que señalan que estas no pasan de ser “mecanismos redistributivos apenas ‘compensadores’ de las exclusiones estructurales o coyunturales que genera la dinámica dominante de acumulación”, reconocen que “a diferencia de los programas focalizados de la década de los noventa, los programas de protección contra la pobreza en la etapa posreformas fueron adoptando un carácter más extendido, a la vez que las transferencias de la seguridad social (sistema de jubilaciones y pensiones) adquirieron una relevancia creciente en el presupuesto de los hogares” (Salvia, Poy y Vera, 2015). Ante un mercado inmobiliario prohibitivo y una inflación alta, esta redistribución de ingresos redundó en una ampliación y diversificación del consumo popular, propiciada por mecanismos de financiación abiertos pero desiguales (Del Cueto y Luzzi, 2016). El resultado general de todas estas mejoras se expresa en datos más agregados y complejos cuya evolución es necesario subrayar.

Las desigualdades se redujeron entre 2003 y 2008, y se estabilizaron, sin progresos ni desmejoras, desde entonces (Cruces y Gasparini, 2009). En ese contexto, puede verificarse que entre 2003 y 2010 la participación de los trabajadores en el ingreso nacional mejora y luego se mantiene relativamente estable hasta la

actualidad. Si bien la validez de los datos ha sido un punto clave en las controversias actuales respecto de la situación social en Argentina, aquí las diferentes mediciones se muestran relativamente cercanas: Graña y Kennedy (2010) señalan que la participación de los asalariados en el ingreso nacional habría llegado al 41,4% en 2010 y el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina estima que en 2009 esa medida habría llegado al 41,1%, mientras que para el Ministerio de Trabajo habría sido del 43,6% en el año 2008.

Ahora bien, cuando uno analiza estos datos en una serie temporal más larga, se pueden valorar los logros pero también las limitaciones. Por un lado, se trascendieron los pisos históricos de la convertibilidad, alcanzados entre 1996 y 1998. Por otro lado, la recuperación no solo dista de los máximos históricos (registrados a inicios de los años cincuenta) sino que, a pesar de ser importante y manifiesta, solo conduce a niveles de inequidad de ingresos similares a los que rigen en forma inmediatamente previa a la crisis de 2001. Como sucede con el empleo, la situación de los sectores populares se inscribe en una curva en la que las mejoras del presente resultan parciales respecto de un pasado cada vez más lejano, algo que no deja de ser parte de esa situación estructural. Pero además debe computarse un hecho que erosiona el valor de las mejoras citadas: la mayor parte de los salarios se concentran en niveles relativamente bajos y la inflación, el encarecimiento de los bienes inmobiliarios y el refuerzo de pautas de consumo que presionan en forma permanente los presupuestos familiares generan todo tipo de estrecheces, afectando a numerosos trabajadores. Entre ellas, la más urgente y notable es la pobreza.

La pobreza entendida como imposibilidad de acceder a una “canasta básica” de alimentos y gastos en vivienda y servicios que incluyen el transporte, la educación y la salud es un foco de debates. Las mediciones se dispersan debido a las divergencias que surgen al computar de diversos modos la inflación y sus efectos en la canasta de bienes mínimos para no ser considerado pobre. Desde la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2007, las controversias sobre los datos fueron *in crescendo*. En 2014, algunos sitúan la pobreza en el 13% de la población total, otros en el 15% y otros cerca del 30%. Pero más allá de la divergencia metodológica acentuada por el valor político del dato, es preciso subrayar tanto la pronunciada recuperación como el todavía elevado nivel porcentual computado, aun en su versión más optimista. Esta cuestión fue clave en el desgaste del segundo mandato de Cristina Kirchner (2011-2015). Las promesas de transparencia y pobreza cero marcaron el inicio del gobierno de Mauricio Macri (2015-) mientras mediciones oficiales y extraoficiales (aun difiriendo) muestran un incremento en la cifra de pobres desde fines de 2015.

Quizá las controversias coyunturales descuidan lo fundamental. Si nos remontamos en el tiempo, los datos resultan desalentadores: los niveles de pobreza pasaron de un 5% en los años setenta a un 31% en 2006, luego de un pico de más del 50% en 2002. Diferentes dinámicas socioeconómicas explican la evolución de las

cifras: Beccaria (2007) muestra que la pobreza aumentó en los años setenta por la baja de los ingresos, en los años ochenta por la combinación entre la baja de ingresos y el deterioro de las condiciones laborales, y luego por el desempleo y los efectos de las devaluaciones de 1989 y 2002 (así como, en menor medida, las de enero de 2014 y diciembre de 2015).

Dicho brevemente, la pobreza se triplicó en cuarenta años convertida en una condición estructural, habida cuenta de que las variaciones en el mercado de empleo y remuneraciones se han conjugado con la persistencia de un amplio contingente de ciudadanos que no logran un mínimo que es, en cualquiera de las mediciones, muy poco exigente. Aun en los cómputos más optimistas, nos referiríamos nada menos que a 7,7 millones de pobres y 1,8 millones de indigentes para el 2015. En este mismo contexto, debe localizarse una figura que parece haberse multiplicado en esta época y debe su existencia a la insuficiencia de la creación de empleos continuos y protegidos así como a la evolución de las remuneraciones y la inflación: la del trabajador que, dadas las condiciones del mercado de trabajo (informalidad, inestabilidad y bajas remuneraciones), no llega a sobrepasar la línea de pobreza por ingresos (el 61% de los jefes de hogares considerados pobres en 2012 están ocupados, como demuestran Barrera, Fernández y Manzanelli, 2013). Los ciudadanos pobres no son, como suele presuponerse, mayoría de “asistidos” sino, en general, trabajadores sobreexplotados y desprotegidos.

LA EDUCACIÓN Y LA SALUD

El conjunto de los sectores populares cuenta, en comparación con otros estratos sociales, con menos probabilidades de acceso a recursos educativos, de manera tal que se refuerzan o replican las desventajas que estos grupos padecen en el mercado de trabajo. La brecha que se abre entre los sujetos de los sectores populares y los de otros grupos sociales se manifiesta en todos los niveles del sistema educativo: en el nivel primario, a través de la fragmentación del sistema y de correlativos efectos de rendimiento diferencial; en los niveles restantes, a partir de trayectorias educativas más lentas y de menor alcance.

En 2013, mientras que solo el 46% de los jóvenes de los sectores populares de entre 20 y 22 años había terminado el secundario, en el nivel socioeconómico alto lo había finalizado el 83%. Y mientras que en el 30% de nivel socioeconómico más bajo el porcentaje de adolescentes no escolarizados es del 27%, en el 40% más alto es de apenas el 6%. En el nivel universitario, la brecha acumula y amplía los efectos de las diferencias previas. Aun contando con el efecto de la extensión de los servicios educativos universitarios que se aceleró en la última década, las diferencias en cuanto al nivel educativo se muestran como uno de los indicadores más firmes de las diferencias entre los grupos sociales: los sectores populares acceden a la universidad en una proporción casi diez veces menor que la que caracteriza a

las clases medias y más de veinte veces menor que la que tienen las clases altas. Y en esa relación comparativamente más pobre con las instituciones educativas se destaca que el porcentaje de adolescentes y jóvenes económicamente inactivos que no estudian llega al 19% en el 30% de más bajos ingresos, mientras que en el 40% superior ese porcentaje llega al 5,25%.

Incluso con todas las críticas que merece la abusiva categoría “ni ni” (ni estudian ni trabajan), que ignora las propiedades de la transición juvenil y niega entidad a una serie de cosas que los jóvenes sí hacen, es llamativa la marcada distancia que asume ese tramo de los sectores populares respecto de las instituciones educativas. Cuanto más abajo en la escala social, más lejos están la universidad y la escuela media, y si bien la primaria está casi universalizada, su presencia y arraigo son diferenciados.

Ante esta situación, diferentes políticas estatales buscaron apuntalar la formación de los jóvenes de barrios “vulnerables”, incentivando monetariamente la realización de talleres orientados a los oficios o la finalización del ciclo secundario (Plan Fines, Plan de empleo joven, Plan Progresar, a nivel nacional; Plan Envión, en la provincia de Buenos Aires). Las miradas de las docentes dan cuenta de un problema que las excede. A la vez que reconoce la precariedad de los empleos disponibles, una directora sostiene:

... el joven que viene acá no tiene el trabajo como un valor, el trabajo es lo que me da de comer... Nosotros vemos que la “cultura del plan” como la llamamos nosotros, incidió muchísimo en lo que es la cultura del trabajo. El otro día, un chico de herrería, para trabajar con nosotros, decía “¿pero me van a blanquear?” “Primero vas a estar un tiempo a prueba y después sí, por supuesto”. “Pero, ¿entonces me van a sacar el plan?” “¿Pero cuánto ganas con el plan, 150 pesos? Acá ganas 800, ¿qué te parece?” “Sí, pero después, ¿y si no me va?”. Y el “no me va” quiere decir: no me lo banco, llego tarde, quiero faltar. No saben cuánto van a aguantar despertarse temprano (Directora, centro 2) (Jacinto y Millenaar, 2012: 152, resaltado en el original).

La cita no solo muestra las dificultades que enfrentan las escuelas, sino también cómo la explicación “culturalista” de la pobreza ha desplazado la responsabilidad hacia los propios sujetos (en cuanto las explicaciones “estructurales” no alcanzan a dar cuenta de las diferencias entre sujetos cuyas posiciones son similares).⁵

Los indicadores básicos de salud dan cuenta de la situación de los sectores populares de forma aproximativa y débil, porque las estadísticas no discriminan el nivel socioeconómico. Una de las excepciones es el cuadro que mostraba el INDEC

⁵ Kessler (2014) avanza en esta línea al abordar la relación entre inseguridad y desigualdad social. Aquí, en cambio, buscamos acentuar la importancia de las biografías para complejizar la comprensión de la estructura social.

hacia 2005, en que se evidenciaba que el 75% de la población pobre no tenía ningún tipo de cobertura médica que no fuera la red pública.

Una forma aproximativa para comprender la situación de los sectores populares en este plano es relevar las desigualdades interregionales. Así, los niveles de población sin cobertura médica de ningún tipo se acentúan en el noroeste y en el noreste, aquellas regiones que concentran la mayor cantidad de población perteneciente a los sectores de menor ingreso. Aunque en la última década la cobertura ha conocido un incremento importante en esas mismas regiones, el 44% de la población del NOA y el 50,9% de la del NEA permanecen sin cobertura, mientras el promedio nacional es del 36,1% (Sanguinetti, 2011).

LA METROPOLITANIZACIÓN Y LAS REPRESENTACIONES DOMINANTES DE LO POPULAR

Nadie puede gobernar el país sin cierto consentimiento por parte de los principales intendentes del conurbano bonaerense, que administran desde hace décadas un territorio donde la desigualdad y la pobreza han crecido, y donde ahora cunde la anomia, el clientelismo y el gerenciamiento de la miseria (*La Nación*, 5/7/2010, citado por Segura, 2015).

En las últimas décadas, tuvo lugar un desplazamiento de la población hacia las grandes ciudades, que profundizó el proceso de metropolitanización de diferentes núcleos urbanos. Si bien más del 40% de la población nacional se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), otras metrópolis también se han expandido en un contexto en que la población urbana comprende más del 90% de los habitantes del país (Prévôt-Schapira y Velut, 2016). Existe una localización privilegiada, pero de ninguna manera exclusiva, para los sectores populares: los conurbanos.

La presencia de los sectores populares tiene disparidades en el territorio nacional: representan poco menos del 50% de la población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Plata, Río Gallegos, Mendoza, Paraná, Posadas y Santa Fe; alcanzan el 50% de la población en Rosario, Tucumán, Salta y Córdoba; y llegan al 60% o más en el Gran Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Formosa (Benza, 2016).⁶ Las dinámicas de metropolitanización, con diversas extensiones y características de exclusión, afectan a ciudades como Córdoba, Santa Fe, Rosario, Paraná, Salta, San

⁶ Claramente, pertenecer a los sectores populares implica posibilidades de vida muy diferentes de acuerdo con la zona de residencia en la división política del país. Ante la escasez de investigaciones al respecto, el índice de desarrollo humano (IDH) ajustado por desigualdad permite sostener que en los partidos del Gran Buenos Aires (GBA), en las provincias del noreste y noroeste argentinos, la condición popular, asociada a una determinada inscripción ocupacional, se vincula también a peores posibilidades de acceso a recursos de educación y salud (PNUD, 2013: gráfico 1.7: Desigualdad y desarrollo humano según jurisdicción).

Juan, San Miguel de Tucumán, Neuquén y Bariloche. En ellas se concentran unas clases populares urbanas de vieja data que no pararon de ensancharse y las provenientes de una migración intra e interprovincial que hace de los nuevos conurbanos una realidad creciente y generalizada. Estos cambios se inscriben en procesos más largos cuya duración, modalidad y alcance varían según las localidades.

Más precisamente, es posible notar cómo algunas grandes ciudades continuaron con procesos de segregación creciente. En Córdoba, tuvo lugar un asentamiento periférico de las clases populares (profundizado por las políticas públicas provinciales de relocalización) y una valorización de las Sierras Chicas como suburbio residencial para las clases más acomodadas. En el Gran Rosario, los sectores populares continuaron ocupando el norte y el sur mientras que el crecimiento poblacional afectó centralmente los pueblos del corredor oeste donde se desplazaron las clases medias y medias altas de la ciudad. En San Miguel de Tucumán, el proceso reciente parece continuar con los patrones de segregación que se forjaron desde la crisis azucarera, consolidando el crecimiento de la ciudad informal hacia el sudeste y la localización de los sectores más favorecidos en el centro y en el corredor occidental; sin embargo, esta continuidad está matizada por un mejoramiento en las condiciones habitacionales de la población relegada a lo largo de la última década (fenómeno que aparece asociado al alza en los ingresos de los hogares y a la incidencia de las políticas habitacionales). En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las variaciones más importantes ocurrieron en el segundo y el tercer cordón, mientras que la CABA y el primer cordón se mantuvieron constantes (aun cuando aumentó la población en las villas y los asentamientos). Esta situación, relacionada con el aumento del precio del suelo urbano, implicó tanto un aumento del número de inquilinos como un desplazamiento de la población de menores recursos hacia el conurbano (CELS, 2013).

El crecimiento de las grandes metrópolis que, bajo diferentes modalidades, implicó un aumento de la segregación urbana, impactó sobre las representaciones dominantes de lo popular. Aunque la situación no alcanza el grado de disrupción que ha tenido históricamente la emergencia del peronismo (magistralmente sintetizados por “Casa tomada”, de Cortázar), el tema de la amenaza y el miedo aparece como eje en los modos en que, desde la sociología espontánea de los grupos en posiciones superiores, se aborda lo popular (Rodríguez, 2013). Si las imágenes de una periferia violenta proliferan en los medios de comunicación, ya sea que se hable de los saqueos en Córdoba en 2013, de las redes del narcotráfico en Rosario o de la omnipresencia de la inseguridad en el conurbano bonaerense, no es solo porque ocurren hechos que refrendan esas imágenes, sino también porque está en juego un cambio en el patrón de la relación entre los grupos sociales en el espacio urbano transformado. La hipervisibilización agresiva de las clases populares es el correlato en el plano de las relaciones entre grupos sociales de la nueva distribución de las

clases populares en el territorio bajo las condiciones de una transformación profunda del régimen de acumulación capitalista.

LAS CAMADAS GEOLÓGICAS DE LO POPULAR

El mundo popular contemporáneo es resultado de un proceso temporal en el que se acumulan y conectan períodos que han tenido efectos diferentes en la estructura social: desde el largo plazo de las pérdidas y la decadencia hasta el tiempo relativamente breve de las mejoras moderadas.

En el tiempo y con el tiempo, se han sumado los efectos negativos de caídas en los niveles de remuneración, calidad y estabilidad del empleo, así como los del deterioro y la contracción del ritmo de crecimiento de infraestructuras de salud, educación y hábitat, y de protecciones sociales. Aquellos que se empobrecieron hace cuatro décadas o dejaron sus provincias por falta de oportunidades y produjeron una nueva ola de asentamientos en conurbanos cada vez más extensos y densamente poblados, perdieron trabajos e ingresos las décadas siguientes y son los padres y abuelos de un contingente repentinamente engrosado de recolectores de desechos urbanos que se ha transformado en un oficio regular, estable y hasta relativamente formalizado, pero sin dudas peor pago y de menos perspectivas que el empleo fabril. Cada uno de esos hechos que marcó una secuencia decadente no solo es pasado, sino que hoy se conectan entre sí produciendo nuevos efectos de largo plazo. Pero el elenco de actores y el conjunto de funcionamientos sociales se complejiza.

El mismo razonamiento que hacemos en forma ilustrativa a propósito de una parte de las tendencias citadas debe hacerse menos unilateralmente y debe recoger otra parte de esas tendencias. Los vaivenes sociales no siempre conllevan decadencia. También es posible observar a nuevas generaciones de jóvenes empleados que acceden a nuevas protecciones y generan nuevas capitalizaciones o reactivan herencias inertes: desde los nuevos empleados industriales hasta las empleadas domésticas que han ingresado a regímenes de registro o los habitantes de extensas urbes que han atravesado experiencias de urbanización de extensión limitada pero de indiscutible éxito.

Del aumento de la desigualdad producida entre los años setenta y noventa, de la reversión moderada y limitada de los últimos lustros, como del amesetamiento de algunos procesos erosivos de la igualdad, y de la aparición de lógicas agresivamente desigualadoras, no surge una masa homogéneamente marginal sino un conjunto de heterogeneidades en las que conviven sectores diferenciados. Generaciones que se han empobrecido y perdido inserciones fuertes en el mercado de trabajo. Generaciones que han partido de ese piso y han consolidado una trayectoria de movilidad social intergeneracional. Generaciones que han partido de niveles de pobreza casi naturalizada que no han podido trascender. Sujetos que han dejado atrás esas situaciones en una encrucijada de políticas públicas, empeños personales y acción

colectiva. Sujetos que han establecido conexiones con el mercado de bienes a través de ocupaciones. Desempleados que han recuperado con el empleo reivindicaciones de nuevo tipo tanto respecto de su ámbito laboral como de su hábitat y la ciudad. Jefes de hogar que encuentran en el trabajo una forma de empobrecimiento apenas amortiguado.

LOS SECTORES POPULARES Y LA POLÍTICA

Luego de avanzar por dimensiones que hacen a la situación de los sectores populares en términos de sus posiciones estructurales, es preciso conocer los esfuerzos que los grupos populares realizan para incidir en los procesos que los condicionan y modificar sus posiciones de origen, a partir de sus experiencias de movilización social y política. Es necesario leer las investigaciones que reseñan una serie de cambios políticos concomitantes con los cambios en la estructura social, como investigaciones que, mientras retratan un proceso de pérdidas y aumento de la desigualdad, también reflejan la forma en que los sujetos obraron sobre condiciones que les fueron impuestas. Esta posibilidad nace de un cambio de enfoque que implica la ampliación del elenco de lo reconocido como popular así como, a partir del desarrollo de investigaciones atentas a las experiencias de los actores, el despliegue de las posibilidades de los sectores populares sobre las restricciones. Aquí separamos analíticamente lo que las biografías entretajan.

En el análisis de los años noventa, se resaltaban los procesos de debilitamiento sindical y fragmentación social. La territorialización de las clases populares se veía como un momento “defensivo”, asociada al “clientelismo” o a modalidades de acción colectiva ancladas en los barrios (Auyero, 2001; Merklen, 1991). En un contexto marcado por la “sorpresa” posterior a los hechos de diciembre de 2001, muchas investigaciones académicas destacaron la productividad política de grupos definidos estatalmente como pobres (Svampa y Pereyra, 2003; Merklen, 2005). La visión reduccionista de la pobreza fue cuestionada en dos aspectos complementarios: el que asocia la escasez material con la miseria ontológica, axiológica y política (al estilo de “pobres, sucios y malos”); y el que, desconociendo lógicas propias en la subordinación, estudia el mundo popular con la normatividad de los dominantes (desde una democracia liberal de manual, las formas políticas populares son criticadas como “clientelismo”). Entre otros, Merklen (2005) discutió con los análisis que concibieron a las clases populares como heterónomas y vieron sus movilizaciones como anomia, espontaneidad o simple violencia, evidenciando un supuesto clave de dichas miradas: la separación entre política y sociedad, heredada del institucionalismo de la transición democrática. Pero, si bien luego de 2001 los análisis se apartaron críticamente de las miradas descalificadoras, estas investigaciones han continuado muchas veces el recorte de la década anterior: aunque se miraba de forma no reduccionista la pobreza, lo popular se reducía a la pobreza. Este sesgo pudo

revisarse durante la última década, a lo largo de un proceso en que otros actores se fortalecían y recobraban protagonismo público.

Así, se fue forjando una perspectiva que discute el punto de vista normativo que oscila entre la esperanza frente a formas de integración popular a su juicio virtuosas (muchas veces asociadas a lo novedoso) y la desilusión posterior que conduce a descripciones implícitamente condenatorias (los sectores populares viven en la violencia, la manipulación y la carencia de categorías y previsiones propias). Desde esa perspectiva crítica de la oscilación, asumimos que los diversos segmentos de los sectores populares atravesaron y actuaron en los últimos lustros en un proceso en que la diversidad estructural referida en la primera parte se combinó con intensos y heterogéneos procesos de territorialización, estatalización y sindicalización que describiremos a continuación.

Este recorrido permitirá volver sobre la presencia del Estado y la política en la construcción de las posiciones del mundo popular. A partir de acciones colectivas, corrientes electorales y generación de políticas públicas, los sectores populares contribuyeron a dinamizar una serie de “efectos políticos” que, concretados en la institucionalización de derechos, las transferencias económicas y otras acciones estatales, han actuado sobre la posición “estructural” de los sectores populares.

LA TERRITORIALIZACIÓN

Históricamente, la relación entre los sectores populares y la política ha estado caracterizada por la centralidad de los sindicatos y la relación privilegiada de las clases populares con el peronismo. Esta configuración se vio trastocada desde el retorno de la democracia, entre otras razones por los cambios en la estructura social y la caída primero del empleo industrial y luego del conjunto de las categorías de empleo. Tal como sistematiza Merklen (2005), las investigaciones daban cuenta de un movimiento de largo plazo que implicaba la territorialización de la politicidad de las clases populares, vinculada al proceso de desafiliación del mundo del trabajo en el marco de una reconfiguración del régimen de acumulación capitalista. Las tradiciones sindicales y políticas eran reapropiadas a partir de redes locales de movilización colectiva y gestión de recursos estatales orientados a la “pobreza”. En la década del noventa este proceso se combinó con la reformulación de las políticas públicas asistenciales hacia modalidades descentralizadas y focalizadas territorialmente luego de la reforma estatal. Hoy en día, la hipótesis formulada por Merklen puede ser revisada a la luz de la continuidad relativa de la territorialización en concurrencia con la diversificación de las políticas públicas que habilitaron la estatalización y la renovada centralidad de los sindicatos.

Durante los “tiempos extraordinarios” posteriores a diciembre de 2001, esta territorialización se desplegó en relación con la masificación de los subsidios a los

desocupados:⁷ En el GBA, Cerrutti y Grimson (2004) corregían la percepción de un desierto organizacional apuntada en los años noventa por la de una “selva organizacional” recién percibida luego de 2001. Los “lentes” de los investigadores, en cuanto asumieron categorías desacreditadoras de la política popular durante los noventa, les impidieron percibir lo que se estaba gestando y entonces, destacaron la “novedad” (Nardacchione, Rinesi y Vommaro, 2007). En este proceso, comprobado por diversos estudios de caso, la estatalización y la territorialización se entrelazaron de diversos modos. Las organizaciones crecieron en relación con los planes del Estado pero, a la vez, los planes se desplegaron territorialmente a partir de un proceso social de elaboración de la desocupación como problema público. Es decir, la demanda de subsidios fue producida a través del trabajo de referentes territoriales que vincularon a los pobladores con las agencias estatales: censaron a sus vecinos para demostrar la desocupación a los funcionarios y fundamentar su reclamo, recorrieron las casas para completar los listados de potenciales beneficiarios, presentaron la documentación requerida y organizaron cortes de ruta y otras movilizaciones colectivas para obtener una respuesta estatal (Manzano, 2013). La masificación de las políticas públicas asistenciales también impactó sobre las dinámicas internas de las organizaciones: no solo se crearon áreas especializadas en la “administración” y se modificó la división del trabajo, sino que también se establecieron reglas internas para merecer los subsidios (Fasano, 2004; Ferraudi Curto, 2006; Manzano, 2013; Quirós, 2006). Ahora bien, aunque las organizaciones piqueteras fueron los actores más renombrados, el 90% de los planes se gestionó a través de redes políticas gubernamentales que también habían tornado al territorio el centro de la acción política (Svampa y Pereyra, 2003). Análisis posteriores resaltaron la convivencia entre “peronistas” y “piqueteros” en los barrios de la periferia de Buenos Aires más como flujo entre momentos que como espacios orgánicamente escindidos y políticamente contrapuestos (Colabella, 2009; Ferraudi Curto, 2006; Quirós, 2006, 2011). Mientras que los referentes competían entre sí buscando diferenciarse, los receptores percibían a las organizaciones como semejantes y sus propias pertenencias se vinculaban a las redes de parentesco y vecindad, a los bienes

⁷ Implementados desde mediados de los años noventa, los subsidios implicaban una suma monetaria mensual para el jefe de hogar desocupado a cambio de cumplir el calendario vacunatorio y la escolarización obligatoria de sus hijos, y realizar una contraprestación laboral. Inicialmente, la contraprestación debía ser efectuada en los obradores municipales. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, las organizaciones de desocupados pudieron constituirse como sede de la contraprestación (como un intento de menguar el poder territorial de las “redes clientelares” del Partido Justicialista). En 2002, el gobierno provisional de Duhalde lanzó el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que, a diferencia de los anteriores, pretendía la universalización del subsidio (como un intento de responder a las críticas por “clientelismo” en la distribución de los fondos). Aunque la cobertura se decuplicó, nunca alcanzó a universalizarse (Svampa y Pereyra, 2003).

que circulaban (planes, mercadería, etcétera) y a las obligaciones correspondientes (movilizaciones, contraprestación). Así prevalecieron las relaciones personalizadas con los referentes en cuanto “vecinos”, más que como funcionarios estatales o miembros de una organización (Colabella, 2009: 220).

La situación se redefine luego del “cierre de los tiempos extraordinarios” (Svampa, 2005: 272). La “normalización” presentó dos caras: por un lado, las protestas resultaron crecientemente deslegitimadas (y en ocasiones criminalizadas), mientras la categoría de “piquetero” fue objeto de descrédito público; por otro lado, un gobierno inicialmente débil buscó apoyo en diversos tejidos de movilización colectiva, entre los cuales las organizaciones territoriales vinculadas al imaginario nacional-popular ocuparon un lugar destacado. Algunas organizaciones se “replegaron” hacia la realización de “emprendimientos” culturales y productivos en sus respectivas sedes locales, incorporando saberes diferenciales asociados a las nuevas modalidades de las políticas públicas. Como muestra Pinedo (2009), las dificultades enfrentadas condujeron a la diversificación de las redes políticas y a la diferenciación interna (entre quienes llevaban adelante un “productivo” y quienes recibían un “plan”, por ejemplo). Otras organizaciones, en cambio, aspiraron a incidir en la definición de las políticas públicas. En diversas instancias, las agencias estatales incorporaron a algunos referentes forjados en los procesos de organización territorial para la gestión de las políticas públicas asistenciales. Si bien el gobierno de Néstor Kirchner privilegió modalidades centralizadas, la multiplicación de las políticas públicas asistenciales también dispuso recursos para organizaciones territoriales (Plan Manos a la Obra, Plan de Emergencia Habitacional, Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos, Plan Argentina Trabaja). Estas formas de estatalización barrial fueron apropiadas por los actores involucrados, lo cual dio lugar a formas específicas de “barrialización” del Estado. Esto puede verse ejemplificado por los modos en que se dio la urbanización de la villa considerada “emblema” de las políticas habitacionales, en La Matanza (GBA). Allí, no solo los miembros centrales de la organización barrial se incorporaron en la gestión municipal del programa, sino que su concreción local llevó a una redefinición de los “derechos” asociada a los sentidos locales de la propiedad y la familia a partir de una combinación creativa de las políticas públicas vigentes (Ferraudi Curto, 2014).

En diferentes zonas del país se dieron procesos específicos, dada la centralidad del territorio como locus de articulación política y social. Las protestas en las localidades “ypefianas” de Neuquén y Salta descritas por Svampa y Pereyra (2003) dan cuenta de las consecuencias críticas de la privatización de la petrolera. Entre sus singularidades, se destaca la emergencia de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) Mosconi, que reemplaza al municipio en la gestión de los planes desde el año 2000 y desarrolla obras públicas de alto impacto comunitario al combinar recursos estatales nacionales y provinciales. Según Wahren (2012), la UTD no solo puede verse como un “sindicato” de trabajadores desocupados o un “municipio” paralelo,

sino también como una “YPF” paralela. A la vez, sus reclamos se actualizaron a lo largo de la década, comprendiendo también la denuncia de los modos de explotación de los recursos naturales asociados a la reconversión tecnológica en el agro y en la industria extractiva. Según Álvarez Leguizamón (2011), en Salta prevalece un modelo productivo concentrado que empobrece a las clases populares locales (y especialmente a la población wichí), generando incluso problemas de desnutrición. Aquí las disputas se dan en torno de la explicación del problema: mientras que el gobierno provincial aduce diferencias “culturales”, los referentes de los grupos afectados luchan porque se reconozcan las causas socioeconómicas de la hambruna y el Estado responda a sus reclamos por territorio.

Otro modo peculiar en que la producción petrolera ha incidido en los modos de politización de las clases populares puede registrarse en Comodoro Rivadavia. Durante un proceso de expansión vertiginosa de la población urbana, las tomas de tierra cobraron centralidad como forma de producir hábitat, especialmente en 2005 y en 2008-2009. Si bien retomaron una tradicional modalidad de hacer ciudad en Comodoro, los asentamientos producidos en la última década sufrieron un proceso de estigmatización que los diferenció de los anteriores. Se pasó de un discurso que valoraba a quienes migraban para “poblar la Patagonia” a considerar a los asentados como “usurpadores” e “ilegales” (Bachiller, 2016).

En Córdoba, se destacan las políticas habitacionales provinciales que, desde fines de los años noventa, impactaron en una relocalización de las clases populares de la ciudad capital hacia la periferia. El segundo gobierno de Eduardo Angeloz (1991-1995) había establecido mecanismos institucionales de negociación con las organizaciones territoriales que sus sucesores, en el contexto de la crisis fiscal del Estado provincial, tendieron a desarticular, pasando del ajuste a la centralización en la toma de decisiones (Avalle e Ibáñez Mestres, 2011). A diferencia de lo sucedido luego de la crisis de 2001 a nivel nacional, aquí el contexto de “emergencia social” implicó un cierre de oportunidades para las organizaciones populares. Así, las políticas habitacionales se desplegaron a espaldas de los beneficiarios. Y si bien implicaron una potencial mejora en términos de las condiciones de vida, el desplazamiento generó segregación y distancia respecto de servicios y oportunidades laborales, así como un incremento de las barreras policiales para el acceso al centro de la ciudad. Desde los barrios populares, la visión securitaria se tradujo en reclamos por las muertes de jóvenes (Bermúdez, 2010). A la vez, la marcada fractura social se vio expuesta con violencia durante los saqueos que tuvieron lugar en la ciudad en el marco del acuartelamiento policial en reclamo de mejoras salariales, en diciembre de 2013 (Pereyra y Semán, 2015).

En Santiago del Estero, para rastrear los modos de politización en un barrio popular Vommaro (2006) halló una trama organizativa tejida sobre vínculos personalizados y sostenida a través de políticas asistenciales pero, a diferencia de lo descrito en Buenos Aires, previa a la masificación de los planes sociales en el marco

de una cultura política provincial marcada por la figura de Juárez que, como muestra Farinetti (2012), configuraba un modo de ejercicio del poder patrimonialista que subordinaba a las clases medias y populares bajo la imagen todopoderosa del líder.

Finalmente, la continuidad de la territorialización de la política popular a lo largo de las últimas décadas ha mostrado variaciones significativas. En general, el tejido organizacional local se densificó, a veces diversificándose y a veces de manera concentrada, en relación con los cambios en los vínculos con diferentes agencias estatales. Además, las políticas públicas asistenciales se multiplicaron después de 2001: primero continuaron con los mecanismos descentralizados y focalizados de los años noventa y luego se recentralizaron, pero persistieron mecanismos focalizados de intervención. Estos procesos mostraron modalidades específicas en relación con las economías regionales y los entramados políticos locales.

LA ESTATALIZACIÓN

De forma simultánea y hasta cierto punto convergente con lo anterior, se dio un proceso de centralización estatal que combinó un impulso a la reactivación económica, una ampliación de los derechos y una multiplicación de las políticas públicas asistenciales de diverso tipo (D'Amico, 2014; Massetti, 2011). Así, la estatalización, combinada con la territorialización y la sindicalización, creó vínculos que inciden en las características de los sectores populares.

Los años noventa se habían caracterizado por la descentralización y focalización de las políticas públicas orientadas a la “pobreza” mientras se “flexibilizaban” las leyes laborales en un contexto de retracción del empleo y debilitamiento de los sindicatos. Los acontecimientos de diciembre de 2001 marcaron un quiebre en la situación: la intensificación de movilizaciones colectivas cuestionaron el papel del Estado e impulsaron una ampliación del alcance de las políticas públicas asistenciales, lo que reconfiguró diversos tejidos organizacionales territoriales. Posteriormente, en el marco de la reactivación económica, las políticas públicas orientadas al bienestar mostraron dos variantes diferenciadas: por un lado, se buscó fortalecer y ampliar el sector de trabajadores formales (algo que mencionamos y describimos antes) y, por otro, se procuró centralizar la política pública asistencial mientras se multiplicaron y diversificaron los programas orientados a los sectores “vulnerables”.

En sus inicios, el gobierno kirchnerista no solo intentó reconfigurar los subsidios a los desocupados, sino que también impulsó una reorientación de la política pública en torno del Ministerio de Planificación Federal, a través de dos herramientas: la obra pública y las políticas habitacionales. Luego de 2008, se lanzaron la Asignación Universal por Hijo (AUH, que universaliza la política de transferencia condicionada de ingresos en 2009) y otras políticas que implicaron transferencias monetarias y estímulos a la demanda agregada, especialmente el consumo popular (entre las que se destaca la reestatización de las Administradoras

de Fondos y Jubilaciones –AFJP–). Asimismo, el plan Procrear apuntó específicamente a la demanda de vivienda.

Así como los inicios del gobierno kirchnerista pueden comprenderse a la luz de diciembre de 2001, los giros posteriores pueden verse como respuesta a dos cuestiones: por un lado, la crisis económica internacional, iniciada en Estados Unidos en 2008 con la caída de las *subprime*; por otro, la derrota electoral del kirchnerismo en 2009 luego del conflicto con los productores agropecuarios, y una redefinición de las alianzas sociales y políticas del gobierno. Pero más allá de los hechos que disparan las mencionadas políticas, lo cierto es que crean diferentes escenarios de convergencia entre los sectores populares y el Estado, y esto a su vez repercute sobre las condiciones estructurales que definen a estos sectores. A continuación, describiremos más detenidamente estos diferentes escenarios.

En sus primeros años, el gobierno kirchnerista dio un fuerte incentivo a la construcción de vivienda social y a las obras públicas a través del Ministerio de Planificación Federal. Dicha cartera, creada un día antes de la asunción de Néstor Kirchner en 2003, fue cobrando creciente protagonismo a lo largo de su mandato. Esto implicaba un rol diferente del Estado. No solo se trataba de asistir a la pobreza, sino también de reactivar la economía. La cuestión atendía a las zonas desfavorecidas y también al sector de la construcción y sus derivados. En este contexto, los programas federales fueron claves. Aquí se nuclearon diferentes iniciativas (con diversos dispositivos de implementación). Sin embargo, el eje se configuró en torno del Programa Federal de Construcción de Viviendas, que dispuso del 70% de los recursos y dio cuenta de un giro “recentralizador” de las políticas habitacionales (Rodríguez y otros, 2007). Implementado a través de empresas, este programa repercutió sobre las tramas organizacionales territoriales en términos de sus consecuencias no buscadas: la multiplicación de las tomas de tierras como acciones colectivas en reclamo de ser incluidos en las listas de adjudicatarios (Lozano, 2012; Cravino, 2014). La ocupación del Parque Indoamericano, ocurrida en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2010, puede comprenderse como parte de estos procesos. A la vez, tendió a constituir barrios segregados alejados de los centros urbanos en un contexto en que la recuperación económica (y estas mismas políticas públicas) favorecieron un incremento significativo en el valor del suelo urbano (Del Río, 2012), contribuyendo a la metropolitanización que describimos más arriba. Paralelamente, otros programas de menor alcance (como el Programa de Emergencia Habitacional y el programa de urbanización de villas y asentamientos) se constituyeron en relación con las tramas organizativas territoriales, ya sea operando a través de las facciones (Moreno, 2012) o propiciando la concentración de poder local en torno de una organización central entramada en la administración pública (Ferraudi Curto, 2014). De este modo, las políticas habitacionales brindan un ejemplo de los variados modos en que diferentes segmentos de los sectores populares se vincularon con el Estado: sufrieron procesos de segregación residencial, fueron catalogados como beneficiarios

de políticas públicas asistenciales, se movilizaron para reclamar su inclusión en los programas, articularon diferentes tramas organizativas en respuesta a las políticas estatales y trabajaron en la reconfiguración de viejos barrios o en la construcción de nuevos a lo largo de los años.

Simultáneamente, el gobierno nacional articuló otras estrategias para responder a la crisis de 2001. Marcado por una débil legitimidad de origen, buscó alianzas con diferentes actores movilizados y redefinió las políticas asistenciales. Las organizaciones territoriales más o menos afines se incorporaron en diversas áreas de la administración estatal central. Sus conocimientos “en terreno” fueron valorados como forma de fortalecer a un Estado que buscaba recobrar legitimidad luego de la crisis y “bajar” hacia la población (Perelmiter, 2011). En este contexto, la convivencia de las organizaciones “en el territorio” actualizaba tensiones respecto de las trayectorias previas, los calendarios de movilización y los mecanismos de distribución de recursos, mostrando las complejidades del tejido político oficialista (Colabella, 2009).

A la vez, desde el gobierno nacional se buscó reorganizar el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJHD), lanzando otros programas orientados hacia poblaciones específicas y modificando las reglas y los criterios de adjudicación: la diferencia clave se constituyó entre los “empleables” –en especial, jóvenes– y los “no empleables” –en general, mujeres con hijos a cargo y adultos mayores– (D’Amico, 2010). En términos generales, estas políticas, junto con la estigmatización de las protestas, tendieron a la desmovilización de los actores contenciosos, mientras las políticas de transferencia condicionada de ingresos orientadas a formas más individualizadas de relación con la población debilitaban las mediaciones organizacionales.

La redefinición de la política asistencial se acentuó a partir de la AUH, en 2009. Esta se apartó de una definición focalizada de la pobreza para asociarse a la seguridad social emanada del trabajo: al plantearla como derecho derivado de las asignaciones familiares de los trabajadores formales para incluir a quienes no estaban registrados (fueran trabajadores informales o desocupados) y disponer controles respecto de las condicionalidades de educación y salud que la diferenciaron de las asignaciones familiares percibidas a través del régimen contributivo (Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013). Esta política condujo a la reconfiguración de un dispositivo institucional históricamente asociado a la ANSES: se redefinieron horarios, espacios y tareas de los agentes estatales, dando lugar a formas específicas de ciudadanía entre las receptoras (D’Amico, 2016). Según datos oficiales de 2014, la AUH cubría a cerca de tres millones y medio de niños (y alrededor de 1.800.000 titulares) (Anses, 2014). Mientras que la AUH implicó formas individualizadas de gestionar el acceso y la continuidad de la cobertura, las organizaciones territoriales desplegaron estrategias locales orientadas a la captación de recursos (el Plan Argentina Trabaja, implementado desde 2009, fue especialmente importante) y se generaron momentos

de incertidumbre y redefinición del valor asignado a las diferentes actividades comprendidas en el trabajo de mediación y en la militancia (Pinedo, 2009; D'Amico, 2010; Ferraudi Curto, 2011).

LA SINDICALIZACIÓN

Así como las organizaciones territoriales cobraron centralidad en torno de diciembre de 2001, a medida que se produjo la recuperación económica y el nuevo gobierno buscó superar su inicial debilidad a través de una pluralización de los apoyos, las organizaciones territoriales y los sindicatos se disputaron el protagonismo en la escena pública y se incorporaron en diferentes funciones de gobierno (Pérez y Natalucci, 2010; Sidicaro, 2011).

Mientras que en los años noventa se registró el debilitamiento del universo sindical, después de 2001 resurgen los conflictos sindicales, lo que algunos autores llamaron “revitalización sindical” (Senén González, 2013), asociados a la reactivación económica y a la institucionalización de los convenios colectivos por parte del Ministerio de Trabajo. Incluso en ramas en las que predominan las condiciones de trabajo precarias emergen (dificultosamente) actores movilizados. A la vez, la importancia de los sindicatos no se limitó al conflicto laboral: la Confederación General del Trabajo (CGT) constituyó un apoyo clave para el gobierno nacional hasta su ruptura en 2012.

Catalogado como “neocorporativismo segmentario”, el modelo sindical de los primeros años del kirchnerismo se distingue tanto del modelo peronista clásico como del europeo reciente. Dos rasgos lo caracterizan: 1) aquí el sindicalismo logró revitalizarse manteniéndose como representante de la clase obrera estable, una fracción relativamente pequeña de las clases populares luego de la reconfiguración socioeconómica iniciada en los años setenta, bajo el liderazgo del sindicato de camioneros encabezado por Hugo Moyano; 2) este sindicalismo muestra una autonomía significativa respecto del Estado, lo cual da lugar a negociaciones colectivas favorables dentro de los límites del acuerdo entre partes (Etchemendy y Collier, 2008). Como ya hemos indicado, estas acciones impactan sobre la posición estructural de los sectores sindicados, de modo tal que algunos autores refieren a una suerte de “movilidad social colectiva” (Palomino y Dalle, 2012). Sin embargo, esta fortaleza se manifiesta acotada a nivel de la representación sectorial una vez que se produce la ruptura en la alianza con el gobierno, y Moyano intenta “saltar a la política” (Natalucci, 2013). Su éxito corporativo se traduce en un magro resultado electoral.

Las posibilidades y los límites de los procesos de sindicalización también se observan en otras ramas. Por un lado, las estructuras más anquilosadas resultan desafiadas por intentos de organización radicalizada en sectores industriales y de servicios (Varela, 2014). Por otro lado, emergen modos de politización situados

que, dificultosamente, introducen otras modalidades de acción colectiva. Como muestra Abal Medina (2014), el ejemplo de las grandes cadenas de supermercados es ilustrador. Sus trabajadores están comprendidos dentro del sindicato que hoy concentra el mayor número de trabajadores de la estructura gremial argentina, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). Desde los años noventa, este sindicato, liderado por Armando Cavalieri, se ha destacado por un estilo de conducción próximo al “nuevo sindicalismo” que sostiene valores de modernización, globalización y eficiencia. Asociado a la tercerización y flexibilización laboral, en las grandes cadenas de supermercado el sindicato representa a una fracción de los trabajadores, los “convencionados” (y especialmente a los “afiliados”). Al mismo tiempo, los modos de politización varían según las empresas. En la cadena de supermercados Coto, un estilo empresarial personalista se combina con un sindicato gestor de servicios. Las escasas protestas solo comprometen a los delegados, mientras los trabajadores ni siquiera son informados. En Walmart, en cambio, la estrategia empresarial ha buscado inhibir toda organización sindical. Solo en una sucursal hay delegados. Solo allí se desarrolló en 2007 un proceso de politización a partir de la emergencia de un grupo de delegados que ensayaba modalidades singulares de protesta: *smileys* tristes (emulando el logo del hipermercado) y sobre todo disputas en torno de los turnos de trabajo y el sistema de pagos. De este modo, es posible dar cuenta de formas específicas de politización que muestran los límites de la fortaleza sindical cuando se aparta la mirada de los sectores más estables.

Sin embargo, las experiencias son variadas, dependiendo de las condiciones específicas de cada rama productiva, así como de la historia política de los gremios. Una alternativa de organización relativamente exitosa se forjó en la seccional La Plata de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) (Farace, 2014). A fines de los noventa, un nuevo liderazgo se edificó cuestionando la inestabilidad propia del sector de la construcción. Si bien la seccional fue intervenida hasta 2004 (y el dirigente encarcelado durante 2001), desde entonces su liderazgo se reforzó al ganar las elecciones internas. Una serie de dispositivos innovadores se implementaron: una bolsa de trabajo (para los momentos de desocupación) y formas de “ayuda social” tanto para los propios trabajadores como para habitantes de barrios postergados de su zona de influencia. De este modo, es posible observar respuestas singulares frente a condiciones específicas del sector y, a la vez, una concepción de la representación que excede los límites corporativos, dando cuenta de cómo se actualiza una concepción de los sectores populares en las prácticas de los propios actores.

Por último, la experiencia de la agrupación Túpac Amaru resulta interesante para mostrar algunas interrelaciones entre los tres procesos de politización que hemos analizado aquí. Desde 2003 hasta 2015, en Jujuy la organización de los sectores informales ha sido hegemonizada por la Túpac Amaru a partir de una alianza cada vez más estrecha con el gobierno nacional. Originada por militantes del sindicato

estatal como movimiento de desocupados dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) a fines de los años noventa, esta organización liderada por Milagro Sala se ha consolidado no solo como gestora de programas habitacionales, planes y comedores, sino también como cabeza de una red de organizaciones de los sectores informales en Jujuy. Más aún, ha logrado desarrollar servicios similares a los de un sindicato (obra social, club, escuelas) a la vez que era reconocida por los gobiernos municipal y provincial en el diseño e implementación de políticas públicas. Sin embargo, a diferencia de un sindicato, su poderío estaba fuertemente atado a los vínculos con el gobierno nacional (Battezzati, 2012). Este límite se vio con claridad una vez que la alianza PRO-UCR ganó las elecciones ejecutivas tanto a nivel nacional como provincial: en enero de 2016, Milagro Sala fue encarcelada en un procedimiento jurídicamente irregular, luego del cual la organización sufrió un proceso de estigmatización y vaciamiento violento.

La territorialización, la estatalización y la sindicalización no se suceden en el tiempo en términos lineales sino que conviven y se combinan de diferentes maneras, ya sea confluyendo o disputando. En principio, esto está asociado a la herencia de un modelo sindical fuerte que no solo se ha actualizado prácticamente, sino que opera como horizonte rememorado en otras prácticas de organización colectiva. Además, las diferentes modalidades de politización se entrelazan con regulaciones, agencias, proyectos y recursos estatales. Si en los años noventa el accionar estatal se orientó a desregular los espacios laborales y a focalizar y descentralizar las políticas públicas, lo cual favoreció los procesos de territorialización, en la década de 2000 la ampliación y diversificación estatal se vinculó también con un fortalecimiento de variados tejidos organizacionales, en ocasiones asociados a las redes políticas gubernamentales, así como al reconocimiento de ciertos derechos. Es decir, los dispositivos estatales resultan centrales respecto de la circulación de recursos y de legitimaciones, ya sea en términos de la definición de las demandas válidas, del reconocimiento de las organizaciones o de la democratización de derechos. En las luchas en torno de estas definiciones, los sectores populares actúan sobre sus condiciones “estructurales”.

REFLEXIONES FINALES

La multiplicidad de los modos de politización popular es concomitante con la diversificación que notamos en las dinámicas que producen la situación estructural de estas clases. Todo sucede como si recién en torno del 2001 los modos de politización popular hubieran terminado de procesar las transformaciones estructurales iniciadas en los años setenta. Desde las modalidades de movilización hasta las formas de apropiación de las políticas públicas asistenciales, pasando por las relaciones con el gobierno, es posible reconocer un aprendizaje sobre el funcionamiento de esta democracia y las condiciones sociales en que se realiza.

Se puede notar un núcleo de organizaciones (y demandas) que marcan (y quizá profundizan) la fractura entre los establecidos y los marginales. Ya sea que nos refiramos a los modos de politización en las grandes cadenas de supermercado o a las demandas contra el impuesto a las ganancias en los paros nacionales convocados por la CGT a fines del ciclo kirchnerista, se observa la heterogeneidad de las clases populares que se produce tanto en el plano sociodemográfico como en el de la agregación sociopolítica. Pero estas tendencias conviven con otras de diferente signo y fuerza. Especialmente, se verifica una pluralidad de modalidades de acción política asociada a las condiciones específicas de diferentes configuraciones territoriales, ámbitos productivos y dispositivos estatales. Es decir, cabría marcar algunos matices en la hipótesis de la heterogeneidad estructural a partir de los procesos de politización por varias razones. Primero, porque quizá la mayor informalidad de los vínculos esté atravesando diferentes manifestaciones. Segundo, porque las articulaciones políticas tienden a sobrepasar las barreras sociales, en cuanto aspiran a incidir en las decisiones de gobierno. Tercero, porque la pluralidad de modalidades de politización hacen también a los vaivenes sociales observados al analizar a los sectores populares en términos estructurales.

Resulta abusivo confundir la modestia e incluso la estrechez de los segmentos de empleo e ingreso más bajo con “la pobreza” y aplicar a todo el conjunto el sello de “marginalidad”. Es indudable que el desarrollo del capitalismo en la Argentina no ha conducido a una convergencia de los niveles de bienestar y desarrollo. Pero homogeneizarlo todo bajo la imagen de la negatividad de lo que se esperaba es desconocer la especificidad de su heterogeneidad y que las posiciones sociales en el mundo popular se revelan como un complejo abigarrado de trayectorias ocupacionales de los sujetos, de dinámicas de inversión y acumulación capitalista, pero también de lazos políticos creados por los más diversos activismos de grupos y del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

- Abal Medina, Paula (2014). *Ser sólo un número más. Trabajadores jóvenes, grandes empresas y activismos sindicales en la Argentina actual*. Buenos Aires: Biblos.
- Álvarez Leguizamón, Sonia (2011). “Neocolonialismo, hambre y agronegocios de la soja transgénica (Salta, Argentina)”. En Cebrelli, Alejandra y Arancibia, Víctor (eds.), *Luchas y transformaciones sociales en Salta*. Salta: Cipeh.
- ANSES (2014). “Asignación universal por hijo para la protección social”. *Boletín cuatrimestral*, I Cuatrimestre, Buenos Aires.
- Asiain, Andrés (2015). *Pobreza e indigencia: Argentina 2013-2014*. Buenos Aires: Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.

- Auyero, Javier (2001). *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*. Buenos Aires: Manantial.
- Avalle, Gerardo e Ibáñez Mestres, Gonzalo (2011). “Gestionar, concertar o decretar la provisión de viviendas en Córdoba. Análisis de los actores en el gobierno de lo habitacional”. En Núñez Ana y Ciuffolini, Alejandra (comps.), *Política y territorialidad en tres ciudades argentinas*. Buenos Aires: El colectivo.
- Axt, Verónica; Contartese, Daniel; Mazorra, Ximena y Schachtel, Lila (2008). *Boletín de Estadísticas Laborales*. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Bachiller, Santiago (2016). “Petróleo, dificultades de acceso al suelo urbano y tomas de tierras: un problema recurrente en la historia comodorense”. *Identidades*, vol. 6, n° 3, pp. 71-87.
- Barrera, Mariano; Fernández, Ana y Manzanelli, Pablo (2013). *Trabajo y pobreza: virtudes y desafíos de la posconvertibilidad*. Buenos Aires: CIFRA.
- Battezzati, Santiago (2012). “La Túpac Amaru: intermediación de intereses de los sectores populares informales en la provincia de Jujuy”. *Desarrollo Económico*, vol. 52, n° 205, pp. 147-171.
- Beccaria, Luis (2007). “Pobreza”, *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX*, t. II. Buenos Aires: Edhasa.
- Beccaria, Luis y Maurizio, Roxana (2012). “Reversión y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina, 1990-2010”. *Desarrollo Económico*, vol. 52, n° 206, pp. 205-258.
- Benza, Gabriela (2016). “La estructura de clases argentina durante la década 2003-2013”. En Kessler, Gabriel (comp.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura social*. Buenos Aires: OSDE-Siglo XXI.
- Bermúdez, Natalia (2010). *Y los muertos no mueren... Una etnografía sobre clasificaciones, valoraciones morales y prácticas en torno a muertes violentas (Córdoba, Argentina)*. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, IDES-Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires.
- CELS (2013). “Vivienda adecuada y déficit habitacional. Intervenciones complejas y necesarias”. En *Derechos humanos en Argentina. Informe 2013*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Cerrutti, Marcela y Grimson, Alejandro (2004). “Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares”. *Cuadernos del IDES*, n° 5, Buenos Aires.

- Colabella, Laura (2009). *“Fazer política oulutar pelo social”. Uma etnografia sobre formas de redistribuição na Grande Buenos Aires*. Tesis de doctorado, PPGAS-Museu National-UFRJ, Río de Janeiro.
- Cravino, Cristina (2014). *Derecho a la ciudad y conflictos urbanos. La ocupación del Parque Indoamericano*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Cruces, Guillermo y Gasparini, Leonardo (2009). “Desigualdad en la Argentina. Una revisión de la evidencia empírica I”. *Desarrollo Económico*, vol. 48, n° 192, pp. 395-437.
- Dalle, Pablo (2012). “Cambios recientes en la estratificación social en Argentina (2003-2011). Inflexiones y dinámicas emergentes de movilidad social”. *Argumentos. Revista de Crítica Social*, 14 de octubre.
- D’Amico, Victoria (2010). *La recreación del orden social desde la cotidianeidad y sus múltiples temporalidades. Estatalidad, subalternidad y experiencia política en un espacio de organización local*. Tesis de maestría en Ciencias Sociales IDES-Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.
- (2014). “Las transiciones de la definición de la cuestión social argentina: de la pobreza a la desigualdad. Discursos regionales, diagnósticos e intervenciones locales”. En Taller AEPL-UNLP, La Plata, mayo, mimeo.
- (2016). “Tramitación de la AUH en la ANSES de La Plata. Las prácticas de vinculación de los sectores populares con el Estado desde la experiencia situada”. IX Jornadas de Sociología de la UNLP, Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ensenada, 5, 6 y 7 de diciembre.
- Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2016). “Salir a comprar. El consumo y la estructura social en la Argentina reciente”. En Kessler, Gabriel (comp.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura social*. Buenos Aires: OSDE-Siglo XXI.
- Del Río, Juan Pablo (2012). *El lugar de la vivienda social en la ciudad. Un análisis de la política habitacional desde el mercado de localizaciones intra-urbanas y las trayectorias residenciales de los habitantes*. Tesis de Doctorado en Geografía, FAHCE/UNLP, La Plata.
- Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth (2008). “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina”. *PostData*, n° 13, pp. 145-192.
- Farace, Rafael (2014). “Sindicalismo y relaciones de intercambio entre los obreros de la construcción”. *Kula*, n° 11, pp. 7-23.
- Farinetti, Marina (2012). *La trama del juarismo. Política y dominación en Santiago del Estero, 1983-2004*. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires.

- Fasano, Patricia (2004). *“De boca en boca”: Etnografía sobre la productividad social del chisme entre pobres urbanos de Paraná (Entre Ríos)*. Tesis de maestría en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones.
- Ferraudi Curto, Cecilia (2006). *Mientras tanto: política y modo de vida en una organización piquetera*. Tesis de maestría en Antropología Social, IDES-IDAES/UNSAM, Buenos Aires.
- (2011). “(Des)encuentros en torno de los sentidos de la política: devolución de la tesis en una organización piquetera”. *Nueva Antropología*, vol. XXIV, n° 75, pp. 111-134.
- (2014). *Ni punteros ni piqueteros. Urbanización y política en una villa del conurbano*. Buenos Aires: Gorla.
- Frederic, Sabina (2004). *Buenos vecinos, malos políticos: moralidad y política en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.
- Graña, Juan y Kennedy, Damián (2010). “Distribución funcional del ingreso, salario real y productividad en Argentina en perspectiva latinoamericana. Desde mediados de los setenta hasta la actualidad”. IV Congreso ALAP “Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en Latinoamérica”, La Habana, 16-19 de noviembre.
- Jacinto, Claudia y Millenaar, Verónica (2012). “Los nuevos saberes para la inserción laboral. Formación para el trabajo con jóvenes vulnerables en Argentina”. *RMIE*, vol. 17, n° 52, pp. 141-166.
- Kessler, Gabriel (2003). “Contextos variables, categorías estables y nociones divergentes. Reflexiones sobre la investigación de la cuestión social en la Argentina de los noventa”. *Cahiers des Amériques Latines*, n° 43.
- (2014). *Controversias sobre la desigualdad, Argentina 2003-2013*. Buenos Aires Fondo de Cultura Económica.
- Lindenboim, Javier (2007). “La fuerza de trabajo en el siglo xx. Viejas y nuevas discusiones”. En Torrado, Susana (comp.), *Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX*, t. II. Buenos Aires: Edhasa.
- Lindenboim, Javier; Graña, Juan y Kennedy, Damián (2010). “Distribución funcional del ingreso, salario real y productividad en Argentina en perspectiva latinoamericana. Desde mediados de los setenta hasta la actualidad”. IV Congreso ALAP “Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en Latinoamérica”, La Habana, 16-19 de noviembre.
- Lozano, Luciano (2012). “La conformación de un asentamiento urbano. Diálogos y tensiones en la construcción de un cuaderno de servicio social”, mimeo.

- Manzano, Virginia (2013). *La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Prohistoria.
- Martuccelli, Danilo y Svampa, Maristella (1997). *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires: Losada.
- Massetti, Astor (2011). “Las tres transformaciones de la política pública asistencial y su relación con las organizaciones sociopolíticas (2003-2009)”. *Entramados y perspectivas. Revista de la carrera de sociología*, vol. 1, n° 1, pp. 9-36.
- Merklen, Denis (1991). *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro*. Buenos Aires: Catálogos.
- (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.
- Merlo, Claudia (2017). *¿Qué es trabajo? ¿Cómo, cuándo y para quién?* Tesina de grado, Licenciatura en Sociología, IDAES-UNSAM.
- Moreno, Viviana (2012). “La construcción del techo. El trabajo y las facciones políticas. Entramado relacional en la implementación del Programa de Emergencia Habitacional”. En Cravino, María Cristina (org.), *Construyendo barrios. Transformaciones socioterritoriales a partir de los Programas Federales de Vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2004-2009)*. Buenos Aires: CICCUS-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Natalucci, Ana (2012). “Revitalización sindical y sindicalismo peronista: encrucijadas entre el corporativismo y la política (Argentina, 2003-2012)”. *Les Cahiers ALHIM*, n° 26, pp. 1-10.
- Palomino, Héctor y Dalle, Pablo (2012). “El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de la Argentina: 2003-2011”. *Revista de Trabajo*, año 8, n° 10, pp. 205-223.
- Pautassi, Laura; Arcidiácono, Pilar y Straschnoy, Mora (2013). *La asignación universal por hijo para la protección social de la Argentina. Entre la satisfacción de necesidades y el reconocimiento de derechos*. CEPAL, Serie Políticas Sociales, n° 184, Santiago de Chile.
- Perelmiter, Luisina (2011). *La burocracia asistencial en funcionamiento. Relaciones y prácticas en la vida íntima del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina (2003-2009)*. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, FCS-UBA, Buenos Aires.
- Pereyra, Sebastián y Semán, Pablo (2017). “Los saqueos de diciembre 2013: violencia, protesta, desigualdad social”. En Di Meglio, Gabriel y Serulnikov, Sergio (ed.), *La larga historia de los saqueos en Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.

- Pérez, Germán y Natalucci, Ana (2010). “La matriz movimientista de acción colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista”. *América Latina Hoy*, n° 54, pp. 97-112.
- Pinedo, Jerónimo (2009). *Hacer lo que, por el momento, otros no pueden hacer: proyecto militante, prácticas de anclaje territorial, relaciones de interdependencia y noción de compromiso en un Movimiento de Trabajadores Desocupados*. Tesis de maestría en Ciencias Sociales, UNLP, La Plata.
- Prévôt-Schapira, Marie-France y Velut, Sébastien (2016). “El sistema urbano y la metropolización”. En Kessler, Gabriel (comp.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura social*. Buenos Aires: OSDE-Siglo XXI.
- Quirós, Julieta (2006). *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia.
- (2011). *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Rodríguez, Carla *et al.* (2007). “Producción social del hábitat y políticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires: historia con desencuentros”. *Documentos de trabajo n° 49*, Instituto de Investigaciones Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires.
- Rodríguez, María Graciela (2013). “Interrogar la desigualdad. Imágenes de los grupos subalternos en los medios de comunicación argentinos contemporáneos”. *Runa*, vol. XXXIV, n° 2, pp. 149-162.
- Salvia, Agustín; Poy, Santiago y Vera, Julieta (2015). “Política social, pobreza y desigualdad en la Argentina (1992-2012)”. Seminario internacional: temas de la política social en Argentina, México y Uruguay, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México.
- Segura, Ramiro (2015). “La imaginación geográfica sobre el Conurbano. Prensa, imágenes y territorio”. En Kessler, Gabriel (dir.), *El Gran Buenos Aires (Historia de la provincia de Buenos Aires, t. 6)*. Buenos Aires: UNIPE-Edhasa.
- Senén González, Cecilia (comp.) (2013). *La revitalización sindical en Argentina y sus heterogeneidades culturales*. Buenos Aires: Prometeo-UNLaM.
- Sidicaro, Ricardo (2011). “El partido peronista y los gobiernos kirchneristas”. *Nueva Sociedad*, n° 234, pp. 74-94.
- Svampa, Maristella (2005). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

Vommaro, Gabriel (2006). “‘Acá no conseguís nada si no estás en política’. Los sectores populares y la participación en espacios barriales de sociabilidad política”. *Anuario de Estudios en Antropología Social*, Centro de Antropología Social-IDES, Buenos Aires, pp. 161-177.

Wahren, Juan (2012). “Movimientos sociales y territorios en disputa. Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, Salta”. *Trabajo y Sociedad*, n° 19, pp. 133-147.

PARTE IV
EL MUNDO DE LA POLÍTICA

LOS HUÉRFANOS DE LA POLÍTICA DE PARTIDOS SOBRE LOS ALCANCES Y LA NATURALEZA DE LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN PARTIDARIA*

Juan Carlos Torre

INTRODUCCIÓN

Los porcentajes hasta entonces nunca alcanzados por los votos nulos, los votos en blanco y la tasa de abstención en las elecciones de octubre de 2001 han sido considerados por los observadores de la política argentina como la manifestación contundente del rechazo de los ciudadanos a los partidos. Visto en perspectiva, el contraste no pudo ser mayor con el entusiasta apoyo que acompañó a los partidos en los tramos iniciales de la transición a la democracia. El cuestionamiento, se ha indicado también, no alcanza a la democracia como régimen político, que sigue reteniendo el respaldo de la mayoría de la opinión ciudadana; más bien, está dirigido al desempeño de los partidos y sus dirigentes.

En estas notas sobre la crisis de la representación partidaria dos son los interrogantes que nos proponemos examinar. El primero, ¿cuáles son los alcances de dicha crisis, esto es, ella atraviesa a todos los partidos por igual? El segundo, ¿cuál es su naturaleza, o sea, a qué razones responde?

Anticipando la conclusión, señalemos en cuanto a sus alcances que dicha crisis tiene una envergadura diferente entre las distintas familias políticas del país. Más concretamente, su impacto es relativamente más limitado en la principal de ellas, el peronismo. Las dificultades que hoy exhibe el peronismo se refieren más a su cohesión interna como maquinaria política que a la salud de los vínculos con el electorado que representa. Con respecto a su naturaleza, creemos que la crisis

* Agradezco los comentarios y sugerencias de Ana María Mustapic, Carla Carrizo, Vicente Palermo y Luis Alberto Romero. Publicado originalmente en *Desarrollo Económico*, vol. 42, n° 168, enero-marzo de 2003, pp. 647-665.

de la representación partidaria expresa el desencuentro entre la vitalidad de las expectativas democráticas y el comportamiento efectivo de los partidos. En otras palabras, no estamos ante un fenómeno de resignada desafección política. El clima de cuestionamiento que rodea a los partidos indica en verdad la distancia entre lo que la oferta partidaria ofrece y las mayores y plurales exigencias de sectores importantes de la ciudadanía, en particular, el electorado independiente de centro-izquierda y de centro-derecha.

Como paso previo al examen de las cuestiones que tenemos planteadas, a continuación trazaremos a grandes rasgos la trayectoria de la democracia de partidos, desde su auspicioso comienzo hasta la actual crisis de la representación partidaria. Para ello, seguiremos la pista que proveen las vicisitudes electorales de las fuerzas políticas.

LA DINÁMICA ELECTORAL DE LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS

En las primeras elecciones después del colapso del autoritarismo, realizadas en 1983, los dos mayores partidos nacionales, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), entraron en la competencia para dirimir sus aspiraciones rivales en el marco de reglas de juego compartidas. El formato bipartidista de la confrontación electoral reactualizó en un clima político bien diferente la línea divisoria que hacia 1945 había partido en dos el mapa político argentino: el polo peronista y el polo no peronista. Cuando surgió a mediados de los años cuarenta, el movimiento político liderado por Perón produjo un reordenamiento de la base social de los alineamientos partidarios que tuvo un efecto duradero sobre el perfil electoral de la política.

Formada en muy corto plazo y desde el vértice del poder estatal, la coalición electoral que llevó a Perón a la presidencia en 1946 capturó votos a lo largo de todo el espectro partidario: votos socialistas, votos radicales, votos conservadores. La característica sobresaliente del flujo de votos a Perón fue la de provenir de los estratos populares, esto es, trabajadores urbanos sindicalizados o no que votaban al socialismo, pero también al radicalismo y los sectores bajos y medios bajos de las provincias del interior, que votaban a conservadores y radicales. En síntesis, el peronismo le sustrajo el séquito popular a los demás partidos. Por su parte, el polo no peronista se nutrió de las clases medias y altas y se distribuyó, principalmente, entre tres ofertas partidarias, en primer lugar, la UCR y luego agrupaciones de centro-derecha y de izquierda.

Según la descripción propuesta por Mora y Araujo (1991), los distintos segmentos de la pirámide social que confluyeron en el voto peronista establecieron una línea divisoria en términos electorales. Por debajo de ella, el voto es mayoritariamente peronista; por encima, es, en general, un voto en favor de una variedad de partidos, pero ninguno de ellos peronista. En el panorama así delineado, el equilibrio de la política electoral descansó sobre dos factores. El primero, la dificultad de los partidos no

peronistas para trasponer la línea divisoria y conseguir apoyos por debajo de ella. El segundo factor fueron los obstáculos que encontraron dichos partidos para conformar coaliciones abarcativas por encima de la línea divisoria, aglutinando al conjunto del electorado no peronista. En esas condiciones, y en las ocasiones en que pudo expresarse con libertad, el movimiento peronista ratificó su predominio en las elecciones.

Las elecciones de 1983 alteraron ese estado de cosas con un resultado que implicó toda una innovación política: la refutación de la “ley de hierro” de la política argentina según la cual el peronismo era imbatible en elecciones libres. Con el liderazgo de Raúl Alfonsín y el 51,7% de los votos, la UCR conquistó la presidencia, imponiéndose al peronismo encolumnado bajo la sigla de Partido Justicialista, que recibió el 40,1% de los sufragios. A la victoria de la UCR contribuyó, en primer lugar, la emigración en su favor de un porcentaje pequeño pero decisivo de votos tradicionalmente peronistas, reclutados entre los sectores altos de la población asalariada, obreros especializados y empleados de saco y corbata. El traslado de votos a través de la línea divisoria desde abajo hacia arriba se articuló con el aporte de un segundo fenómeno. Nos referimos a la superación de la falta de cohesión del voto no peronista por medio del respaldo a la candidatura de Alfonsín de votos de clases medias y altas con simpatías de centro-derecha y de izquierda. La fuerte polarización de las elecciones y la memoria del trágico fin del último gobierno peronista (1973-1976) contribuyeron, sin duda, al novedoso realineamiento de los apoyos partidarios.

El patrón de competencia bipartidista que exhibieron las elecciones de 1983 no se mantuvo, empero, a lo largo del tiempo. Progresivamente, la concentración de votos en torno de la UCR y el PJ fue disminuyendo, según se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1. Concentración del voto (UCR+ PJ)

Año	Elección presidencial (%)	Elecciones legislativas (%)
1983	91,9	85,9
1985		77,8
1987		78,7
1989	79,7	73,0
1991		69,3
1993		68,9
1995	67,0	64,8

Esa tendencia al debilitamiento del bipartidismo no operó en las dos direcciones por igual. En verdad, el motor del cambio fue la merma del respaldo electoral a la UCR. Tal es la conclusión que se desprende del cuadro 2, elaborado a partir de elecciones legislativas que, por llevarse a cabo con un sistema proporcional, reflejan mejor las preferencias electorales.

Cuadro 2. Variación del caudal electoral UCR y PJ (a)

Año	UCR	PJ
1983	100=48,0%	100=38,5%
1985	90,1	89,2
1987	77,6	107,8
1989	59,9	116,1
1991	60,5	104,5
1993	63,0	110,4
1995	45,3	111,9

(a) Porcentajes sobre votos positivos, 1983 =100.

La pérdida progresiva de votos de la UCR contrasta con la mayor fidelidad del electorado del PJ. Una primera evidencia ya estaba presente en las propias elecciones de 1983 (Mustapic, 2002). En ellas, todos los cargos electivos en los tres niveles, nacional, provincial y local, se renovaron en forma simultánea y por medio de boletas separadas. Estas circunstancias permitieron la manifestación de comportamientos diversos en el electorado. En el polo no peronista, los votantes discriminaron sus preferencias según las candidaturas en disputa; en el polo peronista ocurrió, más bien, lo contrario.

Por ejemplo, en la Capital Federal, la UCR obtuvo 15 puntos porcentuales más en la elección presidencial que en la de diputados; concretamente, el 64% para presidente y el 49% para diputados. En cambio, la diferencia del voto al justicialismo fue tan solo de 3 puntos, 27% para presidente y 24% para diputados. En la provincia de Catamarca, los resultados electorales fueron los siguientes: UCR, 47% para presidente, 42% para diputados y 36% para gobernador; el PJ obtuvo, en el mismo orden, 44%, 42% y 40%. Los datos de la provincia de Salta mostraron ser así más dispares con respecto al radicalismo: 45% para presidente, 41% para diputados y solo 25% para gobernador. A su vez, el PJ recibió el 45% tanto para presidente como para diputados, y alcanzó el 51% en las elecciones de gobernador. Contrastes similares se registraron en otros distritos electorales, poniendo de manifiesto la mayor consistencia del voto peronista y la naturaleza más plural y diferenciada del voto dentro del polo no peronista. Las consecuencias de esos atributos del electorado no peronista habrían de desplegarse, plenamente, en las elecciones sucesivas.

Los análisis electorales (De Riz-Adrogué, 1991; De Riz, 1998; Adrogué, 1995) han mostrado que a partir de 1983 la UCR fue devolviendo votos hacia el centro-derecha y hacia el centro-izquierda del espectro electoral, favoreciendo el crecimiento de terceras fuerzas. En la oferta partidaria del centro-derecha se contó, inicialmente, con varios partidos distritales, con base en las provincias, y con la Unión de Centro Democrática (Ucedé), la agrupación fundada por el patriarca del neoliberalismo argentino, Álvaro Alsogaray. En el centro-izquierda se destacó, principalmente, en un comienzo, el

Partido Intransigente (PI), con fuertes vínculos en el movimiento de los derechos humanos. Luego de coincidir en el respaldo a la candidatura presidencial de Alfonsín, ambos segmentos políticos retomaron su autonomía e hicieron sus propias opciones, imprimiéndole con su voto fluctuante un carácter abierto a la competencia electoral.

Siguiendo el itinerario de sus expresiones más dinámicas tenemos, en primer lugar, al PI, cuya lista de diputados consiguió 411.883 sufragios en 1983 (2,8%); luego recibió un numeroso contingente de ex votantes de Alfonsín y llegó a representar en los comicios legislativos de 1985, con 930.839 votos, el 7,7% del electorado. Dos años más tarde, en 1987, su caudal electoral descendió abruptamente a 327.103 votos (2%). Este descenso coincidió con una novedad de importancia en la oferta partidaria: la reconstrucción del PJ como fuerza competitiva, después de la crisis interna provocada por la derrota en 1983. Con un nuevo elenco dirigente y credenciales más pluralistas, el peronismo recuperó sus electores tradicionales y atrajo otros nuevos, triunfando en las elecciones de 1987. La confluencia del PI se hizo explícita en 1989 cuando llamó a votar por el candidato del PJ a la presidencia, Carlos Menem, y perder desde entonces presencia electoral.

En segundo lugar, y hacia el centro-derecha, la Ucedé experimentó, asimismo, una evolución ascendente: sus casi 500.000 votos de 1985 (3,2%), se convirtieron en 929.695 en 1987 (5,8%) al ofrecer al electorado de talante político conservador y pro mercado en el terreno económico, una oferta partidaria para sus preferencias. Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1989, la perspectiva de un triunfo de Menem, con sus consignas populistas, acercó el apoyo de partidos provinciales al candidato de la UCR, Eduardo Angeloz. La Ucedé optó, en cambio, por presentarse en forma independiente, dividiendo el voto de centro-derecha: Alsogaray, candidato a presidente, sumó 1.200.368 votos, un 7,2%, y la lista de diputados de la Alianza de Centro, articulada por la Ucedé, recibió 1.549.649 sufragios que, con el 9,9% de los votos positivos, alcanzó su mejor desempeño electoral.

Frente a las dificultades de la administración radical en la gestión de los dos problemas centrales del primer tramo de la transición —el ajuste de cuentas con el pasado por la violación de los derechos humanos y la gestión de la emergencia económica que siguió a la crisis de la deuda externa— el triunfo de Menem con 7.953.301 votos (47,5%) no constituyó una sorpresa. Sí lo fue, en cambio, su giro ideológico y político una vez en la Presidencia hacia las reformas de mercado y el mundo de los negocios. Previsiblemente, el viraje de Menem condujo a una recomposición de los alineamientos de centro-derecha y de centro-izquierda. En cuanto al primero, promovió un movimiento de aproximación al PJ: el líder de la Ucedé, Alsogaray, fue invitado a desempeñarse como asesor de la Presidencia y se incorporó a la nueva coalición de gobierno en compañía de otros cuadros partidarios. Con el tiempo, su propio electorado siguió el mismo camino. Cruzando la clásica línea divisoria de la política electoral, esta vez desde arriba hacia abajo, reorientó sus preferencias a las listas electorales del peronismo. Los efectos de esta transferencia de votos se hicieron visibles en la sistemática

reducción de los apoyos a la Ucedé en su principal bastión electoral, la Capital Federal: el 22% alcanzado en 1989 cayó al 8,6% en 1991 y al 3% en 1993.

Mientras este sector del electorado emprendía el camino de ida al peronismo, desde el centro-izquierda se iniciaba otro, pero en una dirección contraria. En 1991, en disidencia con el viraje de Menem, un pequeño número de diputados del PJ pasó a la oposición y formó la agrupación Frente Grande que, en las elecciones legislativas de ese año, dio sus primeros pasos con el 1,5% de los votos. Las esperanzas puestas en la deserción de las bases populares del PJ no se materializaron; en los hechos, la disidencia del Frente Grande encontró mayor eco entre las clases medias genéricamente identificadas con la izquierda democrática y de regreso de su reciente atracción por el peronismo. Con esos apoyos, en 1993 logró el 2,5% de los votos en los comicios legislativos.

Apenas un año después se produjo su gran avance, cuando Menem y Alfonsín acordaron, en el Pacto de Olivos, la reforma de la Constitución que habilitó la vía para la reelección del líder justicialista. El malestar provocado por la abdicación en su papel de oposición entre los simpatizantes del radicalismo, se tradujo en un fuerte flujo de votantes hacia el Frente Grande en las elecciones de constituyentes de 1994; entonces, la flamante agrupación alcanzó el 12,7% de votos en el nivel nacional, y con el 37,6% se convirtió en la primera fuerza en la Capital Federal. La culminación en el crecimiento propio del centro-izquierda ocurrió en las elecciones presidenciales de 1995, ahora bajo la sigla de Frepaso, por la suma de nuevas agrupaciones. Con una campaña centrada sobre cuestiones de fuerte sesgo moral e institucional, sus candidatos, Octavio Bordón y Carlos "Chacho" Álvarez, fueron votados por el 28,2% del electorado, relegando a un pobre tercer lugar a los candidatos de la UCR, con 16,4%; entre tanto, Menem fue reelecto con el 47,7% de los votos.

Dos fueron los corolarios de las fluctuaciones del voto en este segundo tramo de la democracia de partidos. El primero, la transformación del Frepaso en una ascendente fuerza opositora. El segundo, el cambio en la composición de la coalición electoral que hizo posible la reelección de Menem (Gervasoni, 1998). Entre 1989 y 1995, el líder justicialista consiguió mantener la mayoría de los votos leales del peronismo; al mismo tiempo compensó con sus ganancias en el electorado de centro-derecha la pérdida de sus apoyos originales entre los votantes de centro-izquierda.

El escenario de la competencia interpartidaria que definía hasta entonces la fragmentación de la oposición y el predominio del PJ habría de modificarse en 1997. Poco antes de las elecciones legislativas de ese año, la UCR y el Frepaso decidieron sumar fuerzas y formaron la Alianza. El debut de la Alianza puso de manifiesto su potencial competitivo, frente a un gobierno desgastado tras ocho años en el poder y los niveles de desempleo, desigualdad de ingresos y corrupción que confinaban a un segundo plano sus logros en materia de estabilidad y modernización de la economía. La nueva coalición electoral alcanzó el 45,6% de los votos, nueve puntos por encima del 36,2% del PJ.

La unidad de los partidos de oposición no condensó, sin embargo, todo el proceso político que puso fin a las cinco victorias consecutivas del peronismo (1987, 1989, 1991, 1993, 1995). Otro componente de dicho proceso fue el desgranamiento de la coalición electoral de Menem. En 1996 y por un conflicto de intereses políticos, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el artífice del Plan de Convertibilidad, abandonó el gobierno. Poco después ocupó el espacio de centro-derecha vacante desde la declinación de la Ucedé, creando una nueva formación partidaria, Acción por la República (APR). En 1997 APR se sumó a la oposición y canalizó el descontento de fracciones de este electorado con las prácticas políticas, antes que con la orientación económica, del gobierno de Menem, obteniendo 657.514 votos (3,9%).

Las tendencias en la distribución de las preferencias electorales en 1997 se realizaron, efectivamente, en las elecciones presidenciales de 1999. En ellas, los candidatos de la Alianza, Fernando de la Rúa por la UCR y Carlos "Chacho" Álvarez por el Frepaso, resultaron victoriosos con 9.167.404 votos (48,4%), superando a los 7.254.147 (38,3%) de la fórmula del PJ, mientras APR, postulando a Cavallo a la Presidencia, logró 1.937.565 votos (10,2%). Es de destacar que el PJ concurrió a la disputa presidencial sin apoyos externos significativos, como ocurriera en 1983. También, como en 1983, sufrió la deserción de franjas de su electorado, lo que se tradujo en su peor resultado electoral desde entonces, a pesar de que su candidato, Eduardo Duhalde, volviera sobre las tradicionales consignas peronistas y criticara las políticas de liberalización económica de Menem. Ello no facilitó, por cierto, la convergencia con el centro-derecha que tan instrumental había sido al predominio del peronismo. Allí adonde esta pudo mantenerse, la fortuna del PJ cambió de signo. En el distrito estratégico de la provincia de Buenos Aires, el candidato peronista a la gobernación con el 37,4% de los votos, logró prevalecer sobre su rival de la Alianza (41,4%), gracias a que pudo sumar el respaldo concertado de los votantes de Ucedé (5%) y APR (5,8%).

La hipótesis que hemos querido justificar a través de este recorrido, sin duda esquemático, por las vicisitudes electorales de las fuerzas políticas, es la siguiente: la dinámica de la competencia en la política electoral nacional entre 1983 y 1999 se explica, fundamentalmente, por el comportamiento del polo no peronista y dentro de él por las opciones electorales del centro-derecha y del centro-izquierda. Es allí donde está la fuente principal de la volatilidad del voto y también de los cambios en las coaliciones electorales. Como procuraremos mostrar a continuación, es allí donde está localizado, asimismo, el epicentro de la crisis de la representación partidaria.

EL PERONISMO TODAVÍA SOBREVIVE EN MEDIO DE LA CRISIS

En las elecciones legislativas de octubre de 2001, la crisis de la representación partidaria tuvo su manifestación más expresiva y esta, a su vez, fue el ominoso prólogo de la terminación abrupta de la presidencia de Fernando de la Rúa, dos meses después, en medio del mayor aislamiento político y una ola de movilizaciones (Cheresky, 2002).

Recordando brevemente su contexto inmediato, destaquemos que el programa de la Alianza que llevó a De la Rúa a la Presidencia en 1999 estuvo centrado en corregir los legados de la gestión del presidente peronista Carlos Menem durante los diez años previos: los costos sociales de las reformas de mercado, el estancamiento de la actividad económica, los reiterados abusos de poder y las prácticas de corrupción. Transcurridos dos años en el gobierno, el balance de la Alianza no pudo ser más insatisfactorio frente a las expectativas que había suscitado: los niveles de pobreza y desempleo se mantenían altos, la reactivación de la economía no se produjo, los intentos por superar la emergencia trajeron consigo nuevos ajustes fiscales; finalmente, otro episodio clamoroso de corrupción sacudió las esferas oficiales y además no fue esclarecido (Novaro, 2002).

A todo ello se agregaron los conflictos dentro del núcleo gobernante, que provocaron la renuncia del vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez –el líder del Frepaso–, y el distanciamiento de De la Rúa de su propio partido, la UCR. El cuadro de situación con el que la Alianza arribó a su primer test electoral se completaba con la presencia de Domingo Cavallo, jefe del partido de centro-derecha, APR, a quien De la Rúa confió el Ministerio de Economía, luego de los fracasos iniciales de los responsables económicos de la coalición electoral de 1999.

En el cuadro 3 se muestra el impacto electoral del desempeño del gobierno de la Alianza.

Cuadro 3. Elecciones legislativas 1999 y 2001. Comparación de resultados

	1999	2001	Variación
PJ	5.476.625	4.809.495	- 667.130
Alianza	7.590.034	3.058.569	- 4.531.465
Acción por la República	1.374.675	174.068	- 1.200.607
ARI + Polo Social	--	1.616.104	+ 1.616.104
Izquierda	528.090	1.499.293	+ 971.203
Provinciales	1.355.503	1.200.118	- 155.385
Otros	1.050.646	1.737.549	+ 686.903
Votos en blanco	819.384	1.704.514	+ 885.130
Votos nulos	161.760	2.261.332	+ 2.099.572
Abstención	4.463.092	6.777.624	+ 2.314.532

Fuente: Escolar, Calvo *et al.* (2002).

La comparación entre las elecciones legislativas de 1999 y 2001 permite observar, primero, el formidable revés electoral experimentado por las formaciones partidarias involucradas en la gestión del gobierno de De la Rúa. Con respecto a los votos

obtenidos dos años antes, la Alianza de la UCR y el Frepaso perdió 4.531.465 votos, un 59,7%; entretanto, el partido del ministro Cavallo, APR, perdió 1.200.675 votos, un 87%. En segundo lugar, los datos electorales indican que el PJ vio disminuido su caudal electoral en 667.130 votos, esto es, solo un 12,2% por debajo de su nivel inmediato anterior. Combinando estas dos observaciones, tenemos que la fidelidad del electorado peronista no fue afectada de manera significativa por el generalizado clima de protesta ciudadana, que arrasó prácticamente con la opción partidaria de centro-derecha y asestó un golpe letal sobre los apoyos electorales de la coalición gobernante.

A su vez, los análisis hechos por Marcelo Escolar y Ernesto Calvo sobre el origen partidario y el destino de los votos que fluctuaron entre ambas elecciones permiten, en tercer lugar, completar el perfil de los realineamientos partidarios ocurridos en 2001. De ellos se desprende que los votantes de APR, en ausencia de una oferta partidaria adonde canalizar sus preferencias, se volcaron masivamente al voto en blanco y al voto nulo; esto es, lo que hicieron un 74% de los que en 1999 habían votado por el partido de Cavallo. Por su parte, quienes retiraron su respaldo a los partidos de la Alianza también hicieron su contribución al extraordinario crecimiento del voto negativo; la suma de votos nulos y votos en blanco con casi cuatro millones solo fue superada por los sufragios que recibió el PJ, el partido más votado.² Los desertores del oficialismo, sin embargo, dirigieron su descontento en una proporción mayor hacia otros dos destinos: las pequeñas agrupaciones de la izquierda ideológica (trotskistas, socialistas revolucionarios, comunistas), las cuales multiplicaron en un 200% su magro valor máximo anterior; y hacia una nueva formación de centro-izquierda, Argentina por una República de Iguales (ARI), creada en la víspera de las elecciones en nombre de la condena moral a los dirigentes políticos tradicionales. En razón de las opciones partidarias que escogieron para manifestar su disidencia, estos fueron muy probablemente ex votantes del Frepaso.

De acuerdo con los resultados de las elecciones de octubre de 2001, es posible avanzar una conclusión y una conjetura. La conclusión es que el repudio ciudadano que estas pusieron de manifiesto no hizo impacto en todos los partidos por igual. Este fue comparativamente menor para el PJ; contra el telón de fondo del drástico encogimiento del electorado de partido, el peronismo logró sobrevivir todavía como fuerza política predominante. La conjetura se refiere a la transformación del desenlace electoral en una prueba del descrédito de los partidos políticos en su conjunto: quienes contribuyeron principalmente a fijar esa interpretación fueron, por un lado, el electorado de centro-derecha y, por otro, los disidentes por izquierda de la

² Entre 1983 y 1999, el voto nulo osciló entre el 0,5% y el 1,5% de los sufragios emitidos; el voto en blanco a su vez lo hizo entre el 2% y el 4%. En 2001, el primero ascendió hasta el 12,5% y el segundo hasta el 9,4%. Entretanto, la tasa de abstención, que en el período 1983-1999 se ubicó en promedio entre el 15% y el 20%, en octubre de 2001 alcanzó el 27%.

Alianza, los ex votantes del Frepaso. Mediante un voto negativo y un voto positivo altamente impugnador, unos y otros convirtieron a su respectivo disconformismo con la oferta partidaria existente en el problema político de la crisis de la representación partidaria en Argentina.

EL MALESTAR CON LA REPRESENTACIÓN PARTIDARIA COMO PROBLEMA POLÍTICO

Para explorar la naturaleza del problema político construido a partir del desenlace de las elecciones de 2001 comenzaremos introduciendo un argumento de carácter general. Las fallas en el rendimiento de los partidos, tal como pueden ser detectadas con la atención puesta en las políticas que promueven y en sus estilos de actuación, no conducen necesariamente a una crisis de representación; solo crean sus condiciones de posibilidad. Más concretamente, no basta que sea posible reconocer en la realidad los resultados de un desempeño insatisfactorio, como son la persistencia o agudización del estancamiento económico, de los niveles de pobreza, de los episodios de corrupción. A fin de que ese desempeño insatisfactorio ponga en marcha un proceso de desafección partidaria se requiere además que la brecha entre las expectativas y los resultados sea adjudicada a lo que han hecho o dejado de hacer los dirigentes partidarios en lugar de ser atribuida a la gravitación de fuerzas o factores fuera de su control. Que sea una u otra la interpretación que prevalezca dependerá, a su vez, de la perspectiva desde la cual los electores juzguen la gestión de los partidos y establezcan las responsabilidades. Al respecto, una distinción que importa es el tipo de vínculos que estos mantienen con el partido.

En términos simples, la diferenciación relevante es la que separa de un lado a los adherentes y del otro a los simpatizantes. El vínculo de los primeros con el partido descansa sobre una relación de pertenencia cimentada en una prolongada identificación y una densa trama de solidaridades. Por su parte, los simpatizantes se vinculan en función de la proximidad de sus preferencias políticas con las propuestas del partido. Unos y otros se acercan, en consecuencia, con expectativas distintas, desde perspectivas diferentes, a la evaluación del desempeño de los partidos. Así, la identificación partidaria de los adherentes produce un recurso invaluable para las organizaciones: la lealtad. En cierto modo, la lealtad independiza el respaldo al partido de los resultados de sus políticas en el corto plazo. El segundo efecto de la identificación partidaria se hace visible en la formación de las claves interpretativas de la realidad. En particular, suministra un mecanismo para seleccionar la información que los adherentes procesan con respecto a la actuación del partido y cuya eficacia radica en predisponer a estos a hacer suyas las razones con las que los dirigentes explican sus aciertos y racionalizan sus dificultades (Mercado Gasca, 1997; Adrogué y Armesto, 2001).

A diferencia de lo que cabe esperar entre los adherentes, los simpatizantes mantienen con el partido un vínculo más laico, porque teniendo preferencias políticas definidas no las asocian de manera estable con ninguna de las fuerzas políticas en competencia. En los comicios tenderán a escoger a aquella cuyas propuestas prometan la defensa de sus valores e intereses. Su respaldo tendrá, pues, un alcance específico, en función de la calidad de los resultados que esta demuestre producir, y estará en contraste con el apoyo más general y difuso de los adherentes, que presupone una identificación más afectiva con la organización partidaria. Previsiblemente, cuando sus expectativas no son satisfechas, la reacción natural será colocar en el banquillo de los acusados a los dirigentes del partido y retirarles el respaldo. Sus actitudes posteriores dependerán de la existencia de ofertas partidarias alternativas. En ausencia de ellas, la atribución de responsabilidades recaida inicialmente sobre unos dirigentes de partido en particular bien puede extenderse hasta incluir a la mayoría de ellos.

Precisamente, de acuerdo con el análisis de las elecciones de 2001 sabemos que estos fueron comportamientos típicos entre los ex votantes del Frepaso y de APR. Para apreciar mejor su significación nos parece oportuno ponerlos en relación con dos reacciones opuestas frente a circunstancias objetivas semejantes, que ponen de manifiesto la productividad de las lealtades para amortiguar el efecto del desempeño de los partidos. La primera de ellas fue la del electorado del PJ en ocasión de las elecciones de 1999, en las que estaba en juego la continuidad de la gestión peronista en el gobierno. En términos de indicadores sociales, económicos e institucionales, el tramo final de la presidencia de Menem no cerraba con un balance más positivo que el del gobierno de la Alianza al cabo de sus primeros dos años. Sin embargo, aun en su derrota, el PJ logró en 1999 retener una alta proporción de su electorado histórico. La segunda reacción contrastante frente a un desempeño insatisfactorio es la que se desprende del examen de los votos recibidos por la Alianza en octubre de 2001. Ya se ha señalado que estos disminuyeron un 60% en comparación con los obtenidos en 1999, lo que implica que no obstante el juicio predominantemente negativo sobre su gobierno, el restante 40% eligió respaldar a los candidatos de la Alianza. Carecemos de información sobre la composición de los 3.000.000 de electores que conformaron ese 40%; empero, a la vista de la deserción del grueso de los votantes del Frepaso, es verosímil que entre los que mantuvieron su solidaridad hacia la coalición gobernante en momentos en que era ampliamente cuestionada haya sobresalido la presencia de los adherentes del radicalismo, el partido más antiguo y más institucionalizado de la Alianza.

La confrontación entre las reacciones opuestas recién evocadas permite concluir que el problema político de la crisis de la representación partidaria no es el correlato previsible de un bajo rendimiento objetivo de los partidos; más bien, es el fruto de la existencia de una masa de ciudadanos movilizadada en torno de la

fiscalización del desempeño de los dirigentes políticos y el cumplimiento de sus promesas electorales.

CIUDADANOS VERSUS CLASE POLÍTICA

Al principio de estas notas sostuvimos que la crisis de la representación partidaria es una expresión de la vitalidad de expectativas democráticas.³ Más en general, el malestar con la representación constituye un síntoma de cambios operados en la cultura política de franjas significativas del electorado. Dichos cambios han puesto en circulación claves interpretativas que enmarcan la relación entre representantes y representados a partir de criterios nuevos, que redefinen como inmorales e injustos a comportamientos que eran previamente considerados en definitiva tolerables. Antes de ocuparnos de ellos trazaremos en forma sintética su genealogía en el marco de las transformaciones de la cultura política.

El disparador del cambio ha sido apropiadamente localizado en el movimiento por los derechos humanos que surgió en la última dictadura y ganó protagonismo con la transición a la democracia (Peruzzotti, 2002a). Al margen de sus resultados efectivos contra las secuelas del terrorismo de Estado, la gravitación del movimiento se tradujo en una innovación cultural. Su crítica a una versión extrema de la arbitrariedad estatal proveyó los materiales para la construcción simbólica de una crítica más general a toda forma de ejercicio discrecional de los poderes públicos. Bajo esta inspiración, y por el sendero abierto por el movimiento por los derechos humanos, emergió una segunda ola de movimientos que colocaron sus demandas en términos de derechos y apelaron a una estrategia, el recurso al sistema judicial (Smulovitz, 1997). Diversos incidentes de violencia policial impulsaron las primeras movilizaciones de grupos de ciudadanos exigiendo justicia, con acciones destinadas a atraer la atención de los medios de comunicación. El efecto de demostración de estas iniciativas promovió otras y estas a su vez la formación de organizaciones contra la represión policial. Con el paso del tiempo fue expandiéndose el repertorio de los derechos civiles, cuyo desconocimiento o transgresión servían de acicate a la proliferación de movimientos de ciudadanos (derechos del consumidor, protección del medio ambiente, defensa del género, etcétera). Que el descubrimiento de las garantías constitucionales como argumento para legitimar demandas era el efecto de nuevas y más intensas preferencias lo hizo visible el hecho de que los reclamos legales no cesaran, aun cuando los tribunales optaran con frecuencia por tomar distancia bajo presiones políticas.

Estas experiencias, llevadas a cabo con independencia de las estructuras partidarias, alcanzaron una expresión singular respecto de las prácticas políticas convencionales en el país con la creación de asociaciones (Poder Ciudadano,

³ Sobre esta cuestión véase, además, el sugerente análisis de Miranda (2002).

Conciencia, Ciudadanos en Acción, entre otras), cuya actividad principal apunta al fomento de la participación cívica y al control de las acciones gubernamentales. Las campañas dirigidas a la protección de los derechos y la supervisión de la transparencia y legalidad de la actuación de las autoridades encontraron también en el desarrollo de un periodismo de investigación un actor importante, que sacó a la luz casos flagrantes de abusos de poder y de corrupción política. La movilización de estas “minorías activas”, en particular, durante la Presidencia de Menem, que dio sobrados pretextos con la manipulación constante de las reglas y la sucesión de escándalos, terminó finalmente comportando, como destacara Enrique Peruzzotti, una politización de la agenda pública ya no centrada en cuestiones distributivas, sino en la vigencia de la ley y de la ética pública (Peruzzotti, 2002b).

En la trayectoria sumariamente descripta, desde un primer momento dominado por demandas en torno de los derechos civiles a un momento posterior, donde se sumaron las demandas centradas en las modalidades de ejercicio del gobierno, la lógica discursiva y práctica puesta en marcha por las novedades de la cultura política fue avanzando hasta conducir a la discusión del vínculo de la representación partidaria. A la visión del vínculo como una pura operación de autorización, sostenida por fuertes lazos de identidad entre representantes y representados, los movimientos de ciudadanos crearon las condiciones para una visión alternativa, basada en la demanda de la rendición de cuentas de los representantes de sus actos y sus promesas. La mayor relevancia que ganó la fiscalización en las relaciones de los ciudadanos con los partidos introdujo la desconfianza vigilante en el lugar de la vida política ocupado por las seguridades de la confianza solidaria. El cambio cultural consolidó, así, dándole razones y motivos, la presencia de un electorado más exigente y, por ello mismo, más informado y alerta acerca de las ofertas partidarias en la arena política. Fue en él, en fin, que encontraron su público natural las actividades de las asociaciones cívicas dedicadas a supervisar los funcionarios electos y las denuncias del periodismo de investigación.

Al tiempo que tenía lugar esta mutación en el vínculo de la representación partidaria entre franjas significativas de la ciudadanía, un desarrollo paralelo experimentaban los principales partidos: la reducción de su capacidad de dar dirección a las políticas públicas. Desde mediados de los ochenta, las decisiones de política pública fueron en gran medida fruto de respuestas a presiones de actores extragubernamentales y no de los programas elaborados por los partidos y con los cuales se presentaban ante los electores. El desenlace de la política de ajuste de cuentas con el pasado por la violación de los derechos humanos, el giro al principio moderado y luego más radicalizado hacia las reformas de mercado –los dos capítulos principales de la gestión de la democracia de partidos argentina– mostraron las dificultades de la UCR y el PJ para hacer sus propias opciones. En contraste, su capacidad de ocupación de las agencias del Estado por medio del poder de nómina sobre los cargos públicos no sufrió restricciones. Más bien, ese poder fue ejercido

con creces y utilizado a fin de sostener los aparatos partidarios y ofrecer a los dirigentes oportunidades para financiar sus carreras políticas y el enriquecimiento personal. En estas condiciones, cuando la mirada inquisitiva de las minorías activas y de los medios de comunicación se proyectó sobre las organizaciones partidarias a la pregunta “¿para qué sirven los partidos?”, la respuesta que se dieron fue que, en verdad, los partidos se sirven en primer lugar a ellos mismos.

No fue, entonces, una sorpresa que en un país con sólidos clivajes partidarios, estos pasaran a un segundo plano y ganara preeminencia en el discurso público de finales de los noventa el término “la clase política”, para designar, suprimiendo las diferencias, a los hombres de partido. Dentro de esta categoría, los incluidos eran típicamente los políticos peronistas y los políticos radicales. Esa ubicación no respondió apenas al hecho objetivo de que desempeñaran las principales responsabilidades en las instituciones de la democracia en su condición de miembros de los dos grandes partidos de alcance nacional.

Allí quedaron ubicados por otra razón: la política de descrédito que explotó sus problemas para adaptarse a los nuevos vientos de la democracia argentina. La reluctancia a oxigenar sus filas frente a las denuncias de corrupción, el recurso al financiamiento de sus cuadros con fondos públicos, la concentración de sus esfuerzos a la propia reproducción política en las luchas por el poder dentro de las organizaciones, todo ello amplió la brecha con las nuevas exigencias ciudadanas. De hecho, peronistas y radicales, tanto en el gobierno como en la oposición, siguieron haciendo lo que siempre habían hecho. Pero ahora en un escenario en el que los cambios de la cultura política convertían en intolerable lo que por mucho tiempo era considerado como el modo más normal de funcionamiento de una democracia de partidos.

LOS HUÉRFANOS DE LA POLÍTICA DE PARTIDOS

La política de descrédito de la clase política tuvo por principales animadores a figuras (comunicadores sociales, líderes de opinión, dirigentes políticos) provenientes del área de centro-derecha y del área de centro-izquierda. Nos referimos a ellas en términos de áreas para recortar el espacio ante todo de unos valores dominantes antes que de una estructuración partidaria estable. En ambas, los partidos se han sucedido unos a otros en el tiempo y no han sido siempre los medios para la canalización de las preferencias. Quienes las ocupan se reclutan en las clases medias y medias-altas de los grandes centros urbanos, tienen comparativamente un alto nivel de educación e información política, cuentan con un fluido acceso a los medios de comunicación y, finalmente, responden al perfil del votante independiente, esto es, son electores que creen en unos determinados valores y que al momento de votar se guían por ellos, pero juzgan sin preconceptos cuál de las organizaciones partidarias mejor los sostienen y defienden.

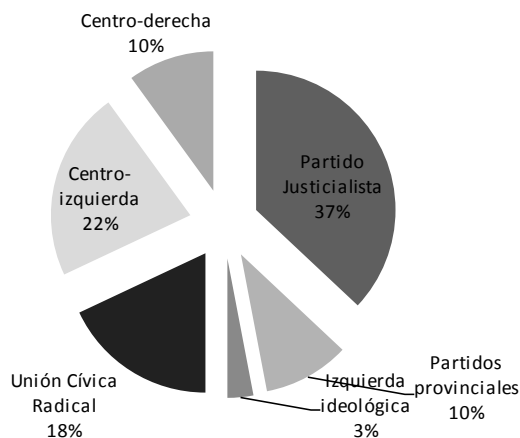
Su gravitación en la política argentina ha descansado en su poder de agenda y su influencia en el terreno electoral. En cuanto al primero, señalemos que en el área de centro-izquierda fue donde surgió el movimiento de los derechos humanos que definió las prioridades en el tramo inicial de la transición a la democracia. Después de su relativo eclipse, las consignas movilizadoras las encontró en las luchas contra la corrupción y los abusos de poder, en los valores de la transparencia y la legalidad. El área de centro-derecha colocó en la agenda pública los problemas fiscales, la estabilidad monetaria, las reformas de mercado, los valores de la propiedad privada y de la libertad económica. Unas y otras fueron las cuestiones que encuadraron el debate público y condicionaron los cursos de acción de los gobiernos de la UCR y del PJ.⁴

En cuanto a su influencia electoral, la volatilidad del voto de estas dos áreas del espectro ideológico definió asimismo la suerte en las urnas de los dos principales partidos. Para apreciar esa influencia destaquemos que la estabilidad del sistema partidario ha descansado hasta tiempos recientes en el núcleo duro de los adherentes del PJ y, en una proporción menor, de los de la UCR. Los primeros han concentrado en promedio alrededor del 37% de los votos positivos del electorado, sin que los cambios del peronismo desde el distribucionismo y el nacionalismo económico al neoliberalismo hayan alterado esas lealtades. Por su parte, los radicales han sumado cerca del 18%, pero en una pendiente hacia abajo desde su victoria en 1983. Si se ponen a un lado los partidos provinciales por tener un peso limitado a sus distritos y a la izquierda ideológica debido a su escasa significación electoral, el fiel de la balanza en las elecciones está inclinado hacia las áreas de centro-derecha y de centro izquierda. Computando el caudal de votos máximos obtenidos por las agrupaciones políticas que expresaron a una y otra en elecciones legislativas a la que concurren en forma independiente, tenemos que el centro-derecha reúne un 10-12% de los votos y el centro-izquierda un 22%.⁵ Como destacamos antes, en el período transcurrido entre 1983 y 1999 la oscilación de aproximadamente este tercio del electorado –en la misma dirección, en direcciones opuestas– decidió la derrota o la victoria de la UCR y el PJ en las elecciones presidenciales.

⁴ La fortuna política de estos partidos radicó en haber contado con líderes que, actuando como *outsiders* respecto de sus tradiciones, se sintonizaron con esos climas de ideas y principios, reinventando la identidad de sus propias organizaciones y, con ella, la dirección estratégica de sus respectivos gobiernos. Esa fue la experiencia de Raúl Alfonsín en su campaña a la Presidencia en 1983 con la consigna del retorno al estado de derecho y el ajuste de cuentas con el pasado; también fue la de Carlos Menem con su viraje hacia el neoliberalismo una vez en la presidencia en 1989.

⁵ Estos porcentajes atribuidos al centro-derecha corresponden a los obtenidos por la Ucedé y APR en las elecciones legislativas de 1989 y 1999, respectivamente. En el caso del centro-izquierda, resultan del porcentaje obtenido por el Frepaso en las elecciones legislativas de 1995.

Gráfico 1. Esquema de los apoyos electorales de las fuerzas políticas (1983-1999)



Retomando el argumento, destaquemos que por vías distintas, los círculos de opinión tanto de centro-izquierda como de centro-derecha convergieron, a su turno, en la crítica a la clase política. Los primeros poniendo el acento en las relaciones colusivas de los principales partidos a espaldas del respeto a los mecanismos de la democracia; los segundos cuestionando su escasa sintonía con los consensos existentes en favor de la eficiencia de la gestión pública y la modernización de la economía. Para unos y otros la salida frente a este estado de cosas radicaba en la firmeza moral con respecto a la partidocracia tradicional y en la reforma de sus usos y costumbres políticas. Estas fueron las expectativas que abonaron el terreno para el surgimiento y desarrollo de las nuevas formaciones políticas y que hicieron de ellas, en particular del Frepaso, la promesa de una renovación partidaria que cerrara la brecha de representación.

Su frustrante desempeño posterior durante el gobierno de la Alianza condujo a que se concentrara también sobre ella el clima de impugnación que rodeaba a los políticos peronistas y radicales. En este contexto, la crítica a la clase política adquirió bien pronto el carácter de una verdadera cruzada moral, con sus excesos y simplificaciones (Palermo, 2002). Se abrieron entonces las compuertas al negocio de las denuncias de corrupción montado por los medios, a la reactivación de la retórica anti-partido de largo arraigo en el país, en fin, a una suerte de exorcismo colectivo que atribuyó la causa de los problemas económicos y sociales a la responsabilidad de unos políticos venales e incompetentes y silenció la gravitación del poder de veto de los grupos de interés, de las restricciones económicas internacionales, de la complejidad de los dilemas de gobierno.

En las elecciones de octubre de 2001 la debacle de la Alianza (en particular, del Frepaso) y de Acción por la República puso en escena un irónico desenlace: cuanto había de novedoso en la cultura política del electorado terminó por penalizar

sobre todo a las formaciones partidarias que mejor lo encarnaban. Estas eran, en verdad, formaciones partidarias vulnerables, ya que no contaban con una reserva de lealtades que las blindara ante las consecuencias de su actuación en el gobierno. La construcción política tanto del Frepaso como de APR se había desenvuelto principalmente en la arena mediática y alrededor del discurso convocante de fuertes liderazgos personalistas. En cuanto tales, ambos partidos eran expresivos de las modalidades de la representación propias de los movimientos políticos de opinión ciudadana. En ellos, los lazos de confianza que sostienen a los representantes son a la vez débiles y exigentes, y esto es así porque se nutren de la producción de resultado sobre cuestiones específicas en el corto plazo de frente a unos electores que evalúan autónomamente y sin ataduras su desempeño. Así las cosas, la onda expansiva del voto de protesta de 2001 condujo a la destrucción del segmento partidario ocupado por los sectores que han sido la principal fuente de innovación política en el país, ratificándolos en su condición de huérfanos de la política de partidos.⁶

HACIA LA SEGUNDA TRANSICIÓN

Al cabo de 20 años de existencia, la trayectoria de la democracia de partidos en la Argentina ha culminado en dos fenómenos contrapuestos. Por un lado, generó una masa crítica de ciudadanos y de activismo cívico que mantiene una actitud alerta y exigente sobre la actuación de los hombres de partido. Por el otro, la dinámica política impulsada por estas mayores expectativas democráticas ha contribuido a una crisis de la representación partidaria. Estamos, así, ante una paradoja: aquello que la crisis tiene de positivo para la expansión de la calidad de la democracia de partidos es también la causa de un impacto institucional negativo. Para estimar la magnitud de este impacto hay que introducir un dato adicional en la caracterización de la coyuntura actual. A diferencia de Perú y Venezuela, en el país la crisis de la representación partidaria no se resolvió en el colapso del sistema de partidos en su conjunto (Malamud, 2002). Con vistas a las próximas elecciones del 2003 los sondeos previos indican que los varios candidatos del PJ en disputa por la presidencia reúnen el caudal histórico del electorado peronista. El desenlace de la crisis ha sido, pues, un sistema de partidos desequilibrado.

En este escenario, lo que observamos actualmente son distintas iniciativas tendientes a reequilibrar la oferta partidaria. El rumbo que estas han tomado no comporta, en verdad, una novedad puesto que siguen los patrones históricos, esto es, apuntan a llenar una vez más los espacios del centro-derecha y del centro-izquierda,

⁶ Esta condición tuvo una resolución positiva, si bien efímera, en las experiencias de democracia directa a escala local bajo la forma de asambleas de vecinos reunidos en torno de la autogestión de sus necesidades inmediatas que proliferaron en los barrios de Buenos Aires durante la primera mitad de 2002, para ir luego decayendo.

en cierto modo disponibles luego de los reveses experimentados por APR y el Frepaso. Tampoco las formas de construcción política son novedosas, porque tienen por eje la gravitación de fuertes personalidades, que ganaron visibilidad recientemente y en un breve plazo por medio de intervenciones políticas de amplia resonancia a través de los medios de comunicación.

En el centro-derecha, el articulador de la nueva oferta partidaria es Ricardo López Murphy, economista de formación ortodoxa de fugaz tránsito en la cartera de economía del gabinete de De la Rúa, cargo que debió abandonar por las resistencias de la coalición gobernante a sus propuestas drásticas de ajuste fiscal. En el centro-izquierda, la figura convocante es Elisa Carrió, diputada de la Alianza, que tuvo un papel protagónico en la investigación sobre el lavado de dinero promovida por el Congreso, para pasar luego a la oposición acusando a los hombres de partido de complicidad con las mafias del dinero y los poderes ocultos. El lanzamiento de estas iniciativas –las agrupaciones “Recrear para el Crecimiento” y “Argentina para una República de Iguales”, respectivamente– ha hecho reemerger dos órdenes de problemas que en el pasado obstaculizaron la estabilización y el posterior desarrollo de empresas políticas de igual signo.

Están, primero, los problemas que son específicos a cada una de ellas. Dentro del área de centro-derecha, el proceso de construcción de la oferta partidaria ha desembocado en forma recurrente ante una encrucijada: seguir invirtiendo recursos personales y materiales en consolidar una alternativa de poder institucional en el mediano y largo plazo o ceder a la tentación de influir en el corto plazo respondiendo a las solicitudes de gobiernos necesitados del respaldo de sus ideas y de sus intereses. En la disyuntiva, esta última opción probó ser más atractiva y fue escogida en detrimento de la otra; ocurrió con la Ucedé y, más tarde, también con APR. El costo asociado a la estrategia de la influencia fue el debilitamiento de la identidad organizacional e incluso la corresponsabilización de los resultados de gestiones de gobierno, sobre cuya dirección política no estaban en condiciones de gravitar. Adicionalmente, la disyuntiva sobre el camino a seguir también se coloca en términos individuales entre los simpatizantes de centro-derecha, donde la fuerza del prejuicio anti-partido torna más trabajosa la tarea de sumar voluntades a favor de una nueva oferta partidaria. Así, no pocos hombres y mujeres que podrían incorporarse a la empresa política, prefieren tomar distancia y canalizan sus esfuerzos a la formación de centros de estudios y equipos técnicos, declarándose disponibles a la colaboración con los poderes públicos de turno.

Con relación a los problemas característicos del centro-izquierda, estos son la contracara de la crítica de la partidocracia, tan típica y movilizadora en este espacio del electorado. La aspiración a “otra política”, más ética y más transparente, no obstante ser una consigna eficaz de renovación política, encierra virtualmente efectos que conspiran contra su consolidación. Primero, porque suele estar acompañada de una natural desconfianza hacia las prácticas de la política institucional,

como son la negociación y el intercambio entre las fuerzas políticas establecidas. Segundo, porque el rechazo de los vicios e inercias de los partidos tradicionales tiende a promover la baja institucionalización de las ofertas partidarias alternativas. Este formato introduce con frecuencia en ellas una fuente de inestabilidad ya que entroniza en el puesto de comando a los humores y cálculos individuales de dirigentes aglutinadores y, por ello mismo, dominantes.

Además de los problemas propios, las iniciativas en marcha en el centro-derecha y en el centro-izquierda se confrontan a un problema compartido, el que pone el sistema electoral vigente a la expansión de nuevas fuerzas en el territorio nacional. En la experiencia reciente de los partidos que han buscado representar a estos segmentos del electorado es posible detectar una trayectoria similar: todos surgieron y crecieron en las zonas centrales –por su población y desarrollo–, pero no consiguieron franquear esos límites y avanzar hacia las zonas periféricas. Sus dificultades ponen de manifiesto las consecuencias de la heterogeneidad demográfica y social del país; más precisamente, en estas últimas zonas el público de clases medias y altas potencialmente receptivo a sus propuestas tiene menores dimensiones relativas. Sin embargo, como lo han mostrado Escolar (2001) y Calvo *et al.* (2001), el acceso al electorado que de todos modos está disponible ha sido neutralizado por el efecto mayoritario que, en conjunto, presenta el sistema electoral nacional.

A primera vista, esta es una conclusión inesperada porque la modalidad que regula la elección de diputados en el nivel nacional es el sistema proporcional. Sin embargo, como el comportamiento de este sistema depende del tamaño de los distritos electorales, sus efectos son distintos según sea el número de diputados que se elija en cada uno de ellos. En las provincias con más población y que, por consiguiente, eligen más diputados –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal– el sistema proporcional funciona como tal, es decir, la distribución de bancas refleja muy de cerca la distribución de las preferencias de los electores. En cambio, en los distritos menos poblados y que eligen menos legisladores, el sistema electoral opera en términos mayoritarios, favoreciendo al partido que obtiene más votos. En esta última situación se encuentran doce provincias; en las ocho restantes los efectos son semi-mayoritarios. La tendencia a la hegemonía de un solo partido en un buen número de distritos se potencia, además, por el sistema mayoritario que rige, por un lado, para la elección de senadores nacionales y prevalece, por otro, en los regímenes electorales provinciales. En estas condiciones, la expansión de nuevas ofertas partidarias se vuelve más difícil, debido a las barreras institucionales que en las zonas periféricas aseguran la reproducción de las fuerzas políticas de más largo arraigo.

A la luz de los problemas que hemos destacado parece aventurado anticipar el resultado de los intentos que buscan dar estructuración partidaria al voto de protesta de las elecciones del año 2001. Ahora bien, si en el mejor de los casos los nuevos partidos ocupan el mismo lugar en el electorado que tenían sus predecesores, es probable que se asista a un reequilibrio, pero no a una transformación del

sistema de partidos (Abal Medina, 2002). Por cierto, una relación más simétrica entre las fuerzas políticas no es un punto de llegada irrelevante para el proceso político en curso. Ocurre, empero, que el malestar con la representación y el clima de efervescencia social que rodearon el derrumbe del gobierno de la Alianza y que acompañan a sus sucesores colocaron en la opinión pública la expectativa de una mutación más radical del perfil histórico de las ofertas partidarias.

Comparativamente, la peculiaridad argentina ha consistido en que los dos mayores partidos nacionales, PJ y UCR, distintos en cuanto a la composición social de sus adherentes (más estratos populares en el primero, sobre todo sectores medios en el segundo) tienen una escasa distancia ideológica entre sí y reúnen dentro de ellos un amplio arco de posturas desde la derecha a la izquierda. Las diferencias que los han separado y enfrentado a lo largo de la historia expresaron, más bien, el peso de sus respectivas subculturas políticas, gestadas y solidificadas en las coyunturas críticas que presidieron su constitución, las luchas cívicas por la libertad de sufragio en los radicales, el acceso de los trabajadores a los derechos sociales por obra de un liderazgo plebiscitario en los peronistas. La continuidad de la identificación partidaria en torno del PJ y la UCR descansó, precisamente, sobre esas subculturas políticas, que construyeron en el tiempo vínculos de lealtad y solidaridad por sobre las preferencias ideológicas individuales de sus adherentes. La erosión de esa densa amalgama, el aflojamiento de estos vínculos, tendrían, en consecuencia, la virtud de liberar a los adherentes de sus compromisos con vistas a organizar sus comportamientos más de acuerdo con las preferencias ideológicas.

Algo de esto es lo que ha venido sucediendo dentro del más antiguo de los dos partidos, la UCR. En este sentido, es sugestivo constatar que los promotores de las nuevas agrupaciones de centro-derecha y de centro-izquierda, López Murphy y Carrió, hayan salido de sus filas y lanzado sus iniciativas después de romper públicamente con el partido. La pérdida de competitividad de la UCR está conduciendo a muchos de los cuadros partidarios a replegarse sobre sus baluartes locales en el nivel provincial o municipal, pero también a una silenciosa diáspora en busca de mejores oportunidades para continuar sus carreras políticas. La declinación del radicalismo como partido nacional, en beneficio de formaciones partidarias más ideológicamente homogéneas, está cancelando uno de los componentes de la peculiaridad del sistema de partidos argentino. ¿Qué decir del otro y más importante, el PJ? ¿Acaso estamos en la víspera de la ruptura de esta fuerza política, que engrosaría con sus poderosos fragmentos las alternativas hacia la derecha y hacia la izquierda del espectro electoral, como lo viene vaticinando Torcuato Di Tella desde hace años?

La oportunidad de esta pregunta no la dicta la existencia de un acelerado proceso de desertión de sus adherentes similar al que experimenta la UCR, según se desprende de la mayor permanencia de su electorado histórico. Ciertamente, los valores de la subcultura peronista han perdido la consistencia del pasado después de las políticas públicas de signo opuesto ejecutadas en su nombre durante el gobierno

de Menem, pero aún conservan capacidad de suscitar lealtades y solidaridades. La pregunta acerca de la crisis eventual del partido la plantean los rasgos más originales que está adoptando la puja por el liderazgo entre dirigentes rivales. El conflicto por el poder dentro de la organización, recurrente en el peronismo, converge hoy con un conflicto de proyectos ideológicos, que está poniendo en tensión los mecanismos que han regulado hasta ahora las divisiones internas, evitando la ruptura. En el centro de la disputa está Menem con su propuesta hacia la derecha, en línea con los rumbos de sus diez años de gobierno, y sus rivales con la reivindicación más o menos actualizada de la tradición nacional-popular. Con los elementos disponibles la disputa tiene un final abierto. Un interrogante adicional sobre la suerte del PJ lo coloca la vasta movilización de desocupados que ha surgido y crecido en sus márgenes, pero que está radicada en el núcleo de sus bases electorales. De la resolución de la ecuación peronista depende que el perfil de las ofertas partidarias se despliegue más nítidamente a lo largo del eje derecha-izquierda.

Desde la perspectiva delineada por estas últimas consideraciones, la crisis de la representación partidaria adquiere una envergadura mayor y justifica preguntarse si no ha comenzado en Argentina la segunda transición. En 1983 se realizó la primera transición, en sintonía con la ola de democratización que recorrió a América Latina. En el país el fin del autoritarismo, además del restablecimiento del Estado de derecho, significó la cancelación de largos años de antagonismos políticos irreconciliables y la creación de una democracia de partidos. Colocados en el centro de la vida política nacional, los partidos debieron de allí en más lidiar con los desafíos del gobierno de la emergencia y la mudanza de las instituciones económicas así como los de las mayores expectativas democráticas generadas por los cambios en la cultura política. Los límites y las dificultades que exhibieron para adaptarse a un escenario más complejo en cuanto a la representación de intereses y de valores los condujeron a una situación de descrédito, que las elecciones de 2001 condensaron con elocuencia. Este momento crítico podría ser visto como el comienzo de la segunda transición.¹

En la agenda de esta transición dentro de la democracia figuran las cuestiones que ha instalado con fuerza la crisis de la representación partidaria. Por un lado, están aquellas vinculadas con la reforma política y referidas a la revisión de los instrumentos de selección y fiscalización de los representantes por los ciudadanos. Por el otro, se trata de la recomposición del sistema de partidos. Unas y otras han sido solo esbozadas y están lejos de haberse encarado. La resolución de estas cuestiones institucionales está condicionada, cabe finalmente agregar, a la respuesta que reciba la urgente necesidad de revertir el proceso que, en paralelo a los problemas de representación, ha pautado el último tramo de la democracia de partidos: la

¹ Usamos el término “segunda transición” siguiendo a Pasquino (2002) en su análisis de la democracia italiana.

creciente desigualdad social y la falta de empleo, que erosionan las precondiciones sociales del ejercicio de la ciudadanía de sectores cada vez más amplios de la población. La crisis económica de magnitudes inéditas en la que se encuentra el país y el cuadro actual de fragmentación política prometen tiempos difíciles para esta segunda transición.

BIBLIOGRAFÍA

- Abal Medina, Juan Manuel (h.) (2002). "Elementos teóricos para el análisis contemporáneo de los partidos políticos". En Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina, Juan Manuel (h.) (eds.), *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario: Homo Sapiens.
- Adrogué, Gerardo (1995). "El nuevo sistema partidario argentino". En Acuña, Carlos (comp.), *La nueva matriz política argentina*, pp. 27-70. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Adrogué, Gerardo y Armesto, Melchor (2001). "Aún con vida. Los partidos políticos en la década del noventa". *Desarrollo Económico*, vol. 40, n° 160, pp. 619-652.
- Calvo, Ernesto *et al.* (2001). "Las fuentes institucionales del gobierno dividido en la Argentina". En Calvo, Ernesto y Abal Medina, Juan Manuel (h.), *El federalismo electoral argentino. Sobrerrepresentación. Reforma política y gobierno dividido en la Argentina*. Buenos Aires: Eudeba.
- Cheresky, Isidoro (2003). "Las elecciones nacionales de 1999 y 2001. Fluctuación del voto, debilitamiento de la cohesión partidaria y crisis de representación". En Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel (comps.), *De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en Argentina, 1999 y 2001*, pp. 19-51. Rosario: Homo Sapiens.
- De Riz, Liliana (1998). "From Menem to Menem. Elections and Parties in Argentina". En Tulchin, Joseph y Garland, Allison (eds.), *Argentina. The Challenges of Modernization*, pp. 133-152. Wilmington: Scholarly Resources.
- De Riz, Liliana y Adrogué, Gerardo (1991). "Democracia y elecciones en la Argentina: 1983-1989". En Nohlen, Dieter y De Riz, Liliana (comps.), *Reforma institucional y cambio político*, pp. 237-295. Buenos Aires: Legasa.
- Escolar, Marcelo (2001). "Hacia una reforma del sistema electoral argentino: estimación y evaluación de las estrategias de delimitación, asignación geográfica de escaños, sesgos mayoritarios y sesgos partidarios alternativos". *PNUD. Proy. ARG00/007*, Buenos Aires.
- Escolar, Marcelo; Calvo, Ernesto *et al.* (2002). "Últimas imágenes antes del naufragio: las elecciones de 2001 en Argentina". *Desarrollo Económico*, vol. 42, n° 165, abril-junio, pp. 25-44.

- Gervasoni, Carlos (1998). "El impacto de las reformas económicas en la coalición justicialista". *Boletín SAAP*, año 4, n° 6, pp. 67-101.
- Malamud, Andrés (2002). "El escenario político se está modificando a medias". *Clarín*, 21/9/2002.
- Mercado Gasca, Lauro (1997). "Una visita a la lealtad hacia los partidos políticos en América Latina". *Política y Gobierno*, vol. IV, n° 2, pp. 285-346.
- Miranda, Diego (2002). "Crisis de representación política en Argentina". *Revista SAAP*, vol. 1, año 1.
- Mora y Araujo, Manuel (1991). "El cuadro político y electoral argentino". En Nohlen, Dieter y De Riz, Liliana (comps.), *Reforma institucional y cambio político*, pp. 207-235. Buenos Aires: Legasa.
- Mustapic, Ana M. (2002). "Los sistemas de partidos en la Argentina". En Bodemer, Klaus; Pagni, Andrea y Waldman, Peter (eds.), *Argentinien Heute. Politik, Wirtschaft, Kultur*. Frankfurt: Vervuert.
- Novaro, Marcos (comp.) (2002). *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*. Buenos Aires: Norma.
- Palermo, Vicente (2002). "El enemigo del pueblo". En Novaro, Marcos (comp.), *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*. Buenos Aires: Norma.
- Pasquino, Gianfranco (2002). "La experiencia italiana: dos transiciones (1943-48; 1989-2001)". *Post Data*, septiembre, pp. 197-213.
- Peruzzotti, Enrique (2002a). "Towards a New Politics: Citizenship and Rights in Contemporary Argentina". *Citizenship Studies*, vol. 6, n° 1, pp. 77-93.
- (2002b). "Civic Engagement in Argentina. From the Human Rights Movement to the 'Cacerolazos'". Mimeo.
- Smulovitz, Catalina (1997). "Ciudadanos, derecho y política". *Agora*, n° 7, pp. 159-178.

EXPERIENCIAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL E INTERPRETACIONES SOBRE LA CRISIS DE 2001

Carolina Schillagi

INTRODUCCIÓN

En este texto nos proponemos ofrecer un panorama general sobre la llamada “crisis de 2001”, teniendo en cuenta sus antecedentes (los procesos de transformación social, económica y política que caracterizaron las décadas precedentes) pero sobre todo, centrándonos en dos aspectos. Por un lado, en la descripción de las experiencias de movilización social que tuvieron lugar en nuestro país entre fines de ese año y todo el 2002, y por otro, en las distintas interpretaciones y modos de abordaje que se han producido sobre ese período histórico reciente desde las ciencias sociales y los análisis políticos.

LOS ANTECEDENTES DE LA CRISIS: LAS TRANSFORMACIONES DE LA DÉCADA DEL NOVENTA

Los procesos de transformación económica, social y política que tuvieron lugar a partir de la dictadura militar de mediados de la década del setenta en la Argentina, son fundamentales para comprender el período histórico que culmina con la crisis de finales de 2001. En términos de los modelos de desarrollo que fueron abordados en el texto de Abramovich y Vázquez (2012), el comienzo del siglo XXI estuvo marcado, en la Argentina, por la eclosión de algunos de los principales ejes del modelo neoliberal.

Esto significa que si repasamos los criterios que definen un modelo de desarrollo, a saber, patrón de acumulación dominante, papel del Estado, relaciones políticas y de poder entre diversos bloques, estructura social, aspectos culturales y contexto mundial, encontramos un panorama en el que cada uno de dichos aspectos presentaba, hacia finales de la década del noventa, signos de dificultades y conflictos

en las que habían sido hasta entonces sus bases de sustentación, su dinámica de funcionamiento o de modo más general, sus características principales.

Es importante destacar además, las diferencias en las formas y grado de profundidad con que la crisis afectó no solo a los distintos grupos sociales, sino también a las realidades de las distintas regiones y provincias del país, dotadas de recursos económicos, humanos, culturales y capacidades institucionales muy disímiles para enfrentarla. En efecto, las regiones y provincias del país sufrieron un fuerte impacto de las políticas neoliberales aplicadas a lo largo de la década del noventa, aunque se trata de procesos de deterioro que tienen antecedentes previos. La reforma del Estado, las medidas fiscales, así como la reforma del sistema de jubilaciones, significaron fuertes pérdidas económicas, endeudamiento de las provincias, reducciones del gasto público y profundización de las disparidades en el reparto de los recursos entre el gobierno nacional y las provincias. Las dificultades fiscales y el aumento del endeudamiento, como señala Luzzi (2012), tuvieron un impacto profundo en el nivel de vida de la población teniendo en cuenta que en todas las provincias alrededor del 70% del presupuesto provincial se dedica al pago de salarios. En este contexto, durante el segundo semestre del 2001 y ante las dificultades del Estado para acceder a financiamiento externo:

... el Estado nacional adoptó un conjunto de medidas destinadas a asegurar el equilibrio fiscal, las cuales comprendieron la reducción de todos los gastos del Estado en un 13% –incluidos los salarios, jubilaciones, el pago a proveedores y las transferencias a las provincias– y el lanzamiento de un plan voluntario de canje de deuda. Esas decisiones no hicieron más que profundizar la crisis de las provincias, que en muchos casos comenzaron a atrasarse en el pago de salarios y debieron recurrir [...] al pago de obligaciones con títulos de cancelación de deudas (conocidos usualmente como “bonos”) (Luzzi, 2012: 324).²

Si bien aquí no vamos a avanzar en un análisis específico de las implicancias de las monedas provinciales (llamadas también “cuasimonedas”), la consideración general de esta cuestión permite tener un panorama más acabado respecto de la situación que atravesaba la Argentina. Las monedas provinciales y el lecop funcionaron como medio de pago corriente hasta fines de 2003, cuando fueron rescatadas por el Estado

² Los bonos, como instrumentos de cancelación de deudas realizadas por las provincias, fueron emitidos en 10 de las 23 provincias, aunque existen diferencias entre distintos autores con relación al número. De todos modos, en seis de las provincias los bonos se emitieron para pagar salarios, proveedores y deudas del Estado provincial a partir de 2001, mientras que en cuatro de ellas (Tucumán, La Rioja, Catamarca y Corrientes) habían comenzado a hacerlo desde mediados de los ochenta en algunos casos y de los noventa en otros, y aún tenían bonos en circulación en el momento de la crisis. A estas a catorce monedas provinciales debe sumarse la emitida por el Estado nacional (el “lecop”), de manera que en 2002 existían 15 monedas en circulación en la Argentina (Luzzi, 2012).

nacional en el marco del Programa de Unificación Monetaria (PUM), creado en marzo de ese año en el contexto de las negociaciones del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (Luzzi, 2012: 327-328).

Con relación a la crisis en el mundo del trabajo, tal como muestran Cerrutti y Grimson (2012), se trata de procesos de varias décadas, cuyo resultado más sobresaliente fue, en los años noventa, el crecimiento exponencial de la tasa de desempleo (que entre 1991 y 2001 creció en un 267%), acompañado de fenómenos de precarización e inestabilidad laboral y de creciente vulnerabilidad social. Asimismo, el impacto de las políticas neoliberales aplicadas durante toda la década se manifestó en una distribución del ingreso más inequitativa y en altos niveles de pobreza e indigencia. Transformaciones de similar importancia se registraron en la estructura social argentina, tal como lo muestran Del Cueto y Luzzi (2012) en su artículo. Los procesos de fragmentación social estudiados por las autoras, muestran la profundización de las distancias entre las distintas clases sociales, así como la creciente heterogeneidad al interior de ellas. Conjuntamente con dichos procesos, o como expresión misma de ellos, se profundizaron la segregación urbana, la diferenciación y segmentación a través de los consumos y el acceso a la educación, y la diversificación de prácticas y circuitos culturales.

Los sectores populares y las clases medias sufrieron procesos que conviene recordar brevemente, dado que constituyen un aspecto de singular importancia para comprender algunas de las experiencias de movilización y participación social que veremos en el próximo apartado. En efecto, si en los años ochenta el problema de la inflación fue central para explicar la disminución del poder adquisitivo de los asalariados, al tiempo que crecía de forma moderada la desocupación y se elevaba la cantidad de trabajadores informales y por cuenta propia, en los noventa fue el desempleo el problema que ocupó uno de los lugares centrales de la década. Las implicancias de estas transformaciones en el mundo del trabajo se expresaron en distintos procesos, entre los cuales se encuentra el de la *territorialización de las clases populares*. Dicho proceso hace referencia a una suerte de repliegue de los sectores populares al territorio barrial, espacio donde un entramado de organizaciones y de solidaridades colaboraba en dar respuesta a las necesidades básicas de sus habitantes. En palabras de Denis Merklen (2010):

Una vez iniciado el proceso de desafiliación, los perdedores se refugiaron en lo local y fueron reconstruyendo su sociabilidad principalmente a través de lo que hemos llamado una 'inscripción territorial'. Es en el marco de lo local que las clases populares organizan (parcialmente) tanto su participación política como sus lazos de solidaridad (ibíd.: 58).

Este proceso de inscripción territorial, tal como fue analizado por diversos especialistas, es uno de los aspectos claves para comprender uno de los fenómenos de movilización social más relevantes de la Argentina contemporánea: la constitución

de los movimientos de trabajadores desocupados, los llamados piqueteros, tema que retomaremos posteriormente.

Los sectores medios también sufrieron las consecuencias de las políticas neoliberales y la fragmentación social resultante. Como señalan del Cueto y Luzzi: “El empobrecimiento de una parte importante de estos sectores, sumado a la movilidad ascendente de otra, nos habla de una creciente disparidad de situaciones y condiciones de vida en el interior de unas clases que ya estaban, por definición, signadas por una fuerte heterogeneidad” (2012: 255).

Una cuestión importante para señalar con relación a las experiencias de movilización social que veremos desplegarse a partir de fines del 2001, es la participación en ellas de gran parte de esos sectores medios empobrecidos o en crisis. Lejos de intentar ocultar su situación o de seguir recurriendo a estrategias limitadas al ámbito de lo familiar o de lo privado como sucedió hasta fines de los años ochenta, estos sectores ya contaban con un recorrido de acciones de protesta, reclamo y reivindicación desarrollado a lo largo de toda la década del noventa, como veremos más adelante al describir las distintas formas de movilización y de protesta social.

Luego de este breve repaso de algunas de las principales características de los procesos que afectaron y modificaron la estructura social argentina a partir de los años ochenta en adelante, nos vamos a centrar en el período que corresponde al final de la era menemista y a un nuevo gobierno, y en las jornadas que tuvieron lugar a fines del 2001, incluyendo la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

EL FINAL DEL GOBIERNO DE LA ALIANZA Y LAS JORNADAS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001

Como resultado de las elecciones de octubre de 1999, una coalición conformada por la Unión Cívica Radical y el Frepaso (Frente País Solidario), la Alianza asumió el gobierno a fines de ese año. En poco menos de dos años, estaría fuera del poder luego de dos jornadas de intensa movilización social y protesta generalizada, que culminaron con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y que tuvieron como contrapartida gubernamental, la declaración del estado de sitio y la sistemática represión de miles de manifestantes en distintos puntos del país.

Las condiciones para el triunfo de la coalición aliancista se manifestaron en una serie de reclamos y demandas colectivas que llevaban tiempo sin ser atendidas y que fueron generando, junto con el acelerado crecimiento de la tasa de desempleo, un clima de disponibilidad hacia nuevas experiencias políticas.

En términos de contraste con el modelo económico del anterior gobierno, la Alianza no ofreció demasiado. No hubo alteraciones significativas de ninguna de las medidas macroeconómicas adoptadas en la etapa precedente e incluso uno de los ejes fundamentales de la campaña electoral se erigió en torno a la decisión de mantener el esquema de convertibilidad vigente. Es entonces en algún otro

lado donde debe buscarse la diferenciación política y esta pareció hallarse en la capacidad que tuvo la Alianza para captar inicialmente la disponibilidad antes aludida y combinarla con un buen diagnóstico acerca de las necesidades políticas más acuciantes de la sociedad argentina, que aparecían por doquier luego de una década de gobierno menemista. Así fue como el discurso de la coalición impulsó la transparencia, las políticas de combate a la corrupción, y, más en general, la llamada “nueva forma de hacer política” en claro contraste con las prácticas personalistas y poco transparentes de la etapa anterior. Por otra parte, la disputa interna del Partido Justicialista plasmada en el enfrentamiento entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, operaba un efecto desgastante en la opinión pública acerca de las contiendas políticas, propiciando indirectamente buena parte del apoyo popular que la coalición gobernante supo tener al principio de su gobierno.

Pese a esta conjunción favorable de factores, este capital político inicial fue socavado en forma vertiginosa en los meses subsiguientes no solo debido a múltiples desaciertos en la implementación de cursos de acción, sino también debido al modo en que se tomaban las decisiones (muchas de ellas sobre la base de decretos de necesidad y urgencia como en la etapa anterior), el evidente cortocircuito entre las dos fuerzas políticas que componían el gobierno y las demoras y dificultades para dar cabida a los reclamos y necesidades concretas de amplios sectores de la población. La política entonces, lejos de acercarse al sentido que se había pretendido para esta “nueva” etapa, continuaba viciada de la opacidad y la desconexión con las demandas sociales que venían caracterizando los años anteriores, pero con el agravante de que el combate a *esa* forma de hacer política había constituido el eje de la propuesta aliancista durante la campaña electoral.

En este escenario, analizado en profundidad por Juan Carlos Torre (2003), ocurrió un acontecimiento que contribuyó a desencadenar una de las situaciones críticas más graves en la vida institucional del país: la crisis del Senado a raíz de la sospecha del pago de coimas a los legisladores, a cambio de aprobar la ley de reforma laboral. Si bien no vamos a desarrollar aquí el detalle de estos hechos, sí es preciso destacar que abonaron aún más el terreno para un clima generalizado de desconfianza y descreimiento respecto de la clase política y el funcionamiento de las instituciones. La posición del presidente ante la situación constituyó, sin lugar a dudas, una de las pruebas más fehacientes de la distancia creciente que separaba a gobernantes y gobernados. De la Rúa no dio crédito público a las denuncias ni siquiera cuando el vicepresidente Álvarez se involucró activamente en impulsar su investigación, al punto tal de presentar su renuncia al cargo poco tiempo más tarde. Más allá de los papeles que jugaron uno y otro y de las diversas compulsas de poder que implicaba la situación, el presidente consideró infundadas las acusaciones contra los senadores. Sumado a ello, una buena parte de los dirigentes políticos desplegaron un notable espíritu de cuerpo, difícil de conseguir cuando se

trataba de cuestiones ajenas a sus intereses. El episodio del Senado, a pesar de que fue atentamente seguido a través de los medios de comunicación por la población, no derivó en movilizaciones ni manifestaciones públicas, pero tampoco pasaría desapercibido para la ciudadanía.

En franco proceso de deterioro, el lazo representativo fue puesto a prueba en las elecciones legislativas de octubre de 2001, en las cuales más del 40 % de la población votó en blanco o impugnó su voto. Se iniciaba así el último tramo de la profundización de una crisis que ponía en evidencia el desgaste del vínculo entre la sociedad y sus dirigentes políticos y dejaba al descubierto el carácter autorreferencial de la política argentina.

Antecedente político más próximo de los tumultuosos días de diciembre, el resultado de las elecciones legislativas se sumó a una serie de medidas financieras y de ajuste económico que terminaron de completar un cuadro de agotamiento social ya de por sí agudizado. Como señalan Abramovich y Vázquez (2012), algunas de estas medidas, tomadas en medio de una situación de recesión y altísimo desempleo, estuvieron dirigidas a impedir la libre disposición de dinero depositado en las cuentas bancarias (el llamado “corralito”) a fin de frenar un retiro generalizado y masivo ante los rumores de quiebra bancaria.³ Pero las medidas no afectaron a todos por igual. Los actores más poderosos de la economía habían retirado ya 10 mil millones de dólares de los bancos y fugado al exterior 30 mil millones, por lo que el corralito perjudicó principalmente a los pequeños y medianos ahorristas y al grueso de los trabajadores (ibíd.: 55).

Profundizando un poco más sobre este aspecto en particular, cabe agregar que el retiro de depósitos que tuvo lugar durante todo el año 2001: “... estuvo liderado por las grandes empresas (tanto locales como extranjeras) y que, en el caso de los particulares, las transferencias al exterior mostraron un considerable grado de concentración, indicando que se trataba de grandes inversores” (Luzzi, 2012: 151).

El día 19 de diciembre, junto con reclamos por comida frente a supermercados y negocios, comenzaron a producirse saqueos en todo el conurbano bonaerense, y ya

³ Como señala Luzzi (2012), las disposiciones más importantes del Decreto 1570/01 del 1º de diciembre de 2001, se referían a: “la prohibición a) de los retiros de efectivo superiores a 250 pesos o dólares semanales; b) de las transferencias al exterior (con excepción de las correspondientes a operaciones de comercio exterior, al pago de gastos o retiros que se realicen en el exterior a través de tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, o a la cancelación de operaciones financieras o por otros conceptos previa autorización del Banco Central); c) de la exportación de billetes y monedas extranjeros (salvo que las autorizara el Banco Central y se realizaran a través de instituciones sujetas a su control o fueran inferiores a 10.000 dólares)”. Aunque el gobierno fue flexibilizando parte de estas medidas (como la Ley 25557, que excluyó de los topes para los retiros de efectivo a todos los pagos laborales, jubilatorios, correspondientes a beneficios sociales y de la seguridad social y de alimentos en general), unos días más tarde la aplicación de esta ley fue suspendida por 90 días, en virtud de la emergencia económica y social declarada por la ley 25561 (Luzzi, 2012: 151)

en la madrugada del 20 se extendían reclamos y protestas por distintas ciudades del interior del país. El gobierno de De la Rúa reaccionó decretando el estado de sitio de forma irregular, es decir, sin intervención del Congreso (como lo marcan los artículos 65 y 29 de la Constitución Nacional), el cual estaba sesionando al momento de los hechos y sin establecer las garantías afectadas ni el alcance espacial de la medida. Esta decisión gubernamental colaboró en avivar aún más la protesta social, que a partir de allí se hizo sentir a través de la masiva afluencia de personas a las calles y la marcha a Plaza de Mayo en el caso de la Capital Federal, así como la expresión de repudio a la medida a través de “cacerolazos” en otras ciudades. Ante una situación en la que se combinaban saqueos y distintas formas de protesta en los principales centros urbanos del país, el gobierno ordenó la represión de los manifestantes, dejando un saldo de 39 muertos, cientos de heridos y 4500 detenidos en todo el país.⁴

La renuncia del presidente Fernando de la Rúa se produjo el día 20 de diciembre de 2001 y abrió una situación de inestabilidad y debilidad institucional, que incluyó la sucesión de cuatro presidentes en el lapso de unas pocas semanas.⁵ Luego de la elección de Eduardo Duhalde en enero de 2002 por la Asamblea Legislativa convocada a tal fin, se concretó definitivamente la salida del régimen de convertibilidad. Esto trajo aparejadas diversas consecuencias, sobre todo con relación a las obligaciones pactadas en dólares bajo dicho régimen. En tal sentido: “La respuesta estatal a esta cuestión fue una política de *pesificación* (es decir, de conversión en pesos de aquellas obligaciones) que conformó uno de los pilares de las políticas formuladas para salir de la crisis” (Luzzi, 2012: 153, cursivas del original).⁶

En los días posteriores a estas jornadas del 19 y 20 de diciembre, y en un arco de tiempo que se extenderá hasta fines del 2002, las experiencias de movilización social (algunas de trayectoria previa y otras originadas luego de esos acontecimientos) atravesaron el escenario social y político de la Argentina. Fueron motivo de tratamiento cotidiano en los diarios, la televisión, la radio y también de una intensa actividad de análisis y producción intelectual por parte de periodistas, especialistas,

⁴ “El 80 por ciento de los fallecidos eran menores de 30 años y al menos seis tenían entre 13 y 18”. Extraído de <http://cels.org.ar/19y20eljuicio/el-caso/> (Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–). Sobre la represión del 19 y 20 y el carácter inconstitucional del estado de sitio declarado por De la Rúa, puede consultarse también el Informe Anual 2002 del CELS, capítulo 2.

⁵ Luego de la renuncia de De la Rúa, lo sucedió Ramón Puerta, en ese entonces, presidente de la Cámara de Senadores, ya que el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez había renunciado en octubre. Puerta llamó a una asamblea legislativa para elegir presidente, lo cual dio lugar a la asunción de Adolfo Rodríguez Saá, del Partido Justicialista, quien asumió el 23 de diciembre y renunció el 30 del mismo mes, argumentando falta de apoyo político. Asumió entonces Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados y convocó a una nueva Asamblea Legislativa que elegiría a Eduardo Duhalde como nuevo presidente de la Argentina. Duhalde asumió el 2 de enero de 2002.

⁶ La política de pesificación atravesó diversas etapas, que han sido detalladamente analizadas en Luzzi (2012).

académicos y miembros de distintas organizaciones sociales. En lo que sigue, vamos a desarrollar las principales formas de movilización y protesta que ocurrieron en la etapa referida, intentando ofrecer una descripción y reconstrucción de sus características más sobresalientes.

LAS DIVERSAS EXPERIENCIAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL

Las experiencias que examinaremos a continuación no deben considerarse como procesos espontáneos, producto de una mera reacción social al deterioro de las condiciones económicas, sociales y políticas que caracterizó al período inmediatamente previo a la crisis del 2001, es decir, la década del noventa. Muy por el contrario, el conjunto de transformaciones operadas a lo largo de varias décadas tiene como punto de partida la instauración de la dictadura militar en 1976 y se extiende hasta la salida de la convertibilidad. O sea que los antecedentes de este ciclo de movilización social fueron gestándose lenta pero progresivamente a lo largo de veinticinco años. Si bien la dictadura militar inauguró un período en el que el modelo de desarrollo se basó en políticas de corte neoliberal, apuntando a dismantelar el modelo industrialista orientado al mercado interno, fue durante las décadas del ochenta y el noventa cuando se profundizaron y extendieron dichas políticas y sus consecuencias.

Durante todo ese período fueron tomando cuerpo distintos fenómenos de acción colectiva y movilización social, protagonizados por las clases populares y los sectores medios. Las diferencias en los actores que participaron, en los formatos de acción, en las demandas que plantearon, en las formas de organización, en los vínculos que lograron establecer con otros actores sociales movilizados no ocultaron que se trató de un proceso que tenía importantes bases comunes, aunque como hemos dicho antes esto no sea suficiente para explicar en toda su dimensión las acciones colectivas que tuvieron lugar en distintos puntos y regiones del país a lo largo del período. La transformación en el papel del Estado con relación al resguardo de intereses colectivos y como garante de las relaciones sociales, el deterioro del nivel de los salarios, el dismantelamiento de la red de protección y seguridad social asociada a la institución del empleo formal, el proceso de privatización de empresas públicas en sectores estratégicos de la economía nacional (energético, telecomunicaciones, ferrocarriles, aerolíneas, entre otros) que significaría el fin de muchas economías regionales y con ellas, de pueblos y familias enteramente ligadas a esas actividades productivas, constituyeron las bases comunes sin las cuales no pueden entenderse los procesos de movilización social que fueron desplegándose a lo largo de las dos últimas décadas del siglo xx en la Argentina.

A principios de la década del ochenta se iniciaron los *asentamientos*, ocupaciones ilegales de tierras que tuvieron lugar en distintas zonas del conurbano bonaerense como modalidad de acción colectiva vinculada a organizaciones barriales que promovieron, tal como señala Merklen, “un movimiento de base orientado

por el objetivo de la construcción de un barrio” y más tarde, fueron orientando sus demandas al sistema político para dar concreción a proyectos de escuelas, dispensarios, u otras formas de “inscripción social territorializada” que colaborara en “detener la devastación provocada por el empobrecimiento” (Merklen, 2010: 68). En casi todas estas experiencias, ya se encontraban formas de participación directa a través de dispositivos como las asambleas, la constitución de cuerpos de delegados y las elecciones de los dirigentes barriales.

Junto con estas experiencias, no pueden dejar de mencionarse otras de un tipo completamente distinto, que se desarrollaron al calor de la crisis hiperinflacionaria de mediados de 1989 y marcaron el final del gobierno de Alfonsín. Nos referimos a los *saqueos*, como formas expresivas de protesta y reclamo de alimentos frente a comercios y supermercados, que volverán a aparecer en los días de diciembre de 2001. En ese mes se produjeron numerosos eventos de este tipo, que se iniciaron en Santa Fe, para extenderse por distintas provincias.⁷

Desde inicios de los noventa, otra forma de protesta y movilización social se hizo presente sobre todo en algunas de las capitales provinciales, donde se produjeron los llamados *estallidos*. Se trató de episodios de protesta y reclamo frente a los edificios de las gobernaciones o las municipalidades y también las casas de los funcionarios, muchos de los cuales fueron incendiados, saqueados o atacados con palos por los manifestantes. Estas revueltas estuvieron relacionadas con el atraso de meses en el pago de salarios de los empleados públicos y llegaron a lograr en algunos casos, la destitución de los mandatarios provinciales como en Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Corrientes. Una vez más, no fue solo el deterioro de la situación económica lo que explicó la reacción social, sino una combinación de factores, entre los cuales se encontraban la indiferencia, la corrupción o el abuso de poder de las élites o las familias gobernantes frente a la situación de un gran sector de la población.⁸

Tempranamente en los años noventa, los sectores que lideraron las protestas que se extendieron por todo el país, fueron los gremios de docentes, de empleados estatales y de la salud. Pero los reclamos no llegaron, en ese período, a conjugarse de tal manera que pudieran adquirir una dimensión a escala nacional. Debido a las diferencias en las temporalidades con relación al atraso en los pagos en cada provincia o municipio, a los distintos plazos y características en la negociación que los gremios emprendían en cada lugar, entre otros factores, los conflictos quedaron diseminados, atrapados entre el escenario nacional y provincial y no llegaron

⁷ Un análisis detallado de estas experiencias puede encontrarse en Auyero (2006 y 2007).

⁸ El caso más emblemático ha sido el del llamado “Santiagueñoazo”, revuelta popular que tuvo lugar en dicha provincia en el mes de diciembre de 1993 y que ha sido analizada en profundidad por Marina Farinetti (2005).

a coincidir en un reclamo generalizado, constante o más homogéneo (Svampa y Pereyra, 2003).⁹

A partir de mediados de la década del noventa, se sucedieron una serie de acciones emprendidas por distintos grupos (desempleados, comerciantes, sindicatos, políticos locales), basadas en el corte de rutas para llamar la atención de las autoridades y poder negociar algún tipo de salida a la crisis provocada en sus situaciones personales, familiares y colectivas, en mayor medida como consecuencia del cierre de fuentes de trabajo y la crisis que aquejaba a las economías locales. En junio de 1996 se realizó el primer corte de ruta en las localidades de Plaza Huincul y Cutral-Có, provincia de Neuquén, y en 1997 hubo cortes de ruta en General Mosconi y Tartagal, en la provincia de Salta. Como observaron Svampa y Pereyra con relación a estos cortes, tanto en el caso neuquino como en el salteño, se trató no solo de la experiencia de un Estado nacional en retirada y el desarraigo y la desprotección social resultantes, sino también de economías desplegadas en torno a la actividad petrolera (YPF) que en esas localidades se habían desarticulado de manera vertiginosa, afectando a trabajadores que contaban con carreras laborales estables, incluso de varias generaciones (Svampa y Pereyra, 2003: 28).

Los cortes de ruta se extendieron luego hacia otros lugares del país, sobre todo el oeste y el sur del conurbano bonaerense. En octubre de 2000 se produjo un corte en la Ruta 3, en el populoso partido de La Matanza, que marcó un salto en la visibilidad del fenómeno, dado que fue recogido por la prensa nacional y debatido por los partidos políticos. Los cortes se multiplicaron en diversos lugares del conurbano y en otras ciudades del interior del país y fueron sufriendo cambios y transformaciones, estableciéndose de a poco como una oportunidad para medir relaciones de fuerza con el gobierno nacional, ya que se trataba de negociar la distribución de la ayuda social. Es decir, no se trataba solo de la expresión de un malestar, sino también de una forma de articular una demanda social (de empleo) y de hacerlo bajo un formato determinado (el corte).

Las *organizaciones de desocupados* presentan una gran complejidad, tanto por las distintas vertientes políticas, ideológicas, territoriales, etcétera, que atraviesan dichas organizaciones, como por las diversas formas de construcción de identidad, de relación con las instituciones estatales y de militancia territorial, social y política que caracterizan a sus integrantes. Uno de sus rasgos más característicos es la base territorial de las organizaciones. Como ha señalado Merklen (2010) sus dirigentes son en su mayoría dirigentes barriales y además, es sobre esa identidad barrial

⁹ Sí tuvieron un carácter nacional los reclamos de dos sectores específicos: el de los empleados públicos nacionales y el de los jubilados, afectados estos últimos por la transformación del sistema previsional. Asimismo, otro sector que logró “nacionalizar” el reclamo fue el de los docentes, pero recién en 1997 con la instalación de la “Carpa Blanca” frente al Congreso Nacional. Con relación a la actuación y movilización del actor sindical durante los años noventa e inicios de la nueva década, ver Pereyra (2008).

que los movimientos organizan la participación de sus bases y entablan modos de relación y negociaciones con las autoridades públicas.

El fenómeno ha dado lugar a una voluminosa cantidad de investigaciones y estudios en las ciencias sociales, análisis que contribuyeron a ampliar y profundizar su comprensión.¹⁰ Pero aquí nos limitamos a una descripción general, haciendo hincapié principalmente en el papel que jugaron dichas experiencias o cómo se relacionaron en los momentos más álgidos de la crisis (entre diciembre de 2001 y a lo largo del 2002) con otras formas de movilización y participación social. Para ello, pasaremos ahora a examinar una de las experiencias sociales más emblemáticas del 2001, las asambleas barriales, y veremos allí cómo se conformó una incipiente vinculación con algunas organizaciones de desocupados, para ir luego decayendo hacia fines de 2002.

En los días previos a la renuncia del ex presidente De la Rúa, y sobre todo luego que el gobierno decretara el estado de sitio, se sucedieron en la Capital y en las principales ciudades del país, una serie de manifestaciones caracterizadas por el uso de cacerolas y otros utensilios de cocina (los *cacerolazos*), que eran golpeadas para provocar ruido y expresar la protesta y el descontento, así como la salida a la calle, la quema de neumáticos y el corte de avenidas, bulevares y puentes. En la Capital Federal, particularmente, empezaron a juntarse grupos de vecinos en las esquinas y a manifestarse de esa manera, algunos marchando hacia Plaza de Mayo, Plaza del Congreso, monumentos o sitios emblemáticos de la ciudad y otros cortando o impidiendo el paso en las principales arterias de su barrio, en el marco de bocinazos de autos, colectivos o taxis que se repetían en gran parte de la Capital. Las protestas se sucedieron a lo largo de toda la noche y la madrugada del 20 de diciembre hasta que, pasado el mediodía, el gobierno dio la orden de desalojar la Plaza de Mayo, desatándose así una violenta represión policial sobre los manifestantes.

En las semanas siguientes a los *cacerolazos* y bajo la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, comenzaron a congregarse grupos de vecinos en distintos barrios y puntos de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y de otras ciudades como Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, conformándose las denominadas *asambleas barriales*.¹¹ De modo muy general, diremos que las asambleas tuvieron una conformación heterogénea, en la cual vecinos, militantes de partidos

¹⁰ Entre otros, Svampa y Pereyra (2003), Delamata (2005), Pereyra, Pérez y Schuster (2008), Merklen (2010).

¹¹ Utilizamos aquí este nombre genérico, destacando que los propios actores dieron en su momento diferentes nombres a la experiencia en la que tomaban parte, llamándolas “asambleas vecinales”, “asambleas barriales”, “asambleas populares” o también, “asambleas de vecinos autoconvocados”. Según un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, en marzo de 2002 existían unas 272 asambleas en todo el país (41% de las cuales se encontraba en Capital Federal, 39% en la provincia de Buenos Aires, 14% en Santa Fe, 4% en Córdoba, 1% en Entre Ríos y 1% en Río Negro). El 06/9/2002, el mismo Centro publicó un informe que registraba el aumento

políticos, desempleados, intelectuales, estudiantes, algunos integrantes de organizaciones de desocupados, entre otros, empezaron a participar y a tener reuniones periódicas semanales en plazas o esquinas del barrio y más tarde, en clubes o predios de la zona o incluso en casas tomadas. En esas reuniones, sus miembros comenzaron a discutir distintos temas, algunos más ligados a la coyuntura política general (“corralito”, sucesión de presidentes, crisis económica, corrupción, represión, entre muchos otros) y otros más vinculados a la realidad de cada barrio (comedores y merenderos, “ollas populares”, ayuda escolar, espacios de recreación y deportes, asistencia social, etcétera). A medida que fue transcurriendo el tiempo, también fueron apareciendo temas propios del funcionamiento y la organización misma que se daban las asambleas, como los mecanismos de votación, la conformación de comisiones internas sobre distintas temáticas,¹² la relación con instancias estatales, con otros actores movilizados, entre algunos de los que podemos mencionar. En los primeros meses del 2002 se conformó la llamada Asamblea Interbarrial de Parque Centenario, cuyas reuniones contaron en sus inicios con una gran cantidad de asistentes (asambleas de Capital) para ir decayendo con el correr del tiempo y las dificultades que se presentaron con respecto a las formas de representación, al papel de los partidos políticos de izquierda que buscaban tener un protagonismo mayor en la dirección y orientación política, etcétera.

Un elemento común entre los numerosos análisis e investigaciones que se realizaron sobre el fenómeno de las asambleas es, como ya dijimos, el señalamiento de la gran heterogeneidad que caracterizó a la experiencia. Pero también, que las asambleas expresaron una fuerte crítica a la clase dirigente y una apelación a que el Estado volviera a hacerse presente en áreas largamente desatendidas (sobre todo, las áreas sociales). Por lo demás, también se ha analizado que algunas de las experiencias se plantearon el objetivo de encontrar nuevas formas de participación social y de construcción política, asociadas a la autogestión, a la horizontalidad en la toma de decisiones y a la democracia directa.

Como decíamos, las asambleas barriales postularon en su seno un llamamiento para que el Estado volviera a hacerse cargo de aquellas funciones de las que se había alejado durante décadas, en especial las que se vinculaban a su papel como instancia de protección y garantía de derechos sociales, de formulación de políticas públicas inclusivas y de distribución más equitativa de la riqueza. Pero también, estas experiencias postularon una crítica a determinadas prácticas dentro del Estado, ligadas a la corrupción, al favorecimiento de intereses particulares en perjuicio

de 272 en marzo a 329 asambleas en agosto de ese mismo año, esto es, un 21% de aumento en 5 meses. Fuente: www.nuevamayoria.com, en fecha 21/5/2003.

¹² En la mayoría de las asambleas existían distintas comisiones (prensa, deportes, comedor, recreación, salud, desocupados, etcétera), que se reunían aparte del día del plenario y llevaban adelante actividades diversas.

de las mayorías y expresaron un rechazo a la política institucional y a las formas tradicionales de representación política como viciadas por un distanciamiento irreversible respecto de los “ciudadanos comunes”.

Se suscitó una interesantísima discusión sobre el Estado. Los partidos políticos (que enseguida aparecieron en la asamblea desde su constitución), estaban en contra de iniciar la relación con el CGP del barrio... muchas personas decíamos que justamente, teníamos que acercarnos para volver a apropiarnos de lo que es nuestro. El apoderamiento de esos espacios era una forma de poder participar cada vez más, de decisiones y de herramientas... porque son instrumentos que le pertenecen a la comunidad, porque lo que estaba en discusión era... ¿qué es el Estado? En ese sentido, constatábamos la pérdida de la *idea de que el Estado somos nosotros*. Entonces, había toda una discusión que trataba (al menos algunos tratábamos) de *incorporar esta idea del Estado para reflotarla* y para reconocer que se pueden usar esos espacios, se puede pedir y demandar... porque era muy contradictorio, ellos [los militantes de partidos políticos] *iban a pedirle al Estado las bolsas de comida para los desocupados, pero no aceptaban tratar otras cuestiones...* entonces ¿cómo es la cosa?”

Entrevista de la autora a Berta, Asamblea de Almagro, 6/3/2003, cursivas propias.

Muchas de estas experiencias asamblearias a las que nos referimos fueron estableciendo vinculaciones (en mayor o en menor medida, de acuerdo con las características de cada asamblea) con otros actores sociales movilizados. Así, a lo largo de todo el 2002, no solo participaron de las reuniones grupos que pertenecían a alguna organización piquetera, ahorristas que habían conformado agrupaciones, trabajadores de fábricas recuperadas, entre otros, sino que también las asambleas tomaban parte en marchas, sentadas, ocupaciones o tomas de casas, movilizaciones callejeras, entre otro tipo de acciones colectivas. Una de las principales ocasiones en que se hizo visible el acompañamiento del movimiento de asambleas a las acciones de organizaciones piqueteras, por ejemplo, fue la marcha organizada por estas últimas a Plaza de Mayo, entre los días 27 y 28 de enero de 2002. Proveniente de La Matanza, la marcha de las organizaciones de desocupados hacia la Capital fue recogida y tratada por los principales medios de prensa. Estos presentaron el apoyo de los sectores medios (identificados con las asambleas o con los movimientos de ahorristas, pero también con los comerciantes que aplaudían el paso de las columnas) como una novedad y destacaron una de las consignas predominantes en los cánticos de los manifestantes: “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”, como una muestra de la solidaridad manifestada en ese momento entre distintos sectores sociales.¹³ Esa no fue la única oportunidad de acciones de apoyo o de participación o acciones conjuntas entre asambleas y organizaciones de desocupados, pero sí fue una de las más visibles y sobre todo, retratada de manera positiva por los grandes medios de

¹³ Hemos trabajado específicamente este tema en Schillagi (2008).

comunicación. Posteriormente, y sobre todo luego de otra gran manifestación que tuvo lugar en el mes de junio de 2002 en Puente Pueyrredón, tristemente célebre por el asesinato de los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense (acontecimiento posteriormente conocido como “la masacre de Avellaneda”),¹⁴ fue produciéndose un distanciamiento en el tono y las expresiones con las que la televisión y la prensa gráfica habían celebrado la presencia de las “clases medias” en las acciones colectivas de los piqueteros. De allí en más, adquiriría predominio un retrato amenazante de las organizaciones piqueteras, asociadas a actos violentos, alteradores del orden público, en contraste con la protesta pacífica y la apuesta por el regreso a la normalidad atribuida a los “vecinos” o los “ciudadanos de bien”.

En los cacerolazos de diciembre de 2001 y comienzos de 2002, pudo distinguirse también otra experiencia claramente asociada a la crisis que recorría la Argentina: nos referimos a los *ahorristas* y las acciones que llevaron adelante tanto en el espacio público como en el ámbito judicial.¹⁵ Una buena parte de los que habían sido perjudicados por las medidas de restricción monetaria y de pesificación de los depósitos en dólares, llevaron su reclamo a los tribunales presentando recursos de amparo en defensa de sus derechos de propiedad. También durante los primeros meses del 2002 se fueron conformando agrupaciones, que adquirieron con el tiempo mayor o menor grado de formalidad institucional y que sostuvieron diferencias con base en sus principales métodos de acción, a sus objetivos, a la identificación de los responsables del conflicto planteado, al perfil de sus miembros, etcétera.¹⁶

¹⁴ “El 26 de junio de 2002 funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires asesinaron a dos jóvenes manifestantes en las inmediaciones del Puente Pueyrredón en el marco de una manifestación que pretendía cortar el acceso sur de la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal. Durante más de dos días la clase política repitió la versión oficial que responsabilizaba a los manifestantes por la violencia letal. Entre otros factores, la publicación de imágenes que contradecían la versión oficial y en las que se ve a las víctimas con vida al momento en que la policía bonaerense ingresó a la Estación Avellaneda, pusieron en evidencia la falsedad del relato oficial así como la responsabilidad policial en los homicidios. La Masacre de Avellaneda fue una bisagra político-institucional, y en los años siguientes se debatieron e implementaron diversas políticas de control del uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones públicas” (Perelman, 2010: 2).

¹⁵ “El episodio que desencadenó las movilizaciones de quienes comenzaban a ser nombrados como ‘los ahorristas’ fue una serie de medidas dictadas por el gobierno nacional entre diciembre y febrero de 2002, por las cuales se restringía el acceso al efectivo depositado en las cuentas bancarias (el denominado ‘corralito’), se diferían los vencimientos de los plazos fijos (el ‘corralón’) y se pesificaban todos los depósitos bancarios nominados en dólares a un tipo de cambio inferior al de mercado (la ‘pesificación’)” (Luzzi, 2008: 3).

¹⁶ Entre las principales agrupaciones pueden nombrarse Ahorristas Bancarios Argentinos Estafados (ABAE) liderada por el actor Nito Artaza, Asociación de Ahorristas de la República Argentina (AARA), Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD) y también los ahorristas que se agruparon en Diagonal Norte y Florida.

Algunos análisis sostuvieron que hubo una suerte de estigmatización de esta protesta, en cuanto fue considerada una acción basada en intereses particulares, egoístas, propios de las clases medias argentinas que solo se manifiestan en público “cuando les tocan el bolsillo” (Svampa, 2006). Sin embargo, la protesta de los ahorristas pudo ser abordada desde perspectivas que aportaron dimensiones relevantes con relación a lo que sus acciones colectivas colocaron en el debate público. Es importante remarcar que la protesta de los ahorristas no tuvo solo como blanco de sus críticas al gobierno, sino también a los bancos y el sistema bancario en general. Es decir, que se trató de un conjunto de acciones colectivas que dieron visibilidad y lograron poner en discusión, de manera novedosa, algunas cuestiones como la relación entre los bancos y sus clientes, el valor social del ahorro y del dinero, la relación entre ahorro y clases medias, entre tantas otras (Luzzi, 2008; Zenobi, 2005).

En lo que sigue vamos a examinar dos tipos de experiencia social que si bien continuaron vigentes durante la crisis de 2001 e incluso posteriormente, como veremos, responden a procesos previos y no constituyen formas de protesta social, por lo cual se diferencian de los casos que hemos visto hasta aquí. Se trata de los clubes de trueque y de las fábricas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores.

La experiencia de *clubes de trueque* emergió a mediados de la década del noventa, pero también ha sido considerada como una de las formas de participación social que tuvieron un acelerado crecimiento durante la crisis del 2001. Conformados como círculos de intercambio de bienes y servicios en los que no existía mediación del dinero, los clubes o nodos fueron creciendo a partir del año 2000, sobre todo con relación a la proliferación de esta actividad que se extendió hacia otras provincias del país, al número de miembros que lograron congregarse y la visibilidad que adquirieron por aquellos días en comparación con lo que venía sucediendo desde sus inicios.¹⁷ Pero además de ello, a partir de la crisis de fines de 2001, la experiencia del trueque fue acentuando una tendencia previa: la creciente heterogeneidad social de sus participantes. Si en un principio este tipo de experiencias había albergado principalmente a una parte de las clases medias empobrecidas, a partir de la crisis, los sectores populares fueron adquiriendo cada vez mayor presencia. Esta heterogeneidad también fue visible en las distintas formas de participar, en los objetivos de cada individuo o familia o en el sentido que le asignaban. Un aspecto adicional que aportó a esta característica de heterogeneidad fueron las distintas formas de relacionamiento con otras experiencias de participación social o su completa ausencia en algunos casos. En general, puede señalarse sobre la base de los trabajos que abordaron el trueque como experiencia social, que los vínculos con otras formas de participación, sobre todo aquellas más identificadas con la crisis

¹⁷ La actividad del trueque creció de forma exponencial a partir del año 2000. En 2001 se crearon 20.000 nuevos clubes por mes y entre diciembre de ese año y enero de 2002, la cifra de clubes se elevó a 5000 por día (Luzzi, 2006: 219-220).

del 2001 no fueron numerosos ni constantes, sino más bien excepcionales y con características diferentes según los clubes y las zonas donde estos estaban ubicados. La forma de vinculación más común fue entonces la pertenencia simultánea de algún(os) miembro(s) del nodo a alguna asamblea barrial, a alguna organización social o a un partido político, pero no llegaron a constituir espacios de intercambio regulares o con objetivos comunes más allá de determinadas acciones puntuales (Leoni y Luzzi, 2003).

La experiencia relacionada con la autogestión laboral (las empresas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores) constituye también una forma de participación y movilización social que integró, junto a aquellas que hemos descripto hasta aquí, el paisaje social de la Argentina antes, durante y después de las jornadas de fines de 2001. Aunque se trata de un fenómeno con antecedentes en décadas pasadas, fue adquiriendo características singulares durante los años noventa, asociado a la crisis de desempleo y de integración social. Pero fue durante los primeros años del nuevo siglo cuando su cantidad, visibilidad y presencia en el debate público se incrementaron notoriamente. Como señala Wyczykier (2012), el tránsito de la dependencia a la autogestión laboral fue facilitado por el apoyo y acompañamiento que determinados actores (algunas organizaciones gremiales, asambleas barriales, dirigentes y partidos políticos, sectores universitarios, vecinos, entre otros) otorgaron a los agrupamientos de trabajadores. En la mayoría de estas experiencias se trató de empresas que estaban en quiebra o en crisis al momento de desarrollarse los conflictos que culminaron en la autogestión. Los trabajadores de dichas empresas quedaron al resguardo de sus fuentes laborales y, asistidos por organizaciones gremiales y sociales, permanecieron en sus lugares de trabajo intentando una salida al conflicto o a la situación de incertidumbre en la que se encontraban, en muchos casos, impulsando un proceso de reanudamiento de la actividad productiva por sus propios medios (Wyczykier, 2012: 227).

Las acciones y formas de vinculación que se establecieron durante la crisis de 2001-2002 fueron variadas según cada empresa o experiencia, pero aquí cabe resaltar algunos ejemplos que permitan comprender mejor en qué consistieron y también, completar el panorama general que estamos intentando establecer sobre las formas de participación social y de acción colectiva que tuvieron lugar en el período. Así, tanto las asambleas barriales, como algunas organizaciones piqueteras o colectivos conformados por distintas universidades nacionales, se acercaron a la experiencia de estos trabajadores y fueron forjando algunos vínculos e iniciando acciones conjuntas de distinta índole. En el caso de las asambleas, muchas de ellas fueron un apoyo importante para poder dar continuidad a la actividad productiva, colaborando en el fondo de huelga, organizando la recolección de fondos para poder fabricar (como en el caso de Grisinópolis); otras constituyeron un apoyo frente a las acciones represivas que tenían como objetivo desalojar a los trabajadores que habían tomado una fábrica, resistiendo junto a ellos en el acampe o el lugar de trabajo

(por ejemplo, en el caso de la fábrica Brukman, las asambleas de distintos barrios sesionaron en sus puertas cortando una avenida para dificultar la llegada de las fuerzas policiales). También algunas organizaciones de trabajadores desocupados participaron de diferentes maneras, como escudo humano, por ejemplo, para apoyar la ocupación del lavadero de lana Lavalán, en Avellaneda o en el mismo sentido, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de La Matanza con la cooperativa Baskonia. Las universidades tampoco estuvieron ausentes en estas formas de vinculación con las fábricas recuperadas. Algunas facultades contribuyeron no solamente a través de aportes a los fondos de huelga, sino también brindando conocimientos técnicos y asesoramiento de diversa índole para la resolución de conflictos o la administración de las fábricas y la producción (Figari, 2007).¹⁸

Hasta aquí hemos hecho un recorrido descriptivo respecto de las principales formas de movilización social que, en algunos casos, anteceden por varios años a la crisis del 2001, y en otros, emergen en su contexto. Lo que resulta importante destacar que si bien este largo ciclo de movilizaciones sociales va ir decayendo con relación a muchas de estas experiencias a lo largo del año 2002, esto no implicó su completa desaparición, sino un proceso de reconfiguración posterior, iniciado sobre todo a partir del año 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la nación.

DISTINTAS FORMAS DE INTERPRETAR LA CRISIS EN LOS ANÁLISIS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EN LOS ANÁLISIS POLÍTICOS

La crisis del 2001 ha sido abordada desde perspectivas muy diversas dentro del campo de las ciencias sociales y también en los análisis políticos de especialistas, periodistas, académicos, militantes y distintos colectivos y organizaciones sociales. En esta sección intentaremos hacer una síntesis de las principales formas de interpretarla, de darle un contenido significativo o de destacar ciertos aspectos por sobre otros, sin perder de vista que no podremos agotar la multiplicidad de análisis producidos al respecto.

Los énfasis en diversas dimensiones analíticas marcan algunas diferencias importantes en los trabajos sobre el tema. Mientras algunos hacen hincapié principalmente en la crisis del modelo de desarrollo neoliberal hasta entonces vigente y en las características de los procesos económicos, otros, de raíz más politológica, se centran en las dinámicas electorales, las transformaciones en la cultura política

¹⁸ Por ejemplo, en el caso de la fábrica de cerámicos Zanón, de Neuquén, se creó el GUIA (Grupo Universitario Interdisciplinario de Apoyo), integrado por algunas universidades nacionales, como la Facultad de Ciencias Económicas y de Ciencias Exactas de la UBA y la Universidad del Comahue. Ver otros ejemplos en Figari (2007).

y en el desgaste del vínculo representativo (gobernantes-gobernados) para explicar y comprender lo sucedido.

A lo largo del texto hemos utilizado una y otra vez la categoría de “crisis” para referirnos al tema que estamos tratando, y como han marcado algunos análisis, esa categoría es una forma de interpretación en sí misma. Maristella Svampa (2013) señala, por ejemplo, tres lecturas posibles de lo sucedido en 2001-2002: *crisis*, *argentínazo* y *acontecimiento*. Las interpretaciones basadas en la noción de crisis supusieron, según la autora, la idea de quiebre de un modelo de dominación, el neoliberal, asentado en la convertibilidad y en el consenso y legitimidad que los sectores dominantes se aseguraron durante su vigencia. Adicionalmente, la idea de crisis incluía el agotamiento o el colapso de las formas de representación clásicas, debido a un progresivo vaciamiento del sentido de la política y de la legitimidad de los políticos para ejercer adecuadamente la representación de los ciudadanos.

El *argentínazo*, por su parte, es una lectura del 2001 basada en el carácter nacional, insurreccional y acumulativo de las luchas sociales, visión que lo equipara a una gesta histórica y que fue predominante en los análisis realizados por algunos partidos de izquierda. El aspecto insurreccional evocaba una serie de puebladas que fueron emblemáticas tanto con relación a un ciclo histórico más largo, como por ejemplo el Cordobazo y el Rosariazo en los años sesenta, como con eventos más cercanos en el tiempo, entre los que se podían contar el Santiagueño y las puebladas en localidades de Neuquén, que ya hemos mencionado en el texto.

Finalmente, Svampa sostiene que una interpretación también disponible acerca del 2001 es la que coloca en el centro del análisis la noción de *acontecimiento*. En esta línea, lo que se resalta es el carácter novedoso del evento, considerándolo como un momento de apertura hacia nuevas formas de protagonismo social y hacia experiencias aún sin explorar de participación y democracia directa. Un conjunto de intelectuales y colectivos fueron elaborando ese tipo de lectura y abriendo el debate al respecto, incluso convocando figuras académicas o intelectuales del exterior que presentaron y discutieron sus interpretaciones (algunas desde la filosofía política, otras más en consonancia con investigaciones militantes) en nuestro país.

En una lectura más reciente en el tiempo, Sebastián Pereyra (2013) señala que la crisis del 2001 fue analizada como acontecimiento y también como proceso. En los primeros intentos por comprender lo sucedido, distintas aproximaciones buscaban en los procesos de desestructuración social de las décadas precedentes (especialmente aquellos que habían tenido a los sectores medios como protagonistas) una perspectiva que permitiera inscribir los sucesos de diciembre de aquel año en un ciclo histórico más largo. Pero por otro lado, también era necesario entender la forma específica que había adquirido la manifestación y movilización callejera de esos sectores medios en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, es decir, era necesario pensar también la particularidad del acontecimiento.

Además, el autor sostiene que lo singular del hito que marcó el 2001 fue el estallido de los sectores medios, expresado en los cacerolazos, las asambleas barriales y las protestas por los ahorros confiscados. Pero de manera adicional, esa movilización expresaba la forma en que esos sectores fueron construyendo a lo largo del tiempo un tipo de vínculo con la política. Basado en la crítica a la política y principalmente en considerarla como una actividad corrupta en general, ese vínculo tradujo la distancia que fue separando a los ciudadanos de los dirigentes o de la política en su sentido más tradicional.

Como decíamos, la diversidad con que fue abordado el período que culminó con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y de la coalición partidaria que había ganado las elecciones, la Alianza, es muy vasta. Las ciencias sociales produjeron muchos trabajos, algunos de los cuales resultaron aportes valiosos, tanto porque permitieron reconstruir lo sucedido, estudiar y comprender las distintas formas de movilización social, plantear interrogantes sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales previos al estallido, como porque abrieron un rico debate sobre los significados y las “huellas” que la llamada crisis del 2001 ha dejado en la sociedad y la política argentina, que llega hasta nuestros días.

Para poder profundizar un poco más sobre estas diversas interpretaciones que no solo partieron del ámbito académico, sino que también fueron producidas por periodistas, militantes, miembros de organizaciones sociales, entre otros colectivos, vamos a ilustrar sintéticamente algunas “líneas” que hemos seleccionado de entre muchas otras posibles. El objetivo es que estos fragmentos de intervenciones, pensamientos, escritos y opiniones, nos ayuden a captar algo de ese clima de época en el que, a través de acaloradas polémicas, discusiones e intercambios públicos, se intentaba comprender los fenómenos de movilización social que sacudían a la Argentina.

EL “ORDEN INSTITUCIONAL”

Un tipo de análisis que podríamos denominar “línea del orden institucional”, basaba sus intervenciones en remarcar que el conjunto de experiencias de movilización y participación social que emergieron o alcanzaron mayor auge y visibilidad a partir de fines de 2001 para extenderse a lo largo de todo el 2002, alertaban sobre la necesidad de volver a los cauces institucionales “clásicos” de mediación política: los partidos políticos, la política institucional. Esta crítica estaba dirigida sobre todo a una de las experiencias de movilización más emblemáticas del 2001: las asambleas barriales. En tal sentido expresaba Oscar Oszlak en marzo de 2002:

Tuvimos una democracia de tipo delegativa donde el ciudadano vota cada tanto tiempo y de esa manera hace conocer sus preferencias, encarnadas en determinada fórmula electoral. En este momento, la sociedad ha encontrado

otras formas de hacer escuchar su voz [...]. Pero la única manera de modificar los contenidos, las orientaciones y las posiciones de los gobiernos va a depender fundamentalmente de un cambio en las posiciones del poder político. *Bienvenidos los movimientos sociales y la voz de la sociedad, pero sería importante que sea una demanda estructural la que prevalezca sobre la coyuntura. Y que se encuentren los mecanismos de representación política que puedan hacer pesar esa voz dentro de la agenda estatal.*¹⁹

Para este especialista, como para muchos otros que opinaban e intervenían en un sentido similar por aquellos días, la experiencia social encarnada por las asambleas barriales era positiva en cuanto expresaba demandas legítimas de los ciudadanos, pero el acento estaba puesto en que esas demandas debían volver a sus canales “naturales” de mediación, apenas pasada la efervescencia social. “La voz de la sociedad” parecía una condición necesaria pero no suficiente para encauzar las demandas colectivas y aspirar a un vínculo renovado con el Estado. Oszlak ponía así de manifiesto una línea argumentativa que atravesó numerosos trabajos de académicos e intelectuales que intentaban dar cuenta de esos fenómenos sociales, pero también intentaban presentar una advertencia a fin de resguardar la institucionalidad democrática, poniendo en juego argumentos y fundamentos vinculados a la calidad republicana del régimen político y a los consecuentes mecanismos y resortes limitativos que deben preservarlo.

También algunos análisis expresados en editoriales y notas de la prensa escrita, muestran este énfasis en el funcionamiento de las instituciones. El diario *La Nación*, por ejemplo, siguió una línea editorial que además de poner en primer plano la cuestión del orden institucional, remarcaba la necesidad de dar protagonismo a las organizaciones no gubernamentales para “contener” la protesta social o el desorden y para que sean estas las encargadas de ejercer una fiscalización de las acciones estatales y la conducta de los funcionarios. Así, por aquellos días, sus columnas estuvieron pobladas de reportajes, suplementos, notas de investigación y editoriales acerca de estas organizaciones, entre las más referidas: Poder Ciudadano, Conciencia, Fundación Novum Millenium, Participación Ciudadana y Fundación Ciudad. El director ejecutivo de Poder Ciudadano opinaba en las páginas del diario:

Articular y complementar los cacerolazos espontáneos y las asambleas autoconvocadas debería ser una obligación de las Organizaciones No Gubernamentales. Pasar de la vía pública al espacio público, de la plaza al Congreso o a los Tribunales, de la protesta a la propuesta. [...] Para construir por completo la nueva democracia, debemos comenzar por completar la participación ciudadana no sólo en la vía pública, sino en el espacio público. Se debe comprender

¹⁹ Oszlak, Oscar, “Para pensar el Estado”, reportaje realizado por Washington Uranga, *Página 12*, 25/3/2002, destacado propio.

que la calidad de vida no se define en las plazas sino en las instituciones [...]. A la participación espontánea hay que sumarle método.²⁰

En estas consideraciones, la interpretación de las formas emergentes de participación social, en primer lugar las asambleas barriales, destacaba no tanto el papel de los partidos políticos o del Estado (como en las intervenciones que hemos visto antes) sino el de las organizaciones no gubernamentales (ONG) o el llamado Tercer Sector. En tal sentido, una participación más activa y “ordenada” de la sociedad civil a través de estas organizaciones debía darse principalmente en la forma de un control de la gestión estatal a fin de lograr mayor eficacia, transparencia y gobernabilidad, colaborando en vaciar de sentido la situación que había generado la protesta o la necesidad de reclamar. En estas posturas, las cuestiones más tratadas eran las relativas a la *participación cívica*, los *derechos ciudadanos*, los *líderes y/o el liderazgo*, el *control de la gestión estatal* y el mejoramiento de la *calidad de vida*. Así, dentro de la línea de interpretación que hemos llamado “línea del orden institucional” aparecía un matiz relacionado con las organizaciones no gubernamentales, que estuvo muy presente en algunos ámbitos durante los primeros meses del 2002.²¹

A la par de esta línea interpretativa acerca de las experiencias de movilización social, los grandes diarios también fueron desarrollando posturas muy claras con relación a la protesta social y sobre todo, con relación a las acciones colectivas protagonizadas por determinados actores, entre los que se destacaban principalmente las organizaciones piqueteras. En tal sentido, cuando muchos de los columnistas y editorialistas de los principales medios de comunicación se referían a dichas organizaciones, la noción de “participación ciudadana” no era utilizada para definir y mucho menos para valorar de manera positiva las acciones de piqueteros o desocupados en el espacio público.

Si bien los ejemplos serían innumerables, aquí vamos a ilustrar estas posiciones de manera resumida, teniendo en cuenta que se trató de una de las principales formas de tratar y retratar las protestas y las formas de movilización que proliferaron en el período tratado:

Es hora de que los cortes de ruta sean erradicados de la vida argentina, no sólo por el perjuicio que ocasionan a quienes se ven privados de un derecho esencial como es el de transitar por el territorio nacional, sino también porque constituyen una deprimente señal del desorden social en que vivimos y el desprecio que algunos sectores suelen tener por los derechos ajenos.²²

²⁰ “Esfuerzo conjunto para la reconstrucción”, por Carlos March (Poder Ciudadano), *La Nación*, 23/2/2002.

²¹ Al respecto, puede consultarse en diario *La Nación* del 23/2/2002: “Pasar del reclamo a la propuesta” por Javier Comesaña (Fundación La Nación); “Alternativas solidarias para la contención social”, por Adriana Don (Fundación Novum Millenium).

²² “El corte de ruta, un recurso intolerable”, *La Nación*, Editorial I, 13/2/2002.

Cuando los canales institucionales se bloquean o desbordan, la acción directa inunda el sistema. En la medida que la acción directa invade a la sociedad, pone en riesgo el orden democrático. En lugar de correr a través de arterias, el torrente sanguíneo de un pueblo discurre en tal caso por las vías anormales de la circulación periférica. Cuando a una persona la invade la circulación periférica, los médicos saben que esa persona es “cardíaca” y que, a menos que hagan algo pronto, sufrirá un ataque. La Argentina del taponamiento institucional y la acción directa es, hoy, una nación cardíaca al borde del ataque.²³

Este tipo de relatos ponía de manifiesto, en general, una imagen de lo social como un todo integrado y cohesionado, un sistema en el cual cada una de sus partes tiene funciones específicas que deben ser cumplidas correctamente. Cualquier interferencia o desvío de dichos mecanismos sistémicos constituían, en consecuencia, “anomalías” que debían ser corregidas o controladas con rapidez. Así, se insistía en estos análisis respecto de la necesidad de adherir a normas y valores que regularan el sistema institucional, como también respecto de una concepción del sistema político encarnada en nociones como *vida republicana, moral, orden y gobernabilidad*.

LAS “NUEVAS SUBJETIVIDADES POLÍTICAS”

Una forma de interpretación completamente diferente de la que acabamos de resumir, fue aquella que podríamos llamar “línea de las nuevas subjetividades políticas” y que estuvo representada por la intervención de colectivos, intelectuales, militantes, ya sea a través de ciertas publicaciones como de seminarios, encuentros, charlas, panfletos y escritos difundidos públicamente (la revista *Acontecimiento*, dirigida por Raúl Cerdeiras o el Colectivo Situaciones, entre los más conocidos). Aunque aquí también nos veremos obligados a sintetizar una multiplicidad de producciones intelectuales y de publicaciones que ilustran este intento de dar sentido a la crisis, vamos a señalar algunos de sus rasgos centrales.

En líneas generales, las argumentaciones percibían al fenómeno de la movilización y protesta social como la oportunidad de creación de una *nueva subjetividad* que interrogaba los circuitos e instituciones clásicos de práctica política, atravesando el tema de la representación y de la gestión de los asuntos públicos por parte del Estado, en un pretendido distanciamiento de esos canales, pero (según expresaban) no contra ellos (Cerdeiras, 2002: 64). Aquí, tanto la cuestión de la diversidad como la multiplicidad y la distancia con las prácticas políticas instituidas, constituían puntos de partida hacia la *emancipación*. Por su parte, los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 aparecían en este entramado como un punto de inflexión que, en algunos casos, se elevaba a la categoría de “momento fundacional” de la subjetividad

²³ “En lugar de las instituciones, la ‘acción directa’”, Mariano Grondona, *La Nación*, 24/3/2002.

política emergente. Veamos, por ejemplo, cómo se abordaba el fenómeno de las asambleas barriales:

La asamblea barrial nace como dispositivo que contiene y hace trabajar a una multitud heterogénea: se trata de una labor de discusión, coordinación y pensamiento colectivo que se constituye más allá de las vías clásicas de la organización política (Colectivo Situaciones, 2002: 165).

Las asambleas, como continuación del espacio abierto a partir de los cacerolazos, pueden ser pensadas como un paso en la construcción de una vida autónoma, fuera de la “representación”, fuera del “escenario” de la política tradicional... (Colectivo Grado Cero, 2002: 22).

Más allá de los debates que nutrieron las diversas corrientes teórico-filosóficas que conformaron esta línea de interpretación y que no discutiremos en este texto, remarcamos que estas formas de otorgar sentido, de pensar los procesos sociales y las experiencias emergentes de participación y movilización, tuvieron un auge importante sobre todo durante los dos años posteriores a las jornadas del 19 y 20 de diciembre, encontrando eco también en algunos políticos de izquierda que adoptaron la perspectiva para opinar e intervenir públicamente en la discusión.

Hay quienes están ligando lo que pasó el 19 y 20 al Santiagueñazo o al Cutralcazo. Pero lo que pasó en diciembre fue otra cosa: sin líderes, sin referentes, sin planificación previa, sin organización, sin siquiera un boca a boca, no hubo ni llamados telefónicos para encontrarse en la esquina. Nada, fue una cosa totalmente espontánea y simultánea. (...) Pienso si el 19, en esa expresión de “que se vayan todos”, no hubo un retomar el poder constituyente que tiene la población y que se convierte en poder constituido cuando lo ha delegado. Por ejemplo, yo voy a Plaza de Mayo en medio de los cacerolazos y, por la cultura que se ha creado, se me ve como un referente y hasta como el futuro presidente. Y más allá de que esto halaga mi ego, hay algo que me choca profundamente. Lo mismo pasa cuando en una asamblea me quieren hacer hablar para que me escuchen, me pregunten y me transformen en el centro de la asamblea. A veces me escondo detrás del más grandote para no me vean, pero otras trato de debatir, de dialogar, de no eludir el tema, de discutir por dónde podemos ir explorando, y dónde está el poder para enfrentar el poder estatal: si en la búsqueda de un referente honesto o en la construcción de un contrapoder, es decir, de la política en manos de la población.

[Fragmento del testimonio de Luis Zamora, militante y dirigente de izquierda, extraído de Colectivo Situaciones (2002), 19 y 20. *Apuntes para el nuevo protagonismo social*, Buenos Aires, De mano en mano.

A través de esta esquematización de algunas interpretaciones de la crisis de 2001, pretendimos trazar un panorama general (para nada exhaustivo) de lo que se escribió, pensó, publicó y difundió sobre esta etapa reciente de la historia nacional. Como dijimos antes, los ámbitos desde los cuales se produjeron estas intervenciones fueron muy variados así como también las perspectivas desde las cuales se abordó el fenómeno. Lo remarcable es que no solo las elaboraciones y opiniones más cercanas en el tiempo a los sucesos aludidos contribuyeron a ampliar el conocimiento sobre ellos, sino que se produjo también un interesante cruce entre corrientes teóricas, filosóficas²⁴ y ámbitos de diversa índole (colectivos militantes, academia, periodismo alternativo, intelectuales, etcétera), que no siempre entran en diálogo o polémicas públicas sobre temas de fondo de la realidad nacional. En tal sentido, las distintas interpretaciones que se fueron conformando sobre la crisis del 2001 tuvieron la virtud de trascender los ámbitos más restringidos de producción y discusión intelectual, para pasar a ser parte de una discusión pública que incluyó intercambios retóricos pero también diversas experiencias y prácticas sociales de movilización y acción colectiva.

CONSIDERACIONES FINALES

Como propusimos al inicio del texto, hemos intentando ofrecer un recorrido descriptivo de algunos rasgos que caracterizaron la llamada crisis de 2001. Para ello vimos que era necesario acercarnos de manera por demás breve a los temas que constituyen los ejes centrales de la materia. En efecto, tanto las transformaciones en el mundo del trabajo, en la estructura social y en las formas de participación y movilización social y política que tuvieron lugar en nuestro país desde mediados de los años setenta en adelante, conforman las dimensiones cruciales a tener en cuenta para abordar una crisis de semejante complejidad. Al revisar los intentos por interpretar lo sucedido aparecieron, como hemos podido comprobar, preguntas planteadas por los distintos analistas, acerca de esta suerte de vaivén entre la consideración de procesos estructurales (y por lo tanto la crisis como efecto o como emergente de ellos) y la necesidad de indagar la singularidad de los acontecimientos de fines de 2001 e inicios del 2002.

En fin, existen (y subsisten hasta la actualidad) varios interrogantes que podríamos dejar planteados para discutir, en relación con cuestiones muy diversas. Por ejemplo: ¿El vínculo que une representantes con representados es constante, igual a sí mismo a lo largo del tiempo y en distintas sociedades? ¿Cómo se transforma, cómo muta, qué características adquiere en distintos períodos históricos y cuáles son los principales rasgos que lo distinguen en la Argentina de las últimas

²⁴ Algunos de los autores más “representativos” de estas corrientes y que tuvieron mayor difusión en el contexto de la crisis fueron Antonio Negri, Michael Hardt, John Holloway, lecturas de la obra del filósofo del siglo XVII Baruch Spinoza, el filósofo francés Alain Badiou, entre otros.

tres décadas? ¿La crisis puede explicarse únicamente a través de acontecimientos (como los del 19 y 20 de diciembre) o es necesario incorporar una visión de los procesos que la anteceden y explican? Si solo se hace hincapié en los procesos, ¿qué especificidad tienen los acontecimientos y qué importancia histórica es posible asignarles? Y también, ¿podemos plantear a raíz del análisis de la crisis qué tipo de democracia se fue construyendo desde la transición en adelante? Como vemos, a este listado incompleto pueden agregárseles muchas otras preguntas que nos permitan completar el análisis de procesos y de hechos de nuestra historia reciente y que se vinculan con los principales contenidos propuestos por la materia.

BIBLIOGRAFÍA

- Abramovich, Ana Luz y Vázquez, Gonzalo (2012). "Introducción a los modelos de desarrollo en la Argentina". En Luzzi, Mariana (coord.), *Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea, 1976-2010*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Auyero, Javier (2006). "La moralidad de la violencia colectiva: el caso de los saqueos de diciembre de 2001". En Isla, Alejandro (comp.), *En los márgenes de la ley. Inseguridad y violencia en el Cono Sur*. Buenos Aires: Paidós.
- (2007). "La zona gris. Las características políticas de los saqueos de 2001". En Cheresky, Isidoro (comp.), *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Cerdeiras, Raúl (2002). "La política que viene". *Acontecimiento*, n° 23, abril.
- Cerrutti, Marcela y Grimson, Alejandro (2012). "Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares". En Luzzi, Mariana (coord.), *Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea 1976-2010*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Colectivo Gradocero (2002). "Pensamiento asambleario", año 3, n° 3, julio. Rosario: Editorial Grado Cero.
- Colectivo Situaciones (2001). *Contrapoder. Una introducción*. Buenos Aires: De Mano en Mano.
- Delamata, Gabriela (2005). "Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires y la(s) crisis". En Schuster, Federico *et al.* (comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2012). "Miradas sobre una sociedad fragmentada. Transformaciones de la estructura social argentina (1983-2008)". En Luzzi,

- Mariana (coord.), *Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea, 1976-2010*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Farinetti, Marina (2005). "Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo: indagación sobre el significado de una rebelión popular". En Schuster, Federico *et al.* (comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- Figari, Carlos (2007). "‘Ocupar, resistir, producir y educar’. Fábricas y empresas recuperadas en la Ciudad de Buenos Aires". *Labour Again Publications*, International Institute of Social History, Amsterdam. Disponible en <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/figari.pdf>
- Leoni, Fabiana y Luzzi, Mariana (2003). "Nuevas redes sociales: los clubes de trueque". En González Bombal, Inés (comp.), *Respuestas de la sociedad civil a la emergencia social*. Buenos Aires: CEDES.
- Luzzi, Mariana (2006). "¿Qué significa ahorrar? Transformaciones en las prácticas monetarias durante la última crisis argentina". Primeras Jornadas de Estudios Sociales de la Economía, Centro de Estudios Sociales de la Economía del IDAES/UNSAM y el Núcleo de Pesquisas em Cultura e Economia (NuCEC) del Museu Nacional de Rio de Janeiro, Buenos Aires.
- (2008). "La institución bancaria cuestionada. Actitudes y representaciones de los ahorristas frente a los bancos en el contexto de la crisis de 2001 en Argentina". *Revista Crítica en Desarrollo*, n° 2, pp. 173-190.
- (2012). *La monnaie en question. Pratiques et conflits à propos de l'argent lors de la crise de 2001 en Argentine*, Tesis de Doctorado en Sociología, EHESS, París.
- Merklen, Denis (2010). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla
- Perelman, Marcela (2010). "Maneras de hacer ver. Relaciones entre imagen y trabajo policial". IV Jornadas de Sociología de la UNLP. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Sociología, La Plata. Disponible en: <http://www.academica.com/000-027/458.pdf>
- Pereyra, Sebastián (2008). *¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Biblioteca Nacional.
- (2013). "El 2001 como acontecimiento y como proceso. Desestructuración social y crítica de la política". En Pereyra, Sebastián; Vommaro, Gabriel y Pérez, Germán (eds.), *La grieta: política, economía y cultura después de 2001*. Buenos Aires: Biblos.
- Schillagi, Carolina (2008). "El vínculo entre asambleas barriales y organizaciones de desocupados. Relatos e imágenes en la prensa escrita durante el año 2002". En

- Pereyra, Sebastián; Vommaro, Gabriel y Pérez, Germán (eds.), *La grieta: política, economía y cultura después de 2001*. Buenos Aires: Biblos.
- Svampa, Maristella (2006). “¿Réquiem para el ahorrista argentino?”. Disponible en <http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo33.pdf>
- (2013). “Tras las lecturas y las huellas de diciembre de 2001”. En Pereyra, Sebastián; Vommaro, Gabriel y Pérez, Germán (eds.), *La grieta: política, economía y cultura después de 2001*. Buenos Aires: Biblos.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Torre, Juan Carlos (2003). “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria”. *Desarrollo Económico*, vol. 42, n° 168, enero-marzo, pp. 647-665.
- Wyczykier, Gabriela (2012). “Sobre procesos de autogestión y recolectivización laboral en la Argentina actual”. En Luzzi, Mariana (coord.), *Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea 1976-2010*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Zenobi, Diego (2006). “Ahorristas de vacaciones: de Villa Gesell al HSBC. Moralidades, familia y nación”. *Anuario del Centro de Antropología Social*, IDES, Buenos Aires.

LAS METAMORFOSIS DEL SINDICALISMO ARGENTINO*

Sebastián Pereyra

Cuando se analizan los efectos de la globalización y de los programas neoliberales en Argentina se postula que el principal cambio económico-social operó y opera en el nivel del trabajo, tanto en términos del aumento del desempleo y la precarización laboral cuanto en las transformaciones de la informalidad, generando sociedades cada vez más desiguales y en las cuales el trabajo pierde progresivamente su importancia como factor de integración. Tal como aparece en los diversos análisis y mediciones, los indicadores son claros al respecto: la tasa de desocupación se triplicó en los primeros diez años de democracia y se ubicó entre el 18% y el 21% en la segunda mitad de los años noventa el índice de Gini (que mide la desigualdad entre sectores sociales) pasó de 0,382 en 1980 a 0,475 en 1997, y el aumento de hogares bajo la línea de pobreza (menos del 20% en 1994) superaba el 40% a principios del nuevo siglo.

Las reformas económicas que se iniciaron en los años setenta con un proceso de liberalización y apertura económica transformaron en los últimos años el panorama social del país y tuvieron un fuerte impacto en los sectores populares y de clase media. El cambio de modelo productivo minó las bases sociales de las organizaciones sindicales y generó nuevas lógicas de organización en los sectores populares ligadas no ya a los ámbitos de trabajo, las fábricas, sino a los espacios de residencia, los barrios. Desde comienzos de los ochenta algunos de los efectos de estas transformaciones se hicieron visibles en movimientos barriales que comenzaron a reclamar por sus condiciones de vida y habitacionales y en los cuales podían percibirse nuevas lógicas de acción y nuevas formas de liderazgo. Como veremos más adelante, esos movimientos urbanos –los de tomas y ocupaciones de tierras o las cooperativas barriales– tuvieron una importancia extraordinaria en la amplificación y consolidación de los nuevos actores que fueron surgiendo durante la década.

* Publicado en Pereyra, Sebastián (2008), en *¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo*, Buenos Aires, UNGS-Biblioteca Nacional, pp. 57-73.

Antes, nos ocuparemos de observar el proceso de declive sindical, que tomó más la forma de un cambio de los recursos disponibles que la de una verdadera pérdida de poder de los gremios y sus principales dirigentes. Como ha sido recurrentemente analizado en estos últimos años, durante los procesos de reforma las cúpulas sindicales obtuvieron condiciones preferenciales para dedicarse a la actividad empresarial en las áreas de previsión social, riesgos del trabajo y salud, transferidas del Estado al sector privado.

Por otro lado, en ese contexto, una parte de los sindicatos se definió contra los procesos de reforma e impulsó la creación de una nueva central sindical, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que se consolidó durante los años noventa, disputando el monopolio de la representación de los intereses de los trabajadores a la Confederación General del Trabajo (CGT). La CTA es una novedad mayor en el panorama sindical pues, pese a su relativa debilidad, representa un intento importante de democratización e independencia política en el ámbito sindical.

La dictadura militar implicó una suspensión de la actividad sindical tal y como esta se había desarrollado desde los años cuarenta. La intervención de las organizaciones sindicales y de sus obras sociales, la suspensión de la negociación colectiva y el impulso de una nueva legislación proclive a eliminar las protecciones al trabajo fueron algunos de los rasgos más importantes del período dictatorial en materia laboral.

Los militares concentraron la represión y la contención del conflicto social directamente en las fábricas, al tiempo que llevaron a cabo negociaciones políticas fluctuantes con la dirigencia sindical a partir de la conformación de un sector dialoguista. Así, los conflictos entre las bases sindicales y la dirigencia nacional de los gremios se intensificaron a pesar de que ningún sector sindical fue exceptuado de sufrir las consecuencias del terrorismo de Estado. Luego de 1978, incluso, el gobierno dictatorial intentó una ofensiva para eliminar a la CGT y reorganizar la actividad sindical de manera concomitante con la implementación de las primeras políticas de apertura económica y reforma del Estado con la actuación de José Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía. El fracaso de esos intentos, finalmente, dio el marco a la reunificación sindical y al inicio de un diálogo para la apertura; en ese momento, al igual que en los primeros años de democratización del país, los sindicatos jugarán el rol de principales representantes del peronismo en la política nacional.

El acelerado declive de la dictadura –desencadenado por la derrota en la guerra de Malvinas– marcó el pasaje a la confrontación de los sindicatos y el surgimiento de nuevos liderazgos que marcarían los años siguientes de actividad sindical. En particular, las movilizaciones en los estertores de la dictadura posicionaron como una figura importante al dirigente del gremio de los cerveceros Saúl Ubaldini.

El sindicalismo fue un actor fuerte dentro del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 1983. En ese sentido, la derrota electoral del Partido

Justicialista (PJ) –la primera de su historia en elecciones sin proscripciones– fue un duro revés para las aspiraciones políticas de los dirigentes sindicales. Al mismo tiempo, la denuncia por parte de Raúl Alfonsín del “pacto militar-sindical” marcó el inicio de un período de confrontación con el futuro presidente en un contexto en el que los dirigentes sindicales, además, no gozaban de mucha popularidad. El nuevo gobierno radical vio allí una oportunidad para reformar la actividad sindical. Los sindicatos, entonces, asumieron rápidamente el rol de oposición, que había dejado vacante el PJ a raíz de la derrota electoral.

Tal como fue analizado por Héctor Palomino, la estrategia sindical en la transición democrática se orientó principalmente a un intento de recuperación de la legislación de protección del trabajo, la restitución de la negociación colectiva y el control de las obras sociales, recursos que habían sido pilares históricos del poder sindical y que, como vimos, habían sido atacados por la dictadura militar.

La asunción del nuevo gobierno democrático planteó como prioridad la normalización del funcionamiento de los sindicatos después de un largo período de intervenciones. Esta tarea fue iniciada con la convocatoria a elecciones en los sindicatos. Las mismas estuvieron cruzadas, a su vez, por una discusión impulsada desde el gobierno sobre la democratización de las organizaciones gremiales. El radicalismo lanzó, para ello, una propuesta de modificación de las formas de representación en los sindicatos que fue rechazada por estos, y cuya suerte se dirimió en el Parlamento con un revés para el gobierno; el Senado, que contaba en ese momento con mayoría justicialista, bloqueó el proyecto de ley marcando un primer e importante límite a la capacidad de maniobra del flamante gobierno en materia sindical.

En los primeros años de la democratización, la situación económica marcó también los ritmos de la confrontación sindical. En un contexto inflacionario, las demandas sindicales se orientaron a la cuestión salarial, lo cual dio también a los dirigentes sindicales la posibilidad de irse consolidando como figuras clave de la oposición al gobierno. En septiembre de 1984 se realiza el primer paro general al gobierno de Alfonsín. Ese paro tuvo, según señalan diversos analistas, una importancia estratégica fundamental, pues permitió una centralización del conflicto social y marcó, al mismo tiempo, el fracaso del primer intento de concertación del gobierno.

Ese panorama de confrontación entre sindicatos y gobierno en la transición democrática se mantuvo inalterado hasta junio de 1985. En ese momento, el gobierno implementó el Plan Austral, un plan de estabilización económica que produjo, en el corto plazo, un descenso de los conflictos laborales. Frente a esa nueva situación, los sindicatos nucleados en la CGT desplegaron una estrategia netamente política. La confirmación de esa vía se produjo a través de la realización de una serie de paros generales que permitieron la definición e instalación de una agenda política de oposición. Así se desarrolló el “programa de los 26 puntos” que combinaba un conjunto de reclamos característicos de la época que poseían un variable grado

de generalidad. Junto con las tradicionales demandas laborales, la CGT se ponía al frente de las principales demandas que se habían conformado como expectativas y temas pendientes de la transición, entre ellos la deuda externa. Una enorme manifestación permitió a los dirigentes sindicales liderar las formas de movilización social, encolumnando a los principales actores políticos del momento incluyendo a algunos organismos de derechos humanos y recibiendo el apoyo de importantes sectores empresarios. La cúpula de la CGT articulaba así las principales manifestaciones de rechazo al plan económico, sumaba apoyos de la izquierda partidaria y se erigía como alternativa política al gobierno. Ese hecho fue también favorecido por la crisis y divisiones internas del PJ (cuyo liderazgo se encontraba en franca disputa luego de la derrota) y por los propios conflictos en el interior de la CGT. En ese aspecto, es interesante considerar que todo ese proceso de movilización desembocó, finalmente, en la reunificación sindical en 1986 bajo el liderazgo de Ubaldini.

En los años que siguieron, se produjo una diferenciación creciente de los conflictos laborales debida, en parte, a los cambios en la estructura productiva del país. Si el plan económico de estabilización había frenado los conflictos laborales en la mayor parte de las ramas de actividad, otros, nuevos e intensos, surgieron en el ámbito del empleo público como consecuencia de las crisis fiscales cada vez más graves que enfrentaban el Estado nacional y las provincias. Esos conflictos fueron inicialmente liderados por los gremios docentes y se refirieron, fundamentalmente, al problema del pago de salarios.

Desde 1987, el gobierno radical se fue debilitando progresivamente y, frente a las dificultades económicas y la sucesión de planteamientos militares vinculados a la cuestión de los derechos humanos, una nueva convocatoria a la concertación vio la luz. En ese contexto, el sindicalismo aprovechó la oportunidad para recuperar espacios y cargos en el Estado y reconstruir, de esa manera, parte de la influencia y capacidad de decisión que había caracterizado a ese actor político en las últimas décadas. El gobierno de Alfonsín ofreció a la CGT la cartera de Trabajo y de esa forma, por primera vez en la historia argentina, un dirigente sindical –del gremio de Luz y Fuerza– se convirtió en ministro de Trabajo y Seguridad Social de un gobierno no peronista. A lo largo de 1987, los sindicatos entraron y salieron del gobierno garantizándose el impulso de una serie de normas largamente esperadas para luego, sin demasiado costo político, quedar fortalecidos por la derrota de la UCR en las elecciones parlamentarias de ese mismo año.

En el ocaso del gobierno alfonsinista, los sindicatos cerraron filas en apoyo a la candidatura presidencial de Carlos Menem. Después de que este se impusiera en la interna justicialista derrotando al peronismo renovador –línea interna del PJ liderada por Antonio Cafiero que, luego de la derrota electoral de 1983, había impulsado una consolidación de la dirigencia partidaria en detrimento de los gremios–, los dirigentes sindicales comienzan a prepararse para integrar la coalición de gobierno que iniciaba su mandato en 1989. Sin embargo, frente a la estrategia de reducir el

conflicto para garantizar la transición, los sindicatos se encontraron con las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990 y tuvieron que posicionarse frente a intensos procesos de movilización que, en buena medida, no controlaban. Al mismo tiempo, las divisiones internas se multiplicaron, dado que los distintos sectores mostraban dinámicas muy diferentes entre sí. En particular, los empleados públicos, que tenían una situación muy crítica y eran mucho más proclives a la movilización y al reclamo de lo que la dirigencia de la CGT estaba dispuesta a aceptar.

Hay dos elementos principales que explican la declinación sindical durante los años noventa. En primer lugar, el impacto que tuvieron las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Menem en el mundo del trabajo y en la actividad sindical. En segundo lugar, las transformaciones operadas durante el decenio menemista en el posicionamiento de los dirigentes sindicales en la coalición de gobierno y en su relación con el Estado.

La estabilidad económica lograda por el gobierno a través de una paridad entre el peso y el dólar, fijada por la Ley de Convertibilidad, fue desde 1991 uno de los elementos fundamentales que marcaron un nuevo ciclo en la actividad sindical. Si consideramos que, además, durante esos años se multiplicó por tres el desempleo y que se impulsaron –junto con procesos de apertura económica y privatización de las empresas del Estado– medidas de flexibilización en la legislación laboral, podemos entender de qué modo esa década ubicó a las organizaciones sindicales en una situación de profunda debilidad. Estos cambios afectaron fundamentalmente la manera en que los sindicatos intervenían en la regulación del trabajo a través de la movilización y a partir de los modos estructurados de negociación colectiva de salarios por rama de actividad. Este último mecanismo, que se encontraba alterado desde los años de la dictadura, también fue debilitado por el creciente desarrollo de la negociación por empresas que rigió en la década. Al mismo tiempo, en el caso particular de las empresas de servicios públicos privatizadas, se acordaron condiciones en los pliegos que no volvieron a negociarse. Por otro lado, en el ámbito del Estado se estableció un congelamiento de salarios y se suspendieron las pautas de regulación establecidas en la carrera de funcionario público. Como puede verse, el primer panorama generado por las reformas neoliberales fue el de un deterioro de las condiciones sobre las cuales los sindicatos habían consolidado sus capacidades de intervención política.

En lo que se refiere al segundo punto, la vuelta del peronismo al gobierno no cumplió las expectativas que tenían los dirigentes sindicales sobre su participación e incidencia en la coalición de gobierno. Esto se verificó tanto en el declive de la participación sindical en la representación parlamentaria del PJ como en la pérdida del control del Ministerio de Trabajo en manos del ala técnica del gobierno. Recordemos que solo el primer ministro de Trabajo de Menem fue de extracción sindical y que, rápidamente, tras el éxito del programa económico implementado

por Domingo Cavallo, la designación del titular de la cartera laboral quedó bajo la influencia del Ministerio de Economía.

Suele argumentarse que así como la primera presidencia de Perón, en los años cuarenta, posibilitó la integración social y política de los sectores populares a través de la consolidación de las estructuras sindicales y bajo las formas de tutela de los derechos del trabajo que la intervención del Estado produjo, los diez años de gobierno de Carlos Menem implicaron una desestructuración de ese modelo de acción sindical y de esa lógica de integración social.

Lo cierto es que la respuesta sindical a los procesos de reforma de los noventa fue diversa, y vale la pena detenerse a revisar esas diferencias. En principio, puede sostenerse que para el grueso del sindicalismo argentino las reformas neoliberales significaron, ante todo, un cambio en el balance de sus recursos de poder. En este sentido, en la medida en que se debilitaron las formas de expresión sindical clásicas (huelgas, defensa de derechos laborales, negociación colectiva, etcétera), los sindicatos reorientaron sus formas de actividad y el modo de obtención de recursos. De esta manera, la movilización, la negociación colectiva y la influencia en las decisiones del Estado fueron reemplazadas por el desarrollo de un sindicalismo empresario que se integró a la gestión de las nuevas empresas que surgieron al calor de los procesos de privatización del sistema previsional y de riesgos del trabajo, primero, y luego con la apertura del sistema de prestación de servicios de salud.

Efectivamente, la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), empresas que reemplazaron o se sumaron a los sistemas públicos previamente existentes, permitió que los dirigentes sindicales se incorporaran de manera privilegiada a estas nuevas oportunidades de negocios. No cabe duda de que esto implicó la constitución de un sindicalismo de nuevo tipo que, entre otras cosas, aumentó la brecha existente entre las cúpulas de los gremios y sus bases y distanció cada vez más a los dirigentes sindicales del objetivo de defensa de los intereses de los trabajadores. Estas transformaciones, sumadas al aval de la dirigencia sindical a los procesos de privatización de las empresas públicas y a los ajustes y control del gasto público, generaron importantes conflictos y profundas escisiones dentro del campo sindical.

En principio, no toda la dirigencia gremial apoyó los procesos de reforma, y casi desde el inicio de la década comenzaron a surgir voces que impugnaban la política gubernamental. El sindicalismo disidente produjo dos organizaciones que rompieron con la CGT: la primera, una central paralela, la CTA, orientada a desarrollar un nuevo modelo sindical; la segunda, un agrupamiento denominado Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), más coyuntural, pero no fácilmente asimilable a las históricas disputas de liderazgo típicas de la interna sindical.

El MTA se constituyó en 1994 con unas treinta organizaciones gremiales que decidieron romper con la CGT y el apoyo que esta prestaba a los procesos de reforma (ya materializados en la nueva Ley de Empleo de 1991 y en las privatizaciones antes

mencionadas). Juan Manuel Palacios, del gremio de choferes (UTA), Hugo Moyano, de camioneros, y Alicia Castro, del personal de aeronavegación, fueron los dirigentes que llevaron adelante la ruptura ante la imposibilidad de dar un perfil más opositor a la CGT. Frente al modelo de sindicalismo empresario que se iba imponiendo en la mayor parte de la dirigencia, el MTA proponía mantener a los sindicatos en sintonía con la clásica tradición peronista más partidaria de promover la intervención del Estado en la economía y rechazar las políticas de corte neoliberal. Este agrupamiento (y en particular los liderazgos de Moyano y Palacios) era, sin embargo, proclive a la unidad sindical, motivo por el cual, si bien fue necesaria la ruptura con la CGT menemista para fortalecer una oposición sindical al modelo económico, estos dirigentes motorizaron años después –tras la victoria de la alianza entre la UCR y el Frepaso en 1999– la reunificación, bajo el liderazgo de Moyano. El MTA tuvo, en sus años de existencia, un doble carácter en sus definiciones políticas, puesto que intentó, por un lado, negociar y ocupar espacios de poder en la CGT, al tiempo que articulaba acciones de protesta con la CTA, impugnadora más decidida del conjunto de la dirigencia cegetista.

Si la dirigencia nacional de los sindicatos tuvo respuestas desiguales y se mantuvo fragmentada a lo largo de los años noventa, en el nivel local la militancia sindical fue protagonista en escenarios de confrontación con la política gubernamental. Esto fue así por tres motivos principales. En principio, porque evidentemente las consecuencias de las transformaciones socioeconómicas del país se sintieron de manera diferenciada en la cúpula sindical y en las bases. Luego, porque esas transformaciones tuvieron impactos y temporalidades diferentes en distintas regiones del país. Por último, porque fue en el nivel de la militancia de base donde comenzaron a surgir nuevos liderazgos sindicales ligados a la izquierda partidaria.

A lo largo del decenio menemista, entonces, el conflicto sindical tuvo un carácter altamente localizado, debido en parte al éxito de las estrategias gubernamentales y de las cúpulas sindicales para evitar su nacionalización. Las fuentes principales de conflicto estuvieron vinculadas con los procesos de privatización de las grandes empresas del Estado y con los endémicos problemas fiscales de las administraciones provinciales y municipales, ligados a los ajustes del gasto público impulsados desde el Estado nacional a través de la coparticipación fiscal.

En la primera mitad de la década surgieron varios conflictos por la privatización de las empresas del Estado. En general, estuvieron ligados a los despidos masivos y a los procesos de racionalización de las empresas que se realizaron durante la implementación de las privatizaciones. Salvo algunas excepciones –como los conflictos de telefónicos y de ferroviarios–, fueron neutralizados porque las cúpulas de los sindicatos avalaron las privatizaciones y porque, en esos años, la política gubernamental gozaba de más aceptación en la opinión pública que la que tenían los reclamos gremiales. En otros casos, también existieron formas de negociación localizada –a través, por ejemplo, de los programas de retiro voluntario

o de propiedad coparticipada de acciones– que bastaron para destrabar el bloqueo de las privatizaciones. Estos conflictos tendieron a desaparecer en la medida en que el plan de convertibilidad lograba su objetivo de estabilizar la economía y generaba, además, buenas expectativas y crecimiento económico. Solo algunos años después, y en algunos contextos particulares en los que la desaparición de la actividad económica estatal produjo un efecto de arrastre en las economías locales, los conflictos renacieron y tuvieron un fuerte impacto en la política nacional. A ellos nos dedicaremos, en parte, en el próximo apartado.

La reducción del gasto público requerido por el plan de convertibilidad se hizo sentir con fuerza en las provincias y municipios del país, donde fueron los sindicatos de funcionarios públicos los que lideraron la confrontación con el nuevo modelo económico. La falta de pago de salarios y el desfinanciamiento de los servicios de salud y educación fueron los principales ejes a partir de los cuales los empleados públicos (provinciales y municipales, así como docentes y empleados de la salud) se movilizaron durante esos años. Ahora bien, las crisis de financiamiento no se produjeron en el mismo momento en todos lados y, además, respondían en cierto sentido a las lógicas de la política provincial y municipal, motivo por el cual la confrontación tuvo un carácter generalmente episódico y circunscrito. Al mismo tiempo, las protestas no se limitaron a las típicas formas de reclamo gremial –el paro o las manifestaciones– sino que estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos con la policía y con la creciente denuncia –apoyada por otros sectores sociales– de la dirigencia política local o provincial. Algunos de estos casos paradigmáticos trascendieron a la política nacional con el nombre de “estallidos sociales”, como el que ocurrió –por ejemplo– en Santiago del Estero en 1993. Las denuncias de corrupción y el destrozo de edificios públicos y de residencias privadas acompañaron el despliegue de este tipo de conflictos, que marcaban la imposibilidad de la clase política de gestionar los resultados de un proceso económico con temporalidades bien diferenciadas.

Algunos de estos conflictos en las provincias permitieron el surgimiento de nuevos liderazgos: entre ellos, el de Carlos “el Perro” Santillán –dirigente del gremio de municipales de Jujuy– es un caso paradigmático. El conflicto en Jujuy tuvo muchos rasgos particulares dado que, en primer lugar, se produjo una articulación de distintos gremios estatales que potenció sus efectos y su capacidad de permanencia en el tiempo. En segundo lugar, el carisma y la rápida instalación en la política nacional de la figura de Santillán ampliaron los recursos de negociación de los gremios. En tercer lugar, la crisis del sistema político jujeño –evidenciada en la caída sistemática de los gobiernos frente a la intensificación del conflicto social– generaba una imposibilidad sistemática de canalizar el conflicto y recomponer la autoridad. En cuarto lugar, existían otros conflictos con mucha tradición en la provincia –en particular, la lucha por los derechos humanos y las formas de intervención contra la pobreza llevadas adelante por el padre Jesús Olmedo– que convergieron con el

reclamo sindical. Por último, ese conflicto significó la consolidación de una nueva corriente sindical –la Corriente Clasista y Combativa (CCC)–, que dotó de contenido ideológico a la disputa entre las bases y la dirigencia nacional de los sindicatos.

La CCC se desarrolló con el apoyo del Partido Comunista Revolucionario (PCR), desprendimiento maoísta del Partido Comunista (PC), que se había interesado –desde la transición a la democracia– en la activación del conflicto gremial. Durante los años noventa, la CCC fue creciendo en importancia a partir del interés que despertó en la militancia de base de los sindicatos –particularmente de empleados públicos, aunque también en algunas fábricas– la experiencia del sindicalismo de base de los años setenta, a la que ya nos hemos referido, y cuya figura más importante fue el dirigente de SMATA René Salamanca. Aunque la CCC no se planteó como horizonte la conformación de una nueva central sindical, sí permitió la articulación de diferentes conflictos y generó el espacio para que se desarrollara un nuevo sindicalismo de izquierda –no peronista– en el nivel de las bases y de los delegados de base.

De los diversos intentos que hubo, por parte de los partidos de izquierda, de lograr implantarse en la dirigencia sindical –cuya tradición es, en general, refractaria al pensamiento de la izquierda partidaria–, la CCC es, sin duda, la experiencia más exitosa, en parte porque amplió sus estrategias de intervención a otros ámbitos en los que surgieron nuevos e importantes reclamos durante los años noventa: en particular, los jubilados y los desocupados. El otro caso, con mucha menor presencia sindical, fue, sin duda, el Partido Obrero, de orientación trotskista. En las conclusiones veremos cuales fueron algunas de las consecuencias de esta diversificación ideológica del campo sindical en el contexto de recomposición económica y política posterior a la crisis de 2001.

Como dijimos antes, la transformación más importante que mostró el panorama gremial durante los últimos años surgió en parte de la conformación de un sindicalismo opositor a las reformas del gobierno de Menem y dio como resultado la constitución de una nueva central sindical: la CTA.

Durante los primeros años de gobierno memenista, el sindicalismo se encontraba dividido entre la CGT-San Martín, que apoyaba la coalición de gobierno de Carlos Menem, y la CGT-Azopardo, liderada por Saúl Ubaldini y opositora a las políticas gubernamentales. La mayor parte de los gremios que constituyeron la CTA provenían, entonces, de ese sindicalismo contestatario que venía movilizado desde los años de Alfonsín. Desde 1991, sin embargo, con el consenso del nuevo programa económico, la disputa sindical se fue dirimiendo en favor de los menemistas, y la línea Azopardo comenzó a aceptar las condiciones para una nueva reunificación. En ese contexto, un grupo de dirigentes (inspirados por la ruptura de un conjunto de diputados peronistas opositores a Menem) apostaron a que la reunificación sindical no implicara dejar de lado la oposición al gobierno y al nuevo programa económico. En 1992, se constituyó la CTA al calor de la primera marcha federal –que movilizó a distintos sectores sociales desde todo el país hacia la Capital para manifestarse

contra la política económica del gobierno—, que demostraba que podía existir capacidad de movilización sin el acuerdo de los principales sindicatos de la CGT. Los dirigentes más importantes que convergieron en este proyecto fueron: Víctor De Gennaro (ATE), Mary Sánchez (CTERA), Alberto Piccinini (UOM-Villa Constitución), Cayo Ayala (SAON), entre otros. Lo que comenzó siendo una experiencia de sindicalismo disidente se convirtió, al cabo de cinco años, en una nueva central sindical con personería jurídica (obtenida en 1997), aunque sin la capacidad de disputarle el monopolio de la personería gremial a la CGT como organización de tercer grado.

La CTA se consolidó como un proyecto de sindicalismo autónomo de los partidos políticos y del Estado. Uno de los objetivos principales de estos dirigentes fue, precisamente, explorar la posibilidad de desarrollar organizaciones sindicales que no estuvieran automáticamente encolumnadas con el PJ. Fue el gobierno de Menem y su cambio respecto de las políticas que históricamente había implementado el peronismo el momento preciso de dar esa discusión. Por otro lado, la CTA se planteó como objetivo la democratización de la actividad sindical. Esa expectativa estuvo ligada, como vimos, a la normalización sindical encarada en los primeros años de gobierno democrático, proyecto que la CTA retomó y desarrolló a partir de una serie de criterios estatutarios; centralmente, la posibilidad de afiliación individual y el voto directo de los representantes para diferenciarse de la estructura corporativa y vertical de la CGT. Por último, la CTA se diferenció del sindicalismo tradicional por la inclusión de diversos tipos de organizaciones (no solo sindicales) en su estructura. Este elemento fue, sin duda, promovido por una visión más acorde con las transformaciones socioeconómicas y políticas que experimentó la sociedad argentina en los últimos veinticinco años.

En este sentido, los dirigentes sindicales de la CTA, por un lado, comenzaron a nuclear a sectores de la militancia sindical que ya no se sentían identificados con el PJ y, por otro lado, rápidamente acusaron recibo de los cambios ocurridos en la estructura productiva del país. Es así que acuñaron la idea de que el barrio reemplaza a la fábrica como ámbito de organización de los sectores populares.

La base organizativa de la CTA estuvo, desde el inicio, constituida por ATE y CTERA, más algunos gremios disidentes, agrupaciones de jubilados, ONG y posteriormente, organizaciones barriales y de desocupados. Al mismo tiempo, la CTA desarrolló núcleos intelectuales para producir información e intentar debilitar la aceptación que habían logrado las políticas neoliberales, cuestión que también diferencia a esta experiencia de la tradición antiintelectual del sindicalismo argentino.

Casi desde el comienzo, la Central adoptó una estrategia movimientista para transformar los reclamos sectoriales en demandas de derechos (universales). El objetivo de este tipo de estrategia fue, en principio, nacionalizar los conflictos, hecho que se verifica en la utilización recursiva de las marchas federales como formato de protesta. Uno de los primeros ejemplos en este sentido fue la vocación de apoyar a los distintos grupos de jubilados que comenzaron a movilizarse a comienzos de

la década a raíz de la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y del proceso de privatización del sistema previsional. Pero es quizás en el caso de CTERA en el que este rasgo movimientista y la apelación a un marco de derechos para la fundamentación de los reclamos puede apreciarse con mayor nitidez. En 1997, el gremio de maestros instaló frente al Congreso de la Nación una “carpa blanca” que se convirtió en un símbolo de la defensa de la educación pública en el país frente a las políticas de reforma y la crisis de financiamiento. La Carpa se constituyó en un escenario para dar visibilidad y continuidad al reclamo docente y como núcleo de todo tipo de manifestaciones culturales y artísticas. Esa orientación fue una forma de trascender el reclamo puramente sectorial y de nuclear a los diferentes sectores que componen la comunidad educativa (docentes, alumnos, padres, etcétera) en un mismo conflicto. El éxito de esa experiencia –al igual que, más allá de ciertas diferencias, la de la UTPBA en relación con el caso Cabezas– mostró que la nueva central había acertado en la consideración de que existía un mayor nivel de legitimidad y consenso en relación con reclamos ciudadanos de derechos, que para los típicos reclamos gremiales.

Si el surgimiento de la CTA se explica por factores que no son específicamente coyunturales (como la vocación democratizadora y la importancia dada a la concepción de la ciudadanía), hay otros, sin embargo, que están estrechamente vinculados con la oposición al menemismo, cuya desarticulación produjo tensiones y complicaciones.

Algunos sectores del gremialismo disidente encolumnado en el MTA y la CTA brindaron su apoyo a la coalición antimnemista triunfante en las elecciones de 1999. Al poco tiempo, sin embargo, retiraron ese apoyo –moderado e inorgánico– al nuevo gobierno, a raíz de la confirmación de la orientación de las políticas económicas y del impulso de un proyecto de reforma laboral en el año 2000. Sin embargo, ese intento de articulación de las organizaciones sindicales en la oposición mostró las dificultades que existían en el nuevo contexto para la unidad sindical y para que los sindicatos se erigieran como actor relevante de la oposición política al gobierno. Así, mientras que la CGT se encolumnó nuevamente bajo la conducción de Hugo Moyano, quien contaba a su vez con el apoyo del principal dirigente justicialista de la época, el derrotado candidato a presidente Eduardo Duhalde, la CTA se mantuvo a distancia de la CGT como expresión de una oposición no peronista.

En esos años, la CTA siguió profundizando la búsqueda de nuevas formas de acción y, además de apoyar el desarrollo de organizaciones piqueteras –cuestión que será explorada en el próximo apartado–, impulsó el trabajo en temáticas que se imponían en el clima de recesión económica que acompañó al gobierno de Fernando de la Rúa. De esa forma, se puso en marcha entre septiembre y diciembre de 2001 una consulta popular para la creación de un Seguro de Empleo y Formación (como principal medida para el combate del hambre y la pobreza). La experiencia, que se popularizó con el nombre de Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), fue un

intento de concentrar a los distintos actores que se conformaban como oposición al gobierno de la Alianza por fuera del PJ. El esfuerzo y los resultados organizativos de la consulta no tuvieron, sin embargo, el impacto esperado, que fue absorbido, sin duda, por el desencadenamiento de la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Los problemas para el posicionamiento político de la CTA se profundizaron luego de la crisis. La estrategia adoptada por la central cristalizó en diciembre de 2002 con el lanzamiento del Movimiento Político, Social y Cultural. La central propuso allí una lectura de las oportunidades y los riesgos abiertos por la crisis de 2001: oportunidades de transformar la dirigencia política del país y su orientación económica, pero también riesgos de fragmentación y caos (con el horizonte de una recomposición autoritaria). El lanzamiento del movimiento fue, en ese contexto, un intento de dar un salto hacia el juego electoral que, sin embargo, resultó eclipsado por el ascenso y la consolidación del kirchnerismo en 2003.

La CTA encontró dificultades para posicionarse frente al liderazgo de Kirchner. El nuevo presidente tuvo, en este sentido, un éxito importante para reunir apoyos no solo dentro del PJ, que lo llevó al gobierno, sino también entre distinto tipo de organizaciones sociales movilizadas, las cuales formaban parte en muchos casos del abanico de organizaciones que nucleaba la CTA.

El gobierno de Kirchner despertó fuertes expectativas en el sindicalismo opositor e incluso para la CTA fue, al inicio, un momento de importante reconocimiento a partir de su incorporación al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario, para negociar junto con la CGT y las organizaciones empresariales. Sin embargo, la CTA finalmente no obtuvo la personería gremial (por las presiones de la CGT, que brindó su apoyo al nuevo gobierno) y fue desplazada de esa instancia de negociación, adoptando un perfil más opositor. Al mismo tiempo, el proyecto político de la CTA colapsó, dado que la nueva coalición de gobierno arrastró a buena parte de la dirigencia gremial, generando tensiones internas en la Central.

Como pudimos ver hasta aquí, el panorama sindical se transformó y complejizó en estos veinticinco años de vida democrática. La pérdida de la centralidad de los sindicatos como actores de la movilización social en el país es un dato ineludible para entender su realidad actual, así como la aparición de nuevas formas de actividad sindical que cuestionan y disputan el liderazgo de los gremios tradicionales y los criterios clásicos de unidad sindical y de alineamiento con el peronismo. Esas transformaciones tienen un fuerte anclaje en los cambios que experimentó Argentina, dejando atrás un modelo de sociedad en la cual surgió y se consolidó el modelo clásico de actividad y organización sindical. Aun en un contexto, como el actual, de recomposición política y económica –liderada, incluso, por el propio peronismo–, la expresión de esas transformaciones es palpable y se muestra también en el nivel de la conflictividad laboral.

BIBLIOGRAFÍA

- Calderón, Fernando y Jelin, Elizabeth (1987). *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades*. Buenos Aires: CEDES.
- Calderón, Fernando *et al.* (1986). *Los movimientos sociales ante la crisis*. Buenos Aires: UNU.
- Cerrutti, Marcela y Grimson, Alejandro (2006). “Buenos Aires, neoliberalismo y después”. En Portes, Alejandro, Roberts, Bryan y Grimson, Alejandro (eds.), *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*. Buenos Aires: Prometeo.
- Gepsac (2006). *Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003* (Documentos de Trabajo N° 48). Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS-UBA, <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/DT48.pdf>
- Giarracca, Norma y otros (2001). *Protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza.
- Godio, Julio (2000). *Historia del movimiento obrero argentino 1870-2000*. Buenos Aires: Corregidor.
- James, Daniel (1990). *Resistencia e integración*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Jelin, Elizabeth (comp.) (1985). *Los nuevos movimientos sociales* (2 volúmenes). Buenos Aires: CEAL.
- (2003). *Más allá de la Nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales*, Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- Lechner, Norbert (comp.) (1987). *Cultura política y democratización*. Buenos Aires: FLACSO-CLACSO-ICI.
- Lerman, Gabriel (2005). *La plaza política: irrupciones, vacíos y regresos en Plaza de Mayo*. Buenos Aires: Colihue.
- Lobato, Mirta Zaida y Suriano, Juan (2003). *La protesta social en Argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Martuccelli, Danilo y Svampa, Maristella (1997). *La plaza vacía: las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires: Losada.
- Merklen, Denis (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.
- Murillo, María Victoria (2005). *Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina*. Madrid: Siglo XXI.
- Nun, José y Portantiero, Juan Carlos (comps.) (1987). *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Buenos Aires: Puntosur.

- Palomino, Héctor (2005). "Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales", en Suriano, Juan (dir.), *Nueva historia argentina. Tomo X: Dictadura y democracia (1976-2001)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Schuster, Federico y Pereyra, Sebastián (2001). "Transformaciones de la protesta social en Argentina: balance y perspectivas de una forma de acción política". En Giarracca, Norma y otros, *Protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza.
- Schuster, Federico et al. (comps.) (2005). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo.
- Svampa, Maristella (2005). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.
- Torre, Juan Carlos (1990). *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Sudamericana-Instituto Torcuato Di Tella.

LOS TRABAJADORES Y SUS ORGANIZACIONES DURANTE LOS GOBIERNOS KIRCHNERISTAS

Paula Abal Medina

Recientemente en la Argentina, como en otros países de la región, tuvieron lugar procesos de recomposición del trabajo y sus organizaciones en el marco de los cauces habilitados por tres gobiernos (2003-2015) –uno de Néstor Kirchner y dos de Cristina Fernández– que actualizaron los núcleos identitarios de la tradición nacional-popular peronista. Las irrupciones sociales que protagonizaron la escena política nacional hacia fines de 2001 tienen su antecedente en la resistencia social que expresó el sindicalismo, en especial con la constitución de una nueva central sindical, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y una disidencia en el interior de la histórica Confederación General del Trabajo (CGT) bautizada Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Estos agrupamientos gremiales resistieron con unidad de acción la ofensiva neoliberal de la década de 1990. En cambio, no coincidieron sobre la forma política más adecuada para organizar a los trabajadores en la nueva fase capitalista, y la discusión que no se saldó, ya que la experiencia de gobiernos kirchneristas concluyó sin el reconocimiento de derecho de la nueva central y con una mayor fragmentación de las organizaciones gremiales.

La figura más disruptiva para el ciclo neoliberal fue la del “piquetero” y terminó por desbordar al sindicalismo: el trabajador desocupado que se organizó en los barrios y que “puso el cuerpo” para bloquear las rutas. En 1992, la CTA se fundó bajo la caracterización, en un contexto de cierre de industrias y aumento del desempleo, que “la nueva fábrica es el barrio”, lo cual habilitó la inclusión diversos movimientos territoriales que congregaban el colectivo en ascenso de los “extrabajadores” en su estructura sindical. Unos años después, un libro sociológico llevaría el título: *Entre la ruta y el barrio* para registrar el tortuoso trayecto político que debieron afrontar las organizaciones piqueteras (Svampa y Pereyra, 2004).

“Los trabajadores viven bajo la constante amenaza de tres calamidades que se llaman alza de precios, desempleo y represión”, escribió una vez Jean-Paul Sartre (2004: 146). Y en nuestro país, tres escenas decisivas sintetizan el descomunal

proceso de deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, de sus empleos, de sus viviendas, de sus barrios y de los servicios públicos a los que pudieron continuar accediendo durante la larga fase regresiva que se extiende entre 1976 y 2001/2002.

Escena 1: “Para terminar con la rabia hay que matar al perro”, sentenció Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la sangrienta dictadura que se inició en la Argentina en 1976. El blanco fue una trama industrial con protagonismo de los trabajadores. Y el objetivo: desindustrializar mediante la política económica y la represión criminal para eliminar dicho protagonismo, en una acción dirigida especialmente contra la organización sindical en las fábricas (los delegados sindicales fueron víctimas de primer orden en la represión). **Escena 2:** Las hiperinflaciones de finales de la década de 1980. Los denominados golpes de mercado fueron instalando una doble condición de trabajador y pobre. Y el “trauma social” de estas hiperinflaciones habilitaría la fase de reformas pro-mercado. **Escena 3:** En medio de las denominadas reformas estructurales del neoliberalismo, los muy elevados niveles de desempleo permitieron activar el par incluidos-excluidos para profundizar el ataque al trabajo. Vale la pena detenerse en este *momento*. Inicialmente, los que tenían empleo fueron acusados de intentar mantener “privilegios” que impedían la creación de empleo para los millones de desocupados. Así, “legislar para los que tienen hambre” se transformó en legislar contra quienes tenían trabajo, mediante una reforma de flexibilización laboral que desmembró los principios de estabilidad y protección del trabajo. En un segundo momento el foco se puso en la empleabilidad, con la consiguiente culpabilización individual de los desocupados (excluidos inempleables). La focalización desplaza la universalidad de la política social, se procede a la disección de los desempleados para construir la “población objetivo”, los segmentos minoritarios caracterizados como obsoletos que recibirían una ayuda irrisoria y acciones de capacitación para volverse empleables. Finalmente, cuando la desocupación es visibilizada por la organización popular en su dimensión colectiva, entonces los piqueteros pasan a ser estigmatizados brutalmente como peligrosos y violentos (excluidos violentos). Se produce así un redespliegue hacia el último determinante del sistema de poder: la fuerza. Los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en medio de sublevaciones populares que combinaron cacerolazos, grandes movilizaciones y saqueos a supermercados, y posteriormente, en junio de 2002, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes piqueteros que participaban del corte de uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires.

UNA RESTITUCIÓN QUE NO ALCANZÓ

Néstor Kirchner llegó al gobierno en mayo de 2003. Su figura no constituía una excepción en el mar de descrédito generalizado de la representación política. Sin mayoría electoral (ganó con un 22,2%), su gestión se orientó a construirla. Y en pos de ese objetivo sobresalen dos acciones políticas: “restituir” y “desagraviar”, verbos que expresan lo novedoso de la irrupción del kirchnerismo en la política argentina luego de casi tres décadas con abrumadora mayoría de impulsos en sentido inverso. A modo de ejemplo: restituir las negociaciones colectivas y el salario mínimo vital y móvil; desagraviar ordenando bajar el cuadro del genocida Videla del Colegio Militar del panteón de presidentes o reparar con el pedido de perdón en nombre del Estado Nacional por el terrorismo de Estado a las víctimas y a la sociedad argentina en su conjunto. Una nostalgia anidó en el kirchnerismo originario: la vuelta al “tiempo feliz” de la sociedad de pleno empleo peronista, con Estado fuerte, sindicatos poderosos y empresarios nacionales.

El impulso inicial que habilitó realidad y ensoñación estuvo dado por la megaldevaluación realizada por el fugaz gobierno previo de Eduardo Duhalde, que implicó cuantiosas transferencias para los exportadores y generó márgenes amplios para alentar la puja salarial. Kirchner interpretó la oportunidad y alentó esa puja con varios decretos de incremento salarial de sumas fijas que beneficiaron en mayor medida a los trabajadores registrados más empobrecidos. Asimismo, acompañó, y podríamos decir que hasta celebró, los conflictos laborales de los trabajadores registrados y bajo convenciones colectivas de trabajo. Los dos más resonantes fueron los que involucraron a los trabajadores de subterráneo y los paros activos, con tomas de edificios, de los trabajadores telefónicos. Conflictos que, mirados con detenimiento, volvían patente la complejización no solo de la trama laboral, sino también del sindicalismo.

El desempleo, que había alcanzado niveles sin precedentes en la historia nacional, superando en 2002 la tasa del 21%, se redujo de manera persistente hasta el 5,9% en octubre de 2015. Esta disminución se sostuvo pese a crisis financieras internacionales de envergadura, como la que se originó en 2008 en Estados Unidos. Así, Kirchner podía decir en un discurso en la populosa zona de La Matanza, en el Conurbano bonaerense, a mediados de 2005:

Le estamos ganando la batalla al desempleo, estamos volviendo a construir la palabra trabajo [...]. Cuando veo los gorritos amarillos de los trabajadores de la construcción me emociono y lloro porque sé que con esos gorros vuelve el trabajo, vuelve el pan a la casa, vuelve la alegría a la familia, vuelve la esperanza a la sociedad. Claro que sueño decirles a los argentinos, cuando esté

terminando mi mandato, que estamos en menos de un dígito de desocupación; es mi gran sueño.¹

Durante aquellos primeros años, la vuelta de los sindicatos, de la negociación colectiva² y del conflicto laboral era festejada como evidencia irrefutable de la ruptura con el pasado, lo que llevó a soslayar las persistencias que se expresaban, por ejemplo, en el modo en que la desigualdad se instaló en el mundo del trabajo como síntoma de una estructura productiva desmembrada. En el mismo sentido, fueron minimizados las dificultades y límites propios del sindicalismo para expresar el conjunto heterogéneo de realidades del trabajo. Aun en el contexto de crecimiento económico con creación de empleo y de un gobierno, como lo expresara tantas veces el propio presidente, que no sería neutral en conflictos que involucraran derechos de trabajadores.

El empleo no registrado descendió desde el 48,5%, su pico máximo, en 2003, hasta el 34% en 2010. Pero tras este descenso significativo quedó prácticamente estancado hasta 2015. Publicaciones elaboradas por el Ministerio de Trabajo muestran que la atención gubernamental sí estuvo puesta desde el principio en esta problemática y que a raíz de ello se implementaron diversas medidas que lograron resultados destacables.³ Sobresalen dos nuevos regímenes laborales: el de trabajadores agrarios, sancionado a fines de 2011,⁴ y el de trabajadores de casas particulares, en su mayoría mujeres, vigente desde marzo de 2013;⁵ actividades –en ambos casos– en las cuales se concentran muy elevados niveles de no registro y precarización del trabajo.

Tras una década de crecimiento del empleo, de mayor gravitación de los sindicatos y de implementación de políticas específicas diseñadas para reducir el no registro, uno de cada tres trabajadores asalariados no se encuentra inscripto en la seguridad social. El cuadro se agrava si se tiene en cuenta la injerencia del

¹ Puede encontrarse una transcripción del discurso en el archivo virtual de la Casa Rosada. Disponible en <http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24762-blank-45921361>

² La negociación colectiva, prácticamente paralizada durante toda la década de 1990, recibió un fuerte impulso; en 2015 se homologaron alrededor de 2000 convenios y acuerdos colectivos.

³ Se recomienda la consulta de los doce números de la *Revista de Trabajo* elaborada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, publicados entre 2005 y 2015, y también del documento de trabajo publicado en ocasión del Bicentenario: *Trabajo y Empleo en el Bicentenario (2003-2010)*, en

<http://www.trabajo.gob.ar/trabajoyempleoenelbicentenario/>

⁴ Ley 26727 sobre el Régimen del Trabajo Agrario, creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), la Ley 26844, Régimen Especial de Contrato para el Personal de Casas Particulares.

⁵ Alrededor de 1.200.000 mujeres se desempeñan como trabajadoras en casas particulares. A principios de la década de 2000 los niveles de no registro fueron cercanos al 90%. Las políticas implementadas entre 2003 y 2015 permitieron duplicar el registro de la actividad. Ver Pereyra y Tizziani, 2014. Este artículo brinda elementos para analizar los avances en materia de registro y derechos de las trabajadoras domésticas y los problemas para el acceso efectivo a estos derechos que tienen las trabajadoras domésticas a tiempo parcial.

cuentapropismo de oficio y subsistencia,⁶ la tasa de no registro en unidades productivas con menos de cinco empleados⁷ y la infiltración de la tercerización laboral en el conjunto de las actividades económicas.

Cristina Fernández asumió la presidencia en diciembre de 2007 y gobernó durante dos mandatos consecutivos. Hacia 2009 se produjo un cambio en la caracterización del mundo trabajador realmente existente. Tras la reestatización del sistema jubilatorio se implementó la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), cuyo objetivo central es garantizar un ingreso mínimo a niños cuyos padres no tienen una inserción ocupacional registrada, y por lo tanto, no acceden a la asignación por hijo estipulada en el régimen contributivo de asignaciones familiares.⁸ Actualmente, la AUH da cobertura a alrededor de 3,5 millones de niños/jóvenes distribuidos en 1,8 millones de hogares. Diversos estudios muestran su efectividad al momento de reducir la indigencia y la pobreza. En el mismo año se lanzó el Programa Ingreso Social con Trabajo (conocido como Argentina Trabaja) que promovió la organización en cooperativas de trabajadores sin ingresos formales para realizar tareas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de sus barrios y comunidades de pertenencia. Finalmente, el Monotributo Social se orientó también a estos mismos segmentos de trabajadores impulsando, a través de una pequeña contribución, el paulatino registro de las economías de los barrios empobrecidos tras décadas de neoliberalismo.⁹ Los inscriptos en este régimen

⁶ El cuentapropismo crece en números absolutos durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, pero decrece en términos relativos casi 3 puntos porcentuales entre 2003 y 2011, pasando del 20,6% al 17,7% de los ocupados. En el cuarto trimestre de 2010, el 55% del total de trabajadores independientes no realizaba aportes a la seguridad social y dentro de este agregado el 65% percibía menos de mil pesos mensuales. Se trata de un monto muy bajo si se tiene en cuenta que en 2010 el salario mínimo era de 1740 pesos (Ruiz Malec, Persia y Sorokin, 2015).

⁷ En el tercer trimestre de 2012, la tasa de empleo no registrado ascendía al 70% en las unidades productivas con hasta 5 empleados. "... el 44% de empleo no registrado se localiza en unidades productivas que emplean a todo su personal por fuera de la normativa laboral, lo cual implica que se encuentran al margen de gran parte, o de todas, las normas legales que regulan sus operaciones económicas" (MTEySS: *Trabajo no registrado. Avances y Desafíos para una Argentina inclusiva*, 9/2013).

⁸ Los beneficiarios de la AUH son todos aquellos niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho años (o sin límite de edad cuando se trate de un niño discapacitado) que no tengan otra asignación familiar prevista por la Ley 24714 y cuyos padres o tutores sean: trabajadores no registrados o del servicio doméstico; que perciban una remuneración menor al Salario Mínimo Vital y Móvil; desocupados, trabajadores de temporada (en los meses de reserva del puesto de trabajo); monotributistas sociales. Información disponible en Observatorio de la Seguridad Social, abril de 2012.

⁹ El monotributo social entró en vigencia a mediados de 2004, pero durante varios años se mantuvo en muy bajos niveles de adhesión. La información sobre su evolución no resulta accesible. Sin embargo, se pudo constatar, a partir de declaraciones de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que se produce un crecimiento de los inscriptos a partir de 2009, alcanzando la cifra de 350.000 monotributistas sociales a fines de 2010.

podrían emitir facturas, ser proveedores del Estado y, de acuerdo a la normativa, ingresar al sistema previsional y acceder a las prestaciones de las obras sociales del sistema nacional de salud.

En este apartado no pretendimos exhaustividad en el relevamiento de políticas vinculadas al trabajo, pero sí señalar dos grandes etapas. La primera apuesta fue poner en funcionamiento los resortes que otrora habían sido efectivos para el conjunto de la población. Se registraron logros muy significativos que hemos repasado antes, pero una parte extensa de la realidad sociolaboral permaneció relativamente ajena. El capitalismo creó una inmunidad nueva y en este punto las formas previas de intervención en la relación entre capital y trabajo desde el Estado se han vuelto parcialmente estériles. En la segunda etapa, en especial a partir del año 2009, la intervención se dirigió a brindar alguna cobertura a los hogares de los millones de trabajadores que, como dice el dirigente territorial Emilio Pérsico, “se auto-inventaron el trabajo”: puesteros, ambulantes, trabajadores de la limpieza, manteros, talleristas, recicladores, campesinos, cooperativistas de los barrios, albañiles, plomeros, trabajadores de casas particulares, pequeños emprendedores de galpón y fondos de casas particulares, entre otras tantas actividades.

LAS FORMAS ORGANIZATIVAS

El sindicalismo logró importantes avances durante los años de recuperación del empleo. A principios de siglo el temor al desempleo teñía la realidad del trabajo. Recuerdo que en ese entonces realizaba una encuesta a trabajadores jóvenes de grandes supermercados y la constatación más significativa, además del miedo al despido, era la ajenidad de los trabajadores respecto del sindicato. Muchas palabras no significaban ya nada para los trabajadores: convenio colectivo, paritaria, delegado sindical, negociación colectiva. La jerga sindical se había desvanecido. Actualmente, es una escena usual en los lugares de trabajo, la discusión de los trabajadores (incluidos los más jóvenes) sobre lo negociado en cada paritaria y la realización de comparaciones con otros gremios que alcanzaron mejores o peores condiciones. El sindicalismo recuperó una mayor presencia cotidiana en los establecimientos.

En el comienzo referimos a dos agrupamientos que lucharon contra el neoliberalismo, y que pese a su desacuerdo sobre el modelo sindical construyeron resistencia en unidad de acción (MTA y CTA). Otro sector sindical, el que hegemonizó la CGT durante la década de 1990, se concentró en lo que la politóloga Victoria Murillo denominó “supervivencia organizativa”, basada en la “defensa de sus privilegios organizacionales y la formación de empresas sindicales surgidas de las reformas de mercado” (2013). Mayoritariamente, estos sectores sindicales funcionaron como una oposición abierta o agazapada al kirchnerismo. Para caracterizar la índole de su posicionamiento político-sindical me permito transcribir las declaraciones del entonces secretario general del sindicato de Luz y Fuerza frente a la pregunta de

un periodista sobre qué haría el sindicalismo si el gobierno nacional se decidía a intervenir en el sistema de las obras sociales de salud:

Mirá esto te lo dice Oscar Lescano, publicalo bien grandote y no lo digo por Lescano, lo digo por todos, porque conozco el sentimiento de cada secretario general: el día que nos quieran tocar las obras sociales, estatizarlas, privatizarlas o querer hacerle cualquier cosa, le vamos a declarar la guerra total, van a tener que matarnos a todos.¹⁰

Un ejemplo descarnado de un sindicalismo que directamente se define como factor de poder, y que por ello afirma que le resulta indiferente si la intervención del gobierno fuera para estatizar el sistema (para crear por ejemplo un sistema público más igualitario) o para privatizarlo (creando uno más regresivo). Este referente sindical, recientemente fallecido, no es una excepción, sino que ilustra una parte de la realidad del sindicalismo nacional. Más allá de estas divisiones, con fundamentos muy nítidos vinculados al lugar del sindicalismo frente a las reformas neoliberales previas, durante los años kirchneristas la mayoría del sindicalismo materializó avances para sus trabajadores, lo cual redundó en un fortalecimiento económico de sus organizaciones. Los avances no solo se vincularon con con la mejora del poder adquisitivo del salario de los trabajadores registrados, sino que también aumentó la cobertura de la negociación colectiva. Es decir, que el sindicalismo logró expandirse.

No obstante, si este es el panorama general, dos problemas de fondo mostraron los límites del sindicalismo como forma organizativa del trabajo. Por un lado, el desmantelamiento de la organización gremial en los establecimientos y lugares de trabajo, objetivo cumplido por la última dictadura militar. Una encuesta realizada en 2005 permitió constatar que en aproximadamente el 86% de las empresas no existía ninguna instancia de representación directa de los trabajadores.¹¹ Y que el 61% de los trabajadores se desempeñaba en empresas que no tenían delegados gremiales. Asimismo, la revisión de reformas de estatutos de diferentes sindicatos durante los últimos años mostró que la tendencia de las cúpulas sindicales ha sido restringir las competencias y prerrogativas de los delegados de establecimiento en la vida sindical (Abal Medina y Diana Menéndez, 2011). Otro indicio, no necesariamente concluyente, relacionado con el problema de la reducción del sindicalismo a la “dinámica desde arriba” es la prolongada antigüedad de los secretarios generales¹² y finalmente, una suerte de ahogo financiero a los sindicatos “simplemente

¹⁰ Diego Sehinkman: “Oscar Lescano. ‘Fui oficialista de todos los gobiernos’”, en *La Nación*, 20/10/2012. Se puede profundizar sobre esta cuestión en Abal Medina, 2016.

¹¹ Módulo especial incorporado a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

¹² Ver Matías Di Santi: “Democratización sindical: qué proponen las centrales opositoras”, en *Chequeado*, 24/3/2014.

inscriptos”¹³ al impedirles recaudar las cuotas salariales, de retención automática, de los planteles de trabajadores en los que estos sindicatos hubieran ganado la representación gremial en el establecimiento.¹⁴

La combinación de estructuras sindicales poderosas con una expandida organización gremial en los lugares de trabajo había habilitado, desde el primer peronismo en los años cuarenta, la gravitación de los trabajadores en la escena social y política del país. La coexistencia de estos niveles de representación no estuvo exenta de tensiones, incluso en muchos momentos produjo fuertes enfrentamientos en el seno de la clase trabajadora. Sin embargo, era definitoria de la forma sindical argentina desde la irrupción del peronismo. Delegados y comisiones internas funcionaron como figuras de contrapeso, evitando el cierre de los sindicatos o su extrañamiento respecto de la “realidad viva del trabajo”. A su vez, la acción sindical en cada establecimiento se veía fortalecida por la acumulación lograda por los sindicatos y se encauzaba en una estrategia conjunta, creando un equilibrio precario, pero muy productivo en términos políticos, entre estructuras poderosas y decisión transformadora, entre poder económico y poder gremial.

Empero, el empequeñecimiento de la organización gremial en los diversos lugares de trabajo en el marco de la precarización laboral impuso un límite evidente a la transformación social. En muchos sindicatos las mejoras llegaron “desde arriba” y se centraron en el aumento salarial y no en modificar la desigualdad de condiciones de trabajo que existe tanto en el interior de los establecimientos como esparcida por las cadenas “invisibles” de la tercerización laboral. Dada la importante injerencia que la legislación nacional (vigente por décadas) otorga al poder gubernamental en la vida sindical, es posible sostener que durante el ciclo de gobiernos kirchneristas los esfuerzos no se dirigieron a promover “procesos desde abajo” como contrapeso de las cúpulas sindicales que protagonizaron la etapa de “organizaciones enriquecidas y trabajadores empobrecidos”, como las definió el líder de Camioneros, Hugo Moyano. Es posible que haya predominado una actitud conservadora por el temor al crecimiento de sectores de izquierda radical (trotskistas, en varios casos) que venían ganando cierto lugar en la organización de los trabajadores precarizados en empresas de las que los sindicatos se habían retirado.

El segundo problema de fondo es lo que provoca el “otro” movimiento obrero. En la Argentina, como en otros países de la región, se constata un rechazo muy profundo a políticas como la AUH y, en mayor medida, a programas como el Argentina Trabaja. “Planero” (despectivamente referido a quien vive de un plan social o

¹³ En la Argentina existen legalmente dos clases de sindicatos: los simplemente inscriptos y los que tienen personería gremial.

¹⁴ María Victoria Murillo (2013) analiza cómo un fallo de la Corte Suprema que habilitaba una ampliación de la competencia por la representación gremial en los lugares de trabajo fue limitado por resoluciones del Ministerio de Trabajo (durante el ciclo de gobiernos kirchneristas) que restringen las fuentes de recaudación de los “sindicatos simplemente inscriptos”.

subsidio) reemplaza, en los tiempos actuales, a piquetero, “negro”, o el más antiguo “cabecita negra”. También es utilizado el de “negros planeros”. Durante los primeros años del kirchnerismo, esta reacción permaneció difusa y desarticulada, pero fue creciendo y arraigándose socialmente.

Retomando la clasificación del inicio, incluidos-excluidos, podríamos decir que durante los últimos años fue construyéndose la antinomia imaginaria entre los “trabajadores que se rompen el lomo” y los “planeros que vive del Estado”. Un intenso murmullo social nos permite retomar los términos en los que son definidos: “los que reciben planes, los vagos, los que quieren vivir de arriba, los que viven de *nosotros* que trabajamos y pagamos nuestros impuestos”. Un elemento central que ocasiona la repulsa hacia los “planeros” es que no se comportan como “asistidos”. Una importante cantidad de ellos está organizada en cooperativas que a su vez integran organizaciones territoriales y políticas. Trabajan limpiando los ríos contaminados de los barrios,¹⁵ construyendo viviendas, reparando escuelas y salas de salud, desmalezando rutas, reciclando montañas de basura, construyendo cordones cuneta, produciendo uniformes de trabajo o escolares, entre muchas otras actividades. Su trabajo, su producción y el valor que generan para realizar la reproducción social están invisibilizados. Son representados como un “lastre social”: la parte hundida de la sociedad que empuja para abajo.

En 2010 se creó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En un documento elaborado por la CTEP se definen así: “... somos informales, precarios, externalizados y de subsistencia”.¹⁶ Juan Grabois, uno de sus dirigentes, explica que la CTEP:

... es una herramienta gremial del pueblo pobre, de los trabajadores sin derechos, sin reconocimiento, sin capital y sin patrón. Es, podría decirse, la CGT de los Excluidos. La CTEP agrupa cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, costureros, limpiavidrios, cuidacoches, constructores, gasistas, cerrajeros, trabajadores de empresas recuperadas, del transporte informal, de cooperativas populares, de programas sociales, de infraestructura barrial, de organizaciones de acción comunitaria (cuidadores, cocineros, educadores) o de pequeños talleres y unidades productivas (mecánica, carpintería, alimentos).¹⁷

Las organizaciones del “otro movimiento obrero” tendieron a quedar atrapadas en el Ministerio de Desarrollo Social. Encontraron allí un espacio de reconocimiento pero también un límite. Reconocidos como sujetos organizados, ya no serían “los asistidos”,

¹⁵ Sobre la experiencia de trabajo de varias cooperativas que realizaban la limpieza de los ríos contaminados del conurbano, ver Besada, 2015.

¹⁶ Emilio Pérsico y Juan Grabois: “Nuestra Realidad”, en *Cuaderno n° 1*, CTEP, Buenos Aires, 2014.

¹⁷ Juan Grabois: “¿Qué es la CTEP?”, en *Resumen Latinoamericano*, 8/2/2015.

pero su condición de pobres solaparía la de trabajadores. El 9 de diciembre de 2015, un día antes de la entrega del mando al nuevo presidente Mauricio Macri, quien derrotó al kirchnerismo en las últimas elecciones, el gobierno de Cristina Fernández, mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, otorgó la “personería social” a la CTEP. Una figura débil (en comparación con la personería gremial exigida por la propia organización), que de todas formas implica para la CTEP un punto de acumulación, a mitad de camino, en el trayecto de pobres a trabajadores pobres. Cuando apartamos analíticamente el rechazo social más difuso, asociado con los grandes grupos económicos de comunicación, nos encontramos con el problema de dos movimientos obreros en nuestro país: el sindical, que suele autodenominarse como Movimiento Obrero Organizado, y “social”, que definimos como el otro movimiento obrero (Abal Medina, 2014). La vinculación entre ambos es motivo de otro ensayo (Abal Medina, 2016), pero cabe apuntar que existieron intentos de integrar la CGT por parte de organizaciones como la CTEP que no prosperaron, ya que en su mayoría los dirigentes del movimiento obrero organizado no logran reconocerles condición de trabajadores, los piensan y definen como “extranjeros”, como cuerpos extraños a la tradición sindical argentina.

De todas formas, el movimiento obrero organizado no es homogéneo, y a medida que avanzaron los años kirchneristas, crecieron las fracturas. En el 2011 se dividió la CTA, que de todos modos ya había perdido fuerza de novedad y capacidad para expresar al “otro movimiento obrero”. En parte porque no logró que los gobiernos kirchneristas le otorgaran la personería gremial, quedando reducida a un sindicalismo de trabajadores estatales. Sin embargo, a pesar de no haber logrado expandirse hacia el sector privado (con algunas excepciones significativas, como el sindicato de trabajadores del Subte), en especial, los sindicatos de docentes de la educación pública sostuvieron luchas y reivindicaciones durante todo el ciclo analizado, maniobrando la difícil tensión de integrar una central sindical que apoyó activamente los gobiernos kirchneristas sin dejar de ejercer niveles de autonomía para la defensa de los trabajadores docentes. Un año después, en 2012, se produce la división más significativa de la CGT cuando los poderosos gremios del transporte bajo la conducción de Hugo Moyano, hasta entonces secretario general de la CGT, se enfrentan al gobierno nacional de Cristina Fernández. Otros sindicatos importantes integrarían la CGT Balcarce, que bajo la conducción del metalúrgico Antonio Caló, logra sostener gestos de apoyo al gobierno. Sin embargo, dentro de dicho agrupamiento sindical coexistieron sindicatos muy heterogéneos en términos de tradiciones gremiales y de idearios políticos: algunos de ellos asumieron el kirchnerismo como continuidad de una tradición nacional y popular, otros se sostuvieron como férreos anti-kirchneristas y anti-moyanistas (los denominados “gordos”). El carácter híbrido de este nucleamiento impidió cualquier protagonismo de esta central con la consiguiente dilapidación de fuerza organizativa.

Entretanto, el sindicalismo moyanista¹⁸ crea, bajo la dirección del líder camionero, la CGT Azopardo, que si bien representa una proporción más pequeña de trabajadores, está integrada por sindicatos poderosos que combinan poder económico con poder gremial y gozan de una elevada capacidad de presión, ya que pueden interrumpir la circulación del país. En la ruptura del moyanismo con el gobierno subyace un cuestionamiento sindical al carácter regresivo del sistema impositivo nacional, pero se desencadena cuando la presidenta desoye la exigencia de disminuir la carga tributaria (“impuesto a las ganancias”) que afecta sobre todo al segmento de salarios más elevados de los empleados registrados, quienes aun ubicándose entre los más beneficiados, no dejaban de tener ingresos de asalariados. La consigna “el salario no es ganancia” fue la base de este reclamo.

Una antinomia compleja entre los trabajadores del “techo” y los trabajadores del “piso” se instaló en la narrativa del final del gobierno de Cristina Fernández, mientras que sus tensiones con varios de los jefes sindicales estrechaban las bases de sustentación de su gobierno, especialmente durante su segundo mandato.

REFLEXIÓN FINAL: A PROPÓSITO DEL CONSUMO Y DEL “BOOM DE LOS COMMODITIES”

Una anécdota, que difunde con perspicacia el columnista Mario Wainfeld, aporta algunos elementos que aún no mencionamos y que suman claves interpretativas sobre la década kirchnerista:

Hace alrededor de dos años, el cronista se cruzó con Néstor Kirchner en un pasillo de la Casa Rosada [...]. Sacó un papelito del bolsillo (un gesto usual) y preguntó al cronista, data en mano, si conocía cuántos splits [aires acondicionados] se habían vendido durante su mandato. Este diario lo ignoraba con holgura, se le espetó una cifra millonaria. Sin tomar aire, Kirchner estimó cuántos habrían sido adquiridos por gentes de clase alta o media alta. Los restó del total y concluyó que tantísimos hogares de clase media baja o trabajadora habían tenido por primera vez un aparato de aire acondicionado en su casa en el transcurso de su gobierno. Multiplicó la cifra por cuatro o cinco (familia tipo) y remató: “Millones de personas que por primera vez no se mueren de calor en verano. ¿Y sabe cuánto pagan de electricidad?”. Eso sí era público, muy poco. “Por eso, porque hay millones de laburantes que viven mejor, tenemos tanto apoyo”, se solazó. Y, en su salsa, agregó su pizca confrontativa: “Y por eso hay tantos que nos detestan”.¹⁹

¹⁸ Este sector está nucleado en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, integrada por 24 sindicatos de transporte terrestre, aéreo, portuario, fluvial y marítimo, conducida actualmente por el dirigente Juan Carlos Schmid.

¹⁹ Mario Wainfeld: “Splits y ventiladores”, en *Página/12*, 7/12/2008. Esta anécdota remite al pro-

La expansión de la demanda interna sobre la base del incremento del poder de compra de las clases populares ha sido un denominador común de muchos de los gobiernos heterodoxos que gobernaron la región en los últimos años. Pero la condición de posibilidad del aumento del consumo no residió únicamente en la voluntad política y en la organización popular nacida de las diversas resistencias al neoliberalismo. La coyuntura global habilitó recursos para financiar el proceso distributivo en una ecuación del tipo “todos ganan”: el denominado *boom* de los *commodities*. La paradoja residió en que la mayor disponibilidad de recursos que se volcó hacia los sectores populares agravó el persistente problema de las estructuras productivas desequilibradas, al que refirió Marcelo Diamand en la década del setenta, ya que profundizó la asimetría entre poder agropecuario y poder industrial.

La anécdota de los aires acondicionados condensa, a la vez, la fuerza de la transgresión subjetiva que significa replicar ciertos modos de consumo de los sectores de mayores recursos, pero también un extravío. El consumo de electrodomésticos no fabricados en Argentina o con alta incidencia de componentes extranjeros también agravó el persistente problema latinoamericano de la restricción externa. En un artículo que reconstruye los diversos elementos que intervienen en la actual crisis política brasilera, Perry Anderson afirma que:

La compra de productos electrónicos, de electrodomésticos y vehículos despegaron (los autos a través de estímulos fiscales), mientras que el suministro de agua, las carreteras pavimentadas, los autobuses eficientes, el tratamiento de aguas servidas, las buenas escuelas y hospitales fueron descuidados. Los bienes colectivos no tuvieron una prioridad ni ideológica ni práctica. Así que junto a necesarias, y genuinas mejoras en las condiciones de vida, el consumismo en su sentido más deteriorado se propagó por toda la jerarquía social, desde una clase media bombardeada con publicidad y centros comerciales, en niveles elevados incluso para estándares internacionales.²⁰

Esta reflexión es interesante para diferenciar cierta singularidad del proceso argentino que combinó consumo popular largamente postergado con un “consumismo de tipo capitalista” como el que alude Anderson, pero que también produjo inversiones en determinados bienes públicos (como la mejora sustancial de la infraestructura educativa, la extensión de la red de agua potable y de cloacas, la duplicación de kilómetros de autopistas/autovías y en general la fuerte extensión de caminos, entre otras).²¹ Finalmente, es igualmente cierto que la falta de vivienda, la desigualdad en

ceso de surgimiento del obrero consumidor durante el primer peronismo, que se reconstruye mediante una novedosa y exhaustiva revisión de documentos históricos en Milanesio, 2014.

²⁰ Perry Anderson: “Crisis en Brasil”, en *Viento Sur*, 5/2016.

²¹ Ver “La inversión pública 2003-2010. Una herramienta para el desarrollo”, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2011.

el acceso a la salud y un transporte público deficiente continuaron siendo problemas para las grandes mayorías trabajadoras. Queda, sin embargo, pendiente el balance de esta ecuación.

Cada vez más movimientos y organizaciones populares definen el “consumismo” como una barrera cultural para potenciar procesos de mayor igualdad social. Y en este marco se consolida el cuestionamiento a un neodesarrollismo presente en el ideario de gobiernos nacional-populares, creando únicamente el espejismo de un bienestar que no logró cambiar las condiciones estructurales de vida de los trabajadores. Pero hoy esta situación se agrava con el acceso de Mauricio Macri al gobierno y los horizontes de retroceso en varias esferas.

BIBLIOGRAFÍA

- Abal Medina, Paula (2014). *Ser sólo un número más. Trabajadores jóvenes, grandes empresas y activismos sindicales en la Argentina actual*. Buenos Aires: Biblos.
- (2016). “Las formas políticas del trabajo”. *Anfibia*, UNSAM. Disponible en <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/las-formas-politicas-del-trabajo/>
- Abal Medina, Paula y Diana Menéndez, Nicolás (2011). *Colectivos Resistentes*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Besada, Beltrán (2005). *El Estado metro a metro. Dinero y construcción política territorial. Un análisis de caso: Programa de limpieza, saneamiento y mantenimiento de arroyos en el Gran Buenos Aires*. Tesina de licenciatura, Carrera de Sociología de IDAES-UNSAM, octubre.
- Milanesio, Natalia (2014). *Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Murillo, María Victoria (2013). “Cambio y continuidad del sindicalismo en democracia”. *SAAP*, vol. 7, n° 2, noviembre.
- Pereyra, Francisca y Tizziani, Ania (2014). “Experiencias y condiciones de trabajo diferenciadas en el servicio doméstico”. *Trabajo y Sociedad*, n° 23, invierno.
- Ruiz Malec, Mara; Persia, Juliana y Sorokin, Isidoro (2015). *Trabajo no registrado y protección social en Argentina*. Buenos Aires: Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, enero.
- Sartre, Jean Paul (2004). *Problemas del Marxismo I*, Buenos Aires: Página 12-Losada.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2004). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

ACCIÓN COLECTIVA Y AMPLIACIÓN DE DEMANDAS LUEGO DE LA CRISIS DE 2001

LAS PARTICULARIDADES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES*

Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez

Organizaciones de vecinos que se manifiestan en rechazo a la instalación de basurales en localidades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Cortes de ruta en reclamo por la instalación de pasteras en las costas del Río Uruguay. Movilizaciones contra la minería metalífera a cielo abierto¹ que reúnen a pueblos de uno y otro lado de la Cordillera de Los Andes. Comunidades mapuches que en provincias patagónicas se resisten a ser desalojadas de sus tierras sobre las que se proyectan emprendimientos inmobiliarios. Organizaciones campesinas que se enfrentan a las topadoras para impedir la tala indiscriminada de los bosques y ser desplazados de su territorio en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta. Colectivos que surgen al grito de *Paren de Fumigar* y se vinculan con médicos e investigadores para denunciar los efectos de los

* Algunos de los análisis y reflexiones vertidos en el presente texto son el resultado de la participación de las autoras en el proceso de investigación conjunto de los proyectos: “Actores sociales, demandas de derechos y espacios de ciudadanía en la Argentina contemporánea” (2006- 2009) y “Modelos de desarrollo, actores, disputas y nuevos escenarios en la Argentina contemporánea” (en curso desde 2010) dirigidos por la Dra. Maristella Svampa. Proyectos financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Universidad Nacional de General Sarmiento.

¹ La denominación “minería metalífera a cielo abierto” o “minería a gran escala” refiere a un tipo de minería particular diferente de la minería tradicional o de socavón. Como explicaremos más adelante, la minería de socavón puede realizarse cuando los metales se presentan de manera concentrada en forma de grandes vetas. En este caso, la explotación, generalmente, se realiza a través de galerías subterráneas. Este tipo de minería es cada vez menos común y casi inexistente en nuestro país, debido a que los metales son cada vez más escasos y se encuentran en estado de diseminación. Por lo tanto, actualmente, la manera más rentable de extracción de minerales es a través de voladuras de montañas por dinamitación. A este método, que se combina con la utilización de sustancias tóxicas (como cianuro) para la separación de los minerales de la roca, se lo denomina minería a cielo abierto o a gran escala.

agroquímicos sobre la vida humana. Voces que se manifiestan contra el monocultivo de soja y eucaliptus en cuanto atentan contra la biodiversidad. Vecinos autoconvocados en defensa de los lagos, los ríos y por el derecho a acceder a las costas.

¿Tienen algo en común todas estas expresiones? ¿Cuáles son sus similitudes y divergencias con otras organizaciones sociales? ¿Cuáles son sus formas de organización y qué tipo de acciones realizan? ¿Cuáles son sus objetivos o metas? ¿De qué manera y con quiénes articulan sus acciones? ¿Qué ha sucedido para que las cuestiones ambientales antes reservadas a pequeños grupos preocupados por temáticas específicas o a organizaciones de escala internacional se conviertan ahora en el motor de nuevas formas de movilización y participación ciudadana? ¿Qué características de los movimientos sociales que tuvieron lugar en nuestro país en las últimas décadas se encuentran presentes en los nuevos movimientos socioambientales?

Nuestro primer propósito es presentar una aproximación a los casos que inauguraron este nuevo ciclo de conflictos relacionados con la defensa de los recursos naturales en Argentina, dado que esto nos permitirá adentrarnos en la temática. Para ello realizaremos una breve descripción de los primeros momentos de los conflictos que tuvieron lugar en Gualaguaychú y en Esquel. Luego, presentaremos una caracterización de los movimientos sociales de los años noventa en Argentina con el objeto de identificar similitudes y divergencias entre estos actores y los movimientos socioambientales propios de principio de siglo. La identificación de rasgos particulares de estos movimientos, entendemos, aportará a construir algunas respuestas a nuestras preguntas y sumergirnos en el análisis de uno de los movimientos sociales que presenta mayor dinamismo en la Argentina actual: los movimientos socioambientales.

LOS PRIMEROS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POSCRISIS DE 2001

A partir de la crisis de 2001, el escenario político social permitió tematizar e ingresar a la agenda política y al espacio público nuevas demandas de derechos económicos, sociales y culturales.² Estas demandas se expresaron en la proliferación de organizaciones de desocupados, en la recuperación y nueva puesta en marcha de fábricas por parte de los trabajadores, en la emergencia de asambleas barriales, en el surgimiento de novedosos colectivos culturales y en la mayor visibilidad alcanzada por grupos conformados para la promoción de derechos vinculados a la diversidad sexual.

Aún resonando los ecos de este contexto de movilización social, cobran vida dos experiencias colectivas que inician un nuevo capítulo en la tradición de los movimientos sociales en Argentina. Nos estamos refiriendo al *caso* Gualaguaychú,

² Este fue el tema general de investigación desarrollado por el Área de Sociología entre los años 2006 y 2009 en el proyecto anteriormente citado.

en la provincia de Entre Ríos –vinculado a las tratativas para la instalación de dos plantas de fabricación de pasta celulosa– y al *caso* Esquel, en la provincia de Chubut –asociado a las actividades de exploración de una empresa minera para la explotación de oro a gran escala–. Ambas experiencias combinan la defensa del medio ambiente y de los estilos de vida locales con cuestionamientos a las formas tradicionales de representación política y participación ciudadana.

Comencemos por la ciudad patagónica. Durante las últimas dos décadas del siglo XX las actividades tradicionales de Esquel³ habían entrado en crisis. A los aspectos climáticos desfavorables y la caída del precio de la lana se sumaba el proceso de reforma estructural y recorte presupuestario a nivel nacional y provincial que ponía en jaque la economía local. Como resultado, hacia fines de los noventa Esquel se enfrentaba a una crisis social y económica, que se expresaba en altos niveles de desempleo y pobreza (Walter, 2008). Por esos años se inician las actividades de exploración en búsqueda de minerales en un área localizada a menos de 10 km de la ciudad de Esquel, y en el año 2001 se anuncia el descubrimiento de una importante mineralización aurífera.

A comienzos del 2002, en ese crítico contexto económico a nivel nacional y provincial y con niveles muy favorables en el precio del oro en el mercado internacional, la empresa canadiense Meridian Gold anunció su interés por llevar adelante el proyecto minero Cordón Esquel. Se trataba de un emprendimiento a gran escala para la explotación de oro a cielo abierto, en el que se emplearían grandes cantidades de explosivos para demoler la montaña y de agua mezclada con cianuro y otras sustancias químicas que permitiesen separar los minerales de la roca pulverizada.

Desde el gobierno provincial se preveía un proceso sencillo y ágil que rápidamente diera paso a la explotación. En consecuencia, se publicitaba la presentación del Informe de Impacto Ambiental y casi en simultaneidad la realización de una Audiencia pública. Estas herramientas de control y participación que deberían emplearse para evaluar la viabilidad y aceptación social de un proyecto de las características que presenta un mega emprendimiento minero, fueron utilizadas por parte del gobierno provincial con la intención de garantizar que la explotación de la mina pudiera ejecutarse.⁴

Sin embargo, muchos esquelenses que en un comienzo tenían una posición favorable al proyecto por las expectativas de reactivación económica general, y especialmente por las promesas de generación de empleo que traería, comenzaron a preguntarse sobre las características que implicaba un proyecto de explotación minera a cielo abierto. La participación de técnicos, varios de ellos provenientes del

³ La ciudad de Esquel se encuentra en la provincia de Chubut y cuenta con una población de 28.486 habitantes (Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001).

⁴ Para profundizar en lecturas sobre este proceso puede recurrirse a Walter, 2008 y Weinstock, 2006.

ámbito universitario y de ambientalistas de la región, generó un proceso de análisis y difusión de los impactos que generaría la actividad. Entre los que resultaron más resonantes, se destaca el empleo del cianuro, allí donde precisamente se ubica la fuente de agua de la zona y las consecuencias negativas para el medio ambiente de proyectos similares existentes en otras regiones de América Latina.

Los vecinos comenzaron a reunirse en torno a la información, a planificar y a realizar acciones, dando origen a la primera asamblea de autoconvocados contra la minería a gran escala en nuestro país. Más allá de su heterogénea composición, la Asamblea logró constituirse en un espacio de deliberación de un amplio sector de vecinos, quienes fueron construyendo argumentos contra la instalación del proyecto:

Porque la roca que será removida... no sólo contiene el ansiado oro, sino que libera otros elementos, tales como metales pesados [...]. Los metales pesados son altamente tóxicos debido a que no pueden ser metabolizados por el organismo humano... Porque habrá una afectación directa del agua en CANTIDAD y CALIDAD. Todo proyecto minero que pretenda instalarse utilizará inmensas cantidades de agua e inutilizará otro tanto... Porque en la explotación de oro que se pretenda realizar se empleará un procedimiento que se llama “lixiviación con soluciones de cianuro”, lo que representa un peligro potencial para las personas y el medio ambiente al utilizarse en grandes cantidades una sustancia altamente tóxica y contaminante. En el caso de Esquel se pretendía utilizar un promedio 180 toneladas al mes de cianuro de sodio, además de otras sustancias químicas como por ejemplo 12 toneladas de ácido clorhídrico, 12 toneladas de soda cáustica, 1.400 kilogramos de litargirio, etc.... Porque se trata de un proyecto de beneficios transitorios y “cortoplacistas”. Es, ni más ni menos, una clara aplicación del principio “pan para hoy y hambre para mañana”... Porque los beneficios económicos que este tipo de emprendimiento le representan al país, a la provincia y a nuestra zona son inexistentes comparados con las inmensas ganancias que se llevarán... Porque los puestos de trabajo que utilizarían no son tantos y por ende el beneficio en este sentido no es tan importante teniendo en cuenta los riesgos que significa un emprendimiento de este tipo... Porque somos muchos –y cada vez somos más– los que estamos cansados de que se disfracen distintos proyectos para que unos pocos (siempre los mismos) obtengan beneficios importantes en contradicción con los intereses del pueblo.⁵

Además de las masivas movilizaciones y de las variadas actividades orientadas a la difusión de información y concientización (como por ejemplo las campañas vía internet, las charlas en las escuelas, las “volanteadas”, etcétera) la acción más sin-

⁵ Fragmentos de un documento de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Disponible en <http://www.noalamina.org/>

gular –difícil de ser pensada sin las acciones antes mencionadas– fue la realización de una consulta popular. Siguiendo los pasos de la experiencia de Tambogrande,¹ Perú, los vecinos autoconvocados de Esquel organizaron un plebiscito. Se realizó en marzo de 2003 registrándose una concurrencia alta (75% del padrón), y un fuerte posicionamiento frente a la explotación minera: el 81% del electorado votó contra la instalación de la mina. Asimismo, la consulta se llevó a cabo en las localidades vecinas donde los porcentajes por el “no” fueron aún más contundentes (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009: 127).

Mientras el “no a la mina” se fortalecía en el sur y se extendía hacia otras regiones donde existían o se pretendían iniciar explotaciones mineras, en el litoral del país comenzaba a tomar forma un conflicto por la instalación de fábricas de pasta celulosa. En este caso, los dos proyectos cuestionados por la población no se localizaban en territorio argentino sino en Fray Bentos, ciudad ubicada en la República Oriental del Uruguay y comunicada con la ciudad de Gualaguaychú² a través del río Uruguay.

La ciudad de Gualaguaychú se había desarrollado, tradicionalmente, sobre la base de la actividad agropecuaria y, especialmente, en torno a la actividad de los frigoríficos que absorbían buena parte de la mano de obra local. El cierre de los frigoríficos en la década del setenta significó un duro revés para la economía de la zona. Durante la década del noventa, la ciudad se volcó al turismo. La actividad turística alrededor del río Uruguay y en torno al Carnaval configuró un enclave local en el que confluyen los intereses de múltiples actores sociales y económicos (Merlinsky, 2008: 6).

Estos mismos actores, sumados a otros tantos que defendían un estilo de vida ligado al uso y disfrute del río y que se oponían a la contaminación del aire y el agua, fueron quienes se movilaron en torno a lo que percibían como una “amenaza potencial” (Merlinsky, 2008: 6).

La primera movilización, realizada en el año 2005, fue el puntapié inicial para la conformación de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualaguaychú, y el intendente de la ciudad fue designado como presidente honorario. A partir de allí

¹ En Tambogrande, distrito localizado al Norte de Perú, se produjo un conflicto a partir de la pretensión de la empresa canadiense Manhattan Minerals Corporation de explotar un yacimiento de oro, plata, cobre y zinc. Lo distintivo de este caso radica en la utilización de la consulta vecinal como mecanismo para expresar la opinión de la población. Allí, las organizaciones involucradas en el conflicto impulsaron una consulta vecinal en junio de 2002. El resultado fue contundente, el 98,65% de la población votó por el No a la incorporación de la actividad minera en Tambogrande. El 70% de la población censada se acercó a las urnas, mientras que en las elecciones convencionales, cuando el voto es obligatorio, lo hacen en un 40%. (Para un desarrollo sobre este caso puede verse: Subías Grau, Teresa y Beltrán, María Jesús (2005).

² Gualaguaychú se encuentra en la provincia de Entre Ríos y cuenta con una población de 76.220 habitantes (Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2001).

se desarrolló una activa campaña de sensibilización que incluyó, como en el caso de Esquel, reuniones informativas, visitas a las escuelas y “volanteadas”. A fines de ese año, la Asamblea realizó cortes temporarios en la ruta que conduce al puente General San Martín, sobre el río Uruguay y, desde 2006, cortes de larga duración. Más tarde, se adoptaría la decisión de cortar en forma permanente el puente internacional (Delamata, 2007: 1).

En mayo de 2006 el gobierno nacional argentino retomó la demanda de Gualaguaychú de denunciar al Estado uruguayo ante la Corte Internacional de Justicia³ por incumplimiento de sus obligaciones transfronterizas en materia de prevención de la contaminación. También se comprometió ante la Asamblea a mantener la “causa de Gualaguaychú” como política de Estado (Delamata, 2007: 1).

Frente a este escenario, las dos empresas involucradas en el conflicto adoptaron diferentes posturas: Ence –española– decidió cambiar la zona de emplazamiento de la pastera. No así Botnia, empresa de origen finlandés, que optó por continuar las obras, para finalmente entrar en funcionamiento a fines de 2007.

Ambos conflictos han atravesado por diversas etapas y continúan vigentes. La actividad de las empresas o el intento por instalar un proyecto que afecta las formas de vida a partir de la contaminación del ambiente y la reestructuración de las economías locales continúa generando resistencias en la población. En este marco, las asambleas socioambientales a través de la movilización, la acción directa y la acción institucional continúan cuestionando y poniendo en agenda pública las implicancias de la instalación de estos emprendimientos no solo en relación con la problemática socioambiental, sino también en la discusión sobre modelos de desarrollo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES Y SUS RASGOS COMUNES CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LOS AÑOS NOVENTA

Los casos de Esquel y Gualaguaychú, así como otras experiencias de organización y movilización en defensa de los bienes naturales,⁴ comparten algunos rasgos con

³ La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos), es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Pueden recurrir a ella todos los países miembros de las Naciones Unidas. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

⁴ “El término ‘bienes naturales’ o ‘bienes comunes’ o ‘[...] bienes naturales comunes’ viene a contrarrestar la visión utilitarista de los bienes de la naturaleza como mercancía, como ‘recursos’ para las actividades económicas, que implica el desconocimiento del resto de sus atributos –que no pueden representarse mediante un precio de mercado, incluso aunque

los movimientos sociales que tuvieron lugar en América Latina y, en particular, en nuestro país durante los años noventa.⁵

En primer lugar, dos de las características más importantes que tienen en común estos movimientos se relacionan con las formas de manifestación a través de la *acción directa* y la puesta en juego de prácticas de *democracia directa*. Es así que la realización de acciones como el corte de ruta y la organización asamblearia son rasgos característicos que comparten los movimientos socioambientales y sus predecesores.

Un tercer denominador común está dado por la *matriz territorial* en la que se inscriben estos movimientos. Desde los años ochenta el territorio comienza a tener un lugar relevante como espacio de organización comunitaria para los diferentes movimientos sociales. Este aspecto del territorio será resignificado en el marco de las luchas ambientales, debido a que se convertirá en el centro de las disputas por el uso de los recursos naturales (Svampa, 2008; Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 2009).

Profundizaremos en las características de los movimientos a partir de cada una de las dimensiones antes mencionadas, comenzando por el modo que utilizan para expresar sus demandas a través de la *acción directa*. Como su nombre lo indica, la acción directa o extrainstitucional es la que se realiza por fuera de las instituciones, generalmente irrumpiendo en el espacio público con el objetivo de hacer visible el problema ante el resto de la sociedad e instalarlo en la agenda pública y mediática. Tiene un carácter disruptivo y, en ocasiones, no convencional.

La acción directa como forma de expresión de los movimientos sociales se encuentra relacionada con la crisis que durante los años noventa sufrieron las instituciones y organizaciones que tradicionalmente funcionaron como canales de expresión, tales como los partidos políticos y los sindicatos. El escenario de profunda crisis socioeconómica y gran desocupación que acentuaba la asimetría de fuerzas entre los actores (movimientos sociales, empresarios y el Estado) fomentó que la acción directa, a través del corte de ruta, se convirtiera en la herramienta de lucha privilegiada de los movimientos sociales (Svampa, 2008: 79). Varios de estos movimientos surgieron como respuesta a la consolidación del “modelo neoliberal”,

algunos lo tengan—. Entendemos así que la denominación ‘bienes naturales comunes’ excede a la de recursos naturales, ya que estaría considerando también los servicios ambientales de la naturaleza, y su valor simbólico, de existencia y de legado” (Wagner, 2011). Los movimientos socioambientales generalmente utilizan estas denominaciones desde una perspectiva crítica a la visión mercantilista de la naturaleza.

⁵ Para retomar las características más importantes de los movimientos sociales durante los años noventa utilizaremos las dimensiones analizadas por Maristella Svampa (2008). Para ilustrar las dimensiones remitiremos, como ya dijimos, por un lado al conflicto de Gualeguaychú, singular en lo que respecta al nivel de rechazo de la población en torno al funcionamiento de plantas de celulosa, mientras que para ejemplificar los movimientos contra la megaminería recurriremos a algunas de las diversas experiencias que proliferaron en el transcurso de la primera década de este siglo y que presentan denominadores comunes con el caso Esquel.

entre los que se destacan los grupos piqueteros y los trabajadores de “empresas recuperadas”, ambos originados en la segunda mitad de la década de 1990 (Palomino, 2003: 116).

Los cortes de ruta surgieron en el norte y sur de nuestro país realizados por las organizaciones de trabajadores desocupados a raíz de la privatización de la empresa estatal YPF. Los denominados “piquetes” se extendieron posteriormente a todo el territorio nacional, cobrando una especial relevancia en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires (Svampa y Pereyra, 2003). De esta manera, los cortes de ruta alcanzaron un fuerte e inmediato efecto político y se multiplicaron a través de los medios de comunicación (Palomino, 2003: 118). Se transformaron, entonces, en la forma más típica de expresión de la acción directa que se sumó a otros repertorios de acción⁶ tales como las marchas, los escraches,⁷ las carpas⁸ y los acampes.⁹

Por su parte, los movimientos socioambientales también utilizan en su repertorio de acción los cortes de ruta, no solo para evitar la circulación y de esta manera hacer visible el reclamo, sino que también llevan a cabo “cortes selectivos”. Por ejemplo, para el caso de las papeleras, el corte del puente que une a los dos países fue lo que mantuvo el conflicto en la agenda de los medios de comunicación (Delamata, 2008). En los conflictos vinculados a la megaminería las asambleas

⁶ En la teoría de los movimientos sociales los conceptos *Repertorios de Acción* o *Repertorios de Confrontación* son introducidos por el *Paradigma de la Interacción Estratégica*, cuyos principales expositores fueron C. Tilly y S. Tarrow. Estos conceptos se refieren a las formas en las que se expresa la acción colectiva. En este sentido Tarrow señala: “cada sociedad tiene una reserva de formas familiares de acción, conocidas tanto por los activistas como por los oponentes, que se convierten en aspectos habituales de su interacción” (1997: 51). Por lo tanto, los diferentes repertorios de acción colectiva se encuentran enraizados en la sociedad en la que se desarrollan, impregnados por la cultura, la historia y la trayectoria de movilización, etcétera. Estas formas son aprendidas por los movimientos sociales y desarrolladas en diferentes territorios de resistencia.

⁷ El *escrache* consiste en una manifestación pública que busca romper con el anonimato de los responsables de un hecho valorado como repudiable. Se trata de una acción directa introducida por las organizaciones de derechos humanos, orientada a señalar las viviendas de los represores de la última dictadura militar. En el caso de los conflictos socioambientales, los escraches han estado dirigidos a funcionarios vinculados a las áreas de medio ambiente, diputados, empresarios, entre otros.

⁸ El conflicto docente que tuvo lugar desde el año 1997 introdujo una nueva modalidad de protesta. Para manifestar la oposición a la reforma educativa, reclamar un incremento del presupuesto y del salario docente, instalaron una carpa en la Plaza de los Dos Congresos en la que los docentes se turnaban para hacer ayuno. La denominada “carpa blanca” duró dos años y fue una de las expresiones de resistencia más importante a las reformas neoliberales del Estado durante los años noventa.

⁹ Los *acampes* formaron parte del repertorio de acción, principalmente, de las organizaciones piqueteras que frente a reclamos puntuales como puestos de trabajo y/o planes sociales, entre otros, instalaban campamentos frente a distintas dependencias estatales con el objetivo de obtener una respuesta favorable frente al reclamo.

socioambientales realizan cortes que impiden el paso a vehículos relacionados con la actividad minera, ya sean de las empresas o de organismos públicos. En este sentido, uno de los “cortes selectivos” más prolongados es el llevado a cabo por las asambleas de Chilecito y Famatina en la provincia de La Rioja para impedir la explotación del cordón serrano de Famatina. Este corte que se realiza desde el año 2007 impide el acceso al cerro donde la empresa Barrick Gold S. A., una de las compañías mineras más grandes del mundo y de origen canadiense, que había comenzado con la etapa de exploración para implantar allí un emprendimiento minero de gran envergadura. Desde entonces, el bloqueo al acceso tanto a miembros de la empresa como a funcionarios de la Dirección Provincial de Minería, articulado con otras acciones, paraliza la realización de la explotación.

La segunda dimensión de los movimientos sociales se vincula con su dinámica de funcionamiento interno y la forma organizativa que deriva de ella. Democratizar las decisiones a partir de lograr mayor participación cuando los canales políticos o de representación tradicionales no son suficientes es un desafío que se proponen los movimientos sociales. Para ello han procurado generar canales abiertos de participación, debate y toma de decisiones que, en la mayoría de los casos, se ha realizado a partir de la *organización asamblearia*. En esta forma de participación el objetivo es que todos los miembros de la organización tengan voz y voto en cuestiones que involucran su devenir. Además, tiende a evitar los liderazgos personales y las decisiones poco participativas y no consensuadas.

La democracia asamblearia fue una práctica especialmente presente en la organización cotidiana de los movimientos de trabajadores desocupados durante los años noventa. Sin embargo, fue a partir de la crisis de 2001, específicamente luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre,¹⁰ que la asamblea como espacio privilegiado de participación política se expandió a otros sectores sociales a través de las asambleas barriales, fundamentalmente localizadas en la ciudad de Buenos Aires, algunas ciudades del conurbano bonaerense y centros urbanos del interior del país.

Una de las principales características distintivas de las asambleas barriales fue su alto grado de heterogeneidad en relación con las edades, género, inserción laboral, nivel educativo o experiencias políticas previas de sus integrantes (Svampa, 2002, 2008; Quintar, Callelo y Fritzsche, 2002; Ouviña, 2003). Las asambleas estuvieron compuestas principalmente por las clases medias de la ciudad de Buenos Aires, entre los que se destacaban comerciantes, empleados y profesionales del ámbito público y privado, muchos de ellos empobrecidos y con un alto grado de

¹⁰ Con respecto al surgimiento de las asambleas barriales, Hernán Ouviña, señala: “Sería erróneo suponer que las asambleas barriales surgieron como consecuencia directa y unívoca de los acontecimientos sucedidos el 19 y 20 de diciembre. No obstante, podemos establecer esta fecha como condensación de un momento histórico que da origen a la auto-organización vecinal especialmente en barrios de la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida del conurbano bonaerense y otras regiones céntricas del país” (2003: 6).

inestabilidad laboral, así como también un conjunto de desocupados de diferentes procedencias, y jóvenes, muchos de los cuales realizaban su primera experiencia política (Svampa, 2008: 119).

En un proceso de consolidación y expansión entre los años 2002 y 2003, las asambleas barriales entablaron importantes vínculos con otros actores sociales relevantes en este período, como las organizaciones de trabajadores desocupados, los cartoneros y las fábricas recuperadas. Estos vínculos “pendularon” entre la solidaridad y el conflicto.¹¹ A pesar de ello, las asambleas, junto con otras organizaciones sociales posibilitaron luego de 2001 la apertura de un nuevo ciclo de participación política en el que uno de sus ejes articuladores se constituyó en la *autonomía* respecto de los partidos políticos, los sindicatos y el Estado (Svampa, 2008: 148).

En el transcurso de la primera década de este siglo la experiencia asamblearia cobra un nuevo significado en el marco de los conflictos socioambientales. En este sentido, la asamblea se presenta como la forma de organización y acción que se dieron los vecinos nucleados en torno a las diversas problemáticas ambientales,¹² que se suman a los casos de Gualaguaychú y Esquel antes presentados. Si en el caso de los conflictos vinculados a proyectos mineros que se suceden a posteriori del conflicto de Esquel podemos observar, en algunas regiones, el surgimiento de tantas asambleas como localidades afectadas o potencialmente afectadas, para el caso de las papeleras un rosario de asambleas se conforma en las localidades próximas a la costa del río Uruguay (Colón, Concepción del Uruguay, Ubajay, entre otras).

En los movimientos socioambientales la autodenominación como asambleas remite a la identidad del movimiento. Por un lado, lo diferencia de las organizaciones ambientalistas que tradicionalmente se ocuparon de estas temáticas y, por otro, acentúa los rasgos constituyentes de estos colectivos: la organización horizontal y autónoma.

En este sentido, la consigna “que se vayan todos” –expresión acuñada en la movilización de 2001 y que aludía a la crisis de representatividad, a la pérdida de confianza y credibilidad de la clase política– es reeditada en el conflicto de Esquel.¹³ La autonomía emerge como un valor pero también como una “tarea” o ejercicio

¹¹ Para profundizar en lecturas sobre la relación entre las asambleas barriales y otros actores sociales relevantes en el contexto de movilización y crisis socioeconómica 2001-2002, ver Svampa, 2002, 2008; Ouviaña, 2003; García, 2002; Schillagi, 2009.

¹² Estas problemáticas remiten a cuestiones diversas como la contaminación urbana, los impactos de las grandes obras (represas, autopistas, proyectos inmobiliarios), la utilización de agroquímicos, la deposición de residuos, entre otras. En torno a ellas se conformaron numerosas asambleas, entre las que –a modo ilustrativo– podemos mencionar: Asamblea Ambiental de Luján, Asamblea Binacional de Afectados por Yacyretá, Vecinos Autoconvocados por la Vida - Berazategui, Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres - Bariloche, Asamblea Villa Ciudad Parque los Reartes - Córdoba, entre muchas otras.

¹³ Este lema no se hace presente desde el inicio del conflicto, sino que emerge en momentos del plebiscito y se fortalece como consigna a lo largo del proceso (Walter, 2008).

de preservación, aunque circunscripta, fundamentalmente, a la relación con los partidos políticos y el Estado. Como consecuencia, estos actores no pueden participar como tales en la composición interna de las asambleas ni en las instancias de articulación inter-asamblearia. Esto no excluye que en determinadas coyunturas algunas organizaciones establezcan vínculos estratégicos para la realización de acciones institucionales con el propósito de incidir políticamente.

En tercer lugar, en el marco del proceso de *territorialización de los sectores populares* el territorio se presenta como el eje que organiza la vida de los individuos. La matriz territorial así constituida tiene consecuencias definitorias para los movimientos sociales de los años noventa. La crisis socioeconómica que atravesó nuestro país por aquellos años y la implementación de políticas sociales focalizadas en los más pobres facilitaron la conformación de un entramado político, económico y social cuya inscripción territorial por excelencia fueron los barrios populares.

En esta dirección, Denis Merklen (2005) señala que frente al proceso de empobrecimiento y de desafiliación masivo, los sectores populares hallaron en el barrio un refugio capaz de operar tanto como un lugar de repliegue como de inscripción colectiva. En este marco el barrio comenzó a cumplir funciones que otras instituciones ya no podían cumplir tan eficazmente, a la vez que se convirtió en un soporte para una solidaridad de base territorial (Merklen, 2005: 136).

En este contexto, las organizaciones sociales a través de la acción colectiva comenzaron a tener un protagonismo cada vez más importante en la reproducción de la vida de los sectores populares. Es así que las organizaciones piqueteras desarrollaron actividades de vasto alcance en las comunidades en las que se encontraban implantadas territorialmente: merenderos y comedores comunitarios, instalaciones educativas, emprendimientos productivos, huertas comunitarias, entre otras (Palomino, 2003: 118).¹⁴

Sin embargo, estas experiencias no fueron desarrolladas solo por los grupos piqueteros, un sinnúmero de organizaciones sociales de distinto tipo (ONG, grupos religiosos, fundaciones, sociedades de fomento, entre otros), algunas de larga trayectoria en trabajo comunitario, inscribieron sus actividades en el espacio barrial. En varios casos, estas actividades estuvieron fuertemente vinculadas a la gestión de las políticas sociales focalizadas, y en otros, se desarrollaron de manera autónoma e independiente del Estado. También los emprendimientos productivos, las redes de trueque y comercio justo, las mutuales, cooperativas y fábricas recuperadas, entre otras experiencias con una fuerte inscripción territorial, cobraron un nuevo impulso a partir de la crisis de 2001.

En este aspecto, la inscripción territorial de los sectores populares apunta a dar cuenta de las transformaciones y heterogeneidad de los sectores populares, de

¹⁴ Sobre la inscripción territorial del movimiento piquetero ver Svampa, 2003; Barattini, 2002, 2010; Bottaro, 2003, 2010.

las formas de organización y la generación de nuevos espacios identitarios en torno al barrio en un contexto de fuerte descolectivización de las clases trabajadoras (Kessler, Svampa y Bombal, 2010: 12).

Por su parte, en los movimientos socioambientales el territorio también es un eje central, pero esta vez desde un lugar diferente, no solo porque la escala deja de ser barrial, sino porque él mismo se transforma en el motor del conflicto, en el objeto de disputa.

Para analizar la resignificación que se produce en torno al territorio en los movimientos socioambientales es necesario hacer mención a un rasgo particular que presenta la fase actual del capitalismo relacionado con la centralidad que en esta cobran los recursos naturales. Esta centralidad se ve reflejada en el aumento de la demanda de materias primas y en la disputa por el control de recursos estratégicos (agua, minerales, semillas, tierra) a nivel mundial. Los procesos de transformación económica ocurridos después de la década del ochenta en América del Sur implicaron la reprimarización de las economías, fundamentalmente en lo que concierne al predominio de la producción de petróleo, minería y productos agrícolas como componentes principales de las exportaciones. Este proceso fue activado en la primera década del presente siglo por los altos precios de los productos en los mercados internacionales (Ibarra Crespo, 2010).

De esta manera, en determinadas regiones se consolida una matriz productiva de corte extractivista, basada en la sobre-explotación de recursos naturales y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”. Una de las consecuencias de esta inflexión es la potenciación de las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, así como el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales (definidos como “bienes comunes”) (Svampa, 2008).

Los movimientos socioambientales presentan, en relación al territorio, un carácter defensivo y suelen iniciarse a partir de reclamos puntuales. Sin embargo, luego tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros temas, tales como el cuestionamiento al modelo de desarrollo y la necesidad de la desmercantilización de aquellos bienes considerados comunes (Svampa, Bottaro, Sola Álvarez, 2009: 45).

En este marco, los recursos naturales aparecen resignificados como “bienes comunes” que garantizan y sostienen las formas de vida en un territorio determinado. Las acciones de defensa a las formas de vida a nivel local son las que dan lugar a movilizaciones en zonas urbanas y rurales donde sus habitantes perciben que estos bienes están amenazados. Así, en algunos territorios, los nuevos colectivos están integrados por hombres y mujeres que nacieron y se criaron en esos pueblos y ciudades donde la migración hacia la ciudad capital u otros centros urbanos es un fenómeno frecuente. En ellos, la valoración del territorio está ligada, entre

otras cuestiones, a la historia familiar, comunitaria e incluso ancestral (territorio heredado). En otros, involucra a quienes habiendo hecho la opción de abandonar los grandes centros urbanos del país, han elegido los lugares hoy amenazados. Se trata de sectores medios, algunos de ellos profesionales, motivados por la búsqueda de una mejor calidad de vida o de jóvenes que optaron por un estilo de vida diferente en el cual la relación con “lo natural” y el ambiente juega un papel central (territorio elegido). En otros casos, la concepción del territorio “heredado” y/o del territorio “elegido”, va convergiendo con la concepción del territorio propio de las comunidades indígenas y campesinas (territorio originario). Cualquiera sea el caso, lo que se pone en juego aquí son los derechos territoriales. Así, no se trata exclusivamente de una disputa en torno a los “recursos naturales”, sino de una disputa por la construcción de un determinado “tipo de territorialidad” (Porto Golçalvez, 2001) inserta, a su vez, en un modo de concebir el desarrollo (Svampa y Sola Álvarez, 2010: 119).

LAS PARTICULARIDADES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES

Sumadas a las características antes mencionadas, identificamos tres dimensiones que en los movimientos socioambientales cobran especial relevancia: una importante apelación a la *acción institucional*, la generación de un *saber experto independiente* y la *multiescalaridad* en la que se desarrollan los conflictos.¹⁵

Los movimientos socioambientales recurren frecuentemente a la *acción institucional*, es decir, al empleo de mecanismos y procedimientos previstos constitucionalmente o establecidos por organismos del Estado. Esta forma de acción se expresa, por lo general, en demandas al Poder Judicial y al Legislativo, tales como recursos de amparo y presentación de proyectos de ley, los cuales son presentados en los diferentes niveles del Estado (municipios, provincias y nivel nacional). La realización de consultas a la población mediante mecanismos plebiscitarios es también una demanda de los movimientos que requiere de la apertura de canales de participación por parte del Estado.

Para el caso de los movimientos contra la minería a gran escala, entre las demandas institucionales se encuentra la derogación y anulación del actual Código Minero y demás leyes sancionadas durante los años noventa que promueven la inversión transnacional en la explotación de los recursos mineros a través de otorgamientos de beneficios y exenciones impositivas.¹⁶

¹⁵ Sobre estos temas ver Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009.

¹⁶ La reforma constitucional de 1994 implicó un cambio profundo en relación con la explotación de los recursos naturales; por un lado, consagró la provincialización de los recursos naturales (gas, petróleo, minerales), que dejaron de depender del Estado nacional; por otro lado, marcó la renuncia del Estado a la explotación de aquellos, lo que dio paso a una obligada privatización. En el caso de la minería las exenciones al capital transnacional consistieron en la estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de derechos de importación, deducción del 100%

En el nivel provincial, esta demanda se cristalizó en la sanción de leyes provinciales y ordenanzas municipales¹⁷ que prohíben la actividad minera a cielo abierto y la utilización de cianuro en algunas provincias. Estas legislaciones dan cuenta del poder instituyente de los movimientos, y tanto su promulgación como su vigencia son producto de acciones institucionales sostenidas por la acción directa. La recolección de firmas, las marchas, los eventos culturales y las *performances* (intervenciones artísticas en el espacio público), la participación en festivales y fiestas conmemorativas a nivel local y provincial fueron y son fundamentales en la defensa de una legislación protectora. Es preciso señalar que estas leyes provinciales se encuentran continuamente amenazadas por el accionar de los estados locales que, de diferentes maneras, intentan derogarlas, ya que no les permite avanzar con la actividad minera en el territorio provincial.

Una de las formas más típicas de acción conjunta de los estados provinciales y las empresas mineras se ha cristalizado en los últimos años en la judicialización y criminalización de las asambleas de vecinos autoconvocados. En este sentido, tanto miembros de las asambleas que se movilizaron contra la instalación de las pasteras, como los que lo hacen contra la megaminería han sido querellados en diferentes causas. Por ejemplo, por su participación en cortes de ruta o por sus declaraciones en los medios de comunicación.¹⁸ En algunas provincias, precisamente en aquellas más comprometidas con el modelo minero como Catamarca, San Juan y La Rioja, el estado ha llevado a cabo medidas represivas en el marco de diferentes acciones de protesta realizadas por asambleístas.¹⁹

de la inversión del impuesto a las ganancias, no obligación de liquidar divisas en el país, y un pago máximo de regalías del 3% al valor boca mina declarado por la empresa minera que explota el yacimiento, entre otras (Svampa, Bottaro, Sola Álvarez, 2009).

¹⁷ Entre los años 2003 y 2008 siete provincias sancionaron leyes que prohíben algún aspecto de la minería metalífera a cielo abierto que utiliza sustancias tóxicas. Entre estas se encuentran: Chubut (2003), Río Negro (2005), La Rioja (2005, anulada en el 2008), Tucumán (2007), Mendoza (2007), La Pampa (2007), Córdoba (2008) y San Luis (2008). Algunos de los municipios que dictaron ordenanzas tendientes a prohibir algún aspecto relacionado con el proceso de la minería a cielo abierto son Lago Puelo y Esquel (Chubut), Sierra Colorada (Río Negro), San Carlos, Tunuyán y Tupungato (Mendoza), Famatina y Chilecito (La Rioja) y varios municipios del Valle de Punilla en Córdoba.

¹⁸ Algunos ejemplos de la judicialización: en el año 2005 integrantes de la asamblea de Esquel fueron querellados por la empresa Meridian Gold por difundir audios que contenían información acerca de la estrategia de la empresa para quebrar la resistencia de los vecinos e instalarse en la provincia. Por otra parte, en el año 2008 en La Rioja, integrantes de la "Asamblea ciudadanos por la vida" fueron procesados por realizar un corte de ruta y no permitir el paso a funcionarios provinciales de minería al campamento de la empresa Barrick Gold. En el año 2010 diez integrantes de la "Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualaguaychú" fueron querellados por el gobierno nacional por el corte de la Ruta Internacional 136 en el marco de una causa penal.

¹⁹ La última represión violenta, para el caso de las movilizaciones contra la megaminería, fue la sufrida por los integrantes de la "Asamblea El Algarrobo" en la provincia de Catamarca, en

Otra demanda que se vehiculiza vía la acción institucional es la relacionada con la existencia de una legislación orientada a la protección de los glaciares²⁰ y con su aplicación. Entre los años 2008 y 2010, diferentes asambleas y organizaciones ambientalistas trabajaron de manera articulada con legisladores nacionales y provinciales para lograr la sanción de una “Ley de Protección de Glaciares”. La primera versión de la ley fue realizada por legisladores con la participación de organizaciones sociales, ambientalistas e instituciones académicas. Esta ley fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso Nacional, y vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a finales de ese mismo año. A pesar de ello, el movimiento socioambiental en articulación con otros actores sociales (intelectuales, políticos, académicos, artistas, entre otros) continuaron con la puesta en agenda del tema a escala nacional: se realizaron foros especializados en la temática, conferencias en diversos ámbitos, presentaciones en medios periodísticos, y se prestó asesoramiento a los miembros de los partidos políticos que llevarían los proyectos de ley al Congreso. Pese al accionar del *lobby minero* y de los estados provinciales comprometidos con el modelo que presionaban para que la Ley de protección de glaciares no se sancionara, los movimientos socioambientales, en articulación con los actores sociales antes mencionados, lograron que una versión más abarcativa de la Ley de protección de glaciares se aprobara en septiembre de 2010.

Sin embargo, la ley no llegó a reglamentarse en aquellas provincias más comprometidas con la implementación del modelo minero, como son los casos de La Rioja, Catamarca y San Juan. En este último caso, por la presentación de medidas cautelares por parte de los gremios, las empresas mineras y las cámaras empresariales de la provincia que denunciaron la inconstitucionalidad de ley ante un juez federal. Hasta tanto este tema no se resuelva en la Justicia, la Ley de protección de glaciares no puede aplicarse en San Juan y las empresas mineras continúan con la explotación en zonas donde se han detectado glaciares.

El segundo rasgo constitutivo y específico de estos movimientos refiere a la generación, construcción y difusión de un *saber experto independiente*, resultado de un proceso de indagación y aprendizaje sobre conocimientos técnicos y legales del problema en cuestión. Este saber se construye en oposición a análisis de técnicos y especialistas que niegan o minimizan los impactos ambientales.

febrero del año 2010. En aquella oportunidad, el gobierno provincial con fuerzas policiales locales, grupos de élite provinciales y efectivos de infantería, con perros y equipos especiales, reprimió a los integrantes de la asamblea que mantenían un corte de ruta contra la instalación de la megaminería Agua Rica, en Andalgalá, Catamarca.

²⁰ Los glaciares y periglaciares localizados a lo largo de la Cordillera de los Andes son reservas de agua y fuentes abastecedoras de ríos. Dada la fragilidad que presentan estos ecosistemas se estima conveniente prohibir –sobre y en las cercanías de los glaciares– las actividades que pudieran afectarlos, entre ellas, la minería a gran escala. Para conocer más sobre este tema puede verse <http://www.proteccionglaciares.blogspot.com/>

Si bien en algunas asambleas se destaca la presencia de reconocidos ambientalistas, de larga trayectoria profesional y militante, en su gran mayoría son los “vecinos comunes” de las diferentes asambleas, algunos de ellos profesionales, quienes han debido realizar un aprendizaje acelerado sobre aspectos técnicos y normativos relacionados con el tema en cuestión. De esta manera, en el marco de cada asamblea se conforma un saber experto que rápidamente es difundido al resto de la población.

La información sobre las características de los proyectos y las posteriores tareas de difusión que las asambleas asumen son centrales en las experiencias de resistencia. En el caso de las papeleras, fueron en un principio organizaciones ambientalistas de Entre Ríos y del Uruguay las que alertaron sobre las consecuencias de los emprendimientos celulósicos e intervinieron de manera fundamental en la socialización de los riesgos que sobrevendrían a la puesta en funcionamiento de las plantas. Luego, al conformarse la Asamblea de Gualaguaychú, se constituyó un grupo técnico interdisciplinario, integrado por profesionales y científicos. El trabajo de profesionales acompañó con su labor las diferentes fases por las que atravesó el conflicto.²¹

En el caso de Esquel, y atendiendo a que se trataba del primer megaproyecto minero al cual se le saber *experto independiente* oponía resistencia en el país,²² la cuestión de la información sobre el método empleado por la minería a cielo abierto fue fundamental para la toma de conciencia de los riesgos y para poder comunicárselo a otros habitantes. En Esquel la construcción de ese estuvo a cargo de docentes universitarios, profesionales y militantes ambientalistas. Este saber se construyó

²¹ Por mencionar un ejemplo, en diciembre de 2010 se publicó la “Advertencia de profesionales de la salud locales por emisiones de la pastera Botnia-UPM”. El comunicado que lleva la firma de casi doscientos profesionales –médicos, bioquímicos, farmacéuticos, entre otros– señala: “Ya se han producido alteraciones físicas, químicas y biológicas en el río Uruguay desde la puesta en funcionamiento de la planta y que fueron demostradas por los 80 científicos argentinos que trabajaron en la presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nos referiremos a las emisiones atmosféricas, es decir las emanadas de las chimeneas de las plantas, ya que está científicamente comprobado que el mayor problema para la salud de las poblaciones aledañas a las mismas son los contaminantes presentes en esas emisiones”. Solicitada publicada el 3/1/2011 en el diario *Junio Digital*, <http://www.diariojunio.com.ar>

²² El primer proyecto, que entró en funcionamiento en 1997, es el denominado Minera La Alumbrera y se encuentra ubicado en la provincia de Catamarca. Las primeras movilizaciones en las localidades próximas diferían en su contenido de las que presentarían los movimientos socioambientales, dado que las demandas estaban orientadas al reclamo de puestos de trabajo. En un segundo momento, y transcurridos más de cuatro años de la explotación minera, las demandas se orientaron a obtener una participación en el cobro de regalías. Sin embargo, la difusión de las primeras consecuencias ambientales, así como la frustración en términos de desarrollo económico generadas por la explotación de Minera La Alumbrera, cambiaron el sentido de las movilizaciones hacia mediados de la década pasada (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009).

en confrontación con el discurso de la empresa e interpelando al de técnicos, geólogos e ingenieros incorporando “otros saberes”, por ejemplo, el de las poblaciones originarias y “pobladores de la zona” que mantienen otro tipo de relación con la naturaleza y el territorio.

En tercer lugar, la *multiescalaridad*²³ en la que se desarrollan conflictos socioambientales como los aquí analizados signa también la actuación de estos movimientos. Las características de este tipo de conflictos les presentan a los movimientos un entramado complejo en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos provenientes de diversas escalas (locales, nacionales, regionales y globales). En este marco, las asimetrías propias de la dinámica entre lo local y lo global tienden a exacerbarse (Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 2009).

Adicionalmente, las empresas transnacionales que llevan a cabo actividades extractivas y que generan importantes niveles de afectación al ambiente se localizan en territorios que se encuentran distantes del centro político que constituye la ciudad de Buenos Aires y, en la mayoría de los casos, también de los centros administrativos y políticos de las provincias. Esta distancia geográfica y simbólica se complementa con una importante dificultad por parte de los vecinos organizados para hacer visible el conflicto por fuera del ámbito local.

Para contrarrestar el aislamiento, las asambleas de vecinos autoconvocados tienden a conformar redes a través de diferentes articulaciones y vínculos que les permiten enfrentar el conflicto en sus diferentes escalas. Así, se ha conformado lo que Milton Santos (2005) denomina una “red de territorios”, que ha dado lugar a colectivos de organizaciones que se articulan en diferentes niveles: Asamblea Coordinadora Patagónica, Asamblea Socio-ambiental del Noroeste Argentino, Alianza de los Pueblos del Oeste Catamarqueño, Asambleas ciudadanas riojanas, Asamblea mendocina por el Agua Pura, Asamblea Regional Cuyo, entre otros. Asimismo, estas asambleas integran la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que desde el 2006 funciona con el objetivo de articular y potenciar las luchas de las comunidades que se agrupan en defensa de los bienes comunes a escala nacional.

En los últimos años la UAC se consolidó como un actor importante en el marco de los conflictos socioambientales, por la cantidad y diversidad de asambleas y organizaciones que articula, así como por su capacidad de acción en las diferentes escalas en las que estos conflictos se desarrollan. En este sentido, la UAC actúa con el objetivo de lograr la visibilización de distintos conflictos que tienen lugar a escala local, proyectándolos a un nivel regional y/o nacional. Esta proyección la realiza articulando las problemáticas comunes de pequeñas comunidades con problemáticas y asambleas de grandes centros urbanos y desarrollando acciones conjuntas.

²³ Sassen (2007) propone el concepto de “multiescalaridad” para hacer referencia a la reformulación de escalas en los diversos procesos de globalización.

Desde su conformación la UAC ha realizado quince encuentros, en cada uno de ellos se lleva a cabo una serie de actividades en el espacio público, entre las que se encuentran: charlas en las escuelas, proyección de videos en las plazas, entrevistas y difusión en los medios de comunicación locales, marchas, escraches, entre otros. Se realizan tres encuentros anuales y cada uno tiene una duración de entre tres o cuatro días. Hasta el momento la UAC ha tenido lugar en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Jujuy, Chubut, La Rioja, Catamarca; el último encuentro se realizó en Colón, Entre Ríos, en el mes de marzo de 2011.

Por su composición heterogénea la UAC se ha convertido en un importante lugar de intercambio de experiencias y, por ende, de ampliación de las demandas. Su dinámica asamblearia, en la que se promueve la participación horizontal y directa, la convierte en un espacio de deliberación y reflexión altamente valorado por los miembros de las asambleas socioambientales que la componen (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009).

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Como hemos visto, luego de la crisis de 2001 el escenario político y social permitió la expansión de diferentes formas de acción colectiva. Estas se desarrollaron, por un lado, en torno a demandas de derechos económicos que durante la década del noventa habían sido sistemáticamente violados a raíz de la profundización del modelo neoliberal, y por otro lado, a partir de la ampliación de demandas vinculadas especialmente a derechos culturales, identitarios, territoriales y ambientales.

En ese particular contexto se desarrollaron experiencias organizativas que buscaron alternativas a la crisis de representación política y a la debilidad de las instituciones tradicionales para dar una respuesta a la crisis económica y social. En consecuencia, las organizaciones de trabajadores desocupados, las asambleas barriales y otros colectivos con similar carácter fueron importantes experiencias de expresión de democracia directa y participativa en la historia política reciente de nuestro país, y sin duda dejaron su impronta en las experiencias de organización que los sucedieron, entre los cuales ubicamos a los movimientos socioambientales.

Como hemos señalado, la acción directa, la forma de organización asamblearia y la auto-organización en torno al territorio marcaron el ritmo de consolidación de los movimientos sociales de los años noventa. Posteriormente, estas formas de organización y acción son reeditadas por colectivos heterogéneos y multisectoriales que despliegan sus acciones en torno a conflictos socioambientales. Estas organizaciones actúan en el ámbito local –generalmente correspondiente a pequeñas y medianas localidades– pero insertos en una dinámica multiescalar.

Es importante mencionar que no solo movimientos surgidos en el pasado reciente son los que nutren a estas asambleas. También lo hacen colectivos que cuentan con una larga trayectoria en la lucha por el territorio y la reivindicación de

su cultura, como son los movimientos campesinos e indígenas. Como señalamos a lo largo del texto, la lucha por el *territorio* se encuentra en el centro de los conflictos socioambientales y este es un común denominador entre estas asambleas y los movimientos de pueblos originarios y campesinos. En ambos casos se trata de actores que explicitan la tensión entre diferentes tipos de *territorialidad*, es decir, que hacen visibles los diferentes modos de habitar el territorio, de relacionarse con el ambiente y, fundamentalmente, denuncian la amenaza que sufren los estilos de vida locales.

Por su parte, el surgimiento y desarrollo de asambleas nucleadas en torno a conflictos ambientales –recordemos que varias de ellas se acercan a cumplir una década de existencia– ponen de manifiesto que la acción colectiva tiene la particularidad de que es capaz de demostrar a otros que también tienen la posibilidad de actuar (Tarrow, 1997). La existencia de redes como la UAC en las que se socializan experiencias y se llevan a cabo aprendizajes y acciones conjuntas, posibilita que pequeñas asambleas con escasos recursos tengan la oportunidad de sumarse a las acciones realizadas a nivel nacional y de visibilizar sus demandas. La resistencia de Gualeguaychú y sobre todo la de Esquel, por mencionar las pioneras, pusieron en evidencia cómo la acción colectiva genera oportunidades para otros (Tarrow, 1999). El caso Esquel tuvo un efecto multiplicador, que fue despertando a otras regiones donde ya se habían implantado o se proyectaban explotaciones mineras a cielo abierto, constituyéndose en un “exitoso” caso testigo para las comunidades que se iban enterando de su “destino minero”.

Las asambleas socioambientales y organizaciones que se nuclean en la UAC podrían estimarse en alrededor de setenta. Se encuentran hoy presentes en gran parte de las provincias de nuestro país, en localidades con geografías muy diversas y con matrices sociopolíticas disímiles. En estos territorios las asambleas socioambientales cuestionan y denuncian la explotación de los “bienes comunes” por parte de un modelo extractivista llevado adelante por las empresas transnacionales y el Estado (en sus diferentes niveles) que minimizan los impactos negativos en términos ambientales, sociales y económicos.

En este contexto, los movimientos socioambientales alertan sobre la necesidad de llevar a cabo un debate en el que se discuta el derecho al territorio y el respeto a los estilos de vida presentes en ellos. Esto es, un debate que privilegie el derecho a decidir sobre el para qué, el para quiénes y el cómo de un territorio determinado y en el que se ponga en agenda pública qué modelo de desarrollo nos resulta deseable como sociedad. Un debate pendiente y necesario en el que los derechos ancestrales de la tierra, los derechos a decidir sobre los estilos de vida –tanto para las comunidades campesinas e indígenas como para los habitantes de los pueblos y ciudades del “interior” del país– y el derecho a un ambiente sano de la población y las generaciones futuras sean el punto de partida.

BIBLIOGRAFÍA

- Barattini, Mariana (2010). "Politicidad, matriz territorial y organizaciones sociales: estudios de caso". En Kessler, Gabriel; Svampa, Maristella y González Bombal, Inés (coords.), *Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense en la postconvertibilidad*. Buenos Aires: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Bottaro, Lorena (2003). *El desafío de recrear la cultura del trabajo desde las organizaciones de trabajadores desocupados: el caso del Movimiento Teresa Rodríguez*. Tesis de licenciatura en Política Social, Universidad Nacional de General Sarmiento. Disponible en <http://www.urbared.ungs.edu.ar/textos/Tesis.Politica%20Social.pdf>
- (2010). "Organizaciones sociales, representaciones del trabajo y universo femenino en el espacio comunitario". En Kessler, Gabriel; Svampa, Maristella y González Bombal, Inés (coords.), *Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense en la postconvertibilidad*. Buenos Aires: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Delamata, Gabriela (2007). "El movimiento asambleario de Gualaguaychú: construcción y reclamo (internacional, nacional y transnacional) de un derecho colectivo". Seminario Política y Pasteras en el Río Uruguay: Medio Ambiente, Modelos Productivos y Movimiento Social, 16/11/2007, UNSAM.
- García, Marina (2002). *Las asambleas barriales, esas delicadas criaturas*. Tesina de grado, Licenciatura en Política Social, Universidad Nacional de General Sarmiento, inédito.
- Ibarra Crespo, Hernán (2010). "Presentación". *Ecuador Debate*, n° 79, Quito.
- Kessler, Gabriel; Svampa, Maristella y González Bombal, Inés (coords.) (2010). "Introducción. Las reconfiguraciones del mundo popular". En Kessler, Gabriel; Svampa, Maristella y González Bombal, Inés (coords.), *Reconfiguraciones del mundo popular: el conurbano bonaerense en la postconvertibilidad*. Buenos Aires: Prometeo-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- McAdam, Doug; McCarthy, John y Zald, Mayer (comps.) (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales*. Madrid: Istmo.
- Merklen, Denis (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.
- Merlinsky, María Gabriela (2008). "Nuevos repertorios de acción colectiva y conflicto ambiental: una cronología del conflicto por la instalación de las plantas de celulosa en el Río Uruguay". *Nuevo Mundo. Mundos nuevos. Cuestiones del*

tiempo presente. Puesto en línea el 16 enero 2008. Disponible en <https://journals.openedition.org/nuevomundo/16412>

- Ouviña, Hernán (2003). “Las asambleas barriales y la construcción de lo ‘público no estatal’: la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. *Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe*. Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires.
- Palomino, Héctor (2003). “Las experiencias actuales de autogestión en Argentina. Entre la informalidad y la economía social”. *Nueva Sociedad*, n° 184, pp. 115-128.
- Porto-Gonçalves, Carlos (2001). *Geografías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. México: Siglo XXI.
- Quintar, Aída; Callelo, Tomás y Fritzsche, Federico (2002). “Movimientos piqueteros de trabajadores desocupados y asambleas vecinales autoconvocadas. Elementos para un análisis de las nuevas formas de la protesta social en Argentina”. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, vol. VI, n° 119. Disponible en <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119103.htm>
- Santos, Milton (2005). “O retorno do território”. En “Reforma agraria y lucha por la tierra en América Latina, territorios y movimientos sociales”. OSAL, Observatorio Social de América Latina, año VI, n° 16 enero-abril 2005, CLACSO.
- Sassen, Saskia (2007). *Una sociología de la globalización*. Buenos Aires: Katz.
- Schillagi, Carolina (2009). “El vínculo entre asambleas barriales y organizaciones de desocupados. Relatos e imágenes en la prensa escrita durante el año 2002”. En Pereyra, Sebastián; Pérez, Germán y Schuster, Federico (comps.), *La huella piquetera*. La Plata: Ediciones Al Margen.
- Subías Grau, Teresa y Beltrán, María Jesús (2005). “El éxito de Tambogrande”, *Ecología Política*, n° 30, pp. 95-116.
- Svampa, Maristella (2002). “Las dimensiones de las nuevas movilizaciones sociales: las asambleas barriales”. *El Ojo Mochó*, n° 17.
- (2008). “Movimientos sociales y nuevo escenario regional. Las inflexiones del paradigma neoliberal en América Latina”. En *Cambio de época. Movimientos Sociales y poder político*. Buenos Aires: Siglo XXI-CLACSO.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Svampa, Maristella; Bottaro, Lorena y Sola Álvarez, Marian (2009). “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”. En Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (comps.), *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires: Biblos.

- Svampa, Maristella; Sola Álvarez, Marian y Bottaro, Lorena (2009). “Los movimientos contra la minería a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el ‘efecto Esquel’ y el ‘efecto La Alumbreira’”. En Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (comps.), *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires: Biblos.
- Svampa, Maristella y Sola Álvarez, Marian (2010). “Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de la discusión en la Argentina”. *Ecuador Debate*, n° 79, Quito.
- Tarrow, Sidney (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.
- (1999). Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales. En McAdam, Doug; McCarthy, John y Zald, Mayer (comps.) (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales*. Madrid: Istmo.
- Wagner, Lucrecia (2011). “Problemas Ambientales y Conflicto Social en Argentina: Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la megaminería en los inicios del Siglo XXI”. Disponible en www.eumed.net/tesis/2011/lsw/
- Walter, Mariana (2008). “Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel (2002-2003)”. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, vol. 8, pp. 15-28. Disponible en http://www.redibec.org/IVO/rev8_02.pdf
- Weinstock, Ana Mariel (2006). “No todo lo que (brilla) vale oro. El caso del ‘No a la mina’ de Esquel”. *Argumentos*, n° 7.

Páginas de internet

<http://www.noalamina.org/>

<http://www.diariojunio.com.ar>

Otras fuentes

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2001.

Área de sociología, ICI, UNGS (2006). Proyecto: Actores sociales, demandas de derechos y espacios de ciudadanía en la Argentina contemporánea.

PARTE V

MATERIALES PARA EL TRABAJO EN CLASE

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

La bibliografía trabajada a lo largo del curso refiere a menudo a algunos conceptos fundamentales de las ciencias sociales (capitalismo, Estado, dominación, hegemonía, ciudadanía, gobierno, régimen político, estructura social, clases sociales y distribución del ingreso, entre otros). Sin pretender agotar las discusiones teóricas acerca de ellos, la siguiente selección apunta a brindar algunas definiciones sintéticas de los conceptos más importantes, con el propósito de brindar a los estudiantes un material que sirva de apoyo a la lectura de los textos obligatorios.

Selección de textos a cargo de Marina García y Mariana Luzzi

Capitalismo

El término designa el sistema socio-económico caracterizado fundamentalmente por la propiedad privada de los principales medios de producción y la libertad reconocida a los individuos para realizar contratos que regulen sus propios intereses. Históricamente el capitalismo surgió en Europa occidental como sistema basado en la organización del trabajo libre asalariado, diferenciándose de otros sistemas fundados en la utilización de mano de obra esclava o servil (Esclavismo, Feudalismo).

Para el marxismo, la manera en que se producen los bienes materiales genera *relaciones sociales específicas*. En este sentido, el capitalismo es un **modo de producción** que engendra su propia **estructura social**, sometida a la lógica de la reproducción del sistema en el cual el trabajo (actividad humana fundamental) resulta dependiente de la **acumulación**.

En el vocabulario marxista se denomina **plusvalía** la forma en que se produce la apropiación del trabajo ajeno por los capitalistas. El sistema capitalista se define por el modo específico en que se articulan las fuerzas productivas (materiales y humanas) y las relaciones de producción (alrededor de la propiedad privada de

los medios de producción), y esa articulación determina el antagonismo esencial entre las clases fundamentales de la sociedad: **la burguesía** y el **proletariado**.

A partir de la crisis mundial de 1929, el modelo clásico del capitalismo liberal, espontáneo o de libre competencia, comienza a ser sustituido por nuevas tendencias que configuran el llamado capitalismo organizado, cuya característica central es la fuerte intervención del **Estado** para regular el sistema.

Plusvalía

En la concepción marxista esta noción ocupa un lugar fundamental para el análisis del modo de producción capitalista. Define el valor que el trabajo del obrero asalariado crea más allá del valor de su fuerza de trabajo, o sea del salario que percibe, y que corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y reproducción como tal (el cual se mide en función del conjunto de bienes y servicios que el trabajador y su familia necesitan para subsistir y reproducirse, magnitud variable en cada sociedad o momento histórico en correspondencia con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas). Para su comprensión, es ilustrativo dividir la jornada laboral en tiempo de trabajo socialmente necesario y tiempo excedente (o sobre-trabajo). El producto (en términos de valor) del tiempo de trabajo adicional del obrero asalariado constituye la plusvalía o sobre-producto. Este excedente de valor es apropiado por el capitalista, constituyéndose en fuente de acumulación.

Fuente: Di Tella, Torcuato S. (2008). *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*, pp. 71 y 154. Buenos Aires: Emecé.

Estado

Lo que entiendo por Estado: es una asociación con base territorial, compuesta de conjuntos de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de ellas sancionadas y respaldadas por el sistema legal de ese Estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto delimita. Esas instituciones reclaman el monopolio en la autorización legítima del uso de la coerción física y normalmente tienen, como último recurso para efectivizar las decisiones que toman, supremacía en el control de los medios de esa coerción sobre la población y el territorio que el Estado delimita. [...]

De la definición que he propuesto deriva que el Estado puede ser convenientemente desagregado en al menos cuatro dimensiones. Una, la más obvia, es el Estado como un *conjunto de burocracias*. Estas burocracias, generalmente organizaciones complejas, tienen responsabilidades asignadas legalmente para la protección o

logro de algún presunto aspecto del bien común. Me referiré a esta dimensión y al grado en que se cumplen esas responsabilidades como la de *eficacia* del Estado.

El Estado es también un *sistema legal*, un entramado de reglas sancionadas y respaldadas legalmente que penetran y co-determinan numerosas relaciones sociales, tanto en la sociedad como dentro de las burocracias estatales. En la actualidad, especialmente en las democracias [...] la conexión entre las burocracias del Estado y el sistema legal es íntima: las primeras se supone que actúan de acuerdo a facultades y responsabilidades que les son legalmente asignadas por autoridades pertinentes –el Estado contemporáneo se expresa normalmente en el lenguaje del derecho–. Me referiré a este aspecto como el grado de *efectividad* del sistema legal del Estado.

Juntos, se presume que las burocracias del Estado y el sistema legal generan, para los habitantes de su territorio, el gran bien público del orden general y la previsibilidad de las relaciones sociales. Al hacer esto, el Estado (más precisamente, los funcionarios autorizados a decidir y hablar en su nombre) afirma atender el bien común y garantizar la continuidad histórica de la población del territorio respectivo. Esta proclamada contribución nos lleva a una tercera dimensión del Estado: la de ser, o intentar ser, un *foco de identidad colectiva*. Típicamente, los funcionarios del Estado, especialmente los que ocupan posiciones en su cúpula institucional, afirman que el suyo es un Estado-para-la-nación o [...] un Estado-para-el-pueblo, o para-la-ciudadanía. Con estas afirmaciones, repetidas de innumerables maneras, la cúpula del Estado invita al reconocimiento generalizado de un “nosotros” que expresa una identidad colectiva distintiva que, según se postula con frecuencia, debería prevalecer sobre intereses e identidades más diferenciados que emergen de diversos clivajes sociales. Me referiré a esta dimensión como la del grado de *credibilidad* del Estado.

Queda todavía una cuarta dimensión. El Estado es un filtro que intenta regular cuán abiertos o cerrados se encuentran los diversos espacios y fronteras que median entre el interior y el exterior de su territorio, mercado y población. Algunas de estas fronteras demarcan esa población y, bajo un régimen democrático, su electorado. Otras son espacios delimitados de manera menos marcada; algunos de ellos están celosamente protegidos, algunos están controlados con mayor o menor efectividad por diversos tipos de políticas públicas, otros nunca tuvieron barreras, y algunos las han perdido, carcomidos por los vientos de la globalización. Sin embargo, todo Estado intenta, o al menos afirma que intenta, establecer varios filtros para el bienestar de su población y de los actores económicos situados en su territorio. Esta es la dimensión de *filtrado* del Estado.

Existe todavía otro aspecto del Estado que no es, como los anteriores, una dimensión contingente históricamente; es una característica atribuida institucionalmente. Me refiero al hecho de que un Estado se instituye como tal cuando otros estados en el sistema internacional, así como, en tiempos más recientes, las Naciones Unidas y otras organizaciones públicas internacionales, lo reconocen como tal, independientemente de la valencia que ha adquirido en las dimensiones previamente mencionadas.

Recalco que estas cuatro dimensiones no deben ser atribuidas *a priori* a un Estado; ellas son tendencias que –tal vez afortunadamente– ningún Estado ha materializado por completo, y que algunos estados distan de haber logrado razonablemente. En lo que respecta al Estado como conjunto de burocracias, sus acciones pueden desviarse de siquiera intentar cumplir las responsabilidades que le han sido asignadas; el sistema legal puede *per se* mostrar serias falencias y/o no extenderse a diversas relaciones sociales o regiones; en lo que respecta al Estado como foco de identidad colectiva, su credibilidad como tal puede no ser verosímil para buena parte de su población; y el Estado puede haber abdicado en gran medida de su condición de filtro orientado a alcanzar el bienestar de su población. Podemos interpretar estos casos como indicadores de bajas capacidades estatales que [...] afectan seriamente, entre otras cosas, el funcionamiento de un régimen democrático. En cualquier caso, estas dimensiones del Estado son históricamente contingentes; por lo tanto, la medida de su logro debe ser evaluada empíricamente.

Fuente: O'Donnell, Guillermo (2010). *Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparativa*, pp. 76-80. Buenos Aires: Prometeo.

Sobre la formación del Estado

La formación del Estado nacional es el resultado de un proceso convergente, aunque no unívoco, de constitución de una nación y de un sistema de dominación. La constitución de una nación supone –en un plano material– el surgimiento y desarrollo, dentro de un ámbito territorialmente delimitado, de intereses diferenciados generadores de relaciones sociales capitalistas; y en un plano ideal, la creación de símbolos y valores generadores de sentimientos de pertenencia que –para usar la feliz imagen de O'Donnell– tienden un arco de solidaridades por encima de los variados y antagónicos intereses de la sociedad civil enmarcada por la nación. Este arco de solidaridades proporciona a la vez el principal elemento integrador de las fuerzas contradictorias surgidas del propio desarrollo material de la sociedad y el principal elemento diferenciador frente a otras unidades nacionales. Por su parte, la constitución del sistema de dominación que denominamos Estado supone la creación de una instancia y de un mecanismo capaz de articular y reproducir el

conjunto de relaciones sociales establecidas dentro del ámbito material y simbólicamente delimitado por la nación.

El Estado no surge entonces por generación espontánea ni tampoco es creado, en el sentido que “alguien” formalice su existencia mediante un acto ritual. La existencia del Estado deviene de un proceso formativo a través del cual aquél va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento histórico presenta distinto nivel de desarrollo.

Fuente: Oszlak, Oscar (1978). “Formación histórica del estado en América Latina: elementos teórico-metodológicos para su estudio”. *Estudios CEDES*, vol. 1, n° 3.

Dominación

La dominación es relacional: es una modalidad de vinculación entre sujetos sociales. Es por definición **asimétrica**, ya que es **una relación de desigualdad**. Esa **asimetría surge del control diferencial de ciertos recursos**, gracias a los cuales es habitualmente posible lograr el ajuste de los comportamientos y de las abstenciones del dominado a la voluntad –expresa, tácita o presunta– del dominante. No tiene sentido intentar un inventario exhaustivo de esos recursos, pero es útil distinguir algunos muy importantes como sustento de la dominación.

El primero es el **control de los medios de coerción física**, movilizables por sí o por intermedio de un tercero. Otro es el **control de los recursos económicos**. Un tercero es el **control de recursos de información** en sentido amplio, incluso conocimientos científico-tecnológicos. El último que interesa señalar es el **control ideológico**, mediante el cual el dominado asume como justa y natural la relación asimétrica de la que es parte, y por lo tanto, no la entiende ni cuestiona como dominación.

Fuente: O'Donnell, Guillermo (1977). *Apuntes para una teoría del Estado*. Documento CEDES/G.E CLACSO, n° 9.

Hegemonía

Acción hegemónica sería aquella constelación de prácticas políticas y culturales desplegada por una clase fundamental, a través de la cual logra articular bajo su dirección a otros grupos sociales mediante la construcción de una voluntad colectiva que, sacrificándolos parcialmente, traduce sus intereses corporativos en universales. Esto implica un proceso de constitución política de las clases que no puede ser visto fuera de un análisis de las relaciones de fuerza, de la historia de prácticas sociales expresadas a un nivel organizacional.

Vista como un elemento histórico, la noción de hegemonía permite especificar la dinámica de la lucha de clases como relación entre fuerzas que han pasado (y están pasando, en el caos de las clases subalternas) por un proceso de constitución tendiente a transformarlas de *clases corporativas* en *clases hegemónicas*. Se trata de un proceso sociocultural complejo que las relaciones de producción contienen pero no agotan porque entre ellas (que definen a las clases como *lugares*) y el comportamiento político se establece una cadena de mediaciones que van plasmando la conexión entre economía y cultura en una configuración de prácticas organizacionales. [...] Es en la sociedad civil donde la hegemonía se constituye (y no sólo donde se expresa), por lo que ese espacio es básicamente un lugar de lucha entre hegemonías: el "bloque histórico" estructurado por las prácticas (complejas) de la clase dominante no es estático sino tendencial y contradictorio, entre otras cosas porque para constituirse debe movilizar también a fuerzas opuestas a la dominación.

Fuente: Portantiero, Juan Carlos (1981). *Los usos de Gramsci*, pp. 151-152. México: Folios.

[Hegemonía] no se limita a asuntos de control político directo, sino que procura designar una dominación más general entre cuyos rasgos clave se cuenta una manera particular de ver el mundo y la naturaleza y las relaciones humanas. En ese sentido, es diferente de la noción de "cosmovisión", en la medida en que las formas de ver el mundo, a nosotros mismos y a los otros no son sólo datos intelectuales sino políticos, expresados en una serie de aspectos que van desde las instituciones hasta las relaciones y la conciencia. Es diferente, asimismo, de ideología, en cuanto se considera que su influjo depende no sólo del hecho de que exprese los intereses de una clase dominante, sino también de que sea aceptado como "realidad normal" o "sentido común" por quienes en la práctica se subordinan a ella.

Fuente: Williams, Raymond (2000). *Palabras clave: un vocabulario de la cultura y la sociedad*, pp. 159-160. Buenos Aires: Nueva Visión.

Estado de bienestar

¿Qué es el Estado de Bienestar? **Una definición normal de manual es que el Estado del bienestar implica una responsabilidad estatal para asegurar unos mínimos básicos de protección social para sus ciudadanos.** Tal definición evita el problema de si las políticas sociales son emancipatorias o no, de si ayudan a legitimar el sistema o no; de si contradicen o auxilian a los procesos del mercado; por otra parte, ¿qué se quiere decir en realidad con la noción de "básicos"? ¿No sería más

apropiado exigir un Estado del bienestar que satisfaga algo más que nuestras necesidades básicas o mínimas de protección social?.

Fuente: Esping Adersen Gosta (1993). *Los tres mundos del Estado del Bienestar*, pp. 10, 11 y 44. Valencia: Alfons el Magnanim Edicions.

Sobre el Estado de bienestar

En noviembre de 1940, en medio de bombardeos que tan sólo en ese mes mataron a 4.500 ingleses, un primer ministro conservador como Winston Churchill le encomendaba en Londres a William Beveridge, un liberal progresista, que analizase las mejores maneras de luchar en el futuro contra los efectos sociales de la crisis económica de la década anterior y de la guerra entonces en curso.

El Informe Beveridge se publicó en 1942 y ya desde el prólogo el autor advertía que **el Estado debía preocuparse por el bienestar del conjunto de los ciudadanos** no porque los ricos tuvieran que ser generosos con los pobres sino porque ese era el único modo en el cual la sociedad podía protegerse de sí misma.

Nos hallamos en los inicios de lo que en Europa se llamaría después el “**Estado de Bienestar**”, que iba a alcanzar su plenitud en la década del sesenta. Para entonces, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destinaban, en promedio, la mitad o más del presupuesto público a gastos sociales y en varios de ellos parecía haberse consumado una feliz unión entre el liberalismo económico y la socialdemocracia –o, como solía decir T. H. Marshall– alumbraba **un tipo de capitalismo ablandado por una inyección de socialismo**.

Fuente: Nun, José (2000). *Democracia ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, pp. 51-52. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Régimen, régimen democrático y gobierno

Por **régimen** entiendo los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales.

Por **régimen democrático** entiendo uno en el que el acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que son a la vez competitivas e institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas elecciones, diversas libertades habitualmente llamadas “políticas”, tales como las de asociación,

expresión, movimiento y de disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por agentes privados.

Por **gobierno** entiendo las posiciones en la cúpula de las instituciones del Estado; el acceso a dichas posiciones se realiza a través del régimen, el cual permite a los funcionarios respectivos tomar o autorizar a otros funcionarios a tomar decisiones que son normalmente emitidas como reglas legales obligatorias sobre el territorio delimitado por el Estado.

De acuerdo con estas definiciones, **el gobierno es una parte fundamental del Estado**, su cúpula institucional. Por su parte, **el régimen es una mediación entre el Estado y la sociedad**: consiste de un conjunto de instituciones, reglas y prácticas que regula el acceso desde la sociedad a las más altas posiciones en el Estado.

En un régimen democrático el principal canal institucional está integrado por partidos políticos que compiten libremente para ganar ese acceso.

Fuente: O'Donnell, Guillermo (2004). "Acerca del Estado en América Latina Contemporánea. Diez Tesis para su discusión". En AA.VV., *La democracia en América Latina: Contribuciones para el debate*, pp. 152-153. Buenos Aires: PNUD-Alfaguara.

Derechos y ciudadanía

Un régimen político de gobierno como el democrático, que se sustenta en la ficción básica de la igualdad de todos los ciudadanos, ¿Podía operar armónicamente con un régimen social de acumulación como el capitalista, que por su propia naturaleza es un generador constante de desigualdades? [...]

Iba a transcurrir casi un siglo antes de que se diese en la práctica con un modelo concreto [...] que aportara los rudimentos para una solución, décadas que, entre otras, incluyeron crisis y depresiones tan graves como las de 1870 y 1929, la generalización del desempleo masivo, dos guerras mundiales y el ascenso del fascismo y del comunismo. Es precisamente de este modelo concreto que se ha nutrido la idea contemporánea de **ciudadanía**, cuya cuna nada casual fue Europa. Y a su vez, gracias a la implementación de esta idea, resultó posible que la siempre problemática relación entre la desigualdad económica y la igualdad política permaneciese dentro de límites manejables, facilitando la invocación, por lo menos retórica de la matriz *gobierno del pueblo*, aunque adaptada a las nuevas realidades. [...]

Este documento [la declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948] –indisociable del trauma provocado por una guerra en la que murieron 50 millones de personas, más de la mitad de los cuales eran

civiles– fijó tres grandes categorías de **derechos individuales**, que le corresponden a toda persona por igual, sin discriminaciones de ningún tipo y sin que Estado, grupo o individuo alguno puedan considerarse autorizados para vulnerarlos o suprimirlos.

Las dos primeras categorías son las de los **derechos civiles y políticos** y actualizan las principales demandas por las cuales lucharon en los siglos XVII y XVIII los revolucionarios de Inglaterra, de los Estados Unidos y de Francia. En un caso se trata de **libertades individuales (de palabra, de expresión, de pensamiento, de asociación, de reunión, etc.)** que se afirman frente a cualquier pretensión del Estado de infringirlas; en el otro, de la **facultad de participar en el gobierno de la cosa pública, eligiendo y pudiendo ser elegido**.

La categoría más novedosa (y controvertida) es la tercera, la de **los derechos económicos, sociales y culturales**, que si bien ya había sido tematizada por los socialistas en el siglo XIX, recién fue incorporada a la agenda pública en el clima solidario y bastante menos individualista que predominó en muchos lugares durante los años de la Segunda Guerra Mundial.

Estos nuevos derechos incluyeron los de trabajar; recibir igual salario por igual trabajo; gozar de protección contra los efectos de la enfermedad, la vejez, la muerte, la incapacidad y el desempleo involuntario; percibir un ingreso que asegura una existencia conforme a la dignidad humana; disfrutar de un nivel de vida adecuado, que garantice la salud y el bienestar; disponer de descanso y de tiempo libre; y tener un amplio acceso a la educación y a la vida cultural de la comunidad.

Según se advierte, nos hallamos aquí ante derechos de un tipo especial y distinto a los anteriores: no protegen al individuo de intromisiones estatales ni se limitan a habilitarlo para intervenir en política sino que **se trata ahora de derechos que el propio Estado tiene la responsabilidad y la obligación de llevar a la práctica, dictando leyes y proveyendo los recursos necesarios para ello.**

Fuente: Nun, José (2000). *Democracia ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, pp. 43-45. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Estratificación social

Es la característica de una sociedad estar diferenciada en grupos con mayor o menor acceso a recursos escasos, económicos, culturales o de cualquier otro tipo considerado valioso. Se generan, de esta manera, estratos superpuestos, con límites no siempre netos entre ellos. La posición de un individuo, juzgada según cada uno de esos criterios, puede ser distinta, lo que hace imposible delimitar en forma

nítida los grupos o estratos. En algunos casos extremos de personas que tienen posición (estatus) alta en un criterio y baja en otro (por ejemplo, alta educación y bajo nivel de ingresos), se genera una incongruencia de estatus, o desubicación en el sistema de estratificación, que da lugar a actitudes particulares.

Fuente: Di Tella, Torcuato S. (2008). *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*, pp. 241-242. Buenos Aires: Emecé.

Estructura social

En todas las sociedades, antiguas y modernas, pero sobre todo en estas últimas, altamente diferenciadas, los individuos se agrupan dando forma a diferentes estratos, grupos o clases sociales.

Qué tipo de grupos sean creados, cómo se conformen y qué relaciones establezcan entre ellos determinarán en buena medida la configuración de una sociedad, lo que la sociología ha llamado tradicionalmente la estructura social.

Dicho de otro modo, podemos decir que toda sociedad constituye un sistema de posiciones desiguales y jerarquizadas (situadas en un orden específico, que implica primacía o ventaja de unas sobre otras), derivado de un contexto institucional, que es preexistente a los individuos y que puede ser modificado por ellos mediante la acción. Esas desigualdades se construyen en virtud de diferentes dimensiones: la económica es la que suele analizarse más frecuentemente, en relación con el concepto de clase social. Es a ese conjunto de posiciones ocupadas por individuos y grupos, jerarquizadas en función de los diversos ejes que organizan las desigualdades sociales, al que suele llamarse estructura social.

[...]

A mediados de la década de 1950, Gino Germani escribió el primer estudio sistemático sobre la estructura social de la Argentina, a partir de un trabajo minucioso sobre las estadísticas disponibles en la época. En él, el sociólogo italiano ofrece una definición del concepto de estructura social, al que distingue de la estructura cultural –conformada por los elementos que integran la cultura de una sociedad o grupo: costumbres, usos sociales, instituciones y creencias.

Según Germani, para el estudio de la estructura social se pueden fijar una serie amplia de dimensiones, pero las de esencial importancia surgen, en la sociedad capitalista, de la estructura económica de la sociedad. Así, los grupos de ocupaciones y las clases sociales constituyen el eje central de la organización y el funcionamiento de las sociedades modernas. Sin embargo, no debe olvidarse que el concepto de estructura social se refiere a la diferenciación de todos los grupos

sociales, a su composición e interrelación. Una investigación sobre la estructura social de un país, es decir, de los grupos humanos que la integran, debería ser entonces un trabajo abarcador. Siguiendo a Germani, debería partir de un examen del volumen numérico y la distribución espacial de los grupos y subgrupos que conforman la sociedad (cuántos somos, dónde vivimos, etc.) pero también observar su formación, su composición y las relaciones existentes entre ellos. Debería incluir, por lo tanto, diferentes perspectivas y proceder utilizando métodos variados.

Fuente: Del Cueto, C. y Luzzi, M. (2008). *Rompecabezas. Transformaciones de la estructura social argentina, 1983-2008*, pp. 7 y 9. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Biblioteca Nacional.

Clase social

Para Germani –como para muchos otros autores– las clases sociales constituyen un elemento central de la organización de las sociedades modernas, al punto que su influencia se extiende a toda la sociedad y condiciona los demás aspectos de la estructura social. Por esta razón, muchas veces los análisis de la estructura social se refieren únicamente a la estructura de clases. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de clase social?

Sin dudas, se trata de un término difícil de precisar, que puede –y suele– asumir muchos significados. Pero además, como sucede con muchos conceptos utilizados por las ciencias sociales, se trata de un término que está presente en el lenguaje cotidiano y cuyo uso, por lo tanto, no está restringido a una sola esfera de la vida social.

En principio, la determinación de las clases sociales está asociada a una posición específica dentro de la estructura de relaciones económicas vigente en la sociedad en un momento histórico determinado. Y es la centralidad de estas relaciones en la organización de la sociedad capitalista la que explica la importancia asignada en esta última al clivaje socioeconómico respecto de otros elementos que intervienen en la conformación de las desigualdades sociales. Uno de los elementos esenciales de esta posición está marcado por la categoría de ocupación desempeñada (patrón, obrero, empleado, trabajador por cuenta propia o trabajador familiar). A la vez, distintas formas de definir a las clases coinciden en la idea según la cual los elementos compartidos por los individuos pertenecientes a una misma clase se traducirán, con mayores o menores probabilidades, en formas comunes de pensar y de actuar. Así, es común encontrar afirmaciones que identifican formas de pensar típicas de las clases medias, u orientaciones del voto propias de los sectores altos o populares, o tipos de movilización característicos de una clase o de una fracción de clase, entre otros rasgos compartidos. Al mismo tiempo, las orientaciones de

clases diferentes pueden confluir en determinadas situaciones, sin que por ello se desdibujen las diferencias que existen entre los grupos.

Ahora bien, la identificación de las clases sociales no debe conducirnos a una visión estática de la estructura social, dado que siempre es posible la movilidad de los individuos –o de ciertos grupos de individuos– dentro de las clases y entre ellas. Como veremos más adelante, las experiencias de ascenso o descenso social vividas por distintas fracciones de las clases medias en el período que estudiamos dan cuenta de una movilidad social vertical. Asimismo, la movilidad puede registrarse también en un sentido horizontal, cuando individuos o grupos se desplazan, sin alterar su pertenencia de clase, desde un sector de la actividad económica a otro. Estas formas de movilidad social (vertical y horizontal) no son excluyentes, ya que ambas pueden ser experimentadas por individuos o grupos en distintos momentos de sus trayectorias.

Por otra parte, dentro de las ciencias sociales es posible distinguir dos grandes formas de comprender las clases sociales: una de ellas privilegiará la idea de la estructura social como un continuo en el que la mirada del investigador puede distinguir estratos o capas; la otra se construirá sobre una comprensión de las clases como grupos efectivamente existentes. Para la primera, las clases representarán únicamente la forma en que se ordenan los estratos que dan cuenta de las desigualdades (o algunas de ellas) en una sociedad determinada. Para la segunda, esta configuración de las desigualdades se prolongará en una identidad compartida, en una concepción común de la sociedad y en formas específicas de acción conjunta. En este último caso, la noción de clase es más compleja: supone identificar grupos definidos por ciertas características comunes (el lugar que ocupa en las relaciones de producción, expresado por ejemplo por la categoría ocupacional; el nivel de instrucción alcanzado; su acceso a recursos materiales o simbólicos; etc.), a la vez que dar cuenta de la dimensión subjetiva de la conformación de ese grupo (el reconocimiento de quienes lo integran como miembros de un mismo colectivo y su diferenciación respecto de quienes están fuera de él, fundamentalmente). Al mismo tiempo, esta segunda forma de comprender a las clases sociales supone el carácter relacional de éstas; por definición, cada clase social se constituye en relación con las demás y, en consecuencia, todo análisis de clases implica un examen de las relaciones que las diferentes clases sociales establecen entre sí. Relaciones que, por otro lado –dado que de desigualdades se trata–, son siempre relaciones de poder. Así, en esta segunda concepción, pensar en términos de clases no supondrá únicamente pensar en términos de estratificación social, sino fundamentalmente pensar en los modos que asume el conflicto social en la sociedad en un momento histórico específico. Esto significa incorporar también la dimensión política propia de los procesos de conformación

e interacción entre los grupos. Desde luego, podría objetarse –y buena parte de las ciencias sociales desde la década de 1960 lo han hecho– que el conflicto social no sólo se expresa en términos clasistas, pero ese es otro debate.

Fuente: Del Cueto, C. y Luzzi, M. (2008). *Rompecabezas. Transformaciones de la estructura social argentina, 1983-2008*, pp. 10-12. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento-Biblioteca Nacional.

Distribución del ingreso

Vale recordar un par de conceptos elementales pero que suelen escapar de la observación cotidiana. La distribución del ingreso, “el reparto de la torta”, es una forma de ver cuánto y qué produce un país en un año determinado. El proceso productivo se expresa, simultáneamente, en los bienes y servicios provenientes de los diferentes sectores o ramas (agro, industria, comercio, transporte, etc.) o en el tipo de uso que se da socialmente a esos bienes (consumo, inversión, exportación).

Pero ambas perspectivas, que expresan –de manera agregada– una cuantía de valor equivalente no agotan las posibilidades. Hay una tercera forma de mirar el mismo proceso y esta es la distribución: la apropiación de ingresos por parte de los así llamados factores productivos que, para simplificar, se distinguen entre capital y trabajo.

[...]

Si lo que hay para repartir año tras año es la riqueza que se genera es porque en el proceso productivo se crea ese valor. Por lo tanto es allí y en ese momento en donde se define la porción de cada quien y tal asignación como ocurre por lo común en el capitalismo, depende de las reglas de juego que resultan de la intervención estatal. De manera que el Estado debe actuar redistribuyendo pero –antes de ello– debe velar por las pautas que regulan la relación capital-trabajo.

Fuente: Lindemboim, Javier (2008). “Distribuir y redistribuir: he ahí la cuestión”, *Laboratorio*, año 10, n° 22, invierno, pp. 16-17.

GUÍAS DE LECTURA*

Las guías de lectura son una herramienta destinada a facilitar el abordaje de los textos por parte de los estudiantes: su objetivo es que orienten la lectura de los textos, sirvan de base para la confección de resúmenes y ayuden a la preparación de exámenes parciales y finales.

Además, podrán ser utilizadas por los docentes para el desarrollo de actividades en el aula.

Vázquez, Gonzalo y Abramovich, Ana Luz. “Es solo un rocanrol del país. Una introducción a los modelos de desarrollo en la Argentina”

1. Identifique los principales temas que aborda el artículo y de qué manera y en qué orden se van presentando. Elabore un esquema que sintetice el contenido general del trabajo.
2. ¿Qué entienden los autores por “modelo de desarrollo”? Intente definirlo con sus propias palabras. ¿Cuántos modelos se presentan en el artículo?
3. Identifique en el texto la síntesis de cada uno de los modelos de desarrollo que se presentan. A partir de dicha síntesis, realice un cuadro comparativo entre los modelos agroexportador (MAE), de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y neoliberal.
4. Las condiciones generales de vida de los trabajadores se ven afectadas por las características de los diferentes modelos. Analice de qué manera las diferentes políticas económicas implementadas en el marco de cada modelo impactaron en la situación de los trabajadores.
5. En el texto se rescata una frase de la Carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la

* Las guías de lectura que figuran a continuación fueron diseñadas por: Lorena Bottaro, Fabiana Leoni, Mariana Luzzi, Luciana Manildo, Marian Sola Álvarez, Carolina Schillagi y Gonzalo Vázquez.

política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. A partir del contenido del presente artículo, construya una explicación más detallada acerca de lo que Walsh está expresando en esta frase.

6. En relación con el modelo neoliberal, los autores afirman que en distintos momentos desde 1976 hasta la actualidad varios gobiernos implementaron políticas que generaron condiciones favorables al desarrollo de la valorización financiera del capital. Identifique ese tipo de políticas y proponga ejemplos de diferentes períodos.
7. Rastree en el texto los elementos de la política económica vigente entre 2003 y 2015 que marcan rupturas respecto del modelo neoliberal y aquellos que pueden identificarse como continuidades con él. ¿En qué dimensiones (de las seis consideradas en el texto para el análisis de los modelos de desarrollo) se sitúan esas rupturas y continuidades?
8. En línea con lo abordado en la pregunta anterior, ¿qué aspectos de la política económica del gobierno de Mauricio Macri pueden ser identificados con el modelo neoliberal y cuáles no? ¿Por qué? Ejemplifique y argumente.
9. ¿Cuál es, según los autores, el problema más profundo y estructural que compromete al desarrollo económico argentino?
10. Comente y explique la siguiente afirmación de los autores: “El estudio de los modelos de desarrollo nos permite conocer nuestro pasado, comprender el presente y pensar estrategias para un mejor futuro de nuestro país”. Comparta y discuta sus argumentos con sus compañerxs.

Mónaco, César y Benítez, Diego. “La Argentina del Proceso. Un texto introductorio a la etapa 1975-1983”

1. Los autores sostienen que el análisis de las características del tercer gobierno peronista (1973-1976) “no puede desligarse del proceso de radicalización política presente en los años previos”. ¿En qué consistió ese proceso de movilización y quiénes participaron de él?
2. Describa brevemente la situación económica y política durante los años previos al golpe de Estado.
3. Identifique en el texto a los actores que brindaron su apoyo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A continuación, describa los dos factores centrales que a juicio de los autores explican el consenso inicial hacia el gobierno militar.

4. ¿Cuáles fueron los principales **objetivos** del llamado Proceso de Reorganización Nacional?
5. Describa el accionar represivo del gobierno militar, identificando: a) sus objetivos; b) los grupos o actores sociales contra los que se dirigía; c) el modo de funcionamiento de ese accionar (quiénes integran los grupos represivos, cómo se organiza su accionar, qué actores no militares participan de o colaboran con la represión, etcétera).
6. ¿Cuáles fueron los **objetivos** de la política económica de la dictadura? Describa las principales **medidas implementadas** por el Ministro de Economía Martínez de Hoz.
7. ¿Cuáles fueron las **consecuencias** de la implementación del nuevo modelo económico en el funcionamiento de la economía y en las condiciones de vida de la población?
8. ¿Cómo se relacionaron durante el Proceso la política económica y la acción represiva?
9. Identifique y describa brevemente las diferentes experiencias de **resistencia** al gobierno militar.
10. Con el objetivo de establecer distinciones al interior de los 7 años de gobierno dictatorial, rastree en el texto las diferencias más importantes entre los gobiernos de Roberto Viola y su sucesor, Leopoldo Galtieri.
11. ¿De qué manera se produjo el retiro de las FFAA del gobierno? ¿Qué factores influyeron en el proceso que desembocó en las elecciones del 30 de octubre de 1983?

Calveiro, Pilar. *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue (selección de textos).

1. Describa el funcionamiento de los campos de concentración durante la dictadura militar de 1976-1983. ¿Cómo estaban organizados los captores? ¿Cómo se distribuían las funciones entre ellos?
2. Señale los objetivos de la burocratización y la fragmentación del dispositivo de los campos de concentración.
3. Describa la vida de los prisioneros dentro de los campos.
4. ¿Por qué, según la autora, el campo es “efecto y foco” de la diseminación del terror?

5. Explique la siguiente afirmación de la autora: “[el accionar ‘antisubversivo’] fue la modalidad represiva del Estado, no un hecho aislado, no un exceso de grupos fuera de control, sino una tecnología represiva adoptada racional y centralizadamente” (p. 176). ¿Por qué es importante destacar que se trató de una “modalidad represiva **del Estado**”? ¿Con qué otra posición sobre el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura discute –implícitamente– esta afirmación?

Cerrutti, Marcela y Grimson, Alejandro. “Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares”. En Portes, A., Roberts, B. y Grimson, A. (eds.), *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*. Buenos Aires: Prometeo.

1. Reconstruya la estructura del texto a partir de la identificación del título y los subtítulos: ¿en cuántas partes está organizado el artículo y de qué trata cada una de ellas? Considerando la información que proveen los subtítulos identifique: a) en la parte 1, ¿cuáles son los elementos que consideran los autores para caracterizar el impacto social del cambio de modelo económico?, b) en la parte 2, ¿cuáles son los elementos que permiten a los autores caracterizar la vida de los barrios populares del Gran Buenos Aires en el período analizado?
2. ¿Cuáles fueron los principales impactos en el mercado de trabajo de las transformaciones económicas que tuvieron lugar en la década de los noventa?
3. ¿Cómo fue la evolución de la pobreza durante ese mismo período y qué tipo de políticas se aplicaron? Compare las similitudes y diferencias de los lineamientos de las políticas presentadas en el texto con aquellas actualmente en vigencia. (por ejemplo, Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Plan Familias, Plan Manos a la Obra).
4. ¿Qué relación establecen los autores entre las transformaciones socioeconómicas y la problemáticas del delito?
5. ¿Qué análisis se realiza en el texto sobre los cambios en la cuestión territorial para las distintas clases sociales en la década de los noventa?
6. ¿Cuáles han sido las respuestas de los sectores populares a la degradación de la situación que sufrieron en la década?
7. Analice la dinámica de las organizaciones de desocupados, prestando especial atención a la gestión de los planes sociales y a su posición respecto de lo que los autores denominan la “cultura clientelar” construida por el peronismo.

Álvarez, Mariana; Fernández, Ana Laura y Pereyra, Francisca. “El mercado de trabajo en la posconvertibilidad (2002-2010): Avances y desafíos pendientes”

1. De acuerdo con el texto, ¿cuáles son los factores que ayudan a explicar el comienzo de una etapa de crecimiento económico a partir de mediados del 2002?
2. ¿De qué forma impactó este proceso de crecimiento sobre los principales indicadores laborales (tasas de actividad, empleo y desocupación)?
3. ¿Cómo afectó el crecimiento económico las posibilidades de inserción laboral de las personas según características tales como su nivel educativo, edad y género (varones y mujeres)?
4. Explique en qué consiste cada una de las dimensiones seleccionadas para analizar la evolución de la calidad del empleo.
5. ¿Cuál fue la evolución del trabajo asalariado no registrado en el período y qué elementos contribuyen a explicar la tendencia observada?
6. ¿Cuál fue la evolución del ingreso real promedio de los asalariados en el período y qué elementos contribuyen a explicar la tendencia observada?
7. ¿Cómo caracteriza el texto la evolución de la distribución del ingreso en el período (ver distribución del ingreso familiar) y qué factores contribuyen a su explicación?
8. Al margen de los avances registrados entre el 2002 y 2010, y tomando como referencia el período más amplio que va desde mediados de los setenta hasta la actualidad, caracterice y explique la evolución los siguientes indicadores claves: a) el desempleo, b) el empleo no registrado, c) el salario real promedio y d) la pobreza.

Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana. “La estructura social en perspectiva. Transformaciones sociales en Argentina, 1983-2013. En Birle, Peter; Bodemer, Klaus y Pagni, Andrea (orgs.), *Argentinien heute. Politik, Wirtschaft, Kultur, Frankfurt, Vervuert.*

1. ¿Qué entienden las autoras por fragmentación social? ¿Respecto de la estructura social, cuáles son los procesos que expresan esa fragmentación y qué fenómenos la explican?

2. ¿Cómo afectaron las condiciones de vida de la población las reformas neoliberales implementadas durante los años noventa? ¿Y qué efectos tuvo en ellas, más tarde, la crisis de 2001?
3. ¿Cuáles son las principales transformaciones de los sectores populares a partir de 1983? Describa detalladamente cada una de ellas, prestando atención a las diferencias que se registran dentro del período –por ejemplo, entre las décadas de los ochenta y los noventa y entre los noventa y los 2000–.
4. ¿Cómo afectaron los procesos de fragmentación social a las clases medias? Desarrolle haciendo hincapié en el fenómeno de la “nueva pobreza”.
5. Considerando los cambios observados desde 2003 hasta 2013, ¿cómo pueden reinterpretarse los procesos de movilidad social descendente que afectaron sobre todo a las clases medias entre los años ochenta y noventa?
6. Las autoras afirman que los procesos de fragmentación social dan origen a una “nueva forma de habitar”. ¿A qué se refieren con esta expresión? ¿Cómo se vincula con la idea de “segregación espacial”? ¿En qué se diferencian estas “formas de habitar” de las de otros momentos de la historia argentina? Proponga ejemplos que ilustren este fenómeno.
7. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones operadas en las clases altas entre 1983 y el presente? Desarrolle prestando especial atención a las transformaciones registradas a partir de la crisis de 2001, sobre todo en el ámbito rural.
8. ¿Por dónde pasan las desigualdades regionales en la Argentina de hoy? ¿Cuáles son las regiones más desfavorecidas y cuáles los procesos que las afectan particularmente?
9. Lea atentamente y explique la cita que sigue: “Parece posible pensar que mientras algunas de las transformaciones operadas como consecuencia de las reformas neoliberales resultan relativamente reversibles –aunque no lo sean todos sus efectos– otras mutaciones han impactado de un modo más durable en la forma en que se configuran las relaciones sociales, dando lugar a fenómenos más persistentes. De modo que no se trata únicamente de procesos que, a través de políticas públicas, puedan revertirse, sino que a través del tiempo, los distintos grupos sociales modificaron sus lógicas, sus intereses y su conformación.” Pensando en los cambios registrados entre las décadas de 2000 y 2010, proponga tres ejemplos de los dos tipos de transformaciones que mencionan las autoras (aquellas que resultan relativamente reversibles por medio de políticas adecuadas y aquellas que provocaron efectos más durables en la estructura social).

Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto. “Las capas geológicas de los sectores populares: estructuras, experiencias, conflictos”

1. ¿Qué entienden los autores por “sectores populares” y qué se proponen captar en el artículo?
2. De acuerdo con el texto, ¿cuál es una de las bases fundamentales de la heterogeneidad de lo popular? ¿Qué tendencias se observan respecto de ella en la última década (2003-2013, aproximadamente)?
3. ¿Por qué sostienen Semán y Ferraudi Curto que “los ciudadanos pobres no son, como suele presuponerse, mayoría de ‘asistidos’ sino, en general, trabajadores sobreexplotados y desprotegidos”? ¿Con qué afirmaciones discute implícitamente esa aseveración?
4. ¿Cómo describen los autores la situación de los sectores populares argentinos respecto de la educación y de la salud?
5. Comente y explique la siguiente afirmación de los autores: “La hipervisibilización agresiva de las clases populares es el correlato en el plano de las relaciones entre grupos sociales de la nueva distribución de las clases populares en el territorio, bajo las condiciones de una transformación profunda del régimen de acumulación capitalista.”
6. ¿A qué se refieren los autores al hablar de “capas geológicas de lo popular”? ¿Cómo se relaciona esta expresión con el problema planteado en la introducción del texto?
7. Identifique y describa los tres procesos que, a juicio de los autores, marcaron la experiencia de los sectores populares, y en particular su relación con la política, en los últimos lustros.

Schillagi, Carolina. “Experiencias de movilización social e interpretaciones sobre la crisis de 2001”

1. ¿Cuáles son las principales transformaciones económicas, sociales y políticas que ayudan a comprender los antecedentes de la crisis de 2001?
2. Realice una síntesis del final del gobierno de la Alianza (1999-2001) y de los principales acontecimientos que lo marcaron.
3. Elabore un cuadro donde se listen y describan las características de las distintas experiencias de movilización social que tuvieron lugar previamente y durante

la crisis de 2001. Señale en qué casos esas experiencias continuaron o se profundizaron al calor de la crisis y cuáles emergieron en ese período.

4. Haciendo hincapié en el fenómeno de las **asambleas barriales**, desarrolle quiénes participaron principalmente en ellas, cómo se consideró el papel del Estado en dichas experiencias y con qué otros actores y/u organizaciones tomaron contacto en los momentos iniciales.
5. En el texto se señalan tres formas de interpretar la crisis, esbozadas por la socióloga Maristella Svampa: el “argentínazo”, la “crisis” y el “acontecimiento”. Explique con sus palabras cada una de ellas.
6. Desarrolle brevemente cada una de las principales líneas de interpretación sobre la crisis que propusieron las ciencias sociales locales (“orden institucional” y “nuevas subjetividades políticas”).
7. Identifique los interrogantes planteados en las consideraciones finales del texto ¿Qué pueden decir al respecto luego de haber analizado en detenimiento el período previo y posterior a la crisis de 2001?

Torre, Juan Carlos. “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria”. *Desarrollo Económico*, vol. 42, n° 168, enero-marzo.

1. Identifique los principales interrogantes planteados por el autor, y qué hipótesis propone en relación con cada uno de ellos.
2. Caracterice los rasgos del bipartidismo argentino desde 1945, y señale por qué las elecciones de 1983 implicaron una innovación política.
3. El autor señala que a partir de la década del ochenta se produce una tendencia al debilitamiento del bipartidismo, ¿a partir de qué elementos lo sostiene?, ¿qué diferencias establece entre el peronismo y la UCR?
4. ¿Cuál fue la importancia y el impacto electoral del Pacto de Olivos?
5. ¿Por qué el viraje político-ideológico que se produjo tras la asunción de Carlos Menem en 1989 constituyó un punto de inflexión en la dinámica del sistema de partidos?
6. Describa los cambios entre la coalición electoral que permite la asunción de Menem en el año 1989 y la que hace posible su reelección en 1995.
7. Caracterice los principales cambios que se producen en la dinámica del sistema de partidos durante la segunda mitad de los noventa, y enuncie la hipótesis que el autor propone para interpretarla.

8. ¿Por qué, de acuerdo con el texto, la crisis de 2001 no afecta idénticamente a todos los partidos políticos?
9. Defina la noción de “malestar con la representación partidaria”, y describa
 - a. los principales cambios culturales a los que está asociada,
 - b. sus efectos sobre la interpretación de la política y en la relación entre ciudadanos y partidos políticos.
10. ¿A quiénes se define como los huérfanos de la política de partidos? ¿Por qué?
11. ¿Por qué la dinámica de las primeras dos décadas de democracia derivó en un sistema de partidos desequilibrado?
12. El autor propone una perspectiva con miras a las elecciones de 2003, en cuanto a la dinámica del sistema de partidos, al comportamiento de los electores y a los principales temas de la agenda política. A partir de la información de la que disponen, discuta:
 - a. ¿Concuerda con los lineamientos propuestos por autor? ¿Por qué?
 - b. ¿Qué proyecciones de las planteadas se corroboraron y cuáles no?
 - c. ¿Qué dimensiones no incluidas cobraron relevancia en el período 2003-2011?

Pereyra, Sebastián. “Las metamorfosis del sindicalismo argentino”. En *¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo*, pp. 57-73. Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento-Biblioteca Nacional

1. ¿Dónde se observa, para el autor, el principal efecto de la globalización y los programas neoliberales en la Argentina? Identifique los indicadores que le permiten sostener su afirmación.
2. ¿Cuáles fueron los efectos del cambio de modelo productivo en las formas de organización de los sectores populares?
3. Describa la situación de los sindicatos durante la dictadura militar. ¿Qué rol desempeñaron en el final de la dictadura y en los primeros años de la democratización?
4. ¿Cuál fue la principal estrategia sindical durante la transición democrática? ¿Cuáles fueron las principales demandas de los sindicatos durante el gobierno de Alfonsín? ¿Qué actitud mantuvo ese gobierno frente al sindicalismo?

5. A juicio del autor, ¿cuáles son los dos elementos que explican la declinación sindical durante los años noventa? Desarrolle cada uno de ellos.
6. Describa las distintas respuestas sindicales a los procesos de reforma de los noventa. ¿En qué niveles y con qué características se desarrolló el conflicto sindical durante los gobiernos de Menem? ¿Qué nuevas organizaciones vieron la luz durante ese período?
7. ¿Cómo se desarrolla el conflicto sindical a partir de 1999? ¿Qué posiciones asumieron las organizaciones surgidas en el período anterior?

Abal Medina, Paula. “Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas”

1. ¿Cuál es la hipótesis que plantea la autora acerca de la situación de la clase trabajadora y su capacidad de organización durante la llamada “larga década kirchnerista” (2003-2015)?
2. Preste atención a la caracterización que realiza la autora del período neoliberal y sus impactos para la clase trabajadora. ¿Cuál es, a juicio de la autora, la figura más disruptiva del ciclo neoliberal y por qué?
3. ¿Cómo influyen el contexto económico, por un lado, y el posicionamiento de Néstor Kirchner, por otro, en la reorganización y el fortalecimiento de los sindicatos durante su gobierno (2003-2007)?
4. ¿Cuáles son, según Abal Medina, las continuidades (o persistencias) con el período anterior que se soslayaron, en esos años, al celebrar la vuelta “del conflicto laboral [...] como evidencia irrefutable de la ruptura con el pasado”?
5. Identifique y desarrolle las dos etapas en las políticas vinculadas al trabajo que distingue la autora dentro de la “gran década kirchnerista”. ¿De qué manera respondieron esas políticas –si es que lo hicieron– a la creciente heterogeneidad de realidades del trabajo de la que habla el texto?
6. En líneas generales, ¿cómo es posible caracterizar la situación de los sindicatos durante el período 2003-2015? ¿Cuáles han sido los posicionamientos de los diferentes grupos o tendencias frente a los gobiernos kirchneristas?
7. De acuerdo con la autora, en el período analizado, ¿cuáles son los dos problemas de fondo que expresan claras limitaciones del sindicalismo como forma organizativa del trabajo?

Bottaro, Lorena y Sola Álvarez, Marian. “Acción colectiva y ampliación de demandas luego de la crisis de 2001. Las particularidades de los movimientos socioambientales”.

1. Lea la introducción (primeros tres párrafos del texto) e identificar los temas sobre los que va a tratar el artículo a través de tres palabras claves o frases relevantes. Por ejemplo: movimientos socioambientales.
2. a) ¿Cuáles son los denominadores comunes que presentan los casos de Esquel y Gualaguaychú? b) ¿Qué elementos diferencian a un caso del otro?
3. a) ¿Cuáles son los rasgos que comparten los movimientos socioambientales con los movimientos sociales de los años noventa? b) Explique cada una de las dimensiones comunes. c) Identifique en el texto ejemplos de cómo estos rasgos se encontraban presentes en los movimientos sociales durante década del noventa (y contexto inmediato de la poscrisis de 2001), y de qué manera son recuperados por los movimientos socioambientales.
4. a) ¿Cuáles son las características particulares de los movimientos socioambientales? b) Explique a qué hacen referencia cada una de las dimensiones presentadas por las autoras. c) Identifique en el texto ejemplos en los que estas dimensiones se encuentran presentes.
5. a) ¿Cuáles son los diferentes argumentos que presentan las autoras para explicar el surgimiento y posterior expansión de los movimientos socioambientales?
6. a) Para discutir con sus compañeros y trabajar en grupo: a) ¿Conocen algún conflicto socioambiental? b) ¿Cómo lo conocieron? (a partir de los medios de comunicación, por acontecer en las proximidades del lugar donde viven, otros...) c) Analicen el conflicto describiendo los actores sociales involucrados y utilizando las dimensiones propuestas en el artículo.

ACTIVIDADES

Las actividades que aquí se incluyen son propuestas didácticas para ser utilizadas tanto dentro del aula como en trabajos realizados en forma domiciliaria. Constituyen, ante todo, una herramienta para los docentes que utilicen en sus clases los materiales incluidos en este libro.

ACTIVIDAD N° 1

Los modelos de desarrollo en palabras de sus actores*

Presentación

Las distintas etapas históricas que ha atravesado la Argentina, entre 1880 y la actualidad, son analizadas a través del concepto definido por Abramovich y Vázquez en este libro como “modelos de desarrollo”. El concepto consta de una serie de variables (régimen de acumulación, contexto internacional, distribución del poder y relación entre actores sociopolíticos, rol del Estado, aspectos culturales y estratificación social), que permiten abordar los distintos aspectos de la vida económica, social, política y cultural del país. En esta propuesta de actividad se presentan un conjunto de expresiones de diferentes actores sociopolíticos,¹ manifestados en diferentes momentos de la etapa considerada. El objetivo es que los/as estudiantes puedan identificar, a partir de ellas, bajo la vigencia de qué modelo de desarrollo fue hecha dicha manifestación y qué posición toma ese actor frente a él.

Consigna de trabajo

A continuación se presentan expresiones de dirigentes argentinos, de diferentes ámbitos y distintas épocas históricas.

- a) Señalen, a su juicio, durante qué modelo de desarrollo económico, o etapa del modelo, se pronunciaron dichas palabras y justifiquen su respuesta.
- b) Describan la estrategia de crecimiento y desarrollo que propone quien habla.
- c) Según sus pareceres, ¿cuál es el rol que ese actor asigna al Estado?
- d) A su entender, ¿en qué actores socioeconómicos debe sostenerse dicha estrategia de crecimiento y desarrollo?

Expresión N° 1

Es un hecho sabido que desde antes de la pasada depresión mundial, las exportaciones argentinas han permanecido en un nivel prácticamente estacionario. Nuestro país no ha tenido, pues, como en tiempos más favorables de su historia económica la alternativa de dedicarse preferentemente a la exportación de cantidades cada vez mayores de productos agrarios, importando en cambio productos manufacturados o la de desenvolver intensamente la industria sacrificando las posibilidades de su exportación. Por el momento, el país no tiene esa opción en

* Actividad diseñada por Marcelo Panero.

¹ Al hablar de actores sociopolíticos, se sigue aquí la noción de O'Donnell, quien los definió como “sectores sociales (clases, grupos u organizaciones) cuya activación política permite a sus dirigentes una participación constante en el proceso político nacional, cualquiera sea el grado de poder que en él puedan ejercer”. Cfr. O'Donnell, Guillermo (1972). *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Paidós, p. 43.

su política económica... Mientras llegue ese momento el país necesita recurrir decididamente a su industria para suplir en lo que sea posible lo que no puede importar o pagar y evitar el grave mal de la desocupación.²

Expresión N° 2

En los regímenes republicanos de tipo presidencialista, inversamente a lo que sucede en otros, el presidente no es un mero poder moderador sino que desempeña el propio Poder Ejecutivo de la Nación, que ha de ejercer como emanación de la voluntad general... A esta idea he de atenerme y ella es la que aparece reflejada en las directrices que he de dar a las cuestiones económicas y sociales... No debemos olvidar que el flanco más vulnerable de nuestro país es su dependencia del exterior en orden a ciertos aprovisionamientos industriales, por cuyo motivo, y sin entorpecer su importación ni gravar pesadamente al consumidor, es indispensable abordar resueltamente la utilización de todos nuestros recursos naturales... Su aprovechamiento requiere estimular la producción. De ahí que haya propalado la industrialización del país. Ahora que no debe darse un sentido exagerado a este propósito. Para lograr una industrialización adecuada, se determinarán las actividades que requieren el apoyo del Estado por la vital importancia que tienen para el país o para contribuir al intercambio mundial con productos elaborados o semielaborados cuidando de aprovechar todas las posibilidades que permite nuestro pródigo suelo.

Asigno trascendental importancia a diversas iniciativas en preparación, que será sometidas a vuestra honorabilidad con carácter de urgencia, tendientes a robustecer y perfeccionar hasta el límite compatible con legítimos intereses, la futura intervención del poder público en la solución de los problemas relativos a la protección y fomento de la industria, aprovisionamiento de recursos energéticos, incremento de las vías de comunicación y regulación del transporte. Ciertos aspectos de tales problemas son comunes a los planteados por la mayoría de los grandes servicios públicos industriales, cuya prestación ha sido temporalmente delegada en empresas privadas... Un cabal sentido de jerarquía informa la aspiración de recabar, para nosotros mismos, el pleno comando sobre los resortes de nuestro desenvolvimiento económico.³

Expresión N° 3

Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema... el acento que hemos puesto en la importancia de la empresa privada en el esquema

² Plan de reactivación económica, presentado por el Ministerio de Hacienda de la Nación, 1939.

³ Mensaje del Gral. Juan D. Perón ante la Asamblea Nacional, con motivo de su juramento como presidente de la Nación, 4 de junio de 1946.

productivo del país y en la eliminación de la excesiva intervención del Estado y regulación de la economía no tiene por objeto eliminarlo sino mantenerlo con su "gran función orientadora", aunque no como empresario interviniendo en la gestión diaria, ni reglamentando y ahogando a la iniciativa individual... Este es el concepto del Estado moderno a nuestro juicio.

La fórmula del progreso para nuestro país descansa en... la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario, la reducción y racionalización del gasto público, la privatización de empresas estatales, la reprogramación de la inversión pública y una reforma del sistema impositivo.

Todo el proceso de reestructuración de la economía no se logra completar en cinco años, pero en este periodo sí creemos que hemos echado las bases firmes para esta transformación.⁴

Expresión N° 4

... hace aproximadamente 70 años Argentina cerró su economía, abandonó el libre mercado, y comenzó el exceso de regulación. El gobierno en ese momento pensó que se podía desarrollar la industria mediante la restricción de las importaciones, que creo que fue un gran error. En su lugar, lo que desarrolló fueron industrias protegidas ineficientes y que no pueden competir. Con la apertura de mercados van a desarrollar industrias mucho más fuertes. La verdad es que en los últimos años los países que más han crecido son los países que tienen mercados abiertos con los derechos de importación muy bajos y bajos impuestos.⁵

⁴ José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar 1976-1981. Último discurso como ministro, 12 de marzo de 1981.

⁵ Enrique Duhau, empresario agropecuario.

ACTIVIDAD N° 2

Los modelos de desarrollo a través de las fuentes históricas*

Presentación

El texto de Ana Luz Abramovich y Gonzalo Vázquez propone, a partir del despliegue de diversas dimensiones, una presentación de los tres modelos de desarrollo dominantes en los últimos 150 años de historia argentina.

El objetivo de esta actividad es realizar un trabajo comparativo integrando estas dimensiones, e incorporando como nuevo elemento de análisis la situación de los sectores trabajadores en cada una de estas tres etapas, su vinculación con el Estado y los cambios experimentados en las formas de acción colectiva y de defensa de sus derechos.

Para ello, trabajaremos con diversas fuentes históricas que nos permitirán abordar las relaciones de poder que se desplegaron en el marco de cada modelo de desarrollo y el rol que asumió el Estado en cada uno de estos momentos.

Consigna de trabajo

Lean atentamente las siguientes fuentes primarias, que remiten a diferentes momentos con importante protagonismo de los trabajadores en la vida pública. Luego respondan las preguntas que figuran a continuación.

- 1) Realizar una breve descripción de cada una de las fuentes, indicando de dónde proviene, cuál es el suceso que se describe, quiénes son los protagonistas y en qué modelo desarrollo podrían ubicar cada una.
- 2) A partir del análisis de las fuentes, ¿qué características del modelo económico permite visualizar cada documento?
- 3) ¿Qué características tienen las formas de protesta y acción colectiva que impulsaban los trabajadores para defender sus derechos?
- 4) ¿Cuáles son las respuestas que da el Estado frente a las demandas de los trabajadores?

Fuente N° 1

Se trata de una crónica realizada por el diario anarquista “La Protesta” sobre los sucesos ocurridos durante la denominada “Semana Trágica” en enero de 1919. Durante varios días, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a trabajadores que reclamaban mejores condiciones laborales. El conflicto, que se inició con las huelgas de los obreros de los talleres metalúrgicos Vasena, se transformó

* Actividad diseñada por Juan Ignacio Manterola.

en un enfrentamiento que paralizó la ciudad de Buenos Aires, dejando como saldo cerca de 700 personas muertas.

El pueblo está para la revolución. Lo ha demostrado ayer al hacer causa común con los huelguistas de los talleres Vasena. El trabajo se paralizó en la ciudad y barrios suburbanos. Ni un solo proletario traicionó la causa de sus hermanos de dolor. Entre los diversos incidentes desarrollados en la tarde de ayer, citamos los que siguen:

El auto del jefe de policía fue incendiado en San Juan y 24 de Noviembre. Los talleres Vasena fueron incendiados por la muchedumbre. En la manifestación a la Chacarita, fue desarmado un oficial de policía. En San Juan y Matheu fue asaltada y desvalijada en armería. En Prudan y Cochabamba se levantó una barricada con carros y tranvías dados vuelta, ayudando a los 15 marinos. En Boedo y Carlos Calvo fue asaltada otra armería. Las estaciones de Anglo, Caridad, Central y Jorge Newbery paralizaron por completo. En Córdoba y Salguero los huelguistas dieron vuelta a un tranvía, a otro en Boedo e Independencia y en Rioja y Belgrano a otro. Hay otra infinidad de tranvías abandonados en medio de las calles, y las calles en los barrios de Rioja y San Juan se atestaron de gente del pueblo. 200.000 obreros y obreras acompañaron el cortejo fúnebre con demostraciones hostiles al gobierno y a la policía. Los manifestantes obligaron a las ambulancias de la asistencia pública a llevar banderita roja, impidiendo que se llevara en una de ellas a un oficial de policía herido. Por la calle Rivadavia el pueblo marcha armado con revólveres, escopetas y máuseres. En Cochabamba y Rioja fue volcada una chata cargada de mercadería y repartida ésta entre el pueblo. La policía tira con balas dum-dum, Buenos Aires se ha convertido en un campo de batalla. Sigue el cortejo fúnebre rumbo a la Chacarita. Los incidentes se repiten con harta frecuencia.

Fuente N° 2

Fragmento de la Ley de Defensa Social sancionada en 1910, en respuesta a un ciclo de protestas impulsado por la F.O.R.A (Federación Obrera de la República Argentina), en el marco de los festejos por el centenario de la Revolución de Mayo y aprovechando la llegada al país de numerosos contingentes oficiales enviados por distintos gobiernos del mundo.

Artículo 1º. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Inmigración, queda prohibida la entrada y admisión en el territorio argentino de las siguientes clases de extranjeros: – los que hayan sufrido condenas o estén condenados por delitos comunes que según las leyes argentinas merezcan pena corporal; – los anarquistas y demás personas que profesan o preconizan el ataque por cualquier medio de fuerza o violencia contra los funcionarios públicos o los gobiernos en general o contra las instituciones de la sociedad.

Artículo 7°. Queda prohibida toda asociación o reunión de personas que tenga por objeto la propagación de las doctrinas anarquistas o la preparación e instigación a cometer hechos reprimidos por las leyes de la Nación, y la autoridad local procederá a la disolución de las que se hubiesen formado e impedirá sus reuniones.

Artículo 8°. Las sociedades, asociaciones, o las personas que deseen celebrar una reunión pública, sea en locales cerrados o al aire libre, deberán solicitar previamente autorización a la autoridad local, la que deberá prohibir dicha reunión si ella tuviera por objeto alguno de los propósitos enunciados en el artículo anterior.

Artículo 9°. Si durante las reuniones que se celebren, con la previa autorización a que se refiere el artículo anterior, se produjesen algunos de los hechos que, conocidos con anterioridad, hubiesen motivado la prohibición de la reunión de acuerdo con lo establecido en artículo 8°, la autoridad local ordenará la inmediata disolución de la reunión. Los que no acatasen la orden de disolución, o los que celebran una reunión prohibida, sufrirán la pena de arresto de 6 meses a 1 año. Los promotores o cabecillas sufrirán el máximum de la pena.

Artículo 10°. En las reuniones públicas, sea en locales cerrados o al aire libre, no podrán usarse emblemas, estandartes o banderas conocidas como características de las asociaciones prohibidas por el artículo 7° de esta ley.

Fuente N° 3

El siguiente fragmento es parte del discurso pronunciado por Ángel Perelman, dirigente sindical cofundador de la Unión Obrera Metalúrgica (uom), ante delegaciones obreras de Paraná (Entre Ríos) el 17 de junio de 1944.

Nosotros no consideramos a la Secretaría de Trabajo y Previsión como un organismo estatal ni patronal. Eso lo hemos declarado a quienes lo hayan querido oír en todas las oportunidades. Hemos dicho que se trata de un organismo eminentemente obrero, y que su acción tiende a la defensa de la clase trabajadora por una simple razón. Hasta ahora el panorama de los obreros frente a los patrones ha sido muy simple. El patrón, generalmente más preparado para la lucha que el obrero (y, cuando no era más preparado, tenía los medios para comprar las inteligencias de que no disponía para defender sus intereses), triunfó sobre este. Además de eso, cuando su propia capacidad e inteligencia, que él podía comprar, no eran suficientes para defender sus intereses, podía intentar el soborno de jueces, que debían decidir los conflictos. Nada de eso ha tenido, hasta ahora, en sus manos, el obrero, para la protección de sus derechos. La Secretaría de Trabajo y Previsión tiene la decisión y la honradez necesarias, así como los técnicos capacitados y las inteligencias necesarias para defender sus propias conquistas en contra de los intereses de los intereses y de las ambiciones desmedidas de muchos explotadores patronales.

No somos antipatronales, somos el Estado que está en la obligación de asegurar la justicia social, que debe comenzar a regir alguna vez en este bendito país.

Fuente N° 4

Entre 1943 y 1945, Juan Domingo Perón ejerció, antes de acceder a la presidencia, diversos cargos dentro de la estructura de gobierno. Tal vez, el más significativo de ellos fue el que ocupó como secretario de Trabajo y Previsión, donde estrechó fuertes vínculos con la dirigencia sindical.

En el libro *Resistencia e Integración*, el historiador y sociólogo Daniel James reproduce un diálogo en el que participaron Mariano Tedesco (dirigente de la Asociación Obrera Textil), trabajadores textiles y el propio Juan Domingo Perón.

-Hablen tranquilos ¿Cuál es el problema? Hablá vos Tedesco, el Coronel lo va a entender mejor.

-Bueno...

-¿Usted es Tedesco? Hijo de italianos ¿no?

-Sí, Coronel

-Muy sencillito, Coronel: Mucho laburo y poca guita.

-Eso está claro. ¿Dónde?

-Trabajamos de noche en... Nos pagan 3 pesos con treinta cada noche.

-¡Qué barbaridad! Enseguida lo arreglamos. Haré llamar a los dueños de la fábrica para que se haga un convenio de parte de ustedes. ¿Cuánto quieren ganar?

-Nos tiramos a 3 pesos con 33 centavos pero lo justo sería 3,50 por noche.

-Todo va a andar bien. No puede ser que todavía se explote así a los trabajadores.

-Gracias, Coronel.

-Tedesco, usted quédese. Los demás pueden irse y tengan confianza.

Fuente N° 5

En enero de 1959, bajo la Presidencia de Arturo Frondizi, el gobierno promovió la sanción de la ley que impulsaba la privatización del frigorífico "Lisandro de la Torre" ubicado en el barrio porteño de Mataderos.

Frente a esto, los trabajadores declararon la huelga e iniciaron la toma del establecimiento para evitar su venta.

Declaración del Ministerio de Defensa:

“Ante decisiones de organizaciones político-gremiales y reuniones que señalan propósitos de perturbación del orden público el gobierno actuará en consecuencia como corresponde.

No permitiré que se altere la paz interna ni va a aceptar que con pretextos gremiales se produzcan actividades insurreccionales. Se va a obrar con serenidad, pero también con gran energía y decisión.

Rige el estado de sitio”.

Tomado de: Diario *La Nación*, domingo 18 de enero 1959.

Fuente N° 6

Relato realizado por Sebastián Borro, delegado del frigorífico Lisandro De la Torre, en el que reconstruye el diálogo que tuvo, en enero de 1959, con el presidente Frondizi.

Arturo Frondizi: –Usted dirá Borro...

Sebastián Borro: –Lo primero que le voy a decir es lo siguiente. En primer lugar el Frigorífico no tiene déficit y cuando lo tuvo se conjugaba con los años de ganancia.

A.F.: –La adjudicación es ya una decisión tomada, el problema no es si es justo o no...

S.B.: –Señor, ningún cargo ni ninguna investidura le dan facultades para burlarse de los trabajadores. Si usted considera que con esta burla va a llegar a sus objetivos, está muy equivocado, nosotros no se lo vamos a permitir. No podemos permitir que poniendo en juego la riqueza del país se burlen de los trabajadores.

Usted no puede engañar a la gente, usted no asume sus responsabilidades y tendría que hacerlo. Mientras los obreros gritan patria sí, colonia no..., usted se va a los Estados Unidos sin responsabilidad de argentino, a vender el país.

A.F.: –La historia y el pueblo dirán...

S.B.: –Mire señor presidente, yo no tengo mucha intelectualidad pero sé que la historia se escribe de cualquier manera. Yo he aprendido una y con el tiempo me he dado cuenta que la realidad era otra...

Fuente N° 6

La privatización de la empresa estatal “Yacimientos Petrolíferos Fiscales” (YPF) fue posible a partir de la sanción de dos leyes impulsadas por el gobierno de Carlos

Menem durante la década de 1990. A continuación, transcribimos fragmentos del Decreto 2778/90 firmado por el presidente de la Nación el 31 de diciembre de 1990 y el artículo N° 9 de la “Ley de Hidrocarburos” sancionada por el Congreso Nacional el 24 de septiembre de 1992.

Decreto 2778/90:

Artículo 1º – Dispónese a partir del 1º de enero de 1991 la transformación de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO en YPF SOCIEDAD ANÓNIMA (...). Previo cumplimiento de la Ley 23.696, sus acciones serán ofrecidas en bolsas y mercados bursátiles y también en licitaciones. YPF SOCIEDAD ANÓNIMA iniciará, inmediatamente, los trámites a tales fines.

Artículo 11º – YPF SOCIEDAD ANÓNIMA promoverá el desarrollo profesional de directivos y demás personal a través de adecuados mecanismos de selección, evaluación y promoción, así como remuneraciones en base a méritos y experiencia acordes con las vigentes en el mercado, para cada especialidad y función en actividades competitivas.

Ley N° 24.145:

Artículo 9º.- Apruébase la declaración de “sujeto a privatización” del Capital Social de YPF Sociedad Anónima.

Fuente N° 7

Se trata de una crónica realizada por Daniel Maschio para el diario Clarín el 26 de junio de 1996, en la que se relatan los cortes de ruta y la pueblada que se desarrollaron en las ciudades de Cutral-có y Plaza Huincul (Neuquén) a partir de ola de despidos realizada por la empresa YPF, recientemente privatizada por el gobierno de Carlos Menem. El conflicto tomó alcance nacional y fue considerado como el hecho que marcó el surgimiento de un nuevo actor político y social: el piquetero.

Unos 20.000 pobladores de estas ciudades neuquinas resistieron ayer la orden de la Justicia y de la Gendarmería de levantar el corte de las rutas nacional 22 y provincial 17. La jornada había empezado con una gran tensión. A las 9, la jueza (Argüelles) llegó a la primera valla sobre la ruta 22, a 8 kilómetros de Plaza Huincul. La escoltaban 30 vehículos de Gendarmería, incluidos un camión hidrante y una tanqueta y 400 efectivos. Los gendarmes apagaron el fuego y retiraron la barricada. El procedimiento se repitió en el segundo piquete.

Ya era mediodía cuando, a 4 kilómetros de Plaza Huincul, un grupo de manifestantes arrojó piedras a gendarmes, que reprimieron con agua y luego con gases lacrimógenos. Los vehículos ya no pudieron seguir: los pobladores que retrocedían

ante el avance de los gendarmes se juntaron con una gruesa columna que iba al encuentro de la jueza. La multitud, estimada en 20.000 personas, 'casi la mitad de los habitantes de Cutral-Có y Plaza Huincul'. Cubría tres kilómetros de la ruta. A las 13, el comandante Santiago Fernández, al mando de las tropas, los instó a formar una comisión que dialogara con la jueza. Ante la falta de respuesta, Argüelles decidió ir caminando entre la gente hasta el llamado Puesto Torre, frente al campamento de YPF en Plaza Huincul, donde estaban los dirigentes que se negaban a levantar el bloqueo. Finalmente la jueza llegó hasta el piquete en la combi de una emisora local. Mientras tanto, a sus espaldas hubo nuevos incidentes. Al conocerse la represión, en la ciudad de Neuquén, los gremios estatales, organismos de derechos humanos y entidades intermedias organizaron concentraciones de apoyo, que cortaron dos veces la ruta nacional 22.

Una asamblea popular esperaba a Argüelles en Puesto Torre. Pese a subirse al techo de la combi y a recurrir a un megáfono, la silbatina apenas la dejó hablar. "He abierto un expediente penal para que desalojen la ruta", intentó explicar. "Entiendo que tienen derecho a trabajar, pero ustedes también tienen que entender que la gente tiene derecho a circular con libertad en esta ruta". Su discurso fue interrumpido varias veces por los pobladores. "Esto me excede –admitió–. Yo me declaro incompetente y me retiro de aquí con la Gendarmería".

ACTIVIDAD N° 3

Dictadura cívico-militar y vida cotidiana*

Presentación

El 24 de marzo de 1976 se dio inicio a la última dictadura cívico militar en la Argentina; por más de siete años los militares ocuparon de facto el poder político del país. Las fuerzas armadas en forma conjunta y con aliados civiles establecieron, como sostienen Abramovich y Vázquez en su artículo publicado en este libro, un nuevo patrón de acumulación, de valorización financiera, y pusieron en marcha el modelo neoliberal.

Por otra parte, como afirman Benítez y Mónaco en su artículo, este proceso autoritario estableció una fuerte política represiva, el terrorismo de Estado, que se sostuvo por medio del secuestro, la tortura y la desaparición de personas, estableciendo una “cultura del miedo”. De esta forma, esta política promovió un nuevo tipo de disciplinamiento social por medio del terror. El uso del espacio público, las reuniones, las protestas, la organización gremial o política estaban prohibidas y bajo un preciso control militar; es decir, que la vida cotidiana de los argentinos cambió.

En esta actividad se presentan dos relatos de ficción⁷ que representan, real e irónicamente al mismo tiempo, cierta cotidianeidad vivida por los argentinos durante este proceso. El objetivo de la actividad que proponemos aquí es que los estudiantes puedan reconocer en las voces y las imágenes que muestran los protagonistas de los relatos las características de la dictadura cívico militar y la forma en que afectaron a la sociedad.

Consigna de trabajo

Reunidos en grupos de no más de 4 estudiantes, elegir uno de los relatos que figuran a continuación y responder las consignas que siguen. Una vez culminada la tarea, se realizará una puesta en común entre todos los grupos.

- 1) Reseñen las expresiones expuestas en los relatos que permiten identificar la llegada de las fuerzas armadas al poder político y los cambios que ello sugiere. Vinculen esas expresiones con los objetivos propuestos por el Proceso de Reorganización Nacional en 1976.
- 2) Identifiquen en los textos elementos referidos a la implementación de las políticas represivas de la dictadura cívico militar y desarrollen el contenido de esas políticas.

* Actividad diseñada por Adrián Berardi.

¹ Ambos relatos fueron escritos por León Masac, y publicados oportunamente en <http://lacolumnadelleon.blogspot.com/>. Dichos cuentos fueron adaptados por el autor para la presente actividad.

- 3) Localicen en los cuentos aquellos fragmentos que permiten dar cuenta de lo que algunos autores caracterizan como una “cultura del miedo” impuesta por la dictadura militar.
- 4) ¿Cuáles son las referencias que hacen los protagonistas de los cuentos respecto a la puesta en marcha de lo que hoy conocemos como modelo neoliberal?
- 5) Las historias de los cuentos transcurren en una casa, pero en ninguno de ellos se puede identificar en qué lugar de la Argentina está localizada. ¿Por qué? ¿Cuál consideran que puede ser el motivo del autor de los relatos para no identificar la zona geográfica?
- 6) En los relatos, la voz de los protagonistas establece realidades diferentes pero en ambos casos es posible pensar en un final similar para ellos. A partir de esto elaboren un párrafo que explique qué pasó con el personaje del relato seleccionado, tomando en cuenta que los acontecimientos de los cuentos transcurren entre 1976 y 1983.

RELATO 1. Esos días

Se lo dije a los hombres de anteojos negros que vinieron ayer por la noche: “no lo sé”. Usted se imaginará que si supiera dónde está mi marido sería la primera en ir a buscarlo, pero resulta que no sé nada.

Entiendo su preocupación Don, pero no puedo hacer más; usted sabe que ser pobre no significa ser mentirosa, jamás mentiría delante de mis hijos y menos sobre el paradero de su padre.

Pero no, ya le he dicho en sus reiteradas visitas que yo no milito en ningún partido, ni soy delegada de la fábrica y no tengo relaciones políticas. ¿Usted no ha comprendido? Parece que para usted basta que uno piense distinto para ser subversivo; alcanza con comer tamales en lugar de fideos, o usar un vestido rojo en lugar de blanco para que a una la acusen de subversión, para ser señalada como terrorista.

Mi marido ayuda en las villas, sí, claro; les enseña a escribir a los pibes, les da la merienda, los ayuda a hacer frente a este injusto mundo lleno de miserias. Pero ¿por qué no se pone en el lugar del otro, Don? ¿Usted nunca sintió la necesidad de ayudar al otro? Porque parece que los humildes, los trabajadores, los pobres son responsables de los males de la patria; ¿acaso no son ustedes los que ayudan a los empresarios y castigan a los que vivimos de nuestro salario? ¿Con qué derecho sus hombres apuntan a mis hijos con sus armas, qué les hemos hecho?

Mire, si yo supiera dónde está, estaría con él, ¿por qué no les pregunta a sus camaradas?

¿Insolente? ¿Cómo me dice insolente? Son ustedes los que irrumpen en mi casa sin pedir permiso, a cualquier horario, y ahora la irrespetuosa soy yo. ¿Acaso no están ustedes reorganizando el país? ¿No son los médicos que quitarán el cáncer de la subversión?

No tengo miedo, a su pesar... si tuviera miedo, no estaría hablando con usted, los que tienen miedo son ustedes, que le temen a la democracia y se apoyan en el imperialismo extranjero porque no le dan las agallas para hacerse cargo de su propia mierda.

No hacía falta que se ensuciara las botas en un barrio de obreros para venir a amenazarme, bastaba una carta para consultarme.

Lo que pase conmigo no será distinto a lo que le pasa al resto, solo que el silencio será más profundo y el temor a sus acciones será mayor, hasta que el grito de las futuras generaciones los vuelvan a llevar a sus cuarteles. Al fin y al cabo, su risa no me inquieta, quizás para usted sean tonteras, como para mí lo es su traje de fajina.

Desde ya le agradezco su preocupación, solo una cosa más:

¿Quiere que los espere con mate hoy a la noche?

RELATO 2. Por culpa de ellos

Me detuve frente a la ventana que daba a la avenida, vi los álamos abandonando sus hojas a la buena de dios, sentí el respiro del gorrión en el nido casi descubierto mientras el viento azotaba la morada causando miedo a los recién nacidos, expectantes por la llegada de su madre con el alimento diario. Elevé la mirada para contemplar el cielo celeste y los rayos de sol en las prematuras horas de una mañana de otoño; respiré profundo por un segundo, cerré los ojos y volví mi vista hacia la habitación, divisé las sabanas húmedas y aún tibias después de una noche larga. Me puse las pantuflas y fui a la cocina, ella estaba ahí parada junto a la hornalla con su camisón arrugado y su pelo desprolijo, me senté en la mesa casi sin hacer ruido. Clara se dio vuelta con la pava y el mate en la mano diciendo –casi murmurando– “buen día”. No respondí, solo la miré y le sonreí, pero no dije nada. Desayunamos en silencio como siempre, cuando ella pretendía empezar una conversación yo levantaba la mano con el objetivo de detenerla, por supuesto que a ella le molestaba eso pero comprendía mi necesidad de silencio; en realidad pocas veces desayunábamos juntos, cuando yo daba clases siempre salía más temprano que ella y cuando comencé a desempeñar las funciones públicas en la comuna, siempre salía después de ella. En realidad solo compartíamos esos mates matutinos los sábados, porque los domingos bien temprano yo iba al club para jugar a la pelota con los pibes del barrio y ella apenas abría los ojos cuando yo regresaba

con el pan, las facturas y los fideos caseros de la fábrica de pastas de Don Gilberto que estaba en la avenida que tomaba para regresar del club.

Podría decir entonces que solo un día por semana compartíamos el desayuno, pero la cuestión es que desde que vinieron los milicos las cosas más mínimas, como el desayuno, cambiaron. Yo no trabajaba más en la comuna y me dedicaba a la carpintería, actividad que desarrollaba en mi casa y con mis horarios, y por otro lado con la llegada del ejército al pueblo el club pasó a formar parte de la guarnición de entrenamiento para el personal de la división de paracaidistas del cuarto cuerpo, y aunque lo usaban como depósito se nos prohibió su uso recreativo, bueno, en realidad se prohibió todo tipo de recreación deportiva a cualquier mayor de 20 años que no ejerciera profesionalmente el deporte que practicaba. En conclusión, me veía obligado a desayunar con Clara todos los días y evitar todo tipo de conflicto que generase mi mal humor matutino.

Clara por su parte era modista, de las buenas –con estudios y todo–, trabajaba en un taller de alta costura unas cuatro o cinco horas por día, diseñaba trajes, vestidos de novia, de madrina y hasta disfraces de carnaval, pero con la llegada de los milicos el taller cerró porque impusieron un nuevo impuesto que obligaba a su dueño, Mauro Catalace, sastre italiano que vino al pueblo expulsado de su país con la primera guerra mundial, a dejar el 50% de sus ganancias al fisco del pueblo; entonces el viejo ni lerdo ni perezoso, hizo un par de llamadas y se fue a la mierda, así sin más; algunos vecinos dicen que se fue de nuevo a Italia pero nadie tiene la posta.

La cuestión es que Clara y otras dos mujeres que trabajaban en el taller tuvieron que emprender su actividad de manera autónoma y competir con los grandes diseños que venían del exterior. En definitiva, las cosas cambiaron tanto que Clara y yo pasábamos todo el día en la casa, juntos. Algunos días yo me hacía el otario y me iba a regar el jardín, bueno, en realidad las macetas porque los milicos nos obligaron a sacar todas los sectores parquizados de las casas para evitar las plagas de insectos que, supuestamente, perjudicaban los motores de los aviones y los camiones de las guarniciones cercanas.

El tema se empezó a poner tenso cuando el trabajo empezó a faltar, con Clara discutíamos bastante seguido, y la verdad las prohibiciones de los militares empezaban a limitar las actividades. El bar de Rolo tuvo que cerrar acusado de inmoral por el ejército; la peluquería bajó la persiana cuando su dueña fue acusada de agente del chisme; el almacén del gallego cerró en medio de denuncias de venta de alimentos en mal estado. A Ricardo Pimote, el mecánico del barrio, se lo tragó la tierra y nunca lo volvimos a ver; mientras que Carlos, el carnicero,

abandonó el pueblo luego de ser señalado por una supuesta colaboración con agentes subversivos.

En fin, solo podías quedarte en tu casa tomando mate con tu mujer y rezando llegar a los 70 para jubilarte o que los milicos te lleven, pero Clara no aguantó. Un 2 de enero a las cuatro de la mañana me despertó y me dijo que se iba a la capital a hablar con su tío “el polaco” para que le haga algún contacto en Polonia para que nos vayamos para allá, me dijo que me llamaba apenas llegaba y que veíamos la forma de que yo viaje. Cuando le pregunté cómo pensaba irse, me contó que Jacinta, la vecina de la casa lindera, tenía que ir a vender unas lanas a capital y había obtenido un permiso particular de los militares para salir del pueblo, y que ella se iría escondida en el camión.

Así las cosas, un día Clara se fue. Por mi parte empecé a tomar mate solo, cada vez más en silencio porque los milicos cerraron los canales de amplitud modulada y ni la radio podíamos escuchar.

Pero un día pasó lo inesperado, los milicos lanzaron un comunicado que indicaba que toda casa que no sea habitada por un matrimonio iba a ser expropiada por considerar a su habitante un sujeto inmoral que conspiraba con el progreso del país ya que no existía posibilidad de traer hijos al mundo. Estaba claro que yo a esa altura era un inmoral y sin mucho preámbulo el 8 de enero me tocó la expulsión de mi casa y a pesar de intentar explicarle al Teniente primero José Las Piedras, que era el intendente en ejercicio, que mi esposa estaba de viaje por trabajo, el muy hijo de puta me hizo armar un bolso y salir de la casa. Sin tener a dónde ir, empecé a caminar por la ruta de empalme con la capital pidiéndole alojamiento a los vecinos, pero los milicos habían dicho que quien le diera asilo a un hombre o una mujer sería acusado de traición a la patria, aliado de la subversión y sería sometido a un juicio marcial.

La situación se puso más tensa cuando llegué al kilómetro 42, transpirado y sucio, y un grupo de militares me detuvo por vagancia, desprolijidad y actitud inmoral en la vía pública. Me mandaron al penal 408 donde estuve preso por más por tres años, sin juicio ni condena.

Por esas cosas de la vida, me dejaron salir; al tiempo conseguí un trabajo en la frontera norte donde mi función era izar la bandera todas las mañanas a las seis en punto, el salario era una casa de dos por dos y dos paquetes de yerba por mes; cuando desayunaba el silencio era profundo, como todo el resto del día.

Después de un tiempo, y de casualidad, un auto se había quedado varado en la ruta 106 a un kilómetro y medio del puesto y un hombre bien vestido y bastante alto se acercó a pedir ayuda, le comenté que por la zona no había nada y que

debía trasladarse unos 5 kilómetros para encontrar el taller del chueco García. El hombre pensativo me ofreció unos cuantos pesos para que fuera hasta el taller y le pidiera al chueco que vaya a ver su auto; la cuestión es que como yo era pobre-pobre, aunque me hubiera ofrecido un centavo lo hubiera hecho, entonces sin más tomé el termo, el mate y emprendí el camino. El chueco no negó el trabajo y nos fuimos juntos a la ruta 106, al llegar una mujer estaba sentada junto a un general del ejército en la parte trasera del auto; la reconocí, era Clara. Cuando el chueco terminó de reparar el auto y se preparaban para partir yo me acerqué a Clara e intenté hablarle, ella levantó la mano, como hacía yo cuando desayunábamos, mantuvo fija su mirada hacia el conductor, posó su mano derecha en la falda del militar y le solicitó al chofer que arrancara.

ACTIVIDAD Nº 4

Política económica y terrorismo de Estado en la propaganda oficial de la dictadura militar*

Entre 1976 y 1983, el gobierno dictatorial desarrolló una intensa actividad de propaganda oficial en los medios gráficos, la televisión y la radio, con el objetivo de generar un alto grado de apoyo de la sociedad hacia sus planes y acciones.

A continuación se presenta una serie de avisos de propagandas oficiales que fueron difundidos en esos años a través de la prensa gráfica y televisiva. Miren y lean detenidamente cada una de ellas y respondan las siguientes preguntas.

- 1) Benítez y Mónaco señalan en su artículo que “la propaganda permanente del régimen estuvo ligada, la mayor parte de las veces, a la construcción, en sentido público, de *enemigos* a la causa nacional”.
 - Identifiquen en cuáles de las siguientes publicidades pueden encontrar esta idea.
 - ¿Cuál es la construcción de “enemigo” que se recrea? ¿Cómo se lo caracteriza?
 - Según esas publicidades ¿qué o quiénes serían los atacados por esos “enemigos”?
 - ¿Cómo puede relacionarse esta propaganda oficial con la política represiva llevada adelante desde el Estado en esa época?
- 2) Identifiquen cuáles de estas publicidades se pueden relacionar con las políticas económicas implementadas durante el período.
 - ¿Con qué medidas económicas específicas se relaciona cada una?
 - ¿Con qué rasgo del modelo económico que se comienza a implementar se vincula?
 - Algunas de ellas hacen referencia a ciertos actores sociales de manera explícita o implícita. ¿Cuáles son esos actores sociales? ¿Cómo son caracterizados en la publicidad?

* Actividad diseñada por M. Florencia Gentile, Carolina Schillagi y Marian Sola Álvarez.

Propaganda N° 1. Qué hacer con los costos



HOMBRES *(comprimidos, acorralados entre un piso con la leyenda COSTOS y un techo con la leyenda DÓLAR. Gritan todos al mismo tiempo):* ¡Suban el techo! ¡Suban el techo por favor!

LOCUTOR: *¿Levantar el techo? Veamos...*

Se levanta el margen superior (techo - dólar).

HOMBRES *(aliviados):* ¡Por fin...! Ahora sí...



LOCUTOR: *Inmediatamente se levantará el piso...*

Se levanta el margen inferior (piso - costos)

HOMBRES *(sorprendidos):* ¡¡¡Se mueve el piso!!!

LOCUTOR: *Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes.*

HOMBRES *(empiezan a quedar comprimidos y aplastados entre el piso y el techo. Gritan):* ¡No! ¡El techo, por favor, el techo!

LOCUTOR: *Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas?*

Empieza a bajar el margen inferior (costos).

HOMBRES: *¡Está bajando el piso!*

LOCUTOR: *Bajó el piso. Ahí está el secreto.*

Los hombres se enderezan y estiran. Expresiones de alivio y alegría. Empiezan a saltar sobre el piso, como ayudando y haciendo fuerza para que baje más rápido.

LOCUTOR: Estas medidas deben ser complementadas por una acción, en el mismo sentido, de los sectores oficiales y privados. Bajar aún más el piso.

HOMBRES (*saltando contentos sobre el piso*): ¡Abajo el piso, abajo los costos! ¡Abajo los costos!

Propaganda completa: <https://www.youtube.com/watch?v=zDyACpzoUq0>

Propaganda N° 2. La historia de la vaca triste

En la TV aparece (con una imagen de pésima calidad, de acuerdo a las posibilidades técnicas de la época) una vaca que pasta feliz. Al fondo, se divisa una fábrica [...]. De pronto, un nutrido grupo de monstruos con dientes afilados se apropia de la vaca y le exprime tanto, pero tanto, sus ubres, que queda flaca y triste. Desaparece la fábrica y el fondo colorinche se transforma en pura noche y oscuridad.



LOCUTOR: Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina: bocado deseado por la subversión internacional. Trató de debilitarla para poder dominarla. Eran épocas tristes y de vacas flacas.



LOCUTOR: Hasta que dijimos: "¡Basta! ¡Basta de despojo, de abuso y de vergüenza! Hoy, vuelve la paz" (*indicaba el audio, dando el anclaje final a lo que se veía. Un gauchito feliz coronaba la animación*).

Imágenes seleccionadas por las autoras. Propaganda completa: www.youtube.com/watch?v=PIPLHcItxTU&feature=related

Propaganda N°3. Las sillas



En una habitación blanca hay, en el centro de la escena, una silla con un cartelito colgado: "Industria nacional". Un hombre se acerca, la observa como evaluándola desde distintos ángulos y se intenta sentar, con cara de resignación.

LOCUTOR: Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor tenía que conformarse con lo que había, sin poder comparar.

(Cuando el hombre se sienta, la silla se rompe repentinamente, rodando por el piso todas sus piezas. El hombre casi se cae. Mientras se arregla el saco, incorporándose, el locutor agrega).

LOCUTOR: Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales... ¡los importados!

(Aparece la imagen de muchas sillas, de distintos modelos, que en su respaldo dicen "Made in". El hombre las mira y se alegra, entusiasmado).

Propaganda completa: www.youtube.com/watch?v=zJS3CbmOWf4&feature=related

Propaganda N° 4. La Argentina como bocado



En Blaustein, E. y Zubieta, M. (2006). *Decíamos ayer: La prensa argentina bajo el Proceso*, Buenos Aires: Colihue, p. 200.

Propaganda N° 5

Eslogan difundido en 1979, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que investigaba las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos efectuados por el régimen militar.



ACTIVIDAD N° 5

La evolución del mercado de trabajo durante los años de la convertibilidad*

A continuación se presenta una serie de datos estadísticos (cuadros y gráficos) relativos a los cambios experimentados en el mercado de trabajo, con énfasis en las profundas transformaciones económicas acontecidas en la década del noventa.

- Reunidos en grupos de no más de 5 estudiantes analicen la información sobre la base de las preguntas que se plantean al pie de cada cuadro o gráfico.

La fuente de los datos. ¿Qué es la Encuesta Permanente de Hogares?

La información que se presenta en esta actividad se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). ¿Qué es la EPH? Se trata de una encuesta que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) junto con las direcciones provinciales de Estadística. La encuesta indaga en forma periódica sobre datos relativos a la composición demográfica y socioeconómica de los hogares, con particular énfasis en las características de la inserción laboral de sus diferentes miembros. La aplicación de esta encuesta comenzó a principios de la década del setenta y fue expandiendo su cobertura para abarcar a las principales ciudades del país. En la actualidad, la EPH cubre a 31 de los principales aglomerados urbanos argentinos. Desde su inicio hasta el 2003, la recolección de datos se realizaba dos veces al año, en los meses de mayo y octubre (esta versión de la EPH se conoce como la "EPH puntual"). A partir del año 2003, la EPH cambió su metodología. La variación más importante tiene que ver con la periodicidad de la recolección de la información: desde ese año los datos se relevan semana a semana (es por esto que se la conoce como la "EPH continua"). El objetivo de esta modificación tiene que ver con la posibilidad de generar información, no ya solo para los meses puntuales de mayo y octubre, sino para períodos más amplios. En este sentido, la actual versión de la EPH permite generar datos a nivel trimestral, semestral y anual.

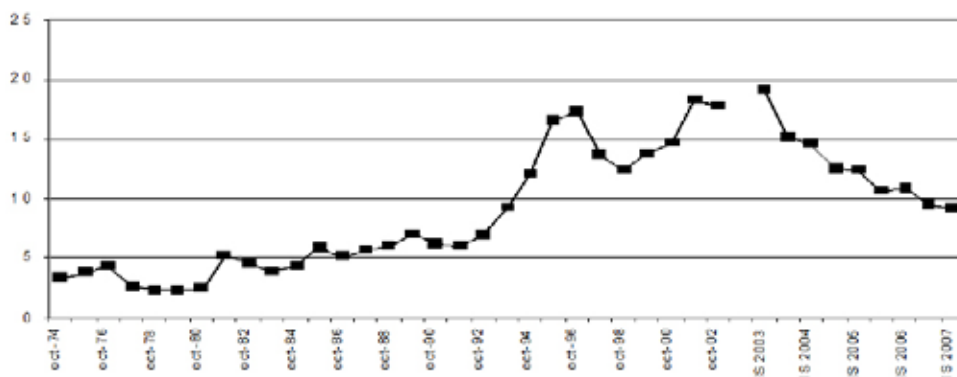
- 1) Observen el gráfico 1 y describan la evolución general de la tasa de desempleo en los últimos 30 años. En particular, identifiquen:
 - a) ¿Cuál es la tendencia desde 1974 hasta principios de los noventa y cuáles son los principales acontecimientos político-económicos que la explican? (Bayón y Saravi, pp. 233-235).
 - b) ¿Cuál es el período temporal en el que se produce el crecimiento más pronunciado y sostenido de este indicador? Señalen las tres razones que

* Actividad diseñada por Francisca Pereyra.

esgrimen Cerrutti y Grimson en su texto (p. 286) para dar cuenta de este fenómeno.

- c) ¿En qué momentos puntuales se registran subas abruptas o picos de desempleo? Expliquen con qué acontecimientos político-económicos se relacionan.
- d) ¿Cuáles son las principales medidas en materia de política económica que explican el descenso del desempleo a partir del año 2003?

Gráfico 1. Evolución de la Tasa de Desempleo Abierta. Argentina. Total aglomerados relevados por la EPH 1974-2007



Nota: Los datos de 1974 al 2002 corresponden a las ondas de octubre de la EPH Puntual. A partir del año 2003, los datos corresponden a los dos primeros semestres de cada año relevados por la EPH Continua.

Fuente: Informe prensa INDEC.

- 2) Sobre la base del cuadro 1 y con la ayuda del texto de Bayón y Saravi (p. 250) señalen:
 - a) ¿Cuál es el motivo que explica la tendencia al incremento de la tasa de actividad en este período?
 - b) ¿Cuál es el perfil de los individuos que más aumentaron su participación según las variables presentadas?
 - c) ¿Por qué es esa población particular la que más incrementa su participación económica?

Cuadro 1. Evolución de la tasa de actividad según sexo, edad, posición en el hogar y nivel educativo. GBA, 1991-2000

Año	Sexo		Edad			Posición en hogar			Nivel educativo		
	Varón	Mujer	14-24	25-45	46-55	Jefe	Cónyuge	Hijo	HSI	SCTI	TUC
1991	54,9	27,9	47,3	73,5	55,7	72,2	33,9	24,2	33,1	67,1	83,5
1994	56,3	31,2	50,1	76,7	59,1	70,6	37,9	27,8	34,8	67,4	84,3
1997	56,4	34,4	49,1	79,0	64,4	72,3	41,8	30,3	40,2	70,5	83,8
2000	55,7	35,2	45,2	78,6	68,8	74,8	43,5	27,7	39,0	70,8	84,7

Nota: Categorías de la variable Nivel Educativo= HSI: hasta secundario incompleto; SCTI: secundario completo y/o terciario/universitario incompleto; TUC: terciario/universitario completo.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la EPH, ondas de octubre.

3) Sobre la base del cuadro 2 y con la ayuda del texto de Bayón y Saravi (p. 253) señalen:

- a) ¿Cuál es el perfil de los trabajadores que experimentan los mayores niveles de desempleo hacia el final del período?
- b) ¿Cuál es el perfil de los trabajadores que experimentaron el mayor incremento en sus niveles de desempleo a lo largo de estos años?
- c) Tomando en cuenta el incremento del desempleo en los grupos identificados, ¿cuáles son las consecuencias experimentadas al interior de los hogares?

Cuadro 2. Evolución de la tasa de desocupación según sexo, edad, posición en el hogar y nivel educativo. GBA, 1991-2000

Año	Sexo		Edad			Posición en hogar			Nivel educativo		
	Varón	Mujer	14-24	25-45	46-55	Jefe	Cónyuge	Hijo	HSI	SCTI	TUC
1991	4,9	5,8	11,2	4,1	3,0	2,8	3,7	10,6	5,6	5,1	3,8
1994	11,6	15,6	23,1	10,0	10,4	8,9	12,7	21,5	15,2	12,7	3,5
1997	12,4	17,2	24,3	11,7	11,8	10,3	13,5	21,2	16,5	14,0	5,9
2000	13,4	17,2	25,8	12,3	16,3	10,6	14,1	23,1	17,8	14,7	5,1

Nota: Categorías de la variable Nivel Educativo= HSI: hasta Secundario Incompleto; SCTI: Secundario Completo y/o Terciario/Universitario Incompleto; TUC: terciario/Universitario Completo.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, ondas de octubre.

4) Sobre la base del cuadro 3 y con la ayuda del texto de Bayón y Saravi, indiquen:

- a) ¿Qué rama de actividad decreció en forma más pronunciada durante el período (en términos de la proporción de población que emplea)? ¿Qué rama fue la que

más se expandió? ¿Cuál es, siguiendo a los autores, el saldo general en términos de la generación de empleo? (p. 252).

- b) ¿Qué factores ayudan a entender lo acontecido con la industria manufacturera? Explique en particular el impacto de la Ley de Convertibilidad y las medidas de política económica en materia de comercio exterior (p. 239).

Cuadro 3. Evolución de ocupados por rama de actividad, GBA, 1991-2000

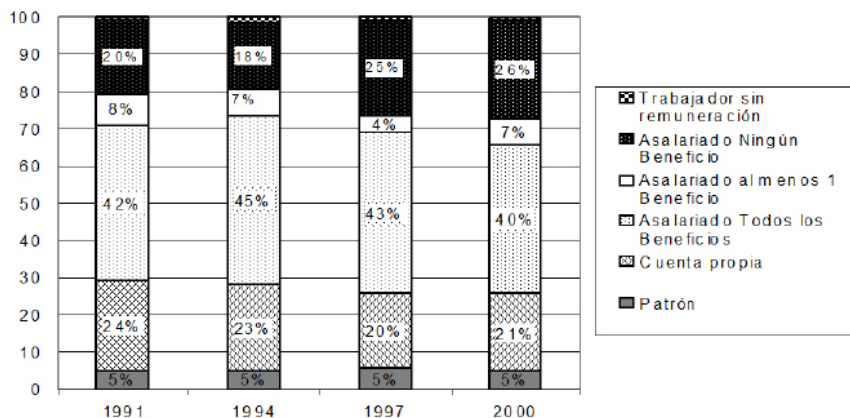
Rama/Año	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Ind. Manufacturera	24,2	23,7	21,9	21,0	20,3	19,1	18,8	17,9	16,8	16,3
Construcción	7,4	6,6	6,7	6,8	6,4	6,7	6,8	7,2	7,2	6,8
Comercio	20,0	21,1	22,4	20,5	18,9	19,7	18,5	18,7	18,4	19,8
Adm. Pública	4,7	4,4	4,6	4,6	4,9	5,8	5,3	5,5	5,2	5,4
Serv. Doméstico	7,2	7,2	7,8	7,4	7,5	7,3	7,7	7,2	7,6	7,5
Otros Servicios	15,6	16,6	15,9	16,4	16,8	16,3	17,8	18,8	18,4	18,2
Serv. a Empresas	9,3	8,8	8,6	9,6	11,2	11,3	11,6	11,9	12,2	12,1
Otras Ramas	11,6	11,6	12,1	13,7	14,0	13,8	13,5	12,8	14,2	13,9
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nota. Servicios a empresas incluye servicios financieros, inmobiliarios, de alquiler y empresariales.

Fuente: Bayón, C. y Saravi, G. (2009), *Vulnerabilidad social en la Argentina en los años 90'* (con base en INDEC, 2000, Información de Prensa, sobre datos octubre de la EPH).

- 5) Sobre la base del gráfico 2 y con la ayuda del texto de Bayón y Saravi, identifiquen:
- ¿Qué categoría ocupacional experimenta el mayor crecimiento relativo en el período? ¿Qué categoría ocupacional exhibe la mayor disminución relativa?
 - ¿Qué factores explican la tendencia observada respecto al trabajo por cuenta propia? (p. 255). ¿Cómo contrasta la evolución de este tipo de trabajo en los noventa respecto a décadas anteriores? (pp. 234-235).
 - ¿Con qué sector productivo está fundamentalmente asociada la evolución de la proporción de asalariados sin ningún beneficio? (p. 255).
 - ¿Qué medidas específicas adoptadas a través de la reforma laboral contribuyeron a la evolución observada del sector asalariado desprotegido? (p. 244).

Gráfico 2. Evolución de la población ocupada por categoría ocupacional. GBA, 1991-2000



Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la EPH, ondas de octubre.

ACTIVIDAD N° 6

Las transformaciones de la estructura social argentina: hacia un análisis multidimensional*

Presentación

Cuando analizamos la estructura social de un país lo que está en foco son las desigualdades sociales. Qué lugar ocupan los individuos y las familias en la jerarquía de posiciones sociales vigente en un momento determinado, a qué tipo y cantidad de recursos (materiales, culturales, simbólicos) tienen acceso, cómo se sitúan y participan en las relaciones de poder es lo que nos proponemos conocer al preguntarnos por la conformación de la estructura social y su evolución a lo largo del tiempo.

Aunque habitualmente el estudio de la estructura social se concentra en el examen de la estructura ocupacional de un país, el análisis de las desigualdades sociales abarca también otras dimensiones. En el artículo “La estructura social en perspectiva. Transformaciones sociales en Argentina, 1983-2013”, las sociólogas Carla del Cueto y Mariana Luzzi abordan algunas de ellas, las cuales se retoman en esta actividad.

Consigna de trabajo

A continuación encontrarán una serie de materiales de distinta índole (artículos académicos, mapas, cuadros con información estadística) que permiten analizar diferentes dimensiones de las transformaciones en la estructura social argentina. Todos ellos hacen hincapié en el período que se inicia tras la crisis de 2001.

Reunidos en grupos de no más de 5 estudiantes, seleccionen uno de los conjuntos de materiales (I, II y III) que aquí se proponen. Léanlos con detenimiento, observen cuidadosamente sus datos y luego respondan las correspondientes consignas.

I.

Lean atentamente el fragmento que sigue, tomado de un artículo académico publicado en 2014. Asimismo, miren con detenimiento los mapas disponibles en: <https://bit.ly/2u91AF6> y <https://bit.ly/2HlPMIq>. **Luego, respondan:**

- a) ¿Qué elementos de lo desarrollado en el fragmento pueden observarse en esos mapas?
- b) Redacten un breve párrafo con: ¿Cómo se relaciona la información que proveen tanto el artículo como los mapas con lo que señalan del Cueto y Luzzi en el texto

* Actividad diseñada por Mariana Luzzi.

incluido en la bibliografía: “Respecto de esto último, parece posible pensar que mientras algunas de las transformaciones operadas como consecuencia de las reformas neoliberales resultan relativamente reversibles –aunque no lo sean todos sus efectos– otras mutaciones han impactado de un modo más durable en la forma en que se configuran las relaciones sociales, dando lugar a fenómenos más persistentes. De modo que no se trata únicamente de procesos que, a través de políticas públicas, puedan revertirse, sino que a través del tiempo, los distintos grupos sociales modificaron sus lógicas, sus intereses y su conformación”.

Como se desprende de lo expuesto, las relaciones entre desigualdad y espacio urbano son complejas. En la actualidad, producto de la conjunción entre la persistencia de una política neoliberal que posibilita el uso desregulado del suelo urbano y los esfuerzos de los gobiernos de la región por implementar políticas de redistribución de la riqueza, nos encontramos ante un escenario paradójico en América Latina. Por un lado, estructuras metropolitanas fragmentadas, con circuitos urbanos, educativos y sociales segregados, que impactan en la reproducción de desigualdades sociales y urbanas. Por el otro lado, políticas públicas de redistribución que han reducido la desigualdad de ingresos en la mayoría de los países latinoamericanos durante la última década. En síntesis, de manera simultánea al proceso de reducción de desigualdad en el ingreso, no ha habido una modificación en los patrones de urbanización dominantes –persistiendo sus tendencias privatizadoras y proclives a la fragmentación social y urbana– como tampoco políticas que tengan en la gestión del suelo urbano una dimensión privilegiada en la lucha contra la desigualdad.

Tomemos el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)⁴ para ilustrar la paradoja y los efectos del desacople entre distribución del ingreso y patrones de urbanización.⁵ Los datos disponibles para la década de 2000 sobre la evolución de la distribución del ingreso, los patrones de desarrollo urbano y

⁴ La RMBA incluye las siguientes jurisdicciones: (1) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una población de 3.100.000 de habitantes; (2) Gran Buenos Aires (1ª y 2ª corona del conurbano), conformada por 25 partidos y una población que ronda los 9.000.000 de habitantes; y (3) el resto de la RMBA o “3ª corona”, compuesta por 15 partidos y una población que ronda los 3.700.000 habitantes, lo que hace que en conjunto la RMBA tenga una población de alrededor de 14.000.000 de habitantes (Ciccolella, 2011: 130).

⁵ No estamos sosteniendo que el proceso se manifieste de modo idéntico en todas las grandes ciudades latinoamericanas. Decimos, en cambio, que lo que sucedió en Buenos Aires en el lustro que siguió a la finalización de la crisis de 2001/2002 ilustra las contradictorias líneas de fuerza relativas a la distribución del ingreso, el patrón de urbanización y la segregación urbana que se pueden observar en otras ciudades y que modelan las desigualdades sociales. Por supuesto, estos procesos adquieren en cada lugar modulaciones específicas, vinculadas con la historia y forma urbana particulares de cada ciudad, las políticas públicas (entre ellas, las políticas urbanas) y los ciclos económicos.

la segregación residencial muestran una articulación compleja y contradictoria, que alerta contra las lecturas lineales, reduccionistas y unidimensionales acerca de la desigualdad. [...]

Respecto del patrón de urbanización, Pablo Ciccolella y Luis Baer (2011) mostraron recientemente que con posterioridad a la salida de la crisis se reinstaló una dinámica de autosegregación de las clases altas similar a la establecida en los años noventa y se produjo la expansión de asentamientos precarios. De esta manera, más allá de las significativas diferencias en la orientación económica general que se observa en la evolución de los indicadores de desocupación, pobreza y desigualdad en las últimas dos décadas [...], los autores verifican una continuidad en el patrón de urbanización, legible en la expansión del mercado inmobiliario para sectores medios y altos y la persistencia de las inversiones en autopistas, centros comerciales y barrios cerrados, aunque con una disminución en su ritmo.

La expansión de este patrón de urbanización fue vertiginosa. Mientras las urbanizaciones cerradas eran un fenómeno marginal en la RMBA a inicios de la década de 1990 ocupando 34 km², para el año 2000 existían alrededor de 400 urbanizaciones cerradas que cubrían un área de 305 km². De esta manera, posibilitado por la nueva red de autopistas urbanas, en diez años se consolidó, sin el menor debate público y sin un plan a escala metropolitana, un tipo de urbanización 1,7 veces más extendida que la ciudad de Buenos Aires (180 km²) para no más de 10.0000 habitantes permanentes en ese momento (Thuillier, 2005). El cambio de orientación económica con posterioridad a la crisis de 2001-2002 no supuso, sin embargo, el estancamiento o reversión de este proceso. La continuidad de este patrón en la RMBA se evidencia en que para 2008 el número de urbanizaciones cerradas ascendía a 540, ocupando 400 km² (el doble que la CABA), lo que significa que un 25% de la superficie total urbanizada en la RMBA estaba ocupada por no más de 400.000 habitantes (Fernández Wagner, 2008).

Por último, este desacople (que nos recuerda la no necesaria ni mecánica correspondencia entre espacio y sociedad) entre la sensible mejora en los indicadores socioeconómicos y la profundización del patrón urbano preexistente se verifica en la evolución de las formas de segregación residencial. En un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la segregación residencial en las áreas urbanas de la Argentina se señala que, de manera simultánea a la recuperación de la economía y a la continuidad del patrón de urbanización basado en la suburbanización de las élites, para el período 2001-2006 se verifica un crecimiento tanto del número como de la proporción de la población urbana que vive en villas miseria y asentamientos en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense (PNUD,

2009). Mientras en la ciudad de Buenos Aires la población residente en estos espacios pasó de representar el 3,9% de la población en 2001 al 4,3% en 2006, en el conurbano bonaerense esa cifra se elevó del 6,9% de la población en 2001 a 10,1% de la población en 2006, lo que en cifras absolutas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (ciudad de Buenos Aires y Conurbano bonaerense) representa pasar de 700.000 habitantes a más de 1.000.000 viviendo en villas y asentamientos (Cravino, Duarte y Del Río 2008).

Fuente: Segura, Ramiro. "El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales Desacoples entre distribución del ingreso y patrones de urbanización en ciudades latinoamericanas". *desiguALdades.net*, Working Paper Series n° 65, 2014, pp 19-22. http://www.desigualdades.net/Resources/Working_Paper/65-WP-Segura-Online.pdf

II.

El siguiente cuadro fue extraído de un artículo académico publicado en 2012 en la Revista de Trabajo, editada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Mírenlo atentamente y lean la interpretación de esa información que proveen los autores del texto citado.

- a) Identifiquen en el cuadro la evolución de las tres grandes clases (y sus principales subclases) entre 2003 y 2011: ¿Qué grupos crecen y cuáles disminuyen? ¿Qué sectores se mantienen estables?
- b) Considerando la información que brinda ese cuadro (y su interpretación), así como también el texto de del Cueto y Luzzi incluido en este volumen, ¿cuáles son las tendencias de los procesos de movilidad social en el período 2003-2011? ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de esos procesos?

Cuadro 4

Distribución porcentual de la población ocupada según grupos ocupacionales y posiciones de clase en la Argentina urbana en 2003 y 2011

Posición de clase y grupos socio-ocupacionales	2003	2011
Clase Alta		
Empresarios grandes y medianos (+ de 40 empleados)	0,3	0,3
Directivos y gerentes de nivel alto	0,6	0,5
Subtotal clase alta	0,9	0,8
Clases Medias		
- Superior	10,1	10,3
Profesionales autónomos	1,8	1,7
Empresarios pequeños (de 6 a 40 empleados)	0,9	1,1
Directivos de nivel medio y jefes de oficina	3,2	2,5
Profesionales asalariados	4,1	5,0
- Inferior	32,9	36,1
Micro-empresarios (1 a 5 empleados)	2,7	3,3
Cuenta propia con equipo propio	11,0	9,6
Técnicos, docentes y trabajadores de la salud	11,6	12,9
Empleados administrativos de rutina	7,7	10,3
Subtotal clases medias	43,0	46,4
Clases Populares		
- Obreros calificados	20,1	24,8
Obreros calificados de la industria manufacturera	5,1	6,7
Obreros calificados de los servicios asociados a la industria	4,9	6,3
Trabajadores del comercio y los servicios personales calificados	7,8	8,1
Obreros calificados de la construcción	2,3	3,8
-Trabajadores manuales cuenta propia con oficio	6,5	5,9
- Obreros no calificados	13,6	13,5
Obreros no calificados de la industria	1,1	0,6
Obreros no calificados de los servicios asociados a la industria	2,0	1,1
Obreros no calificados de la construcción	1,6	1,8
Trabajadores del comercio y los servicios personales no calificados	8,9	10,0
- Trabajadores manuales no calificados	15,9	8,6
Servicio doméstico	6,7	6,6
Vend. ambulantes y otros trabaj. cuenta propia no calificados	2,3	1,2
Perceptores de un Plan Social	6,9	0,7
Subtotal Clases populares	56,1	52,8
Total	100,0	100,0
-PEA ocupada	13014105	15732529

Fuente: EPH tercer y cuarto trimestre de 2003 y tercer y cuarto trimestre de 2011.

Varios estudios que analizan cambios en el mediano o largo plazo en el régimen de movilidad social intergeneracional muestran una disminución progresiva del nivel de apertura de la estructura social. Utilizando datos del área metropolitana de Buenos Aires, comparando con la investigación de Germani (1963) sobre movilidad social en el Gran Buenos Aires, estos estudios muestran que la movilidad ascendente de larga distancia desde las clases populares hacia la clase media de mayor estatus (profesionales, cuadros directivos y gerenciales y propietarios de capital de nivel medio) fue disminuyendo en las últimas décadas del siglo xx (Jorrat, 2000; Benza, 2010; Dalle, 2010). En un trabajo previo hemos planteado que los altos niveles de desocupación y el fuerte deterioro del salario real y de las condiciones laborales de amplias fracciones de las clases populares durante la reconversión neoliberal de la década de 1990, impactaron negativamente sobre sus posibilidades de enviar a sus hijos a las clases medias y, en gran medida tampoco garantizaron la reproducción en una posición integrada de clase obrera, con un trabajo estable y acceso a derechos sociales (Dalle, 2010).

Apoyados en el análisis de las tendencias socio-ocupacionales del período 2003-2011, intuimos que la estructura de clases no está segmentada sino que existen oportunidades de movilidad ascendente de tramos cortos, desde el estrato informal de la clase trabajadora al estrato formal y de esta al estrato técnico administrativo de las clases medias; en otros términos, se trataría de una movilidad escalonada. En primer lugar, debido a la expansión económica que se inicia en 2003 se reinsertan laboralmente obreros calificados que habían quedado desocupados durante la década de 1990. Segundo, por la incorporación al empleo formal en el sector industrial y de servicios de nuevas generaciones, muchos de ellos hijos de trabajadores que habían sido desplazados forzosamente hacia actividades del sector informal a partir del desarrollo de actividades por cuenta propia o el empleo asalariado de tipo precario.

Un punto a tener en cuenta es que la movilidad desde ocupaciones manuales a la jerarquía más baja de empleados no manuales e incluso algunas de tipo técnico no tiene el mismo significado que en las décadas de 1950-1960 porque disminuyó su nivel de retribución salarial; incluso son superadas por las capas más calificadas de la clase obrera. Sin embargo, desde la clase trabajadora calificada, especialmente entre las hijas de obreros, aumentó una movilidad ascendente de corta distancia hacia ocupaciones técnicas tales como maestras, enfermeras, profesoras secundarias y administrativas, que implican mejoras en términos de prestigio social y, en ocasiones, de estatus socio-económico (Dalle, 2011).

Fuente: Dalle, P. y Palomino, H. *Revista de Trabajo*, año 8, n° 10, julio-diciembre 2012, p. 218.

III.

Lean con atención los fragmentos que se transcriben a continuación, tomados de la introducción a un libro de investigaciones sobre la vida política en los barrios populares del Gran Buenos Aires.

- a) Identifiquen qué procesos sociales, vinculados con la configuración del espacio urbano y las fronteras geográficas y sociales dentro de él, señala el autor para el período neoliberal (1976-2001) y para la década de 2000.
- b) ¿Qué aspectos de los procesos descritos remiten a lo que en el artículo de del Cueto y Luzzi se denomina “territorialización de los sectores populares”? ¿Pueden encontrar en el texto citado a continuación argumentos y/o ejemplos que permitan comprender mejor esa idea?

El neoliberalismo es una fábrica de fronteras, fronteras de dimensión y calidad muy diversa. Por una parte, las casas se separan crecientemente de la calle acompañando el crecimiento de la inseguridad y de nuevos miedos urbanos (Reguillo, 2005). Crecen las rejas, los sistemas de alarma, las custodias en los edificios. En Buenos Aires no se percibe un desdibujamiento de las fronteras entre lo público y lo privado. Por el contrario, hay una distancia cada vez mayor que lleva a que casi el único acceso a la información pública se genere en el espacio privado del hogar y se disuelvan muchos otros espacios públicos durante los '90.

A su vez esto guarda estrecha relación con el hiperdesempleo entre fines de los años '90 y principios de este siglo. Durante la mayor parte del siglo xx la Argentina se distinguió de otros países periféricos por sus amplias capas medias y por una desigualdad social menor a la región. Es sabido que en 1976 se fue desarmando el aparato productivo del país y cómo, en términos económicos y sociales, la sociedad se fue polarizando de manera creciente. Ese proceso, que ya había sido analizado hacia fines de los años 1980 pegó un salto cualitativo durante la década de 1990. [...] En una ciudad donde la gente cruza fronteras por razones laborales y donde más del 40% de la población tenía serios problemas de empleo (sumando desempleo abierto y subempleo), las fronteras se cruzaban cada vez menos. Se desdibujó el tránsito laboral y, ya en el círculo vicioso de la crisis, empeoró el transporte público. Estos diversos elementos configuraron un nuevo panorama urbano. Un panorama dominado por una desigualdad homóloga a la agudización de la segregación espacial. [...]

El salto en el desempleo en una ciudad con amplios barrios de trabajadores produjo un incremento notable de la segregación residencial y la aparición de barrios de desempleados. Esto no sólo produjo efectos en la generación de ingresos

familiares y nuevas significaciones acerca de la relación entre trabajo y delito (Kessler, 2004), sino también la emergencia de organizaciones de desocupados. [...]

El crecimiento económico de la Argentina con tasas elevadas desde 2003 implicó la creación de puestos de trabajo y la reducción significativa de la desocupación. [...] Aumento del empleo, reducción de la pobreza y sedimentación de la desigualdad implican una nueva tendencia a la multiplicación de los cruces instrumentales de las fronteras urbanas, dinámica que colisiona con un deterioro estructural del transporte público urbano. Si en el círculo vicioso de la crisis los ómnibus que llegaban a los barrios obreros, ahora de desocupados, tenían cada vez menos pasajeros y las empresas reducían sus servicios o simplemente desaparecían, cuando se retoma una fase de crecimiento esas empresas no resurgen con inversiones de un día para otro, así como los caminos y las rutas periféricas se encuentran profundamente deteriorados.

Fuente: Grimson, Alejandro (2009). "Introducción: clasificaciones espaciales y territorialización de la política en Buenos Aires". En Grimson, Alejandro; Ferraudi Curto, Cecilia y Segura, Ramiro (comps.), *La vida política en los barrios populares de Buenos Aires*, pp. 21-24, 31 (fragmentos). Buenos Aires: Prometeo.

ACTIVIDAD N° 7

Los cambios en la estructura social argentina en el período 2003-2010*

Presentación

Una de las formas de analizar los cambios socioeconómicos ocurridos en la sociedad argentina en las últimas décadas es a partir del estudio de la estructura social. Si bien el concepto de estructura social y su análisis han sido profundamente debatidos en las ciencias sociales, en líneas generales refiere a la determinación de los grupos, clases o estratos sociales y las relaciones que se establecen entre ellos, las cuales pueden ser de dominación, explotación, jerarquización, etcétera.

Las actividades presentadas a continuación se basan en el texto “La estructura de clases argentina durante la década 2003-2013” de Gabriela Benza¹ (2016) y su desarrollo tiene tres objetivos. En primer término, realizar una primera aproximación al análisis de la estructura social a partir de las relaciones económicas y concretamente, a la inserción ocupacional de la población. En segundo, permitir la comparación con otras formas de definir los sectores o grupos que componen la estructura social y las relaciones que se establecen entre sí. Para este segundo objetivo, será útil trabajar en simultáneo con el texto “La estructura social en perspectiva. Transformaciones sociales en Argentina, 1983-2013”, de Carla del Cueto y Mariana Luzzi, incluido en este volumen. Finalmente, dimensionar la composición de los diferentes grupos sociales y su evolución en el período 2003-2013.

Consigna de trabajo

Reunidos en grupos de no más de cuatro estudiantes, lean atentamente el fragmento que sigue, así como también la Figura 1 que lo acompaña, en los que G. Benza –siguiendo criterios clásicos compartidos en general por las ciencias sociales– presenta el modo en que en su estudio reconstruye la estructura de clases de la Argentina.

Luego de leer lo expuesto por la autora, respondan las siguientes consignas:

- 1) ¿Cómo define la autora a las diferentes clases sociales? ¿Cuáles son los indicadores en que se basa para definirlos? Considerando otros análisis ya trabajados (como el texto de del Cueto y Luzzi incluido en esta compilación), ¿qué otras dimensiones de análisis permiten aproximarse a la diferenciación de las clases o grupos sociales de la estructura social?
- 2) Siguiendo esquema propuesto por G. Benza, identifiquen y discutan a qué clase corresponderían los hogares cuyo principal proveedor de ingresos realiza las siguientes ocupaciones:
 - a) Dueño de fábrica textil de 50 empleados

* Actividad diseñada por Adriana Chazarreta.

¹ Benza, Gabriela (2016). “La estructura de clases argentina durante la década 2003-2013”. En Kessler, Gabriel (ed.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*. Buenos Aires: Siglo XXI -Fundación OSDE.

- b)** Operario que cose las prendas en máquina en una fábrica textil de 50 empleados
- c)** Operario que realiza el mantenimiento y arreglo de las máquinas de coser de la fábrica textil de 50 empleados
- d)** Abogado asalariado encargado del departamento de legales en la fábrica textil de 50 empleados
- e)** Médico que tiene su consultorio particular y atiende pacientes privados
- f)** Gerente general de empresa del sector petrolero con 100 empleados

Las controversias acerca de cómo definir las clases se traducen en disputas sobre su número y sus límites. Aquí retomamos la división tripartita (clases altas, medias y populares) de los trabajos clásicos sobre la estructura social argentina. Agrupamos las ocupaciones en una u otra clase en función del carácter manual o no manual de las tareas y del tipo y la cantidad de recursos que se ponen en juego en el mercado laboral (la propiedad del capital, la aplicación de calificaciones escasas o el ejercicio de la autoridad delegada). Debido a la gran heterogeneidad de las clases que quedan así definidas (en particular en el caso de las clases medias y populares), en su interior identificamos diferentes grupos. En la figura 1 resumimos el esquema clasificatorio que adoptamos. Es necesario mencionar que algunos de los criterios de demarcación que retomamos han sido y son altamente cuestionados (como la diferenciación entre manual y no manual). Sin embargo, nuestra intención al utilizarlos ha sido establecer cierta comparabilidad con los hallazgos de los trabajos clásicos.

[...]

Seleccionamos los hogares como unidad de análisis, por su centralidad para el estudio del bienestar material, y tomamos la clase del principal proveedor como indicador de la posición de clase de todo el hogar.

Fuente: Benza, Gabriela (2016). "La estructura de clases argentina durante la década 2003-2013". En Kessler, Gabriel, *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 112-114.

Figura 1: Clasificación de ocupaciones en clases (pág. 113)

Clases altas

Dueños y directivos de empresas grandes y medianas (seis empleados o más) y funcionarios públicos de alto rango

Clases medias

- Dueños de pequeñas empresas (hasta cinco empleados)
- Profesionales, técnicos y jefes
 - Profesionales y jefes superiores (profesionales asalariados y por cuenta propia; jefes superiores)
 - Técnicos y afines y jefes intermedios (técnicos asalariados y por cuenta propia, docentes de nivel inferior al universitario, enfermeros de calificación técnica, etc.; jefes intermedios)
- Trabajadores no manuales de rutina
 - Trabajadores administrativos y afines (oficinistas, empleados administrativos, secretarias, encuestadores, asistentes de redacción o de prensa, etc.)
 - Trabajadores de comercio (vendedores de la comercialización directa, indirecta, viajantes)

Sectores populares

- Trabajadores manuales calificados
 - Asalariados calificados (obreros calificados en la manufactura, oficiales de la construcción, electricistas y herreros, peluqueros, etc., en relación de dependencia; y otros. Incluye también supervisores de trabajadores manuales, como el capataz de una fábrica, etc.)
 - Trabajadores por cuenta propia con oficio (Electricistas, herreros, peluqueros, artesanos, etc.; choferes, taxistas; y otros, que desarrollan su actividad por cuenta propia)
- Trabajadores manuales no calificados y marginales
 - Asalariados no calificados (obreros no calificados en la manufactura y en la construcción, recolectores de basura, vigilantes, etc. en relación de dependencia; y otros)
 - Trabajadores marginales (trabajadores del servicio doméstico y de la limpieza, peones, vendedores ambulantes, cartoneros, etc.)
 - Beneficiarios de planes sociales (que realizan una contra-prestación laboral)

ACTIVIDAD N° 8

Los cambios en la estructura social argentina en el período 2003-2010: distintas formas de medir la desigualdad

Presentación

En un estudio reciente sobre la estructura social en la Argentina entre 2003 y 2013,² la socióloga Gabriela Benza analiza comparativamente la situación de las diferentes clases sociales respecto de tres indicadores claves: sus ingresos promedio (considerando para ello los ingresos per cápita familiares), la desigualdad entre los ingresos de quienes ganan más y menos dentro de cada clase (medida a través del índice de Gini) y el porcentaje de hogares pobres en cada grupo.

Esas tres mediciones son fundamentales no solo para caracterizar a cada una de las clases (y las fracciones que las componen), sino sobre todo para evaluar las desigualdades existentes entre ellas y su evolución a lo largo del tiempo.

Consigna de trabajo

Reunidos en grupos de no más de cuatro estudiantes, observen atentamente el cuadro y los gráficos que siguen, en los que se presentan los datos de ese estudio. Al final de la actividad van a encontrar una serie de definiciones importantes para comprender la información contenida en esos materiales.

A continuación, respondan a las siguientes consignas:

- a) Señalen cómo evolucionó la pobreza, el promedio del ingreso per cápita familiar y la distribución del ingreso en el total y en cada una de las clases sociales de los aglomerados urbanos de la Argentina entre 2003 y 2010.
- b) Identifiquen qué sucedió con estos mismos indicadores al interior de las clases medias y de los sectores populares.
- c) Pensando en el período bajo análisis (2003-2010), ¿qué relaciones pueden establecerse entre las tendencias analizadas en las preguntas a y b y los cambios producidos en esos años en las políticas económicas, laborales y sociales (analizados en otros textos incluidos en este volumen)?

* Actividad diseñada por Adriana Chazarreta.

¹ Benza, Gabriela (2016). "La estructura de clases argentina durante la década 2003-2013". En Kessler, Gabriel (ed.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*. Buenos Aires: Siglo XXI-Fundación OSDE.

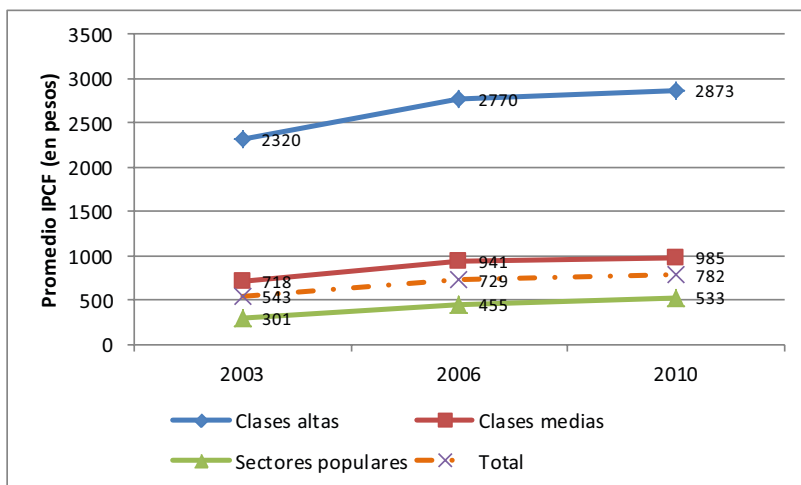
Cuadro 1. Hogares de clases altas, medias y populares según promedio de ingreso per cápita familiar, índice de Gini del ingreso per cápita familiar y pobreza. Argentina (grandes áreas urbanas), 2003, 2006 y 2010

	Promedio IPCF			Gini IPCF			% hogares pobres		
	2003	2006	2010	2003	2006	2010	2003	2006	2010
Clases altas	2320	2770	2873	0,678	0,572	0,465	8,8	1,4	2,8
Clases medias	718	941	985	0,450	0,419	0,394	19,9	5,9	7,2
<i>Pequeñas empresas</i>	904	1053	1058	0,497	0,436	0,421	20,9	6,1	8,4
<i>Profesionales, técnicos y jefes</i>	868	1142	1169	0,426	0,401	0,374	12,0	2,6	4,0
· Profesionales y jefes superiores	1185	1565	1491	0,424	0,361	0,337	5,5	1,2	1,5
· Técnicos y jefes intermedios	741	957	1025	0,405	0,392	0,375	14,6	3,3	5,2
Trab. no man. de rutina	496	724	755	0,415	0,399	0,378	29,5	9,1	10,6
· Trab. administ. y afines	576	866	880	0,399	0,350	0,356	19,0	3,7	5,4
· Trabajador de comercio	437	593	613	0,427	0,426	0,381	37,2	14,2	16,6
Sectores populares	301	455	533	0,444	0,439	0,399	56,8	23,2	23,5
<i>Trab. manuales calificados</i>	342	518	588	0,409	0,432	0,392	48,9	17,0	18,8
· Asalariados calificados	349	502	611	0,398	0,392	0,385	47,8	14,0	16,1
· Trab. por cuenta propia con oficio	328	561	518	0,430	0,526	0,408	51,2	25,1	27,3
<i>Trab. manuales no calificados y marg.</i>	260	359	441	0,471	0,429	0,396	65,0	32,6	31,3
· Asalariados no calificados	331	413	474	0,420	0,401	0,366	52,6	23,0	22,3
· Trab. marginales	259	311	387	0,468	0,435	0,451	63,8	41,0	41,7
· Beneficiarios de planes sociales	106	*	*	0,355	*	*	94,0	*	*
Total	543	729	782	0,530	0,487	0,437	39,2	14,7	15,2

* No se presenta debido a que el número de casos es muy reducido.
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares, cuarto trimestre.

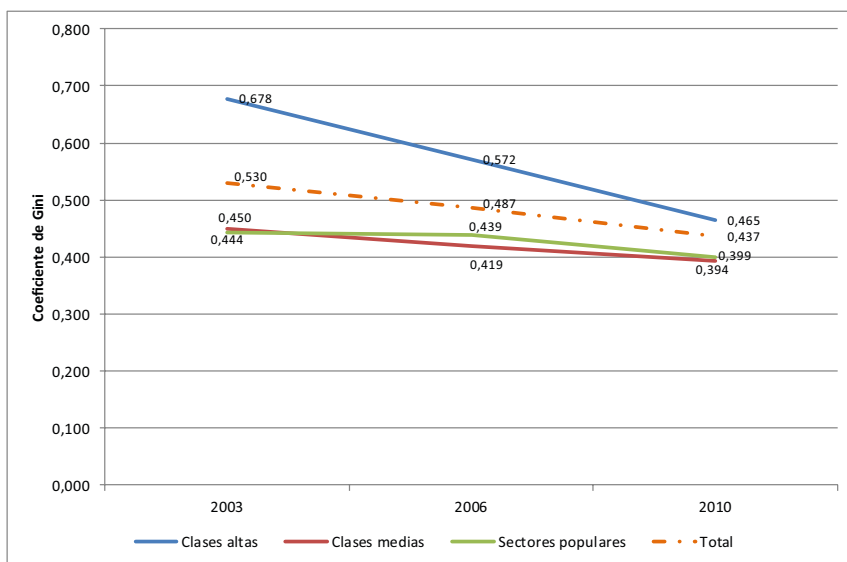
Fuente: Benza, Gabriela (2016). "La estructura de clases argentina durante la década 2003-2013". En Kessler, Gabriel (ed.), *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*, p. 128. Buenos Aires: Siglo XXI, Fundación OSDE.

Gráfico 1. Evolución del Promedio del IPCF de los hogares según clase social (2003, 2006 y 2010)



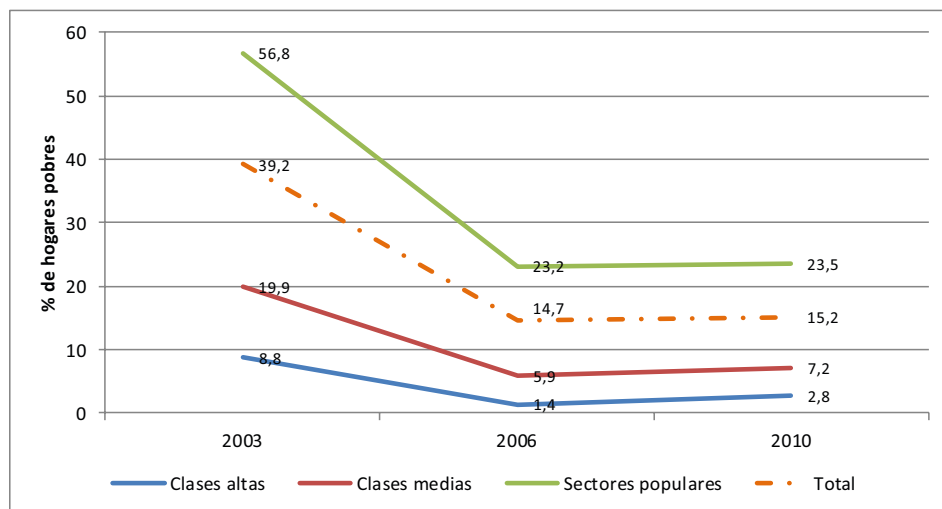
Fuente: elaboración de Adriana Chazarreta sobre la base de datos procesados por Benza (2016:128).

Gráfico 2. Evolución del Coeficiente de Gini de los hogares según clase social (2003, 2006 y 2010)



Fuente: elaboración de Adriana Chazarreta sobre la base de datos procesados por Benza (2016: 128).

Gráfico 3. Evolución del Porcentaje de hogares pobres según clase social (2003, 2006 y 2010).



Fuente: elaboración de Adriana Chazarreta sobre la base de datos procesados por Benza (2016: 128).

Para realizar esta actividad tengan en cuenta las siguientes definiciones:

Aglomerado urbano

Según el INDEC corresponde a una localidad que concentra espacialmente edificios conectados entre sí por calles. El alcance de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), cuyos datos analiza este estudio, es de 31 aglomerados urbanos cubriendo a todas las capitales de provincia y ciudades de más de 100 mil habitantes de Argentina.

Hogar

Es un grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Las personas que viven solas constituyen cada una un hogar (INDEC).

Ingreso per cápita familiar (IPCF)

Es la sumatoria de ingresos laborales y no laborales de todos los componentes del hogar dividido el número de miembros del hogar.

Hogar pobre

Uno de los métodos que utiliza el INDEC para definir a un hogar como pobre es el de la "línea de pobreza". Este básicamente consiste en establecer, a partir de los ingresos de todos los miembros del hogar, si dicho monto permite satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales, las cuales componen la llamada "Canasta Básica Total".

Índice de Gini

Este coeficiente permite medir qué tan desigualmente se reparten los ingresos en una sociedad o grupo determinado y varía entre 0 y 1, correspondiendo el 0 a la perfecta igualdad (todas las personas u hogares tiene los mismos ingresos) y el 1 a la perfecta desigualdad (una persona u hogar tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

ACTIVIDAD N° 9

Los sectores populares en la Argentina contemporánea: territorialización, estatalización, sindicalización

Presentación

La imagen que figura a continuación forma parte de la historieta *Noelia en el país de los Cosos*, del dibujante argentino Ignacio Minaverry, publicada originalmente en el suplemento de Historietas Nacionales de Télam y en la revista *Fierro* y luego editada en un volumen de La Maroma Ediciones (2017).



En ella, un personaje narra la historia de su barrio (ubicado en un territorio ficcional) a través de un conjunto de episodios, cada uno representado en dos viñetas sucesivas. Para hacerlo, recurre a la referencia visual (por medio del dibujo y no de citas textuales) a otra historia, que asume conocida por muchos lectores: la del cuento clásico “Los tres chanchitos”.

En este caso, este fragmento de la historieta nos servirá como apoyo para pensar y discutir algunos de los argumentos centrales del artículo de Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto publicado en este libro, “Las camadas geológicas de los sectores populares: estructuras, experiencias, conflictos”.

Consigna de trabajo

1) Antes de empezar...

En el artículo “Las camadas geológicas de los sectores populares: estructuras, experiencias, conflictos”, Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto especifican el modo en que en este texto definirán a los sectores populares. Al hacerlo, por un lado, se posicionan respecto de *otras* definiciones posibles, que no retoman. Por otro, *operacionalizan* su propia definición; es decir, nos indican cómo eligen traducir, en términos prácticos, su definición teórica y a partir de qué material empírico lo hacen.

Teniendo en cuenta esta introducción, lean atentamente el párrafo de la p. 270, que se transcribe a continuación e identifiquen en él:

- a) La definición conceptual de “sectores populares” que los autores del artículo retoman.
- b) Lo que la definición empírica que ellos proponen busca captar.
- c) Las fuentes de información o datos que permiten *captarlo*

El término ‘sectores populares’ puede aludir a las clases bajas o a la entidad metafísica que representa, destilado, el espíritu de la nación. También es utilizado analítica y políticamente para referir a un sujeto económicamente oprimido más amplio y complejo que el que propone el marxismo cuando distingue las clases por la posesión o no de los medios de producción (incluso desde versiones heterodoxas del propio marxismo). Esta última connotación puede extenderse al referir a **los sectores populares como sectores subalternos, aludiendo a un conjunto heterogéneo de grupos en una posición subordinada que surge de una combinación de criterios políticos y económicos**. En este artículo, nos referiremos a los sectores populares en términos que operacionalizan esa definición combinando análisis sociodemográficos con estudios de caso de tipo histórico y etnográfico, para así captar la forma en que los grupos subalternos interiorizan los datos de su posición estructural en estrategias con las cuales actúan sobre los avatares de su situación.

- 2) Ahora, sí: reunidos en grupos, miren atentamente las tres viñetas. Identifiquen, a partir de lo que ven, de qué tipo de barrio se trata, dónde podría estar ubicado y cuál es la historia del barrio que narra la historieta. A continuación, discutan entre ustedes: ¿a qué actor social les parece que está representando en la historieta la figura del lobo?
- 3) Consideren ahora el desarrollo que hacen Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto sobre la situación de los sectores populares en la Argentina a lo largo de

las últimas décadas. En la segunda parte del artículo, y después de analizar las dimensiones que permiten caracterizar las condiciones de vida de los sectores populares (el empleo, los ingresos, la educación y la salud), los autores se concentran en las experiencias de movilización social y política mediante las cuales los grupos populares han intentado modificar aquellas condiciones. Esa segunda parte está consagrada entonces a describir esas experiencias en torno de tres grandes procesos: *territorialización, estatalización y sindicalización*. Recortaremos aquí algunos elementos importantes para la definición de los dos primeros y de las relaciones entre ellos. **Léanlos atentamente y subrayen aquellos elementos que no comprenden, para luego discutirlos en grupo:**

Sobre la territorialización

Tal como sistematiza Merklen (2005), las investigaciones [sobre los sectores populares] daban cuenta de un movimiento de largo plazo que implicaba la territorialización de la politicidad de las clases populares, vinculada al proceso de desafiliación del mundo del trabajo en el marco de una reconfiguración del régimen de acumulación capitalista. Las tradiciones sindicales y políticas eran reapropiadas a partir de redes locales de movilización colectiva y gestión de recursos estatales orientados a la “pobreza”. En la década del noventa este proceso se combinó con la reformulación de las políticas públicas asistenciales hacia modalidades descentralizadas y focalizadas territorialmente luego de la reforma estatal (p. 282).

Sobre la estatalización

Los años noventa se habían caracterizado por la descentralización y focalización de las políticas públicas orientadas a la “pobreza” mientras se “flexibilizaban” las leyes laborales en un contexto de retracción del empleo y debilitamiento de los sindicatos. Los acontecimientos de diciembre de 2001 marcaron un quiebre en la situación: la intensificación de movilizaciones colectivas cuestionaron el papel del Estado e impulsaron una ampliación del alcance de las políticas públicas asistenciales, lo que reconfiguró diversos tejidos organizacionales territoriales. Posteriormente, en el marco de la reactivación económica, las políticas públicas orientadas al bienestar mostraron dos variantes diferenciadas: por un lado, se buscó fortalecer y ampliar el sector de trabajadores formales (algo que mencionamos y describimos antes) y, por otro, se procuró centralizar la política pública asistencial mientras se multiplicaron y diversificaron los programas orientados a los sectores “vulnerables” (p. 286).

Sobre la relación entre territorialización y estatalización

En este proceso comprobado por diversos estudios de caso, la estatalización y la territorialización se entrelazaron de diversos modos. Las organizaciones crecieron

en relación con los planes del Estado pero, a la vez, los planes [sociales] se desplegaron territorialmente a partir de un proceso social de elaboración de la desocupación como problema público. Es decir, la demanda de subsidios [de empleo, como el Plan Trabajar] fue producida a través del trabajo de referentes territoriales que vincularon a los pobladores con las agencias estatales: censaron a sus vecinos para demostrar la desocupación a los funcionarios y fundamentar su reclamo, recorrieron las casas para completar los listados de potenciales beneficiarios, presentaron la documentación requerida y organizaron cortes de ruta y otras movilizaciones colectivas para obtener una respuesta estatal (Manzano, 2013).

[...]

Finalmente, la continuidad de la territorialización de la política popular a lo largo de las últimas décadas ha mostrado variaciones significativas. En general, el tejido organizacional local se densificó, a veces diversificándose y a veces de manera concentrada, en relación con los cambios en los vínculos con diferentes agencias estatales. Además, las políticas públicas asistenciales se multiplicaron después de 2001: primero continuaron con los mecanismos descentralizados y focalizados de los años noventa y luego se recentralizaron, pero persistieron mecanismos focalizados de intervención (p. 286).

- 4) Volviendo ahora a la historieta, discutan y respondan en grupo: ¿es posible encontrar algún punto de contacto entre estos procesos analizados por los autores y la situación que se narra en las viñetas? Redacten un párrafo breve con el resultado de la discusión, en el que se retomen las definiciones analizadas en el punto anterior.

ACTIVIDAD N° 10

Discursos en democracia

Consigna de trabajo

Lean atentamente las citas que siguen. Todas son fragmentos de discursos de ex presidentes de la Nación Argentina del período 1983-2015. A continuación, intenten situar temporalmente esos extractos e identifiquen a quiénes los pronunciaron colocando a la derecha de cada cita el nombre de su autor. Subrayen o resalten en cada párrafo los elementos que les permitieron descubrir a los autores. ¿Con qué procesos sociales o políticas específicas se relacionan?

¡Atención! Tengan en cuenta que uno de los presidentes se repite.

Ayuda memoria: períodos presidenciales

1983-1989	Raúl Alfonsín	2002-2003	Eduardo Duhalde
1989-1995	Carlos S. Menem	2003-2007	Néstor Kirchner
1995-1999	Carlos S. Menem	2007-2011	Cristina Fernández de Kirchner
1999-2001	Fernando de la Rúa		

Cita	PRESIDENTE
1 <i>"El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina [...]. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio y de un país con futuro [...]. Festejemos, porque este año se va, y viene uno nuevo, viene un año mejor. Se viene un momento de cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible, ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos, ¡Qué lindo es dar buenas noticias!"</i>	
2 <i>"Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina".</i>	
3 <i>"Yo no quiero terminar este mensaje a esta Asamblea Legislativa sin pedir una vez más, por un tema que es central y que también ha sido uno de los pilares de este Gobierno en materia de política de Derechos Humanos y que tiene que ver precisamente con lograr por parte de la Justicia eso, que se haga justicia y que finalmente los juicios que se vienen desarrollando contra quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura, precisamente sean juzgados. Ha habido avances, ha habido condenas emblemáticas, pero no podemos dejar de decirlo aquí en este recinto, frente a lo que constituye la representación del poder popular en la Argentina, que demandamos a esa Justicia, a la cual este mismo Parlamento le ha dado los instrumentos para la agilización de esas causas, 5 leyes sancionó este Parlamento el año pasado, fue el Parlamento también que decretó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que luego apuntalaron también la declaración de inconstitucionalidad. El Poder Ejecutivo también ha dado recursos a la Justicia, los dos poderes del Estado hemos hecho mucho por lograr esto. Es hora entonces que la Justicia de respuestas porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo, es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo".</i>	

<p>4</p> <p><i>"No es momento, creo, de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos. Hoy, la producción y el comercio están, como ustedes saben, parados; la cadena de pagos está rota y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía.</i></p> <p><i>Hay, por tanto, que sincerar esta situación, hay que explicar seriamente a nuestro pueblo dónde hemos caído y qué debemos hacer para levantarnos.</i></p> <p><i>Honorable Asamblea: venimos con toda la fe, con toda la confianza, con todo el amor de que somos capaces a poner de pie y en paz a la Argentina".</i></p>	
<p>5</p> <p><i>"Yo no prometo milagros de la noche a la mañana. No prometo salidas mágicas. No soy un superhombre, no soy un mentiroso, no soy un hipócrita ni un demagogo. Yo, en cambio, sí prometo que el derecho social número uno de todos los argentinos será el derecho al trabajo. Este es el sentido más profundo y vital de lo que nosotros hemos dado en llamar la Revolución Productiva, que hoy se ha transformado en un auténtico clamor en todo el país. Gobernar es dar trabajo, y dar trabajo es, lisa y llanamente, la Revolución Productiva".</i></p>	
<p>6</p> <p><i>"Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad para todos los que habitan este suelo. Tenemos un método: la democracia para la Argentina. Tenemos un combate: vencer a quienes desde adentro o desde afuera quieren impedir esa democracia. Tenemos una tarea: gobernar para todos los argentinos sacando al país de la crisis que nos agobia".</i></p>	
<p>7</p> <p><i>"Los resultados de las recetas que criticamos son los que se vieron reflejados en la crisis argentina del 2001 y en la caída de varios gobiernos democráticos de la región, algunos de ellos transitando aún una preocupante inestabilidad institucional.</i></p> <p><i>Es entonces la experiencia regional y no la teoría de las burocracias de los organismos internacionales, la que demuestra que lo aconsejable es dejar que, en un marco de racionalidad, cada país pueda elegir su mejor camino para el desarrollo con inclusión social. Esa racionalidad, de la que hablamos, debe permitir su verificación en resultados cuantificables económica y socialmente.</i></p> <p><i>Una nueva estrategia de desarrollo tiene que apuntar a obtener fuentes de recursos que deriven del esfuerzo y trabajo diario de nuestros ciudadanos. Necesitamos crear, producir, exportar bienes y servicios, innovaciones científico técnicas y creaciones culturales".</i></p>	

Fuentes de las citas

Di Meglio, G. y Álvarez, G. (2013). *Voces de la Democracia. Los discursos que hicieron historia 1983 – 2013*. Buenos Aires: Aguilar.

Schuster, F.; Pérez, G. y Pereyra, S. (coords.). *La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*. Informe de Coyuntura n° 3, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-UBA, junio 2002. Disponible en: <http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/IC3.pdf>

Discurso de la presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de apertura del 127° período ordinario de sesiones realizado ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. Disponible en: <http://www.casarosada.gov.ar/informacion/archivo/20610-blank-78895972>

Discurso del presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, durante la ceremonia de inauguración de la IV Cumbre de las Américas, Mar del Plata, 5/11/2005. Disponible en: <http://www.casarosada.gov.ar/informacion/archivo/24842-blank-8971127>

ACTIVIDAD N° 11**Expresiones políticas a través del tiempo... y las paredes**

Las pintadas, los grafitis y los estenciles son expresiones en el espacio público que, a partir de la escritura, el dibujo o una combinación de ambos, se plasman en sitios que no fueron especialmente concebidos para tal fin (como ser los frentes de casas, las paredes linderas a las vías del tren, las veredas, el interior de edificios públicos, entre otros). La facilidad para ser borrados o superpuestos con otra intervención a corto plazo es un atributo que caracteriza a estas tres manifestaciones.¹

Si bien los tres coexisten en los ámbitos por los que transitamos y habitamos, cada uno de ellos surge o es más característico de una época determinada. Su análisis nos permite indagar en los cambios en la cultura política y en las mutaciones en las formas de participación política.

La pintada es, por cierto, la más tradicional y tiene un carácter institucional que la distingue rápidamente de las otras dos: por lo general, promocionan los nombres de los candidatos de un determinado partido político. Trazos firmes, letras “rellenas” y cierta minuciosidad en su presentación, permiten identificar a este recurso cuya utilización crece de manera acelerada en períodos preelectorales.

El surgimiento del grafiti es, en cambio, más moderno y su aparición se lo vincula con los movimientos estudiantiles de Mayo de 1968, dado que en aquella oportunidad los estudiantes cubrieron las paredes de universidades y calles. Si bien algunos de ellos son verdaderas declaraciones sentimentales (en sus variados formatos: hacia un enamorada/o, un equipo de fútbol, una banda de música, etcétera), los que aquí nos interesan refieren a reflexiones sobre algún aspecto de la realidad. Se trata de frases ingeniosas e irónicas –en su mayoría sin dibujos ni afiliaciones partidarias– realizadas con aerosol en mano. Tal como lo señala Claudia Kozak, autora de *“Las paredes limpias no dicen nada”*, en nuestro país la expansión de los grafitis tiene lugar con la recuperación democrática y la euforia que producía la libertad de expresión recobrada.

El estencil es una técnica empleada para transmitir una idea valiéndose de elementos provenientes del diseño gráfico y combinando texto e imagen. Para ello se emplea una plantilla con un dibujo recortado, sobre la cual se aplica pintura en aerosol. Así se obtiene una imagen con la forma del recorte, en ocasiones acompañado por conceptos, que puede ser multiplicada velozmente. La utilización del estencil en la Argentina se incrementó durante la crisis del 2001 y desde entonces estas intervenciones proliferan sintetizando mensajes y consignas de lo más variadas.

* Actividad diseñada por M. Florencia Gentile, Carolina Schillagi y Marian Sola Álvarez.

¹ Existen otras intervenciones urbanas, tales como los murales, que no fueron considerados para esta actividad.

A continuación les proponemos un análisis de cada una de las imágenes que se presentan atendiendo a tres ejes:

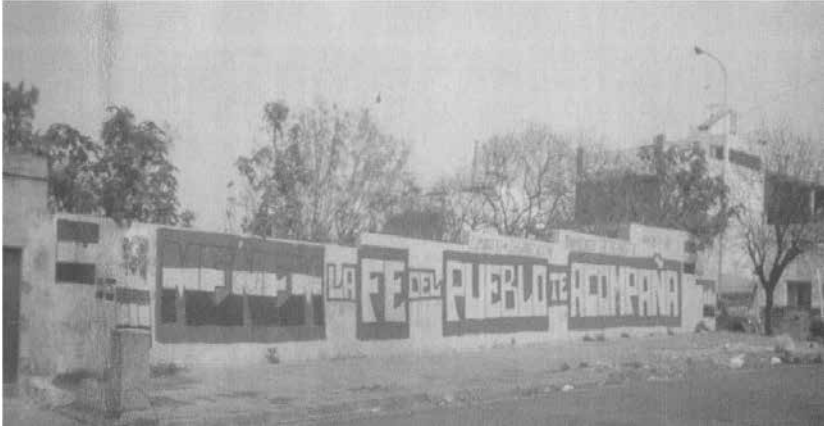
- ¿A qué hace referencia la pintada, grafiti o estencil?
- ¿En qué contexto social y político fueron realizadas cada una de estas intervenciones? ¿Cómo se vincula el contenido con el contexto antes descripto?
- ¿Quiénes serían los posibles autores? ¿Participarían de algún grupo, colectivo u organización? ¿De cuál? ¿Qué nos estarían señalando en relación con las transformaciones en las formas de participación política?



Texto: "Ningún pibe nace chorro"
Foto: Ma. Florencia Gentile



Texto: "Barrick Boom. NO a la mina"
Foto: Marian Sola Álvarez



Texto: "Menem La Fe del Pueblo te acompaña"
Foto: Roberto Bongiorno



Texto: "Estado de sitio. 19-20 2001"
Foto: Carolina Schillagi



Foto: Marian Sola Álvarez



Texto: El sistema se cayó! Bill Gates
Foto: Roberto Bongiorno

BIBLIOGRAFÍA

- Kozak, C. (2002). "Ciudades y palabras. Construcción de sentidos urbanos desde la letra". En Filc, J. (coord.), *Territorios, Itinerarios, Fronteras. La cuestión cultural en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 1990-2000*. Buenos Aires: Ediciones Al Margen-Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Kozak, C.; Floyd, I. y Bombini, G. (1991). *Las paredes limpias no dicen nada*. Buenos Aires: Libros del Quirquincho.
- "Revolución *Street Art*", *La Nación Revista*, domingo 6 de junio de 2010. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1271506

ACTIVIDAD N° 12

Transformaciones recientes de la representación política*

Presentación

El objetivo de la presente actividad es reflexionar sobre la representación política y sus transformaciones recientes en Argentina, desde la perspectiva de los votantes. A través del análisis del material conformado por una selección de contenidos que circulan en las redes sociales, se busca que los estudiantes se apropien de las categorías analíticas provistas por la bibliografía especializada.

En las elecciones presidenciales de 2015 los principales protagonistas fueron los candidatos Mauricio Macri, representante de *Cambiamos* (una alianza entre el partido PRO y la UCR) y Daniel Scioli, proveniente del peronismo, nucleado en el *Frente para la Victoria*. Macri accedió a la presidencia luego de triunfar en el balotaje realizado el 22 de noviembre de aquel año.

Si bien el texto de Juan Carlos Torre incluido en esta compilación no abarca este período (cfr. “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria”, en págs. 301-323), nos provee de herramientas para analizar esta última elección presidencial.

Según Torre, en las últimas décadas es posible observar profundas transformaciones en la cultura política argentina, que operan en franjas significativas del electorado. Ellas tienen que ver con un cambio en la relación de los ciudadanos con los partidos y sus dirigentes, vínculo que se sostiene cada vez menos en lazos de identidad y lealtad y se estructura en cambio en la forma de una demanda de rendición de cuentas dirigida a los representantes, respecto de sus políticas y sus promesas. Así, la desconfianza y la vigilancia de los actos de gobierno, como las cuestiones ligadas a la transparencia, la vigencia de la ley y la ética, ganan espacio en la agenda pública.

Como consecuencia de ello, y a diferencia de un pasado en el que la afinidad político-ideológica con los candidatos era primordial, cada vez más los electores determinan su voto en función de los resultados de las políticas implementadas, así como de la defensa de valores e intereses puntuales en cada elección.

Consignas de trabajo

Teniendo en cuenta esta tesis de Juan Carlos Torre, analicen las siguientes expresiones políticas, extraídas de la red social Twitter, relativas a las razones del voto a Macri y a Scioli. A continuación, respondan:

1. Según la definición de Torre, los votantes “adherentes” son leales al partido y a sus integrantes y se identifican con su discurso, mientras que los “simpatizantes” votan, en cada elección, según la evaluación de determinadas políticas y

* Actividad diseñada por Victoria Ortiz de Rozas.

las propuestas puntuales de los candidatos. Considerando esta distinción como herramienta analítica, lean los tweets e identifiquen expresiones que ilustren la diferente forma de vinculación entre ciudadanos y representantes. Busquen al menos cinco tweets que sean ilustrativos de dichas categorías y justifiquen su elección.

2. En forma grupal, pongan en común las expresiones seleccionadas, debatiendo: a) en qué medida la distinción realizada por Torre permite explicar la forma en que los ciudadanos justifican su voto, y b) si existen otros elementos no contemplados en esta clasificación.
3. Torre explica que el problema de la “crisis de representación” se deriva principalmente de la existencia de una masa de ciudadanos movilizada en torno a la fiscalización del desempeño de los dirigentes políticos y el cumplimiento de sus promesas electorales, con un especial interés en la vigencia de la ley y no tanto en las cuestiones distributivas. Identifiquen expresiones que evidencien esta actitud fiscalizadora de los ciudadanos con respecto a sus representantes.
4. Reunidos en grupo, observen en qué espacio político predominan elementos que caracterizan a uno u otro tipo de votante, así como las expresiones típicas de la actitud fiscalizadora mencionada en la consigna anterior. Si bien el material presentado no permite realizar afirmaciones generales, en cuanto se trata de una muestra acotada, permite elaborar diferentes hipótesis sobre las características de cada espacio político, que se detallan a continuación. Léanlas atentamente y discutan con cuáles de ellas están de acuerdo y por qué:

Hipótesis 1. Es posible encontrar votantes leales y votantes independientes o “simpatizantes” en ambos partidos políticos: tanto en las razones del voto a Scioli, proveniente del peronismo, como en las razones del voto a Macri, representante de una coalición entre el PRO y el radicalismo. Los partidos políticos construyen sus apoyos políticos entre ambos tipos de votantes.

Hipótesis 2. Torre sostiene que el peronismo es el espacio político que conserva mayor proporción de votantes fieles. Teniendo en cuenta que Scioli proviene del peronismo, el material presentado es coherente con el argumento del autor.

Hipótesis 3. El material presentado permite plantear como hipótesis que Cambiemos, la coalición liderada por Macri, presenta una mayor proporción de votantes “simpatizantes”, con un vínculo de identificación más débil y volátil con el partido y sus integrantes; así como con una actitud fiscalizadora hacia sus representantes.

Tweets en alusión a las razones del voto a Daniel Scioli

Yo **#VotoScioliPresidente** xq inició el verdadero cambio en 2003, xq fue parte del sueño q nos propuso NCK y lo debe continuar. **#MejorScioli**

No quiero un Gerente millonario cheto**#MacriProcesado**. Quiero Presidente **#VotoScioliPresidente**

Democracia o corporaciones. Política o poder económico. Estado o mercado. Trabajo o neoliberalismo. Pueblo o buitres. Patria o Macri.

Para seguir Construyendo lo que juntos conseguimos **#VotoScioliPresidente**

#votoconciencia que siga tecnopolis **#votosciolipresidente**

“Macri es altanero y soberbio. Nos mira desde arriba”

#LaMegaDevaluación que propone Cambiemos Impacta inmediatamente. Algunos ejemplos. **#VotoScioliPresidente**

Por el **#PlanNacer** **#NoDaLoMismo** **#VotoScioliPresidente**

“¿Qué es esto de universidades x todos lados? Basta de esta locura” dijo Macri Por la educac pública **#ScioliPresidente**

NO quiero una Argentina atendida por sus propios gerentes. El 22 **#VotoScioliPresidente**.

Por los científicos en argentina **#VotoSciolipresidente**

#El22CuidoElFuturo **#votosciolipresidente** **#NEOLIBERALISMONUNCAMAS**

Con macri se acaba la industria nacional. Por eso defendamos las fábricas nacionales **#votosciolipresidente**

#Cambiemos ahora pregona continuidad de derechos universales. Entonces mas q nunca **#VotoScioliPresidente** q siempre fue la continuidad

PORQUE NO QUIERO ENTREGAR EL PETROLEO DE MI TIERRA **#VotoScioliPresidente**

#votosciolipresidente x mas mercado interno mas trabajo argentino , la republica no es UN NEGOCIO UNA EMPRESA .

Soy militante del peronismo, el peronismo que enamora. **#El22CuidoElFuturo** **#VotoScioliPresidente** **#VotoPorMisDerechos**

#NoVotoAlMultiprocesadoMacri #VotoScioliPresidente

Ciencia y tecnología! Universidades! Educación! Escuelas! #votoScioliPresidente

yo **voto** a **Scioli** porque **soy PERONISTA!!** por el pueblo, las universidades, YPF, industria nacional, trabajo, educacion, salud,etccc

Yo **soy Kirchnerista** y **voto a Scioli.....Lo soy...xq** cavallo nos echo del ferrocarril. mi marido no pudo..

Este #Balotaje2015 yo **voto #Scioli** . Jamás fui **kirchnerista**, solo **soy** consciente. #VotoScioli

Yo no **soy** Sciolista, **soy Kirchnerista**. **Voto a Scioli** porque es el candidato del FPV. Le voy a tener confianza cuando HAGA.

Quiero seguir viendo a mi país en un clima de paz social , a pesar de que otros instalen lo contrario #VotoScioli #ArgentinaDecide

#votoscioli Yo soy Cristinista fue la única que logro darnos un poco de bienestar que penso en la clase media baja y laburo no tengo planes.

Hace 2 años exactos volvía a mi casa después de una operación x un tumor. No pagué un peso a pesar de no tener obra social. X eso #VotoScioli

Yo no quiero un presidente con 214 causas. #VotoScioli

Listo!, #VotoScioli x un proyecto de inclusión, industrialización y las 3 TTT . El modelo es neoliberal o Nac&Pop.

YO NO APOYO LA HOMOFOBIA #VotoScioli

YO NO VOY A VOTAR A AGUIEN QUE DIJO "NO" AL VOTO JOVEN, AL MATRIMONIO IGUALITARIO Y A LA FERTILIZACION ASISTIDA. IGUALDAD #VOTOSCIOLI

La devaluación licúa y pulveriza los salarios por eso #VotoScioli

MACRI ESTA PROCESADO... .PROCESADO.. NO PUEDE SER PRESIDENTE! #VotoScioli #VotoScioli #VotoScioli

#VotoScioli NO A LA DERECHA #VotoScioli

Hoy #VotoScioli Mañana, me pongo primero en la fila para exigirle que cumpla lo prometido. #MiLimiteEsMacri

No **soy** peronista, ni **radical**, ni de ningún partido político pero a **Macri** no lo **voto** Giles

Tweets en alusión a las razones del voto a Mauricio Macri

#YolovotoaMM. Espero sea un Cambio positivo para el país

Como van a llorar los corruptos cuando se le acaben los privilegios con los jueces y la afip **#YolovotoaMM**

Vamos @mauriciomacri. Vos tenes que ganar el pais quiere un gobierno transparente! **#YolovotoaMM**

y otra vez volvemos a votar por el cambio y por un futuro mejor para todos **#YoLoVotoAMM**

#YolovotoaMM CAMBIEMOS POR UNA ARGENTINA MAS UNIDA!!!

Después de una decada perdida, vamos por el cambio **#MacriPresidente**
#YoLoVotoaMM

El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica **#Cambiemos** **#YolovotoaMM** **#Elecciones2015**

Ultimo dia democrático. Por favor voten con memoria de lo que vivimos los ultimos 10 años. **#Cambiemos** **#YolovotoaMM**

Te re banco! @mauriciomacri NO ME DECEPCIÓNES **#YolovotoaMM** **#Elecciones2015** **#Cambiemos** **#MacriPresidente** **#Macri** **#Pro**

En la boleta de Scioli no esta la cara de Zanini. Clara muestra de que ni ellos están unidos. **#YolovotoaMM**

HOY VOTO A MACRI, VOTO POR LA LIBERTAD POR EL FUTURO DE NUESTRO PAIS SIN MAFIA Y SIN MIEDOS. **#MacriPresidente**. **#YolovotoaMM**

@albertozzi Siiii **#ChauScioli** **#ChauCFK** **#ChauFPV** **#FinDeCicloK** **#El22CuidoElFuturo** **#YolovotoaMM**

Llegó el día. Hoy recuperamos la República. Hoy cambiamos el futuro. **#YolovotoaMM**

Se terminada la DeKada robada.. Mañana **#Cambiemos** **#YolovotoaMM** **#ScioliLTA**

#Cambiemos **#MacriPresidente** **#EstoyConVos** **#MañanaCambiemos** **#YoCambio**
#YoLoVotoaMM **#RevolucionDeLaAlegria**

Cansado de estos 12 años dekadentes!. **#YoMañanaVotoMACRI** **#YoCambio**
#YolovotoaMM

@C5N @danielscioli @mauriciomacri que bueno tener un futuro presidente que no necesite robar porque tiene !!!!! **#YoCambio #YolovotoaMM**

#CAMBIEMOS #YoLoVotoaMM. Manana el campo se vuelve a poner de pie @mauriciomacri @mariuvidal

#MananaVotoMACR! por un país seguro tranquilo y sin corrupción **#YolovotoaMM**

A ver si nos entendemos...NO **soy Radical!** voté 1Cambio ...p mi **voto** es INDEPENDIENTE , si **Macri** hace una buena gestión seguiré apoyando

Porque **soy Radical**, porque el radicalismo jamás fue parte del peronismo, yo mañana **voto** a **Macri** . **#Elecciones2015**

@barlettamario **soy Radical, voto** a **Macri** pero no jodan con los feriados, es la forma que muchas familias se vean, no solo es turismo.

@edufeioK @cande_90 Aunque **soy Peronista Voto** a **Macri**, porque los K Corruptos hicieron mierda al Peronismo y hay que darle tiempo a Mauricio

#viernesintratable no **soy** macrista, ni **peronista**, voté por **Macri** y después de ver tantos impresentables confirmó mi **voto** 1000 veces

@PaolaPa05 Pao **soy** un **Peronista** q **votó** a **Macri** y odio a los CORRUPTOS K y como vos, a los HDP de la Campora q se robaron el PAIS !!!

ACTIVIDAD N° 13

Transformaciones en el movimiento sindical*

Presentación

Luego de la crisis de 2001-2002, con la recuperación de la actividad económica, el descenso del desempleo y los cambios de orientación estatal en materia de políticas sociolaborales, el movimiento sindical experimentó un proceso de recuperación y recomposición de sus organizaciones. Este fenómeno –que se observa en la expansión de la afiliación sindical, la creación de nuevas organizaciones, un fuerte aumento de la negociación colectiva y en el protagonismo político asumido por las cúpulas y direcciones de los sindicatos– se expresó asimismo en una intensa actividad en los lugares de trabajo. Especialmente a partir de 2005, aumentó la cantidad de conflictos laborales por aumentos salariales en los establecimientos y se crearon organizaciones que nuclean a trabajadoras/es de nuevas ocupaciones, lo cual significó el aumento, fortalecimiento y renovación de los cuerpos de delegados y/o comisiones internas, allí donde no había representantes directos de las/los trabajadoras/es o donde los referentes habían perdido legitimidad e iniciativa frente a las demandas colectivas de sus representados.

Este ejercicio propone reflexionar sobre las características de este fenómeno a partir del análisis de una serie de testimonios orales de trabajadores/as que protagonizaron estos procesos. Los relatos que se transcriben a continuación son fragmentos de entrevistas realizadas en el marco de una investigación sobre experiencias de lucha y organización de trabajadoras/es en el lugar de trabajo entre 2008 y 2011. Los resultados de ese proyecto fueron publicados en el libro *Colectivos resistentes. Procesos de politización de trabajadores en la Argentina reciente*, compilado por Paula Abal Medina y Nicolás Diana Menéndez (Buenos Aires, Imago Mundi, 2011).

Consignas de trabajo

Lean atentamente los testimonios seleccionados [fuentes 1, 2 y 3]. Luego, para cada uno de los casos, respondan las preguntas que figuran a continuación.

1. ¿Qué tipo de actividad, vínculo laboral y condiciones de trabajo se describen?
2. ¿Cuáles son las demandas que movilizan a las y los trabajadores?
3. ¿Cómo se organizan y cuáles son sus modalidades de acción?
4. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre el tipo de tareas realizadas, el grupo etario de las y los trabajadores y las modalidades de organización y acción que relatan?

* Actividad diseñada por Cecilia Anigstein.

5. ¿Qué tipo de relación mantienen los trabajadores con los empleadores y las autoridades gubernamentales?
6. Teniendo en cuenta: a) el proceso de declive del sindicalismo tradicional durante los años 90, b) los nuevos repertorios de acción colectiva de los sectores populares que emergieron con la crisis del modelo neoliberal de 2001-2002 y c) las tendencias registradas en los mercados de trabajo a partir de 2003 (temas que son abordados por la bibliografía de la materia) respondan: ¿Qué características asume la recuperación del sindicalismo en los lugares de trabajo durante la primera década del siglo XXI? ¿A qué factores se pueden atribuir los cambios y continuidades que se identifican en las experiencias narradas?

Fuente 1: PARO EN UNA FÁBRICA DE COSMÉTICOS

En mayo de 2007, a raíz de la suspensión arbitraria de dos trabajadores que reclamaban una recomposición salarial, la totalidad de las operarias de la planta de envasado de Avon, situada en la ciudad de Moreno, pararon la producción durante tres horas. Salieron masivamente a protestar a las calles aledañas a la empresa y llamaron a medios de comunicación. Como resultado de esta medida, los trabajadores fueron reincorporados. De acuerdo con el relato de las entrevistadas, este fue el primer paro de actividades en el establecimiento:

Ya era hora de que nos aumentaran, porque hacía un montón que no nos aumentaban, y que no nos iban a dar el premio. Se armó un re quilombo. Ese día, yo me acuerdo que todas... o sea era la calentura de la gente, la bronca ¿Viste? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir callando? ¿Hasta cuándo? Yo creo que ahí la gente se dio cuenta que tenía la manija.

(...) Y claro se iban enterando a la noche, los turnos y se iban pasando y nos íbamos mensajeando todos: "Mañana va a ver quilombo", "porque esto chicos, no puede ser que siga así"; así nos mensajeábamos pero para todos lados, acá, allá y así se pasó como una cadena. Entonces a la mañana era una cosa compacta, pero viste una cosa como que la gente estaba desbordada.

Llegamos todas en algo distinto, unas en auto, otras en colectivo, pero cuando empezamos a trabajar a las 7 de la mañana, ahí... "vamos al paro aunque no quieran los delegados", porque ellos eran los favoritos de la empresa, laburaban para la empresa ¿viste? ¡Un desastre! Ese día fue todo muy caliente. Yo vi que empezaban a bajar las chicas de arriba, yo dije, yo me mando, ya no importa más nada, y nos levantamos y nos paramos ¡le paramos toda la fábrica! Estaba la gente de proceso, de oficina, siempre hay gente que no comparte lo mismo y no se adhirió.

No hubo ninguna asamblea, fue así de una, ni siquiera los delegados nos apoyaban, ¿qué asamblea podíamos hacer? Los delegados nos decían: "ustedes no pueden

hacer esto, no se dan cuenta de que no estamos apoyados por el sindicato, esto puede ser grave". A nadie le importaba ya si podía ser grave, no podían despedir a todos, porque éramos todos lo que estábamos afuera. Yo ahí me reía, porque internamente las encargadas nos aplaudían y estaban recontentas, pero ellas se tuvieron que quedar adentro ¿viste? Salimos afuera a aplaudir, empezamos a llamar a canales de televisión, fue un día de locos, fue eso, porque claro, yo decía "vamos a afuera", porque a ellos lo que le jode es que se vea que hay quilombo afuera.

Extraído de Gorban, D.; González, A.; Wyczykier, G. y Anigstein, C. (2011). "Entre el malestar y la resistencia. Notas para pensar la organización sindical de base en la industria cosmética". En Abal Medina, Paula y Diana Menéndez, Nicolás (comps.), *Colectivos resistentes. Procesos de politización de trabajadores en la Argentina reciente*, pp. 223-264. Buenos Aires: Imago Mundi.

Fuente 2: ORGANIZACIÓN CLANDESTINA EN LOS CALL CENTERS

Teleperforados surgió en el contexto de la precarización laboral, en el que las condiciones insalubres eran aceptadas como una situación normal por la mayoría de los jóvenes trabajadores, en una empresa que ante la mínima sospecha de organización aplicaba el despido como aleccionador. ¿Cómo romper el silencio que naturalizaba las malas condiciones laborales, liquidaciones sistemáticamente erróneas y sanciones arbitrarias, sin correr el riesgo de ser despedidos? La respuesta al dilema fue la creación de la página web.

La primera versión de la página apareció bajo el nombre de Trabajadores de Teleformance, utilizando el nombre de la empresa. Lo cual provocó de manera casi inmediata, una intimidación legal de la compañía a dejar de usar su nombre y su logo. El obstáculo fue la oportunidad para establecer su nombre/identidad logo, y buscar nuevas formas de decir. La agrupación y su sitio fueron bautizados con el nombre de *Teleperforados*, juego de palabras que contenía una causa y un efecto. Tele en referencia a la empresa Teleperformance y a la tarea de telemarketing; y perforados, relativo al desgaste que provocaba el taladrar constante de miles de llamadas atendidas por día. El logo de *Teleperforados*, similar al de la compañía, conservaba de esta su relación con la tarea, otorgándole una connotación negativa. Las ojeras, la mueca de malestar y un taladro que apuntaba a la cabeza dejando caer monedas, remitían al gran negocio de los centros de llamada a costa del deterioro en la salud de los operadores.



Para evitar acciones legales, se idearon algunas formas de nombrar lo prohibido. Teleperformance fue TP, el presidente de la empresa Beto Varas pasó a llamarse Beto Vacas y Vodafone, la principal campaña, fue Vodazone. La agrupación lo utilizaba para evitar un conflicto judicial y recomendó a los usuarios que lo hicieran también. Con el tiempo, los operadores adoptaron esta forma de decir, no solo para escribir en la página, sino también para hablar cotidianamente.

Extraído de: González, Andrea (2011). "Redes de resistencia en el call center. La página web de teleperforados". En Abal Medina, Paula y Diana Menéndez, Nicolás (comps.), *Colectivos resistentes. Procesos de politización de trabajadores en la Argentina reciente*, pp. 204-222. Buenos Aires: Imago Mundi. La autora del artículo fue una de las fundadoras de la agrupación Teleperforados.

Fuente 3: SINDICATOS FRENTE AL TRABAJO NO REGISTRADO EL SIMECA (Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes)

Para mí SIMECa es todo, después colaboro con lo que sea, pero SIMECa se lleva todos los días de mi semana. Nosotros llenamos al sindicato de actividades, empezamos a traer a los compañeros, a mirar películas, a comer algo, a charlar, así los fuimos trayendo a los compañeros, y con los compañeros del delivery hacemos las asambleas en el lugar de trabajo. Los lunes se reúne la comisión directiva, los miércoles son gremiales porque focalizamos todo el laburo gremial, los conflictos, hoy se discute el tema de si se va o no a tomar el Noble Repulgue el viernes, se negocia con el dueño y según lo que discuten los compañeros se toma o no, y los viernes es salir a recorrer las calles, ¿entendés? Si mañana tenemos una reunión con el dueño de la empresa, de la franquicia, y ahí se tironea, nosotros les tiramos el convenio por la cabeza.

(...) Mi primera experiencia de lucha fue en el 2003 cuando nos movilizamos al Ministerio de Trabajo con los carteles de "Trabajo Registrado" del propio gobierno. Cuando llegamos al ministerio, nos preguntaron qué queríamos, le dijimos "la personería gremial" (sic), etc., le sacamos el cartelito y se lo mostramos: "Trabajo Registrado". En ese momento estaba Tomada, que se sorprendió de la forma que habíamos reclamado, y ahí nos abrió un canal para hacer inspecciones. A su vez, en la discusión pedimos para que la inspección esté acompañada de compañeros del sindicato.

(...) El blanqueo es una conquista del sindicato. Tuvimos que movilizarnos al Ministerio de Trabajo para que salgan a inspeccionar las agencias porque si no, no salían. Tuvimos que ir con las inspecciones a las agencias porque si no, no blanqueaban. Hay un efecto dominó, lo mismo pretendemos con las cadenas de delivery donde el trabajo en negro sigue siendo fuerte. Aunque estén en blanco no significa que no haya precarización laboral, o que la jornada laboral no sea una locura. Ahora en todos los gremios está en discusión, por ejemplo en taxistas, que un tipo que

labura en la calle más de seis horas ya es una locura, por la tensión que hay que tener. Hay un montón de factores.

(...) Nosotros empezamos con el tema del trabajo registrado, dimos vuelta el discurso del gobierno, y fuimos con su discurso a reclamar, “nosotros también lo queremos”, y ahí empezaron una serie de inspecciones en las agencias y se empezó a registrar recién a los compañeros. Fue un efecto dominó en el que empezaron a blanquear a los compañeros.

A nosotros nos pasa todo eso porque todos los compañeros son de nuestra edad, somos jóvenes. Hay una anécdota en la que un compañero me dijo “loco yo te quiero ver dentro de un año, vos vas a estar lleno de plata”, y ahora ese compañero trabaja con nosotros, porque le demostramos con los hechos –hace ocho años que estamos– que no vamos a trazar, todo se negocia de cara a los compañeros. No se cierra nada entre dos.

Extraído de Barattini, M. y Pascual R. (2011). “SIMECa. La organización desde las calles”. En Abal Medina, Paula y Diana Menéndez, Nicolás (comps.), *Colectivos resistentes. Procesos de politización de trabajadores en la Argentina reciente*, pp. 265-318. Buenos Aires: Imago Mundi.

ACTIVIDAD N° 14

Las características de los movimientos socioambientales: la resistencia popular contra Monsanto en Córdoba*

Presentación

En el año 2012 se anunció, desde el Consejo de las Américas, una inversión de la empresa transnacional Monsanto en Argentina por más de 1.600 millones de pesos; una importante suma de dinero se destinaría a la construcción de una planta acondicionadora de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba. Enterados del proyecto, los vecinos de la localidad, en conjunto con especialistas, comenzaron a investigar sobre las actividades de la empresa y los posibles impactos contaminantes en la salud y el ambiente. Nucleados en la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida organizaron la resistencia frente a la instalación y lograron que Monsanto abandonara la construcción de la planta en el año 2016.

Este caso se suma a las numerosas experiencias de movilización social en defensa del medioambiente que tuvieron lugar en la Argentina en las últimas dos décadas. A partir del análisis del material que figura a continuación, el objetivo de esta actividad es contribuir a la comprensión de estos fenómenos, poniendo en relación los movimientos socioambientales con las transformaciones que desde la crisis de 2001 caracterizaron a los procesos de movilización social en nuestro país.

Consignas de trabajo

Lean atentamente los fragmentos de entrevista que siguen, y respondan:

1. Considerando las características particulares de los movimientos socioambientales especificadas por L. Bottaro y M. Sola Álvarez en el texto incluido en esta compilación, señalen ejemplos en el relato de la asambleísta de Malvinas Argentinas.
2. Identifiquen en el relato ejemplos de los rasgos que estos movimientos socioambientales comparten con los movimientos sociales de los años noventa.
3. A partir de las descripciones que provee el texto mencionado, señalen similitudes y diferencias entre el caso presentado en el relato que aquí se incluye (Malvinas Argentinas, Córdoba) y los de Esquel (Chubut) y de Gualeguaychú (Entre Ríos).

El texto que sigue es un fragmento de una entrevista realizada a una integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida en el año 2014.³

* Actividad diseñada por Leandro Barros.

³ La entrevista fue realizada por Leandro Barros, en el año 2015, durante el trabajo de campo en el marco de su beca de investigación y docencia de la UNGS.

... soy vecina de Malvinas Argentinas, Córdoba, que es una pequeña localidad ubicada a unos quince kilómetros de Córdoba Capital. Aquí nos enteramos hace casi dos años, porque fue en julio del 2012, que se iba a instalar Monsanto, esta empresa que para nosotros iba a llevar una inversión de muchísimos millones de dólares a nuestra ciudad y tan sólo nos sorprendió, y lo festejamos mucho, o como en mi caso donde no conocíamos de que se trataba. Pero luego de eso comprendimos de que era una empresa que trataba con todo lo que es agroquímicos y que ahí se iban a tratar semillas también que iban a parar a los campos de, justamente, toda la Argentina. Empezamos a averiguar y a nivel de legislación había un montón de cuestiones que se habían pasado por alto en esta instalación. Y de pronto también a través de unos informes, como el del biólogo Raúl Montenegro, pudimos obtener todo un detalle de cómo iba a impactar esta planta muy próxima a nuestra ciudad, a menos de un kilómetro está, justamente del lado de donde sopla el viento. Así que toda la contaminación ambiental vendría directamente a nuestra ciudad. Pudimos comprobar a través de él y de sus estudios cómo iba a afectar en el aire, en el suelo y en el agua. Desde ahí comienza nuestra lucha, nuestro pedido de informes y fuimos totalmente ninguneados por todo lo que fue el gobierno municipal de Malvinas Argentinas, también el gobierno provincial, de parte de De la Sota tampoco obtuvimos ningún tipo de respuesta. Entonces luego, con esto, presentamos un amparo y un montón de acciones siempre como asamblea.

Nosotros nos nucleamos como vecinos de Malvinas en la Asamblea Malvinas lucha por la Vida. Una vez nucleados ahí, llevamos acciones de todo tipo: marchas, acciones judiciales, pedido de informes, hablar con legisladores, con diputados. Implementamos todas las acciones que se podían hacer como juntada de firmas y demás. Monsanto consigue que la municipalidad, a pesar de no cumplir con la ley y con un montón de recaudos que le pedían: estudio de impacto ambiental, permisos y demás; le apruebe la pre-factibilidad y comience la construcción de la obra. Ahí, viendo que nuestras acciones eran en cierta forma insuficientes ante esta arremetida de Monsanto, que ya estaba construyendo la planta, nos organizamos junto con madres de Ituzaingó y un montón de vecinos auto-convocados de Córdoba que no pertenecían a ningún partido político y había otros partidos de izquierda (como el MST o el Frente de Izquierda) que nos apoyaron. Nos juntamos todos y dijimos "bueno, a ver qué pasa con esta empresa que está construyendo y nadie nos da respuesta ante todos los informes". Entonces ahí, en septiembre del 2013 comenzó lo que se llamó El acampe frente a Monsanto. Fue un bloqueo, consistió en no permitir la construcción, no permitir el ingreso de materiales para la construcción. Al día de la fecha [13-05-2014] la obra está parada. Luego de eso, que fue como un escándalo, se puede decir a nivel político; porque teníamos la arremetida de Monsanto que presionaba a los tribunales con tal de que nos desalojaran, cosa que no sucedía, pero a la vez también teníamos la otra parte, que el escandalo era

“¿Cómo podía ser que tuvieran (Monsanto) tantos permisos pero sin haber cumplido la ley?”. Entonces fue como un forcejeo contra Monsanto que presionaba para que se aplicara la ley pero a la vez no la había cumplido. Conseguimos que un amparo que habíamos presentado los vecinos se resolviera, por el cual se determinó que la construcción de la obra era ilegal e inconstitucional.

A partir de ahí la obra se paró, en realidad desde septiembre se paró pero ya por dictamen de la justicia recién en enero de 2014 fue paralizada. En febrero ellos tenían un estudio de impacto ambiental, que era algo que les faltaba presentar, fue rechazado por insuficiente, porque no había ningún tipo de paliativo ante tanto residuo. Los especialistas lo tomaron y dijeron que realmente no había manera de aprobar eso porque dejaba muchas cosas sueltas o incongruencias, por decir, en una parte del estudio se mencionaba que se iban a utilizar 10 litros de agua y, a la vez, en la página siguiente hablaba de los desechos de 100.000 litros de agua. Entonces había como una inconsistencia muy terrible en un revés de hoja. Pero, a la vez, ese estudio no lo dieron a conocer, al día de hoy no nos quieren dar ese estudio de impacto ambiental, no tenemos acceso al expediente y no sabemos hasta qué punto las razones o 2 o 3 puntos por las cuales fue rechazado el estudio de impacto ambiental son verídicos. Quizá, a lo mejor, detrás de eso, hay muchísimas más razones pero que están totalmente calladas. Para nosotros es muy importante tener acceso a este expediente.

A nosotros como vecinos esto nos ha despertado mucho civilismo. Éramos vecinos que no teníamos ni idea de luchar, que no nos conocíamos entre nosotros, donde en Malvinas no existía una movilización social, popular, ni de base, ni nada de eso, nada político más que los partidos, obviamente, que salen a hacer campaña para que votes al intendente. Entonces, de pronto, con esto ¿qué sucede? Tenemos a una sociedad que dejó de ir a quemar gomas como siendo la única acción política que pueda hacer. Tenemos una sociedad que cortó rutas pero que salió a marchar, que juntó firmas, que habla con la gente, que habla con los vecinos, que nos formamos, que nos interesamos. Eso para nosotros ha sido un gran crecimiento, porque no teníamos idea de nada de eso, no sabíamos lo que era luchar por nuestros derechos y no sabíamos tampoco que éramos capaces de lograr esto. Haber logrado parar a Monsanto, a pesar de ser una lucha tan desigual, es algo que queda en la historia.

